CURSO DERECHO MERCANTIL
DE
DERECHO MERCANTIL,
POR

EL DR. D. PABLO GONZALEZ HUEBRA,
Catedrático de esta asignatura en las Universidades de Madrid, Salamanca, y Barcelona, y Rector de esta última.

TERCERA EDICION
NUEVAMENTE CORREGIDA Y AUMENTADA POR EL AUTOR.

TOMO I.

MADRID. 1867.
la "ANCHEZ, calle de Carretas, núm
Es propiedad del Autor.
AL EXCMO. SEÑOR

D. ANGEL MARÍA CARVAJAL,
Duque de Abrantes y de Linares, Conde de Aguilar, Grande de España de primera clase y Senador del Reino, etc. etc.

Excmo. Sr.: Creería saltar á un deber contraído desde que obtuve la honrosa confianza de dirigir la educación de V. E., sin otro nombre que el suyo colocase al frente de este libro; si á otra persona consagrara esta muestra de mis esfuerzos en obsequio de la enseñanza. V. E. fué el primero de mis discípulos, y á nadie con más razón y derecho deben ser dedicados mis primeros trabajos literarios. Bien quisiera que á la alteza y mérito de V. E. correspondiese el suyo: pero ya que esto no puede ser, sirvan al menos de público testimonio del profundo afecto y consideracion, que siempre le ha profesado y le profesará siempre su ayto.

PABLO GONZALEZ HUEBRA.
INTRODUCCION.

Cuando dedicados á la enseñanza concebimos el pensamiento de escribir esta obra, y nos decidimos á publicarla, no pensábamos que tuviera la acogida que ha merecido; nos proponíamos solo facilitar el estudio del derecho mercantil, y nos creíamos suficientemente recompensados de nuestras tareas si lográbamos con ellas aliviar los desvelos de la juventud que frecuenta nuestras aulas: el poco tiempo en que se agotó aquella edición, nos hizo conocer después que no se habían considerado inútiles nuestros trabajos, y dimos á luz la segunda, haciéndonos un deber el corresponder de este modo á la benevolencia del público, y al honor que el Gobierno de S. M., de acuerdo con el Consejo de Instrucción pública nos había dispensado, señalándola de texto para la enseñanza; y este mismo deber es el que nos proponemos llenar ahora publicando la tercera, corregida, adicionada y mejorada, habiéndose agotado ya también la segunda con no menos rapidez que la primera.

Constantes en el pensamiento de exponer las doctri-
ñas con orden, claridad y sencillez, encadenando las ideas de modo que formen un todo compacto sin prescindir por esto de las ampliaciones y explicaciones indispensables para facilitar y fijar su inteligencia, conservamos la división del texto y las notas adoptadas en las anteriores, colocando en el primero los principios y doctrinas que tenemos por incuestionables atendido el texto de la ley, y en las segundas las dudas y cuestiones que pueden suscitarse sobre su aplicación; llamamos además la atención en ellas acerca de algunas con las que están relacionadas, y nos hacemos también cargo y extractamos otras, que aunque no dejan de tener importancia, son puramente reglamentarias: concluyendo con insertar con separación y por apéndices, como complemento de los tratados a que hacen referencia, varias de las que han sido dictadas después de la publicación del Código de Comercio.

En todo esto, sin embargo, no hemos dejado de hacer las alteraciones e innovaciones que nos han parecido convenientes, introduciendo en nuestra obra las mejoras de que la hemos creído susceptible. Con este fin hemos colocado entre los contratos propios del Comercio, que es el lugar que le corresponde por su especialidad, el tratado de la Bolsa y de las negociaciones sobre efectos públicos que dábamos antes por apéndice; hemos reformado y adicionado el texto en los que ha sido indispensable, teniendo presentes no solo las últimas disposiciones de nuestra legislación, sino también las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en los recursos de injusticia notoria, nulidad, casación y com-
petencias, nueva fuente de derecho con que se está enriqueciendo diariamente nuestra jurisprudencia, citando sus decisiones en los lugares oportunos; hemos aumentado las notas ventilando en algunas nuevas cuestiones, en las que exponemos, aunque con desconfianza, como siempre, los fundamentos de nuestra opinión, sirviéndonos de guía el tenor literal, el espíritu y la tendencia de la ley, y hemos añadido en los apéndices algunos reglamentos publicados después de la edición anterior, procurando en todo hacer útil el estudio de este derecho, que es el fin al que hemos consagrado estas tareas.
NOCCIONES PRELIMINARES.

IDEA DEL COMERCIO Y DEL DERECHO MERCANTIL.

El comercio, en la significacion mas lata que tiene en el derecho esta palabra, es tan antiguo como las sociedades; nació con los pactos y convenciones, le ejercieron ya los dos primeros hombres que cambiaron entre sí lo sobrante por lo necesario, y le perfeccionaron los que con la invencion de la moneda facilitaron las adquisiciones.

Pero no es este el comercio de que vamos á ocuparnos. En el sentido en que aqui le tomamos, no fueron comerciantes ni los que impulsados por la necesidad y aleccionados por la naturaleza, cedieron á los vecinos mas inmediatos lo que á ellos les sobraba, y los otros no tenian; ni los que buscando á otros mas lejanos, ó aprovechando la casualidad de las reuniones y fiestas religiosas, hicieron en ellas la misma cesion, añadiendo á la permuta la circunstancia del transporte é introduciendo los mercados y las ferias; ni tampoco los que, por no encontrar de pronto quien les tomará lo que tenian y les diera lo que necesitaban, adoptaron el medio de recibir en TOMO I.
cambio otros objetos más buscados y de uso más común, para
permutarlos luego por los que deseaban adquirir. En todos
estos actos no se ve otra cosa que los medios naturales que
los hombres emplearon para adquirir el dominio de lo que
otros poseían y les convenía aplicar a sus necesidades; me-
dios sancionados, garantizados y reglamentados por el derecho
civil, que es a quien compete, porque solo entra en ellos la
idea de la necesidad, y el deseo de satisfacerla, y no la del in-
térés, lucro o ganancia como producto de la inteligencia y del
trabajo, que reclama una protección más especial.

Por lo que hace a nuestro objeto, nació el comercio cuan-
do se concibió la idea de tomar los sobrantes de los unos para
cubrir las necesidades de los otros, y ejecutó esta operación
otra persona distinta del productor y del consumidor, sacan-
do de ella alguna ganancia. El hombre que volvió a ceder lo
que antes había adquirido, ya fuera porque habiendo cesado
sus anteriores necesidades no pudiera invertirlo en los objetos
para que lo adquirió, ya porque encargado, por casualidad,
de conducir los sobrantes de sus convecinos para cambiarlos
en otros lugares, conoció que podía sacar ventajas de esta
conducción, y repitió después la operación por su cuenta,
fue sin disputa el primer comerciante; porque fue el primero
que se interpuso entre el productor y el consumidor; le sirvió
de agente, y elevó esta intervención y ocupación a un oficio ó
modo de vivir, utilizando su trabajo y sacando de él la debi-
da recompensa.

Desde luego se concibe que esta mediación e intervención
no pudo menos de ser bien recibida por los mismos producto-
res ó propietarios á quienes ahorraba la molestia de ir á bus-
car á otras tierras los consumidores de sus frutos, abandonan-
do entretanto sus ocupaciones; y les ofrecía además la ventaja
de traerles y presentarles en cambio dentro de sus casas mis-
mas los objetos de que carecían. Sin embargo, tampoco pudo
menos de ser muy limitada en un principio, y de continuarlo
siendo aun después de la introducción de las ferias y merca-
dos y de la invención de la moneda; porque circunscritas to-
davia las operaciones á la cesion y adquisicion de los productos de la naturaleza, en cuanto las mismas necesidades naturales lo exigian, no era posible que abrazaran muchos objetos; y además ocasionaria precisamente grande embarazo la circunstancia de tener que considerarlos en globo ó a bulto sin cantidades fijas ni cuantías determinadas.

Con la invencion de las medidas y los pesos, mucho se facilitaron ya las negociaciones; pero cuando el comercio recibió mayor impulso fue, cuando aumentados los goces y las necesidades de la civilizacion, se echó de ver la ventaja y aun la precision de preparar los frutos naturales para acomodarlos á los diferentes usos y necesidades de la vida, dejó la agricultura de ser la única ocupacion de los hombres, y las manufacturas ó productos fabriles aumentaron considerablemente los objetos de las negociaciones. También recibió gran impulso cuando, aumentado el trato y las comunicaciones, se advirtió que no todas las tierras ofrecían unos mismos productos, y que por la variedad del clima ó por otras causas se en- contraban, en unas, frutos naturales y objetos de industria, si no absolutamente necesarios, muy útiles al menos, y muy á propósito para aumentar los goces y las comodidades, y se dedicaron los hombres á transportarlos á aquellas donde no se conocían. Mas cuando tuvo el mayor incremento y llegó á su perfeccion, fue, cuando inventada la navegación, y puesto en comunicacion entre sí todo el género humano por este medio, crecieron los conocimientos y la ilustracion, y con ellos las necesidades que fue preciso satisfacer, protegiendo el único medio que había de adquirir lo necesario para cubrirlas.

Desde este tiempo, todas las naciones han adoptado medidas protectoras del comercio. Todas han dictado con este objeto y en mayor ó menor número, según sus hábitos, ocupaciones, situacion topografica y civilizacion, leyes especiales y supletorias de la legislacion civil, cuya coleccion ó conjunto es lo que llamamos Derecho mercantil.

Mas cuando hubo progresado tanto, ya no fue posible ejercerle con la sencillez y facilidad que antes; si en la infancia
de las sociedades un hombre por sí solo compraba, transportaba y vendía, llevando sus mercancías consigo mismo, el aumento de estas mercancías y el de los consumos, debió hacerle conocer muy luego, que adelantaría más valiéndose del auxilio de otros; y poniéndolo en ejecución, encargó á unos la compra, el trasporte á otros, y la venta á otros diferentes, quedándose con la dirección de todos, y creando á la vez una porción de agentes auxiliares, cuyos oficios le produjeron no poca utilidad.

Este aumento de brazos y de objetos de comercio, y el resultado favorable de algunas negociaciones, es de presumir le traerán á la imaginación la idea de emprenderlas mas en grande, valiéndose de los caudales ajenos que empleara por su cuenta, ó dando á sus dueños parte en la dirección y en las ganancias; por cuyo medio llamó en auxilio del comercio los préstamos y las compañías. La acumulación de caudales debió ocasionar la dificultad de conducirlos á los puntos en que debían ser empleados; y echando de ver que la diversidad de operaciones á que se dedicaban los comerciantes y la de los objetos sobre que recaían, los obliga á veces á llevar fondos á lugares de donde otros tenían que traerlos, convinieron en permutarlos entre sí como las demás mercancías, consignando la obligación en un documento, por no hallarse presentes las dos cantidades permutadas; y de este modo, evitando las conducciones y los riesgos á que estaban expuestas, inventaron las letras de cambio y demás documentos de crédito, utilizando en favor del comercio la buena fe y la confianza. Pero si por este medio quedaban libres de riesgos las conducciones de caudales, no era posible evitar tan fácilmente los que corrían los trasportes de las mercancías, sobre todo cuando se hacían por la mar, donde son mucho mas frecuentes; y como era también de suma importancia salvar los capitales empleados en ellas, no faltó quien ideara el medio de hacer menos sensible el daño y la pérdida, en el caso de que llegara á sobrevenir, repartiéndola entre muchos y poniendo en contribución á todos los que estaban expuestos á sufrirlas, cargó sobre si
ó estableció entre todos la obligación de indemnizar a los que las sufrieran, con la parte que abonaban los que no las habían tenido; y los seguros vinieron a garantizar el éxito de estas conducciones, animando a los capitalistas y fomentando empresas árdidas y arriesgadas.

A la sombra de estos auxilios y de estas garantías, ensanchó el comercio sus límites, se aumentó el número de comerciantes, y multiplicaron estos sus operaciones en términos, que no pudiendo realizarlas con facilidad separadamente, se buscaban y reunían en las plazas y otros sitios públicos, que en algunas partes se cambiaron con el tiempo en lonjas y casas de contratación; y procurando en estas reuniones ayudarse mutuamente, interviendo unos y mediando otros en los negocios de los demás para facilitar sus ajustes, no dejó de haber alguno que se consideró mas a propósito para ejercer una intervención conveniente, y que constituyéndose agente mediador entre todos ellos, creó el oficio de corredor, utilísimo y aun necesario en las grandes poblaciones.

Hé aquí, al parecer, los medios progresivos por los que el comercio ha ido adquiriendo insensiblemente su desarrollo y aumentando sus agentes auxiliares. La operación simple y sencilla de permutar, sustituida por la de comprar y vender, necesitó pronto la de transportar, estas, el aumento de mercancías y de los negocios, de brazos auxiliares para facilitarlos; la reunión de estos auxilios, de la de capitales que emplear; el aumento de capitales, de medios fáciles de ponerlos sin riesgo en los puntos donde eran necesarios; los peligros de los trasportes, de precaución, para disminuir sus efectos, y la dificultad y embarazo que las grandes poblaciones ofrecían para evacuar los asuntos aisladamente, de las reuniones de los comerciantes en sitios determinados, y de la creación de nuevos auxiliares; y de este modo los porteadores de mar y tierra, los mancebos, factores y comisionistas, los contratos de préstamos, fianza, depósito, compañías, las letras de cambio, libranzas, vales o pagarés y cartas-órdenes de crédito, los seguros, las lonjas y casas de contratación con sus cor-
redores y la Bolsa con sus agentes, instituciones y contratos no menos útiles ni menos acreedores á la protección especial de la ley, que los demás del comercio, vinieron á ser objeto de las disposiciones del DERECHO MERCANTIL (*)..

(*) El que desee adquirir mayores nociones en esta materia, puede ver al señor Martí Eixalá en sus Instituciones de derecho mercantil, libro 1.º, cap. 1.
RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO MERCANTIL ESPAÑOL.

Ardúa y difícil sería por cierto nuestra tarea, si tratáramos ahora de describir la marcha progresiva de las leyes comerciales de todas las naciones, desde que principiaron á dictarse hasta nuestros días. Esta historia, que sería á la vez la de la civilización, es empresa muy superior á nuestras fuerzas, y ajena á nuestro instituto. Por lo que hace á nuestro propósito, dirémos que ignoramos las que tuvieron los Fenicios, que se sabe ejercieron el comercio en España, y las de los Cartagineses, que vinieron después y se hicieron dueños de una gran parte de su territorio.

En nuestra humilde opinión, este derecho en su origen fue hijo de las circunstancias y de la necesidad; la razón y la equidad natural le sirvieron de base, y los legisladores no hicieron más que prestar su sanción expresa á las costumbres que encontraron ya establecidas; por esta razón acaso se diferencia tan poco en los principios fundamentales el Derecho comercial de todos los pueblos.

Las primeras que se establecieron debieron ser sin duda las náuticas, porque las operaciones del comercio terrestre se regían por el Derecho civil; á aquellas clases pertenecen las leyes de los Rodios que son las más antiguas que se conocen, y que tomadas acaso de los Fenicios, fueron después trasmitidas á los Romanos, que las admitieron y sancionaron en cuan-
to no se opusieran á las suyas, y dieron á conocer sus fragmentos á todas las naciones que se formaron á la destrucción de su imperio y admitieron su legislación (1).

En España estas fueron indudablemente las que estuvieron en observancia, mientras fué una de sus colonias y aun después de la invasión de los Germanos y de la fundación de la monarquía; porque es constante que los conquistadores permitieron á los conquistados el uso de sus leyes, y por consiguiente que los Romanos vencidos se gobernaron por las leyes romanas, civiles y comerciales.

Escasa debió ser, sin embargo, en este tiempo su aplicación y su necesidad, pues aun cuando los Españoles se dedicaron al comercio antes de la dominación goda, debieron sin duda ir perdiendo después esta inclinación con el contrato y relaciones de los conquistadores; y la prueba evidente de esta verdad se encuentra en que el Código de Alarico ó Brevisario de Aniano, que se compiló precisamente para los vencidos, y en el que se insertó la legislación romana vigente entonces, no se dió cabida mas que á dos disposiciones mercantiles relativas á la ley Rhodia de jactu, ó sea á la avería común, y á la pecunia trajectitia ó préstamo á la gruesa (2).

Para los vencedores, como que no sabían mas que guerrear, eran inútiles las leyes comerciales, porque apenas conocían otro modo de adquirir que la ocupación por la guerra ó por la caza. No es de extrañar, por tanto, que el Código de Eurico ó de Tolosa, publicado antes que el Brevisario de Aniano, que no fue mas que una compilación de sus costumbres, no se encuentre ninguna de este género, cuando en el mismo Fuero Juzgo, en el que se han reunido é incorporado las de los Reyes godos dictadas muchos siglos después, solo se hallan cuatro, y estas relativas á los mercaderes extranjeros; prueba clara de que los naturales se dedicaban poco al comercio y no

(1) Ley IX, Digest., tit. de lege Rhodia.
(2) Sres. Martí Eixalá, Reseña histórica del Derecho mercantil; Y. y Caravantes, Resumen histórico.
necesitaban leyes especiales para decidir las contiendas de este género (*).

La invasión de los Sarracenos tampoco fue favorable al comercio español; porque desde el momento que se verificó, principió una guerra defensiva por de pronto y ofensiva después, que duró bajo uno y otro concepto por espacio de más de cinco siglos, y donde no hay paz y tranquilidad, sabido es que no florece mucho el comercio; porque la guerra llama todas las atenciones, ni hay productos que exportar, y más si á la guerra se agrega la anarquía, como sucedió entonces.

La legislación foral de aquella época, dirigida principalmente á fomentar los intereses de las municipalidades, no se ocupaba de negocios mercantiles propiamente dichos. Los mercados y ferias, tratados como asuntos locales, son las únicas instituciones relativas á este objeto de que en ellos se hace mención.

La conquista de Sevilla por San Fernando fue un acontecimiento muy favorable, y á ella y á la paz que debía ya disfrutarse hacía tiempo en algunas provincias marítimas, bastante lejanas del teatro de la guerra, se debió sin duda que el comercio fuera tomando algún incremento; así como al deseo de este santo Rey de uniformar la legislación, y al cuidado y exactitud de su hijo D. Alonso en cumplir con el cargo que su padre le dejó hecho, el que en su código de las Partidas se adoptasen varias disposiciones relativas al comercio, que pueden ser consideradas como las primeras leyes mercantiles de los reinos de Castilla (1).

(* ) Estas cuatro leyes forman el tit. III, lib. 14, del Fuero Juzgo, y tratan solo de las cosas hurtadas que se le compren, de su fuero, de la prohibición de llevar siervos de España, y del salario que han de pagar á sus dueños si los alquilan para llevar las mercancías.

(1) Tit. VIII, IX, X y XXIV de la Partida 2.*, tit. VII, VIII, IX y X de la 5.*

No hacemos mérito del Fuero Real, porque no contiene más que dos disposiciones, precisamente en las dos últimas leyes de este código. La una
No nos atreveremos á asegurar si se insertaron con el fin de proteger el comercio naciente entonces, ó porque convinó á su propósito trasladar estas decisiones, si era la intención de este Rey formar un código general para España y otros pueblos. Pero sea de esto lo que quiera, lo que no tiene duda es, que desde esta época ninguna medida legislativa, ningún suceso importante para el comercio tuvo lugar entre nosotros hasta la de los Reyes católicos, mas que habiendo conocido los comerciantes castellanos la necesidad de asociarse y prestarse auxilios mútuos, para obtener así la seguridad y protección que el Gobierno ni les dispensaba, ni les podía acaso entonces dispensar, imitando tal vez lo que ya muchos años antes habían hecho los de Bilbao, formaron en Burgos una hermandad, que tuvo después su consulado, ó sea el privilegio de tener jueces especiales para la decisión de sus negocios.

Esto por lo que hace al reino de Castilla, antes de incorporárselo el de Navarra y el de Aragón; que por lo que toca a las provincias del Condado de Barcelona y á las de las costas de Cantabria, como marítimas y mas lejanas de las tierras que se iban conquistando, ni estuvo tan abandonado el comercio, ni dejó de ser objeto de algunas disposiciones legislativas. Según algunos autores, ya por los años de 1086 se formó en Barcelona, por mandado del conde Berenguer el Viejo, una coleccion de sus usajes, que prueba la importancia que se daba a su comercio entonces. Los prohombres de mar de la misma ciudad formaron tambien en principio del siglo XIII un reglamento para el Gobierno de las embarcaciones que entraban en el puerto. El Rey D. Pedro III de Aragon creó en 1285 el consulado de Valencia, que es el primero que se conoció en España. D. Pedro IV concedió otro á Barcelona en 1547, con las mismas bases y prerrogativas que el anterior; y en el reinado de D. Jaime el Conquistador, según la opinión mas probable, apareció el famoso Código de las Costumbres Marítimas de Bar-

es relativa á los naufragios, y la otra á las averías: ambas están tomadas de la legislación Romana, y reproducidas en las Partidas.
CELONA, conocido también con el nombre de CONSULADO DE MAR. Esta colección, formada igualmente por los prohombres de aquella ciudad, no comprendió solo sus usos, sino también las prácticas y costumbres de los principales estados de Levante, que los Catalanes recorrían con su comercio, mejorándolas y aclarándolas con observaciones oportunas; con lo que se formó un código tan completo y luminoso, que, aunque consuetudinario y faltó de sanción real, adquirió tanta autoridad e importancia, que fue admitido y observado no solo por los consulados españoles de aquellos puertos, sino también por las naciones más cultas de Europa, que lo aprobaron y se sujetaron a sus disposiciones por espacio de muchos años (1).

En las costas de Cantábria, San Sebastián fue la primera de aquellas poblaciones que dio señales de vida, por decirlo así, y se dedicó al tráfico y a la negociación. En el fuero que le concedió el Rey D. Sancho el Sábio de Navarra por los años de 1150, ya se encuentran algunas disposiciones, que son tenidas de muchos por las leyes mercantiles más antiguas de España, en las que se hace mención individual de los efec-
tos y mercancías que entraban y salían de aquel puerto en el siglo XII, sus relaciones comerciales con otros famosos en aquel tiempo por su comercio, y el establecimiento de un Al-
mirantezgo, quizá el más antiguo del reino. En los siglos pos-
teriores se aumentó su tráfico de manera, que fue célebre la Lonja nacional, establecida por los Vascongados en Brujas, por los años 1548, con anterioridad á los Ingleses, Portugue-
es, Catalanes y Venecianos. Por este mismo tiempo principió también á llamar la atención, como pueblo mercantil, la vi-
lla de Bilbao, que fundada en principios del siglo XIII, con la facultad de tener un mercado semanal, aumentó tan considerabemente su comercio con las franquicias y exenciones que le concedió el Rey D. Pedro de Castilla en 1550, que en 1489 tenía ya su hermandad, con privilegios y confirmaciones reales, dados por los Reyes católicos, y había principiado

(1) VICENTE Y CARAVANTES, Reseña histórica del derecho mercantil
á formar unas ordenanzas para su gobierno (1). Pero ni estas poblaciones ni ninguna de aquellas costas tuvieron por entonces leyes especiales para el comercio; por lo que se hace más probable la opinión de los que creen que con autorización expresa ó sin ella estuvieron en observancia los Roles ó juicios de Oleron, código consuetudinario, de origen incierto, pero anterior al siglo XIII, que sirvió de base á otros que aparecieron después en el Norte de Europa, y que no podía ser desconocido á los Vascongados, por sus relaciones comerciales con los puertos del Mediodía de la Francia y con otros en que se guardaba (*).

El reinado de los Reyes católicos produjo para el comercio el importunísimo descubrimiento del Nuevo Mundo, y a su celo por mejorar la administración de sus pueblos, se debieron también algunas disposiciones encaminadas a fomentarle. El valor legal de las diferentes clases de moneda, las comunicaciones por el interior, la abolición de impuestos gravosos, el crédito nacional, la prohibición y castigo de los contratos fraudulentos, la libertad de comerciar entre los reinos de Castilla y Aragón, y el aumento de la marina mercante, fueron objeto de sus desvelos. La hermandad de Burgos le debió su consulado y sus ordenanzas, y Sevilla la casa de con-


(*) Segun el señor Capmany en su Apéndice á las Leyes del comercio naval, existía en la biblioteca del Escorial una versión castellana de este código, que concluía con una nota en que se expresaba que concordaba con las leyes de la Partida 5.ª, que lo habían aprobado, y mandaban que por él se librasen todos los mercantes y fueran válidos los juicios dados á su tenor, añadiendo que se había sacado en 13 de agosto de 1436. Este manuscrito ha desaparecido según nos han informado; pero no pudiendo dudar de la fe del señor Capmany, debemos confesar que es una prueba que atestigua la observancia de dichas leyes. En cuanto á su aprobación y sanción por las de Partida, no podemos decir lo mismo, porque en los códigos que conocemos corregidos y concertados por D. Alonso el Onceno no se encuentra esta disposición, y si se hallaba en los anteriores á su corrección y enmienda: no se concibe la razón que pudo haber para suprimirla.
tratacion, centro y depósito del comercio del Nuevo Mundo, con jurisdicción propia, y con otras ordenanzas para su régimen (4). En los reinados posteriores también se adoptaron algunas, procurando su fomento, y el arreglo y protección del de Indias. Se concedió a Bilbao su consulado en los mismos términos que a Búrgos (2). La casa de contratación de Sevilla recibió nuevas ordenanzas para el ejercicio de jurisdicción, y se creó en ella una cátedra de cosmografía y navegación. Se estableció el consulado de dicha ciudad con jurisdicción privativa para los asuntos concernientes al comercio de Indias a petición de los comerciantes nacionales y extranjeros que existían en ella; y se le dieron unas ordenanzas que después fueron adicionadas. Se expidieron otras para el despacho de flotas (5); se aprobaron y confirmaron las que había formado la universidad de Búrgos, reformando y adicionando las anteriores (4), y se trasladó a Cádiz la Audiencia de la casa de contratación de Sevilla, y el conocimiento de los asuntos de comercio de dichas Indias (5).

Varias otras leyes se dictaron con el fin más o menos directo de dar ensanche a la libertad de comerciar unas veces, y otras con el de restringirla en beneficio de la agricultura y de las artes; pero las que se propusieron protegerla de la manera más eficaz, fueron las que crearon diferentes consulados, y la Junta de comercio. La extensión de los dominios de España por los años de 1652, obligó a Felipe IV a crear el de Madrid; y para que todos sus súbditos tuviesen representación


(2) Ley 2, tit. II, lib. 9, Nov. Recop.

(3) Reales cédulas de 10 de agosto de 1839, 25 id. de 1543, 4 de diciembre de 1552, 14 de julio de 1556, 21 de enero de 1582, 17 de id. de 1591, impresas en Sevilla en 1647.

(4) Real cédula de 1.º de agosto de 1572.

en él, ordenó que se compusiera de un Prior, natural de los reinos de Castilla, y de cuatro Cónsules; uno de la corona de Aragon, otro de Portugal, otro de sus reinos y demás provincias de Italia, y otro de sus estados de Flandes y demás provincias del Norte, concediéndole además facultad para crear otros donde hubiera bastante número de comerciantes (1).

La Junta de comercio fue creada por Cárlos II en 1679, para restablecer y aumentar el de estos reinos, nombrando cuatro ministros para componerla. Le concedió jurisdicción privativa en 1685, y sufrió después otras reformas en su reinado y en el de Felipe V, que formó una nueva en 1705, compuesta de ministros de la mayor satisfacción y de hombres de negocios prácticos e inteligentes, habiendo mandado antes en 1701 á todos los pueblos que le propusiesen medios para la restauracion del comercio. Y no fueron estas solas las disposiciones importantes adoptadas por este Monarca, sino que publicó además en 1717 una cédula sobre aduanas, arreglo el comercio entre América y Filipinas, y aprobó en 1737 las célebres Ordenanzas de Bilbao, de que hablaremos más adelante (2).

Fernando VI también estableció en Barcelona en 1738 un cuerpo de comercio o magistrado, compuesto de comerciantes, una junta para su fomento en lo gubernativo, y un consulado para lo contencioso (3).

Pero cuando recibió mayor impulso fue en el reinado de Cárlos III, en el que se renovó (1775) la creación de dicho cuerpo, junta y consulado, añadiéndole un juez de apelaciones con sus asesores; se estableció en Valencia otro cuerpo, junta y consulado igual al anterior (1762), y se le dieron ordenanzas (1777), y se creó otro en Zaragoza con las suyas (1762). Se dieron también otras nuevas al de San Sebastian (1766),

(1) Ley 4, tit. II, lib. 9, Nov. Recop.
(2) Leyes 4, 2, 3 y 4, tit. I y V. Tit. II, lib. 9, Nov. Recop. con su nota.
creado antes (1684), y otras al de Búrgos (1784). Se estableció uno terrestre y marítimo para Sevilla y pueblos de su arzobispado no sujetos al de Cádiz, mandando entre otras cosas, que se compusiera de hacendados, fabricantes, comerciantes y mercaderes, y se crearon el de Málaga, el de Alicante, el de la Coruña, el de Santander (1785), el de San Cristóbal de la Laguna en Tenerife (1786), y el de Mallorca (1800) (1). Se declaró la libertad del comercio de Indias, se creó el Banco de San Carlos, y se eximió a los comerciantes del servicio militar (2).

Entre todo este cúmulo de ordenanzas y disposiciones, las mas dignas de elogio son las de Bilbao, de que ya hemos hecho mérito, porque reducidas las demas al arreglo de los asuntos gubernativos de las juntas y consulados, y al ejercicio de su jurisdicción, no se ocupaban de otros actos mercantiles que reclamaban imperiosamente la atencion de los comerciantes y de los legisladores. Los seguros habian ya sido objeto de estas corporaciones ó hermandades que se habian ocupado mas de una vez de ellos en Barcelona, Búrgos y Sevilla. La de Búrgos tambien habia comprendido en las suyas algunos artículos relativos á las letras de cambio; pero ninguna se habia ocupado de asuntos del comercio terrestre con la extension que las de Bilbao, que abrazaron, ademas de lo que concierne á su jurisdicción y gobierno, la contabilidad mercantil, las companias de comercio, las letras de cambio, valores y libranzas, los corredores de lonja y navio, las quiebras, flotamentos, naufragios, averías, seguros, préstamos á la gruesa, capitanes de navios, pilotos de puerto y remanes, y hasta los carpinteros, calafates, gavarreros y barqueros; tratando todas estas materias con bastante extencion y con mucho acierto y claridad, con lo que vinieron á ser la coleccion mercantil mas completa de su época, adoptada como ley general del reino, ya por autorizacion expresa para algunos

consulados, ya por la necesidad en que se vieron otros de apelar a sus decisiones, sin excluir los de la corona de Aragon, que excepto en los asuntos del comercio marítimo, para los que preferían su consulado de mar, en todos los demás las admitieron y se gobernaron por ellas.

Este, pues, fué el código mercantil citado por los letrados y observado por los tribunales, hasta que deseando el Rey don Fernando VII uniformar y completar este ramo de la legislación, mandó formar y promulgó en 1829 el que nos rige, que aunque no exento de defectos llenó sin duda su objeto y está tenido por uno de los mejores que hasta entonces se habían publicado. La ley de enjuiciamiento mercantil y la de la Bolsa que le siguieron inmediatamente, suplieron algunas de las faltas que se le atribuyen, y la de sociedades por acciones, las de crédito y de bancos que se han publicado después, han venido, entre otras, a completar este ramo de nuestra legislación.
LIBRO PRIMERO.

Del comercio, de los comerciantes, y de sus agentes auxiliares.

TITULO PRIMERO.

Del comercio, de los comerciantes, del registro público del comercio y de las obligaciones que impone el ejercicio de esta profesión.

CAPÍTULO PRIMERO.

DEL COMERCIO Y SU DIVISION.

SECCION PRIMERA.

Del comercio.

1. El comercio es la industria que tiene por objeto hacer accesible toda clase de productos a los consumidores. Se ejerce comprando, vendiendo, permutando, conduciendo y asegurando las conducciones de dichos productos, y proporcionando ó cambiando cantidades para emplearlas en estos obje-
tos, todo con ánimo de sacar ganancia; de lo que se infiere que comprende diferentes clases de negociaciones, que estas no recaen sobre todas las cosas susceptibles de dominio, sino sobre objetos determinados, y que todas se celebran con el fin de sacar algún lucro. Hablaremos separadamente de los actos mercantiles, de las cosas objeto del comercio y del carácter distintivo de este, y así se hará más perceptible esta doctrina.

2. La operación principal del comercio es comprar y vender para ganar; y así, el que compra y vuelve a vender lo mismo que ha comprado, indudablemente ejecuta una operación mercantil; pero podrá suceder que no tenga fondos bastantes para comprar todo lo que desea, y le sea preciso que otro se los facilite antes, y entonces ejecutará dos operaciones que, aunque encaminadas a un solo fin, tendrán dos objetos diversos; la adquisición de los capitales, y su inversión después de adquiridos. También le ocurrirá con frecuencia que, teniéndolos preparados, no pueda llevarlos fácilmente a donde los ha de invertir, o que después de invertidos no pueda conducir sin riesgo los efectos en que los ha empleado a los puntos en que hayan de ser consumidos; en cuyos casos le será indispensable que uno se encargue de ponerle los fondos donde le hacen falta, que otro le traslade los efectos, y que otro tome por su cuenta las consecuencias de los riesgos que amenazan la conducción. Todas estas personas comercian, todas intervienen en la operación principal de un modo más o menos directo, y todos lo hacen con el fin de ganar por la parte que toman en ella; pero las operaciones, sin embargo, se distinguen en que las unas la preceden y preparan, y las otras la acompañan o la siguen; de lo que se deduce que los actos mercantiles pueden dividirse en preparatorios y constitutivos del comercio, subdividiéndose estos últimos en principales y accesorios. Serán preparatorios los que tienen solo por objeto facilitar otros que necesariamente se han de seguir después, y han de dar por resultado la ganancia que piensa sacar el que los ejecuta; y constitutivos los que la producen por sí mismos, concluyendo con ellos enteramente la intención y el fin con
que han sido ejecutados. Entre estos llamaremos *principales* a los que puedan principiarse y concluirse, sin tener relación con ninguno otro, ni necesitar de auxilio: y *accesorios* los que no pueden subsistir por sí, ni ser ejecutados sino con el fin de auxiliar a otra operación ya principiada.

A la primera clase pertenecen los *préstamos* y las *compañías*, que son contratos que ningún resultado darían si no se administraran y emplearan después los fondos que proporcionan en los objetos a que se destinan; sin que sirva de obstáculo que el prestamista alguna vez cobre réditos, porque ni este es un requisito esencial del contrato, ni el acto de prestar por sí solo es mercantil, ni la ley exige la cualidad de comerciante para ejecutarle, como lo exige en el que recibe a préstamo para comerciar (1).

A la segunda corresponden solo la *compra-venta* y la *permuta*, que son los únicos negocios que pueden realizarse sin relación con ninguno otro.

Y en la tercera colocaremos los *transportes*, *cambios*, *seguros*, *comisiones*, *depositos* y *fianzas*, que son actos que no se realizan sin mercancías ó sin cantidades destinadas para adquirirlas ó que provegan de su venta, ó no recaerán sobre objetos de comercio, ni tendrán concepto de mercantiles.

Esta clasificación no sujeta á reglas distintas los diferentes actos que comprende, sino que cada uno tiene las suyas, según su naturaleza respectiva; pero la adoptamos, sin embargo, porque establece el orden con que se ejecutan, y facilita su inteligencia.

5. Las cosas sobre que pueden recaer, son solo los productos de la naturaleza y de la industria, porque estas son las únicas que pueden consumirse, y por consiguiente las que se prestan al tráfico, y no los bienes raíces ni los muebles y derechos que le son inherentes (2). El oficio principal del comerciante, es el ser mediador entre productores y consumi-

---

(1) Código de Comercio, art. 387, párrafo 2.
(2) Art. 560, párrafo 1.
dores, tomando los sobrantes de los unos para ofrecerlos y presentarlos á los otros, de los que recibe en cambio lo que pueden consumir los primeros: y como esto no se puede hacer mas que con los productos naturales, tanto cuando se hallan en el mismo estado en que los ofreció la naturaleza, como cuando con el trabajo del hombre se han alterado y modificando para acomodarlos á las necesidades y á los goces de la vida, solo estas cosas son objeto de sus negociaciones y tienen el nombre de mercancías. Pero es necesario que sean permitidas ó de licito comercio, porque hay algunas con las que no se puede traificar, porque está prohibida su adquisicin ó su venta. Y si hubiéramos de seguir rigorosamente el principio que hemos sentado en la definicion, tambien deberia ser preciso que se volvieran á ver en la misma forma en que fueron adquiridas, y si tenian otra que no se la hubiera dado el mismo comerciante, porque el que las compra para modificarlas y prepararlas en su taller, por si ó por sus operarios, volviéndolas á vender en otro estado mas á propósito para el consumo, mas bien ejerce la industria fabril que la mercantil; pero como la una no excluye á la otra, sino que pueden ejercerse las dos juntas, la ley no exige esta circunstancia, y considera mercantil el acto, aunque se venda en forma diferente (1).

4. Ultimamente, el caracter distintivo del comercio consiste, en que todas las operaciones que lo constituyen, sean directas ó indirectas, se hagan siempre con el objeto de sacar algun lucro. En esto se diferencian de las demás de la misma especie civilmente consideradas. En la compra de trigo, por ejemplo, que uno hace para el consumo de su casa, no se propone ganar ni perder, sino únicamente cubrir sus necesidades y las de su familia, y no es posible que pierda ni gane, porque lo consume y no lo vuelve á enajenar. El que compra para volver á vender, se propone siempre sin duda sacar alguna ganancia, que no es otra cosa que el producto de su trabajo y

(1) Art. 559.
de sus cálculos y combinaciones, tan dignas de recompensa como el trabajo y la inteligencia del fabricante y del labrador. Bien podrá suceder que le salgan fallidas sus esperanzas, y que pierda en vez de ganar; pero esto no desvirtúa la naturaleza de la operación. Con la seguridad de perder, es evidente que ninguno comerciaria.

SECCION SEGUNDA.

Division y subdivision del comercio.

5. El comercio tiene varias divisiones y subdivisiones, nacidas unas del modo de ejercerle, y de la cantidad; otras del modo y del lugar en que se ejerce; y otras, en fin, de la procedencia de las mercancías.

6. Por razón del modo y de la cantidad, se divide en comercio al por menor y al por mayor. Al por mayor, el que se hace en cantidades grandes, que por lo regular no están al alcance del consumidor; como por ejemplo, vendiendo por cargas, quintales, fanegas, piezas, gruesas, arrobás, ó docenas. Y al por menor, el que se ejerce vendiendo a los consumidores en cantidades menores que las expresadas, como por varas, libras, cuartillos ó unidades, según las especies sobre que recaiga (1).

7. Por el lugar y el modo, en terrestre y marítimo: el terrestre se ejerce trasladando los frutos por tierra, á lomo, en ruedas ó en barcos pequeños por canales, lagos y ríos navegables; y el marítimo, transportándolos por la mar. Uno y otro se subdividen también por este mismo concepto en interior y exterior; llamándose interior el que se hace entre pueblos de la misma nación; y exterior el que se ejerce con los extranjeros; este último se subdivide igualmente por la procedencia de las mercancías, en comercio de exportación, de im-

(1) Art. 38, y Real resolución de 10 de febrero de 1753.
portación y mixto; se llama de exportación el que consiste en sacar productos del reino para venderlos fuera de él; de importación, el que se hace trayendo efectos extranjeros para venderlos en España, y mixto el que abraza á la vez las dos operaciones, y se ejerce sacando los nacionales y trayendo los extranjeros.

8. El marítimo también se subdivide, por razón del lugar, en comercio de cabotaje, colonial y de gran navegación. El de cabotaje y el colonial son interiores, y se diferencian en que el primero se ejerce de puerto á puerto de la misma nación é islas adyacentes, y el segundo con nuestras posesiones de Ultramar. El de gran navegación se hace con otras naciones, y se subdivide en directo ó indirecto. El directo es el que se hace en buques de la nación misma, conduciendo las mercancías bajo su propia bandera; el indirecto, llamado también de asti-lo, neutralidad ó habilitación de bandera extranj, se hace con las naciones con quienes se está en guerra, valiéndonos de los buques de otro neutral.

9. Todas estas divisiones son muy útiles y deben tenerse presentes, porque cada una de estas clases de comercio está sujeta á disposiciones distintas, ya del mismo derecho mercantil, ya del internacional, ya de las leyes fiscales de la hacienda pública, que deben también conocer y guardar los comerciantes, en atención á que está prohibido comerciar en algunos géneros; se halla gravada con ciertos impuestos la importación y exportación de otros, y es preciso sujetarse á varias formalidades para expenderlos.

10. Otros autores lo dividen en activo y pasivo, llamando activo al que hace el comerciante que transporta los efectos para su venta, y pasivo el del que los vuelve á vender donde los compra, esperando en su casa al comprador: en terrestre y fluvial, subdividiendo este último en el de gran navegación, de cabotaje, y otro que llaman interior, y se ejerce transportando los efectos por ríos, lagos ó canales; otros añaden, por último, el de transportes, seguros y compañías, el de la India, de América, del Norte y otros puntos, y aun en el de grande y
pequeño cabotaje, se divide el que se hace por las costas (1); pero nosotros nos limitamos a indicar estas divisiones, porque el activo y el pasivo en nada se diferencian, en cuanto a los efectos del derecho, como no se diferencia tampoco el terrestre, en que se transporta á lomo ó en ruedas, del interior en que se hace esta operacion por rios, canales ó lagos; el de grande y pequeño cabotaje influye solo en el pago de ciertos derechos que adeudan los buques, y los demás no son sino denominaciones adoptadas para designar las operaciones en que se ocupa el comerciante, ó los lugares y sitios en que comercia.

(1) Arts. 2 y 10 del Real decreto de 7 de mayo de 1856.
CAPITULO II.

DE LOS COMERCiantes.

11. Comerciante es la persona que, hallándose legalmente habilitada, se ocupa habitual y ordinariamente en hacer negocios ó actos, por medio de los que hemos dicho se ejercicio este ramo de industria (1).

12. Para poderlo ser se necesita aptitud legal; y para gozar de las prerogativas y beneficios que la ley concede a los que se dedican a esta profesion, que se ejerza fundando en ella su estado politico, después de haber obtenido la patente de inscripcion; por lo que, para tener legalmente el concepto de comerciante, se necesita reunir tres requisitos, que son: aptitud legal, patente de inscripcion, y ejercicio de esta profesion (2).

SECCION PRIMERA.

De la aptitud legal de los comerciantes.

15. Tienen aptitud legal para comerciar todos los que pueden contratar y obligarse, según las leyes civiles (3). Pero

---

(1) Código de Comercio, art. 1, y Rec. de casación de 26 mayo de 1857.

* La palabra comerciante es generica y comprende á los negociantes, que son los que comercian al por mayor; á los mercaderes que lo hacen al por menor; los banqueros, cambistas y demás que se designan por las operaciones en que se ocupan. Los fabricantes solo podrán tener esta consideracion cuando compren por su cuenta las primeras materias para vender después las manufacturas; pues si hacen la transformacion por encargo de otro que les paga su trabajo, no comercian.

(2) Código de Comercio, art. 1.

(3) Art. 3.
esta indicación por sí sola es muy vaga, y acaso no muy exacta en la generalidad con que se halla concebida; por lo que es indispensable expresar y clasificar más detenidamente las personas que pueden comerciar, que lo son (*):

1.° Todos los españoles, mayores de 25 años, sean varones ó hembras, con tal que no se hallen bajo el poder paterno.

2.° Los menores de 25 y mayores de 20 que no tengan padre, ó que hayan sido legalmente emancipados, siempre que tengan peculio propio, hayan adquirido la libre administración de sus bienes por la vénia ó dispensa de edad, y renuncien el beneficio de la restitución in integrum (1)**.

(*) El Código de Comercio en su art. 3, dice: que tienen capacidad para comerciar todas las personas que la tienen para contratar y obligarse, con arreglo á las leyes comunes; pero no nos ha parecido conveniente limitarnos á hacer esta indicación por varias razones: 1.° Porque los que no estén enterados de las disposiciones del derecho civil, nada adelantan con que se les diga, que los que según este pueden obligarse, son también los que pueden comerciar: 2.° Porque no es exacto este principio, ó no es cierto, así tan generalmente como se supone, que los que según el derecho civil pueden obligarse, pueden también ejercer el comercio, puesto que el menor de 25 años que no tiene padre, ni necesita emancipación con la vénia ó dispensa de edad, entra en la libre administración de sus bienes, y puede contratar y obligarse válidamente á los 18, y sin embargo, no sería posible que se dedicara al comercio hasta que tuviera los 20, según el espíritu de los arts. 4 y 5, que al parecer exigen, y con razón, esta edad, como requisito indispensable en todo el que haya de comerciar: y la 3.° porque consideramos á todos ellos confusos y en parte diminutos, porque no se hace mención de este mismo menor de 25 años y mayor de 20, que salió de la patria potestad, no por emancipación, sino por la muerte de su padre; al que creemos se le haría una injusticia prohibiéndole dedicarse al comercio cuando hubiese adquirido la administración de sus bienes, y hubiese llegado á la edad en que se le permite hacerlo al hijo emancipado.

(1) Art. 4.

** Los hijos salen de la patria potestad, no solo por la emancipación voluntaria del padre, hecha con autoridad real, sino también por la legal que induce el matrimonio, y por la forzosa, esto es, por la dignidad ó empleo incompatible con la dependencia del poder paterno á que ascien-
5.° La mujer casada, mayor de 20 años, que haya obtenido licencia de su marido, dada en escritura pública, y la viuda y la divorciada que hayan llegado a la misma edad. Mas es necesario tener presente que al cumplimiento de las obligaciones mercantiles de la casada no divorciada, están sujetos los bienes gananciales, ó sean los derechos que los dos cónyuges tengan en la comunidad social y los dotales de la mujer; pero no los inmuebles comunes, ni los propios del marido, que no puede gravar ni hipotecar, á no habersele concedido esta fa- tad en la escritura de autorización (1); * y al de las obligaciones contraídas por la viuda y la divorciada, lo están solo los bienes y derechos que tengan cuando se dedique al comercio,

de el hijo, y por la falta ó delito del padre mediante el que debe perder- la. Estos hijos también se consideran legalmente emancipados, y deben por lo mismo estar comprendidos en la disposición del art. 4, según lo dispuesto en las leyes 2.° y siguientes, tit. XVIII, Partida 4, y en el artículo 41 del Código penal.

La circunstancia de que tenga peculio propio la consideran algunos como inútil y aun perjudicial á los menores, á los que careciendo de bienes se les priva de utilizar su talento y su capacidad; otros la sostienen como conveniente para impedir que burlen la confianza de los que contraten con ellos, y que hagan negociaciones ruinosas valiéndose de capitales ajenos; pero á nosotros no nos convencen estas razones, que son igualmente aplicables á los mayores que á los menores de 25 años, y deseáramos ver suprimida esta exigencia, que hace á estos últimos de peor condición, y que no pueden producir gran efecto en su tráfico, no habiendo de constar sus bienes mas que en el libro de inventarios, que no puede ser reconocido sino en caso de quiebra, ó después de su muerte. Otra duda puede suscitarse á consecuencia de la doctrina que dejamos sentada, y es, si el menor que no sea hijo de familia, necesitará tener peculio propio, porque el artículo no habla mas que de los que lo sean, y en materias prohibitivas, como esta, no parece que debía tener lugar la interpretación extensiva. Mas su espíritu está muy claro, y solo con esta condición concede á los menores la facultad de comerciar.

(1) Arts. 5 y 7.

* La doctrina que exponemos, tomada de los artículos que citamos, ha dado márgen a dudas y opiniones diferentes acerca de su inteligencia y aun de su justicia. Al señor Martí Eixalá le parece duro que los bienes dotales de la mujer respondan de sus obligaciones mercantiles, si no al-
y los que adquiera después. También conviene advertir aquí que si bien los acreedores podrán perseguir y hacer enajenar los bienes raíces del menor y de la mujer casada, y aun ellos mismos están autorizados para hipotecarlos y sujetarlos al

canzan los gananciales, quedando exentos de esta responsabilidad los del marido, que tiene derecho a percibir las utilidades en el caso de haberlas: no alcanza la razón por qué no se hace mérito de los parafernales á la vez que los dotales; considera muy fundada la decisión del Código francés, según el que se obliga ella y obliga también á su marido, y no sabe cuáles son los bienes comunes que no puede gravar, ni hipotecar, si los gananciales, ó los que hayan adquirido en común por herencia u otro título, aunque tiene por más probable que sean dos primeros. El señor Vicente Caravantes, por el contrario, no halla oscuridad, ni confusión, ni ningún otro inconveniente en estas decisiones, que encuentra conformes con la equidad, porque parten del principio de no perjudicar á ninguno de los dos cónyuges; por cuya razón establecen que la mujer pueda obligar los bienes en que ambos tienen derechos por razón de matrimonio, como son los gananciales y los dotales, pero no los que son propios del marido, ni los parafernales de la mujer, en los que aquel no tiene derechos atendibles, y por lo que no se hace mérito de ellos; opina además, que los comunes que no puede gravar, no son los gananciales, sino lo que posean pro indiviso por otros conceptos, y encuentra el Código francés y otras legislaciones mercantiles de Europa conformes con la nuestra.

Estas son las opiniones de dos autores respetables, que tratan esta materia con bastante extensión, y que referimos, porque tenemos el sentimiento de no estar enteramente de acuerdo con ninguno de ellos, y nos vemos en la necesidad de exponer la nuestra, impugnando sus razones, en la parte que no las admitimos. Entre nosotros es inquestionable que el matrimonio induce, entre los que los contraen, una sociedad en la que se comunican todas las ganancias mientras dura, según la ley 4, tit. IV, lib. 10, Nov. Recop. En virtud de ella, lo que la casada gane comerciando es comunicable con su marido, que podrá consumirlo ó disponer de estos gananciales de otro modo, mientras subsista el matrimonio, y tendrá derecho á la mitad después de disuelto, según las leyes 5, 4 y 5 del mismo título y libro; y partiendo de estos principios, no puede sostenerse que cuando los bienes de esta sociedad no alcancen á cubrir las operaciones mercantiles de la mujer, hayan de responder sus dotales, excluyendo enteramente los que sean propios de su esposo; porque se establece entre los dos una desigualdad visible dándole parte en las ganancias y no en las pérdidas; desigualdad á cuyo favor solo podrá alc-
cumplimiento de las responsabilidades que proceden de su tráfico, no pueden, sin embargo, venderlos por sí, ni cederlos en pago de sus deudas, sino llenando las formalidades del de-
garse que la ley ha querido que marido y mujer tengan iguales privile-
gios y consideraciones cuando se dediquen al tráfico; y así como, si el marido fuera el que comerciara, no responderían de sus obligaciones los bienes dotales ni parafernales de la mujer, a pesar de tener parte en las ganancias, así tampoco consiente que respondan los del marido cuando comercia la mujer. Esta razón no es, á la verdad, muy convincente, ni tampoco tenemos por fundada la que se quiere deducir de los diferentes derechos del marido en los bienes dotales y parafernales, porque no nos parece conforme con lo establecido en nuestra legislación. Con arreglo á ella, el marido es dueño de la dote estimada, que hace suya quedando deudor de la cantidad que importe, y aun de la inestimada, según la opinión de algunos, porque este dominio solo le dá derecho para adminis-
trar los bienes en que consista, y para percibir los frutos que produzcan con la obligación de devolver los mismos que se le entreguen. Los para-
fernales también pueden pasar á poder del marido para que los haga su-
os, si se le entregan con este ánimo, según la ley 17, tit. XI, Partida 4, en cuyo caso no tendrá mas obligación que la de pagar la cantidad á quien ascienda; y aun cuando no los reciba con este objeto, tendrá el derecho de administrarlos llegando á los 18 años de edad, como previene la ley 7, tit. II, lib. 10 de la Nov. Recop., y le corresponderán como ganancia los frutos que produzcan, quedando solo responsable á devolver los que haya recibido, según la que hemos citado antes. De manera, que los dere-
chos del marido son los mismos en realidad en los dotales que en los parafernales, pues aunque algunos autores establecen entre unos y otros la diferencia de que en los últimos puede la mujer retener el dominio, y no en los primeros, y la de que por aquellos no tiene prelación como por los dotales, aunque sí hipoteca, esto, en primer lugar, no pasa de una opinión que acaso no está muy conforme con la ley de Partida citada antes; y en segundo, es más bien una cuestión de palabras que de dere-
chos, porque importa poco que el marido se llame señor ó no se llame, si el resultado es siempre que administra y usufructúa, pero no ena-
jená.

No encontramos, pues, mas atendibles para la cuestión presente los derechos del marido en unos bienes que en los otros, ni vemos mas com-
prometidos sus intereses porque su mujer oblige los dotales que los parafernales, ni alcanzamos razón que justifique la obligación exclusiva de esta, cuando no alcanzan los gananciales á cubrir sus compromisos mercantiles; y opinamos con el señor Martí, que se resiste que sus bienes
recho civil, porque la enajenación de estos bienes no es un acto mercantil, que son únicamente para los que se hallan autorizados (1).

4.° Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza, ó hayan ganado vecindad en algun pueblo de la monarquía con arreglo á las leyes, y los que se hallen domiciliados

solo corran los azares de su tráfico, quedando libres los del marido, y que deben los parafernales estar también comprendidos en esta disposición, y mas cuando vemos que virtualmente los incluye el art. 6, autorizándola para hipotecar los inmuebles de su pertenencia. Pero no podemos convenir con él del mismo modo, en que es mas probable que los bienes comunes de que habla el art. 7 sean los gananciales, que no los que posean *pro indiviso* por otros títulos. En esta parte nos parece mas fundada la opinion del señor Carvantes, aunque no adoptemos las razones que aduce para sostenerla. Los bienes gananciales están sujetos al cumplimiento de estas obligaciones por el art. 5, y los comunes que la mujer no puede gravar ni afectar, son los que pertenecen á los dos por otros conceptos, los que se excluyen por la misma razón que los propios del marido. Tal vez la intencion fué solo expresar, que aun cuando estuviesen en común, no por esto le era permitido á la mujer gravar la parte de su esposo sin autorizacion expresa; pero los términos en que está concebido el artículo dan á entender, que ni aun la suya. Concluiríamos haciendo presente que las disposiciones del Código francés no pueden á nuestro juicio aducirse como prueba del tino ó del desacierto con que haba procedido el nuestro; porque el art. 1387 del civil francés permite á los esposos celebrar los pactos ó convenciones que tengan por conveniente con respecto á la administracion de sus bienes, con tal que no se opongan á las buenas costumbres; pueden casarse estableciendo comunidad de bienes, ó bajo el régimen dotal, según el 1335, y aun bajo este último pueden estipular una sociedad para adquirir, según el 1381; sin embargo, que, aunque hablando con desconfianza por tratarse de una legislacion que no conocemos a fondo como la nuestra, encontramos que declarando el art. 5 de su Código de Comercio que la mujer que comercia en público, aunque sea sin autorización de su marido, se obliga ella y le obliga á él, si hay comunión de bienes, y previniendo el 7, que estando casada bajo el régimen dotal, no puede hipotecar ni enajenar los dotaes sino los parafernales, mas bien favorecen que se oponen á la opinion que dejamos sentada.

(1) Arts. 5, 6 y 7.

* El art. 5 no habla de la viuda; pero nosotros no hemos dudado en
en España (1). Los que no tengan ninguno de estos requisitos, ó sea los transeuntes, podrán comerciar al por mayor, como se halle establecido en los tratados celebrados con sus naciones respectivas; y si no los hay, con las mismas franquicias y restricciones que goce los españoles en las naciones de donde ellos procedan, ó con las que estén autorizadas por la costumbre; entendiéndose siempre que están sujetos á los tribunales españoles por los actos de comercio que celebren en nuestro territorio, y que ni á los transeuntes ni á los do-

hacer extensiva á ella su disposición, porque habiendo salido de la patria potestad por el matrimonio, y de la tutela ó administración de su marido por la muerte de este, no hay una razón para privarla del derecho que se concede á una divorciada. Con respecto á las obligaciones de esta última, dice el artículo, que están afectos á su cumplimiento los bienes que tengan en propiedad, usufructo y administración al dedicarse al tráfico, los dotales que se le restituyan por sentencia y los que adquiera posteriormente; para dar á entender sin duda, que á la mujer divorciada la pueden pertenecer algunos de que disponga libremente, y otros que estén todavía en poder del marido, y en los que este tenga el dominio, ó el usufructo y la administración, hasta que por sentencia se le obligue á restituirlos; pero á nosotros nos parece mas breve, mas clara y mas exacta tambien la expresión de los bienes y derechos que tenga cuando se dedique al comercio, y los que adquiera después, porque en ella están comprendidos todos, ya se considere que los que obtengan en poder de marido son suyos desde luego, ya que los adquiere después en virtud de la sentencia, ya en fin, que los adquiridos ó devueltos sean gananciales, dotales ó parafernales, ya que consistan en la propiedad nuda ó en el derecho de usufructuar, como puede suceder, pues en los términos en que está redactado el artículo, pudiera dudarse si los devueltos por el marido, en virtud de sentencia que tuvieran el concepto de parafernales ó gananciales, el usufructo en cuanto á la percepción de los frutos y demás derechos que la mujer ejerciera en los que no tuviera reunidos el dominio, usufructo y administración, debían responder ó no de sus obligaciones comerciales, en lo que á nuestro juicio no puede caber duda cuando responde con los dotales.

Este mismo sentido dán tambien á este artículo los dos autores que citamos en la nota anterior.

(1) Art. 1 de la Constitucion, 18 del Código del Comercio, y 19 del Real decreto de 17 de noviembre de 1852.
miciados les está permitido pescar en las costas de España, ni hacer con sus buques el comercio de cabotaje (1).*

44. Estas son las clases que por regla general pueden ejercer el comercio entre nosotros; pero también hay com-

(1) Arts. 49 y 29 del Código.—20 y 26 del Real decreto citado.

* Este Real decreto ha modificado los artículos del Código concernientes a los extranjeros. Los divide en domiciliados y transientes; declarando domiciliados a los que se hallen establecidos con casa abierta y residencia prolongada y bienes propios, ó modo de vivir conocido en territorio de la monarquía con el permiso de la autoridad superior civil de la provincia, y transientes a los que no reunan estas cualidades. Concede a los primeros el derecho de comerciar al por mayor y al por menor bajo las condiciones que para los españoles establezcan las leyes y reglamentos, y á los segundos el de ejercerlo solo al por mayor con sujeción á las leyes y disposiciones que rigen en el reino, negando á todos hacer el de cabotaje: previene que unos y otros se inscriban bajo el concepto que les corresponda en las matrículas y registros que se han de llevar en los gobiernos civiles de las provincias y en los consulados respectivos, declarando que no tendrán derecho á ser considerados como extranjeros en ningún concepto legal los que no se hallen inscritos en alguna de dichas dos clases, y sujeta á todos á los jueces y tribunales establecidos por las leyes en juicios que procedan de operaciones mercantiles, reservándoles para los demás casos el de extranjería, en virtud del que serán juzgados por los gobernadores de las plazas marítimas, y por los capitanes generales en los demás puntos, con apelación al tribunal especial de Guerra y Marina.

Con respecto á los franceses rigen otras disposiciones estipuladas en el convenio celebrado entre Francia y España el 26 de febrero, ratificado en 7 de marzo de 1862, en virtud del que, los franceses pueden comerciar en España y los españoles en Francia, así al por mayor como al por menor, y abrir las tiendas y almacenes que le sean necesarios, sin mas requisitos que el de estar provistos de una papeleta de matrícula en que conste su calidad de francés ó español respectivamente, la que le debe ser expedida por los agentes diplomáticos ó consulares del país á la presentacion de los documentos que acrediten su nacionalidad. Esta papeleta, visada por las autoridades territoriales competentes, les sirve de título de su nacionalidad, y de la identidad de sus personas en las gestiones que tengan que practicar. Artículos 1.° y 3.° del convenio citado.

Con respecto á las sociedades, véase la nota del número 477 tratando de las anónimas.
prendidas en ellas algunas personas, a las que les está prohibido dedicarse á esta profesión, fundándose estas excepciones en la incapacidad física de unas, en la incompatibilidad con el estado ó oficio de otras, y en la tacha legal de que algunas adolecen.

15. Por incapacidad física no pueden comerciar los locos, los fátuos, los sordo-mudos, los desmemoriados y los declarados pródigos, que tampoco pueden obligarse con arreglo á la ley civil.

16. Por incompatibilidad con su estado y profesión, por no dar lugar á que abandonen el cumplimiento de sus deberes, ó que abusen de su posición y de sus atribuciones en perjuicio de los intereses públicos y del comercio en general, no pueden dedicarse al comercio:

1.° Las personas y corporaciones que gozan fuero eclesiástico.

2.° Los magistrados, fiscales y jueces y los jefes militares, gubernativos ó económicos de una provincia ó distrito en el territorio en que ejercen su jurisdicción ó mando, ni los empleados en la recaudación y administración de las rentas públicas en la demarcación en que ejercen sus funciones, no teniendo real licencia. Se exceptúa de esta disposicion los alcaldes y tenientes que sufren un gravámen con el cargo, y sería injusto imponerles otro: los jueces de los tribunales de comercio, que por necesidad han de ser comerciantes al por mayor, y los promotores fiscales, cuyas atribuciones tienen muy poca relación con los asuntos mercantiles (1).*

(1) Art. 8 del Código de Comercio.—329 y 350 del Penal.

* El Código en su art. 8, habla solo de magistrados civiles, jueces y empleados en la hacienda pública, acostumbrándose sin duda al orden administrativo establecido en España en la época en que se redactó y publicó; pero como este ha variado, creemos no sería acaso contrario a su espiritu, comprender en la prohibición todos los empleados en cualquier ramo de la administración del Estado, porque todos tienen que atender al cumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, y no pueden tener por ocupación principal el comercio, y todos además ejercen en el territorio en que desempeñan sus funciones administrativas, cierta in-
5.° Los corredores y agentes de cambio, que se encuentran en el mismo caso que los empleados, y son además depositarios de la confianza de los comerciantes (1).

17. Por tacha legal están también excluidos: 1.° Los quebrados y concursados que no hayan obtenido rehabilitación; 2.° Los que sufran la pena de interdicción civil (2).

18. La incapacidad de que adolecen las personas de que acabamos de hacer mérito, es absoluta o parcial. Absoluta, la que procede de defecto físico y de tacha legal; y parcial la que proviene de incompatibilidad de estado o profesión. Los que padecen la primera, no pueden celebrar válidamente ninguna operación constitutiva ni preparatoria del comercio, porque no tienen la libre administración de sus bienes y no pueden obligarse (3).

Los que tienen solo la segunda, no pueden celebrar tampoco ninguna operación constitutiva, como comprar, vender, expedir, tomar o aceptar documentos de giro por vía de negociación, ni ser socios gestores ú otras semejantes, cuando su incapacidad es notoria, y si las celebran son nulas; pero si

fluencia de que pudieran abusar en provecho propio. De los que no habla el Código tampoco es de los militares, á los que no ha considerado excluidos el Tribunal Supremo de Justicia por sentencia de 5 de agosto de 1857, tratando del cumplimiento de una obligación mercantil contraída por un retirado. Sin embargo, mientras estén en activo servicio, en nuestro concepto, también parece que debe alcanzarles la prohibición.

(1) Art. 99, y núm. 1.º del 50 del Real decreto de 8 de febrero de 1854.

(2) Art. 9.º del Código de Comercio y 41 del Penal, y 171 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

* En el art. 9 del Código, se excluye á los declarados infames por la ley ó por sentencia judicial; pero en la actualidad no puede tener lugar esta escepcion, por estar abolidas las penas infamantes por el art. 23 del Código penal; y hemos colocado en su lugar la interdicción civil, porque los que sufran esta pena están privados de la administración de sus bienes por todo el tiempo que dura, y por consiguiente inhabilitados para comerciar.

(3) Arts. 1035, 1036 y 1037.

TOMO I.
podrán celebrar actos preparatorios, como ser socios accionistas y hacer préstamos mercantiles, porque tienen la libre administración de sus bienes, no les está prohibido obligarse, y en estos actos cesa el fundamento de la prohibición: por lo mismo, si celebran fraudulentamente alguno de los constitutivos, ocultando su incapacidad, cuando esta no sea manifiesta, les niega la ley acción para proceder contra el que contrató con ellos, y se la concede á este para que reclame el cumplimiento de la obligación contruida; por manera, que en pena del fraude con que proceden, no se anula el contrato para ellos, sino que queda al arbitrio del otro contratante exigir ó no que se lleven á efecto (1).

Sin embargo, los corredores y agentes de bolsa, á los que no solo se les prohíbe comerciar por sí ni por otra tercera persona, sino también tener parte directa ni indirecta, ni tomar interés ni acción en ninguna negociación ó tráfico, bajo la pena de perder su oficio, deben ser considerados como una excepción de esta doctrina (2).

(1) Art. 40.

* La acción que resulta á favor del que contrató con el incapacitado, y no á favor de este por haber ocultado su incapacidad, no debe entenderse tan ilimitada que pueda exigir del otro contrayente el cumplimiento de la obligación que pese sobre el incapacitado, desentendiéndose al mismo tiempo de cumplir la suya, como reclamar, por ejemplo, los géneros vendidos sin entregar el precio en que fueron comprados, porque esto sería poco conforme á la justicia y á los principios del derecho, sino circunscribirse á dar ó no cumplimiento al contrato según le sea mas conveniente; esto es, á no cumplirle si no le tiene cuenta, ó á pedir que se cumpla cumpliéndolo él por su parte, á no ser que adoleciera al mismo tiempo de otro vicio sustancial más que la incapacidad oculta, en cuyo caso también podría el incapacitado alegar la nulidad.

(2) Art. 99 del Código y 50 del Real decreto citado.
SECCION SEGUNDA.

Patente de inscripción.

19. La patente ó certificado de inscripción es el documento que se expide al comerciante para que pueda acreditar que lo es, donde quiera que le convenga. Se exige, no solo para que conste legalmente los que lo son, sino también para precaver el fraude, impidiendo que se dediquen al tráfico los que no tengan capacidad legal. Tres cosas es preciso tener en consideración con respecto á ella: 1.ª quién y cuándo debe pedirla; 2.ª quién debe darla; y 3.ª qué debe contener.

20. Tiene que pedirla el mismo interesado, antes de principiar su tráfico, por medio de una exposición visada por el regidor síndico, que debe presentar al alcalde de su domicilio, en la que manifieste su nombre y apellido, su estado y naturaleza, su intención de dedicarse al comercio, y cómo va á comerciar.

21. Debe expedirla el mismo alcalde, sin derechos é inmediatamente, si el que la solicita no tiene alguna incapacidad, remitiendo un duplicado al Gobernador civil de la provincia.

22. Debe contener la autorización para comerciar, con la expresión de si ha de ser al por mayor ó al por menor, ó de ambos modos. Y como pudiera suceder que el síndico no quisiera poner el V.º B.º, ó que el alcalde se negara á expedirla temerariamente, la ley le dá derecho para solicitarla en este caso del Ayuntamiento, acompañando á su petición los documentos que justifiquen su idoneidad, y después del Gobernador civil, si la decisión de esta corporacion no le es favorable; y aun cuando la de este último le sea también contraria, puede todavía reproducir de nuevo su pretensión, siempre que la negativa se funde en alguna tacha temporal, luego que esta haya desaparecido.
23. Para entablar estos recursos no tiene tiempo determi-
nado, sino que puede hacerlo cuando le convenga; pero el
Ayuntamiento tiene ocho días para resolver, y otros ocho el
Gobernador. Estos últimos se cuentan desde aquel en que es-
pire un mes que tiene que conceder al interesado para que
esfuerce y corrobore su pretension con las exposiciones y do-
cumentos que le convengan, ó desde que lo renuncie si no
quiere aprovechar este término (1).

SECCION TERCERA.

Del ejercicio de la profesion.

24. El ejercicio de su profesion es el complemento de los
requisitos que se exigen al comerciante, y tan necesario que
sin él de nada sirven los otros dos. Consiste en ocuparse en
las negociaciones constitutivas del tráfico mercantil de que
hemos hablado antes, y de las que se hará mérito tambien en
los tratados sucesivos (*) . Y no debe ser accidental, sino habi-

(1) Arts. 13, 14 y 15.

(*) Puede ofrecer alguna dificultad el designar las negociaciones que
meretan el concepto de mercantiles, entre las que llamamos indirectas ó
accesorias; porque en efecto puede dudarse, por ejemplo, si la fianza, el
aval, los seguros terrestres, el préstamo, el mandato, el depósito y aun la
formación de una sociedad, son actos mercantiles cuando se trata de exa-
minarlos en sí mismos; pero á nuestro juicio desaparece esta si se consi-
dera que todos estos actos se refieren á otros que deben considerarse
como principales, y cuya suerte deben seguir. Así, pues, el depósito
será mercantil si son comerciantes el deponente y el depositario, y obje-
tos del comercio las cosas que se depositen. Art. 404: la fianza que se
presta por el comerciante y recae sobre obligación mercantil. Artícu-
lo 412: los seguros cuando recaen sobre las conducciones de mercancias
ó otros actos de comercio; los préstamos cuando versan entre comer-
ciantes y se contraen para operaciones mercantiles, ó cuando el pre-
stemista comerciante tiene por ocupacion habitual hacer estos préstamos,
como suele suceder con los banqueros. Art. 387: las conducciones cuan-
do versan sobre objetos de comercio, y las mismas compañías cuando se
forman por comerciantes que conservan el carácter y el concepto de
sóci os gestores.
tual y tan continuo, que forme la ocupación principal y el estado político del comerciante (1).*

25. Puede ser **expreso** y **presunto**. Expreso cuando se da á conocer por la repetición de actos sucesivos; y presunto cuando se manifiesta con uno solo, como por ejemplo, abriendo una tienda, almacén u otro establecimiento semejante, ó pasando cédulas ó cartas circulares en que diga la clase de comercio á que se dedica, después de haber sacado la patente y de estar inscripto en la matrícula (2).**

(1) Art. 4.

* Estampamos esta doctrina porque la vemos establecida expresamente en el art. 4 del Código, pero no porque sean estas nuestras convicciones. A nuestro entender, cuando una persona, á la que le está permitido comerciar, manifiesta que quiere dedicarse á esta profesión y obtiene su patente, debe importar muy poco que sean muchas ó pocas las operaciones que ejecute, para que sea tenido por comerciante, y se le considere sujeto en cuanto á ellas á las obligaciones que le imponen las leyes especiales del comercio; y añadimos que no tenemos por muy acertada la exigencia de que precisamente haya de formar esta ocupación el estado político del comerciante, ó lo que es lo mismo, que constituya el modo de vivir con que se le distingue en la sociedad, porque no creemos el ejercicio del comercio incompatible con otras ocupaciones, ni el Código excluye más que á ciertos empleados públicos, según dejamos manifestado; y con arreglo á esta disposición, el propietario dedicado al cultivo de sus propiedades que tenga el concepto de labrador, el abogado y otros semejantes, aunque digan que quieren también comerciar, ob- tengan su patente y practiquen algunas operaciones de comercio, no se reputarán comerciantes, ni estarán obligados á cumplir los deberes que exige el ejercicio de esta profesión, porque no tienen por ocupación principal el tráfico, ni fundan en él su estado político: una de dos, ó es preciso decir que el ejercicio del comercio es incompatible con las demás profesiones sociales, ó es preciso convenir en que deben tenerse por comerciantes, sujetos á las leyes del comercio, todos los que teniendo aptitud legal, obtienen la patente y practican operaciones mercantiles, aun cuando á la vez ejerzan otra profesión, como no sea de las exceptuadas en el art. 8. Véase el recurso de casación de 28 de febrero de 1859, sobre los medios de prueba del ejercicio vital.

(2) Art. 17.

** El art. 17 añade, y se ocupa en actos de esta especie, es decir, de la misma que indiquen las circulares, y la muestra ó inscripción puesta
26. Ultimamente, debemos advertir que aunque el ejercicio por sí solo no es suficiente para atribuir la cualidad de comerciante, si no va acompañado de los demás requisitos que hemos manifestado, sin embargo, todo el que ejecute alguna operación de comercio terrestre, aunque sea accidentalmente, queda sujeto, en cuanto a sus resultas, a las leyes y al fuero mercantil, sin gozar por esto de los beneficios y prerogativas que las mismas conceden a los comerciantes (1).

al establecimiento; pero nosotros tenemos por inútil esta adición, porque si á la actitud y á la patente se siguen actos mercantiles de la clase que expresa la patente misma, hay ya ejercicio expreso y manifiesto, según dejamos indicado, y para nada se necesitan las circulares, ni los anuncios ni las inscripciones ó rótulos permanentes.

(1) Art. 2.
* Con respecto al ejercicio del comercio, ha declarado el Tribunal Supremo de Justicia, por sentencia de casación de 28 de febrero de 1859, que aun cuando la reunión de los requisitos que exige el art. 17 basta para suponerlo, no excluye la prueba en otra forma; y ha decidido á favor de los Tribunales de Comercio la competencia de un concurso voluntario de persona dada á conocer como comerciante, y dedicada exclusivamente al comercio, aun cuando no estaba inscripto en la matrícula.
CAPITULO III.

DEL REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO.

27. Como interesa siempre saber qué personas se dedican á las diferentes profesiones que autorizan las leyes del Estado, y en la mercantil es oportuno que conste de un modo fehaciente, no solo los que la ejercen como principales, sino también sus auxiliares y dependientes en algunos casos, y aun los compromisos y obligaciones que tengan preferencia en todas las legislaciones mercantiles de las sociedades modernas, se han adoptado algunas disposiciones encaminadas á este objeto, estableciendo lo que se llama Registro público del comercio.

28. Este registro lo forman los libros que debe haber en los Gobiernos civiles de cada una de las provincias, encuadernados, foliados y rubricados por el Jefe, destinados precisamente para inscribir los comerciantes, y para hacer asientos y apuntaciones de los documentos otorgados por los mismos, que deben tener publicidad y ser conocidos de todos, porque lo exigen así los intereses sociales y los de los que se dedican á la misma profesion.

Se divide en dos secciones: la primera forma la que se llama matricula general del comercio, y la segunda, la inscripción de los documentos públicos que necesitan la toma de razon para que produzcan efectos legales (1).

(1) Art. 22.

* El Código dice «en la secretaria de la Intendencia;» pero esta disposición se derogó por Real órden de 30 de mayo de 1836, que lo mandó llevar en los Gobiernos civiles, en los que últimamente se han refundido también aquellas. ¿Y de cuántos libros se ha de componer el registro en cada una de las secciones? En ningún artículo se expresa; pero será conveniente que haya lo menos uno para cada clase de asientos, porque así habrá más orden y claridad, y se encontrarán fácilmente
29. La matrícula contiene el nombre y apellido de cada comerciante; su estado, naturaleza, domicilio y modo de ejercer el comercio para que esté autorizado en su patente. Se forma con presencia del duplicado de esta misma, que la autoridad que la expide debe remitir a la superior civil de la provincia en el acto de expedirla (1).

30. La inscripción o registro contiene la toma de razón de estas tres clases de documentos:

1. De los poderes que los comerciantes otorgan a favor de sus factores o dependientes, autorizándolos para celebrar actos mercantiles bajo su nombre y su responsabilidad.

cuando haya que buscarlos. Lo que exige por necesidad la última parte del 22, es que además se lleve un índice general por orden alfabético de pueblos y de nombres, de todos los documentos de que se tome razón, expresándose al margen de cada artículo la referencia del número y página del registro donde consta.

(1) Art. 42.

* La formación de la matrícula del comercio no siempre ni en todas partes ha estado á cargo de los Gobiernos civiles, ni se ha hecho con las mismas formalidades, habiéndose dictado algunas disposiciones acerca de este particular por Real orden de 29 de octubre de 1838, 16 de marzo de 1846 y 10 de octubre de 1862. En esta última, que es la vigente en la actualidad y está dictada oyendo antes al Consejo de Estado, se recomienda la necesidad de la inscripción para impedir el abuso que cometen un crecido número de personas, que dedicadas á la profesión del comercio, no se inscriben en ella, evadiendo el precepto del Código, imposibilitando el ejercicio de la jurisdicción mercantil en actos de su competencia, y perjudicando los intereses de los contratantes de buena fe, a cuyo fin se previene que por la sección de comercio de la Junta provincial de agricultura, industria y comercio, auxiliada si fuese necesario con individuos de la sección de industria, se proceda en cada provincia á la formación de un matrícula exacta con arreglo á los artículos 11 y 22 del Código, rectificando la existente luego que las oficinas de Hacienda hubiesen ultimado el catastro del subsidio industrial correspondiente al año próximo; con la advertencia de que al efectuarla se consideren como sujetas á inscripción las personas cuya condición no ofrezca duda con arreglo al art. 4.° del Código, atendida la índole y extensión de las operaciones que realicen, y la de que se revise este trabajo por el Gobierno civil, se publique, se oigán las reclamaciones de los in-
2.° De las escrituras de asociaciones comerciales que se formen.

Y 5.° De las cartas dotalles y escrituras de capitulaciones matrimoniales, ó entregas de bienes parasfernales, que los comerciantes otorguen ó tengan otorgadas cuando principian á comerciar, y también de las escrituras de restitución de las mismas dotes ó entregas registradas (4).*

51. La toma de razón ha de hacerse por orden de números y fechas, expresando en ella con exactitud y claridad cuanto sea preciso para conocer en toda su extensión la autorización ó obligación que contiene el documento que se registra.

52. Luego que esté hecho el asiento, debe remitirse una copia al Tribunal de Comercio del pueblo del comerciante, y si no lo hay al Juzgado de primera instancia, para que la fije en los estrados de su audiencia, y la anote en otro registro que deben llevar para este efecto; y también se les circulará anual-

teresados, si las hubiere, y ultimada que sea se publique de nuevo, repitiendo esta misma rectificación cada dos años, sin que por esto dejen los Gobernadores de adicionar la en los intervalos con los que de nuevo se dediquen á la profesión mercantil. También se les manda que conminen á los que no cumplan con este deber con las multas y correcciones que quepan dentro de la facultad coexitiva que las leyes les conceden, sin perjuicio de sujetar á la acción de los Tribunales á los que incurran en responsabilidad criminal; y se declara, por último, que la inscripción hecha en los términos expresados solo ofrece una presunción juris de la declaración de comerciantes, sin que por ella se entienda coartada la acción de los Tribunales para juzgar de su competencia admitiendo y apreciando en cada caso las pruebas que sean procedentes.

(4) Arts. 22 y 1114, párrafo 2.°

* Por una Real orden de 12 de febrero de 1880 y otra del mismo día y mes de 1880, se han dictado disposiciones, poco claras en verdad, acerca del registro de las cartas dotalles, previniéndose que estos se hagan «expresando únicamente las fechas de las cartas dotalles, de los certificados de inscripción en la matrícula del comercio, y del día en que se verifiquen los expresados registros.»

Los requisitos que ha de contener la toma de razón de la escritura de sociedad, véanse al tratar de estas (núm. 147).
mente la matrícula de los comerciantes para que fijen una copia al público, reservando la original en su secretaría (1).

55. El registro general del comercio está á cargo de los secretarios de los Gobiernos civiles, que son responsables del cumplimiento de estas obligaciones y de la exactitud y legalidad de sus asientos (2).

(1) Arts. 16 y 31.
(2) Art. 23.
CAPÍTULO IV.

DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE Á LOS COMERCIANTES EL EJERCICIO DE SU PROFESION; SU ORÍGEN Y OBJETOS SOBRE QUE RECAEN.

SECCION PRIMERA.

Origen de las obligaciones que su profesion impone á los comerciantes.

54. Desde que hay sociedades políticas han procurado siempre sus legisladores reglamentar los pactos y convenciones por medio de leyes establecidas, no solo con el objeto de que conste su celebracion y la extension de las obligaciones contraidas, sino tambien con el de precaver los fraudes que á su sombra se pudieran cometer. Con este fin se han dictado las concernientes á la invalidacion de los contratos en que intervenga dolo, y á la prestacion de culpas y otras garantias; y tambien las relativas á la institucion del oficio de hipotecas, que son comunes á los contratos ordinarios y á los especiales del comercio. Pero estas precauciones no eran bastantes para proteger debidamente los intereses de los que se dedican á esta profesion, porque las transacciones mercantiles se celebran ordinariamente con mas rapidez que las civiles; los que interviienen en ellas tienen muchas veces que entregarse á la probidad y honradez de aquellos con quienes contraen, y es preciso por lo mismo que la buena fe presida siempre sus contratos. Los comerciantes, por otra parte, no trafican solo con sus capitales, sino tambien con su credito, que es el alma del comercio, que la sociedad tiene grande interes en fomentar, y del que pudieran abusar facilmente en perjuicio de sus compañeros y de sus corresponsales (*), y la necesidad de preca-

(*) El credito es la buena reputacion de que goza el comerciante en el cumplimiento de sus obligaciones, en virtud de la que se le confian grandes cantidades bajo la garantia de su firma.
ver estos abusos protegiendo la buena fe, y cerrando en lo posible la puerta a los fraudes, que estimulados por la codicia, o tal vez por la mala suerte, pudieran algunos intentar cometer, es lo que ha aconsejado las disposiciones que reglamentan, por decirlo así, el ejercicio de esta profesión por medio de ciertas formalidades y obligaciones comunes a todos los comerciantes (1).

Estas obligaciones tienen por objeto el registro de los documentos de que ya dejamos hecha mención, los libros de contabilidad y la correspondencia.

SECCION SEGUNDA.

De la obligación de registrar los documentos públicos.

55. Todo comerciante tiene obligación de presentar en el Gobierno civil de su provincia, para la toma de razón, en el término preciso de quince días, contados desde el siguiente al de su fecha, un testimonio de cualquiera documento público que otorgue perteneciente á las tres clases de que hemos hablado tratando del registro público del comercio (número 50). Esta obligación ha de constar en el instrumento mismo, por advertencia del escribano, que tiene el deber de hacerla y de consignarla en la escritura. Los quince días para las cartas dotales otorgadas antes de dedicarse al tráfico, principian á correr desde el siguiente al en que le sea expedida la patente de inscripción; y en esta es en la que debe hacerse, en este caso, la advertencia que no pueda ser hecha en la escritura, por no ser comerciante todavía el que la otorgaba (2).

56. Por la omisión de esta diligencia pierde el documento la fuerza legal que debería tener en favor de los que lo de-

(1) Art. 21.
(2) Arts. 21 y 26, y Reales órdenes de 15 de abril y de 4 de mayo de 1851.
bian presentar, pero no la que tenga en su contra. En conces-
uencia de esta disposición, serán diferentes los efectos que
produzca en cada uno de ellos.

Los poderes de los factores y dependientes no registrados,
no producirán acción entre estos y sus principales; pero sí
contra ellos y a favor de los que trataron con el factor o con
el dependiente, según que obre en nombre de su comitente o
en el suyo propio, como diremos en su lugar oportuno (nú-
meros 70 y 71) (1).

Las escrituras de sociedad á que falte este requisito, no
producirán tampoco acción entre los otorgantes para deman-
dar sus derechos sociales, pero sí á favor de cualquiera otra
persona que trate con la sociedad (2).*

Las escrituras dotales y de capitulaciones matrimoniales,
y las de entrega de bienes parafernales, no gozarán de la prela-
ción que debían tener en concurrencia con otros acreedores,
si no han sido registradas (3).

Además de perder su eficacia estos documentos, en los
términos que hemos expuesto, lleva también consigo esta omi-
sión la pena pecuniaria de 5,000 rs. que deberán pagar man-
comunadamente los otorgantes en el caso de presentarlos en
juicio (4).**

---

(1) Art. 29.
(2) Art. 28.
* Con respecto á las escrituras de sociedad de que no se tome razón
en el registro, véase la nota del núm. 147.
(3) Art. 27.
(4) Art. 30.
** Esta doctrina que dejamos sentada es, a nuestro juicio, aplicable
solo al caso en que se haya omitido enteramente la presentación del do-
cumento; pero no al en que se haya practicado esta diligencia después
de los 15 días de su otorgamiento. En este caso especial no previene la
ley lo que se ha de hacer. Nosotros creemos que si el funcionario pú bli-
co encargado de tomar la razón se niega á registrarlo, estará en su de-
recho y habrá que otorgar otro de nuevo, y llevarlo á registrar en el
término prefijado; pero también nos parece que si toma la razón del
antiguo, á petición de todos los otorgantes, debe surtir todos sus efectos.
SECCION TERCERA.

De la contabilidad.

57. Todos los comerciantes en el mero hecho de ser lo contraen la obligación de llevar cuenta y razón de todas sus operaciones por un orden uniforme y riguroso (1).

58. Este sistema de contabilidad tiene por objeto, en primer lugar, que tengan siempre á la vista su verdadera situación, y les sirva de gobierno en sus negocios; y en segundo, preparar pruebas para el caso de que se suscite duda ó controversia sobre alguna ó alguna de sus operaciones, y para el
desde que se fije en los estrados del Tribunal, porque tenemos esta medida por muy conforme con su espíritu, puesto que una vez tomada la razón y dado al documento la conveniente publicidad, se ha conseguido el objeto que se propuso al establecer este registro; pero de ningún modo queremos que tenga fuerza retroactiva, esto es, que se le atribuyan efectos desde el acto del otorgamiento como si hubiera sido registrado en tiempo hábil, pues entonces se podrían ocasionar perjuicios y aun dar lugar á fraudes, como sucedería, por ejemplo, con la carta dotal, en virtud de la que pretendiera la mujer ser preferida á otros acreedores que hubieran contratado con su marido, por ignorar que estaba otorgada.

La Real órden de 15 de abril de 1851, citada antes, asimila en cierto modo esta obligación con la toma de razón en el oficio de hipotecas; y así como por la omisión de presentar el documento con este objeto en el tiempo prefijado no se obliga á los contratantes á que otorguen otro, sino que se toma después, imponiéndoles una multa, así en el comercio debería exigirseles la de los 5,000 rs., ó otra que se estableciera por esta falta, haciendo la inscripción cuando se presentara.

Si aconteciese que presentado el documento en el Gobierno civil se retardase ó omitiese la toma de razón ó la remisión de la copia al tribunal ó juzgado respectivo para fijara en su audiencia, habrían cumplido por su parte los otorgantes, y no pesaría sobre ellos ninguna responsabilidad, sino sobre el moroso, y así parece que lo dá á entender la Real órden de 12 de febrero de 1850, que hemos citado antes.

(1) Art. 21.
de quiebra. Con este fin se les obliga á que lleven indispensa-
blemente tres libros á lo menos, llamados, el Diario, el Ma-
yor ó de Cuentas corrientes, y el de Inventarios, y se les per-
miten que tengan además todos cuantos estimen convenientes
para el mejor órden y claridad de sus operaciones (1).*

39. En los que son necesarios hay que considerar sus re-
quisitos, sus efectos, y las penas en que incurren los que no
los tengan ó no los lleven del modo establecido (**)

En los requisitos comprendemos las circunstancias relativa-
as á su estado material, los asientos que han de contener, y
la formalidad con que deben estar extendidos.

40. Las circunstancias relativas á su estado material pue-
den reducirse á cuatro, á saber:

1.º Que tengan el sello que designen la ley ó las instruc-
ciones relativas al papel sellado, y que estén encuadernados,
forrados y foliados (***)

2.º Que se hallen rubricadas todas sus hojas por un indi-
vidual del Tribunal de comercio y el escribano del mismo, y

(1) Arts. 33 y 48.

* Los que más frecuentemente suelen llevar como auxiliares, son el
de caja, el de compras, ventas, gastos generales, entradas y salidas, y el
de vencimientos, y también el copiador de letras y el de beneficios y
pérdidas.

(**) Según los artículos 1.º y 32 del Código, solo los comerciantes
matriculados son los que tienen obligación de llevar libros: mas el 56
del Real decreto de 12 de setiembre de 1861, relativo al uso del papel
sellado, la hace también extensiva en cuanto á sus efectos á los que se
dedican al comercio, aunque no estén inscriptos en la matrícula. La di-
ficultad que ahora puede presentarse es si los de estos últimos, llevados
sin vicios ni defectos, surtirán tambien los efectos que atribuye el artícu-
lo 53 del Código á los de los comerciantes matriculados, y harán prueba
en juicio; en la que opinamos por la negativa, porque se le atribuye esta
eficacia solo á los de los comerciantes y entre comerciantes, y el que no
está inscripto en la matrícula no tiene legalmente este concepto, ni se
le reputa comerciante de derecho, aunque haga operaciones de tráfico y
quede por ellas sujeto á la ley y al fuero de comercio.

(***) El libro diario es solo el que debe tener el sello especial de com-
ercio, según el art. 56 del Real decreto citado de 12 de setiembre de 1864.
donde no lo haya por el juez de primera instancia y el secretario de su juzgado (1)*.

3.° Que contenga además en la primera hoja una nota fechada y firmada por los mismos, en que se exprese el número de las que contiene cada uno de ellos.

Y 4.° Que no se hallen mutilados con hojas arrancadas, ni tengan alterada la foliación.

41. Los asientos son diversos, según el objeto á que cada uno está destinado. En el Diario se deben sentar todas las operaciones que en cada día haga el comerciante, sean ó no mercantiles (2)**, por el orden con que hayan sido hechas, y

(1) Real órden de 15 de mayo de 1851.
* Por el art. 1.° de este mismo Real decreto se establece que haya sellos sueltos para los documentos de giro, pólizas de operaciones de bolsa y libros de comercio; y en el 57 se previene que las autoridades á quienes compete rubricar estos últimos se abstengan de hacerlo sino lle

van unidos los sellos correspondientes.

(2) Art. 33.
** El art. 33 del Código dice: «todas las operaciones que haga el com-

merciante en su tráfico;» pero nosotros entendemos que no está bien re-
dactado, y que no ha debido ser la intención de sus autores limitar la

obligación á los negocios mercantiles, porque esta limitación contraria
directamente el objeto con que se han establecido estos libros de con-
tabilidad y el modo de llevarla. Lo que con ella se desea, entre otras
cosas, es evitar fraudes, y que el comerciante pueda conocer fácilmente
siempre que quiera el estado de sus negocios y su verdadera situación; y
si no hubiera de anotar sus operaciones mercantiles, es indudable que
no la conocería con tanta facilidad, porque no podría tener presentes las
cantidades que recibiera por otros conceptos, como por donación, heren-
cia ó por la venta de los bienes que tuvieran esta procedencia; y ade-
más, no constando en sus libros estas adquisiciones, nada mas sencillo
que su ocultación en caso de quiebra, defraudando de su importe á los
acreedores legítimos; en una palabra, como dice Pardessus, no es por
razón del origen del crédito ó de la deuda por lo que deben hacerse los
asientos con toda precision y exactitud, sino por la relación que tienen
con la fortuna del comerciante, por cuya razón se exige también que
anoten sus gastos domésticos. Pardessus, Cours de Droit comercial, tomo
1.° núm. 86. La práctica también está conforme con nuestra opinion:
D. Ramon Martí y Eixalá, lib. 2.°, cap. 5.°
con la extensión necesaria para que se conozca su carácter, circunstancias y resultado en contra ó en favor, sin omitir el asiento de los ingresos y gastos de su familia (*).

En el **Mayor ó de cuentas corrientes** las mismas partidas que en el diario, pero colocadas en la cuenta particular á que correspondan de las que cada comerciante ha de llevar en él, por **Debe** y **Ha de Haber** necesariamente, con el nombre de cada una de las personas, ó de los objetos á que se refieran, entre las que ha de existir una para sus gastos (1).*

Y en el **de Inventarios**, el del dinero y todos los demás bienes, derechos, acciones y deudas que tenía el comerciante cuando principió su tránsito, y los balances que todos deben formar al fin de cada año, firmados el uno y los otros por el mismo interesado, ó por los que lo sean, y se hallen presentes si pertenecen á algún establecimiento ó sociedad (2).**

(*) Antes de hacer los asientos en el libro diario, suelen los comerciantes anotarlos en un borrador ó cuaderno manual que no previene la ley, pero cuyo uso les proporciona grandes ventajas; porque sentadas en él las operaciones en el momento en que las ejecutan con la precipitación que á las veces exige la premura del tiempo y el mayor ó menor número de las que tienen que ejecutar, pueden luego en ratos más desahogados hacerlos en el libro diario con mas calma y detención, sin incurrir en los errores ó exactitudes á que podría dar lugar la confusión que puede haber lugar en una casa de comercio en que son muchos los negocios.

(1) **Arts. 34 y 35.**
Estos gastos deben asentarse en una sola partida, esto es, poniendo en el libro la cantidad que se ha tomado para este objeto sin necesidad de expresar en qué se ha empleado. La cuenta detallada y minuciosa de ellos no se lleva en este libro ni en el diario, sino en otro llamado de gastos generales que suelen tener también algunos comerciantes. El modo mas acostumbrado de llevar la contabilidad mercantil, es por **partida doble**. Indudablemente es el mas exacto, y el mas ventajoso también, porque ofrece un cuadro completo de cada operación, presentando el débito y el crédito en sus divisiones y lugares respectivos; pero su mecanismo exige mas explicaciones que las que podemos dar en una nota.

(2) **Arts. 36 y 37.**
**El art. 36 no habla de deudas, pero nos parece de necesidad esta**

**TOMO I.**
42. Las formalidades con que deben estar extendidos, son:
   1.ª Que todos los asientos se hagan por el órden progre-
        sivo de sus fechas.
   2.ª Que se hagan sucesivamente unos tras otros sin dejar
        blancos ni huecos en que puedan caber intercalaciones ni
        adiciones.
   3.ª Que no contengan raspaduras, intercalaciones ni en-
        miendas.
   4.ª Que las equivocaciones y omisiones que se cometen,
        se salven por medio de nuevos asientos hechos con la misma
        fecha en que se adviertan.
   5.ª Que no contenga ningun asiento tachado (1).
   6.ª Que estén escritos precisamente en idioma español y
        no en otro extranjero, ni en el dialecto particular de ninguna
        provincia (2).

43. De las formalidades relativas á su estado material y
    al modo de hacer los asientos, ninguno absolutamente está
    dispensado; y si le faltan, no producirán los efectos de que
    luego hablaremos. Mas por lo que hace á los asientos mismos,
    hay algunas excepciones fundadas en la cualidad de las per-
    sonas, y en la clase de comercio á que se dedican los que de-
    ben llevarlos. Por esta razón no están obligados los comerci-
    cientes al por menor á sentar todas sus ventas en el libro dia-
    rio, sino el producto de todas las hechas al contado cada día,
    en una sola partida, pasando al mayor ó de cuentas corrientes
    las que hagan al fiado; ni tampoco á formar balances anuales,
    sino solo cada tres años (3).

44. Lo que queda dicho de los comerciantes en particular
    debe también entenderse de las personas morales, ó sea de las
    asociaciones, las que están sujetas á las mismas obligaciones
    que los particulares, con dos diferencias: 1.ª que en el inven-

adicion, porque de otro modo no se podría saber el verdadero capital del
comerciante, que es el objeto de este libro, según allí mismo se expresa.

(1) Arts. 40 y 41.
(2) Art. 54.
(3) Arts. 58 y 59.
tario y balances solo tienen que incluir los bienes propios de
la masa social, y no los de cada sócio en particular, aun cuan-
do se hallen personalmente obligados al cumplimiento de las
obligaciones de la sociedad; y 2.ª que las que necesiten au-
torización del Gobierno y las de seguros de cualquiera clase,
deben tener un libro de actas además de los tres de la con-
tabilidad, con las mismas formalidades, y que todos podrán tal
vez tener precisión de llevar algunos otros más con arreglo
á sus estatutos (1).

45. Debido añadir que es indiferente que los asientos se
hagan por el mismo comerciante, sabiendo escribir, ó por al-
gun dependiente á quien los encargue; si bien en el caso de
que no sepa, es indispensable que dé poder á persona que fir-
me en su nombre y le lleve la contabilidad, y que de este po-
der se tome razón en el registro público del comercio, según
dejamos manifestado (núm. 50) (2).

46. Estos libros, aunque son una propiedad particular de
la persona que debe llevarlos, tienen también en cierto modo
el carácter de públicos; son algo parecidos á los protocolos
que llevan los escribanos, y producen también sus efectos le-
gales como estos.

Por ser considerados como de su propiedad, no se les pue-
de obligar á que los entreguen ni á que los lleven de un pun-
to á otro, ni decretar de oficio ni á instancia de parte, pes-
quisa ni reconocimiento general, sino únicamente su exhibi-
ción cuando sea precisa para prueba en algún pleito en que su
dueño tenga interés o responsabilidad; y aun en este caso no
podrán reconocerse ni compulsarse otros asientos mas que los
que hagan relación al asunto que se controvertía, y esto en

(1) Art. 37 del Código; 48, párrafo 9 del Real decreto, y 36 de la ins-
trucción de 1.º de octubre de 1851.

* Según el art. 6 del reglamento para delegados de 12 de diciembre
de 1857, las sociedades por acciones deben llevar otro libro mas todavía
para anotar la transferencia de estas, y otro para las actas de las juntas.

(2) Arts. 47 y 193.
presencia del mismo interesado, ó de la persona á quien comisione.

Solo se exceptúan de esta regla tres casos, que son: el de sucesión ó herencia, el de liquidación de compañía, y el de quiebra, en los que es absolutamente indispensable que sean reconocidos todos ellos por cuantos tengan participación en estos juicios (1).

47. Por la consideración de documentos públicos hacen prueba en juicio; pero no siempre ni en términos absolutos, sino cuando se hallan extendidos con las formalidades que quedan prescritas, y según las circunstancias que concurren en la persona de que se trate (2).

Contra su dueño la producen siempre tan irrefragable, que no se le admite otra en contrario, aunque la quiera presentar (")

Contra los extraños harán prueba entre comerciantes, siempre que el contrario no presente los suyos, llevados también

(1) Arts. 49, 50, 51 y 52.

Los comerciantes no pueden ser obligados á presentar sus libros, ni aun con el objeto de examinar si contienen los requisitos que prescriben las leyes ó instrucciones del papel sellado, á cuyo fin se halla previsto que las autoridades que lo rubriquen los provean de una certificación que acredite su presentación con el sello del año á que correspondan, y esta sea la que presenten cuando se le pida, incurriendo sino la presentan en una multa de 200 rs. Arts. 57 y 86 del Real decreto de 12 de setiembre de 1861.

(2) Art. 42 del Código, y 73 del Real decreto de 9 de agosto citado.

(") No se le admite otra prueba aunque la pretenda, porque el asientó del libro es una confesión que la ley tiene por ingénua y paladina, en atención á que estando hecho en la época en que se efectúa la operación á que se refiere, esto es, cuando el comerciante no puede saber si tal vez algún día le podrá convenir ó no variarlo, tiene á favor de su certeza y exactitud una poderosísima garantía. Sin embargo, aun pudiera suceder que al hacerlo hubiera intervenido fuerza ó miedo, ó que se hubiera pasado alguna equivocación que hasta entonces no se hubiese notado; y si ocurriera alguna de estas circunstancias ó otras semejantes, nos parece que no debería negarse la prueba de ellas, porque los asuntos mercantiles todos deben decidirse siempre, la verdad sabida y buena fe guardada,
con las mismas formalidades, en que conste otra cosa diversa, en cuyo caso, por estar en contradicción, no la harán ni unos ni otros, y habrá que atenerse á los demás medios de justificación admitidos en el derecho. Mas debe tenerse presente que no es lícito á ninguno aceptarlos en parte, ó con respecto á algunas partidas, é impugnar otras, sino que, una vez adoptado este medio de prueba, el que pidió su exhibición tiene que conformarse necesariamente con el resultado combinado de todos sus asientos (1).

48. Ultimamente, como se haría ilusoria la obligación de llevarlos si no se afianzara su cumplimiento de una manera eficaz, se ha procurado conseguirlo estableciendo penas contra los infractores.

Estas son diferentes según la trascendencia de la falta, y según que esta consista en que no se hayan llevado con las formalidades prevenidas, ó en que se haya omitido llevarlos.

En el primer caso, el comerciante que los tenga defectuosos está obligado, en primer lugar, á sujetarse al resultado de los de su adversario, sí los presenta formales, como ya se ha dicho. En segundo, incurrirá en una multa, que no podrá bajar de 4,000 reales, ni pasar de 20,000. Y en tercero, si á consecuencia del defecto resultase alguna falsedad, además de las penas indicadas, quedará sujeto á la formación de causa, y á la que le corresponda con arreglo al Código penal, á cuyo fin se remitirán las diligencias al Juzgado ordinario (2).

En el segundo caso, ésto es, en el de haber omitido llevarlos todos ó alguno de ellos, sufrirá una multa que no baje de 6,000 reales, ni pase de 50,000 por cada uno de los que le falten, y quedará también sujeto á lo que resulte de los de su adversario en la decisión de sus controversias.

La ocultación, en el caso de no presentarlos ó exhibirlos

(1) Art. 53.
(2) Art. 44.
cuando se le prevenga, se presume falta, y se castiga como si
no los tuviera (1).

Cuando la falta consista en llevarlos en otro idioma, la mul-
ta será de 1,000 á 6,000 reales, abonando los gastos de la
traducción de las partidas que haya que compulsar, y que-
dando además obligado á traducirlos todos en el término que
señale el Tribunal (2).

49. Antes de concluir esta materia es preciso indicar que
la obligación de tener y de conservar estos libros y demás pa-
lopeles del giro, dura no solo mientras el comerciante está dedi-
cado á su tráfico, sino también después de concluido hasta
que finalice la liquidación de todos sus negocios y dependen-
cias mercantiles, y que esta misma obligación incumbe tam-
bien á los herederos en el caso de haber fallecido (3).

SECCION CUARTA.

De la correspondencia.

50. Las obligaciones de los comerciantes, con respecto á
la correspondencia, pueden considerarse como el complemen-
to de las que se le imponen para llevar la contabilidad, y tie-
nen con ellas íntima relación, porque servirán en muchos
casos para enmendar y explicar los asientos de sus libros.

Están reducidas á conservar las cartas que reciban, y se
refieran á su tráfico, y á tener un libro, y copiar en él todas
cuantas ellos escriban y sean concernientes á sus asuntos
mercantiles (4).

(1) Arts. 42, 43 y 44.
(2) Art. 54.
(3) Art. 55.
(4) El Código francés en su art. 41 establece esta obligación solo por
40 años, y no por un tiempo indefinido como el nuestro. Parece conve-
niente que se conserven mientras no estén prescritas las acciones que
nazcan de los negocios que deben ser liquidados.
31. Con respecto a las que reciban, nada hay que advertir, sino que deben conservarlas en legajos, bien ordenados, anotando al dorso de cada una la fecha con que fué contestada, ó que no se dió contestación. Y aun cuando la ley les impone solo la obligación de conservar las cartas, es muy conveniente que guarden con ellas las facturas, letras de cambio y demás documentos que en cierto modo forman parte de su correspondencia.

32. En cuanto a la copia de las suyas, tienen que llenar otros requisitos, por cuya falta incurrirán en pena. Estos son:

1.° Que tengan el libro copiador encuadernado y foliado (1).

2.° Que se copien íntegramente, y á la letra, todas las cartas en el mismo idioma en que estén escritas las originales (2).

3.° Que se copien por el orden de sus fechas.

4.° Que no se dejen entre unas y otras, ni dentro de una misma, huecos en blanco, ni se hagan interlineaciones, ni enmiendas.

5.° Que si se cometieren erratas al copiarlas, se salven por una nota á continuación de la misma, ó de la última que se haya copiado cuando se adviertan, poniéndola precisamente no al márgen, sino dentro, y con la expresión necesaria para que se conozca cuál es á la que se refiere (3).

53. Las penas impuestas para castigar la falta ó la omi-

---

(1) Art. 57.
(2) Art. 59.
(3) Art. 58.

* Por Real orden de 27 de enero de 1865 se ha declarado que este libro no necesita el sello que prescribía el artículo 45 del Real decreto de 8 de agosto de 1851.

En la actualidad se usa también en el comercio el de prensa que facilita mucho esta operación, y sería de desear que pudiera sustituir al manuscrito adoptando las disposiciones convenientes para llenar ó suplir las formalidades que en este se exijen.
ción de este libro y la de sus asientos ó copias, son las mismas que se imponen por la falta y defectos de los libros de contabilidad: y así como estos no pueden ser reconocidos ni entregados, así tampoco puede ser obligado el comerciante á entregar el copiador sino solo á exhibirlo á instancia de parte legítima, para que se reconozca ó compulse la carta ó cartas copiadas que tengan relación con el asunto que se controvierta y se hayan designado antes, y á presentar en el juicio las originales concernientes al mismo. La compulsa deberá sacarse en la misma lengua en que está escrita, quedando á cargo del que la pida su traducción al idioma español (1).

(1) Arts. 60 y 61.

El Código no dice si por no conservar la correspondencia, según previene el art. 56, incurre ó no el comerciante en alguna pena; pero nosotros somos de parecer que incurre en las mismas que por las faltas de los libros de contabilidad, porque es igual la obligación, y son también las que se imponen por la del libro copiador en el art. 60.
54. Por poca extensión que tengan los negocios de un comerciante, es muchas veces imposible que pueda por sí mismo practicar todas sus operaciones. Constituido mediador entre los que producen y los que consumen, perdería un tiempo muy precioso y la ocasión de hacer muchas operaciones en buscar a unos y a otros; no siempre podría estar en todos los puntos en que fuera precisa su asistencia; dejaría de vender mientras se ocupaba en comprar, y en muchas ocasiones le sería imposible llevar sus efectos al punto en que debieran ser consumidos. La división del trabajo, por otra parte, produce las inmensas ventajas que la economía política ha enseñado a apreciar, y estas dos circunstancias, a saber, la necesidad y la utilidad, han hecho conocer la conveniencia de fiar a otros la práctica de ciertas operaciones, cuya ejecución embarazaría mucho la actividad y celeridad que exigen las negociaciones comerciales, y son por consiguiente a las que se debe la creación de los agentes auxiliares, como hemos indicado en las nociones preliminares.
55. Los hay de diferentes clases según los negocios en que auxilian, facilitándolos, y pueden dividirse como el comercio en auxiliares del terrestre y del marítimo. De los auxiliares de este último, en lo que son diferentes de los que auxilian el comercio en general, hablaremos en su lugar respectivo. Ahora vamos a ocuparnos de los del primero, que son los que conocemos con los nombres de factores, mancebos, comisionistas, corredores y porteadores (1).

(1) Art. 62.

* Enumeramos entre los agentes auxiliares a los comisionistas y porteadores, porque el Código les da esta denominación y trata de ellos en este lugar; por cuya causa también nosotros los daremos a conocer aquí, suspendiendo hablar de sus obligaciones y derechos para cuando nos ocupemos de los contratos, que nos parece la ocasión más oportuna; porque á nuestro juicio, el verdadero auxiliar no es la persona, sino la ocupación ó tráfico que ejerce; y hay mucha diferencia entre un factor ó un mancebo que presta á un comerciante un servicio personal por mas ó menos tiempo, mediante una retribución estipulada en contrato, que aunque protegido por la ley mercantil en cuanto lo exigen los intereses del comercio, es civil en su esencia y en su forma, y un comisionista que comercia sirviendo á cuantos le ocupan, celebrando con ellos un mandato mercantil, y empleando en su auxilio hasta su crédito y su responsabilidad; y la hay mucho mayor todavía entre un corredor, que no celebra ningun contrato por su cuenta con ninguno de los que se valen de su intervención, y un conductor, cuya ocupación consiste en trasladar mercancías, celebrando con sus dueños un convenio para el que establece reglas la Ley mercantil, por razón del objeto sobre que recae.
CAPITULO PRIMERO.

DE LOS FACTORES Y MANCEBOS.

56. Los factores son, entre todos, los agentes auxiliares mas directos del comercio, como que su única ocupacion es comerciar, diferenciándose solo de los comerciantes en que lo hacen en nombre ajeno. Los mancebos también auxilian el comercio de una manera tan inmediata como eficaz, aunque sus operaciones generalmente son ya de otra índole y mas mecánicas. Sin embargo, hay muchos puntos de contacto entre unos y otros; tienen derechos, atribuciones, obligaciones y prohibiciones comunes, y por eso los comprendemos en un solo tratado, que dividiremos para mayor claridad en tres secciones, hablando en la primera de los factores, en la segunda de los mancebos, y en la tercera de las cosas comunes á unos y á otros.

SECCION PRIMERA.

De los factores.

57. Factor es la persona encargada de dirigir, por cuenta ajena, algun establecimiento mercantil ó fabril. También se le suele llamar gerente.

El principal puede ser una persona privada, ó una asociación ó persona jurídica, y para nada influye que desempeñe su encargo en la poblacion en que este resida ó en otra diferente (*).

(*) De este auxiliar del comercio hacen mención especial las leyes Romanas en los títulos de institoria actione del Dig. y del Cod. El empleo ó encargo del factor se llama factoría, y este mismo nombre tiene el establecimiento ó dependencia cuya dirección le está encargada.

La cuenta que dá á su principal del coste ó gasto de los efectos que
55. Los hay de diferentes clases según los negocios en que auxilian, facilitándolos, y pueden dividirse como el comercio en auxiliares del terrestre y del marítimo. De los auxiliares de este último, en lo que son diferentes de los que auxilian el comercio en general, hablaremos en su lugar respectivo. Ahora vamos a ocuparnos de los del primero, que son los que conocemos con los nombres de factores, mancebos, comisionistas, corredores y porteadores (1).

(1) Art. 62.
* Enumeramos entre los agentes auxiliares a los comisionistas y porteadores, porque el Código les da esta denominación y trata de ellos en este lugar; por cuya causa también nosotros los daremos a conocer aquí, suspendiendo hablar de sus obligaciones y derechos para cuando nos ocupemos de los contratos, que nos parece la ocasión más oportuna; porque á nuestro juicio, el verdadero auxiliar no es la persona, sino la ocupación ó tráfico que ejerce; y hay mucha diferencia entre un factor ó un mancebo que presta á un comerciante un servicio personal por más ó menos tiempo, mediante una retribución estipulada en contrato, que aunque protegido por la ley mercantil en cuanto lo exigen los intereses del comercio, es civil en su esencia y en su forma, y un comisionista que comercia sirviendo á cuantos le ocupan, celebrando con ellos un mandato mercantil, y empleando en su auxilio hasta su crédito y su responsabilidad; y la hay mucho mayor todavía entre un corredor, que no celebra ningún contrato por su cuenta con ninguno de los que se valen de su intervención, y un conductor, cuya ocupación consiste en trasladar mercancías, celebrando con sus dueños un convenio para el que establece reglas la Ley mercantil, por razón del objeto sobre que recae.
CAPITULO PRIMERO.

DE LOS FACTORES Y MANCEBOS.

56. Los factores son, entre todos, los agentes auxiliares más directos del comercio, como que su única ocupación es comerciar, diferenciándose solo de los comerciantes en que lo hacen en nombre ajeno. Los mancebos también auxilian el comercio de una manera tan inmediata como eficaz, aunque sus operaciones generalmente son ya de otra índole y más mecánicas. Sin embargo, hay muchos puntos de contacto entre unos y otros; tienen derechos, atribuciones, obligaciones y prohibiciones comunes, y por eso los comprendemos en un solo tratado, que dividiremos para mayor claridad en tres secciones, hablando en la primera de los factores, en la segunda de los mancebos, y en la tercera de las cosas comunes á unos y á otros.

SECCION PRIMERA.

De los factores.

57. Factor es la persona encargada de dirigir, por cuenta ajena, algun establecimiento mercantil ó fabril. También se le suele llamar gerente.

El principal puede ser una persona privada, ó una asociación ó persona jurídica, y para nada influye que desempeñe su encargo en la población en que este resida ó en otra diferente (*).

(*) De este auxiliar del comercio hacen mención especial las leyes Romanas en los títulos de instritória actione del Dig. y del Cod. El empleo ó encargo del factor se llama factoría, y este mismo nombre tiene el establecimiento ó dependencia cuya dirección le está encargada.

La cuenta que dá á su principal del coste ó gasto de los efectos que
58. Entre el factor y su principal media una locacion de obras y un mandato civil; esto es, un contrato en que conviene en el servicio que ha de prestar y la recompensa que ha de recibir por su trabajo, ora consista en un salario fijo, ora lleva parte en la ganancia, celebrando un pacto aleatorio, porque esto no le hace cambiar de concepto, ni convierte el mandato en sociedad, y en el que establecen los demás pactos y condiciones que juzgan oportunas.

Para celebrar este contrato se necesita aptitud legal de parte de los contrayentes. Por lo mismo, cuando el factor no la tenga por falta de edad ó por ser hijo de familia, deberá intervenir en él su padre ó su curador; y una vez perfecto, produce como todos, derechos y obligaciones recíprocas entre los que lo celebran.

Como con respecto al mandante todas están reducidas á sufrir las consecuencias de las operaciones que ejecute el factor, y si alguna otra mas tiene, puede considerarse como consecuencia de las que conciernen á este último, nos ocuparemos solo de los factores, examinando quiénes pueden serlo, con qué formalidades deben ser autorizados, y cuáles son los derechos y obligaciones propias de estos; dejando para despues las que le son comunes con los mancebos, y los modos de finalizar su encargo, que también son unos mismos para todos.

59. Pueden ser factores todos los que tienen capacidad legal para representar á otros, y obligarse por ellos según las leyes civiles, y por consiguiente todos los que han cumplido 17 años (1).

compra ó remite, se llama factura; pero ya se dá también este nombre generalmente á toda cuenta detallada que contiene la expresión de los géneros, efectos ó monedas que se entregan.

(1) Arts. 173, y Ley 19, tit. XV, Partida 3.a

* Las leyes civiles no exigen la misma edad para poderse obligar válidamente una persona á sí misma, que para obligarse en nombre de otro, esto es, representándole, ó por su mandato; porque en este segundo caso, la confianza que merece á la persona que se lo dá, suple la falta de dis-
60. Para desempeñar su factoría necesita indispensablemente estar autorizado por medio de un poder especial, otorgado en escritura pública, del que se tome razón en el registro público del comercio de la provincia en que haya de desempeñarla (núm. 50) (1).

Este poder podrá muy bien contener el contrato celebrado entre los dos, si se otorga al mismo tiempo de celebrarlo, aunque no hay una necesidad. Mas lo que sí se ha de expresar con precisión, es el objeto con que se le da, y por consiguiente el establecimiento que ha de dirigir, ó las negociaciones en que se ha de ocupar; y cómo sería absurdo suponer que se le da sin la extensión suficiente para conseguir el objeto con que se otorga, aun cuando solo esté concebido en términos generales, tiene a su favor la presunción de hallarse autorizado en virtud de él para todos los actos que exija la dirección de su establecimiento; por lo que, cuando su principal quiera ponerle alguna limitación, deberá expresarlo terminantemente (2).

61. Todos los contratos que celebre el factor así autorizado, se entienden hechos por cuenta de su principal, á quien obliga, aun cuando no diga que obra en nombre de este, con tal que recaigan sobre los objetos comprendidos en el giro y tráfico de su establecimiento, y que este pertenezca notoriamente á persona ó sociedad conocida (3). Pero el factor tiene cernimiento que la ley supone en el menor para conocer las resultas del acto obligatorio; no es él tampoco el que debe sufrir sus consecuencias, y ni aun le incumbe en muchas ocasiones el deber de examinarlas. Por esta razón exige los 23 años para obligarse á sí mismo, y solo 17 para obligarse en nombre ajeno; por lo mismo es necesario la intervención de su padre ó curador en el contrato que celebra el factor con su principal, para que sea válido, y no se necesita después la intervención de nadie para que lo sean los que celebra en nombre de su principal como director de su establecimiento.

(1) Art. 174.
(2) Art. 175.
(3) Art. 178. Recurso de casación de 2 de diciembre de 1859, y de injusticia notoria de 16 de octubre de 1861.
á la vez la obligación de llevar los mismos libros de contabilidad que los comerciantes, y los demás que deba tener su establecimiento con las mismas formalidades, y bajo las mismas penas (1).

SECCION SEGUNDA.

De los mancebos.

62. El mancebo es el dependiente que tiene el comerciante á su lado, para que bajo su dirección inmediata le ayude en las operaciones de su tráfico.

Para serlo no se necesita ninguna cualidad, por consiguiente hasta los menores de 17 años se consideran capaces de desempeñar este encargo.

63. Entre estos auxiliares y su principal median también pactos y convenciones, en que establecen el tiempo que ha de durar su servicio, el salario que han de ganar, y las demás condiciones que tienen por conveniente estipular; por lo que, cuando los mancebos carezcan de la aptitud legal necesaria para obligarse á sí mismos, según el derecho civil, será preciso que estos convenios se celebren con sus padres ó curadores.

64. Los mancebos, por regla general, no tienen facultad para contratar y obligar á sus principales, sino que sus atribuciones se limitan á entregar y recibir géneros de su orden, por su cuenta, y de la manera que les indiquen, y á otras ocupaciones semejantes, incluso la de hacer los asientos en sus libros. Sin embargo, bien podrán encargarles parte de la administración de su comercio, ó algunas operaciones de su tráfico, autorizándolos como les parezca, en cuyo caso podrán hacer todo aquello para que se les haya autorizado (2).

Esta autorización podrá ser expresa ó tácita. La expresa se concede al mayor de 17 años en un poder especial, ó por

(1) Art. 186.
(2) Arts. 188, 189, 193 y 194.
cartas circulares; y la tácita, por medio de hechos que la dan á conocer. El autorizado por medio de un poder podrá hacer solo lo que en él se exprese, sin que se le suponga nunca ha-
bilitado para ninguna otra cosa más, porque con respecto á este no milita la razón que con respecto al factor, que dirige
un establecimiento. Pero sí será indispensable que se tome
razón de este documento en el registro público del comercio.

El que lo esté por cartas circulares podrá también hacer
todo lo que estas expresen, y serán válidos los contratos que
celebre en su virtud con las personas á quienes se hayan diri-
gido, incluso los que se perfeccionen por cartas, si la circular
expresa que se halla autorizado para firmar la corresponden-
cia. Esta doctrina tiene á nuestro juicio dos limitaciones: una,
la firma y giro de las letras de cambio y demás documentos
endosables; y otra, la recaudación y recibo de caudales en
general, ó que no provengan de los negocios que él mismo
haya hecho, para lo que no basta una carta circular, sino que
se necesita un poder especial (1).

(1) Arts. 189 y 190.

* Estas excepciones están fundadas en el sentido en que, á nuestro
juicio, deben tomarse las disposiciones de los artículos 189 y 190 del Có-
digo, los que según los términos en que están redactados, envolverían
de otro modo una contradicción; estableciéndose en el primero como
cualidad absoluta y necesaria el poder para firmar documentos que pro-
duzcan obligación y acción, y previniéndose en el segundo que basta
una carta circular para que el dependiente se tenga por autorizado para
celebrar válidamente todos los contratos relativos á la parte de admi-
nistración ó ramo de comercio á que se refiera la circular misma, inclu-
sos los que se contraigan por medio de la correspondencia, si por dicha
circular está el dependiente autorizado para firmarla.

Con arreglo á este último, pueden, pues, los dependientes tratar y
negociar, y por consiguiente obligar á sus principales, cuando estos los
han autorizado por circulares; y como los asuntos mercantiles no
pueden ser tratados por regla general sino por escrito, según se previe-
ne en el art. 235, claro está que han de poder firmarlos si la autoriza-
ción ha de producir algún efecto: y si los firman, y con su firma son
válidos, preciso es convenir también en que no es de necesidad el poder
especial concedido en escritura pública para celebrar cualquier opera-
65. La autorización tácita se infiere de tal manera de los hechos que la dan a conocer, que puede considerarse como una consecuencia necesaria de ellos. La tienen los que en las tiendas y almacenes abiertos al público desempeñan el encargo de vender al por menor; a los que, en el mero hecho de ponerlos allí sus dueños, se supone que los autorizan, no solo para esto, sino para cobrar el producto de las ventas y dar sus correspondientes recibos. En el mismo caso se hallan los que lo hacen al por mayor, cuando los cobros se verifican en el acto y dentro del mismo almacén; pero no si las ventas se hiciesen al fiado, y la cobranza se realiza fuera, pues entonces, como cesa la razón de la presunción, es ya preciso que

ción que haya de producir obligación y acción, como se dice en el 189. No desconocemos que se podrían conciliar, diciendo que el poder es necesario para los contratos escritos, autorizando solo la circular la celebración de los que no pasen de 1,000 so. ó de 3,000, estando en alguna feria, que son los que por vía de excepción permite celebrar de palabra el art. 237; pero esta inteligencia nos parece opuesta al espíritu de la ley y al objeto de la autorización, que quedaría reducida a un número de operaciones tan insignificante que la haría casi ilusoria, y al contexto literal de la segunda parte del art. 190, en la que expresamente se dice, que son válidos los contratos celebrados por correspondencia epistolar firmada por el mancebo autorizado por circulares, sin hacer ninguna distinción. En esta disposición se ve, pues, que las circulares autorizan para celebrar negocios que produzcan obligación y acción; y esta circunstancia unida a que en la primera parte del artículo 189 se propusieron sus redactores, 'según se infiere de la aclaración que contiene la segunda, hablar solo del giro, ó sea de las letras de cambio, y documentos de cargo ó descargo, sobre las operaciones de sus principales, son las que nos han movido a formar la opinión que dejamos sentada, y á establecer como excepciones la firma y giro de los documentos endosables y el recibo de caudales: porque en estos concurre además la razón poderosísima de poder venir á parar á manos de una infinidad de personas del comercio y fuera de él, á las que no era posible pasar circulares, aunque se quisiera, y necesitaran por lo mismo estar firmados por persona cuya autorización conste en un documento público, registrado y publicado en la secretaría del tribunal ó juzgado respectivo, para que lo sepan todos, y los que lo ignoren puedan, si les conviene, cerciorarse acercándose á dicha secretaría.
los recibos estén firmados por el principal, ó por otro con poder suyo, para que se tenga el pago por legítimo (1).

66. Los mancebos autorizados por cualquiera de estos medios para contratar, se encuentran en el mismo caso que los factores, no existiendo entre unos y otros mas diferencia que la mayor ó menor extension de sus atribuciones, según los objetos sobre que recaiga el poder, la autorización ó el encargo que se les haya dado; por consiguiente, hay entre ellos deberes y atribuciones comunes, que es de lo que ahora nos vamos á ocupar.

SECCION TERCERA.

De las cosas comunes á los factores y mancebos.

67. Son comunes á factores y mancebos los derechos y atribuciones que les corresponden como consecuencia de su autorización, las obligaciones y prohibiciones con que se encuentran ligados para impedir los abusos que pudieran cometer en perjuicio de sus principales, la responsabilidad y penas con que se afianza su cumplimiento, y el modo de finalizar sus encargos.

68. Tienen derecho los factores y mancebos.

1.° A percibir el salario que devenguen; el que les deberá ser pagado, aun cuando por algún accidente inculpable no puedan prestar el servicio convenido, siempre que la inhabilitación no dure más que tres meses, ó que no haya pacto en contrario (2).

(1) Art. 192.
(2) Art. 201.

Esto debe entenderse cuando el principal paga por meses ó por años, y no por días ó jornales, pues en este caso ya no puede ser aplicable esta disposición, ni deberá percibir mas que los que correspondan á los días que haya servido. V. y Caravantes, art. 201.

La acción para reclamar estos salarios debe prescribir á los tres años.

TOMO I.
2.° A ser indemnizados de los gastos que hayan hecho y de las pérdidas que sufran por efecto inmediato del servicio que presten, aun cuando no lo hayan estipulado (1).

69. Son atribuciones de unos y otros.

4.° La de tratar y negociar en todo lo que concierne á la dirección del establecimiento, ó al encargo que se les haya conferido.

Y 2.° La de sujetar á sus principales al cumplimiento de las obligaciones que contraigan con este motivo, sin quedar ellos obligados, y sin que el principal pueda dejar de cumplirlas, mientras hayan obrado con arreglo al poder ó á la autorización concedida, aunque alegue y justifique que se excedieron en sus instrucciones, que dispusieron en provecho propio del resultado de las negociaciones, ó que abusaron de su confianza (2).

70. Son sus obligaciones:

1.° Desempeñar por sí mismos sus encargos con el mayor cuidado y exactitud, porque se busca su probidad y capacidad, y no delegarlos en otras personas sino cuando obtengan el permiso de sus principales (3).

2.° Tratar siempre en nombre de estos, expresándolo así en la antefirma, porque negocien con su crédito (4).

3.° Atemperarse á las instrucciones que de ellos reciban, porque nunca pierden el concepto de dependientes.

4.° Observar las leyes fiscales de la Hacienda y los reglamentos de la administración pública; porque estos obligan siempre á todos, y no deben infringirlos aunque no les hayan mandado expresamente que los guarden (5).

contados desde que sean despedidos, que es lo establecido por regla general para todos los sirvientes, en la ley 10, tit. XI, lib. 10 de la Nov. Recop.

(2) Arts. 177, 178 y 192.
(3) Art. 195.
(4) Arts. 176 y 191.
(5) Arts. 183 y 200.
Tienen además la prohibición de tráfico por su cuenta, y de tomar interés en su nombre ni en el ajeno, sin licencia de sus principales, en negociaciones del mismo género que las que hacen por cuenta de aquellos, para que no abusen en provecho propio de su confianza y de su crédito (1).

74. La responsabilidad y penas en que incurren por esta falta son:

1.° Responder directamente de las gestiones y obligaciones de sus sustitutos, si delegan sin la anuencia de sus principales (2).

2.° La de responder en los mismos términos cuando no lo hagan en nombre de estos, sino en el suyo propio, aunque en este caso deben quedarse obligados aquellos, concurriendo alguna de estas circunstancias: 1.° cuando se trate de un factor tenido notoriamente por tal, y de negocios comprendidos en el giro y tráfico del establecimiento que dirige: 2.° aun cuando sean diversos, si el factor ó el manco tuvieron orden de su principal para ejecutarlos: 3.° aunque no la hayan tenido, si después de hechos los apruecha en términos expresos ó por actos que induzcan esta presunción; y 4.° cuando redonde en provecho del principal el resultado de la negociación (3). En todos estos casos podrá el acreedor dirigir su reclamación contra el factor ó manco, ó contra su principal, como mejor le convenga; pero no contra ambos.

(1) Art. 180.

El Código no impone expresamente á los mancobos la prohibición de negociar, sino sólo á los factores, porque al enumerar en el art. 191 las disposiciones que son aplicables á unos y otros, no hace mérito del 180, que es el en que se impone á los factores la prohibición de hacer ni tomar parte en negocios del mismo género que los que está encargado de ejecutar por cuenta de su principal; pero sin duda fué un olvido ó un error de imprenta la omisión de este artículo, porque sobre concurrir en unos y otros del mismo modo la razón de la prohibición, se infiere también de la manera más terminante del párrafo 5.° del 199, en el que se autoriza al principal para despedirlos si la infringi.

(2) Art. 195.

(3) Arts. 178, 179, 181 y 182.
3.° La de abonar los daños y perjuicios que les irroguen, por no atemperarse a sus instrucciones, por proceder con malicia o negligencia culpable, ó por no guardar las leyes y reglamentos de la administración pública (1). En estos casos se cobrarán las multas de los bienes que administren, quedando ellos con la obligación de indemnizar a sus principales.

Y 4.° La de responder de las pérdidas, cediendo a favor de sus principales los beneficios que resulten de las negociaciones que hagan ó en que tomen parte, estando prohibidas (2).

72. Últimamente, los modos de finalizar estos encargos, son:

1.° La muerte del factor ó del mancebo, pero no la de su principal.

2.° La inhabilitación absoluta de los mismos (3).

3.° La conclusión del tiempo por que fueron contratados.

4.° La enajenación del establecimiento.

Y 5.° La revocación de los poderes con respecto a los factores, y la despedida con respecto a los mancebos (5).

En cuanto a estos dos últimos medios, es preciso advertir: 4.° que ni la revocación ni la despedida surten efecto hasta que han llegado á noticia de los interesados por un medio legítimo; y por consiguiente, que hasta que esto se verifique son válidos todos sus actos, y deben responder de ellos sus principales, aun cuando hayan sido hechas las negociaciones después de la fecha de la revocación ó de la enajenación (4)**.

(1) Arts. 183 y 200.
(2) Art. 180.
(*) No hallamos establecida en el Código la inhabilitación absoluta como modo de finalizar el encargo del mancebo ó del factor, pero la tenemos por indispensable, porque si se inhabilita, claro está que no puede prestar el servicio que prometió en su contrato, y fue objeto de su celebración.
(3) Arts. 184 y 197.
(4) Art. 185.

** Debe tenerse por medio legítimo para factores y mancebos, no solo la notificación en forma, sino también el aviso del principal por cartas, porque la correspondencia es en el comercio uno de los medios de con-
Y 2.° que aunque estos cargos son de pura confianza, y faltando esta no pueden surtir los efectos que se apetecen, por cuya razón, ni el principal puede obligar a los factores y mancebos a que continúen prestándole sus servicios, ni estos a sus principales a que los tengan en sus factorías, almacenes ó tiendas, sin embargo, no es lícito ni á unos ni á otros rescindir arbitrariamente los contratos que tengan término señalado, sino cuando intervenga alguna justa causa; que lo son, con respecto a los factores y mancebos: 1.° todo acto de fraude ó abuso de confianza en las gestiones que le estén encomendadas; 2.° el hacer alguna negociación de las que les estén prohibidas. Y con respecto a los mismos y a sus principales, todo acto injurioso ó ofensivo, que á juicio del tribunal afecte la persona, el honor ó los intereses de cualquiera de ellos.

No interviniendo estas causas, no pueden ni ser despedidos, ni despedirse, sino con la obligación de indemnizar á la otra parte de los perjuicios que se le sigan (1).

En los contratos en que no esté prefiijado tiempo para su duración, unos y otros pueden despedirse y revocar los poderes, avisándose con un mes de anticipación; y ni aun por este mes podrá ser obligado el comerciante, si no quiere, á conservar en su destino al mancebo ni al factor, sino á pagarles una mesada (2).

traer y distraer obligaciones, y porque en uno y en otro caso media la misma razón, esto es, la certeza y seguridad de la revocación ó enajenación, y no simples noticias. Con respecto á los extraños, parece necesario se registre y publique el documento en que se consigne, como se registró y publicó el poder.

(1) Arts. 497, 498 y 499.
(2) Art. 196.
CAPÍTULO II.

DE LOS COMISIONISTAS.

73. El segundo auxiliar del comercio es el comisionista, especie de factor, que se introdujo, según la opinión de algunos autores, cuando la extensión de los negocios mercantiles y la confianza mútua entre los comerciantes, hizo conocer la dificultad de mandar un dependiente con las mercancías que se habían de expender en otro punto que en el que residía el principal, y la economía que resultaba de encargar esta operación y la adquisición de otras á un corresponsal u otra persona residente en aquel punto, que por su posición y conocimientos podía hacerlo mejor acaso, mediante una corta retribución (*).

El comisionista es, pues, la persona que ejerce actos de comercio, de orden y por cuenta ajena. Pueden serlo todos los que tengan la actitud legal necesaria para comerciar por sí mismos, incluso las sociedades (1).

74. El comisionista conviene con el factor en que ambos comercian por cuenta ajena, á consecuencia de un mandato, y tienen obligación de llevar libros de contabilidad (**) ; pero se diferencian en puntos muy esenciales, que son, entre otros:

(*) Los comisionistas se suelen calificar de diferente modo, según la clase de comisiones que desempeñan con más frecuencia. Los que se dedican á la de comprar ó vender, se llaman de «compra-venta.» Los que reciben ó conservan géneros para devolverlos á entregar ó remitirlos á otros puntos, «de depósito y de transporte,» y de «banca ó cambio,» el que recíprocamente hace el giro con el negociante de otra plaza, ó recibe las tratas de su comitente y las retiene ó remite á su disposición.—D. Damian Sogrado, Elementos de derecho mercantil, cap. 1.

(1) Art. 116.

(**) El Código no previene expresamente que el comisionista deba llevar libros más que cuando lo sea de transportes, en cuyo caso, dice el artículo 233, debe llevar uno más que los que tenga como comerciante,
1.° En que el factor comercia en nombre de su principal, con el crédito de este y obligándole, y el comisionista puede negociar en su nombre propio, con su crédito particular, y obligándose á sí mismo.

2.° En que el factor se entiende habilitado en virtud de su poder para todos los negocios que conciernen al establecimiento que dirige, y el comisionista necesita un encargo especial para cada asunto.

3.° En el modo de ser habilitados, ó lo que es lo mismo, en que el factor necesita indispensablemente que se le autorice por medio de un documento público, y el comisionista basta que reciba el encargo en un escrito privado, por carta, y aun de palabra, con tal que luego se ratifique por escrito antes de su conclusión.

Y 4.° En fin, en la aptitud de las personas que lo pueden ser; esto es, en que para ser factor no se necesita ni aun siquiera capacidad para obligarse á sí mismo, con tal que la tenga para obligarse por otro; y no penden ser comisionistas sino los que se hallen legalmente habilitados para comerciar.

75. Estas circunstancias, unidas á que la ley supone que han de tener libros de contabilidad, y les impone otras obligaciones, que no solo tienen por fundamento la equidad natural, sino el interés general del comercio, como por ejemplo, la de contestar en el correo inmediato, y practicar las diligencias oportunas para la conservación de los efectos que se les remitan, aun cuando no quieran aceptar la comisión que se les encargue por medio de la correspondencia, nos obligan á considerar al comisionista, no como un agente auxiliar del comercio, como le considera el Código y otros autores, sino como un verdadero comerciante que trafica de este modo, aunque no haga negocios por su cuenta.

Por esta razón, y por la de que entre el comisionista y el para anotar los efectos, de cuya conducción se encarga; pero no solo en este artículo se dá por supuesta esta obligación, sino también en el 140, 165 y 167.
comitente media un verdadero mandato mercantil, con sus efectos peculiares y distintos del mandato civil, que es el que media solamente entre el factor y su principal, tenemos por mas oportuno tratar de los comisionistas cuando nos ocupemos de los contratos mercantiles, limitándonos por ahora á hacer estas indicaciones, para dar á conocer lo que son, considerados como agentes auxiliares.
CAPITULO III.

DE LOS CORREDORES.

76. Corredor es la persona legalmente autorizada para intervenir en las negociaciones de los comerciantes.

Su oficio es el de meditador entre estos, y su ocupación principal intervenir en sus contratos.

Esta intervención, sin embargo, no es absolutamente necesaria, porque pueden muy bien aquellos tratar por sí solos ó por medio de sus dependientes, y aun ser mediadores por amistad entre sus compañeros (1).

77. El oficio de corredor es viril y público, por cuya razón no pueden ejercerlo las mujeres, ni todos los varones que quieran; y los que lo son, necesitan estar revestidos de otras cualidades que los comerciantes, y atenerse á las ordenanzas que arreglen su ejercicio (2).

78. Los hay de dos clases, ordinarios y especiales.

Los ordinarios son: los que pueden intervenir en todas las negociaciones, menos en las concernientes á la Bolsa y al fletamento, y otras diligencias relativas á los buques; y especiales, los que intervienen respectivamente en las negociaciones prohibidas á los ordinarios, y son conocidos con los nombres de agentes de Bolsa é intérpretes de navio.

Los primeros no existen mas que donde hay Bolsa legalmente autorizada; intervienen exclusivamente en los negocios relativos á efectos públicos, y en concurrencia con los ordinarios en los contratos sobre letras de cambio y cualquiera otra especie de valores comunes en el comercio, en la venta de metales preciosos, cuando se hacen estos contratos en la Bolsa misma (*):

(1) Art. 66.

(2) Art. 63.

(*) Véase el origen de las Bolsas, los negocios que se hacen en ella, y los agentes que los intervienen en los contratos especiales del comercio.
Los intérpretes de navío son auxiliares exclusivos del comercio marítimo, y no podemos tratar de ellos en este lugar.

79. Con respecto á los ordinarios, hay que tener en consideracion: 1.° su aptitud legal: 2.° sus atribuciones, derechos, obligaciones y actos que les están prohibidos; y 3.° las penas en que incurren por sus faltas.

SECCION PRIMERA.

De la aptitud legal para ejercer el oficio de corredor.

80. La aptitud legal comprende las cualidades que deben concurrir en la persona, su nombramiento, su exámen, su juramento y fianza.

Las cualidades de la persona, son:

1.° Ser varón mayor de 25 años, nacido en los dominios de España, ó naturalizado con arreglo á las leyes, y estar domiciliado en ellos.

2.° Haber obtenido el título de profesores ó peritos mercantiles, previos los estudios que se exijan para estas carreras, ó llevar seis años de aprendizaje con otro corredor en plaza donde haya Tribunal de Comercio, ó al lado de un comerciante matriculado, debiendo ser preferidos los profesores que lleven dos años de práctica posteriores á sus títulos, y los peritos que lleven cuatro; advirtiendo que esta preferencia no tiene lugar respecto á los que hayan sido antes corredores con nombramiento Real por mayor tiempo que el que acredite el perito ó profesor, ó justifique un período de ejercicio en el comercio mas largo que uno y otro, siempre que pase de 10 y 12 años respectivamente (1).

Y 3.° No tener prohibicion para ejercer este oficio, ni por incompatibilidad de estado, ni por tacha legal.

La tienen por incompatibilidad de estado los eclesiásticos,

(1) Art. 75 del Código, y 6 del Real decreto de 8 setiembre de 1850, y Real órden de 6 de mayo de 1862.
los militares en activo servicio, y todos los funcionarios públicos y empleados de Real nombramiento. Y por tacha legal, los comerciantes quebrados que no hayan obtenido rehabilitación, y los que hayan sido antes corredores y fueren destituidos de sus oficios (1).

Aunque una vez dicho los que lo pueden ser, no hay necesidad de expresar los que no deben ser nombrados, añadiremos para mayor claridad que, según las reglas que dejamos sentadas, no pueden serlo, además de los que quedan enumerados, los extranjeros que no hayan obtenido naturalización, los menores de 25 años, aun cuando hayan sido emancipados, ni los mayores de 25 que estén bajo la patria potestad (2).

81. El nombramiento de los corredores compete á S. M., á propuesta en terna del Gobernador civil de la provincia (2).

No pueden ser nombrados todos los que lo soliciten, sino únicamente el número fijo que corresponda á la dotación de cada plaza, y cuando haya vacante (3).

Los que lo pretendan deben acudir al Gobernador civil con los documentos que acrediten su idoneidad; y éste, previa audiencia del Tribunal de Comercio y el informe de la Junta

(1) Art. 76.
(2) El Código no habla de los mayores de 25 años que no hayan sido emancipados; pero como el hijo constituido en la patria potestad está exento de servir cargos públicos por regla general, y no puede obligarse, tampoco parece que debe considerársele como idóneo para servir una correundía, aunque el padre lo consintiera y prestara por él la fianza. El único medio de habilitarle sería la emancipación. Tampoco habla del casado, mayor de 20 años, que según hemos dicho antes, tiene la aptitud necesaria para comerciar; pero como el oficio de corredor es público, se exigen para su desempeño otras garantías diferentes de las cualidades que deben reunir las personas que se dediquen al comercio; y siendo una de ellas la edad de los 25 años, ninguna que no los tenga podrá servirlo. Además, de que el beneficio de salir de la patria potestad por casarse, concedido á los hijos de familia, no es otra cosa que una emancipación legal, y el emancipado, menor de 25 años, se halla expresamente excluido en el núm. 2 del art. 76.
(3) Art. 70.
de gobierno del colegio de Corredores, donde la haya, arreglará la terna que debe elevar al Gobierno (1).

Los que sean propietarios de corredurías enajenadas (*), podrán servirlas por sí mismos, teniendo las cualidades necesarias, ó arrendarlas á otro que las tenga; pero precisamente por la vida del arrendatario, y solo cuando en el título de su adquisición se le haya concedido esta facultad (2).

82. Tanto estos como los agraciados por S. M. en virtud de la propuesta, necesitan sacar su correspondiente título en cada vacante (3).

Este título se expide por el Gobierno; pero no habilita al agraciado para ejercer el oficio hasta que haya prestado su juramento y fianza.

83. El examen se hace por la Junta de gobierno del colegio á que corresponda su plaza; y donde no lo haya, por tres corredores que nombre el Gobernador civil, con una persona que los presida. Las preguntas recaerán sobre las nociones generales del comercio, y especialmente sobre las que se refieran á las operaciones más frecuentes en aquella plaza (4).

84. Con la certificación de su examen y aprobacion, se presentará á prestar su juramento ante dicha autoridad, y lo hará prometiendo ejercer bien y fielmente su oficio, y cumplir con exactitud y puntualidad las obligaciones que le conciernen: así se expresará á continuación de su título (5).

85. La fianza se realiza poniendo la cantidad designada

---

(1) Arts. 71 y 77.

(*) Algunas plazas de corredor han sido vendidas en propiedad por el Estado, ó cedidas á personas determinadas, como ha sucedido también con las escribanías y otros oficios públicos. Las que se hallan en este caso se llaman enajenadas, y respetando la ley los derechos adquiridos por sus dueños, les permite, ó que las sirvan por sí mismos, ó que las arrienden, según las condiciones con que se hiciese la enajenación.

(2) Art. 73.

(3) Art. 74.

(4) Art. 78.

(5) Art. 79.
por la ley en la Caja general de Depósitos ó en sus dependencias en las provincias, con intervención de los Gobernadores civiles y de las juntas de gobierno de los colegios de Corredores. Esta cantidad ha de consistir necesariamente en metálico, ó en su equivalente en papel de la Deuda consolidada que gane interés, al precio que señale la cotización de la Bolsa del último día de diciembre que publique la GACETA; varía según la categoría y clasificación de la plaza en que se ha de ejercer el oficio, y es de 40,000 rs. en las de primera clase: de 25,000 en las de segunda: y 12,000 en las de tercera (1).

86. Mientras no se hayan llenado estos requisitos, ninguno tiene aptitud legal para ejercer el oficio de corredor, y los que lo ejerzan sin ellos deben ser considerados y castigados como intrusos (2).

(1) Arts. 80 y 81 del Código; 2 del Real decreto de 9 de abril de 1851, y 2, 7 y 14 del de 29 de setiembre de 1852.

* La primera clase comprende: las de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Cádiz, Coruña, Santander y Bilbao. La segunda: Tarragona, Alicante, Palma de Mallorca, San Sebastián y Valladolid. Y la tercera todas las demás; y como el valor del papel de la Deuda varía con tanta frecuencia, está mandado para evitar perjuicios, que las fianzas que no consistan en dinero, se arreglen todos los años por el tipo de la última cotización publicada en diciembre. Arts. 2 y 6 del Real decreto citado.

Los intereses que gane este papel corresponden a los que los depositen, a los que deben satisfacerse por las tesorerías de Hacienda pública respectivas, pagando los cupones en cada semestre. Real órden de 10 de enero de 1862.

Esta fianza se entiende sin perjuicio de otra cantidad que los agraciados deben pagar á la Hacienda pública por razón de su nombramiento, en las que son de provision de S. M.; y de la que se pague por el arrendamiento en las que pertenezcan á particulares. Esta cantidad, á la que se dá el nombre de servicio, es de 20,000 rs. en las plazas de primera clase, 40,000 en las de segunda, y 5,000 en las de tercera.—Real órden de 3 de mayo de 1830.

(2) Art. 69.

** Donde hay corredores legalmente habilitados, deben ser considerados como intrusos todos los que ejerzan este oficio sin haber obtenido su título, mediante el Real nombramiento; habiéndose mandado para evitar abusos, que las oficinas de la Hacienda pública no inscriban en la
Cuando los hayan cumplido todos, y tengan en su poder su correspondiente título, debe dárselas la posesión, entregándoles los libros de los que antes hayan servido su plaza. Desde entonces podrán ejercerle libremente, gozando de las atribuciones, derechos y obligaciones propias de esta profesión.

SECCION SEGUNDA.

De las atribuciones, derechos, obligaciones y prohibiciones de los corredores.

87. Las atribuciones de los corredores consisten en proponer negociaciones á los comerciantes, recibiendo noticias de los que quieren vender ó hacer otros negocios, llevándolas á los que quieren comprar; acercarlos y concertarlos mediando ó terciando entre ellos; tomar nota de sus contratos, y certificar lo que conste de sus libros.

88. Por este trabajo tienen derecho á su correspondiente corretaje ó retribución, que consiste en la cantidad señalada por el arancel de la plaza en que ejerzan su oficio (1).

matrícula del subsidio á los que no acrediten estar en posesión de su oficio, presentando su título, previa entrega de la fianza. Real orden de 5 de julio de 1861.

(1) Art. 110.

Este arancel varía según la clase de la plaza, como varía la fianza del corredor. La facultad de formarle donde no se hallaba establecido se concedió á las autoridades civiles, con audiencia del Tribunal de Comercio y de la Junta de gobierno del colegio de Corredores, por el artículo 110 del Código. La tarifa más general es el 1 por ciento en las negociaciones sobre compras y ventas de fincas y sobre descuento de letras: 1/2 por ciento en las de compras y ventas de toda clase de mercancías, muebles y efectos, y en las de seguros marítimos y terrestres: 1/4 por ciento en las de ocupación de dinero y garantías de efectos públicos; y el 2 por ciento en estas mismas ocupaciones, cuando intervenga garantía de oro, plata y piedras preciosas.—Avecilla, Diccionario mercantil, en la palabra Corretaje.

Según algunos autores, se deben, aun cuando los interesados no lleven á efecto el contrato ó no lo concluyan por culpa de alguno, ó por
89. En cambio les impone la ley algunas obligaciones como funcionarios públicos que son, y otras en beneficio de los comerciantes a quienes auxilian, y del comercio en general; y varias prohibiciones, que tienen por objeto impedir abusos en el desempeño de su oficio.

Las obligaciones que principalmente tienen que cumplir como funcionarios públicos, son:

1.ª Desempeñar por sí mismos todas las operaciones de su oficio, sin poderse valer de otro, mas que en el caso de imposibilidad absoluta y perpétua, en el que podrá sustituirle, bajo su responsabilidad, un dependiente autorizado por el Gobernador de la provincia, previa audiencia de la Junta de gobierno del colegio, y el juramento correspondiente (1).

2.ª Llevar dos libros para anotar las operaciones en que intervengan; esto es, un cuaderno manual, y un libro de registro.

3.ª Tener el primero foliado, y el segundo con todas las formalidades que hemos dicho deben reunir los que necesitan los comerciantes para su contabilidad, incluso la de tener fijado el sello especial de comercio (2).

4.ª Certificar lo que conste en los que obren en su poder, cuando se lo mande la autoridad.

5.ª Conservar bajo su responsabilidad estos dos libros y los que de sus antecesores en el oficio les sean entregados, cuando lo principien a ejercer.

90. En beneficio de los contratantes y del comercio en general, están obligados los corredores:

1.ª A asegurarse de la identidad de las personas que contratan y de su aptitud legal para celebrar los negocios en que algún incidente que pueda sobrevenir, cuando el corredor intervino en lo principal y accidental, y deja ya los ánimos preparados y dispuestos á avenirse. En el caso de intervenir dos, se deberá pagar al que primero propuso el negocio.

(1) Real orden de 18 de noviembre de 1846.

(2) Art. 56 del Real decreto de 12 de setiembre de 1861.
intervengan, y a responder de la identidad de la firma en las letras de cambio u otros valores endosables (1).

2.° A proponer los negocios con exactitud y claridad; esto es, manifestando siempre los precios corrientes en la plaza, y no designando las mercancías con otras cualidades que las que le atribuya el uso general del comercio (2).

3.° A guardar riguroso secreto en los negocios que se le encarguen (3).

4.° A asistir á la entrega de los efectos vendidos con su intervención, cuando lo reclame alguno de los interesados (4).

5.° A entregar bajo su responsabilidad al tomador las letras y demás valores endosables, y llevar su importe al cedente, cuando otra cosa no se haya pactado (5).

6.° A asistir cuando se redacten los contratos que por la ley ó por convenio hayan de reducirse á escritura; firmar con los interesados, certificando que lo hicieron con su intervención, recoger un ejemplar y custodiarlo bajo su responsabilidad (6).

7.° A anotar en el cuaderno manual, luego que estén concluidas, todas las operaciones en que intervenga, por el orden de sus fechas, y en numeración progresiva; expresando los nombres y domicilio de los contratantes, la materia del contrato, los pactos que en él se hicieren, y cuantas mas circunstancias sean convenientes para conocer la naturaleza y extensión de las obligaciones contraídas (7).

(1) Arts. 82 y 83.
(2) Arts. 84 y 85.
(3) Art. 86.
(4) Art. 88.
(5) Arts. 89 y 90.
(6) Art. 98.
(7) Arts. 91, 92, 93 y 94.

* Tales serán: en las compras y ventas la calidad, cantidad y precio de las cosas; el lugar, época y forma de la entrega; en las letras las fechas, términos, vencimientos, plazas sobre que estén giradas, librador, pagador y endosantes, cedente, tomador y cambio convenido; en los se-
8.° A trasladar diariamente al libro registro los asientos del cuaderno manual, copiándolos literalmente sin enmiendas, abreviaturas, ni entrerenglonaduras, y guardando la misma numeración (1).

9.° A entregar á cada uno de los interesados en el término preciso de las 24 horas siguientes á la conclusión del contrato, una minuta del asiento hecho en el libro registro, con referencia á este mismo, y no al cuaderno manual (2).

91. Para impedir el abuso que los corredores pudieran hacer como depositarios de las confianzas de los comerciantes, y asegurar más y más su exactitud e imparcialidad, se les prohíbe:

1.° Hacer por sí, ni por medio de otros, directa, ni indirectamente; tener parte ni interés en ninguna operación de comercio, ni en sociedades mercantiles; ser aseguradores en ningún caso, y ser fiadores y garantir los contratos en que intervengan, excepto en las negociaciones sobre valores endosables, en las que necesariamente tienen que responder al tomador de la entrega de los documentos, y al cedente de su importe, si los interesados no pactan entenderse entre sí mismos (3).

2.° Encargarse de hacer cobranzas y pagos por cuenta ajena, excepto en las negociaciones de dichos valores, en las que debe hacer por sí mismo la entrega de estos y de su precio (4).*

guros los efectos y el valor asegurado, punto de la carga y de la descarga; nombre, matrícula, pabellón y porte del buque; nombre y apellidos del capitán, y así en los demás contratos.

(1) Art. 95.
(2) Art. 97.
(3) Arts. 90, 99, 101 y 103.
(4) Arts. 89 y 106.

* Esta excepción no la contiene el artículo 100; pero la añadimos porque es indispensable, pues de otro modo resultaría una contradicción entre este, que en términos absolutos le prohíbe hacer cobranzas y pagos, y el 89 que le obliga á entregar los efectos endosables al tomador, y á recojer su importe y llevarle al cedente, bajo su responsabilidad.
3.° Intervenir en contratos ilícitos, cualquiera que sea la causa de que provenga su ilegitimidad.

4.° Hacer supuestos falsos que puedan inducir á error á los comerciantes.

5.° Proponer negociaciones sobre letras ú otros valores, ó sobre mercancías de persona no conocida en la plaza, sin que se presente un comerciante de la misma que testifique su identidad.

6.° Intervenir en negociaciones de letras y en la venta de efectos del que haya suspendido sus pagos (1).

7.° Intervenir en la negociacion ó descuento de ningun efecto de comercio que no tenga el sello que le corresponda, inclusos los librados en el extranjero sobre otra plaza tambien extranjera, si se negocian en el Reino (2).

8.° Salir al encuentro de los conductores de las mercancias á solicitar la comision de venderlas antes que entren en las posadas (3).

9.° Comprar para su consumo cosas cuya venta haya sido encargada á él mismo, ó á otro corredor (4).

10.° Dar certificacion que no se refiera á sus registros, y de lo que no conste en ellos (5).

(1) Art. 404.
(2) Art. 46 de la instruccion de 1.° de octubre de 1851.
   * Estos documentos se expiden en una clase de papel de que hablaremos al tratar de las letras de cambio.
(3) Art. 405.
(4) Art. 106.
(5) Arts. 107 y 108.

** Los corredores, como funcionarios públicos, expiden certificaciones que hacen prueba en juicio; pero no pueden darlas sino solo de los actos en que intervienen como tales funcionarios, y como estos necesariamente tienen que anotarlos en su registro, por eso la ley les prohíbe que las den de otro modo que refiriéndose á él: estableciendo que con respecto á lo que vean y sepan por otro medio, declaren como testigos.

El art. 107 del Código no habla en plural de registros, sino de registro en particular; pero á nuestro entender, el corredor debe certificar, no solo de lo que conste en el suyo, sino también en los que de sus antecesores se le hayan entregado al darle posesión, como sucede con los escri-
SECCION TERCERA.

De la responsabilidad y penas en que incurren los corredores por sus faltas.

92. Como sería inútil que la ley creara obligaciones, sin afianzar al mismo tiempo su cumplimiento por medio de la sanción penal, se ha establecido esta al lado de cada una de las que se imponen á los corredores, que son responsables de todas sus faltas, é incurren en ciertas penas por cada una de ellas.

Por regla general y común á todas, se puede desde luego establecer la de indemnizar los daños y perjuicios que ocasionen á los interesados por no cumplir con cualquiera de las obligaciones que dejamos enumeradas (*). Pero no así en cuanto á la nulidad de los actos que ejecuten estándoles prohibidos; porque aun cuando segun los principios del derecho es nulo todo lo que se hace contra la prohibicion de la ley,

hanos respecto á los protocolos de sus predecesores, pues de otro modo era inútil semejante entrega, y valía más que se conservaran en la secretaria del tribunal ó en la Junta de gobierno del colegio para examinarlos cuando fuera necesario, que no entregarlos al sucesor.

(*) La obligacion de indemnizar los daños y perjuicios no la establece el Código por regla general, sino contrayéndola solo á los causados por intervenir á sabiendas en contratos celebrados por persona inhabil, por hacer supuestos falsos, y por no guardar secreto; pero nosotros no hemos dudado en sentarla como general para todas las faltas, porque no encontramos una razón que las justifique en estas tres, y la excluya en las demás, y porque es muy conforme á la razón, á la equidad y al principio reconocido en el derecho, que todos deben reparar el daño que se siga á otros por su culpa; y una culpa cuando menos, y no poco grave, parece la falta de cumplimiento de las obligaciones que á los funcionarios públicos imponen sus destinos.
también esta regla tiene sus excepciones, y aquí se ha establecido una muy justa y aun necesaria en favor de los derechos adquiridos, por cuya razón solo algunas producen nulidad.

93. Las demás penas son: la pérdida de la cosa ó interés que tengan en la negociación, las multas, la suspensión y privación de oficio, y las que corresponden al delito de la falsedad por el Código penal; en todas y cada una de las cuales pueden incurrir respectivamente, según la gravedad de falta y sus reincidencias en los casos y en la forma siguiente:

1.º Por comprar lo que le está mandado vender á él mismo ó á otros corredores, tienen la pérdida de lo comprado, que cae en comiso (1).

2.º Por hacer o tomar parte, acción ó interés, directa ó indirectamente en negociaciones mercantiles, cae igualmente en comiso el interés que tengan, é incurren además en la pérdida del oficio (2).*

3.º Por intervenir á sabiendas en contratos ilícitos, y en las cesiones y ventas del que tiene en suspenso sus pagos, suspensión de oficio por dos años la primera vez, seis por la segunda, y la pérdida absoluta por la tercera (3).

(1) Art. 106.
(2) Art. 99.
* El Código no dice comiso, sino confiscación; pero nosotros hemos preferido esta palabra, que es con la que se designa la misma pena en los delitos contra la Hacienda pública, en que tiene también lugar y con los que guarda mucha analogía; porque la confiscación se ha proscrito de nuestros Códigos por la Constitución del Estado, y no creemos, sin embargo, que por esta causa deban dejar de perder los corredores los efectos comprados, y el interés que contra la prohibición de la ley tenga en cualquier negocio mercantil; porque estos efectos y este interés es lo que constituye, por decirlo así, el cuerpo del delito, como los géneros de ilícito comercio que se decomisan á los que trafican en ellos, contra la prohibición de las leyes fiscales de la Hacienda pública. Esta opinión se funda también en las disposiciones del Código penal, que usa la palabra comiso en casos idénticos.
(3) Art. 104.
4.° Por intervenir asimismo en negociaciones ó descuentos de efectos de comercio que no estén extendidos en papel del sello correspondiente, en la multa del cuádruplo del valor del papel, además del reintegro (1).

5.° Por hacer cobranzas por cuenta ajena, 4,000 rs. por la vez primera; 2,000 por la segunda, y la pérdida del oficio por la tercera (2).

6.° Por no dar la minuta, de que habla la obligación novena, en el término de 24 horas, ó por darla antes de haber hecho el asiento en el registro, 2,000 rs. por la primera vez, 4,000 por la segunda, y por la tercera privación perpetua (3).

7.° Por ser fiadores ó garantizar de algún modo las operaciones en que intervengan, la nulidad de la fianza, y la pérdida del oficio (4).

8.° Por ser aseguradores ó responder de algún modo de las contingencias que sobrevengan en el trasporte de mercancías, la pérdida del oficio (5).

9.° Por dar certificaciones que no se refieran á sus regis-

(1) Art. 74 del Real decreto de 8 de agosto, y 46 y 47 de la instrucción de 1.° de octubre de 1851.
(2) Art. 100.
(3) Art. 97.
(4) Art. 102.
(5) Art. 103.

Por ser asegurador impone al corredor el art. 103 la pena de perder el oficio; pero no establece la nulidad del seguro, como lo hace el 102 respecto á la fianza; debiendo ser la razón sin duda, que el 102 habla de las negociaciones hechas con su intervención, que es solo en las que no puede fiar, y el 103 de los seguros en que no interviene como corredor, sino que contrata como principal, ejerciendo una operación de comercio que le está prohibida, y que si quedara sin efecto, no sería el el que sintiera el perjuicio, sino otra tercera persona; por lo que lo mismo que en todas las demás de esta especie, deberá, en nuestra opinión, decomisarse el interés que tengan, con arreglo al art. 97, después de responder de las resultas del seguro, y ser además destituido de su oficio. El Código portugués en ambos casos establece la nulidad.
otros, la nulidad de la certificación y 2,000 rs. de multa por cada una de las que expidan (1).

10.° Y últimamente, por ser su oficio público y hacer prueba en juicio las que expidan, refiriéndose á sus asientos, cuando no se presente otra que la destruya, serán considerados como falsarios, y castigados con arreglo al Código penal, si expiden certificaciones contra lo que resulta de sus libros (2).

94. Para concluir esta materia, nos falta todavía que hacer cuatro advertencias, á saber:

1.° Que las multas se pagan de las fianzas, siendo obligación del corredor reponer, en el término de seis meses, la cantidad que se haya sacado para este objeto; y de no hacerlo, queda suspenso de oficio hasta que lo verifique (3).

(1) Art. 108.
(2) Arts. 64 y 109.

* Por salir al encuentro de las mercancías en los caminos y puertos á solicitar que se le encargue su venta no se les impone ninguna pena; aunque en el art. 405 se establece terminantemente esta prohibición, siendo por lo mismo una medida imperfecta y sin efecto, porque le falta la parte mas interesante, que es la sancion penal. A nosotros, en honor de la verdad, no nos parece una accion muy punible, mientras no hagan mas que solicitar que se les encargue la venta y proponer precio; pero una vez establecida la prohibicion, debe sostenerse, y somos de opinion que en habiendo queja, además de la indemnización de perjuicios, podria imponérseles alguna multa, según la gravedad y circunstancias de la falta.

Tampoco el Código establece penas contra los corredores que no ten gan libros ó no los lleven con las formalidades prevenidas, cuyas faltas nos parecen todavía mas graves que las de los comerciantes, y dignas por lo mismo de ser castigadas con mayor rigor; pero ya que asi no sea, no dudamos asegurar, que deben por lo menos imponérseles las mismas, y hasta la de privación de oficio, si no los llevan, graduándolas los tribunales prudencialmente, sin que pueda servir de obstáculo que las fianzas en muchas ocasiones no serán suficientes para cubrir las multas que puedan imponérseles, porque responderán también con los demás bienes que les pertenezcan.

(3) Art. 81.
2.° Que las quiebras de los corredores se reputan siempre fraudulentas, sin admitir excepción en contrario, cuando se justifique que hicieron por su cuenta, en nombre propio o ajeno, alguna operación de tráfico o giro, ó que se constituyeron garantes en las que intervinieron como corredores, aunque no sean las que hayan motivado la quiebra (1).

3.° Que además de las penas referidas en que incurren los corredores legítimos, hay otras establecidas contra los intrusos, ó sea contra los que ejercen este oficio sin estar legalmente autorizados, y contra los comerciantes que admiten su intervención. Estas penas consisten, en los que admiten la intervención, en la multa del 5 por 100 del valor de lo contratado, el que se gradúa por el tribunal cuando no sea fijo: para el intruso en la del 10 por 100 por la primera vez, que pagarán los interesados en el negocio, además del 5, en el caso de que aquel carezca de bienes; por la segunda vez se le añadirá un año de destierro del pueblo en que ejerció el oficio; y por la tercera incurrirá en la misma multa, y será desterrado de la provincia por diez años (2).

4.° Que en todas las plazas donde haya diez corredores, ha de haber un Colegio con su Junta de gobierno, á la que corresponde impedir estas intrusiones, dar cuenta al tribunal de los que ejerzan estos oficios sin autorización, recoger los libros de los que fallezcan (cuyo deber incumbe también al mas antiguo donde no haya establecida Junta), fijar los precios de los cambios y mercancías, segun lo que resulte de las notas de los corredores, llevar un registro exacto de estas notas, dar certificaciones con arreglo á él, cuando las pidan los interesados ó lo mande el tribunal, evacuar los informes que se le pidan, dar su dictámen en las diferencias que ocurran entre comerciantes y corredores, cuidar de que estos cumplan exactamente con su deber, y no contravengan á las prohibiciones que les están impuestas, evitándoles incurrir en

(1) Art. 1009.
(2) Arts. 67 y 68.
tros, la nulidad de la certificación y 2,000 rs. de multa por cada una de las que expidan (1).

10.° Y últimamente, por ser su oficio público y hacer prue-
ba en juicio las que expidan, refiriéndose á sus asientos,
cuando no se presente otra que la destruya, serán considera-
dos como falsarios, y castigados con arreglo al Código pe-
nal, si expiden certificaciones contra lo que resulta de sus
libros (2).

94. Para concluir esta materia, nos falta todavía que ha-
cer cuatro advertencias, á saber:

1.° Que las multas se pagan de las fianzas, siendo obliga-
ción del corredor reponer, en el término de seis meses, la
cantidad que se haya sacado para este objeto; y de no hacerlo,
queda suspendo de oficio hasta que lo verifique (3).

(1) Art. 108.
(2) Arts. 64 y 109.

* Por salir al encuentro de las mercancías en los caminos y puertos á
solicitar que se le encargue su venta no se les impone ninguna pena;
aunque en el art. 105 se establece terminantemente esta prohibición,
siendo por lo mismo una medida imperfecta y sin efecto, porque le falta
la parte más interesante, que es la sanción penal. A nosotros, en honor
de la verdad, no nos parece una acción muy punible, mientras no hagan
mas que solicitar que se les encargue la venta y proponer precio; pero
una vez establecida la prohibición, debe sostenerse, y somos de opinion
que en habiendo queja, además de la indemnización de perjuicios, po-
dría imponérselas alguna multa, según la gravedad y circunstancias de la
falta.

Tampoco el Código establece penas contra los corredores que no ten-
gan libros ó no los lleven con las formalidades prevenidas, cuyas faltas
nos parecen todavía más graves que las de los comerciantes, y dignas por
lo mismo de ser castigadas con mayor rigor; pero ya que así no sea, no
dudamos asegurar, que deben por lo menos imponérselas las mismas, y
hasta la de privación de oficio, si no los llevan, graduándolas los tribu-
nales prudencialmente, sin que pueda servir de obstáculo que las fianzas
en muchas ocasiones no serán suficientes para cubrir las multas que pue-
dan imponérselas, porque responderán también con los demás bienes que
les pertenezcan.

(3) Art. 81.
2.° Que las quiebras de los corredores se reputan siempre fraudulentas, sin admitir excepción en contrario, cuando se justifique que hicieron por su cuenta, en nombre propio o ajeno, alguna operación de tráfico o giro, ó que se constituyeron garantes en las que intervinieron como corredores, aunque no sean las que hayan motivado la quiebra (1).

3.° Que además de las penas referidas en que incurren los corredores legítimos, hay otras establecidas contra los intrusos, ó sea contra los que ejercen este oficio sin estar legalmente autorizados, y contra los comerciantes que admiten su intervención. Estas penas consisten, en los que admiten la intervención, en la multa del 5 por 100 del valor de lo contratado, el que se gradúa por el tribunal cuando no sea fijo: para el intruso en la del 10 por 100 por la primera vez, que pagarán los interesados en el negocio, además del 5, en el caso de que aquel carezca de bienes; por la segunda vez se le añadirá un año de destierro del pueblo en que ejerció el oficio; y por la tercera incurrirá en la misma multa, y será desterrado de la provincia por diez años (2).

4.° Que en todas las plazas donde haya diez corredores, ha de haber un Colegio con su Junta de gobierno, á la que corresponde impedir estas intrusiones, dar cuenta al tribunal de los que ejerzan estos oficios sin autorización, recoger los libros de los que fallezcan (cuyo deber incumbe también al mas antiguo donde no haya establecida Junta), fijar los precios de los cambios y mercancías, según lo que resulte de las notas de los corredores, llevar un registro exacto de estas notas, dar certificaciones con arreglo á él, cuando las pidan los interesados ó lo mande el tribunal, evacuar los informes que se le pidan, dar su dictámen en las diferencias que ocurran entre comerciantes y corredores, cuidar de que estos cumplan exactamente con su deber, y no contravengan á las prohibiciones que les están impuestas, evitándoles incurrir en

(1) Art. 1009.
(2) Arts. 67 y 68.
las penas referidas, y examinar los aspirantes á estos oficios (1).

(1) Arts. 144 al 145.

Los colegios de corredores no se reúnen mas que para tratar de la policía y buen gobierno de la corporación, y para evacuar los informes que le pidan las autoridades competentes, sobre objetos de su instituto ó sobre las cualidades de las personas que aspiran á ejercer estos oficios; necesitan para reunirse licencia previa del Gobernador de la provincia, dada por escrito, y son presididos por esta misma autoridad ó por un individuo del Tribunal de Comercio en quien delega la presidencia. Las Juntas de gobierno se componen de un síndico presidente y de dos adjuntos, cuando las plazas de corredor no pasan de diez, y de cuatro si son más. Se nombran todos los años el primer domingo de enero á pluralidad de votos entre todos los individuos del Colegio, y los aprueba el Gobernador, y tienen las facultades referidas y otras que con varios por menores refieren el art. 144 y siguientes del Código, y que nosotros omitimos por considerarlas puramente reglamentarias.
CAPITULO IV.

DE LOS PORTEADORES.

95. El último de los agentes auxiliares que enumera la ley mercantil es el porteador, por el que entendemos, en la acepción rigurosa de esta palabra, el que traslada las mercancías ajenas del lugar donde se hallan, al en que sus dueños ó encargados las envían; pero tanto estos, como el contrato que celebran, tienen en el comercio nombres distintos, según el lugar ó el modo de hacer la traslación.

96. Cuando se hace por mar, se llama fletante al que la hace, fletador al que la manda hacer, y al contrato fletamento.

Y cuando se hace por tierra, por lagos, canales ó ríos navegables, se le dá generalmente el nombre de conducción, al que la manda hacer el de cargador, al que la hace el de porteador, y el de consignatario al que ha de recibir las mercancías (1).

Los transportes por mar corresponden al comercio marítimo, y se gobiernan por reglas especiales, como veremos en otro lugar; por tanto, ahora solo nos ocuparemos de los que se hacen por tierra, ó más bien, únicamente del porteador, considerado como agente auxiliar.

97. Para poderlo ser, no exige la ley ninguna cualidad ni requisito; pero se supone que cuando menos ha de concurrir en él la de poderse obligar, porque de otro modo no podrían tener aplicación sus disposiciones.

Tampoco exige que haga los trasportes por sí mismo, sino que por el contrario le permite que los contrate para encargarlos y ajustarlos de nuevo con otros por el mismo ó diferente precio, bajo su responsabilidad; pero no ejecutándolos por sí, ó por medio de sus criados, tiene ya nombre diverso, y se llama asentista, si solo contrata así alguna operación particular; y comisionista de conducciones cuando se ocupa habi-

(2) Arts. 203 y 204.
tualmente en contratarlas para que otros las efectúen (1).

98. De cualquier modo que lo haga, se diferenciará del 
cargador con quien las contrata, en que este trafica compran-
do y vendiendo, y el porteador conduciendo por sí mismo ó 
encargando á otro la conducción de las mercancías; razón por 
la que son llamados agentes auxiliares de los comerciantes, y 
están sujetos á las leyes mercantiles por los contratos que 
celebran (**).

Sentados estos principios, para dar á conocer á los por-
teadores bajo este concepto, suspendéremos el tratar de sus 
derechos y deberes para cuando hablemos del contrato de 
conducción y de las obligaciones que de él provienen; adviri-
tiendo de paso que el comisionista de transportes, además de las 
que tiene como comerciante, debe llevar un libro de registro 
con las mismas formalidades que los de la contabilidad mer-
cantil, y anotar en él, por el orden progresivo de números y 
fechas, los efectos de cuya conducción se encargue, con ex-
presión de su calidad, destino que llevan, persona que los car-
ga, nombres, apellidos, y domicilio del consignatario y del 
porteador, y precio del transporte (2).

(1) Art. 232.
* Asentista es el que hace asiento ó contrato para la provision del 
ejército, presidios, etc.; pero el Código da también este nombre al que 
contrata una operacion particular y determinada de transporte para hacer-
la por medio de otros, distinguiéndole del comisionista de conducciones, 
y constituyendo á los dos directamente responsables y con los mismos 
derechos que si los contrataran para hacerlos por sí, salvo el que les 
pueda competir contra el que la haya ejecutado por su encargo.

Algunos autores llaman á todos estos asentistas ó empresarios, acaso 
con mas propiedad, sobre todo si llevan un precio mayor que el que pa-
gan; pero nosotros nos hemos atenido al texto legal, para cuya intel-
gencia debemos añadir, que el comisionista de que habla y á quien im-
pone este y otros deberes, es el que contrata con el cargador hacer el 
transporte por medio de otros, y no el que, en concepto de cargador, lo 
ajusta con los porteadores, por habérselo encargado así el dueño de las 
mercancías.

(**) Véase la nota del tit. II (número 55).
(2) Art. 233.
LIBRO SEGUNDO.

De las obligaciones y contratos mercantiles.

TITULO PRIMERO.

De las obligaciones en particular.

99. El derecho mercantil, como ha dicho un jurisconsulto (*), es á la vez excepción y complemento del civil, en materia de convenciones. Exige como este capacidad en los que las celebran y la intervencion de otros requisitos; y sus obligaciones todas reconocen por fundamento la disposicion de la ley, y el consentimiento expreso, tâcito ó presunto que constituye ó un contrato ó un cuasi-contrato (1).

400. Será cuasi-contrato, cuando la obligacion nazca directamente de la ley que la establezca, fundada en algun principio de equidad, ó en algun hecho anterior de donde puede deducirse. Y verdadero contrato, cuando provenga de la manifestacion deliberada de los contratantes.

(*) Martí Eixalá, lib. 4.* Prolegónemos.
(1) Art. 234.
101. De los cuasi-contratos trataremos en otro capítulo con separación; en este nos ocuparemos solo de los contratos en general, examinando su definición, división y requisitos, su perfección y modificaciones que pueden sufrir por la voluntad de los contratantes, su interpretación, los modos de extinguirse, y la responsabilidad que induce la falta de cumplimiento, que son circunstancias comunes a todos.
CAPÍTULO PRIMERO.

DE LOS CONTRATOS.

SECCION PRIMERA.

Definicion, division y requisitos de los contratos.

102. El contrato generalmente considerado, es el convenio de dos ó mas personas, en que todas ó algunas de ellas se obligan á dar ó hacer alguna cosa. Para que sea tenido por mercantil, es indispensable que recaiga sobre un objeto efectivo, real y determinado del comercio (1). Por consiguiente, deberá dársese esta calificacion cuando el objeto sea uno de los que hemos enumerado, explicando su definicion, y se celebre con el fin que allí dejamos expresado (núms. 5 y 4).

103. Pueden hacerse de ellos muchas divisiones mas ó menos exactas; pero nosotros nos contentaremos con indicar las que reconocen por fundamento la diferencia de las leyes á que están sujetos, las obligaciones que producen, los objetos sobre que recaen, y el modo con que se perfeccionan; que son las unicas que pueden ofrecer algun resultado, y convienen mas al fin que nos proponemos.

Por las diferentes leyes á que están sujetos, se pueden dividir en comunes con el derecho civil, y peculiares del mercantil.

Por las obligaciones que producen, se dividen, como los civiles, en unilaterales, bilaterales é intermedios, según que resulte obligada una sola de las partes contratantes, las dos á la vez, ó primero una y despues otra, á consecuencia de algún hecho.

Por razón de su objeto, en commutativos y aleatorios; de los que los primeros son aquellos en que la obligacion con-

(1) Art. 244.
siste en la prestacion de una cosa cierta, y los segundos en correr un riesgo, ó en la prestacion de cosa incierta y eventual.

Por el modo de perfeccionarse, en *verbales*, ó sean *consensuales*, y *escritos*; llamando verbales ó consensuales á los que se celebran manifestando el consentimiento solo de palabra, y escritos ó literales á los que exigen para su validacion, que se consigne en escritura; aunque en realidad los verbales mas bien pueden considerarse como una excepcion de la regla general, que como clase distinta, segun en otro lugar diremos.

Y por la naturaleza de la negociacion pueden, por ultimo, dividirse, si se quiere, en *preparatorios, principales y accesorios* de otras operaciones, como queda dicho al tratar de los actos mercantiles (num. 2).

**404.** En todos pueden concurrir *requisitos esenciales, naturales y accidentales*, lo mismo que en los civiles.

Los primeros son: el consentimiento, la cosa ó objeto sobre que recae, y la causa que lo motiva, sin mas diferencia que el consentimiento en algunos debe ser manifestado por persona que no solo tenga aptitud para obligarse, segun la ley civil, sino tambien con arreglo á la mercantil (*). Que la cosa no solo ha de ser de las que puedan estar constituidas en el dominio, y no haya prohibicion de adquirir, sino un objeto mueble, determinado del comercio que exista ó pueda existir, ó un derecho procedente de él, un hecho que uno se obliga á prestar, una esperanza, ó un riesgo que prometa sufrir; en que la causa sea siempre el interes reciproco de los contratantes.

(*) No decimos que el consentimiento haya de manifestarse siempre por persona que tenga aptitud legal para dedicarse al comercio, para que el contrato sea mercantil, porque no creemos indispensable esta cualidad, puesto que el celebrado por el que no la tiene, pero si puede obligarse civilmente, no es nulo, sino valido, y sujeta al que le celebra en cuanto á sus resultas á la ley especial del comercio, como hemos dicho ya citando los arts. 2 y 10 del Código. Sin embargo, lo limitamos á algunos casos particulares, porque tambien la exige la ley algunas veces, como sucede en el deposito que no es mercantil, sino cuando son comerciantes el deponente y el depositario.—Art. 404.
tes, en lo que se cifra el carácter peculiar de todas estas negociaciones (num. 3 y 4) (1).

Los naturales consisten también en las garantías que se deben prestar con respecto a la propiedad, y a las cualidades intrínsecas que se atribuyan, ó deban tener las mercancías, según el uso a que se destinen, las que se suponen siempre que por condición expresa no han sido excluidas de la negociación (2).

Y los accidentales, los que procedan de la voluntad de los contratantes; los cuales pueden ser muchos, muy variados y muy importantes, como que dependen de circunstancias particulares, que podrán afectar de un modo notable el éxito de la operación.

105. Como en los mercantiles debe presidir siempre la buena fe, á la que se opone diametralmente el dolo, el error y la violencia, claro está que en los que intervengan el primero y la última, no podrán producir efectos legales, ni tampoco cuando haya intervenido el segundo en parte sustancial, esto es, sobre cualidad esencial en la cosa, ó en la clase de la negociación, ó con respecto á la persona, en caso de que deban tenerse presentes sus circunstancias (3); y esto mismo de-

(1) Art. 244.
(2) Art. 380.
(3) El error en la persona no siempre puede influir de una manera directa en la negociación ni producir las mismas consecuencias. Cuando se trata de una venta al contado, por ejemplo, en la que el pago ha de hacerse en el acto que el vendedor crea que el comprador es Pedro ó Juan, importa muy poco, con tal que de hecho le entregue el precio, porque el error, en este caso, es muy accidental. Mas si la venta se hiciera al fiado, ó por afecto á la persona ó las causas se hubiese decidido á vender, ó á dar la cosa en el precio en que fue ajustada, no tiene duda que el error viciaría el contrato, porque recaería sobre una circunstancia que era la base del consentimiento.

Con respecto al dolo se ha declarado por sentencia el Tribunal Supremo de Justicia de 20 de mayo de 1864, que el causante, ó sea aquel sin cuyo concurso no se hubiera celebrado el contrato, produce la nulidad de este.
bemos decir si son ilícitos ó reprobados por otras causas aun cuando recaigan sobre operaciones mercantiles (1).

106. En estas materias son poco notables las variaciones entre uno y otro derecho, porque ambos se fundan en principios naturales inalterables; pero no sucede lo mismo con respecto á las formalidades precisas para manifestar el consentimiento, á la inteligencia, ó á la extensión que deba darse á las obligaciones, y á su cumplimiento; en todo esto, por razón de la naturaleza misma de los contratos, de los objetos sobre que versan, de la celeridad con que se celebran, y de la buena fe con que deben cumplirse, caben y existen muchas diferencias, que expondremos en las secciones sucesivas.

SECCION SEGUNDA.

Perfeccion y modificaciones de los contratos mercantiles.

107. En materias mercantiles no tiene aplicación el principio: «que de cualquiera manera que aparezca que uno quiso obligarse, queda obligado;» por consiguiente, no hasta la manifestación libre y espontánea del consentimiento, sino que es preciso además que intervenga casi siempre la formalidad de la escritura.

Por regla general estos contratos se celebran por escrito, y pueden por esta razón llamarse todos literales ó escriturados (2); porque esta regla no reconoce más que dos excepciones, y por lo tanto, solo hay dos clases que merecen el nombre de verbales ó consensuales, que son los que por su poca entidad no exigen tanta precaución, ó en los que la cuantía no pasa de 1,000 rs.; y los que se celebran en los mercados y ferias, en que por la necesidad que hay de aprovechar el tiem-

(1) Arts. 234 y 246. Recurso de nulidad de 25 de junio de 1857, de casación de 30 de setiembre de 1864 y 25 de febrero de 1865, y de injusticia notoria de 12 de mayo del mismo año.
(2) Arts. 235 y 238.
po, pueden perfeccionarse de palabra, cuando no median tam-
poco sumas crecidas, esto es, cuando no pasen de 3,000 rea-
les (núm. 103) (1).

La escritura en que los demás se han de consignar, pue-
de ser pública, oficial y privada.

Será pública la que se otorgue ante escribano.

Oficial, el asiento del corredor ó la póliza otorgada con su
asistencia (*).

Y privada, la contrata firmada solo por los interesados, ó
por algún testigo en su nombre, y la contenida en la corres-
pondencia epistolar (**).

Los comerciantes contratan por medio de escritura públi-
ca, por necesidad ó por conveniencia. Por necesidad, en los
casos en que la ley exige este requisito para la validacion del
contrato; y por conveniencia, cuando por su voluntad estipu-
lan su otorgamiento.

La oficial es siempre convencional, porque en ningun ca-
só tienen obligacion de admitir la intervencion del corredor
en sus contratos, si no quieren (2) *, y puede ser de dos mo-

(1) Art. 237.

(*) La contrata autorizada por el corredor ó anotada en sus libros,
también puede llamarase pública, porque el art. 63 declara, en términos
explicitos, que el oficio de corredor es viril y público; y si es público
el oficio, públicos deben ser los documentos que autorice este funciona-
rio. Sin embargo, en la acepción en que se toma en el derecho esta pa-
labra, no es pública, ni tampoco le da esta denominacion el art. 235, en
su núm. 2.º, ni produce los mismos efectos que la otorgada ante escri-
bano; por lo que nos ha parecido conveniente llamarla oficial, que es el
nombre que se da a todos los documentos que autorizan los empleados
públicos en las materias relativas á sus destinos.

(**) La palabra contrata la toma aquí el Código por el instrumento,
escritura ó papel con que las partes aseguran los contratos celebrados;
pero también designa con ella en otros articulos el mismo contrato,
ajuste ó convenio.

(2) Art. 65.

* Pueden considerarse como una excepcion de esta regla las negocia-
ciones sobre efectos públicos, en los que, según el art. 15 de la Ley pro-
visional de 8 de febrero de 1856, debe siempre intervenir un agente

TOMO 1.
dos: ó sentando solo el corredor la negociación en sus libros, como lo hace cuando se remiten á su fé y á sus asientos, ó estipulando que se redacte póliza por separado (1).

108. Los que por necesidad ó por convenio deben consignarse en escritura pública, no se tienen por perfectos hasta que se haya otorgado; pero si los interesados hubiesen convenido antes por medio de otra oficial ó privada, en celebrar el contrato, podrán ser compelidos á su otorgamiento (2).

Los que se celebran con intervencion de corredor, quedan perfectos luego que las partes han aceptado sin reserva las propuestas de este cuando se remitan á su fé y á sus asientos; pero no cuando convengan en que haya de extenderse póliza ó contrata, pues en este caso no se tendrá por perfecto hasta que se haya extendido y firmado, como hemos dicho con respecto á la escritura pública (3).

Los que solo se consignan en contrata ó escritura privada, cuando se haya extendido y firmado (")y los que se celebren de Bolsa, y también la venta de las acciones de las sociedades anónimas y de las comanditarias en que las haya, según el art. 33 del Reglamento de 17 de febrero de 1848.

(1) Art. 235.
(2) Art. 285.
(3) Arts. 235 núm. 2.º, y 242.

Los contratos en que interviene corredor en realidad, se perfeccionan antes de escribirse, porque se tienen por concluidos luego que las partes aceptan definitivamente y sin reserva las propuestas de este, como lo dispone el art. 242; pero como el corredor tiene obligación de sentarlo inmediatamente en su cuaderno manual, según hemos dicho tratando de sus obligaciones, y previene el 91, siempre resulta que se reduce á escritura en el acto mismo de celebrarse, y por consiguiente que puede llamarse escrito, porque necesariamente se ha de escribir mediante corredor (núm. 90).

(”) El contrato celebrado de palabra sobre negocio que pase de 1,000 reales, será válido para el efecto de obligar á los contratantes á que lo reduzcan á póliza privada, así como la póliza privada es suficiente para obligarlos á otorgar la escritura pública cuando es de necesidad? Entendemos que no, porque el espíritu de la ley está muy claro, y sus disposiciones son muy terminantes: solo en el caso de que la cuantía no pase
por correspondencia epistolar, cuando el que recibió la propuesta, expedita la contestación, aceptándola pura y simplemente; pues si es condicional, no puede tenerse por perfecto, hasta que el primero que lo propuso expida por su parte la respuesta en que se conforme con la condición (1).

Mientras esto no se verifique, uno y otro podrán arrepentirse y retirar su propuesta, sirviendo las fechas para dar a conocer si fue o no retirada antes de la aceptación; pues por regla general es siempre retractable toda promesa no aceptada; y aun cuando intervengan muchos en el negocio, puede retirarse por cualquiera, mientras haya uno solo que no lo haya verificado, a no ser que el que la hace se comprometa a esperar contestación, y a no disponer de la cosa hasta haberla recibido, o hasta que pase un tiempo determinado, en cuyos casos tendrá que cumplir lo que ha ofrecido (2).

109. Ultimamente, será requisito esencial que estén escritos en idioma español, aunque sean extranjeros los contratantes, si se han celebrado en nuestro territorio, y que no contengan blancos, raspaduras ni enmiendas, que no estén salvadas antes de las firmas (3).

110. Por lo que hace a los verbales o consensuales, se tendrán por perfectos cuando hayan convenido los contratantes, en términos expresos y claros, o por hechos que lo den a conocer en la cosa, en las prestaciones que respectivamente de los 1,000 rs., es cuando los comerciantes pueden obligarse y celebrar un contrato válido, aun cuando no se haya redactado por escrito, según el art. 237; por consiguiente, los que carezcan de esta formalidad serán nulos, o no tendrán fuerza obligatoria, como previene el 257.

(1) Art. 243.
(2) Art. 243.
(3) Arts. 239 y 240.

Según los artículos 6 y 16 del Real decreto de 12 de setiembre de 1861, tanto los documentos públicos, comprendiendo bajo este concepto los que se otorguen interviniendo escribano o oficial público competente, como los privados que tengan por objeto la constitución, liberación, declaración o novación de obligaciones, cuyo importe sea de 500
deben hacerse; y en las circunstancias que deban guardarse en el modo de cumplirlas (1).

411. De cualquiera de estos modos que se celebren, pueden todos recibir, al tiempo de perfeccionarse, las modificaciones, que por convenir á sus intereses, les impongan la voluntad de los que intervienen en ellos. Por lo mismo, las obligaciones que produzcan podrán ser puras, condicionales y á cierto término mancomunadas y solidarias, alternativas y con cláusula penal; pero el derecho mercantil no ha creído necesario sentar reglas determinadas para estas diversas especies, y se ha limitado á declarar, como requisito indispensable en algunos contratos, la responsabilidad solidaria de todos los que toman parte en ellos, como diremos en sus lugares respecti-

ó más reales, necesita sello proporcional á la cantidad, guardando el orden siguiente:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cantidad ó cuantía del asunto.</th>
<th>Precio del papel del sello.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hasta 1000 reales.</td>
<td>2 reales.</td>
</tr>
<tr>
<td>Desde 1001 á 2000.</td>
<td>2 »</td>
</tr>
<tr>
<td>Id. 2001 á 4000.</td>
<td>8 »</td>
</tr>
<tr>
<td>Id. 4001 á 8000.</td>
<td>46 »</td>
</tr>
<tr>
<td>Id. 8001 á 16000.</td>
<td>32 »</td>
</tr>
<tr>
<td>Id. 16001 á 30000.</td>
<td>60 »</td>
</tr>
<tr>
<td>Id. 30001 á 50000.</td>
<td>100 »</td>
</tr>
<tr>
<td>Id. 50001 á 75000.</td>
<td>150 »</td>
</tr>
<tr>
<td>Id. 75001 en adelante.</td>
<td>200 »</td>
</tr>
</tbody>
</table>

La omisión de esta formalidad lleva consigo la obligación de reintegrar el valor del sello, y la multa del doble de este valor. Art. 80 del Real decreto citado.

En los tratados sucesivos se hará mérito de otras disposiciones de este Real decreto, relativas á contratos y documentos del comercio.

(1) Art. 241.

En este modo de contratar debe tener lugar el consentimiento tácito, manifestado por hechos que excluyan toda duda; como sucedería, por ejemplo, si ofreciendo al que vende una cantidad que él no hubiera pedido, entregara la cosa al comprador sin contestar; pues es inescuestiónable que este acto expresa su aceptación y consentimiento de modo que nada deja que desear.—A. B., parte 2, tit. 1, cap. 1.
vos, con otras excepciones que con respecto a los términos y a
las cláusulas penales hacían indispensables la naturaleza y ob-
jeto de los contratos del comercio, de las que nos haremos car-
go cuando tratemos de su cumplimiento.

SECCION TERCERA.

De la interpretación de los contratos mercantiles.

112. Es un principio en materia de convenciones, que nadie se obliga a más de lo que ha consentido, y que nadie puede atribuirse otra intención que la manifestada al celebrar el contrato, cuya escritura, y los términos en que se halle redactado, serán el único medio de conocer la voluntad de los que lo hayan celebrado; por lo que, cuando esté bien manifiesta, deberá cumplirse segun se halle expresada, sin necesidad de interpretación (1).

Pero como puede suceder que el escrito esté concebido en términos poco claros, ó que su redacción acaso dé á entender otra cosa distinta de la que debió ser la intención de los contratantes, según la naturaleza del contrato y el fin que en él se propusieron; y como es tambien un principio reconocido que los asuntos mercantiles deben decidirse, la verdad sabida y buena fe guardada, preciso es sentar algunas reglas que nos conduzcan con acierto en la investigacion de esta verdad, ó sea en la de la voluntad de los contratantes, atendida la buena fe con que se supone que procedieron (2).

(1) Arts. 247 y 248, y Recurso de casacion de 19 de junio de 1865.

Esta doctrina se encuentra confirmada por varias decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que sientan en principio que lo pactado y convenido es la ley del contrato, y lo que debe cumplirse sin tergiversar sus palabras ni restringir sus efectos. Véanse, además, de las que citamos en esta seccion, el Recurso de nulidad de 4 de agosto de 1848, y los de casacion de 2 de diciembre de 1858, 45 de octubre y 9 de noviembre de 1859, 29 de octubre y 10 de noviembre de 1864.

(2) Recurso de injusticia notoria de 18 de junio de 1867.
113. Las dudas que en esta materia pueden suscitar, deberán nacer de una de estas tres causas: de que se haya omitido alguna cláusula ó expresión esencial; de que se haya redactado con tan poca precisión y exactitud, ó en términos tan confusos, que no se conozca bien la intención de los contratantes; ó de la divergencia que se observe entre los documentos que se presenten para probar la obligación.

114. En el primer caso, como no es de presumir que quieran se quedase sin cumplir por esta causa, ni tampoco que dejaren de expresar su voluntad, si esta hubiera sido que se llevará á efecto de una manera especial y extraordinaria, se supone que se sujetaron á lo que el uso general del comercio tiene ya adoptado, ó á la práctica establecida para casos semejantes en el lugar donde haya de cumplirse (1).

115. En el segundo deberán servir de base para la interpretación de las cláusulas dudosas:

1.° Las que no lo sean y las confesadas y consentidas que puedan explicarlas, porque todas se encaminan á un mismo fin, y debe haber entre ellas ilación y consecuencia; y aun el orden con que estén colocadas, cuanto la última pueda considerarse como aclaratoria de las anteriores (2).

2.° Los hechos posteriores que tengan relación con el punto controvertido alegados contra el que los practicó, porque estos son los que dan á conocer la intención y voluntad con qué ha contratado.

3.° El uso general, ó la práctica observada en casos de igual naturaleza; porque se supone siempre que obraron del modo común y ordinario, cuando no hay términos hábiles para creer otra cosa.

Y 4.° El juicio de personas prácticas, cuando no sea fijo y conocido el uso general, porque no queda otro medio de suplirle, ni de resolver la duda con acierto (3).

(1) Art. 250.
(2) Recurso de casación de 18 de setiembre de 1885.
(3) Art. 249.
Estas dos últimas bases son justamente aplicables á los casos en que se trate de la reduccion de monedas, pesas y medidas, ó de horas y de leguas (1).

116. En el tercero podrá existir la divergencia entre las diferentes polizas ó ejemplares que se presenten de un contrato mismo, ó entre estas y otras posteriores, cuando haya sufrido modificaciones después de celebrado. Las polizas, además, podrán ser de una misma fecha ó de varias; y el contrato podrá también haberse celebrado solo por los comerciantes, ó con intervencion de corredor; y según que hayan mediado todas, ó algunas de estas circunstancias, será diferente la base para su interpretacion.

Cuando las escrituras sean de contratos diferentes, ó de innovaciones que haya sufrido el primero, debe estarse siempre á lo que se insiera de la última, aunque no esté muy explicita; porque consta ya que hubo ánimo de modificar la obligacion primitiva, y debe seguirse la intencion y espíritu marcado en la escritura de innovacion.

Por la misma razon deberá, al parecer, estarse igualmente á la última, aun cuando sean de un mismo contrato, pero de fechas diversas; porque debe presumirse innovada la primera, aun cuando no se haya expresado en la segunda que se extendió con este objeto, si alguna otra circunstancia no hace sospechar lo contrario.

Cuando sean de una misma contrata y fecha, y haya intervenido corredor, es indudable que se debe estar á lo que resulte de los libros de este, como persona imparcial (2).

117. Cuando ninguna de estas reglas pueda ser aplicable, se resolverá la duda contra el que se expresó con oscuridad, ó á favor del obligado, si lo es uno solo como en los asuntos civiles, procurando siempre que el contrato no se deje de cumplir mientras pueda tener lugar una solucion razonable (5).

(1) Arts. 253, 254 y 255.
(2) Art. 251.
(3) Art. 252, y Recursos de casacion de 28 de diciembre de 1864, de 25 de febrero de 1865, y de 15 de enero de 1866.
SECCION CUARTA.

De los modos de extinguirse las obligaciones, y de la responsabilidad que induzca su falta de cumplimiento.

118. Llamamos modos de extinguirse las obligaciones, a los actos en virtud de los que quedan concluidas. El derecho mercantil no ha establecido ninguno especial; pero le son aplicables todos los que el civil tiene prescritos para los contratos en general, salvas las excepciones que indiquemos al tratar en particular de cada uno de ellos (1).

119. Estos modos pueden dividirse en ordinarios y extraordinarios.

Llamamos ordinarios a los que dan por resultado la consumación y el objeto del contrato; y extraordinarios a las circunstancias ó accidentes que extinguen la obligación que proviene de él sin que se haya consumado.

A la primera clase no pertenece más que el cumplimiento, esto es, el pago ó la prestación de lo que se haya prometido.

A la segunda corresponden la remisión, la confusión, la compensación, la extinción de la cosa, la novación, la rescisión, la condición resolutoria, el mutuo disenso y la prescripción (*).

120. Con respecto al primero, hay que examinar quién puede pagar, en qué plazo, el lugar donde se ha de hacer, la cosa objeto de la obligación, y la persona que la ha de recibir.

121. El pago puede ser hecho por el deudor que tenga la libre administración de sus bienes, y no se halle ligado con alguna prohibición, ó por cualquiera otro que lo represente ó

(1) Art. 263.

(*) No enumeramos la nulidad entre los modos de extinguir las obligaciones, porque no lo es. El contrato nulo no es contrato. La declaración de nulidad será una prueba de que no ha existido ni ha podido producir obligación; y si no ha habido obligación, claro está que no hay necesidad ni aun posibilidad de extinguirla.
quiera prestarle este servicio, aun cuando no haya recibido orden suya para hacerlo; pero esto solo debe tener lugar en las obligaciones que consistan en dar, y no en las de hacer, cuando se haya contado al contraerlas con las cualidades de la persona que debia cumplirlas.

122. El plazo debe ser siempre el prefijado, porque no se reconocen términos de gracia ni de cortesia; y no es lícito tampoco al deudor anticiparle sin consentimiento del acreedor, como puede hacer por derecho civil; porque el pago anticipado puede alterar las combinaciones del último y causarle perjuicio, sobre todo si no se ha de hacer en el lugar en que resida; por cuya causa en el comercio se supone estipulado á favor de ambos contratantes, y á ninguno se permite renunciarlo (1).

123. Este plazo puede ser convencional, legal y prudencial.

El convencional es el que las mismas partes han señalado. Legal el que la ley designa; y prudencial el que el juez ó los árbitros se ven en la necesidad de fijar, cuando no habiéndole designado las partes mismas, no es posible aplicar tampoco el establecido por la ley, sin violentar la voluntad de aquellos, ó desvirtuar el objeto del contrato.

124. El convencional debe ser preferido al legal, y las obligaciones en que lo haya, todas sin excepción, deben cumplirse el día de su vencimiento (2).

Cuando este no fuese fijo, sino á contar por meses ó años, se entiende vencido el siguiente al de la fecha del mes ó del año á que corresponda, según los que deban transcurrir (3). Mas si estuviera designado con una feria que dure mas de uno.

(1) Arts. 259 y 501.

* Puede considerarse como una excepción de este principio, las obligaciones del quebrado, las que se tienen por vencidas desde que se hace la declaración de la quiebra, y pueden ser pagadas á consecuencia de este juicio antes de su término, bajo el correspondiente descuento.—Artículo 1043.

(2) Arts. 258 y 447.

(3) Art. 444.
habría necesidad de distinguir: 1.° si lo que se ha de entregar es dinero ó mercancías; y 2.° si estas últimas habrán de ser conducidas allí por el deudor para hacer la entrega, ó acopiadas en ella antes de entregarlas; pues si es dinero ó mercancías acopiadas, deberá entenderse vencido en el último día; y si el comprador las quería para volverlas á vender en ella, antes de principiar, ó en el primero, porque esto es lo más conforme el objeto con que se celebró la convención (4).

125. El legal es de diez días después de contraídos, si solo producen acción ordinaria; y al siguiente inmediato de su fecha, si la producen ejecutiva (2); pero también esta regla tiene dos excepciones, que son: el contrato de venta, en el que el vendedor tiene obligación de poner á disposición del comprador los géneros vendidos dentro de las 24 horas siguientes á su celebración, y de entregarlos, si le paga el precio (3), y el de préstamo, en el que no puede exigirse el pago de lo prestado, sin requerir treinta días antes al deudor (4).

126. El prudencial debe ser fijado, teniendo en consideración el objeto del contrato, y las circunstancias que hayan mediado en su celebración.

En todos ellos debe contarse para su cómputo el día en que vengan; pero no el de la fecha en que fueron contraídos (5), y considerarse el día de 24 horas, y los meses según el calendario Gregoriano. Si el día de su vencimiento fuese febreriano, se podrá pedir en el que le preceda, porque en el que sigue se puede ya reclamar judicialmente (6).

---

(1) Art. 446.
(2) Art. 260.
(3) Art. 572.
(4) Art. 390.
(5) Art. 257.
(6) Arts. 256 y 258.

* El mayor ó menor número de días que tengan los meses no influye nada para computar los plazos; así, pues, una deuda contraída el 3 de enero para ser pagada al mes, vencerá el 3 de febrero, habiendo pasado 31 días. Si se contrae el 5 de febrero, vencerá el 5 de marzo, aunque no
127. El lugar debe ser siempre el designado; y si no le hay expresó, se entenderá él del contrato cuando sea bilateral, y el del domicilio del deudor, cuando solo uno resulte obligado (*).

128. Las cosas deben entregarse íntegras; porque exceptuando el caso en que se reclame una deuda en virtud de un vale ó pagaré, en ninguno otro puede ser obligado el acreedor á recibirías en partes, si no se estipuló por pacto expreso (1). También deberán ser las mismas que se hayan prometido; pero como en el comercio hay algunas que pueden muy bien sustituirse por otras de la misma especie y calidad, sin que el acreedor sufra ningún perjuicio, siempre que se le dé la misma cantidad, no debe haber dificultad en que se le entreguen otras equivalentes, cuando concurran en ellas estas circunstancias; sobre todo si las primeras no pueden entregarse por haberse perdido ó deteriorado ó por otras causas (2). Esta subrogación nunca podrá ser admitida en las obligaciones de hacer en que haya que tener en cuenta la capacidad y demás cualidades de la persona obligada, como ya dejamos manifestado (núm. 121). Habiéndose pactado la entrega de monedas especificante determinadas, en ellas se debe hacer el pago,

haya pasado mas que 28; y si se contrajo el 31 de enero, vencerá el 28 ó 29 de febrero, porque el día siguiente ya corresponde á otro mes distinto.

(*) Puede ofrecer duda la inteligencia del lugar del domicilio, si el deudor lo mudase en el tiempo que medie desde la celebración del contrato al de su cumplimiento, y pueden estas dudas ocasionar perjuicios graves en algunas ocasiones. La opinión más común es, que debe hacerse el pago en el nuevo, excepto en los casos en que se reclame en virtud de un documento endosable, en los que debe pagarse en el antiguo, porque de otro modo no podría el acreedor sacar el protexto en el tiempo presijado.

La naturaleza y las circunstancias de las cosas que se hayan de entregar, podrán también servir en algunas ocasiones para conocer el punto en que deben ser entregadas y recibidas.

(1) Arts. 364 y 563.
(2) Art. 569.
corriendo por cuenta del acreedor las alteraciones que pueda
sufrir su valor intrínseco; pero si no media esta condición,
cumplirá el deudor con pagar la misma cantidad nominal en
cualesquiera de las usuales y corrientes por el valor que ten-
gan cuando lo ejecute, excepto en calderilla, de cuya clase no
pueden ser obligados ni el Estado ni los particulares á recibir
mas que las cantidades que autorice la ley ó la costumbre, por
el trabajo y el embarazo que ocasiona el contarla, trasladarla
y custodiarla (1).

Estando estipulado el pago en monedas extranjeras, ó en
pesos y medidas que no sean corrientes en el país donde se
ha de cumplir el contrato, se reducirán por convenio de las
partes, ó juicio de peritos si entre si no se conforman, á las que
circulen y estén en uso para los contratos de igual natura-
leza (2).

429. La persona á quien se ha de pagar es siempre el
acreedor que no esté incapacitado para cobrar, ó á su repre-
sentante legítimo; pero también hay que advertir con respec-
to á este particular, que cuando se trata de obligaciones cuyo
cumplimiento se exige en virtud de un documento endosable,
se presume legítimo el pago hecho al portador en la época de
su vencimiento, sino ha precedido embargo en virtud de de-
creto judicial, como veremos al tratar de las letras de cambio;
y que cuando el acreedor no está presente, ó aunque lo esté,
se niega á recibir lo que se le haya de entregar, ó se duda de

(1) Art. 2.° del Real decreto de 27 de junio de 1852.
Las cantidades que autoriza este Real decreto son: 500 rs. en
las sumas de 10,000 inclusive arriba; 200 en las que no lleguen á esta can-
tidad y pasen de 5,000; 100 desde la de 5,000 á la de 1,000 ambas in-
cclusive; la décima parte del valor total en las inferiores hasta 20 rs. y
el todo desde 20 rs. abajo.
(2) Arts. 233 y 392.
La moneda extranjera cuya circulación no se halla autorizada, se
entrega y recibe solo como pasta ó metal en barras. Es una mercancía
como las demás, y el deudor tiene que entregar siempre la cantidad
prometida, aunque su valor legal sufra alteraciones.—A. B., parte pri-
mera, lib. 2, cap. 1.
su legitimidad, ó de la identidad de la persona, puede consignarse ó depositarse ante la autoridad lo que deba recibir, y extinguirse de este modo la obligación. Siendo muchos los acreedores y la obligación solidaria á cualquiera de ellos, puede pagarse válidamente (1).

450. Los medios extraordinarios no pueden ser tratados aquí con la extensión de que son susceptibles, porque no todos tienen lugar en todos los contratos ni reconocen unas mismas causas, ni producen siempre los mismos efectos, y no pueden por lo tanto concebirse bien ni las disposiciones especiales de la ley mercantil, ni las razones en que se fundan, sin conocer antes la naturaleza y objeto de las negociaciones á que se aplican; por esta razón nos limitaremos ahora á sentar algunos principios para darlos á conocer, y á marcar las diferencias mas comunes y notables, reservando para cuando tratemos de los contratos en particular el hacer mérito de las excepciones que son peculiares á cada uno de ellos.

451. Con respecto á la novacion, mutuo disenso y condición resolutoria, nada tenemos que advertir. El principio de que las obligaciones deben cumplirse como se hayan estipula-

(1) Art. 496.
* Cuando la obligación consista en hacer, no puede tener lugar el depósito ó consignación; pero puede suplirse por medio de una interpelación formal hecha al acreedor, la que producirá cuando menos el efecto de conservar el obligado su derecho para pedir lo que se le prometió en recompensa, quedando ó no libre de prestar el servicio según las circunstancias.—M. Eixalá, lib. 4, cap. 5, art. 2.

Cuando un deudor tenga varias deudas con un mismo acreedor, y la cantidad que le entregue no alcance á cubrirlas todas, se aplicará á la que elija el deudor; si este no la elija, á la que designe el acreedor, y si ninguno ha dicho nada, á la mas gravosa. Esto es lo que dispone el derecho civil; pero en el mercantil cesan en parte sus razones, y por lo mismo opinamos con el Sr. V. y Caravantes, que cuando la cantidad entregada no alcance á cubrir toda la deuda á que se aplica, puede el acreedor oponerse, porque de otro modo se le obligaría á cobrar por partes; y con el Sr. A. B., que cuando el crédito devenge réditos, debe entenderse entregada primero, para el pago de estos.
do, y el de que nada hay mas natural que el que se disuelvan y modifiquen del mismo modo que se han contraído, son exactamente aplicables á las negociaciones civiles y comerciales; y no ha habido, por lo mismo, necesidad de establecer entre ellas ninguna diferencia, considerándose extinguidas por ambos derechos siempre que se han subrogado otras en lugar de las primeras, ó que los interesados han convenido mutuamente en que no se cumplan, ó por condición expresa del contrato, ó por un pacto posterior. Solo para el caso en que subsistiendo la obligación se mude la persona del acreedor en los créditos que no se trasmiten por endoso, es para el que se han dictado las disposiciones que veremos al tratar de las ventas aleatorias (\(^\)).

152. Lo mismo debemos decir de la confusion, que si bien no está fundada en el mismo principio, reconoce otro no menos general y cierto, como la imposibilidad y contradicción que resulta de que una misma persona sea á la vez el deudor y el acreedor (\(\)\(^\)\)). Pero los demás ya no se encuentran en el mismo caso.

(\(^\)\) En los documentos endosables hay en cierto modo una novacion que pudiera considerarse como peculiar del derecho mercantil; porque aun cuando la obligación de pagar no se altera, en cada endoso hay un cambio de personas y se trasmite la propiedad á un nuevo acreedor. Pero nosotros no tenemos esto por innovacion, sino por una condición ó circunstancia particular, consentida en el acto mismo de la celebración del contrato, en el mero hecho de convenir en que se expida para hacerlo contar, y exigir su cumplimiento, un documento á la orden; pues desde entonces se sabe ya que es incierta la persona del acreedor, y que recaerá este concepto en el que últimamente haya adquirido este documento. Además de que en los endosos mas bien se celebra un nuevo contrato, que una innovacion del primitivo; y la prueba está en que el endosante que antes solo tenía el concepto de acreedor, adquiere después el de deudor, sin perder de todo punto el primitivo, ó lo que es lo mismo, sin perder el derecho de reclamar contra el librador y aceptante, como veremos en su lugar oportuno.

(\(\)\(^\)\)\(^\)\) Algunos autores opinan que el endoso de la letra de cambio no vencida hecho á favor del aceptante, no extingue por confusión el derecho de cobrarla, porque puede este volverla á endosar quedando sub-
433. La remisión o condonación puede ser total o parcial, según que se haga por el todo ó por una parte de la deuda; y expresa ó tácita, según que se haya concedido con palabras claras y terminantes, ó por hechos que la den á conocer, como devolviendo ó rompiendo el documento que la acredita con ánimo de no reclamarla (1). Pero el derecho mercantil reconoce además como una condonación tácita de los réditos, el acto de expedir el recibo de pago de la deuda principal, sin reservarse expresamente el derecho de pedirlos (2); y la hecha á uno de los deudores en las obligaciones solidarias, la que es extensiva y aprovecha igualmente á todos los demás en los documentos endosables, y aun en las deudas ordinarias, cuando no se expresa otra cosa al tiempo de concederla.

Y si por remisión entendemos lo mismo que quitamiento, como dice la ley de Partida (3), también puede considerarse como otra excepción mas la concedida á los quebrados por la

sistente la obligacion del librador y de los endosantes anteriores, y por consiguiente, que debe este caso considerarse como una excepción de la regla general.

(*) Por el acto de devolver ó romper el documento en que conste la deuda, no parece que deben entenderse condonadas mas que las que pasen de 1,000 rs. ó de 3,000 si se han contraído en feria; porque para las que no excedan de esta cantidad no es necesaria esta prueba. Así opinan algunos autores, pero no estamos conformes con su parecer, porque en este modo de extinguir las obligaciones no debe atenderse tanto al acto mismo como á la intención con que se ejecuta, y constando que se había roto ó devuelto con ánimo de no reclamarla, no nos parece justo que la pidiera de nuevo valiéndose de otro medio para justificarla, ni tampoco que el deudor dejara de satisfacerla, aunque la cuantía pasara de los 1,000 ó de los 3,000 reales respectivamente, y si hubiese roto ó extraviado el recibo, ó se le hubiese entregado confidencialmente y no con ánimo de perdonarla, siempre que el acreedor lo justificara por otro medio. Esta es, al menos, la decisión de la ley 9.ª, tit. XIV, part. 5.ª, y lo que exige la buena fè con que deben cumplirse las obligaciones mercantiles.

(1) Art. 403.
(2) Art. 547.
(3) Ley 1.ª, tit. 14, partida 5.ª
junta de acreedores, que es obligatoria hasta para los que no han consentido, y está sujeta a reglas especiales; mas nosotros creemos que la condonación ó remisión es un acto voluntario que no debe confundirse con la rebaja que el acreedor de un quebrado se vé en la necesidad de hacer por acuerdo de la mayoría, á pesar de la que conserva su derecho íntegro para repetir contra los demás codeudores, si los hay, según vemos al tratar del reembolso de las letras de cambio y de las quiebras.

154. En la compensación han de concurrir las circunstancias de ser los dos créditos ciertos, líquidos, puros, vencidos, y de igual especie y cualidad, como en los negocios comunes. Pero es preciso además que competan el uno á la misma persona que la alega, y el otro á la que reclama y contra quien se opone; y esta regla ya tiene dos excepciones tan fundadas como necesarias en las obligaciones mercantiles, que son:

1.ª La de los créditos no endosables, cuya enajenación no ha sido todavía notificada en forma, ó consentida por el deudor extrajudicialmente; en los que, aun cuando es el verdadero dueño el que los presenta y los reclama, puede oponérsela la compensación de la deuda contraída por el cedente antes de hacer la cesión, porque cabe la sospecha de que la hizo fraudulentamente para retardar y eludir el pago; pero no la contraída después de notificada ó consentida, porque con respecto á esta ya no puede tener lugar dicha presunción (1).

Y la 2.ª, en los documentos endosables, en los que todos los endosantes, contra los que se dirija la reclamación, pueden alegar la compensación no solo de sus créditos, sino también la de los del pagador y librador, y de todos los que les precedan en el orden de los endosos; porque aunque son deudores solidarios, lo son á la vez subsidiarios ó fiadores de los que les preceden, y pueden oponerla por este concepto (2).

(1) Art. 382.
(2) Art. 545.
455. Con la extinción ó pérdida de la cosa y la imposibilidad de ejecutar el hecho prometido, también concluye la obligación, y aun hay casos en que cesa toda responsabilidad; pero este modo de concluir la exige, en primer lugar, que la cosa sea específica y determinada, e identificada de manera que con ninguna otra pueda confundirse, y no de las fungibles que no se hayan pesado, numerado ó medido; en segundo, que esté cumplido el plazo en que deba hacerse la entrega, y que el que la ha de recibir la haya visitado, gustado, y dado por contento, cuando por pacto expreso, por uso del comercio, ó por disposición de la ley, deba preceder esta diligencia á su recibo; y en tercero, que no haya habido morosidad ni tardanza por parte del deudor, y por consiguiente, que la haya puesto á disposición del acreedor dentro del plazo en que la debiera entregar (1).

Cuando se han llenado estos requisitos, suelen en algunas ocasiones no solo quedar exento de responsabilidad por su parte, sino conservar además su acción expedita, para reclamar de la otra lo que le prometió en cambio; pero esto no puede sentarse como regla general, ni aunque se haga distinción entre las obligaciones de dar y las de hacer; porque en algunos contratos mercantiles tienen lugar otras excepciones, que veremos al ocuparnos de ellos.

456. La rescisión es, sin duda, entre los medios extraordinarios, uno de los que están sujetos á más variaciones; porque la naturaleza misma de los negocios mercantiles la autoriza, y aun hace indispensable en algunos casos. Comunmente tiene lugar por la morosidad, ó tardanza y por el vicio ó menoscabo de las cosas; pero se admite también por otras causas tan diversas como el objeto y las circunstancias de cada contrato, y no siempre produce tampoco los mismos efectos. No es, por tanto, posible establecer principios fijos para su aplicación, y tendremos que ocuparnos de nuevo de ella en cada uno de los contratos en que puede tener lugar.

(1) Art. 366 y 367.
TOMO I.
debiendo sentar aquí, sin embargo, como regla general, que en el comercio no se concede nunca por lesión enorme ni enormísima (1), ni tampoco por via de restitución, aunque el interés de la negociación recaiga en menores; porque se opone al carácter distintivo y a la naturaleza de las operaciones de comercio, como se ha insinuado al tratar de los que se dedican á esta profesion (núm. 13) (2).

137. Ultimamente, la prescripción considerada como medio de extinguir las obligaciones por la morosidad del acreedor, se encuentra todavía mas justificada que en el derecho civil; porque el interés general del comercio exige, no solo que no aparezcan inciertos los derechos por un tiempo ilimitado, sino que el acreedor sea tan puntual en pedir como el deudor en pagar. Por esta razón, ninguna se establece que tenga plazos mas largos que las civiles; pero si otros mas breves y aun brevísimos, y todos fatales, sin que tenga lugar en ellos el beneficio de la restitución por ninguna causa, título, ni privilegio; porque la naturaleza misma de algunas negociaciones, la celeridad con que se celebran otras, la multitud de las responsabilidades que á algunas se agregan por garantía, y los accidentes y riesgos que pueden sobrevenir en ciertas ocasiones, convierten á veces el derecho de pedir en obligación de reclamar, y requieren con frecuencia que haya exactitud en exigir el cumplimiento, á fin de evitar por este medio los fraudes y perjuicios á que en otros casos se podría dar lugar (3).

La enumeración de todas ellas sería un trabajo ajeno del objeto que por ahora nos proponemos, que es solo el de dar á conocer este medio de extinguir las acciones, sin entrar en el examen de cada una en particular: por lo que nos limitaremos á sentar algunos principios generales y comunes á todas, que son:

1.° Que aunque la ley mercantil establece que todas las

---

(1) Art. 378, y sentencia del Consejo Real de 4 de marzo de 1857.
(2) Arts. 4 y 346.
(3) Art. 580.
acciones prescriban en el tiempo que les corresponda, atendi-
da su naturaleza según el derecho civil, cuando no tengan al-
gun plazo especial determinado, esta regla, mas bien que ge-
neral, debe considerarse como supletoria, porque son tal vez
tantas las excepciones como los casos que comprende (1).

2.° Que estas excepciones tienen lugar en algunas accio-
nes que provienen de la compra-venta, de los documentos en-
dosables, transportes terrestres, préstamos, anticipaciones,
conducciones y otros servicios marítimos, como expondremos
en el tratado de estas convenciones, señalando el tiempo en
que cada una prescribe.

Y 3.° Que se interrumpe por cualquiera reclamacion ó in-
terpelacion judicial, ó por la renovacion del contrato ó del do-
cumento; por lo que es indispensable, para que tengan lugar,
que transcurra todo el tiempo presijado sin que el acreedor
ejercite su derecho, pues si hubo reclamacion ó renovacion,
hay que principiar á contar nuevamente el término desde que
se hizo la última gestion en juicio, ó desde la fecha del nuevo
documento, ó desde el cumplimiento del plazo, si se hubiese
prorogado (2).

158. Para concluir esta materia nos falta solo indicar, que
la obligacion no cumplida por el medio ordinario, ni extingui-
da por ninguno de los extraordinarios, constituye al deudor
en la necesidad de indemnizar al acreedor los daños y perju-
cios que se le ocasionen. Esta indemnizacion puede estar pac-
tada expresamente por via de pena, fijando la cantidad en que
ha de consistir, que sera en tal caso la que se pague, si el
acreedor la reclama presiriéndola al cumplimiento del contra-
to, porque puede elegir entre los dos medios: pero si no se
pactó, que es lo que sucede con mas frecuencia, debe com-
prender no solo el abono del valor que se calcule al objeto
que debió ser entregado, ó al hecho que se dejó de practicar,
sino tambien el lucro ó ganancia que debiera sacar de la ne-

(1) Art. 581.
(2) Art. 582.
gociacion, o lo que es lo mismo, todo cuanto le interese que el contrato se hubiera cumplido como estaba estipulado (1). Pero es necesario tener presente que esta obligación de indemnizar de las utilidades o intereses no principia desde el momento en que incurrió en morosidad el deudor por la falta de cumplimiento, sino desde que el acreedor hizo la reclamación; porque la ley mercantil considera, y con razón, que no puede sufrir perjuicios con la tardanza un acreedor, que pudiendo o estando en su mano, no solicita el pago de su crédito;

(1) Art. 245.
Según las Leyes de Partida, daño es el mal que se hace directamente, y perjuicio o menoscabo, como ellas dicen, el que se causa impidiendo un bien, esto es, la privación del interés ó del lucro. Así pues, por daños y perjuicios se debe entender la pérdida que se sufre y la ganancia que se deja de hacer por culpa de otro. Pero estas dos veces generalmente se confunden y se usan como sinónimas, aunque expresan ideas diferentes, y en este concepto las vemos también empleadas en el Código, acaso con razón, porque en el comercio todo se hace con intención de ganar, y la privación de la ganancia, que como producto de su capital y de su talento, deja de percibir el comerciante, es un daño directo que se le causa, como el que sufre el propietario a quien se le priva del fruto que debía coger en su heredad. La que se encuentra más frecuentemente usada es la de perjuicios, que es más extensa y comprende en sí misma la de daños; pues si hay razón para exigir la ganancia que se esperaba, con más motivo debe haberla para reclamar la pérdida del capital ó la disminución que este haya sufrido; pero también alguna vez se usa sola la de daños, como en el art. 126, tratando de la responsabilidad del comisionista, que sin causa legal deja de cumplir la comisión aceptada, y en el 168, con respecto al que no asegura la conducción de efectos teniendo órden y fondos con que hacerla; y esta es otra de las razones que nos mueven á decir que el Código las emplea como sinónimas, porque el que sin causa legítima deja de cumplir un contrato, como sucede al que abandona sin motivo la comisión aceptada, y el que obra en representación de otro contra las instrucciones que le haya dado, como lo hace el que despacha una conducción de géneros ajenos sin asegurarlos, teniendo órden y dinero para hacerlo, por la ley mercantil y por la civil están siempre obligados á abonar el quid interes, esto es, el daño que ocasionen y la utilidad que dé de percibir el otro con trayente; y se faltaría á estos principios y resultaría una contradicción entre estos artículos y el 130, en el que se impone la obligación de abo-
y no le concede derecho para percibir intereses, cuando por
su parte incurre también en la misma falta; previniendo por
regla general que los efectos de la morosidad del deudor no
principian hasta tanto que el acreedor le interpela judicial-
mente, ó le intima la protesta de daños y perjuicios ante un
oficial público autorizado para recibirla (1).

nar perjuicios al que no obra con arreglo á las instrucciones recibidas,
si no se emplearan ambas en un mismo sentido.

También se emplea la de riesgos como equivalente á daños en los
arts. 142 y 154, tratando de los fondos que el comisionista remite á su
principal, separándose de sus órdenes, ó emplea sin su consentimiento
en préstamos, anticipaciones ó ventas al fiado, condenándole en el últi-
mo á correr los riesgos, esto es, á indemnizar de los daños que resulten
y á dejar á favor del comitente las utilidades que produzca la negociación,
lo que equivale á la pena de daños y perjuicios.

Antes de concluir esta materia, debemos advertir que por perjuicios
se entiende sólo las utilidades que debía percibir como resultado inme-
diato del negocio encomendado, y no las remotas, como por ejemplo, las
procedentes de otros en que pudiera haber empleado los fondos.

(1) Art. 261.
CAPITULO II.

DE LAS OBLIGACIONES SIN CONSENTIMIENTO.

139. Las obligaciones no convencionales todas provienen de la ley, que se ve en la necesidad de establecerlas, fundada, unas veces en lo que exige el interés general del comercio, y otras en la equidad ó en un hecho que induce la presunción de un consentimiento que nadie dejaría de prestar en términos generales y ordinarios.

De lo que exige el interés del comercio dimanan todas las que hemos visto que el ejercicio de su profesion impone á los comerciantes y á algunos agentes auxiliares, y otras de la misma especie como la que tiene el que recibe una comision, de contestar á correo seguido si no la quiere admitir (1), y la de aquel á cuyo cargo está girada una letra de cambio, de manifestar que no quiere aceptarla ó pagarla, como veremos al tratar de estos contratos (2).

140. De la equidad y del consentimiento presunto nacen los cuasi-contratos. En el derecho mercantil no se encuentran mas que tres disposiciones que merezcan este nombre, que son: la aceptacion y pago de las letras de cambio por intervención, la distribucion y pago de las averías, gastos y daños procedentes de algun riesgo de mar, y las quiebras.

El que, sin estar librado á su cargo, acepta ó paga á su vencimiento una letra protestada, no puede dudarse que presta un servicio particular al librador y endosantes; y como seria el colmo de la injusticia que no le reintegaran de los intereses que por ellos hubiera desembolsado, á pretexto de que lo había hecho oficiosamente y sin su consentimiento, la ley le concede los mismos derechos que competian al tenedor á quien pagó, y en cuyo lugar se subroga (3).

(1) Art. 420.
(2) Art. 455.
(3) Art. 531.
Los riesgos y peligros de mar también es incuestionable que ocasionan a veces gastos y daños que redundan en beneficio de todos los interesados en la nave y en el cargamento, y aun a veces en el de todas las naves que corren el mismo riesgo, como sucede en el primer caso con lo que se paga, y lo que se arroja deliberadamente al mar para salvarla, y en el segundo, con el buque que se echa a pique en un incendio en el puerto para salvar los otros; y como no sería justo tampoco que soportaran las pérdidas solo los que las hubiesen sufrido, y los demás se aprovecharan de los beneficios que provenían de ellas, la ley establece del mismo modo, que se distribuyan y repartan entre los interesados en los buques y en los efectos salvados, introduciendo entre unos y otros una especie de comunión y participación proporcional, desde el momento en que principia el riesgo, por el interés que todos tienen en evitarlo (1).

En las quiebras indudablemente nacen derechos y obligaciones recíprocas entre los acreedores, desde que el comerciante se constituye en este estado.

141. Estos cuasi-contratos mercantiles pueden en cierto modo referirse, el primero, al conocido en el derecho civil con el nombre de negotiorum gestor, o sea del que administra bienes ajenos sin mandato; y los dos últimos, a la comunión de bienes: pero en nuestro juicio no son los únicos casos de la misma especie que pueden ocurrir en el comercio, ni estas las únicas reglas que deben decidirlos.

La administración de bienes ajenos sin que proceda comisión, puede también tener lugar, y dispensar por este medio un comerciante a otro servicios de mayor interés, sin duda, que los que presta al librador y endosante al que paga una letra por intervención, y por lo mismo no creemos que puedan ser desatendidas las reclamaciones que introdujera para ser indemnizado el que con buena fé y con el fin laudable de hacer un beneficio, recogió, custodió y conservó los géneros ó

(1) Arts. 936 al 967.
efectos abandonados, ó practicó otras diligencias semejantes.

Estos servicios aun son más apreciables en el comercio que en los asuntos comunes, por lo que á falta de ley especial deban regirse por las disposiciones del derecho civil; y en su virtud, el comisionista ó administrador voluntario tendrá obligación de continuar en el desempeño de la administración de que se hizo cargo, hasta que el dueño pueda proveer de remedio, y responderá de sus resultados, y el propietario deberá cumplir las obligaciones contraídas por su cuenta, reintegrarle los gastos que haya hecho, y pagarle su comisión (1).

Aunque no con tanta frecuencia, también es posible alguna vez que, por herencia ó otro título distinto de la convención, adquieran los comerciantes bienes en común, y que por equivocación ó por error hagan un pago indebido; y si estos casos ocurriese, es indiscutible que los dueños tendrían derecho para pedir la división y la rendición de cuentas al que hubiese administrado, y el que pagó, la restitución de lo indebidamente pagado al que lo hubiese recibido (2).

Sentados estos principios con respecto á las obligaciones y contratos en general, pasaremos ahora á tratar de cada uno de ellos en particular, ocupándonos por su órden y según las divisiones que hemos hecho, primero de los preparatorios, después de los constitutivos, y luego de los accesorios que son comunes al derecho civil, y por último, de los especiales del comercio.

(1) Ley 26, tit. XII, partida 5.
(2) En los préstamos á la gruesa y ajustes de dependientes que llevan parte en las utilidades, también hay comunión de intereses; pero esta proviene del pacto ó de la convención, y no corresponde á los cuasi-contratos.
TITULO SEGUNDO.

Contratos que preparan otras operaciones mercantiles.

CAPITULO PRIMERO.

COMPANÍAS MERCANTILES.

142. Llamamos compañía mercantil, el convenio que dos o más personas hacen de poner en común sus bienes, su industria o algunas de estas cosas, con el objeto de obtener algún lucro, aplicándolas a operaciones del comercio. A los que lo celebran se les da el nombre de sócios, distinguiendo con el de capitalistas a los que solo ponen el caudal, y con el de industriales a los que ponen su industria o su trabajo (1).

Como es un contrato en el que pueden intervenir muchos de los que no todos querrán, ni aun podrían acaso aunque quisieran, tomar igual parte, ni obligarse de un mismo modo, se presta más que otros a las modificaciones que le quiera imponer la voluntad de los que lo celebran; las que no solo dan mas ó menos extension a las obligaciones de los asociados, sino que á veces las producen diferentes.

Estas modificaciones que no dejan de ocurrir en los convenios civiles, son todavía mas frecuentes y de mas importancia en los de comercio, en los que por la naturaleza de sus actos, y por el interés de estos, dan diversa forma á las compañías; y por esta causa, aun cuando por regla general está declarado que les son aplicables las disposiciones del derecho

(1) Art. 264.
común, salvas las excepciones y restricciones de la ley mercantil, son tantas las modificaciones que esta se ha visto en la necesidad de introducir, que ha dejado casi sin aplicación aquel principio, y las ha reglamentado de manera, que esta materia es hoy uno de los tratados más importantes de este derecho. Nosotros vamos á ocuparnos de ellas examinando las diferentes clases que reconoce; las formalidades, requisitos, derechos, obligaciones, prohibiciones y responsabilidad de los sócios en cada una; y los modos de rescindirse, disolverse y liquidarse, que son comunes á todas (1).

SECCION PRIMERA.

De las diversas clases de sociedades mercantiles,
y de los requisitos comunes á todas.

145. En la formación de las asociaciones mercantiles puede suceder, ó que todos los sócios se convengan en formar un fondo común que manejen por si mismos, garantizando con sus personas y bienes el resultado de los negocios á que lo destinen, para inspirar más confianza á los que traten con ellos; ó que se comprometan solo á formar el capital poniendo cada uno su parte sin obligarse á dirigirlo, ni á responder de las resultados de los negocios que se celebren mas que con lo que pongan en fondo, y sin mas crédito ni garantía que el que pueda alcanzar este fondo mismo y los beneficios que se le acumulen; ó que haya unos que pongan los intereses, y otros que se encarguen de administrarlos, y de responder personalmente y con su crédito de las operaciones que ejecuten.

144. Estos son los tres modos ó formas bajo las que pueden celebrarse las asociaciones mercantiles, y estas son las tres únicas clases que la ley reconoce, estableciendo las reglas á que deben sujetarse; pues aunque hay otra llamada acciden-

(1) Art. 264.
tal ó de cuentas en participación, no es en realidad compañía de comercio, ni tampoco corresponden á esta clase las de seguros mútuos, como veremos mas adelante (').

La diferencia principal que existe entre ellas, procede de la obligación que contraen las personas que las forman, y la circunstancia que las distingue, de que en la una todos se obligan solidariamente. esto es, se comprometen á responder de todas las operaciones de la compañía, no solo con los bienes puestos en el fondo común, sino con cualquiera otros que les pertenezcan: en la otra, ninguno de los asociados contrae esta obligación ni se compromete mas que con la parte que se obliga á poner en la masa social; y en la última, responden con todos sus bienes los que administran, y los que han formado el fondo solo con la parte que han puesto en el mismo.

La primera se llama colectiva regular, porque es la que mas se conforma con el objeto de toda asociación, se aparta menos de las disposiciones del derecho común, y es como el tipo principal, pudiendo las demás considerarse como excepciones suyas. Es circunstancia esencial en ella, que todos los sócios se obliguen solidariamente.

La segunda se llama anónima, no precisamente porque no tenga nombre con que ser conocida, sino porque es mas bien una reunión de capitales que de personas, y no se designa con el de ninguno de los asociados, porque ninguno se obliga con todos su bienes (1).

La tercera, que es un compuesto de estas dos, se llama en comandita, denominación que corresponde al acto que la constituye, en virtud del que los dueños de los fondos encargan o encomiendan á otros su administración. Pero es necesario que conste explícitamente esta circunstancia, porque esta sociedad se separa menos de la primera, y en caso de duda debe suponerse colectiva y á todos obligados solidariamente (2).

(*) Véase el contrato de Seguros tit. V, cap. 1º.

(1) Art. 278.

(2) Art. 165.
145. De cualquiera de estos modos que se constituya, es siempre indispensable que haya fondos que emplear, y personas que los administren. Mas como una vez creadas con las formalidades prevenidas, no solo producen obligaciones entre los que las forman, sino que resulta además de esta asociación una persona jurídica distinta de los individuos de que está compuesta, un nuevo comerciante, por decirlo así, representado por los administradores del caudal común, con los mismos derechos y obligaciones que cualquiera otro, con la capacidad legal necesaria para contratar, no solo con los extranjeros sino también con los individuos de que está compuesta, y que tiene además su crédito y su domicilio particular, es de necesidad que se formen con ciertas solemnidades que son peculiares a estos convenios, y diferentes de las que por regla general hemos dicho que intervienen en los demás contratos, y que tengan un nombre que las identifique y distinga; de lo que se deduce, que son requisitos esenciales y comunes a todas, las formalidades con que se deben celebrar, su nombre o denominación, el fondo social, su administración, y los derechos y obligaciones de los socios; pero como todos están sujetos a diferentes reglas en cada una, no nos ocupamos aquí más de ellos, por tener que hacerlo en las secciones que se siguen.

SECCION SEGUNDA.

De las sociedades colectivas.

146. Es colectiva la sociedad que se constituye bajo pactos comunes a todos los socios, que participan de los mismos derechos y obligaciones en la proporción que establezcan (1).

En su creación deben concurrir las circunstancias y condiciones que hace indispensable el objeto con que se forman; y la ley para conseguirlo ha dictado reglas especiales para su

(1) Art. 265, párrafo 1.°
formación, y para la de su nombre, capital y administración, concediendo é imponiendo á los sócios derechos y obligaciones que no tienen en las demás, como veremos al examinar sus disposiciones, dividiendo esta materia en párrafos para tratarla con más orden y claridad.

§ I.

Solemnidades y requisitos con que deben formarse las sociedades colectivas.

147. Las solemnidades se exigen para hacer pública su existencia, y dar á conocer la obligación que contraen los asociados; y los requisitos para evitar fraudes y perjuicios á estos mismos entre sí, y á los extraños que traten con la sociedad.

Las solemnidades son:

1.º Que se consignen en escritura pública, otorgada con las formalidades del derecho (1). El proyecto ó convenio de reunirse en sociedad, consignado en un documento oficial ó privado, solo producirá el efecto de obligar á los que lo celebren á que otorguen la escritura y formen la compañía con las solemnidades necesarias (2).

2.º Que se tome razón de ella en el registro público del comercio de la provinicia donde se forme, y de cualquiera otra en que tenga casas ó establecimientos mercantiles, remitiendo una copia de dicho registro al tribunal ó juzgado á que corresponda, para que lo fije en su secretaría y lo anote en sus asientos (3).

3.º Que se inserten en este registro las cláusulas que el interés del comercio exige que tengan publicidad, y sean conocidas de todos, como son, la fecha de la escritura y el nombre y domicilio del escribano; los nombres, apellidos y domi-

(1) Art. 284.
(2) Art. 285.
(3) Arts. 22, 31 y 291.
cilios de los socios; el nombre o razón social de la compañía; los de las personas autorizadas para administrarla, y la duración de la sociedad, si tiene tiempo determinado (1).

4. Que todas las adiciones, modificaciones y reformas que sufra el contrato, una vez celebrado, se consignen del mismo modo en escritura pública; y que se registre y publique como la primitiva, cuando se altere alguna de las cláusulas que consten en el registro hecho y publicado (2).

Si falta alguna de estas formalidades, no puede tener existencia legal, ni ser conocida la persona jurídica, y por eso son tan necesarias, que si se omiten, no hay acciones sociales, aun cuando los que hayan celebrado estos convenios deban responder de las gestiones practicadas por las personas que autoricen para administrar, a los terceros interesados que hayan contratado con ellas; añadiendo, que si la falta consiste en dar principio a las operaciones celebrando actos de comer-

(1) Art. 290.

* No enumeramos entre los requisitos que se han de insertar en el registro de las sociedades colectivas el capital social, porque no está comprendido en el art. 290, que solo habla en el n.º 5 de las cantidades entregadas o que se hayan de entregar por acciones o en comandita, y ninguna de estas circunstancias concurre en las sociedades colectivas. Sin duda no se ha creído necesaria su publicación en el registro, porque en estas compañías no es solo el capital social el que responde de las gestiones de la compañía, sino también todos los demás bienes de los socios, en virtud de la obligación solidaria que contraen.

(2) Arts. 289 y 292, y Recurso de injusticia notoria de 10 de marzo de 1865.

** El art. 292 exige en su segunda parte, que se registre y publique la escritura adicional, siempre que se altere o modifique alguno de los requisitos que expresa el 286, que son todos los que debe contener la escritura; previniendo que cuando no se haga novedad en ellos, será suficiente que se exprese así en el testimonio que ha de presentarse al registro; pero indudablemente está equivocado, pues según el 290, no es necesario que consten todos ellos en el registro: y si no todos deben registrarse, parece lógico que las escrituras adicionales que no alteren los registrados, no necesiten tampoco registrarse ni publicarse. Presumimos que por equivocación se ha citado el art. 286 en vez del 290.
ció antes que se haya otorgado la escritura, incurren además en la multa de 10,000 rs. (1).

148. Entre los requisitos hay unos que son igualmente in-

(1) Arts. 285, 287 y 288.

Las disposiciones del Código relativas a los efectos que deben producir la falta de escritura pública en la formación de las compañías mercantiles y de la toma de razón en el registro público del comercio, no son ni tan extensas ni tan explícitas como exigia la importancia de la materia. El art. 285 dispone en su segunda parte, que mientras el convenio ó proyecto de asociación no se haya reducido á escritura pública, otorgada con las solemnidades de derecho, no es eficaz ninguna acción que se intente ni á nombre de la sociedad ni de los asociados, por los derechos que respectivamente les competan, aun cuando dicho proyecto se haya consignado en documento privado, quedando excluida si se intenta, tan luego como se excepcione esta falta; y el 28 declara, que ni las mismas escrituras, después de otorgadas con todas las solemnidades, produzcan todavía acción para demandar los derechos reconocidos en ellas, si no se toma la razón en el registro general del comercio, sin que por esto dejen de ser válidas y eficaces á favor de los terceros interesados que hayan tratado con la sociedad; de modo, que según el resultado combinado de estos dos artículos, los terceros interesados que traten con la sociedad pueden ejercitar sus derechos contra ella, habiéndose otorgado la escritura, aun cuando no se haya presentado en el registro para la toma de razón; los socios no pueden reclamar los suyos faltándole este requisito, y si no se ha otorgado la escritura, ni la sociedad ni los asociados podrán entablar reclamación que no sea eludida en cuanto se alegue esta falta por el demandado: pero nos falta ahora saber si la sociedad podrá ejercitar sus derechos contra los extranjos habiendo escritura, así como estos pueden ejercitar los suyos contra ella; si podrán estos extranjos ejercitar también los que les competan, aunque no se haya otorgado la escritura social, y si en los casos en que no se concede á la sociedad ni á los asociados acción eficaz para reclamar sus derechos, les quedará algún otro recurso para pedir lo que hayan entregado, ó las anticipaciones y gastos que hayan hecho. Estas tres cuestiones, cuando menos, pueden suscitarse en virtud de estas disposiciones, y de hecho se suscitan algunas por otros autores.

A nuestro modo de ver, mientras la sociedad no se ha constituido con todas las formalidades prevenidas, no existe la persona que la ley se propuso autorizar para el comercio, se encuentra en el mismo caso que las inhábiles para comerciar, ó hay al menos mucha analogía entre ellas, y deberían sujetarse sus contratos á las mismas determinaciones, decla-
dispensables, con otros que podrán intervenir ó no, según las condiciones con que se celebre.

Son esenciales:
1.° Los nombres, apellidos y domicilio de los otorgantes:
2.° El capital con que cada sócio ha de contribuir:
3.° Las personas encargadas de la administración y de la firma:
4.° La razón social (1).

rando nulos para todos los contratantes los que se hubiesen celebrado entre socios ó con extraños, que sabían que la sociedad no estaba lega-
mente constituida, y válidos á favor de aquellos, ó ineficaces para esta,
cuando los extraños hubiesen procedido en la creencia de que estaba for-
mada con todas las solemnidades. En los artículos que llevamos citados
no se encuentra enteramente sancionada esta doctrina, sino que se ob-
serva una tendencia marcada á favorecer los derechos de los extraños,
y á desvirtuar los de la sociedad y los de los socios, que son los más culpa-
bles y los principales responsables de estas omisiones; y nos parece que
se puede decir, con respecto á las dos primeras, que la sociedad no tiene
acción para demandar sus derechos contra los extraños cuando no ha
sido registrada la escritura, según el espíritu del art. 28; y que estos la
tenían para reclamar los suyos contra la sociedad, aunque no se haya
otorgado aquella, siguiendo el del 285.

En cuanto á la tercera, es necesario convenir en que, siendo nulos ó
debiendo rescindirse todos los contratos que, ó no producen acción, ó
que si la producen, queda ineficaz por la excepción que la ley autoriza
contra ella, la sociedad y los socios podrán utilizar en estos casos los re-
cursos que para todos de la misma clase se hallan introducidos en el
derecho, reclamando por esta medio las anticipaciones, gastos ó desem-
bolsoqu se hayan hecho; porque la prohibición de demandar los dere-
chos reconocidos en el convenio de sociedad, no es posible que autorice
al que contrató con esta para quedarse con lo percibido, á pretexto de
que no se otorgó escritura ó no se tomó razón, ni al sócio que administró
para no rendir cuentas ni devolver los fondos que se le hayan entregado.

Concluimos con una observación más relativa al último párrafo del
art. 285, y es que no nos parece bien aplicada la multa de 10,000 rs.
que se impone á la compañía, por el mero hecho de dar principio á
las operaciones antes de estar otorgada la escritura, porque sin este re-
quisto no hay compañía, y en el caso de incurrir en pena, no sería
esta, sino las personas que ejecutaran las operaciones, y las que las hu-
biesen acordado, las que debieran pagarla.

(1) Art. 286.
La necesidad del primero es tan notoria, que basta indicarlo para conocerla; porque no es posible que haya sociedad ni otro ninguno pacto, sin que se sepan las personas que lo celebran y se obligan, y más en este en que es tan esencial el consentimiento, que nunca se supone contraída por el que no la ha manifestado de un modo explícito, y que hasta los dependientes que perciben en ganancias la recompensa de su trabajo, se entienden excluidos y carecen de la consideración de socios (1). El segundo es indispensable para que conste el capital con que cuenta, que todos contribuyen, y por consiguiente, que no es una sociedad leonina, y que no hay fraude en su formación. El tercero, porque sería inútil que se formara y reunieran los fondos, si no había quien la representara y los invirtiera. Y el cuarto, porque es el nombre con que se le ha de conocer y distinguir, al que va unido su crédito, y el que tiene por lo mismo que formarse con sujeción a las reglas que expondremos.

149. Son accidentales y podrán intervenir ó no según los pactos que los socios estipulen (*):

1.° El domicilio de la sociedad, ó sea el punto en que ha de tener su establecimiento comercial (**).

(1) Art. 269.

(*) Los requisitos que llamamos accidentales todos están comprendidos en los que el art. 286 exige por regla general en todas las escrituras; pero nosotros no lo tenemos por indispensables, ni creemos que su falta induzca nulidad, ni ninguno otro artículo la declara tampoco, antes al contrario corroboran nuestra opinión el 318, 319 y otros que citaremos, en los que se establece el modo de suplirlos cuando se hayan omitido.

(**) El Código no hace mención de esta circunstancia que nosotros tenemos por interesante y necesaria, pues aunque pueda presumirse que se establecerá donde residan los socios, ó donde se otorgue la escritura, sobre todo si es la capital de la provincia en que se registra, puede suceder también que no todos los asociados residan en un mismo punto, que estén domiciliados algunos fuera de la provincia, ó que los que estén dentro de ella residan en pueblos diferentes, y entonces todos tendrían derecho para llevarla á donde mejor les conviniera, sin que sirviera para
2.° La expresión de valor que se dé a los efectos si alguno los lleva a la sociedad, ó las bases bajo las que haya de hacerse el avalúo. Omitiéndose esta cláusula, deberá someterse á juicio de péritos su regulación (1).

3.° La parte de beneficios ó pérdidas que haya de corresponder á cada sócio. Si no se fija, será proporcional al interés que tenga en la sociedad, entendiéndose por interés para este efecto, lo que haya puesto en fondo como sócio, y no los préstamos y adelantos que haya hecho como extraño. A los sócios industriales, para los que no puede servir esta base, se les distribuirá una cantidad igual al menor de los capitalistas, cuando haya beneficios, y nada cuando haya pérdidas, á no ser que expresamente se haya pactado otra cosa (2).

4.° La forma en que ha de dividirse el fondo social, la que se suplirá, cuando no se haya establecido, del modo que diremos al tratar de la liquidación y distribución del haber común.

5.° El ramo de comercio, fábrica, navegación ó objetos para que se forme, cuando los tenga limitados.

6.° La cantidad que se designe a cada sócio para sus gastos anuales, ó las que hayan pactado recibir por cualquiera otro concepto (*)

suplir esta falta la toma de razón en el registro público del comercio de los documentos que prescriben los arts. 22 y 25. El reglamento de 19 de febrero de 1848 exige este requisito como esencial en las sociedades anónimas, y aunque en ellas es más conocida la necesidad, también en las colectivas y comanditarias debía tenerse como indispensable, para evitar las cuestiones á que puede dar lugar esta omisión.

(1) Art. 201.
(2) Arts. 318 y 319.
(*) El Código no dispone el modo de suplir esta cláusula, cuando se haya omitido en la escritura, como lo hace con las demás que llamamos accidentales; pero no por eso debe ser considerada como esencial. Habrá algunas en las que debiera expresarse, como por ejemplo, en las colectivas y en comandita, en que los sócios pongan todos los bienes en la sociedad y no tengan otro medio de subsistir, y las habrá en que no sea necesaria, como sucederá cuando les quede lo bastante para su subsis-
7.° La duración de la sociedad, la que penderá del arbitrio de cada uno de los sócios cuando no tenga plazo fijo, objeto determinado, o otra condición que lo impida (1).

8.° La sumisión al juicio de árbitros para la decisión de las cuestiones que se susciten entre los sócios, la que se entiende siempre estipulada aunque no se haya expresado, debiendo ser nombrados o por los mismos interesados en el término que la escritura o el tribunal les señale, o por este de oficio, si alguno lo deja transcurrir sin haberlo verificado (2).

9.° Todos los demás pactos o condiciones que los sócios
tencia, fuera de lo que hayan puesto en el fondo social. En este último caso, no sería necesaria la cláusula ni el modo de suplirla, porque en el mero hecho de no estipularla, se entiende que nada quisieron sacar porque nada necesitaban. En el primero no puede suceder lo mismo; su omisión debe atribuirse a olvido, y será preciso fijarla por medio de una adición o nuevo acuerdo entre los asociados. Pero la sociedad, entre tanto, subsistirá, serán válidas todas sus gestiones, y producirá derechos y obligaciones sociales.

(1) Arts. 286 y 329, párrafo último.

Los dos artículos que citamos están en contradicción; el 286 en su párrafo 7.°, dice que ha de tener necesariamente un tiempo fijo y objeto determinado, y el 329 en su núm. 6.° y último, reconoce, por el contrario, que pueden establecerse sin que se fije plazo ni se determine su objeto, disponiendo que en este caso se disuelvan por la simple voluntad de uno de los asociados. A nosotros nos ha parecido más justa y equitativa la doctrina del último, que es la que adoptamos; añadiendo que, en el caso de que tengan a la vez objeto y plazo prefijados, parece que a la conclusión del objeto es a la que se ha de atender para proponer la disolución.—Véase la nota del núm. 175.

(2) Arts. 323 y 324.

** La obligación de acudir a jueces árbitros no abraza las cuestiones que puedan suscitarse entre las personas que se hayan comprometido a formar una sociedad, sino únicamente las que se promuevan después de estar legalmente constituida, acerca de sus derechos sociales. Así pues, si la cuestión versara sobre la validez del mismo contrato de sociedad, correspondería a los tribunales decidirla, y no podría obligarse a nadie á que la sometiera al juicio de árbitros contra su voluntad.

Los jueces árbitros deben proceder con arreglo a las leyes de sustanciación en los asuntos que les competan, según el art. 325 del Código; pero en nuestra opinión pueden las partes que los nombran dispensarles
hayan establecido, cualquiera que sea el objeto sobre que recaigan, porque está prohibido hacerlos reservados y contra el contenido de la escritura, no pueden oponer ni documentos privados ni la prueba de testigos (1).

§ II.

Razon y firma social.

450. La razón social es el nombre propio y peculiar de la compañía, y nadie mas que ella puede usarla.

Su eleccion no es arbitraria, porque va unido á ella el crédito, que es tan esencial en el comercio, y que podrá ser mayor ó menor segun las garantias que ofrezca la sociedad y la responsabilidad de los socios; y la ley no ha podido dejar al capricho de estos que le pongan la que quieran.

Debe formarse precisamente de los nombres ó apellidos de los mismos asociados, que son los que han de responder de las resultas de las negociaciones que se celebren, porque si se incluyeren los de otras personas, se cometeria un fraude, suponiendo responsabilidades que no existian. Pero no es preciso que se componga de los de todos los socios, ni que se expresen nombres y apellidos, sino que basta que se incluyan de esta obligacion, y autorizarlos para que procedan como arbitadores y amigables componedores, y decidan sus diferencias sin forma de juicio; porque esta facultad que compete á todos en general por el derecho civil, es tambien muy conforme á la naturaleza de los negocios mercantiles y al espíritu de sus leyes, y no se opone, sino que por el contrario, es acaso mas conveniente en la resolucion de las cuestiones entre personas ligadas por intereses comunes.

En el art. 5.º del proyecto de ley de organizacion para los Tribunales de Comercio, leido en la sesion del Senado de 6 de noviembre de 1863, se suprime este arbitraje forzoso, previo un estenso razonamiento, concediendo á los interesados la facultad de comprometer sus negocios en árbitros ó en arbitadores, en los casos en que no lo prohiba la ley de enjuiciamiento mercantil.

(1) Arts. 287 y 288.
uno ó dos apellidos, que es lo más común, añadiendo luego la palabra compañía. Lo que no se puede permitir es que consten en ella los de personas que no pertenezcan de presente á la sociedad, y por lo mismo sería preciso variarla, reforzando la escritura si muriése alguno de los incluidos, aun cuando se hubiese pactado que continuase la sociedad con los restantes ó con los herederos del difunto (1).

151. La firma la componen la razón social y la rúbrica, y gira siempre bajo este nombre, puesta á cargo de las personas á quienes se concede la facultad de usarla (2).

§ III.

Capital ó fondo social.

152. El fondo social se compone de la parte con que cada socio debe contribuir.

Puede consistir en dinero, mercancías, créditos y en cualesquiera otros objetos apreciables que presten utilidad. Debe formarse en el plazo que se fije; y si nada se pactó, luego que se halle establecida la caja en que ha de ser entregado (3). Cuando consista en efectos ó mercancías, se valuarán del modo convenido ó en los términos manifestados en los requisitos accidentales (4). Si consiste en créditos, no deberán abonarse en cuenta hasta que se hayan cobrado, si no se estipula otra cosa, porque hasta entonces no entra en caja el capital que representan; y si no fuesen efectivos, estará obligado el que los

---

(1) Art. 266.
* La razón social se forma generalmente solo de los apellidos de dos ó tres socios de los de más crédito, porque como es el nombre que precede á la rúbrica, se tardaría mucho en escribir y causaría dilaciones si se compusiera de los de todos los asociados. La fórmula suele ser de «Sanchez, Fernandez y compañía» o otra semejante.
(2) Art. 267.
(3) Art. 303.
(4) Art. 304.
haya puesto á responder de su importe hasta cubrir la parte del capital de su empeño con los réditos que devengue, abonando en todo caso los gastos que haya ocasionado su cobranza. Consistiendo cosas ciertas y determinadas, quedará obligado el que las pone á la evicción y demás garantías que presta el vendedor, aun cuando no sea la propiedad sino el uso solo el que ceda á la sociedad.

153. El retraso del sócio en la entrega de lo que le corresponda, cualquiera que sea la causa de que proceda, da derecho á los demás para excluirle de la sociedad, rescindiendo el contrato con respecto á él, si les conviene tomar esta determinación, ó para proceder ejecutivamente contra sus bienes hasta hacer efectivo el cobro con el rédito legal que le corresponda por su tardanza (1).

154. Una vez puesto en caja, de cualquiera de estos modos, concluye la obligación de cada uno en particular, y ninguno puede ser compelido á aumentarlo, ni á reponerlo, aunque se llegue á perder. El incremento ó disminución que tengan después las cosas y sus valores, serán de la sociedad que es ya el verdadero dueño, excepto el caso en que se le hubiese cedido solo el uso, y aun entonces correrán también por su cuenta los gastos que ocasione su conservación y su administración (2).

155. Por esta causa no es permitido á ninguno sócio volver á sacar el capital que ha puesto, segregar, distraer, ni aplicar los fondos sociales á otros objetos que aquellos para que han sido reunidos; y si lo hace, contraerá la misma obligación y responsabilidad que contraería si no lo hubiera entregado, exceptuando de esta disposición la cantidad que le esté asignada.

(1) Art. 300 y 303, y Recurso de injusticia notoria de 4 de setiembre de 1863.

(2) El sócio en ningún caso puede ser obligado á poner dos veces en la sociedad lo que prometió. Cuando pone solo el uso y perece por su cuenta, podrá haber lugar á la rescisión ó disolución, pero no obligarle á que ponga otra cosa equivalente.—Vicente y Caravantes, art. 502, con cuya opinión estamos conformes.
da para sus gastos, como veremos al tratar de las prohibiciones (1).

§ IV.

Administracion.

156. La administracion en esta clase de compañías corresponde de derecho a todos los asociados, porque es de esencia que se formen bajo pactos comunes; todos se obligan solidariamente, y nada más justo que los que responden con todos sus bienes de las resultas de los negocios, sean los que tengan derecho a ejecutarlos. Mas este derecho, sin embargo, puede ser cedido y delegado a factores ó gerentes, por pacto expreso de la escritura, ó limitado y circunscrito a alguno ó algunos socios, con exclusion de los demás, y si así hubiese sucedido, deberá guardarse lo estipulado, podrán administrar solo aquellos a quienes se autorice, y quedarán excluidos los demás, a no ser que la exclusion comprenda alguno de cuyo nombre esté compuesta la razón social, que en este caso será ineficaz para los extraños que de buena fe traten con el excluido, porque todos los comprendidos en ella se reputan administradores de derecho, y obligarán a la sociedad si administran a pesar de su exclusion, pudiendo aquella reintegrarse de sus bienes propios si la perjudican con sus gestiones (2).

157. Cuando sean muchos los administradores, deberán

(1) Art. 517.
(2) Arts. 268, 304 y 306.

Los factores y los demás dependientes que hemos considerado como agentes auxiliares del comercio, no pueden tener ni el concepto ni la representacion de socios para efecto alguno del giro social, aun cuando se remuneren sus trabajos con parte de las ganancias. Por consiguiente, ni pueden ser incluidos sus nombres en la razón social, ni tener mas derechos, ni mas obligaciones que las expresadas en sus ajustes, estando exentos hasta de devolver la parte de ganancias que en compensacion de sus servicios hayan percibido en las épocas estipuladas, aun cuando despues haya pérdidas, y tengan estas que cubrirse con el capital ó con los bienes de los asociados. Art. 269.
reunirse todos los presentes para tratar y acordar los negocios que se hayan de hacer, y la razón y la prudencia aconsejan que se lleven á efecto y ejecuten los que acuerde la mayoría (*).

Mas como no es justo que la temeridad ó la falta de prevision de unos perjudique á los otros, cualquiera tiene derecho para oponerse y contradecir expresamente el negocio que se intente realizar por la mayoría ó por algun sócio en particular, si lo cree pernicioso, y si se opone y lo contradice, el que, ó los que lo ejecuten, responderán á la masa social de los perjuicios que se le sigan (1).

158. Los que estén excluidos, no podrán usar de este derecho de oposición, ni entorpecer las gestiones, ni impedir los efectos de las que ejecuten los administradores. Pero si estos abusan y causan perjuicios manifiestos á la sociedad, les pueden nombrar un co-administrador que intervenga sus actos, ó promover la rescisión de la compañía ante la autoridad judicial; con cuyo fin se les concede también á todos la facultad de examinar el estado de la administración y contabilidad, y de hacer las reclamaciones que creyeren convenientes, con arreglo á los pactos de la escritura ó á las disposiciones generales del derecho, y siempre que les acomode los documentos

(*) La mayoría para estas resoluciones, puede tomarse ó del número de votos, ó del interés que representen, ó de uno y otro en combinacion. Entre los propietarios de las naves, está declarado que se forme por el interés que representen, y en las quiebras, que se tengan presentes los votos y las cantidades representadas por los votantes; pero en el caso presente no parecen adoptables estas disposiciones excepcionales, y debe tomarse del número de votos solamente, cuando otra cosa no se haya pactado, pues aunque los intereses puestos en la sociedad no sean los mismos, lo es la obligacion solidaria con que todos están ligados, y no hay razón para que se atienda mas al de unos que al de otros; cuando todos contraen la misma responsabilidad, y mas cuando todos tienen derecho para oponerse y contradecir las gestiones, si no quieren exponerse á sus resultados.—A. B. parte 5.ª, tit. I, cap. 2, sec. 5.

(1) Art. 305.
comprobantes de los balances, que se formen para manifestar dicho estado (1).

180. Los gerentes, cuando los haya, tienen la consideración de factores, y les son también aplicables las reglas que hemos establecido al tratar de ellos; pero no pueden ser removidos sin rescindir el contrato, cuando hayan sido nombra-
dos por pacto expreso de la escritura social (2).

160. Los actos administrativos deben siempre ejecutarse bajo la razón social y firma adoptada; pues si se hacen de otro modo, no quedará obligada la compañía, aunque esté autorizado para administrar el que los haya ejecutado, si no se prueba que redundaron en beneficio común (3).

§ V.

Obligaciones de los socios.

161. Las obligaciones de los asociados en estas compañías pueden ser contraídas á favor de la sociedad ó de los extraños que traten con ella. Para con estos últimos no tienen mas que una, que es la solidaria que contraen todos los que la forman, sean ó no administradores, en virtud de la que tienen que pagar con todos sus bienes las deudas de la sociedad, cuando los fondos de esta no alcancen para cubrirlas. Esta obligación es también secundaria y mancomunada, por cuya razón no puede tener lugar sino en defecto de la principal, ó sea cuando hecha escusión primero en los bienes comunes, ó de la sociedad, no hayan alcanzado estos para pagarlas; y el socio que paga á consecuencia de ella, tiene derecho á exigir de los demás la parte que le corresponda, prorrateando entre todos lo que haya satisfecho (4).*

(1) Arts. 307, 308 y 310.
(2) Art. 307.
(3) Art. 265.
(4) Art. 267.
(*/ Esta doctrina está en contradicción con el art. 274 del Código, que dispone: que las colectivas pueden recibir un socio comanditario con
162. Las que tienen para con la sociedad, pueden ser relativas al capital ó á su administración, y quedan ya indicadas en los párrafos anteriores, incluida la de someter á la decisión de árbitros sus contiendas sobre asuntos sociales, nombrándolos en la época designada en la escritura, ó en la que el tribunal le señale (1).

Las relativas al capital consisten:

1.° En poner en caja, luego que esté establecida, ó en el respecto al que rijan las disposiciones establecidas sobre las sociedades en comandita; pero este artículo lo está con el 265 y 267 que previenen, por el contrario, que en las colectivas todos los socios participen de los mismos derechos y obligaciones, y todos se obliguen solidariamente, sean ó no administradores; y nosotros no hemos dudado en sentarlo así como un principio, porque de lo contrario resultaría que en la sociedad colectiva habia un socio que ponía parte del capital sin responder más que con ella de las resultas de su inversión, y otros que la manejaban y dirigían bajo su responsabilidad; con lo que dejaría de ser regular, ó no todos los socios participarían de los mismos derechos y obligaciones, y desaparecía la diferencia esencial que existen entre estas y las comanditarias. En la práctica no encontramos inconveniente en que al formarse una sociedad ó después de constituida, se reforme admitiendo en ella un socio que se obligue solo á poner parte en el fondo, dejando á cargo de los demás su dirección, con la obligación solidaria de sus resultas, y con respecto al que solo deba regir por lo mismo las disposiciones relativas á los socios comanditarios; mas no creemos que esta sociedad pueda llamarse colectiva, como la llama el art. 274, sin destruir los principios sentados antes en el 265 y 267. Confirma esta opinión el Recurso de injusticia notoria de 25 de febrero de 1865.

¿Y podran los socios colectivos conservar un capital separado que no esté sujeto al pago de las deudas de la sociedad, á consecuencia de su responsabilidad solidaria? No encontramos inconveniente siempre que se limite á bienes fijos ó cantidad determinada que no comprenda todos los que le queden después de lo que pone en fondo; que se estipule por pacto expreso de la escritura, y que se registre y publique para que pueda ser conocido; porque haciéndolo así, queda siempre á salvo su obligación personal, que podrá hacerse efectiva en los demás bienes que posea y no están reservados, no se convierte en socio comanditario, y ya se sabe desde la creación de la sociedad que existe la excepción, y que estos bienes no están sujetos á sus resultas.—El Sr. V. y Caravantes, art. 262, se hace también cargo de esta cuestión.

(1) Arls. 323 y 324.
tiempo y forma que se haya pactado, la parte que cada uno haya prometido (1).

2.° En sufrir las pérdidas, si las hay, en proporción al interés que tengan ó a lo que hayan estipulado (2).

163. Las referentes a la administración no alcanzan á los excluidos, si los hay, sino solo á los que tienen derecho á desempeñarla, y se reducen:

1.° A contribuir á la dirección y ejecución de los negocios (3).

2.° A desempeñarlos con el mismo interés, celo y exactitud que los suyos propios.

3.° A llevar los libros de contabilidad y demás que sean necesarios con las formalidades referidas (*)

§ VI.

Prohibiciones.

164. Las prohibiciones tienen por objeto evitar perjuicios á la masa social, é impedir fraudes y abusos en la administración, por lo que no se permite á ningun sócio:

1.° Sacar del acerbo común cantidad alguna, á no ser la que le esté asignada para sus gastos (4).

2.° Aplicar los fondos, ó hacer uso de la firma social para negocios propios (5).

(1) Arts. 300 y 303.
(2) Art. 319.
(3) Art. 304.
(*) Los libros de actas de las compañías mercantiles, de las de seguros y de cualesquiera otras autorizadas por el Gobierno, deben llevarse en papel del sello de 4 rs. Art. 45 del Real decreto citado de 12 de septiembre de 1861.
(4) Art. 317.
(5) Art. 312.
3.° Transmitir el interés que tenga en la sociedad sin permiso de la misma (1).
4.° Hacerse sustituir por otros, sin obtener antes la competente autorización (2).
5.° Administrar estando excluido (3).
6.° Entorpecer ni contradecir las gestiones de los administradores nombrados (4).
7.° Privar de la administración á los que la tengan por pacto expreso de la escritura (5).
8.° Hacer por su cuenta propia negocios mercantiles sin consentimiento de la compañía (6).

165. Esta última prohibición alcanza á los sócios industriales de tal modo, que no les es permitido absolutamente hacer ninguno de ninguna especie, porque deben sus oficios á la sociedad; y todo acto que no redunde en beneficio de esta, es una defraudación (7).

Los demás no están en el mismo caso, aun cuando sean administradores, porque administran por el interés que tienen como capitalistas, y no dejando de concurrir á la dirección de los negocios, ni perjudicando á la masa social, no hay inconveniente en que se dediquen á otros por su cuenta. Por esta causa, cuando la sociedad tiene género de comercio conocido, no necesitan su consentimiento para hacerlos de otra clase diferente, y no puede negárselo, aunque no lo tenga y se haya formado en general para comerciar, á no ser que de concedérselo se le siga un perjuicio manifiesto (8).

En la voz genérica comercio, no se comprenden las manufacturas, y por consiguiente, cualquiera sócio puede dedi-
carse á este ramo de industria por su cuenta, sin necesidad de licencia y sin incurrir en responsabilidad, cuando la sociedad se haya contraído solo para comerciar (1).

166. La de trasmitir á otro el interés que tenga, y la de hacerse sustituir sin autorización, no reconocen ninguna excepción en esta clase de sociedades, porque se forman teniendo en cuenta las cualidades de los consócios, y es posible que un extraño no inspire á los demás la confianza que les inspira el que ellos mismos han elegido; asi, con uno solo que lo resista debe bastar para no concederle el permiso. Mas como puede suceder que alguno tenga deudas, que no pueda pagar con otros bienes que con los que le correspondan en la sociedad, la ley, teniendo presente que los acreedores no se pueden colocar en lugar de su deudor, y que serian muy trascendentales los inconvenientes que resultarian de permitirles retirar del fondo social los intereses de este, no les concede facultad mas que para embargarlos, hasta que se haga la liquidacion, y para percibirlos en el tiempo y en la forma en que los percibiria el deudor mismo, porque este es el único derecho que le asistia, y el que ellos deben ejercitar (2).

§ VII.

Responsabilidad.

167. La responsabilidad se ha establecido para afianzar el cumplimiento de todos estos deberes, ó sean las obligaciones y prohibiciones que dejamos referidas. En substancia, consiste en reparar el mal que causa el que las infringe, y se reduce á la indemnización de los daños y perjuicios. Por regla general esta es la que debe exigirse, mientras que no haya habido aprobacion ó ratificacion expressa ó tacita del hecho que motive la reclamacion, ó cuando no tengan otra expresa y de-

(1) Art. 345.
(2) Art. 296.
terminada; pero como se indica en algunos casos la que ha de ser, y varía según la naturaleza de la falta, diremos la que le corresponde en cada uno de los que la tienen establecida.

168. 1.° La de no poner en el fondo común la parte del capital, da derecho a los que han sido exactos o puntuales, a proceder ejecutivamente contra el moroso, ó a rescindir el contrato y excluirle de la sociedad, según ya hemos indicado. Si eligen el primer medio, tendrá que abonar el rédito legal correspondiente al tiempo que se haya retrasado; y si adoptan el segundo, sufrirá las consecuencias que produce esta rescisión, y expordremos al tratar de sus efectos (1).

2.° La de aplicar los fondos ó hacer uso de la firma social para negocios propios, no solo constituye al que la comete en la obligación de reintegrar los fondos distraídos, con los perjuicios que ocasione, sino que además pierde en beneficio de la sociedad las ganancias que le correspondan, y puede tener lugar la rescisión del contrato con respecto a ellos (2).

3.° La de separar del acerbo común más cantidad que la asignada para sus gastos, le impone el deber de reintegrarlo con los réditos, como si no hubiese completado su porción; y si no lo cumple, autoriza a los demás a separar otra cantidad proporcional al capital que les corresponda (3).

4.° El que hace negociaciones por su cuenta, sin permiso, cuando lo necesite, tiene que llevar al acerbo común las ganancias que resulten de ellas, sufriendo el solo las pérdidas si las hay (4).***

---

(1) Arts. 300, 303 y 327.
(2) Art. 312.
(3) Art. 317.

** Esto debe entenderse, a nuestro juicio, solo cuando lo separado de mas se haya destinado también para sus gastos ó los de su familia; pues si lo ha empleado en otros objetos lucrativos, se halla en el mismo caso que el que aplica los fondos sociales para negocios propios, y debe perder las ganancias y dar lugar a la rescisión, porque cesa la razón que ha tenido la ley para tratarle con más consideración e imponerle menos pena.

(4) Art. 313, segunda parte.

*** El art. 416 establece esta pena alternativamente con la de resci-
5.° La de separar al sócio administrador nombrado en la escritura sin que preceda la rescisión: también lleva consigo la ineficacia de la separación y la obligación de indemnizarle los daños y perjuicios que se le ocasionen.

Algunas de estas faltas dan además lugar a la disolución de la sociedad, como veremos mas adelante.

6.° La de trasmitir sus derechos sin autorización, hace ineficaz la cesión con respecto á la sociedad, que no puede ser compelida, en virtud de ella, a admitir por sócio al cesionario, ni á perder el derecho de exigir del cedente el cumplimiento de las obligaciones que tenga contraídas. Pero no será ineficaz con respecto á estos, sino que el primero adquirirá, no el derecho de ejercer las acciones sociales, pero sí el de exigir del segundo la entrega de cuanto perciba de la sociedad, y este estará obligado á entregárselo ó á abonarle cuanto le pudiera interesar que tuviera cumplimiento el contrato celebrado. Lo mismo deberá decirse cuando no haya hecho una cesión completa de sus derechos, sino solo parcial asociándolo á sí mismo.

§ VIII.

Derechos de los sócios.

469. Los derechos de los sócios son también como sus obligaciones, relativos al fondo social y á su dirección y manejo: nacen después de estar creado al menos en parte, porque
ninguno sin haber cumplido por la suya puede exigir de los demás que llenen los deberes que han contraído, y por esta causa hemos suspendido hasta ahora el tratar de ellos.

Los concernientes á la dirección y manejo de los asuntos, ya los hemos indicado al tratar de la administracion, teniendo solo que añadir que lo tienen todos á ser indemnizados de los gastos que hayan hecho y de los perjuicios sufridos por los servicios prestados á la sociedad cuando procedan inmediatamente de ellos; pero no si los han sentido por su culpa, caso fortuito, ó otra causa independiente de aquellos, aunque hayan sobrevenido mientras se ocupaban en desempeñarlos. Ahora falta que digamos en cuanto al ejercicio de estos derechos, que el de los unos corresponde á cada socio en particular, y el de los otros á la Junta general (1).

170. Los de administrar, no estando excluidos, examinar el estado de la administracion y de la contabilidad, los balances y los documentos que los comprueben; hacer las observaciones oportunas, reclamar gastos y perjuicios, y pedir autorización para comerciar cuando la necesiten; y para ceder sus derechos ó sus intereses, cualquiera puede ejercerlos sin contar con los demás. Mas si se tratara de nombrar ó separar un administrador ó gerente, de modificar los poderes que se le hubieran dado, de poner un co-administrador, ó de promover la rescision de la sociedad, aunque cada uno en particular tenga derecho para solicitarlo, no se podía acordar nada sin tratar antes estos asuntos en junta, y oir el parecer de todos, debiendo prevalecer en estos casos el voto de la mayoría (‘).

(1) Art. 521.

(*) Colocamos entre los derechos de la Junta general el de promover la rescision de la sociedad, porque corresponde á todos los socios, lo mismo que el anterior, según el art. 507, y porque en nuestro juicio este asunto debe ser tratado y resuelto en junta, como todos los que conciernen al interés común de los asociados; pero tampoco creemos que el acuerdo de esta, cuando resuelva que no debe promoverse la rescision y no esté adoptado por unanimidad, es obligatorio para los que la pidieron y quedaron en minoría, porque ninguno puede ser compelido á continuar en sociedad con un compañero pernicioso, teniendo justa
171. Los relativos al capital se reducen a percibir:
1.° La porción que le esté asignada para sus gastos particulares (1).

causa para separarse, y en este caso debe quedarse expedito su derecho para someter el negocio a la decisión de jueces árbitros. Si estos lo atienden y estiman la rescisión, podrá suscitarse otra cuestión más difícil, que es la de si los que formaron la mayoría y votaron contra ella podrán entonces promover la disolución. Algunos autores hemos visto que están por la afirmativa, y de esta opinión participamos nosotros también, fundados en que el contrato social ha sufrido una innovación que podrá no acomodar á los que hayan tomado parte en él por consideración al sócio excluido, y en que no pueden producir buenos efectos las asociaciones en que hay disidencias y discordias entre los que las componen. Pero debemos confesar que el asunto es muy dudoso, y que no es de extrañar, en vista del silencio que guarda la legislación acerca del ejercicio de estos derechos, que se opina con variedad en esta materia y se promueve también la duda, respecto al nombramiento del co-administrador, de si bastará que la junta lo acuerde, se consigne en escritura pública y se tome razón en el registro, ó deberá hacerlo el Tribunal, y en este último caso si lo deberá acordar en cuanto se le pida ó previa audiencia del administrador como interesado. Nosotros no podemos menos de preferir el medio de la escritura, porque se trata de un administrador de bienes ajenos, que no cumple su encargo á satisfacción de los que se lo han confiado, y nada parece mas justo que el que estos puedan adoptar desde luego por sí mismos las medidas que estimen mas á propósito para precaver los perjuicios que en otro caso se le podrian ocasionar. Esto es lo mas conforme a la naturaleza del contrato de que proceden estos derechos, y á la decisión del art. 307 que expresamente concede á los socios la facultad de nombrarlo, y solo previene que acudan á los Tribunales cuando en vez de ejercitar el de nombrar co-administrador prefieran el de promover la rescisión de la sociedad. Mas si á pesar de esto por las discordias entre los asociados ó por otras causas han de tener los Tribunales intervención en estos nombramientos, consideramos muy fundada la opinión de los que desean se creara para estos casos un juicio sumarísimo. Según el Sr. Durán y Bas, en la práctica se observa que el Tribunal nombra sin acrecer ni decrementar derecho bajo la responsabilidad del que lo solicita, previa la justificación de algunos actos abusivos, y despues se sigue un juicio ordinario para su confirmación.

(1) Art. 517.
TOMO I.
2.° Los préstamos ó anticipaciones que haya hecho á la sociedad como cualquiera otro acreedor.

5.° El importe de los daños y perjuicios sufridos cuando tenga derecho á reclamarlos (1).

4.° Las utilidades que le correspondan cuando por pacto ó por costumbre se repartan en épocas determinadas (').

5.° El capital que haya puesto en fondo con sus beneficios ó pérdidas cuando se liquide la sociedad (**) .

(1) Art. 524.

(1') El ejercicio de este derecho no debe ocasionar dificultades en esta clase de compañías, siempre que las pérdidas ó ganancias de cada sócio guarden proporción con el interés puesto en ella, porque si al liquidarse hay pérdidas, se compensarán con las ganancias percibidas, y aun cuando no alcance el fondo para cubrir todas las responsabilidades, y haya que acudir á la obligación solidaria de los sócios, se repartirá el déficit en la misma proporción y nadie saldrá perjudicado; mas si no hubiese pactado que uno percibiese mas utilidades que otro, y nada se hubiese dicho con respecto á las pérdidas, ó se hubiese establecido distribuirlas en otra forma, podría dudarse si debían ó no devolverse las utilidades antes de apelar á la responsabilidad subsidiaria, porque la mayor utilidad se concede en recompensa de la industria y del trabajo, y aunque por regla general las pérdidas deben repartirse en la misma proporción que las ganancias, también esta declarado que no se distribuya nada por ellas á los sócios industriales, á no ser que se haya pactado expresamente, porque pierden todo el trabajo que ponen, y no es justo gravarlos mas. A nosotros nos parece que si al acordar los dividendos no se determinó otra cosa, deben devolverse, porque semejantes repartos en esta clase de sociedades, no pueden tener otro concepto que el de provisionales ó interinos, quedando siempre sujetos al resultado general que ofrezca la liquidación definitiva de la sociedad.

(****) Si se hubiese pactado que á la liquidación de la sociedad uno de los sócios recibiese el capital de los dos, contentándose el otro con la mitad de las utilidades, ¿sería válida esta convenpción? El Sr. V. y Caravantes, parte 1.a , art. 519, dice que no, y somos del mismo parecer; mas si se hubiese estipulado que todo el capital fuera para el uno y todas las utilidades para el otro, acaso debería decirse lo contrario, porque podría haber ya un contrato aleatorio sin pactos conocidamente gravosos.
SECCION TERCERA.

De las sociedades anónimas.

172. Sociedad anónima es la que se forma creando un fondo por acciones para emplearlo en determinados objetos por mandatarios elegibles y amovibles á voluntad de los socios.

Ofrece la ventaja de proporcionar capitales para grandes empresas sin comprometer la fortuna de los que los ponen, si son prudentes y precavidos; pero tienen el inconveniente de prestar mas que las otras á proyectos aventurados y peligrosos, y aun al ágio y al fraude, por cuya razón la ley ha establecido que no se formen sino cuando tengan un objeto lícito y de utilidad común, prohibiendo las que se propongan monopolizar las subsistencias ú otros artículos de primera necesidad (*). Las hay de diferentes clases, y se rigen por leyes distintas, según el objeto con que se forman y la autorización que necesitan; pero todas han de obtener previamente, sujetándose en su formación, requisitos, nombre, fondo y administración á las reglas especiales que veremos al examinar sus disposiciones para las que se consideran comunes ó generales, dejando para después las que están regidas por leyes especiales (1).

(*') Se promueve por algunos autores la cuestión de si la circunstancia de estar dividido el capital por acciones es por sí sola suficiente para considerar como mercantil la sociedad, ó debe atenderse á su objeto para hacer esta calificación. Entre nosotros el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido declarando, que deben calificarse de mercantiles las anónimas por acciones que se hayan constituido en conformidad á la ley de 28 de enero de 1848, con el objeto de obtener lucro celebrando contratos sujetos á operaciones fijas. Decisión de competencia de 20 de diciembre de 1848.

(1) Ley de 28 de enero de 1848, y Reglamento para llevarla a ejecución de 17 de febrero del mismo año.

** Estas sociedades tuvieron origen en los Estados Unidos del Norte de América, y fomentaron el comercio á que aquella nación debe en parte su engrandecimiento.—Avecilla, Diccionario mercantil, artículo Sociedades anónimas.
§ I.

Formación de las sociedades anónimas comunes.

173. Para crear una sociedad anónima, no es suficiente que se otorgue escritura pública, ni que se tome razón de ella en el registro público del comercio, sino que se necesita también que se forme un reglamento para su gobierno y dirección, y que se haya obtenido antes de formarla una licencia expresa, concedida precisamente por medio de una ley, cuando la compañía tenga por objeto el establecimiento de algún banco de emisión o sus cajas subalternas, la construcción de carreteras generales, canales de navegación y caminos de hierro, y cuando solicite algún privilegio exclusivo (*) , y en todos los demás casos, por medio de un Real decreto (1).

(*) En esta disposición no están comprendidas las empresas que tengan por objeto beneficiar privilegios industriales de invención o de introducción, que el Gobierno puede conceder con arreglo a la legislación vigente.—Art. 2.º, núm 2 del Reglamento citado.

(1) Arts. 1.º y 2.º del Reglamento.

Esta es la disposición del Real decreto que citamos, pero con posterioridad se han promulgado las leyes de banco, de sociedades de crédito y de ferrocarriles y otras obras públicas de que hablaremos más adelante, que lo desGANan respecto a las de estas clases.

El Código de comercio, deseando proteger todo lo posible la libertad de comerciar y el espíritu de asociación, solo exija que se sometiesen la escritura y los reglamentos de estas sociedades al examen de los tribunales mercantiles, y que no se pudiese llevar a efecto sin su aprobación, reservando á S. M. la facultad de concederla cuando hubiesen de gozar de algún privilegio real; pero la experiencia hizo conocer que estas precauciones no eran suficientes para impedir los males que se querían evitar, que se abusaba de la libertad concedida para formarlas, y que se especulaba por medio de ellas hasta con la credulidad; y se promulgaron después la ley de 28 de enero y el reglamento de 17 de febrero de 1848, que, pasando de un extremo á otro, exigieron para su formación una ley especial, ó un Real decreto, y las reglamentaron y restringieron de modo, que apenas se volvió a constituir ninguna después de su publicación. Estos males tan conocidos exigían una reforma esencial, según decíamos
174. En su formación es necesario no confundir dos actos
diversos que son: la fundación y la constitución definitiva.

Se fundan cuando se otorga la escritura, se forma el regla-
mento ó reglamentos, se piden y colocan lo menos la mitad de
las acciones, y se presenta todo solicitando la autorización
para formarla; y se constituyen definitivamente después de ha-
ber sido concedida esta, de haberse impreso y publicado sus
estatutos y reglamentos, y de haberse puesto en caja la parte
del capital con que han de ser constituida. A su formación no
concurrían todos los socios, sino únicamente los que han con-
cebido el pensamiento y han proyectado constituirlo, invitan-
do a los demás a que se interesen en ella pidiendo acciones.
Mas para su constitución ya deben concurrir todos los accio-
nistas a nombrar las personas que han de administrar y vigilar
la administración (1).

175. La escritura ha de contener 16 requisitos, á saber:
1.° Los nombres, apellidos y vecindad de los otorgantes.
2.° El domicilio de la compañía.
3.° Su objeto, ó sea el ramo de industria ó de comercio á
que exclusivamente se ha de dedicar.
4.° El nombre ó denominación con que ha de ser cono-
cida.
5.° El plazo fijo de su duración (2).

En nuestra edición anterior, y tratando de remediarlos, las Cortes con-
stituyentes en 1855 autorizaron la creación de las sociedades de crédito y
las de ferro-carriles, suprimiendo varias de las restricciones impuestas
en 1848, en las que se promulgaron para establecer dichas sociedades
en 28 de enero y 30 de junio de 1856. Mas como no se propusieron uni-
formar este ramo de la legislación por medio de una ley general de so-
ciedades anónimas derogando la anterior, sino solo autorizar la formación
de aquellas dos clases especiales, resulta ahora que es más restrictiva y
defectuosa la ley general que las dictadas para las excepcionales, que
eran las que necesitaban acaso ser autorizadas con más limitaciones.

(1) Art. 25 del Reglamento.
(2) En estas compañías no basta que tengan un objeto determinado,
sino que se requiere además que se fije su duración; exigencia que po-
drá ocasionar dificultades cuando no se haya conseguido el objeto al
7.° El número de acciones nominativas en que se ha de dividir, y la cuota de cada una (**).
8.° Los plazos y la forma en que deba ponerse en caja el importe de estas.
10. Las atribuciones de sus administradores.
11. Las facultades de la Junta general de accionistas, y la época de su convocación, que será lo menos una vez al año.
12. La formación del fondo de reserva con la parte que anualmente ha de separarse para constituirlo, hasta que componga lo menos un 10 por 100 del capital.
13. La porción de este último, cuya pérdida ha de ser bastante para disolver la sociedad.
14. Las épocas en que se han de formar y presentar los inventarios y balances anuales, y las formalidades con que hayan de ser revisados y aprobados por la Junta general.
15. La forma y tiempo en que dicha junta ha de acordar la distribución de dividendos.
16. La designación de las personas que hayan de tener la representación de la compañía provisionalmente, hasta que finalizar el plazo designado, como hemos dicho tratando de las colectivas (núm. 449, nota.) Lo regular es que concluya la sociedad cuando se haya concluido su objeto, porque este fue el que dio causa a su formación, y no parece justo que se la obligue a cesar, dejando á medio hacer un camino, por ejemplo: pero se ha querido, sin duda, que no quede á su arbitrio finalizarlo cuando le acomode, prolongando su duración por un plazo indefinido; y se exige además que se fije tiempo, concluido el que, examinará el Gobierno si ha sido necesaria ó voluntaria la dilación, y concederá nueva autorización, ó declarará caducada la concedida, segun estime conveniente.

(**) En la legislación francesa se fija el *minimum* de la cantidad nominal de cada una de estas acciones: en la nuestra no se ha creído necesaria esta medida, que puede suplirse al examinar y aprobar los estatutos, atendiendo á la importancia del objeto de la sociedad, á la proporción que guarden con el capital social, y á las demás circunstancias que concurren y deban tenerse en consideración en cada caso particular.
hallándose constituida, proceda la Junta general al nombramiento de administradores (1).

Estos requisitos todos son indispensables, la ley los exige para impedir abusos y perjuicios, y si falta alguno no debe concederse la licencia para su formacion (2). También deberá contener cualquiera otro pacto ó condicion que los socios establezcan, porque los que no consten en la escritura ó en el reglamento, son nulos y no producen ningún efecto (3).

176. El reglamento debe comprender las disposiciones relativas á la administracion de la empresa y á la direccion de sus operaciones, guardando conformidad con las bases de la escritura (4).

177. La una y el otro deben imprimirse y publicarse, remitiendo copia de ellas, con la ley ó el Real decreto, al Tribunal de Comercio, en cuyo territorio esté domiciliada, para que se hagan los asientos en sus registros (*), y se fijen edictos en sus extrados, con insercion literal de estos documentos, que, una vez aprobados, son inalterables; en tales términos, que cualquiera innovación que en ellos se hiciera, anularía la autorizacion y rescindiría la sociedad (5).

(1) Art. 1.º del Reglamento, y Recurso de competencia de 15 de febrero de 1860 respecto al domicilio.
(2) Art. 13, núm. 1.º del mismo.
(3) Art. 8.º del mismo.
(4) Art. 7.º del mismo.
(5) Art. 11 de la Ley; 22 y 26 del Reglamento.

** Para la formacion de una sociedad anónima se reúnen los que la proyectan, otorgan la escritura, forman su reglamento, e invitan á otros á que se suscriban. Cuando estan pedidas ya la mitad de las acciones de que se ha de componer el capital social, se reúnen los que las hayan tomado, y los que no han concurrido al otorgamiento de la escritura y á la formacion del reglamento, aprueban la una y el otro, ó proponen las
§ II.

Denominación y firma social.

178. El nombre en estas sociedades se diferencia mucho del de las colectivas. No se compone del de los asociados porque ninguno se obliga solidariamente, sino solo con la parte puesta en el fondo, ni se llama razón social, sino denominación de la compañía; pero tampoco es permitido designarla alteraciones y enmiendas que les parecen, y quedan definitivamente aprobados. Hecho esto, se presenta al Gobernador civil de la provincia la solicitud, pidiendo la licencia ó autorización, acompañando la escritura, el reglamento, las cartas de pedidos que completan la mitad del capital social, el acta de la aprobación definitiva de los estatutos, y además una copia simple de la escritura y del reglamento, para que se archive en el Ministerio.

El Gobernador civil instruye el expediente, examinando si los estatutos están conformes con lo que previene el Código, la Ley de 28 de enero y el Reglamento de 17 de febrero; si el objeto de la sociedad es lícito, y el capital prefijado suficiente para conseguirlo, y si el régimen administrativo ofrece garantías; para lo que pide informes al Consejo y Diputación provincial, al Tribunal de Comercio, a la Sociedad económica, si la hay, y al Ayuntamiento; y oficia a los Gobernadores de las demás provincias, para que hagan lo mismo por su parte, si la sociedad tiene en más de una sus establecimientos; y aunque ni la Ley ni el Reglamento lo exigen, sería muy conveniente que se oyera también a las Juntas de Comercio, que son corporaciones muy competentes, y están creadas para consultarlas en los asuntos que tengan relación con el comercio. Véase el Apéndice núm. 1.º

Concluida su instrucción, lo remite al Gobierno, que lo pasa al Consejo Real para que lo examine y proponga, ó que se amplíe dicha instrucción y se pidan nuevos informes si la halla incompleta, ó la modificación de los estatutos si lo cree necesario, ó la reprobación ó aprobación de la sociedad, fijando en este último caso la parte del capital que haya de hacerse efectiva antes de constituirse, y acompañando el proyecto de ley que haya de presentarse á las Cortes, cuando sea de necesidad.

El Gobierno, en vista de este informe, ó la desaprobación, ó comunicación á los interesados las reformas que deben hacerse para que otorguen nueva escritura, si se conforman con ellas, ó la aprueba, si está en sus
de cualquier modo, sino que la denominación que se le dé ha
de guardar conformidad con el objeto de su fundación (1).

atribuciones, ó propone á las Cortes el proyecto de ley, y se expide esta
ó el Real decreto, fijando la parte del capital con que se ha de conspi-
tuir, el plazo dentro del que se ha de hacer efectiva en caja, y en el que
se ha de completar la suscripción de las acciones, y lo comunica todo al
Gobernador de la provincia.

Este, luego que la recibe, manda imprimir y publicar la escritura y
reglamentos; se abre la suscripción de las acciones vacantes por la ad-
ministración provisional, se pone en caja la parte del capital que se haya
puesto en caja la parte del capital, ó sin estar cubiertas las acciones, de la
que han tomado las acciones. Si pasa el plazo que se ha designado, el Gobierno
expide otra Real orden por la que declara constituida la
sociedad, y señala otro dentro del que han de dar principio las opera-
ciones.

En virtud de esta orden, que se comunica al mismo Gobernador, con-
forma con la Junta general de accionistas, en la que se leen la Ley ó Real
decreto y la Real orden; se nombran los que han de administrar y los
que han de inspeccionar la administración; se acuerda la emisión de los
-títulos ó lóminas que han de representar las acciones nominativas, y
queda la sociedad definitivamente constituida.—Art. 6 y siguientes hasta
el 40 de la Ley de 28 de enero: 11 y siguientes hasta el 25 del Reglamento
de 17 de febrero de 1848, que insertamos para los que desean mayor
instrucción en el apéndice núm. 2.º

Antes de concluir esta materia debemos todavía advertir, que las so-
ciedades anónimas constituidas con estas formalidades, y las demás aso-
ciaciones comerciales, industriales ó financieras de España que estén
autorizadas por el Gobierno, pueden ejercer sus derechos y comparecer
ante los tribunales franceses con arreglo á las leyes del Imperio, Decreto
imperial de 5 de agosto de 1861, comunicado por nuestro Ministerio de
Estado al de Fomento en 22 de octubre del mismo año.

En la isla de Cuba se halla autorizada la creación de estas compañías
por Real decreto de 19 de octubre de 1853, esencialmente con las mis-
as formalidades y condiciones que las de la Península. En la parte
reglamentaria, sin embargo, nos parece más extenso y completo que el
de 28 de febrero de 1843.

(1) Art. 1.º, párrafo 4.º del Reglamento.

De las palabras en que está concebido el párrafo 4.º que citamos,
infieren algunos que está equivocada su redacción, suponiendo que se da
á entender, que las sociedades anónimas pueden tener razón social, con-
179. La firma está siempre a cargo de los administradores ó gerentes, que deben expresar, al ponerla, que lo hacen en este concepto.

§ III.

Capital social.

180. El capital lo designa la escritura, debe guardar proporción con el objeto, y se forma con lo que cada accionista pone en fondo; pero no es preciso que se entregue todo desde el principio, porque no siempre hay necesidad de emplearlo desde luego, y aun puede suceder que los interesados se propongan solo gastar en ensayos una parte pequeña, con ánimo de aumentarlo después si los resultados corresponden á sus deseos, ó de disolver la sociedad si ven frustradas sus esperanzas, y en este caso es inútil entregar el resto. Por eso en estas compañías se conocen dos clases de capitales, uno nominal y el otro efectivo, y á ellos se agrega después el fondo de reserva, que es una acumulación ó capital diferente.

181. El nominal es el total ó maximum de que se ha de componer el fondo social, ó sea el que tienen que poner los accionistas, entregando por completo todo lo que prometieron al formarse la sociedad. Este es el que puede o no ser entregado, ó efectivo según la necesidad y lo prevenido en los estatutos.

182. El efectivo es el que se paga realmente, y entra en la caja de la sociedad. Una parte de él, la que se señale en la ley ó en el Real decreto de autorización, no pasando de la cuarta, ó sea de un 25 por 100, hay que ponerlo antes de construir lo prevenido en el art. 276 del Código. Mas nosotros no participamos de esta opinion, antes creemos, por el contrario, que está bien expresado el pensamiento, porque no trata solo de las anónimas, sino también de las en comandita por acciones, las que indudablemente le tienen, y por lo mismo exige en general que las escrituras de todas estas compañías por acciones contengan ó la denominación ó la razón social. Así opina también el Sr. Vicente y Caravantes.
titúrse definitivamente, y lo restante se va pagando después en los plazos y en la forma que se haya prefijado en la escritura; y si no se entrega con puntualidad, pueden los administradores proceder ejecutivamente contra los bienes del moroso, ó vender sus acciones al precio corriente en la plaza (1).

Cuando alguno en vez de dinero lleve bienes en equivalencia de su parte, se apreciarán convencionalmente ó por peritos, y lo mismo se ejecutará con el que lleve algun privilegio de invención, ó el secreto de algún procedimiento útil, y con los que se contraten para prestar á la empresa sus servicios científicos y artísticos, en concepto de socios industriales, porque es una sociedad de capitales, como ya hemos insinuado, y es preciso que todo en ella esté valuado para que se sepa á cuánto asciende y la parte representada en cada uno de estos objetos (2).

183. Este capital efectivo se divide en acciones de cuota fija, que se cuantearán y inscriben en un libro de registro destinado á este objeto, se expiden después de constituida la sociedad, en nombre del soció á quien corresponden por el valor entregado, y no por el nominal ó prometido, y pueden estar representadas por títulos ó cédulas para su circulación en el comercio, y cotizarse en la Bolsa como valores comunes (3).

184. Una vez creado, debe invertirse en el objeto para que se ha puesto en caja, y de ningún modo en operaciones extrañas al establecimiento de la sociedad; pero como sería perjudicial á los intereses de esta tenerlo sin empleo, se per-

---

(1) Art. 9 de la Ley; 4, núm. 8; arts. 1.º y 21, 23 y 52 del Reglamento.

* La prohibición de no pasar de un 25 por 100 la parte del capital que se señale para entregar en caja antes de constituirse la sociedad, es sólo aplicable á las autorizaciones que se concedan por medio de un Real decreto, pues cuando sea necesaria una ley, está determinará la cuota que estime conveniente.

(2) Arts. 3 y 4 del Reglamento.

(3) Arts. 260 y 231 del Código de Comercio; 12 y 14 de la Ley de 28 de enero, y 25 del Reglamento.
mita aplicar los sobrantes, cuando los haya, para hacer descuentos ó préstamos que no pasen de noventa días, recibiendo en garantía papel de la Deuda consolidada (1).

185. El fondo de reserva tiene por objeto aumentar las garantías, acumulando al capital una parte de las utilidades para atender también con ellas al cumplimiento de las obligaciones sociales. No se forma con lo que los accionistas ponen, sino con las utilidades que dejan de percibir; y para que lo haya, es necesario que resulten ganancias de algunas operaciones, porque sin ellas no puede constituirse. Ha de consistir lo menos en un 40 por 100 del capital social; pero no es necesario que se forme de una vez, aun cuando haya bastantes utilidades, sino que se va separando y aplicando anualmente la porción designada en la escritura (2). Si después de formado se disminuye, hay que reponerlo en seguida, no parcialmente ó del mismo modo que se formó, sino aplicando toda la parte de beneficios que sea necesaria, sin repartir nada a los socios hasta que se haya completado (3).

Aunque formado con la parte que cada uno deja de percibir, pertenece a todos en general, no se cede ni se enajena particularmente, ni está representado por acciones como el efectivo; subsiste mientras dura la sociedad, y si á su terminación no hay necesidad de aplicarlo al pago de deudas, se reparte y distribuye en la misma proporción con que se ha formado.

(1) Art. 31 del Reglamento.
(2) Art. 1, núm. 22 del Reglamento.
(3) Art. 56 del Reglamento.

Aunque el art. 4 del Reglamento, en su número 12, previene que el fondo de reserva se componga de la décima parte del capital social, puede muy bien suceder que no llegue en algunos casos á esta cantidad, aun cuando hubiesen resultado desde el principio beneficios bastantes para formarlo; porque como no se forma de una vez, sino poco á poco, destinando á este objeto una pequeña cantidad en cada uno de los primeros dividendos, cuando cesan las ganancias sin haberse completado, nada habrá que distribuir, y nada se podrá aplicar para que llegue al 40 por 100.
§ IV.

Administracion é inspeccion.

186. La administracion en las sociedades anónimas no corresponde de derecho a ningún sócio bajo este concepto, sino á todos en general, que reunidos nombran ó dan este encargo á quien mejor les parece, y los remueven por justa causa ó con arreglo á sus estatutos: se divide en interina y definitiva (*).

La interina es la que desempeñan las personas designadas en la escritura para representar provisionalmente la compañía hasta que se halle constituida (1).

La definitiva se crea luego que se constituye, eligiendo los que han de dirigir los negocios en que deba ocuparse. Su nombramiento se verifica en la primera junta general, y en ella se eligen también los que han de inspeccionar y vigilar esta misma administracion (2).

187. Los administradores interinos no pueden hacer mas gestiones que las relativas á la formación de la sociedad, como abrir la suscripción de las acciones que no estén tomadas ó pedidas, y remitir al Gobierno la lista de los suscriptores, pues les está prohibido ocuparse de otros negocios, y si los ejecutan son nulos sus contratos, responden solidariamente de los perjuicios que ocasionen á los interesados, y además incurren en una multa que puede subir hasta 100,000 rs. (5).

188. Los propietarios ó definitivos, considerados como factores de estos establecimientos, tienen atribuciones y derechos que ejercer, obligaciones y prohibiciones que cumplir, y res-

(*) El Código no exigia la cualidad de sócio para ser administrador en estas sociedades; pero hoy es de necesidad según la Ley, porque han de depositar cierto número de acciones en garantía de su administracion.

(1) Art. 4, núm. 16 del Reglamento.
(2) Art. 25 de id.
(3) Art. 16 de la Ley, y 22 del Reglamento.
ponsibilidades por sus faltas. Las atribuciones se reducen á dirigir y desempeñar los asuntos de la sociedad, obligándola con arreglo á sus estatutos y reglamentos; y sus derechos á percibir la retribución que les esté asignada, que podrá consistir en un sueldo fijo, ó en una parte de las utilidades, ó en las dos cosas á la vez (1).

489. Sus obligaciones son:

4.ª Dar principio á las operaciones que ha de hacer la sociedad dentro del plazo que se señale, cuando se declare constituida (2).

2.ª Atemperarse al régimen general establecido en la escritura, y á lo que esté prevenido en los reglamentos para la dirección particular de cada negocio (3).

5.ª Concurrir á la apreciacion de los efectos, de la industria, ó del trabajo que pongan los socios como capital, cuando no consista en dinero (4).

4.ª Reclamar de los morosos la parte que deban poner en fondo, procediendo contra ellos por cualquiera de los medios que dejamos indicados (núm. 182).

5.ª Expedir los títulos de las acciones, cuando no se conceda á otros esta facultad (**).

(1) Art. 5 del Reglamento citado, y Recursos de casacion de 2 de diciembre de 1859, y de nulidad de 2 de abril de 1862.

(2) Art. 23 de id.

(3) Arts. 7, 30, 37 y 38 de id.

(4) Arts. 3 y 4 de id.

* Esta valuación debe hacerse dentro de los 15 días siguientes al de la constitución definitiva de la sociedad. Art. 5 del Real decreto para los delegados de 12 de diciembre de 1857.

(**) Ni la Ley ni el Reglamento imponen expresamente á los administradores esta obligación, pero nosotros no encontramos otras personas que puedan cumplirla, acordada su emisión por la junta general; y como no puede dudarse que alguien las ha de expedir y autorizar con su firma, la atribuimos á los administradores que parecen los más indicados, cuando no se haya acordado que sean otros los que las emitan, porque ellos son los representantes de la sociedad y á esta es á quien incumbe emitirlas.

Los títulos de acciones de sociedades mercantiles, de bancos, de cré
6.º Llevar con la formalidad debida los libros, que deben ser por necesidad no solo los tres de la contabilidad mercantil, sino otros dos más para extender las actas de la Junta general y de gobierno, y la transferencia de las acciones (1).

7.º Inscribir en el registro las acciones que se expidan con el nombre de la persona a quien correspondan (2).

8.º Inscribir también las transferencias ó cesiones que se hagan de ellas, expresando la responsabilidad subsidiaria en que queda el cedente si no es efectiva por el todo (3).

9.º Depositar en garantía de su administración, dentro de los quince días siguientes al de haber sido nombrados, el número fijo de acciones que se desee en los estatutos, extendidas en el papel y en la forma especial que se halle establecida (4).*

10.º Formar en las épocas acordadas, ó a lo menos todos los años el balance general, en que se comprendan todas las

dito, de industria, minas y demás análogas, deben llevar un sello del precio proporcional a la cantidad que expresen, y si no la expresan de 4 reales; con la advertencia de que los que contengan dos ó más acciones deben llevar un sello por cada una del valor de cada acción en particular, ó uno solo del importe de todas. Por una vez expedidos con el que le corresponda no necesitan timbrarse de nuevo á su renovación ni á la transferencia de las nominales. Arts. 1, 7 y 12 del Real decreto de 12 de setiembre de 1861, y 39, 40 y 42 de la Instrucción de 26 de octubre del mismo año.

La infracción de las prevenciones de este Real decreto se halla penna-
da, por regla general, con el reintegro de la cantidad en que se haya perjudicado la Hacienda, y una multa equivalente al cuádruplo de su importe. Art. 79 del mismo.

(1) Art. 8 del Reglamento de 12 de setiembre de 1857.
(2) Art. 12 de la Ley citada.
(3) Art. 33 del Reglamento.
(4) Art. 43 de la Ley, y 29 del Reglamento.

Tampoco previene la Ley, ni el Reglamento quien ha de firmar estas acciones especiales, que no parece regular que estén autorizadas por los mismos que las depositan. La Junta general debe ser la que lo resuelva, pero también pudiera suceder que se omitiera en ella este acuerdo.
operaciones hechas durante él, sus resultados y el estado del activo y pasivo de la sociedad (1).

44.° Formar cada tres meses estados de situación, y entregar copia de ellos al Gobernador civil ó delegado que deba comprobarlos (2).

190. Las prohibiciones se limitan:
1.° A disponer de los fondos en beneficio propio (5).
2.° A expedir billetes, pagarés, abonarés, ni ningún otro documento al portador, sin que la ley autorice á la compañía para emitirlos (4).
3.° A hacer en nombre de esta negocios extraños al objeto con que se ha formado (5).
4.° Comprar por cuenta de la sociedad las acciones de la misma, excepto el caso en que, estando ya satisfecho en su totalidad su importe, la Junta general de accionistas acuerde que se destinen á este objeto las utilidades que se habrían de repartir, quedando íntegro el capital social y sin perjuicio de lo que se deba aplicar al fondo de reserva (6).

191. Como en estas sociedades solo el fondo social y el de reserva son los que garantizan el resultado de los negocios, los administradores no responden bajo tal concepto á los extraños con quienes contratan, sino únicamente á la sociedad, cuando no han desempeñado bien su encargo (7).

Su responsabilidad se reduce á la indemnización de daños y perjuicios, y la contraen siempre que faltan al cumplimiento de sus obligaciones ó infringan las prohibiciones que dejamos expresadas; pero hay casos en los que incurren además en otras penas, que son:

4.° Si expiden billetes ó otros documentos al portador, en

(1) Art. 34 del Reglamento.
(2) Art. 8 del Reglamento para los delegados.
(3) Art. 31 del Reglamento de 17 de febrero citado.
(4) Art. 15 de la Ley.
(5) Art. 16 de id.
(6) Real órden de 31 de mayo de 1832.
(7) Art. 277 del Código.
el que se les puede imponer una multa que llegue hasta 50,000 reales (1).

2.° Si hacen por cuenta de la sociedad negocios extraños a su objeto, en el que puede llegar dicha multa hasta 100,000 reales, según la gravedad de la falta (2).

Y 5.° Si cometen dolo ó fraude en el manejo y dirección de los negocios, en el que quedan sujetos á la formación de causa (5).

192. Para que no se haga ilusoria, apareciendo insolventes, se exige el depósito de las acciones, de que antes hemos hablado; pero como es mejor impedir los males que tener que remediarlos, se ha establecido además una doble inspección que mire por los intereses de la sociedad, y cuide de la observancia de la ley, de los estatutos y de los reglamentos.

La primera se pone á cargo de las personas que nombra la Junta general, al mismo tiempo que los administradores, para que vigilen su administracion, en beneficio de los accio-

(1) Art. 16 de la Ley citada.
(2) Art. 45 de la misma.

El Art. 16 de la ley impone una multa que no exceda de 100,000 reales á los administradores que, á nombre de la compañía, se extiendan á otros negocios que los del objeto de esta; mas el 31 del Reglamento, aunque les prohibe distraer los fondos para negociaciones extrañas á este objeto mismo, los hace sólo responsables de las cantidades de que dispongan, contraviniendo á esta prohibición; y no resultarán en armonía, si no se entiende el primero del caso en que los negocios extraños á la empresa ú objeto de la sociedad, se hayan hecho á nombre de esta misma; y el segundo del en que los administradores, ú otros con su consentimiento, los saquen de la caja, y los apliquen para sus usos ó negocios privados. Aun así nos parece que no debe limitarse la responsabilidad en este último á la devolución de las cantidades distraídas, sino hacerse extensiva tambien al abono de perjuicios, y á la pérdida de las ganancias que hayan hecho con los fondos distraídos, las que deberán ceder en beneficio de la sociedad, como dispone el art. 312 del Código, quedando además privados de la administracion.

(3) Art. 38 del Reglamento de 17 de febrero citado.
TOMO I.
nistas ejerciendo las atribuciones que le confieran los estatutos y reglamentos (1).

La segunda corresponde al Gobierno, que la ejerce sin entorpecer la gestión de los negocios, por medio de los Gobernadores civiles ó de delegados particulares nombrados con este objeto; porque la naturaleza especial de estas sociedades hace necesaria la intervencion de la acción administrativa para el buen régimen y gobierno de las mismas, a fin de que no se comprometan los intereses generales puestos en relación con los de los asociados (**).

(1) Art. 1.º núm. 40 y 25 de id.
* En algunas sociedades suele señalarse también retribución a estos inflectores y exigirsele depósito de acciones en garantía como a los administradores.

(**) Las atribuciones y obligaciones de estos funcionarios son diferentes, según que la sociedad se halle ó no constituida. Si no lo está deberán cuidar que se constituya y dé principio á sus operaciones en el plazo que se le prefija con la parte del capital que se le haya designado, previa la celebración de la Junta general, en que se nombren los administradores é inspectores, y se designe la retribución que hayan de disfrutar estos mandatarios, la apreciacion de los valores, efectos ó concesiones que aporten los accionistas, el depósito de las acciones que deben entregar los administradores, y la presentación en el Tribunal de Comercio de los documentos que se le deben remitir.

Cuando se haya constituido será su deber principal cuidar que la dirección y la administración se ajusten exactamente a las prescripciones legales y á los estatutos y reglamentos, á cuyo fin deben vigilar especialmente la contabilidad, rubricando y anotando todos los libros que lleve la sociedad por necesidad ó por conveniencia, sin perjuicio de la rubrica y nota que deben tener del Tribunal ó Juzgado correspondiente (40): asistir á todas las juntas que se celebren presidiéndolas sin voz ni voto, y á los arqueos de caja que se veriliquen: exigir, comprobar con los libros y la caja y remitir al Gobierno con su informe las copias de los estados de situación y de los balances generales que debe formar la compañía, asegurándose antes de la existencia efectiva de los fondos ó valores que le correspondan, cuando de estos estados ó balances ó de los arqueos resulte que los tiene en otros establecimientos por depósitos ó cuentas corrientes, ó por el contrario, que otras compañías ó particulares los tienen en la caja de la sociedad por estos conceptos: y por último, dar cuenta de toda novedad que ocurra en el régimen directivo y administración
§. V.

Obligaciones y derechos.

195. Las obligaciones de los socios anónimos son muy limitadas, pues nadie se compromete más que a poner en fondo el importe de las acciones por que se suscribe, y cumpliendo esta no puede exigirseles más. Si no la cumplen, ya hemos visto que pueden ser ejecutados ó expelidos vendiendo sus acciones (núm. 182). (1).

Aun cuando no haya quien administre, no pueden ser obligados á encargarse de la dirección de los negocios, y menos hoy que es necesario poner en depósito acciones determinadas. De las prohibiciones, no les alcanza ninguna porque no administran; y no hay tampoco inconveniente en que transmitan sus intereses á quien les acomode, ya que no se eligen ni se tienen en cuenta las personas al tiempo de constituirse la sociedad. Sus derechos pueden ser ejercitados por cada uno en particular ó por la Junta general.

194. A la Junta general de socios corresponde:

de la compañía, poniendo en conocimiento del Gobierno las infracciones que cometan los mandatarios contra las leyes, los estatutos y los acuerdos de la sociedad tan luego como lleguen á su noticia, para que si lo estima procedente oiga el Consejo de Estado y suspenda ó anule la concesión. Véanse los arts. 30, 37 y 38 del Reglamento citado, y el de 12 de diciembre de 1857 que insertamos en el apéndice, núm. 3.º, las atribuciones y obligaciones de esta inspección oficial y el modo de cumplirlas.

En la Isla de Cuba la inspección de las sociedades por acciones y de las constituidas en forma mercantil ó mútua, que tengan por objeto los seguros, la constitución de capitales ó rentas, ó la gestión de negocios ajenos, y también la de las compañías de ferro-carriles, está encomendada á las secciones correspondientes de la dirección de administración del Gobierno superior civil; habiéndose suprimido los inspectores oficiales y las plazas de auxiliares y subalternos por Real decreto de 20 de setiembre de 1865.

(1) Recurso de casación de 2 de diciembre de 1839.
1.° Nombrar los administradores e inspectores.
2.° Designar la remuneración que hayan de disfrutar, bien consista en un sueldo fijo, bien en participar de las ganancias, bien en las dos cosas juntas.
3.° Acordar la emisión de los títulos de las acciones en inscripciones nominativas (1).
4.° Acordar los dividendos y repartos de los beneficios que resulten de los balances, deducido lo que corresponda al fondo de reserva (2).
5.° Acordar que se destinen para comprar acciones de la misma sociedad las utilidades que se habían de repartir cuando esté ya realizado el capital, y les convenga aplicarlas a este objeto, como queda manifestado (n.° 190).
6.° Separar á los administradores e inspectores nombrados, habiendo justa causa, o cuando pueda hacerlo según los estatutos de la sociedad; porque en las de esta clase, nadie puede reservarse el derecho de administrar de un modo irrevocable (3).
7.° Ejercer las demás facultades que se le reserven en la escritura y reglamentos (4).

195. Los derechos de cada sócio en particular son los mismos para todos; porque es condición esencial de estas sociedades, que todos, incluso los fundadores, los tengan iguales, y participen de los beneficios en proporción al número de acciones, por que se hayan interesado. Consisten (5):
1.° En concurrir á las Juntas generales, y dar su voto en ellas.
2.° En examinar los balances y los documentos que los comprueben, si no se lo prohíben los estatutos ó reglamentos (6).

(1) Arts. 6 y 25 del Reglamento de 17 de febrero citado.
(2) Art. 1.°, núm. 15, y 25 del Reglamento de 17 de febrero.
(3) Art. 2.°, segunda parte, y 27 de id.
(4) Art. 1.°, núm. 41 de id.
(5) Art. 2.° de id.
(6) Art. 310 del Código.
3.° En ceder sus acciones transfiriendo á otros sus derechos, con la obligacion de responder subsidiariamente del pago de lo que falte que entregar, cuando no esté puesto en caja por completo el valor nominal de la accion enajenada (').

Las acciones de forma especial que depositan los administradores, no pueden estar comprendidas en esta determinacion mientras dure el depósito; porque si las pudieran enajenar cesaría la garantia que habian prestado, y se eludiria el objeto con que fueran creadas (**) .

4.° En percibir las utilidades que le correspondan en los dividendos que se repartan (1).*** .

(*) La obligacion subsidiaria de responder de la parte del capital nominal no satisfecha, ¿alcanzará tambien á los dueños de las que los administradores vendan para el pago de algun dividendo por no haberlo aquellos entregado puntualmente? Parece que no, porque no son ellos quienes han elegido el comprador de quien han de responder, y no es justo obligarlos, tal vez, á ser fiadores de un insolvente con quien no han contratado. Ademas, que esta venta para ellos equivale á la rescision del contrato de sociedad, de la que quedan excluidos desde aquel momento por un acto de sus administradores, que pudieron muy bien haber elegido el medio de proceder ejecutivamente contra sus bienes, si querrian conservar el derecho de reclamarles el importe de los dividendos sucesivos.

(**) Estas acciones, aunque de forma especial indudablemente, podrán enajenarse con las formalidades y condiciones que las demas, cuando dejen de servir de garantia de la administracion de los que las depositaron. Lo mas regular parecia que las cambiaren por otras comunes y continuaren garantizando la administracion de los que los reemplazen; pero esto pendera de la voluntad de unos y otros, y podra ofrecer dificultades por la responsabilidad subsidiaria que pueden llevar consigo estas enajenaciones, por lo que creemos que en estos casos no queda otro remedio que el que se garantice de nuevo la administracion con otras comunes en la misma forma ó en otra especial, y permitir la enajenacion de las anteriores.

(1) Art. 35 del Reglamento citado.

*** Estos dividendos se perciben sin obligacion á devolver lo cobrado, aun cuando á la liquidacion de la sociedad no alcance el fondo social y el de reserva para cubrir las resultas de todas las negociaciones; pues para precaver este caso, se ha establecido este ultimo y la inspeccion del Go-
5.° Recibir el importe de sus acciones, con el aumento ó disminución que hayan tenido, cuando se disuelva la compañía, y se haga su liquidación en los términos que diremos en su sección respectiva.

SECCION CUARTA.

De las sociedades anónimas regidas por leyes particulares.

196. En la formación de las sociedades anónimas se advierte una circunstancia que no concurre en los demás contratos, ni aun en la de otras clases de compañías, y es la de que pueden no estar sujetas á unas mismas reglas; porque como hay algunas que por el objeto con que se crean, tienen que ser autorizadas por una ley especial, como hemos dicho antes (núm. 175), las que se encuentran en este caso, pueden diferenciarse de las demas, y aun entre sí mismas, si la ley que las autoriza, como posterior y especial, deroga en parte la general, ó modifica las disposiciones de las anteriores. Mas como esta autorización particular no se exige precisamente para una sociedad determinada sino para clases enteras, como son, las que se propongan establecer bancos de emisión, construir obras públicas, ó gozar de algún privilegio exclusivo, bien puede una ley establecer reglas comunes para cada una de estas clases en particular, y conceder al Gobierno la facultad de autorizar las que se conformen con ellas, limitando la necesidad de una autorización especial legislativa para las que pretendan separarse en algo de las prescripciones que establezca para las de su clase respectiva, y para los casos en que sea absolutamente indispensable por razón de su objeto; y así se ha hecho entre nosotros, promulgándose la que

bierno, y no se permite repartir mas que los beneficios líquidos y recaudados que resulten de cada balance, con deducción de dicho fondo.—Artículo 35 del Reglamento citado.
autoriza la formación de Bancos de giro ó de circulación, la de sociedades de crédito y las de ferro-carriles y demás obras públicas, que son de las que vamos á tratar en esta sección.

§ I.

De los Bancos.

197. Los Bancos, según nuestra actual legislación, son unos establecimientos que se ocupan en operaciones de cambio ó de giro, bajo la inspección inmediata del Gobierno, mediante los privilegios que se les conceden ('). No se crean solo para comerciar sino principalmente para proteger el comercio, faci-

(*) Los Bancos, generalmente considerados, son unos establecimientos en que se reúnen fondos para determinados objetos, de los que toman la denominación que los distingue unos de otros, como Bancos de depósitos, agrícolas, hipotecarios, y de giro ó circulación, que son de los que aquí nos ocupamos.

Estos casi siempre se establecen por sociedades anónimas, pero alguna vez, aunque rara también, se han formado de otro modo. Nosotros sin embargo, los colocamos y tratamos entre las de esta clase, porque nuestra legislación, dando por supuesto que no se han de establecer por un particular (en cuyo caso no sería banco sino un comerciante que haría el comercio de banca), exige que el capital esté dividido y representado por acciones de cuota fija, sin otra obligación ni responsabilidad de parte de los accionistas, que la de poner en caja el importe de las acciones que han tomado, que estos reunidos en Junta General sean los que nombren las personas que han de componer el consejo de gobierno ó de administración, y que se publiquen en la Gaceta sus estatutos y reglamentos; y con estas condiciones no pueden crearse otras compañías que las anónimas.

Al ocuparnos de ellos y de las demás sociedades que comprende esta sección, prescindimos enteramente de las cuestiones que se pueden mover acerca de la libertad de establecerlos, de la que deben tener para emitir billetes, de la relación entre estos y las cantidades que conserve el banco para cambiarlos y sus bases, y de otras que se pueden suscitar tratándolos económicamente, porque nosotros nos proponemos solo darlos á conocer como se hallan establecidos por nuestras leyes, examinando sus disposiciones y las razones y doctrinas en que las consideramos apoyadas.
litando los cambios y proporcionando á los particulares y aun al Gobierno fondos cuando los necesiten. Las sociedades que se forman para establecerlos deben ocuparse en girar y descontar letras, hacer préstamos y cobranzas, recibir depósitos, llevar cuentas corrientes, y contratar con el Gobierno y sus dependencias legítimamente autorizadas sin quedar en descubierto, realizando estas operaciones con el premio, condiciones y garantías que prescriban los estatutos y reglamentos (1). Pero aunque sus ocupaciones se limiten á esta clase de negocios designados por la ley, los pueden repetir y multiplicar y sacar de ellos beneficios sin hacer en metálico un desembolso proporcionado por que se los autoriza para emitir billetes al portador, que ponen en circulación y emplean en sus negociaciones, como capital efectivo (2).

498. Estos billetes, llamados de confianza, son unas promesas de pago á la vista, que sin ser su curso obligatorio circulan como moneda metálica por la seguridad de que son dinero siempre que convenga cambiarlo; y aun se prefieren á la moneda misma, entre comerciantes, por la comodidad que ofrecen para su traslación y custodia, y por lo que facilitan la contabilidad. Mas para que produzcan estos efectos tan ventajosos para los Bancos como para los particulares, es preciso que circulen en poblaciones en que puedan servir para aumentar

(1) Arts. 14 y 16 de la ley de 28 de enero de 1856.
La ley que citamos, ha sido formada con el objeto de establecer reglas generales para la creación de Bancos de giro, modificando en parte las que se habían dictado para el de San Fernando, el de Barcelona y el de Cádiz, que eran los que entonces existían; pero nosotros prescindimos de las que crearon los dos últimos y de las disposiciones transitorias de la primera, porque previniendo en su artículo 5.º que pueden crearse Bancos en las poblaciones que expresa y en otros puntos, con los mismos privilegios que se conceden al de España (que es el nombre que se da en ella al de San Fernando para lo sucesivo). Sólo esta es la que puede ser considerada como general y aplicable á todos, menos á los de Barcelona y Cádiz, que continuaron rigiéndose por las suyas respectivas, en lo que no hayan sido modificadas. Véase esta ley en el apéndice núm. 4.

(2) Art. 9 de la ley citada.
y facilitar los negocios en que se han de invertir y entretejer; que no se emitan en un número tan excesivo, que no guarde proporción con estos negocios mismos; que las cantidades que representen, ni sean tan grandes que tengan poca aplicación, ni tan pequeñas que no puedan reemplazar á la moneda metálica con alguna ventaja; y sobre todo, que se recojan en el acto, y sean dinero efectivo cuando se presenten para ser cambiados.

499. Todas estas condiciones son indispensables para que estos billetes correspondan al objeto con que se autoriza su emisión; como lo son para que los Bancos correspondan al suyo, que tengan siempre en caja fondos bastantes para hacer los cambios; que las garantías que admitan sean de tal naturaleza que puedan realizarse pronto y con facilidad; que no abusen del derecho de poner en circulación los billetes referidos ni aun en beneficio del Gobierno, ni empleen sus capitales en negocios aventurados ó en agios de bolsa, perjudicando acaso el crédito del Estado y los intereses que deben proteger; y que se den todas las seguridades posibles á los que tengan fondos ó intereses en estos establecimientos; y á todas estas circunstancias ha atendido la ley al autorizar su formación, prescribiendo las reglas que se han de observar en su creación y dirección, imponiéndoles prohibiciones muy fundadas, y concediendo garantías á los que tengan intereses en ellos.

Las reglas que se han de observar son:

1.* Que se establezcan en poblaciones en que se consideren necesarios ó útiles, atendida la extensión de su comercio; y que no haya más que uno en cada localidad, con un capital proporcionado á las necesidades públicas de la misma (1).*

---
(1) Art. 3 y 4 de la Ley citada.
* Para la creación de estos Bancos deben ser consultadas las Juntas de comercio de las localidades en que se hayan de establecer. Núm. 5 del art. 15 del Real decreto de 7 de octubre de 1847.
2.° Que solo puedan emitir billetes por una suma igual al triple de su capital (1).

3.° Que estos billetes no representen cantidades mayores de cuatro mil reales, ni menores de ciento (2).

4.° Que tengan constantemente en caja y cartera metálico y valores bastantes a cubrir sus débitos, por billetes, cuentas corrientes y depósitos, con la precisa condición de que haya en dinero, lo menos, una tercera parte del importe de los billetes emitidos, y la de que el plazo de los demás valores no exceda de 90 días (5).

Las prohibiciones que le están impuestas se reducen a que no se les permite:

1.° Negociar en efectos públicos.

2.° Hacer préstamos sobre sus propias acciones.

5.° Anticipar al Tesoro, ni en dinero ni en billetes, una suma mayor que la de su capital efectivo, sin garantías sólidas y de fácil realización (4).

Las garantías concedidas consisten:

1.° En atribuir el concepto, y por consiguiente la preferencia de acreedores por depósitos voluntarios, a los que lo sean de los Bancos, por saldo de cuentas corrientes, y a los tenedores de sus billetes (5).

2.° El que no pueden estos ser rcivindicados sino en el caso de que se pruebe mala fe de parte del poseedor (6).

5.° En conceder a los fondos de estos establecimientos la consideración de efectos públicos, para que sean pagados en casos de robo ó malversación con preferencia a los demás acreedores del deudor, que no sean hipotecarios expresos ó

(1) Art. 9 de la Ley citada.
(2) Art. 10 de idem.
(3) Arts. 9 y 20 de idem.
(4) Arts. 15 y 17 de idem.
(5) Art. 23 de idem.
(6) Art. 3 de la Ley de 50 de marzo de 1864.
tácitos de fecha anterior á la época en que haya principiado á manejrar los caudales del Banco (1).*

4.ª En castigar la falsificacion de sus billetes, la introducción en el Reino, y la expendicion de los falsificados á sabiendas con las mismas penas con que se castigan la falsificacion, introduccion y expedicion de los del Tesoro público, de los títulos de la Denda y demás documentos de crédito del Estado (2).**

5.ª En declarar libres de represalias los fondos que los extranjeros tengan en los Bancos, caso de guerra con sus naciones respectivas (3).

---

(1) Art. 25 de idem, y 6 de la de 15 de diciembre de 1851.

* Este privilegio fue concedido al Banco de San Fernando por la ley de 14 de diciembre de 1851, y puede dudarse si gozarán ó no de él los que se creen de nuevo conforme á la de 28 de enero de 1856; porque dice en su art. 5.º, que se puedan crear con los mismos privilegios que se conceden en ella al de España, y el de que tratamos no está concedido por esta Ley sino por otra anterior. Pero esto no obstante, como en el art. 25 se añade, que queda también vigente (entre otras) la de 15 de mayo de 1851, en cuanto no se oponga á sus disposiciones, parece lo más fundado que se considere concedido para todos, puesto que no se opone á lo resuelto en ella, y su intención y su espíritu ha sido sin duda alguna hacer á todos iguales concesiones. Pero aunque en rigor de derecho opinemos que también deben gozar de él los que se creen de nuevo, debemos añadir, que nos alegraríamos por otra parte que se hubiera abolido para todos, porque introducido á consecuencia del desfalco que sufrió el de San Fernando, pocos años antes de promulgarse la Ley que le hizo esta concesión, ni está acaso conforme con lo establecido por otras legislaciones, ni con los principios de la ciencia y de la justicia, porque perjudica los derechos adquiridos por los acreedores anteriores que no sean hipotecarios tácitos ó expresos.

(2) Arts. 223 y 225 del Código penal.

** Estas penas son: cadena temporal en su grado medio, á cadena perpetua, y multa de 500 á 5,000 duros para los que falsifiquen, introduzcan ó expidan los falsificados, habiéndolos adquirido con conocimiento de que son falsos; y con la multa del tanto al triplo del valor del documento, la que en ningún caso podrá bajar de 50 duros para los que habiéndolos adquirido de buena fé los expiden después de conocida su falsedad.

(3) Art. 15 de la Ley de 28 de enero citada.
6.* En exigir que sus administradores publiquen mensualmente en la Gaceta del Gobierno el estado de su situación, en la forma que se les prescriba (1).

Y 7.ª En sujetarlos a una vigilancia constante de parte del Gobierno, que tiene un delegado en cada uno de ellos, para que los inspeccione y cuide bajo su responsabilidad que se cumplan las prescripciones de la ley y las demás a que estén sujetos (2).

(1) Art. 24 de idem.
(2) Arts. 18 y 20 de idem.

* La falta de cumplimiento de la obligación de cambiar los billetes en el acto que se presentan por parte de algún Banco, ha dado margen a que se promueva entre nosotros la cuestión del concepto legal que deben tener estos billetes, y de las diligencias que deben practicarse para reclamar su pago por la vía ejecutiva.

Mientras que no se le conceda otra consideración que la de un simple efecto de comercio pagadero a su presentación, que es la que al parecer se le atribuye, no cabe duda que para proceder á su cobranza por medio de una ejecución, debe preceder el reconocimiento de sus firmas, previa peticion y citación, y la comparecencia que previene el art. 515 de la Ley de enjuiciamiento mercantil, con la excepción que establece la de 18 de junio de 1865, para el caso en que no comparezca el deudor citado con apercibimiento; pero debemos a la vez confesar que este procedimiento nos parece largo y embarazoso tratándose de unos documentos que contienen varias firmas, imposible de practicar cuando hayan fallecido ó se ignore el paradero de los que los han suscrito, contrario a la naturaleza de unos créditos que deben representar un valor equivalente a la moneda, si es que la han de suplir por medio de su circulación, y opuesto á los intereses del comercio que se pretende proteger, concediendo á estos Bancos el privilegio de su emisión. En nuestra humilde opinión, ya que no se le quiera atribuir la consideración de títulos ó documentos públicos, como pretenden algunos, atendiendo al privilegio con que se emiten, á las formalidades y al carácter oficial de algunas de las firmas que los autorizan, no nos parece que se le debe negar siquiera la de una letra de cambio aceptada, ó un vale reconocido; creemos que cuanto más trabas se opongan á su cobranza, más se ha de dificultar su circulación y disminuir su crédito, y desearíamos por lo mismo ver establecido, que fueran exigibles por el procedimiento mas breve y sencillo, siempre que requerido el pago de una manera fehaciente, no se oponiera en el acto la excepción de falsedad.
200. Estas son las principales disposiciones de nuestra legislación en materia de Bancos de giro, y las suficientes acaso para dar a conocer estos establecimientos, pero no las únicas que debemos examinar, porque como tratamos de ellos como sociedades anónimas excepcionales, nos falta todavía que hacer mérito de otras modificaciones relativas á su formación, á su capital y á su administración, en que también se diferencian de las anónimas comunes.

Las que se forman para establecer Bancos necesitan, como

No menos graves, aunque de distinta índole, son las cuestiones que además de esta se promueven acerca de la obligación de los Bancos cuando se trata de los billetes divididos, rotos ó deteriorados, de los perdidos y de los falsificados. Con respecto á estos últimos, desde luego debe asegurarse que si bien podrá convenir á los Bancos en circunstancias dadas recogerlos y pagarlos para impedir que la desconfianza perjudique la circulación de los legítimos entre las personas que no puedan distinguirlos fácilmente de los falsificados, no es posible de modo alguno convertir en obligación una conveniencia que solo los Bancos mismos pueden apreciar, por mas que no falte quien crea lo contrario, alegando que son una consecuencia del privilegio de su emisión, que aquellos mas bien que los particulares deben sufrir; porque no siendo su curso forzoso sino voluntario, los particulares que los reciben son los que deben culpar a si mismos por haberlos admitido sin estar seguros de su legitimidad. Del mismo modo puede decirse, por lo que hace á los divididos ó deteriorados, que mientras resulte bien acreditada su identidad y legitimidad sin que pueda quedar la desconfianza de que el deterioro abrigue una falsedad, ó de que se pretenda de nuevo el pago por medio de otra fracción del mismo, debe el Banco satisfacerlos cualquiera que sea la causa que lo haya motivado; pero no si pueden caber los temores indicados, cuya apreciación penderá en cada caso particular de la imperfección de que adolezcan, teniendo presente la serie, la numeración, la parte talonaria y las demás circunstancias que concurren en el todo ó en la parte que se haya presentado.

En cuanto á los deteriorados, ya ofrece mas dificultades la resolución; pues si bien puede sentarse asimismo el principio que debe el Banco satisfacerlos una vez acreditada la pérdida ó desaparición real y efectiva, no en todos los casos podrá ofrecer este pago la misma seguridad que la anterior. El Sr. Durán y Bas, haciéndose cargo de estas cuestiones, distingue la pérdida ó destrucción por caso fortuito del simple estravio, y á este del hurto ó robo; distinción que nos parece fundada opinando
todas, escritura y Reglamentos, la aprobacion de estos, y la autorizacion para constituirse; pero concurre en ellas además la circunstancia de que el Real decreto que las apruebe y autorice debe estar acordado en Consejo de Ministros, oyendo antes el de Estado; la de que caduca su autorizacion á los tres meses de su fecha, sino está establecido el Banco; la de que tienen que publicarse sus estatutos en la Gaceta del Gobierno y la de que no pueden durar más que 25 años (1).

como él en el primer caso, que puede muy bien ocurrir en un incendio ú otra degradación semejante, debe el Banco satisfacerlos siempre que se justifique suficientemente su desaparicion. En el segundo, que aunque en la opinión de algunos debe también pagarlo exigiendo caución del que los reclame, no puede perderse de vista que mediando solo un simple extravío, puede fácilmente suceder se presenten después por otro, y se vea el Banco estrechado á satisfacer de nuevo por la vía ejecutiva, sufriendo los perjuicios de un pago duplicado, y el riesgo de no poder reintegrarse de este desembolso por medio de una caución, que aunque se haya creído suficiente al tiempo de recibirla, puede muy bien suceder que no lo sea cuando se trate de utilizar, y no parece conforme á la justicia ni á la equidad que se lo coloque en esta situación. Empero si llegase la época de la disolución y liquidación de la sociedad sin haberse presentado, ya debe mirarse la cuestión bajo otro aspecto diferente, porque á la presunción fundada de haber desaparecido, se agrega la circunstancia de que la persona jurídica desaparece, las obligaciones del Banco quedan todas extinguidas, nadie podrá presentarlos ni reclamar su pago después, y si entonces no los satisface el que justifique el extravío, se lucrará con su importe en perjuicio de un tercero, lo que tampoco en justicia se debe consentir.

En cuanto á los hurtados ó robados, que comprende el caso tercero, no puede ya haber hoy entre nosotros duda ni cuestión, porque no concediéndose con respecto á ellos la reivindicación más que cuando se pruebe la mala fé del tenedor, cono ya hemos indicado, no puede el Banco dejar de pagarlos al que los presente, mientras no se haya probado en forma legal su mala fe; y el que tenga la desgracia de haber decaído de ellos mediante estos delitos, en vez de dirigirse al Banco, deberá acudir á la autoridad que sea competente á justificar la mala fe del tenedor, ó deducir el derecho de que se halle asistido.

(1) Arts. 15 y 22 de la Ley citada.

* La publicación en la Gaceta de los estatutos y reglamentos de las sociedades en que se exige este requisito, no las exime de la obligación de presentar un ejemplar en el registro público del comercio.
Su capital ha de ser siempre efectivo, para que se pueda emplear desde luego en los objetos a que se destina, con prohibición absoluta de crear acciones de valor nominal, y las que se emitan han de ser de dos mil reales fijos cada una, puestos en caja antes de ser expedida, quedando los accionistas libres de toda otra obligación y responsabilidad (1). También han de tener un fondo de reserva equivalente a la décima parte de su capital, formado de los beneficios líquidos que produzcan sus operaciones; pero antes hay que deducir el interés que los estatutos señalen al capital, el que puede ascender hasta un 6 por 100, y no todo lo que quede se ha de aplicar tampoco para este fondo hasta completarlo, sino solo una mitad; destinando la otra para repartirla en dividendos activos entre los accionistas, además de los intereses que correspondan al capital que representen sus acciones (2).

Si llegase el caso de que el capital de un Banco quedara reducido a una mitad antes de los 25 años que puede durar, sería preciso proceder a su liquidación, o que se presentara, apruebe y promulgue una nueva ley, en la que se fijaran las condiciones con que había de continuar en lo sucesivo (3).

Su administración se encarga á un consejo de gobierno, que elige la Junta general de accionistas, con todas las atribuciones necesarias para garantizar eficazmente los intereses de la compañía; habiendo de recaer el nombramiento en españoles, naturales ó que hayan adquirido naturaleza en el reino y se hallen domiciliados en él, y no tengan otra incompatibilidad, con exclusión de los extranjeros, que aunque sean accionistas no pueden obtener cargo alguno en la administración; (*) y á este consejo subdividido en secciones, es á quien

---

(1) Arts. 7 y 11 de la misma.
(2) Art 24 de la ley citada.
(3) Art. 22 de idem.
(*) La única prohibición de obtener cargos de administración en los Bancos que establece la ley, es la de los extranjeros que no hayan obtenido carta de naturaleza y se hallen domiciliados en España; pero suelen
corresponde intervenir en todos los negocios del Banco, en términos que no se haga ninguna operación sin su consentimiento; y al mismo y al delegado del Gobierno es a quien incumbe también el deber de cuidar que existan siempre en caja y cartera el metálico y los valores que hemos dicho deben tener constantemente los Bancos, y que se cumpla la ley, los estatutos y las demás disposiciones relativas al régimen interior del establecimiento (1).

establecerse otras más en sus estatutos, como sucede en el de Jerez de la Frontera, que entre otras personas excluye a las que tengan sociedad de intereses, con cuyo motivo se declaró por Real órden de 26 de noviembre de 1861, que esta incompatibilidad se refería sólo a las colectivas y comanditarias, y se confirmó esta declaración por otra de 19 de julio de 1863, que dispone además que esta resolución sirva de regla general para los casos de igual naturaleza que ocurran respecto a los Bancos y Sociedades de crédito existentes y que se establecieren en lo sucesivo.

(1) Art. 42, 19 y 20 de idem.

La inspección que el Gobierno ejerce en los Bancos es más directa e inmediata que la de todas las demás Sociedades, porque lo exigen los intereses que pudiera comprometer el abuso de los privilegios que se le conceden; por cuya causa, á la vez que se confía su administración á un consejo de gobierno con las atribuciones necesarias para garantir los intereses de la compañía, se coloca a su lado un gobernador ó comisario régio que inspeccione constantemente los actos de la administración, y vigile el cumplimiento de la ley y de los estatutos y el régimen de estos establecimientos. Entre sus deberes pueden considerarse como principales el de cuidar que no se pongan en circulación más billetes que los permitidos, que no dejen de cumplirse las prescripciones relativas á los fondos que debe haber en caja para cambiarlos cuando se presenten, á los que se agregan otras obligaciones y atribuciones concernientes á la celebración de las juntas, al cumplimiento de sus acuerdos, á los arqueos y balances, y otros particulares que se expresan mas detalladamente en los estatutos de cada uno de estos establecimientos.
§ II.

De las sociedades de crédito.

201. Se da esta denominación á las asociaciones de capitalistas, que ponen en común fondos para emplearlos en operaciones de comercio y en otras diferentes clases de negocios de utilidad pública, mediante la concesión de emitir documentos al portador. Necesitan por esta causa una autorización particular para constituirse, y se las suele llamar Bancos; pero se diferencian de los de giro, de que hemos hablado antes, en el objeto con que se crean y autorizan, en los negocios de que se ocupan, en los documentos que emiten y en las reglas por que se gobiernan.

Estas sociedades no se forman ni autorizan precisamente con el fin de proteger el comercio, sino con el de fomentar empresas industriales y agrícolas que exijen un empleo fijo y permanente de los capitales que se inviertan; y aunque pueden girar y descontar letras y otros valores de comercio, hacer préstamos, pagos, cobranzas y otros negocios por cuenta ajena, recibir depósitos, llevar cuentas corrientes, y contratar con el Gobierno, con las corporaciones provinciales y municipales, y aun con los gobiernos extranjeros, con permiso del nuestro, porque no hay inconveniente en que hagan todas estas operaciones como las puede hacer cualquier comerciante en particular, se las faculta además para que puedan extenderlas á los objetos siguientes:

1.º Crear toda clase de empresas de caminos de hierro, canales, fábricas, minas, dársenas, alumbrado, desmontes y roturaciones, riegos, desagües y cualesquiera otras empresas industriales ó de utilidad pública.

2.º Administrar, recaudar ó arrendar toda clase de contribuciones y empresas de obras públicas, y ejecutar los contratos celebrados á este efecto, ó cederlos con la aprobación del Gobierno.

TOMO I.
3.ª Prestar sobre efectos públicos, acciones u obligaciones, géneros, frutos, cosechas, fincas, fábricas, buques y sus cargamentos, y otros valores.
4.ª Abrir créditos en cuenta corriente, recibiendo en garantía efectos de la misma clase que los expresados en el número anterior.
5.ª Practicar la fusión y transformación de toda clase de sociedades mercantiles, y encargarse de la emisión de acciones y obligaciones de las mismas (").
6.ª Prestar sobre sus propias acciones, pero con la prohibición de que no empleen en estos negocios más que la décima parte de su capital efectivo, y con las condiciones de que no las reciban en garantía más que por el 60 por 100 del valor que tengan en la plaza, y de que el término de estos préstamos no pase de dos meses.
7.ª Negociar en efectos públicos, con la limitación de que no apliquen á este objeto más que la mitad del capital efectivo de las acciones de la sociedad.
8.ª Vender y dar en garantía todos los valores, acciones u obligaciones adquiridos por la sociedad, y cambiarlos si les conviene (1)."

202. Todo este cúmulo de negocios tan diversos entre sí y que exigen tan grandes capitales, pueden emprender las sociedades de que tratamos, y todos ó la mayor parte de ellos son tambien de la mayor importancia y de interés público bien conocido, por lo que la ley, deseando favorecer su ejecución, les concede la facultad de emitir obligaciones al portador, á fin de que utilizando su crédito puedan reunir los fondos que necesiten para realizarlos, si no alcanzan los suyos propios ó los conviene aumentarlos por este medio, llamando

(*) Por esta fusión y transformación no se entiende disuelta ni liquidada la sociedad primitiva. Recurso de injusticia notoria de 12 de junio de 1867.
(1) Art. 4 de la Ley de 28 de enero de 1856.
** Véase esta Ley en el apéndice núm. 5.
en su auxilio otros capitales. Pero estas obligaciones no son promesas de pago á la vista como los billetes de los Bancos, sino pagarés que representan un crédito aplazado, que no se ha de satisfacer hasta que venza, y cuyo capital devenga en el entretanto el interés y el premio por amortización que se le señala; porque á los establecimientos que emplean sus fondos en objetos que los entretienen por mucho tiempo, ó en negocios que no los permiten recobrarlos sino paulatinamente ó en porciones muy pequeñas, no les conviene emitir documentos que puedan presentarse á su pago á cada instante, como no tengan con separación una parte de su capital destinado exclusivamente para pagarlos y recogerlos; sino abonárés á plazo fijo, y muy largo, para que puedan con tiempo prepararse para pagarlos á su vencimiento.

Estas obligaciones no cuentan con mas garantía que con el crédito de la sociedad, y las que esta particularmente pueda ofrecer; pero tienen sobre los demás valores de comercio la ventaja de que para ser enajenadas, ni necesitan endoso, ni otras formalidades que son precisas para la cesión de estos, como veremos mas adelante en sus lugares oportunos, sino que basta la simple entrega, previo el convenio legítimo, y pueden además ser objeto de otras negociaciones (*). La cantidad en que las emitan puede ser igual á la que hayan empleado, y exista representada por valores en cartera, procedentes de los negocios comprendidos en los siete primeros números, que hemos fijado al tratar de los objetos á que pueden extender sus operaciones: mas como pudiera acontecer, que aumentando sucesivamente estos valores á consecuencia de las operaciones que se fueran haciendo, se emitieran obligaciones en una cantidad tan excesiva que fuera perjudicial al crédito y á los intereses de la misma sociedad, se ha limitado

(*) Estas obligaciones y todas las que emitan las sociedades de comercio, industria, minas y demás semejantes, deben llevar un sello proporcionado á la cantidad que representen. Arts. 4.º y 40 del Real decreto de 42 de setiembre de 1861.
esta facultad, y se ha fijado el máximo de la emisión en una suma diez veces mayor que el capital de la sociedad, cuando lo tenga ya realizado todo y las obligaciones se expidan a plazo mayor de un año; en el quintuplo, nada más, del capital realizado, cuando no se haya hecho efectivo todo, aunque el plazo sea el mismo; y si este es menor de un año y mayor de 50 días, tan solo en el duplo del capital realizado, cuando la sociedad no tenga recibidas cantidades por cuenta corriente, pues si las tiene, no se podrán emitir más que por lo que resulte de diferencia entre el importe de las cantidades recibidas por este concepto, y lo que falte para completar el duplo del capital realizado de las acciones de la sociedad. A plazo menor de 50 días no se permite emitirlas (1).

205. Por esta breve reseña del objeto de estas sociedades, de sus operaciones, y de la clase de documentos que ponen en circulación, se viene desde luego en conocimiento de las diferencias tan esenciales que las separan de los Bancos, y de la necesidad de sujetarlas a otro régimen, porque no gozan de los privilegios que aquellos, ni se les hacen iguales concesiones; por cuya razón, si bien tienen de común con ellos que se formen con autorización del Gobierno, oyendo previamente al Consejo de Estado para la aprobación de sus estatutos, que estos se publican en la Gaceta, y que deben también publicar mensualmente en la misma estado de su situación, son dife-

(1) Art. 4, núm. 5, y art. 7 de la ley citada.
rentes y más acomodadas á su objeto las obligaciones y prohibiciones que se le imponen y la inspección, que se ejerce sobre ellos, consistiendo sus obligaciones peculiares:

1.° En dar conocimiento al Gobierno de los acuerdos relativos á la convocación de Juntas generales ordinarias y extraordinarias, y de los repartos de intereses que acuerden estas ó el consejo de administración.

2.° En remitir copia literal de las actas de dichas Juntas y de los balances generales que se formen, con las notas y explicaciones necesarias para su más fácil inteligencia, y un ejemplar de las memorias y documentos de que se dé cuenta en aquellas.

3.° En remitir mensualmente estados que demuestren su situación y la de la caja y cartera, y resúmenes de sus operaciones, conforme a los modelos que el Gobierno redacte.

4.° En dar cuenta de toda emisión de obligaciones que acuerden, dentro de los ocho días siguientes aquel en que la hayan acordado.

5.° En formar y remitir cada tres meses, en la forma y con los detalles del modelo que se les mande, un estado ó resumen demostrativo del capital realizado por acciones, número de obligaciones emitidas, valor nominal de las mismas, rédito ó interés que tengan fijado, gastos y productos de la negociación, y fechas de la emisión y de la amortización.

Y 6.° En conservar en caja y en metálico el importe de las obligaciones vencidas y no amortizadas por falta de presentación, para pagarlas sin demora en el momento que se presenten.

Las prohibiciones que le están impuestas, además de las que ya se ha hecho mérito de no aplicar á la adquisición de fondos públicos mas que la mitad del capital efectivo de las acciones de la sociedad, y la de no prestar sobre estas mas que la décima parte con las condiciones que quedan indicadas, se reducen á no poder realizar en ningún caso el descuento de sus propias obligaciones, y á no poder tampoco recogerlas antes de la época señalada para su amortización, á
no ser que mediando causa legítima el Gobierno las autorice para esta última operación. En cuanto á su inspección, está encomendada á los Gobernadores civiles y á otros funcionarios, que pueden no estar adscriptos á ninguna en particular, y por consiguiente ni es tan constante ni tan inmediata como la de los Bancos (1).

Salvas estas excepciones se rigen en lo demás por las re-

(1) Arts. 13 y 44 del Real decreto para la inspección de estas sociedades de 30 de julio de 1855.

La inspección de estas sociedades fué concedida al Gobierno por la ley de su creación, que le dió facultad para hacer examinar, cuando la tuviera por conveniente, sus operaciones y contabilidad, y comprobar el estado de sus cajas: más ampliada por el art. 13 de la ley de presupuestos, que á fin de sufragar los gastos que ocasionara la autorizó para imponer á las de esta clase un gravámen anual con arreglo al capital desembolsado, segun la escala que en el mismo se establece, mandando que su importe ingresara en el Tesoro por el que fueran satisfechos los sueldos y dietas de los inspectores que ejercieran la vigilancia correspondiente en la forma que estableciera el reglamento que se había de formar; se creó después en el Ministerio de Hacienda, por el que citamos, una sección especial de estos inspectores bajo la dirección de uno denominado inspector general, previniendo que no estuvieran adscriptos á sociedad determinada, y fueran nombrados con la consideración de empleados públicos y con sujeción á las condiciones exigidas á estos en su ingreso y ascensos, prefiriendo en lo posible los doctores y licenciados en administración y jurisprudencia; y á estos funcionarios á mas de los Gobernadores civiles y delegados especiales á quienes se dé el encargo en casos determinados, se encomienda la inspección y vigilancia de estas sociedades.

Las visitas que han de practicar pueden ser ordinarias y extraordinarias, y sus atribuciones y obligaciones en general son las mismas que ya quedan indicadas tratando de la inspección de las anónimas comunes, así al constituirse la sociedad, como después de dar principio á sus operaciones, con algunas otras mas que hace indispensables la clase de negocios en que estas se ocupan y las obligaciones que emiten, por cuya razón es un deber de estos inspectores en sus visitas ordinarias: 1.° Examinar los estados mensuales y los trimestrales antes de remitirlos al Gobierno para su publicación: 2.° Vigilar que la emisión de las obligaciones se haga en proporción al capital realizado, observándose las prescripciones establecidas: 3.° Examinar las operaciones que se hagan; especialmente los préstamos sobre sus acciones y adquisición de fondos pú-
las establecidas para las sociedades anónimas comunes, y por las de sus respectivos estatutos, con las modificaciones relativas á su duración, á su formación y á la de su capital, que se ha creído conveniente introducir para que puedan corresponder mejor al objeto con que se constituyen (1).

204. La primera y la más notable acaso entre todas ellas es la de que pueden durar 99 años, para que tengan tiempo bastante para concluir los negocios que sucesivamente vayan emprendiendo; y á esta se siguen, la de que aun cuando han de fijar precisamente su domicilio en un pueblo de la Península ó Islas adyacentes, tienen facultad para establecer las agencias ó sucursales que les convengan, para la mayor espedición de sus negocios, en cualquier punto de las posesiones españolas, y aun en el extranjero, obteniendo antes el permiso del Gobierno; la de que pueden solicitar su autorización previa la aprobación de sus estatutos, luego que tengan colocada la tercera parte de sus acciones, sin esperar á que esté pedida la mitad, como se previene para las otras sociedades, imponiéndoles al mismo tiempo la obligación de entregar en la Caja general de Depósitos, ó en sus dependencias, el 10 por 100 del primer dividendo de las acciones colocadas, en dinero ó en títulos de la Denda ó otros valores del Estado, al precio de la cotización de la Bolsa del día antes de ponerlo ('); y la de

ílicos, á fin de que no traspasen los límites designados; y 4° Cuidar que no se repartan dividendos por beneficios calculados y no realizados.

Los que se nombren para girar visitas extraordinarias deben formar por sí mismos los balances, redactar los informes y memorias y dar, cuen-
ta al Gobierno del resultado de las que practiquen en el plazo más breve posible, sin perjuicio de que si apareciese haberse cometido algún delito, lo pongan en conocimiento del Gobernador civil de la provincia para que proceda según corresponda.

Véanse con más extensión las obligaciones de estos inspectores en el apéndice núm. 6.

(1) Art. 8 de la ley citada.

(‘) En las provincias en que no se pueda saber la cotización de la Bolsa del día antes, deberá fijarse el precio de los valores en que consista el depósito por la última cotización que contengan las Gacetas que se hayan recibido, porque este es el único dato oficial á que pueden atenerse.
acompañar á su solicitud el documento que acredite que está hecho este depósito, el que se perderá y quedará á beneficio del Tesoro público, caducando la autorización, si no se hace efectivo en caja el primer dividendo en los 30 días contados desde la fecha del Real decreto de aprobación, ó se volverá á sacar y recoger, haciendo constar que se puso en caja en el plazo prefijado (1).

El capital también se divide en nominal y efectivo, y ha de estar determinado en cada caso, así como el número de acciones y de series en que ha de verificarse su emisión, porque no se necesita ponerlo en caja todo al tiempo de su establecimiento, sino conforme lo exijan los negocios que se vayan emprendiendo, y en la forma que se prescriba en los estatutos; excepto el primer dividendo, que se ha de hacer efectivo en los 30 días siguientes á la fecha de la autorización, como queda dicho, y que ha de consistir en un 50 por 100 si está colocada solo la tercera parte de las acciones, y en un 25 si lo estuviese una mitad; debiendo advertir, que las acciones de estas sociedades se pueden expedir al portador desde un principio, ó luego que estén constituidas, aunque no esté hecho el pago mas que del primer dividendo; y que los que las cedan no quedan obligados ni directa ni subsidiariamente por la parte no realizada, sino solo los que las adquieran (2).

Su capital no devenga réditos como el de los Bancos, y el fondo de reserva se forma por consiguiente como el de las

(1) Arts. 2, 3, 6 y 14 de la ley citada.

Esta ley no dice expresamente que caduca la autorización si no se hace efectivo en caja el primer dividendo en los 30 días; pero parece una consecuencia necesaria de esta disposición, y debe ser además la razón por que se pierde el depósito; y así está también establecido por regla general para las sociedades anónimas comunes y para los Bancos, aunque los plazos son diferentes.

(2) Arts. 5 y 6 de la ley citada.

El accionista á quien convenga puede dejarlas depositadas en la sociedad, y recibir de la misma un resguardo nominativo. Artículo 6 citado.
anónimas comunes, á cuyas prescripciones están sujetas en
todo lo demás, como antes hemos manifestado (1).

§ III.

Sociedades de ferro-carriles y otras obras públicas.

205. Las sociedades de que ahora vamos á tratar no se
ocupan de actos de comercio, ni merecen propiamente la cal-
ificación de mercantiles, pero se forman por acciones con
sujeción á las mismas reglas que las anónimas; en lo que no
sean derogadas por las suyas particulares ó especiales, se con-
sideran generalmente estas empresas como una negociación,
utilizan también el crédito emitiendo obligaciones, y se van
aumentando tanto entre nosotros, que creeríamos, dejar im-
perfecto este tratado, si no nos ocupáramos de ellas al exami-
nar las que se rigen por leyes particulares.

Las de esta clase, á diferencia de las de crédito, todas se
proponen un solo objeto fijo y determinado, cual es la constru-
cción y explotación de la obra para que se crean, y de este
únicamente es del que pueden ocuparse, sin que les sea per-
mitido añadir otro más, que el de la fusión de otras socieda-
des de la misma naturaleza, cuando el Gobierno la apruebe y
con las condiciones que prescriba. Pero este objeto es de una
indole muy diversa de los que emprenden otras sociedades,
porque versa sobre una cosa de dominio público que se ha de
destinar á un servicio general y de tal importancia, y de tanta
trascendencia, que si bien puede convenir y aun ser necesario
en algunos casos que se construya la obra por cuenta de la
nación en todo ó en parte, ó que se auxilie con fondos públi-

(1) Estas disposiciones son aplicables, por regla general, á todas las
sociedades de crédito creadas por Reales decretos; pero como el art. 10 de
la ley que citamos concede también á los interesados la facultad de acu-
dir á las Cortes solicitando la constitución de la sociedad por medio de
otra ley especial, siempre que esto suceda podrán modificarse para aque-
lla sociedad determinada, por la que autorice su creacion.
cos su construcción, también puede darse alguno en que se crea perjudicial o que puede comprometer la seguridad del Estado; por cuya causa no se permite á ningún particular ni compañía, ni aun al Gobierno mismo, que las puedan emprender cuando quieran ó como mejor les convenga, y se exige como requisito esencial una autorización expresa concedida previamente por medio de una ley especial para cada obra; en la que atendiendo á las circunstancias que quedan indicadas, y á otras relativas á la riqueza del país, al servicio que ha de prestar después de construida, al capital que se necesite emplear y á las utilidades que ha de producir, se acuerde su ejecución, resolviendo al mismo tiempo, si se ha de construir en todo ó en parte por el Estado ó por empresa particular; si se la ha de auxiliar con fondos públicos, y si este auxilio, caso de concederlo, ha de consistir en cantidades que se le entreguen en plazos determinados, ó en señalar y asegurar un rédito ó interés á los capitales que se empleen; y en la que se fijen, además, las condiciones especiales que exija la obra á que se refiera para su seguridad, y para que corresponda mejor al objeto con que se va á construir (1).

206. Toda construcción de obra pública, y si es ferro-carril, aunque sea de servicio particular, necesita, pues, ser autorizada previamente por una ley especial, cuyas disposiciones son las que se deben guardar con preferencia á cualesquiera otras; mas para que esta se dicte con el debido acierto y para que pueda circunscribirse á las circunstancias especiales de la

(1) Art. 1 de la ley citada, y 4, 5 y 8 de la de 3 de julio de 1855.

Aunque hemos enumerado entre los objetos á que pueden extender sus operaciones las sociedades de crédito, la construcción y explotación de ferro-carriles y otras obras públicas, no por esto están dispensadas de la necesidad de obtener previamente esta concesión y autorización especial. La aprobación de sus estatutos las faculta para comprender este objeto entre sus operaciones; pero no las exime de practicar las diligencias indispensables para obtener la concesión de la obra, ni de la observancia de las demás disposiciones relativas á su construcción, explotación y demás objetos de que hacemos aquí mención.
obra que autorice evitando la repetición de unas mismas disposiciones en todas ellas, se han establecido por otras, que podemos considerar como generales para las de esta clase, las formalidades con que se han de pedir y conceder estas autorizaciones, y las concernientes a los estudios de las líneas o de las obras; los privilegios y exenciones de que han de gozar las empresas o particulares que las contraten; las causas por las que caduca la concesión y pierden su derecho si no las ejecutan ó las explotan en los plazos que se fijen; las reglas ó condiciones de arte a que se ha de ajustar su construcción, y también las disposiciones por las que se han de regir las sociedades que se creen para construirlas y explotarlas, que son de las que nos vamos á ocupar, examinando las relativas á su formación, á la de su capital y á su administración, siguiendo el orden que en las anteriores.

207. La formación de estas sociedades, una vez hecha la concesión de la línea ó de la obra, deberá ser autorizada por un Real decreto acordado en consejo de Ministros como la de los Bancos; mas para que sean aprobadas es preciso que se creen con un capital, por lo menos, igual al total importe de las obras de construcción y al del material para la explotación de la que se propongan construir y explotar; que esté pedida, siquiera, la mitad de las acciones en que se halle dividido y representado, y que en la escritura y reglamentos se establezca el modo de hacer efectivo aquel y la forma en que estas se han de emitir. Reuniendo estos requisitos es solo cuando se podrá expedir el Real decreto, previos los informes oportunos, y constituirse la sociedad si en los 30 días siguientes al de su fecha se pone en caja el primer dividendo, que en ningún caso podrá bajar de la suma equivalente al 10 por 100 del capital social, pues si trascurre este plazo sin haberlo realizado, caducará la autorización (1).

(1) Arts. 1, 4 y 5 de la ley de 11 de julio de 1856; 46 de la de 3 de junio de 1855, y 1.º y 3 de la de 11 de julio de 1860.

* Tampoco esta ley dice explícitamente que caduca la autorización si
208. Su capital se divide, como en otras, en nominal y efectivo, porque no hace falta todo de presente; pero no tienen fondo de reserva ni lo necesitan, porque no hacen otros negocios que produzcan las utilidades de que se hubiera de formar, y de cuyas resultados tengan que responder, mas que la obra que han de construir, y desde un principio se crean con el capital que se considera suficiente para cumplir la obligación de construir la y explotarla, que es la única que contraen; mas como pudiera suceder que no fuera exacto el cálculo que se hubiera formado, ó que no se colocara la mitad de las acciones que no estuvieran pedidas cuando se autorizase la formación, ó que conviniera á la sociedad proporcionarse fondos por otro medio, se facilita á estas empresas para contraer préstamos con la hipoteca de los rendimientos de la obra construida, y expedir obligaciones al portador, como las de crédito, con la misma garantía de los rendimientos de la obra, y con el interés fijo y la amortización que se le señale dentro del período de la concesion; pero se limita esta facultad á la suma total del capital realizado de las acciones de la sociedad, considerándose como capital social para este efecto la subvención recibida de fondos generales, provinciales ó municipales, cuando la tengan concedida y consista en la entrega de una parte del capital invertido. Mas para fijar este límite hay que tener en cuenta el valor nominal ó amortizable de las obligaciones, y el interés anual que gane sobre este valor, bajo el tipo regulador del 6 por 100, pudiendo llegar la emisión á la suma del capital realizado cuando este mismo 6 por 100 sea el que se le prefije, reduciéndola proporcionalmente á la diferencia que exista entre uno y otro si sube, y ampliándola en la misma proporción.

no se hace efectivo el primer dividendo en el plazo que designa; pero concurren las mismas razones que hemos alegado para decirlo en las sociedades de crédito.

Véanse estas leyes, la de 14 de noviembre de 1855 con las disposiciones para la conservación de las vías públicas, y la instrucción de 15 de febrero de 1856 para el cumplimiento de la de 3 de junio, en el apéndice número 7.
cra cuando no llegue; con la advertencia, de que en esta última hipótesis por bajo que sea el interés que se les señale nunca podrá exceder aquella de una suma igual al duplo del capital realizado de las acciones, y en su caso de la subvención recibida, y la de que se halla prohibida para lo sucesivo toda emisión de obligaciones cuya amortización no pueda efectuarse con los rendimientos de las obras dentro del plazo de la concesión y sin acudir al mismo medio del crédito. Para el caso de que ni aun por medio de estos préstamos reúnan los fondos necesarios, se les permite, además, acudir al Gobierno pidiendo autorización para aumentar su capital, y se faculta a este para que se la conceda, cuando habiendo ya hecho efectivo el invertido en la obra todo el nominal con que fue constituida, se vea que no ha sido suficiente para concluirla, siempre que no esté subvencionada ó auxiliada por el Estado, pues si lo está y la autorización que se le conceda ha de afectar los fondos públicos, será necesario una nueva ley para poderlo aumentar (1).*

(1) Art. 7 de la ley de 11 de julio de 1856; 48 y 49 de la de 5 de junio de 1855, citadas antes; 1.º y 2 de la de igual fecha de 1860; Real orden de 31 de agosto del mismo año, y 1.º, 2, 3 y 4 de la ley de 29 de enero de 1862.

* La facultad de emitir obligaciones de que gozan estas empresas ha sufrido diferentes modificaciones. Fue concedida, en primer lugar, para las de ferro-carriles por la ley de 3 de julio de 1855, que por su artículo 48 las autorizó para adquirir, por medio de empréstitos contraídos con la hipoteca de los rendimientos del ferro-carril, la tercera parte del capital social, cuando no pudieran hacerlo efectivo por medio de la emisión ó negociación de las obligaciones no suscritas al tiempo de constituirse, previa la autorización del Gobierno, que podría, en este caso, comprender la de emitir cédulas ó obligaciones hipotecarias de interés fijo y amortizables dentro del periodo de la concesión. La de 14 de julio de 1856 facultó después por su art. 7, no solo á las de ferro-carriles, sino á todas las demás empresas de obras públicas, para emitirlas al portador, no pudiendo exceder nunca el importe de las que emitieran de la mitad del capital realizado de las acciones de la sociedad; y la de 29 de enero de 1862, reformando la anterior, ha extendido últimamente la emisión hasta la suma total del capital realizado de las acciones y de la
Las acciones de estas sociedades tienen que ser nominativas hasta que tengan un 30 por 100 de desembolso; pero des-
subvención recibida en su caso, determinando se fije este límite en los términos que expresamos en el texto, y mandando que el Gobierno adopte las disposiciones reglamentarias que estime conducentes para asegurar su cumplimiento.

Este precepto legal se cumplió inmediatamente expidiendo el Gobierno la Real orden de 17 de febrero del mismo año, por la que se impone á estas empresas la obligación de darle cuenta por conducto de los inspectores, si los tiene, y en su defecto, y aunque los tengan, por el de los Gobernadores civiles, de toda emisión de obligaciones que acuerden, dentro de los ocho días siguientes á aquel en que la hayan acordado, recogiendo del mismo una certificación que lo acredite, sin permitirles, á pesar de esto, proceder á su enajenación hasta que hayan pasado otros veinte días después del en que dieron cuenta del acuerdo; y también la de remitir al Ministerio por el mismo conducto en los meses de enero, abril, julio y octubre, además de los estados de situación correspondientes al trimestre anterior respectivo, un resumen demostrativo del capital que hayan realizado por acciones, subvención recibida, número de obligaciones emitidas, valor nominal de las mismas, rédito ó interés fijado, gastos de negociación, producto que esta ha rendido, fechas de su emisión y amortización, en la forma y con los detalles que constan en el modelo que se acompaña, como queda dicho en las de crédito. Se previene, además, en ella á dichos funcionarios, que eleven inmediatamente al Gobierno los acuerdos sobre emisión de obligaciones y los estados y resúmenes de que queda hecho mérito, con las observaciones que estimen conducentes para su inteligencia y apreciación, facultándolos á la vez para suspender la ejecución de los primeros hasta la resolución del Gobierno, aunque pasen los veinte días, siempre que á su juicio no se hallen dentro del límite establecido ó le falte algun otro requisito; y se le hacen otras prevenciones encaminadas á asegurar la observancia de la ley y de los estatutos, impidiendo que en las emisiones se traspase el límite establecido, y castigando las infracciones en esta materia con una multa que podrá llegar hasta 100,000 reales, que es la que se impone á los que contratan en nombre de las sociedades que no se hallan legítimamente establecidas.

A las empresas de ferro-carriles de la isla de Cuba también se ha hecho extensiva esta facultad de emitir obligaciones de que gozan las de la Península, por Reales decretos de 8 de febrero de 1865, y 5 de agosto de 1866, con la diferencia, entre otras, de que el tipo regulado del interés para fijar el límite del capital realizado é invertido ahora es el de 10 por 100.
puen puedan expedirse al portador, quedando los que las cedan ó enajenen libres de toda responsabilidad por el 70 por 100 restante (1).

209. El derecho de nombrar los administradores ó directores y el de fijar los beneficios y emolumentos que hayan de gozar, así estos como los fundadores, caso de que se le conceda alguno, corresponde á la Junta general de accionistas, y y por lo tanto, aunque los estatutos designen las personas que hayan de componer el primer consejo de administracion, será preciso todavía que la Junta apruebe su nombramiento ó elija otros. A la misma toca tambien examinar y resolver los asuntos relativos á la enajenacion ó fusion de otras sociedades, y á las transacciones, que convenga celebrar con este motivo, cuando añadan este objeto al de su creacion; pero con la advertencia de que los acuerdos concernientes á estos particulares, han de estar tomados en juntas en que se hallen representadas las dos terceras partes del capital social, para que sean obligatorios para todos los accionistas; excepto el caso en que no concurran á la primera Junta bastantes accionistas, que entonces ya se puede tomar en la segunda que se reuna con este objeto, cualquiera que sea el número de los que hayan concurrido (2).

Los administradores de estas empresas tambien tienen obligacion de remitir al Gobierno un balance demostrativo y calificado de su activo y pasivo cada seis meses (**), y siempre

(1) Arts. 5 y 6 de la ley de 41 de julio citada.

(2) Arts. 9 y 10 de la ley de 41 de julio citada.

* Segun se infiere de la disposicion del art. 40 de la ley que citamos, los fundadores de estas sociedades pueden gozar de beneficios de que no gozan los demas asociados, y por lo tanto no tendra lugar con respecto a ellos la prohibicion establecida, por regla general, para las sociedades anónimas en el art. 2.* del Reglamento de 17 de febrero de 1848.

(**) El art. 41 de esta ley no exige precisamente que se remitan los balances cada seis meses, sino que se limita á sentar la obligacion de remitirlos sin fijar plazo, segun este redactado en las ediciones oficiales que hemos visto; pero sin duda consiste en una omision involuntaria, porque versó la discusion precisamente sobre estas palabras, y fué aprobado con esta adicion en la sesion de Cortes de 18 de junio de 1856.
que aquel se los pida, estados que den pleno conocimiento de sus operaciones y las demás noticias y detalles relativos á los gastos e ingresos de la empresa; y están además sujetas á una doble inspección del Gobierno, que ejerce la vigilancia necesaria para que la obra que se execute corresponda justamente al servicio á que se destina, y no se perjudiquen en su uso y explotación los intereses del público ni los de los particulares que se sirvan de ella (1).

(1) Art. 14 de la ley de 11 de julio citada.

* La inspeccion que ejerce el Gobierno sobre las empresas concesionarias de obras públicas, y especialmente sobre las de los ferro-carriles, que es para las que se han dictado estas disposiciones, es muy diferente de la que hemos hablado en las secciones anteriores, porque no se limita á vigilar las operaciones de su administracion, sino que se extiende á cuanto se relaciona con la construccion y al buen servicio de la obra contratada; y se divide en técnica ó facultativa, y administrativa ó mercantil.

La primera que exige conocimientos especiales, se confia á los ingenieros del cuerpo de caminos y canales, que pueden ser jefes de division ó nombrados especialmente para las lineas no comprendidas en dichas divisiones, y la segunda se encomienda á funcionarios elegidos entre los mas aptos de la Administracion pública, habiendo además para aquellos y estos otros empleados subalternos que los auxilien. Art. 2 del Reglamento de 8 de julio de 1859.

A la facultativa corresponde cuanto tiene relacion con la construccion y conservacion de las vías, estaciones y demás obras que se ejecuten para el servicio de las mismas, considerándose como obligacion suya; 1.º Confrontar sobre el terreno los proyectos que se formen y las variaciones que se propongan, e informar sobre la direccion de los trazados, las condiciones de buena ejecucion de las obras, las del material fijo y movil y demás que convenga para la construccion, establecimiento y servicio de las vías, y cuidar que se ejecuten con sujecion á los proyectos aprobados. 2.º Ejercer en la instruccion de los expedientes de expropiacion las atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos. 3.º Vigilar la conservacion de toda clase de obras, y examinar la calidad y empleo del combustible y agua, y la composicion y movimiento de los trenes, y cuidar se haga con la debida puntualidad el servicio de apartaderos, agujas, cambios de via, pasos de nivel, señales, telegrafo, alumbrado, y de todo lo demás que concierne à la explotacion y à la seguridad de la via en la parte facultativa. 4.º Formar la estadistica del material,
210. Antes de concluir este tratado, tenemos todavía que hacer dos observaciones respecto á ferro-carriles, que son:

1.° Que puede el Gobierno autorizar provisionalmente la formación de las sociedades por acciones que se propongan la construcción y explotación de alguna línea, para solo el objeto de solicitar y obtener la concesión de la que se propongan construir y explotar, siempre que tengan suscritas las dos terceras partes del capital social, el que debe ser, cuando menos

movimiento de trenes, accidentes que ocurran y demás que el Gobierno le reclame, y ejecutar los estudios y trabajos que se le encarguen. 5.° Dar cuenta por menor de los hechos ó accidentes que ocurran en la línea á la Dirección general de obras públicas, ó á las autoridades á quien compete el conocimiento.

A la administrativa y mercantil corresponde: 4.° Vigilar las operaciones de las empresas y visitar, cuando lo crean necesario, las líneas, las estaciones y demás dependencias. 2.° Inspeccionar la explotación mercantil en todos sus ramos. 3.° Informar sobre las propuestas de modificación ó aplicación de las tarifas de precios, de peaje y transportes, y cuidar que en la percepción de estos y en la del importe de los gastos para que estén autorizadas, se arreglen á lo prescripto en cada caso. 4.° Examinar los contratos que las empresas concesionarias celebren con otras ó con particulares para el transporte de mercancías. 5.° Llevar la estadística de la circulación de viajeros y transportes de mercancías y demás efectos en cada camino, de los gastos de explotación y conservación, y de sus rendimientos. 6.° Cuidar que el importe de la subvención ó auxilio, cuando lo tengan concedido, figure en los balances con la debida expresión y con separación del activo de la empresa, y de que imputen también sus gastos con la separación conveniente al capital del establecimiento ó al de explotación, según corresponda. 7.° Ejercer las atribuciones que le confieran los reglamentos especiales de las empresas que hayan recibido préstamos del Estado, ó disfruten como subvención la garantía de un *minimum*, ó en las que deba participar de los productos de la explotación. 8.° Informar sobre la fijación de horas de la salida y entrada de los trenes, sobre los reglamentos del servicio y explotación que adopten las empresas, y sobre los demás asuntos económicos y mercantiles que se le consulten, siempre que tengan relación con los caminos que tienen á su cargo.

Le corresponde, además, en las empresas que tengan la forma de sociedades: 1.° Cuidar de la observancia de las leyes y disposiciones generales á que deban sujetarse, y la de sus estatutos y reglamentos, como á los
igual al importe total de las obras de construcción y del material de explotación, y que presenten los estatutos con las formalidades necesarias. Pero esta autorización provisional no dá derecho á la sociedad, mas que para nombrar directores ó administradores, ni estos después de nombrados pueden hacer mas que practicar las gestiones necesarias para obtener la concesión, solicitándola directamente ó haciendo proposiciones en subasta, si se concede mediante este requisito, y exigiendo de los accionistas el 10 por 100 del primer dividendo, con el objeto exclusivo de atender á los gastos de su establecimiento, á los de los estudios de la línea ó de la obra, y á los del depósito que haya que hacer para poderla solicitar (1). Si no la consigue, no podrá tener efecto su constitución definitiva, y se disolverá en este estado; pero si obtiene la autorización, se podrá constituir en vista de la misma ley que se la conceda, y quedará sujeta á las reglas por las que hemos dicho se gobiernan las que se forman después de obtenida (2). Estas sociedades no pueden emitir títulos de acciones, ni ninguna otra clase de documentos transferibles ó negociables, hasta después de constituídas (3).

2.° Que pueden considerarse como una excepción en esta materia de ferro-carriles los servidos por fuerza animal, y los demás en que no se emplean locomotoras, y á cuya explotación ha de destinarse un material que no pueda circular por los caminos ordinarios, para los que se ha promulgado una ley inspectores de las anónimas comunes. 2.° Usar de la palabra en las Juntas generales para hacer las observaciones que estimen oportunas. 3.° Examinar las actas de las de gobierno, y hacer las observaciones y prevenciones á que dé lugar su contenido. 4.° Presidir las subastas públicas que se celebren para la negociación de las obligaciones, y los demás actos de esta especie en que juzguen conveniente su asistencia. 5.° Cuidar que los dividendos activos procedan solamente de beneficios efectivos realizados.

Véase el Reglamento de 9 de febrero de 1861 en el apéndice núm. 8.

(1) Reglas 2.° y 3.° del art. 46 de la ley de 3 de junio citada.
(2) Art. 47 de la misma.
(3) Regla 4.° del art. 46 de la misma.
especial que fija asimismo las formalidades con que se ha de hacer la concesion, el tiempo que ha de durar, las causas por que caduca, el modo de fijar las condiciones facultativas y las concesiones que se hacen á las empresas, con las variaciones que se han considerado necesarias para la construcion y explotacion de estas vías, entre las que se encuentra la de no ser necesario que se autoricen previamente por una ley cuando no se construya por cuenta del Estado, ni se auxilie con subvencion del Erario á las empresas ó particulares, en cuyo caso se otorga la concesion por medio de un Real decreto acordado en Consejo de Ministros, previo informe del de Estado (1).

SECCION QUINTA.

Sociedad en comandita.

211. Se dice en comandita la sociedad en que unos se obligan á poner el capital y otros á administrarlo en su nombre propio y bajo su responsabilidad, participando todos de las ganancias en la proporcion que establecen (2).

Los socios que la componen se dividen en gestores y comanditarios. Los gestores, llamados tambien gerentes, son los que la dirigen y administran; y los comanditarios ó capitalistas, los que ponen los intereses. Segun hemos dicho antes, es un compuesto de las colectivas y de las anonimas comunes, que ofrece la ventaja de tener socios que se obliguen solidariamente, y la de que puedan evitar esta responsabilidad y la publicidad de sus nombres los que solo quieran poner los capitales. Participa de la naturaleza de ambas, y como ellas necesita formalidades y requisitos en su constitucion, nombre, fondo, administracion, y socios con derechos, obligaciones y responsabilidades: pero está sujeta á distintas reglas, acercán-

(1) Ley de 5 de julio de 1850. Véase el apéndice núm. 9.
(2) Art. 265, núm. 2; y Recurso de injusticia notoria de 25 de febrero de 1863.
dose más a las unas o a las otras, según que el fondo esté o no dividido en acciones.

Esta circunstancia es muy esencial en estas compañías; porque si lo está, le son aplicables las disposiciones de las anónimas, y si no, se gobiernan como las colectivas con algunas excepciones. Las examinaremos bajo los dos conceptos, indicando los puntos en que convienen, y en los que se diferencian de cada una de las otras respectivamente.

§ 1.

Sociedades en comandita por acciones.

212. Cuando el capital se divide en acciones en todo o en parte, tienen que formarse con las mismas solemnidades que las anónimas comunes; y por consiguiente, es indispensable, que presentando la escritura y el reglamento, se pida y obtenga la correspondiente autorización por una ley ó un Real decreto antes de constituirse; que la escritura contenga los requisitos que dejamos indicados, y uno más, que es el que se fije la participación que los socios gerentes han de tener en las ganancias y pérdidas; que los reglamentos guarden conformidad con las bases en ella establecidas, y que se imprima y publique todo, remitiendo copias al Tribunal de Comercio, para que se fijen edictos en sus extrados.

También le son aplicables las disposiciones relativas á la formación del capital, la clasificación del nominal y del efectivo, la división de este último en acciones, su inscripción y enajenación, y la creación del fondo de reserva; pero en cuanto al nombre de la sociedad, á su administración y á las obligaciones de los socios, ya se rigen por otras diferentes (1).

213. Las sociedades en comandita todas tienen razón social, y no denominación por su objeto; porque aun cuando el capital se divida en acciones, hay siempre socios solidarios que

(1) Art. 1.° de la Ley; 4, 6, 7 y 26 del Reglamento de 17 de febrero de 1849.
responden con todos sus bienes del resultado de los negocios, y es necesario que se dé a conocer esta circunstancia por medio de la razón social, compuesta de sus nombres y apellidos, guardando en su formación las reglas que hemos sentado en la sociedad colectiva. La firma también debe girar siempre bajo esta misma razón o nombre especial, puesta a cargo de los gestores, con exclusión absoluta de los comanditarios (1).

214. La administración provisional se podrá encargar a cualquiera; pero la definitiva corresponde de derecho a los gerentes. No se nombran cuando se declara constituida la sociedad y se celebra la Junta general, sino que constan ya los que han de ser en la escritura de fundación, y entonces no se hace más que ponerlos en posesión, autorizándolos para que principien a ejercer sus funciones.

No son amovibles, ni se les puede separar sin rescindir antes el contrato de sociedad. Pero se nombran los que han de inspeccionar y vigilar su administración, y puede igualmente el Gobierno inspeccionarla y vigilarla, suspender y anular la autorización (2).

En cuanto al orden administrativo y a la dirección de los negocios, también deben atemperarse a lo que disponga el Reglamento, y en su defecto, a lo que hemos dicho en las colectivas (núms. 157 y siguientes) (3).

(1) Art. 1.º, núm. 4, y 16 del mismo, y 270 del Código.

Cuando la sociedad no tenga más que un sócio gestor, o cuando los nombres de todos los que lo sean estén comprendidos en la razón social, podrá dudarse si la significación de la palabra compañía, que da a entender que hay otras personas comprometidas en aquellos negocios, comprende implícitamente el nombre y la responsabilidad de los comanditarios. Entendemos que no, aun cuando no se compusiera más que de dos socios, esto es, un gestor y un comanditario, porque los nombres de estos últimos no se publican, su crédito no influye para nada en el éxito de los negocios, y la palabra compañía, en este caso, solo da a entender que hay otras personas interesadas, pero no que sean responsables de sus resultas. Así opinan también el Sr. Vicente y Caravantes y otros autores que cita.—Arts. 271 y 272.

(2) Art. 1.º, núms. 16, 25, 30, 57 y 38 del Reglamento citado.

(3) Art. 7 de idem.
215. Sus obligaciones son las mismas que las de los administradores en las anónimas comunes, incluida la de depositar las acciones, con la de responder solidariamente, a falta del fondo social y el de reserva, de todos los negocios que ejecuten; les comprenden las mismas prohibiciones, con otra más, que es la de no contratar a nombre de la compañía, hasta que se haya constituido definitivamente; y son igualmente responsables por sus faltas, incurriendo en las mismas multas que los administradores interinos, si infringen esta última prohibición (1).

216. Los derechos de los socios son diversos, según la clase a que pertenezcan. Los de los comanditarios en nada se diferencian de los de las anónimas; mas los gestores, no solo lo tendrán a percibir la parte que le corresponda en las utilidades, sino también a ser indemnizados de los gastos que hayan hecho, y de los perjuicios que hayan sufrido a consecuencia de su administración, en los términos que hemos dicho en las sociedades colectivas (núm. 171) (2).

217. Los de la Junta general estarán reducidos a acordar la emisión de las acciones, nombrar y separar los inspectores, acordar los dividendos, y a los demás que se le reserven en los estatutos; pues la de nombrar y separar los administradores no corresponde a estas compañías, en las que son inamovibles los gestores, y se disuelven por la muerte de cualquiera de ellos; ni tampoco la de designar la retribución que han de percibir, porque esto debe hacerse en la escritura de fundación (3).

(1) Arts. 15 y 16 de la Ley, y 31 del Reglamento citado.
(2) Art. 321 del Código.
(3) Arts. 6 y 28 del Reglamento citado.
§ II.

Sociedades en comandita, cuyo capital no está dividido en acciones.

218. Estas sociedades se diferencian poco de las colectivas. En su formación no intervienen mas solemnidades, y por consiguiente, ni hay necesidad de autorización, ni de reglamentos, ni de ninguna otra formalidad mas que de que se registre la escritura en el tiempo prefijado, teniendo presente que a los requisitos que ha de contener el de las colectivas, debe añadirse el de el capital social, suprimiendo los nombres de los socios comanditarios.

Son iguales los requisitos esenciales y accidentales que han de contener; tienen razón y firma social; no hay mas capital que el que ponen en caja los comanditarios, ni mas administración que la de los gestores. Ni el Gobierno puede inspeccionarlas ni vigilarlas nunca, ni tampoco los socios capitalistas, fuera de los casos del tiempo y de la forma que se haya estipulado en la escritura; y solo en las obligaciones y derechos de los asociados, es en lo que hay algunas diferencias (1).

219. Las de los gestores son: la de administrar y la de responder solidariamente, si no hay bastantes fondos, con todas las demás enumeradas al tratar de los socios colectivos: les alcanzan las mismas prohibiciones, inclusa la de no poder delegar en otros sus atribuciones, ni aun siquiera en los socios comanditarios, y están sujetos á la misma responsabilidad por sus faltas, incurriendo tambien en la multa de 10,000 rs. si principian sus gestiones antes que se haya otorgado la escritura, y no en la de los 400,000, señalada como máximo para las sociedades por acciones, cuando no están definitivamente constituidas (2).

(1) Arts. 270, 290 y 309 del Código.
(2) Arts. 270 y 285 del Código.
220. Por lo que toca á los comanditarios, concluyen las suyas poniendo en caja el capital ofrecido; y si no lo hacen, podrán ser ejecutados ó despedidos resumiendo la sociedad con respeto al moroso: pero tienen dos prohibiciones que son especiales suyas, a saber: (1).

1.ª La de incluir sus nombres en la razón social.
2.ª La de administrar, ni aun por delegación expresa de los gestores (2).

(1) Art. 300 de idem, y Recurso de injusticia notoria de 4 de diciembre de 1863.

El derecho de elegir entre la expulsión ó la ejecución, corresponderá a los administradores, cuando la sociedad tenga su capital dividido en acciones, en cuyo caso la expulsión se reduce a vender las acciones que correspondan al moroso. Mas si no se ha hecho esta división, sino que cada socío comanditario se ha obligado a entregar su parte determinada, la elección debe competir a la Junta general, ó sea á toda la compañía, que es á la que se la confiere el art. 300 del Código, y á quien tiene que corresponder por necesidad, porque la exclusión de un socío altera las bases de la escritura, y disminuye el capital social si los demás no se comprometen á suplir la parte del excluido.

Si la sociedad no ejercitase este derecho, ¿podrán los acreedores de esta proceder contra él y obligarle á que entregue la parte prometida? El Sr. Vicente y Caravantes se hace cargo de esta cuestión, y la resuelve afirmativamente, fundado en que pueden demandar al moroso ejerciendo los derechos de los gestores. Nosotros somos del mismo parecer, pero por razones distintas de la que él alega; porque no concebimos que los acreedores de ninguna sociedad puedan tener derechos contra los socios en particular, ni menos contra los deudores de la misma, mas que en el caso de quiebra, y entonces ya no ejercitan solo los de los gestores, ni proceden por delegación suya, sino los de la sociedad entera, que los tenía para cobrar sus deudas, en los que ellos se han subrogado como en todos los demás que la correspondan.

(2) Arts. 271 y 272 del Código.

¿Y estará á la vez prohibido á los socios gestores ser capitalistas ó poner parte del fondo? El Código nada dice expresamente, aunque el párrafo 2.º del art. 263 parece dá a entender que no pueden reunirse en una misma persona estos dos conceptos. Mas sin embargo, nosotros no vemos en esto los inconvenientes que puede haber en que los comanditarios administrén, ni creemos que la sociedad se convertiría en colectiva por esta causa: porque la diferencia esencial consiste en que no todos...
Estas prohibiciones tienen por objeto impedir: la primera, que influya su nombre y su crédito en los negocios de la sociedad cuando no se obligan personalmente; y la segunda, que perjudiquen los intereses de la sociedad y la responsabilidad de los socios solidarios emprendiendo negocios arriesgados, prevaleidos de que no pierdan más que la parte que han puesto en fondo; y por eso si las infringen, incurren en la obligación de responder también solidariamente, perdiendo el beneficio que gozaban como simples capitalistas (1).

También tienen la de no enajenar ni transmitir sus dere-

los socios contraigan una misma obligación, sino en que unos se obliguen solidariamente, y otros solo con la parte del capital que ponen en fondo; y siempre que esto se verifique, creemos que hay sociedad en comandita, aunque los socios comanditarios no hayan puesto todo el capital. Cuando este se divide en acciones, no solo pueden serlo, sino que es indispensable que lo sean, porque de otro modo no podrían depositar las que la ley exige para garantizar su administración. Esta doctrina está conforme con la que hemos sentado en la nota del párrafo 3.º, sección 2.º (núm. 161).

(1) Art. 273 del Código, y Recurso de injusticia notoria de 4 de diciembre citado.

* El art. 273 no impone al socio comanditario la obligación de responder solidariamente mas que cuando infrinja la prohibición del 275, esto es, cuando consiente que se incluya su nombre en la razón social; pero nosotros no dudamos asegurar que debe responder del mismo modo cuando infringiendo la del art. 272 ejecute actos administrativos, porque en ambos casos hay la misma razón: y en el mero hecho de administrar, contrae una obligación solidaria, según el 270. Pero también creemos que esta obligación debe entenderse sólo con respecto á los extraños que contrataron con la sociedad, porque esta responsabilidad en qué incurre es una pena que la ley le impone por infringir su prohibición, y no puede redundar en beneficio de los demás socios que han contribuido á que la infrinja, consintiendo que se incluya su nombre en la razón social, ó que practique actos de administración. Los extraños son los únicos que pueden sufrir perjuicios por estos abusos, y á estos solos deben alcanzar los beneficios de la ley. Así, pues, si en virtud de ella hubiese que satisfacer mayor cantidad que la que había puesto en fondo, podrá repetir el exceso contra los gestores, de los que debe considerarse como fiador solidario.
chos é intereses sin consentimiento de la sociedad, porque aun cuando no tengan participación en la administración, pueden tener derecho á examinarla; se eligen y tienen en cuenta sus cualidades personales, y por esta causa ni está dividida ni representada la parte de su capital en títulos de acciones que se coticen, ni sus acreedores pueden tampoco extraerla de la masa social, sino únicamente embargarla para percibir lo que le corresponda, cuando se hagan los dividendos (1).

221. En cuanto á los derechos, los gestores tendrán los de los socios colectivos, menos el de percibir parte del capital á la disolución de la compañía, que no les puede competir, porque no lo han puesto; y los comanditarios gozarán los de los socios anónimos, excepto el de transmitir sus intereses sin autorización previa, como ya hemos manifestado: á la Junta general corresponderán los de las colectivas, y á esta y á cada socio en particular, cualesquiera otros que se les hayan conferido en la escritura (*)

(1) Art. 296 del Código.
(*) El derecho de repartir dividendos, existiendo la sociedad, puede, en las de esta clase, ocasionar dudas y cuestiones de resolución más difíciles que en las anónimas y colectivas, si al tiempo de su disolución y liquidación resultan pérdidas y el fondo social no alcanza para pagarlas: porque no serán solo los acreedores los interesados en la devolución de lo percibido, sino también los socios gestores que tienen que cubrir el déficit con sus bienes propios. En realidad, mientras la sociedad no se ha concluido, no puede saberse el resultado de las operaciones que fueron objeto de su formación, ó se ignora si á su disolución habrá pérdidas ó ganancias, y los repartos que se hagan antes no deben tener otro concepto que el de interinos ó provisionales, sujetos á las modificaciones que la necesidad haga indispensables en la liquidación definitiva. Mas contra estas observaciones se alega también, que los dividendos cobrados se reputan consumidos, que cada inventario ó balance, y cada reparto concluye una porción de operaciones y arregla definitivamente lo pasado, y que los comanditarios no hacen mas que aceptar lo que se les debe entonces, y no pueden luego ser reconvenidos, porque no contraen otra obligación que la de poner el capital; y fundados en estas razones los autores españoles que tratan de esta materia, convienen en que no deben ser devueltos, aun cuando no todos los extranjeros que citan son de la misma opinión; y tienen tambien en contra suya el art. 16, capi-
SECCION Sexta.

De la disolución de las compañías mercantiles.

222. Las sociedades mercantiles no se extinguieren, como los demás contratos, por el medio ordinario de la paga ó prestacion de lo prometido, sino por la disolución, que es más conforme al modo con que se han formado. Tampoco tienen lugar en ellas ninguno de los extraordinarios, mas que la rescisión, porque los demás no pueden acomodarse á la naturaleza de la obligación que contraen los que se comprometen á pertenecer á una asociación, y aun este no produce aquí los efectos que en las demás convenciones.

La disolución es la conclusion del contrato, á la que se sigue por necesidad en todas las sociedades la division y distri-

El primer párrafo se refiere a la disolución de las sociedades mercantiles. Se menciona que no se comparten como los demás contratos, por el medio ordinario de la paga ó prestación de lo prometido, sino por la disolución, que es más conforme al modo con que se han formado. Tampoco tienen lugar en ellas ninguno de los extraordinarios, excepto la rescisión, porque los demás no pueden acomodarse a la naturaleza de la obligación que contraen los que se comprometen a pertenecer a una asociación, y aun este no produce aquí los efectos que en las demás convenciones.

La disolución es la conclusión del contrato, a la que se sigue por necesidad en todas las sociedades la división y distribución del capital. Nosotros no podemos tampoco concurrir con ellos de todo punto, y juzgamos, que en el estado actual de nuestra legislación, deben distinguirse tres casos para proceder con acierto, que son: cuando el capital esté dividido en acciones; cuando no lo esté y se haya acordado el reparto por condición expresa de la escritura, y cuando se haga por acuerdo de la Junta general de socios. En el primero, como se gobiernan en todo como las anónimas, hay fondo de reserva y doble inspección; desde luego convendremos en que no deben devolverse por las razones allí manifestadas. En el segundo, tampoco creemos que debe haber lugar á la devolución, porque acordada y publicada con la escritura la distribución de beneficios en épocas determinadas, lo mismo los socios que los acreedores saben, ó pueden saber, que se liquidan y reparten las ganancias llegando aquella época, como si se hubiera concluido, y que desde entonces principian otras operaciones nuevas, cuyo resultado es desconocido. Mas cuando los dividendos se hayan acordado por la Junta general, que no quiera tener las ganancias acumuladas al fondo, porque le convenga darles otra aplicación, nos parece más acertado que se entiendan hechos con sujeción al resultado que ofrezca la liquidación definitiva, como lo disponían dichas ordenanzas en el artículo citado, aunque esta resolución no está conforme con el párrafo 3 del artículo 20 del Código holandes, que dispone, por el contrario, que no tengan obligación de devolverlos.
bucion del fondo común creado al tiempo de celebrarlas, con el aumento ó disminución que haya sufrido.

La rescisión es la innovación que sufre con la exclusion de alguno de los asociados, en virtud de la que queda ineficaz para el excluido, y subsistente para los demás. En realidad no es un modo de rescindir el contrato, sino de modificarlo, porque la obligación primitiva de los demás socios queda como antes, y tampoco desaparece la persona moral creada á su formación. Pero se acaba para el socio á quien se excluye, y por lo mismo vamos á exponer las causas que la autorizan y los efectos que produce, antes de tratar de la disolución.

223. La rescisión es una pena que se impone al socio que ha faltado á sus obligaciones, cuando está falta hace sospechar que no será muy exacto en el cumplimiento de sus demás deberes, y por lo tanto solo tiene lugar:

1.° Cuando no pone en el fondo común la parte del capital con que debe contribuir

2.° Cuando se ausenta sin justa causa, y no presta los servicios prometidos, siendo requerido para que vuelva.

3.° Cuando usa de los capitales comunes ó de la firma social para sus negocios propios.

4.° Cuando ejerce funciones administrativas no estando autorizado.

5.° Cuando comete fraude en la administración ó en la contabilidad.

6.° Cuando hace por su cuenta operaciones que le están prohibidas (1).

(1) Art. 326.

El art. 326 del Código no enumera más causas que estas, entre las que autorizan la rescisión de la sociedad; pero si hubiese algún socio discutido y revoltoso, ¿podrían los demás excluirllo, así como podrá separarse por sí también aquel á quien la sociedad no le cumpla lo prometido? Así está establecido en la ley 14, tit. 10, part. 5, para las sociedades civiles; rescisión que nos parece aplicable á las mercantiles, pero con la sujeción al juicio de árbitros, que es el modo de resolver todas las cuestiones sociales.
De estas causas, solo la primera es aplicable a los socios anónimos y comanditarios.

224. Los efectos de esta rescisión son:

1.° La exclusión del socio culpable.

2.° La devolución del capital que puso en el fondo común, cuando se hayan liquidado todas las operaciones pendientes al tiempo de la rescisión, descontándole, si hay pérdidas, la parte que le corresponda.

3.° La pérdida de las ganancias cuando las haya habido (1).

4.° La toma de razón y publicación de la modificación del contrato, en los mismos términos que la de la escritura primitiva (2).

Para los socios accionistas, en las sociedades anónimas y comanditarias, los efectos se reducen a la expulsión y a la pérdida que resulte de la venta de sus acciones (3).

225. Entre las causas de disolución, las hay que son comunes a todas las sociedades, y particulares para algunas

Son comunes a todas:

1.° La conclusión del tiempo señalado, ó del objeto con que fueron contratadas (*).

2.° La pérdida entera del capital social, ò de la parte designada en la escritura (4)** y la de la mitad en los Bancos, á

(1) Art. 327.
(2) Art. 328.
(3) Art. 32 del Reglamento de 17 de febrero de 1848.
(*). Cuando tengan a la vez tiempo y objeto, ya hemos dicho que no deben cesar hasta que se concluya este último.—Véase la nota 4.° del párrafo 1.° de las sociedades anónimas (núm. 175).
(4) Art. 329 del Código, y el núm. 13 del art. 1. del Reglamento citado.

** La pérdida parcial de lo que hubiese puesto en fondo algun socio, será suficiente para disolver la sociedad? Esta cuestión no puede moverse, cuando lo que ha puesto ha sido en propiedad; porque desde el momento en que lo entrega, lo adquiere la sociedad, deja de ser del socio, y si se pierde, se perderá parte del capital social, y no habrá lugar a la disolución, porque la ley exige la pérdida del todo; pero si
no ser que por medio de una nueva ley se autorice su continuación (1).

3.° La quiebra de la sociedad (*).

Son peculiares á las compañías colectivas y á las en comadita, cuyo capital no está dividido en acciones:

4.° La muerte de uno de los asociados, cuando no contenga la escritura pacto·expreso para continuar entre los que queden, ó con los herederos del difunto (**).

2.° La demencia Ú otra causa que produzca la inhabilitación de un sócio para administrar sus bienes.

puede suscitarse cuando haya puesto solo el uso de las cosas determinadas que hayan perecido, y nada se haya previsto en la escritura. En este caso, lo mismo que en el de que un sócio de industria se inutilizara para prestar el servicio estipulado, dejan de tener parte en la sociedad, porque no ponen en fondo lo que ofrecieron, que fue el uso de la cosa ó el servicio por todo el tiempo que debía durar; y aun cuando esta falta no provenga de su voluntad, y no se le pueda obligar por lo mismo á que la repongan, aunque fuese posible, entregando otra equivalente, no puede menos de producir el efecto de concluir la sociedad, la que tendrá que liquidarse en aquel estado, sin perjuicio de que los demás luego puedan continuar los negocios, constituyéndola como tengan por conveniente.

(1) Art. 22 de la ley de 28 de enero de 1856.

(*) De esta causa no se hace mérito en el art. 330 del Código, que es el que designa las que disuelven las sociedades por acciones; pero debe ser una omisión involuntaria, porque no es posible que se considere subsistente como antes una sociedad que ha quebrado. Hoy ya está remediada en parte en el núm. 13, art. 1.º del Reglamento citado.

(**) Cuando se pacte que muerto algún sócio continúe la sociedad entre los que sobrevivan, no tiene lugar la disolución, pero si la rescisión ó sus efectos; porque los herederos del difunto retiran sus fondos, se disminuye el capital, y la compañía sufre una alteración. En este caso los herederos participan de las resultas, no solo de los negocios pendientes al tiempo del fallecimiento, sino también de los que los complementan, ó son una consecuencia inmediata y precisa de los mismos. Artículo 332 del Código.

Si se estipula que haya de continuar con los herederos del difunto, puede dudarse si se ha de cumplir este pacto cuando sean menores. Pero esta cuestión, debatida entre los autores extranjeros que cita alguno de los españoles, está virtualmente resuelta en el núm. 4 del art. 329 de
3.° La quiebra de alguno de los asociados (*).
4.° La simple voluntad de cualquiera de ellos cuando no tenga plazo fijo y objeto determinado, y otra cláusula que lo

nuestro Código, que autoriza la disolución por cualquier causa que produce la inhabilitación de un sócio para administrar sus bienes; pues si se ha de disolver cuando el sócio pierda esta administración, claro está que no podrá continuar subsistiendo con el que no la tenga por su menor edad, y por esta causa no pueda prestar ni los servicios, ni la garantía y responsabilidad que su causante. Para la liquidación después de disuelta, como que es un acto de absoluta necesidad, pueden ser representados por sus guardadores, que obran como en negocio propio, como diremos mas adelante, art. 348.

Por menores, para este efecto, deben entenderse los que no tengan aptitud legal para comerciar, según lo que hemos dicho tratando de esta materia (núm. 13, con sus notas).

(*) La quiebra inhabilita al quebrado para la administración de sus bienes, y por consiguiente esta causa tiene el mismo fundamento que la anterior, y aun debiera considerarse comprendida en ella. Pero ¿deberá considerarse como una causa obligatoria para todos, ó como un derecho concedido á los demás sócios, del que podrán usar ó no, como mejor les convenga, obligando en este último caso á los acreedores del quebrado a que esperen la conclusión del plazo ó del objeto, para que se disuelva y liquide? Así opinan algunos autores, fundados en que la quiebra no es un suceso necesario y natural como la muerte, que liberte al que la sufre y á los sucesores en sus derechos de las obligaciones contraídas, y que parece injusto que la insolvencia del quebrado y su propia falta, los autorice para disolver la sociedad, cobrando ó retirando su capital, en perjuicio de los demás sócios; pero estas razones no son acaso tan sólidas como parecen á primera vista, pues si el quebrado tiene contraída la obligación personal de continuar en la sociedad, también tiene la de pagar todas sus deudas, entre las que puede haber alguna que sea anterior á la celebración del contrato social; y si no es justo que se rescinda este en perjuicio de los demás asociados, tampoco lo es que continúe perjudicando á los demás acreedores, que regularmente sentirán también el de no cobrar sus créditos por entero. La generalidad con que la ley fija como casos de disolucion la inhabilitación del sócio para administrar sus bienes, y la quiebra del mismo, dá bastante á conocer que su intencion es que se disuelva desde luego, y los acreedores perciban la parte que á él le corresponda.

¿Y qué sucederá cuando, sin haber quebrado, se adjudiquen ó cedan á sus acreedores los derechos que tiene en la sociedad en pago de sus deu-
impida (1). Estas causas comprenden a todos los socios en estas dos clases de compañías, sin excluir a los comanditarios, cuyas personas se tienen también en consideración en ellas, como hemos visto tratando de la prohibición de ceder sus derechos.

226. La disolución de la sociedad no produce efectos mas que para las personas de quienes es conocida; por consiguiente, para que se considere extinguida con respecto a los extraños, es preciso que se anote y publique en el registro, y en los tribunales en que se tomó la razón de la escritura de fundación, excepto el caso en que la disolución proceda de haberse concluido el término prefijado, en el que, desde que se formó, saben todos cuándo ha de concluir, y no es necesario publicarlo de nuevo; porque las sociedades de comercio no se pueden prorrogar tácitamente, sino por nuevo contrato y nueva escritura (2).

227. La que procede de la voluntad y propuesta de los socios, no habiendo plazo prefijado, tampoco los produce entre los asociados hasta que se haya aceptado por los demás, que podrán oponerse y contradecirla si se hace con mala fe y ocasiona perjuicios; entendiéndose que procede con malicia, cuando a consecuencia de la disolución pretenda hacer algún

das? En este caso no hay lugar a la disolución, porque no se ha constituído en el estado en que se halla el quebrado, ni tampoco los acreedores pueden ser tenidos como socios sin que el contrato sufra una innovación, y sus derechos se limitarán a embargar la parte de intereses que el deudor tenga en la sociedad, para percibirla en el tiempo en que este podría hacerlo, según el art. 296; porque estos acreedores se hallan en el mismo caso que el cesionario, de que hemos hablado, tratando de la enajenación hecha sin licencia.

Cuando un socio haya quebrado, bien pueden los demás convenir en que continúe la sociedad para ellos, en cuyo caso su quebra producirá el mismo efecto que la rescisión; pero si no se ha pactado así previamente en la escritura, el convenio posterior equivaldrá a constituir la sociedad de nuevo, y no será continuación de la que antes existía.

(1) Art. 329 del Código.
(2) Arts. 334 y 335.
lucro particular, que no haría si subsistiera la sociedad, y de-
biendo en todo caso suspenderse la división de bienes, hasta
que se hayan concluido del modo más conveniente a los inte-
reses comunes los negocios principiados (1).

228. Los efectos principales de la disolución de la socie-
dad son dos:

1.* La extinción de la persona jurídica creada cuando se
formó, y la de las atribuciones que competían a los encarga-
dos de representarla.

2.* La liquidación y distribución del fondo social.
Como consecuencia del primero nadie podrá después hacer
negociaciones nuevas por cuenta de la sociedad, ni usar su
nombre y su firma sin añadir la palabra en liquidación, para
dar a conocer su estado. Los administradores ya no tienen ba-

(1) Arts. 333 y 334.

* Según la ley 12, tít. X, Part. 5.* el sócio que se aparta de la so-
ciedad con mala fe, libra a los otros de seguir; pero no se libra él de
ellos, y por lo mismo son de su cuenta exclusiva las pérdidas, y tiene
que comunicar y partir con todos las ganancias que adquiera, por el do-
lo con que ha procedido. Nos limitamos á indicar esta disposición del de-
recho civil, alegada por otros autores; porque aun cuando su razon ó
fundamento es igualmente aplicable á los sócios mercantiles, cuando se
hubiese aceptado la disolución por sorpresa ó sin descubrir la intención
maliciosa con que se provocaba, la naturaleza y objeto de estas socieda-
des, la imposibilidad en que se constituía al comerciante de buena fe
de que emprendiera ningún negocio lucrativo en su tráfico, sin riesgo de
que los demás alegaran que la había pedido maliciosamente para ejecu-
tarlo por su cuenta, y el ejemplo del que se separa cuando espera la he-
rencia, para no comunicarla ni llevarla al fondo social, que es del que
se vale la ley de Partida, dan bastante á conocer que su disposición ha-
ce referencia á otra clase de adquisiciones.
La aclaración que hace en su última parte el art. 333 del Código,
previniendo se entienda que obra con mala fe el que á favor de la diso-
lución pretenda hacer un lucro, que no conseguiría subsistiendo la so-
ciedad; tampoco debe entenderse de toda clase de ganancias, sino de la
segura ó conocida, y no de la eventual que le puedan producir sus ope-
raciones; pues de otro modo, ningún sócio colectivo ni gestor podría de-
dicarse al comercio sin quedar expuesto á reclamaciones, al menos por
mucho tiempo después de la disolución.

TOMO I. 14
jo este concepto derechos que ejercitar, sino que cumplir dos obligaciones que pueden considerarse como el complemento de las que les impone la administración de que han estado encargados, á saber:

1.ª La de rendir cuentas, ó lo que es lo mismo, la de formar el inventario y balance, y presentar su resultado en los quince días siguientes á la disolución; bajo el supuesto que, de no hacerlo, se nombrará una comisión que lo forme á su costa (1).

2.ª La de practicar, no como administradores, sino como liquidadores, las gestiones indispensables para la conservación de los intereses que están á su cuidado, cobrando los créditos, pagando las deudas, y realizando las demás operaciones pendientes, cuando no se haya dispuesto otra cosa en la escritura, y solo hasta que la Junta general de socios resuelva lo conveniente (2).

SECCIÓN SÉPTIMA.

De la liquidación de las compañías.

229. La liquidación y división del fondo común corresponde á todos los socios en general, que podrán convenir en el modo de hacerla, por pacto expresó de la escritura al tiempo de formarla, ó después de estar disuelta.

Si se ha expresado en la escritura, se observará estrictamente lo que se halle establecido.

Cuando nada se haya pactado en ella, se convocará inmediatamente la Junta general de todos los socios, conti-

(1) Art. 339.

* Según el art. 49 del Real decreto de 12 de setiembre de 1861, deben llevar un sello de 50 céntimos las cuentas, balances y demás documentos de contabilidad que produzcan cargo ó descargo; pero no necesita más que uno aunque contenga mas de un pliego. Art. 50 de la Instrucción de 26 de octubre del mismo año.

(2) Art. 337.
nuando en el entretanto la liquidación interina de los admi-
nistradores, en los términos que dejamos indicados (*).

Esta Junta acordará que continúen la liquidación los ad-
mistradores, y nombrará otros que la practiquen.

Si adopta este último extremo, deberá entregarse á los
nombrados de nuevo el haber social y los libros y papeles
de la compañía, por el inventario y balance formado por los
administradores, siempre que den antes fianzas idóneas y su-
sicientes para responder de los intereses que se ponen á su dis-
posición (1).

250. Las atribuciones de los que lo sean, están en sus-
tancia reducidas:

1.º A concluir los negocios pendientes, como antes he-
mos dicho; esto es, á cobrar los créditos y pagar las deudas,
inclusas las de los mismos socíos cuando hayan hecho présta-
mos, ó sean acreedores á la sociedad por otros conceptos.

2.º A practicar la división de los fondos liquidados, según
las bases establecidas en la escritura, y á falta de ellas, en
proporción al interés que cada socío tenga en la compañía.

3.º A entregar á cada socío, luego que sea aprobada, la
parte que le haya correspondido (2).”

251. Estas operaciones deben ser practicadas sucesiva-

(*) El Código no expresa el plazo dentro del cual debe celebrarse
esta Junta; manda que sea sin dilación, pero previene también que se
de á los ausentes el tiempo necesario para que puedan concurrir por si
ó por medio de sus representantes. Nosotros creemos que debe ser el de
los 15 días, dentro de los que debe presentarse á los socíos el resultado
del inventario y balance prevenido en el art. 339, que de otro modo no
puede tener cumplimiento.
(1) Art. 340.
(2) Art. 343.

** ¿Y podrán los liquidadores vender los bienes ó efectos de la com-
pañía? La ley no les dá expresamente esta facultad, ni tampoco se lo
prohíbe; los autores dicen, y á nosotros nos parece también, que la
eujenación corresponde á la Junta general, que es la que lo debe acor-
dar y autorizarlos para que la ejecuten, aun cuando sean mercancías ó
efectos fungibles, y con más razón si son bienes raíces.
mente, por el orden con que las dejamos expuestas, de manera, que hasta que estén pagadas las deudas, ó en otros términos, satisfecho el pasivo, ó depositado al menos su importe, no debe hacerse la distribución y entrega de los fondos que quedan, ó sea del activo, ni tiene nadie derecho para exigirla (1). Pero no hay necesidad tampoco de esperar á que estén concluidas todas las operaciones para practicarla, porque una vez pagadas ó depositado el importe de las deudas, el sobran te es un capital ocioso, que debe distribuirse inmediatamente para que sus dueños puedan utilizarlo, sin perjuicio de hacer lo mismo con los demás fondos, según se vayan recaudando.

Por esta razón los socios comanditarios y los anónimos pueden desde luego retirar el capital que pusieron cuando del inventario y balance resulta, que después de retirado queda todavía en el fondo común ya recaudado lo bastante para satisfacer las obligaciones de la compañía (2).

232. Para impedir los abusos que los liquidadores pudieran cometer en el desempeño de sus funciones, se concede á todo socio el derecho de promover la liquidación; está manda do que pueda reunirse la Junta general, á petición de cualquiera de ellos, para calificar el estado de los negocios, y acordar la división del haber social cuando dicho estado lo permita, y los liquidadores no la hagan; y además se imponen tambien á estos algunas obligaciones y prohibiciones, cuya infracción los constituye en responsabilidad (5).

233. Las obligaciones son:

1.º Comunicar á cada socio mensualmente el estado de la liquidación (4).

2.º Facilitarles cuantas noticias les pidan sobre este estado mismo, ó sobre las operaciones pendientes (5).

(1) Art. 347.
(2) Art. 249.
(3) Arts. 343 y 351.
(4) Art. 541.
(5) Art. 351.
5.° Descontarles en las primeras distribuciones las cantidades que para gastos particulares ó otros objetos se le hayan anticipado (1).

4.° Comunicarles las divisiones del haber común, conforme las vayan haciendo, para que puedan exponer sus agravios, si se les irroga en ellas algún perjuicio, á cuyo fin se les concede el término de quince días (2).

5.° Conservar en su poder y bajo su responsabilidad los libros y papeles de la compañía, hasta que esté de todo punto concluida la liquidación (5).

234. Cuando hay bienes muebles ó efectos divisibles, pueden partirse adjudicando á cada uno su porción determinada: si son inmuebles será necesario hacerlo en partes intelectuales, ó designando la cantidad que deba corresponder á cada uno hasta completar el valor de su tasación, cuando no sea posible adjudicar la finca entera á uno solo. Si son créditos se suelen clasificar antes en ciertos y dudosos, adjudicando estos últimos por suerte: el derecho de continuar usando de las marcas y señales que usaba la compañía, aunque objeto divisible, se deja comúnmente al que la fundó ó al que ha tenido en ella mayores capitales.

235. Les está prohibido concluir los asuntos por transacción, y sujetar á compromiso los intereses de la sociedad sin previa autorización. Son responsables de los daños y perjuicios que ocasionen por la falta de cumplimiento de sus deberes, ó por haber procedido con dolo ó negligencia en el desem-

(1) Art. 350.
(2) Art. 345.
(3) Art. 353.

Como puede suceder que al tiempo de hacerse la liquidación hayan recaído los derechos de algún sócio en sus hijos ó otras personas que sean menores de edad, y la ley mercantil no concede á nadie el beneficio de restitución, sus guardadores proceden en este caso como en negocio propio, y todos sus actos son válidos ó irrevocables, siendo responsables para con sus menores sólo cuando hayan obrado con dolo ó negligencia culpable. Artículo 346. Véase el núm. 136.
peño de su encargo, y pueden ser destituidos, si faltan a la obligación de comunicar mensualmente a cada socio el estado de la liquidación (1).

236. Por conclusion debemos advertir:

1.° Que las reclamaciones de agravios que se introduzcan contra las divisiones o repartos hechos por los liquidadores, deben someterse como todas las demás cuestiones sociales al juicio de árbitros nombrados por las partes dentro de los ocho días siguientes á su presentación, ó de oficio por el tribunal, si los dejan trascurrir sin haberlos nombrado (2).

2.° Que cuando el fondo común no alcance para cubrir las obligaciones de la sociedad, habrá que distribuir las pérdidas, en la misma proporción, entre los socios solidarios, y hacerlas efectivas de los bienes que no llevaron a la compañía, que solo en este caso pueden ser embargados y ejecutados (3).

3.° Que los liquidadores tienen derecho a ser indemnizados de las anticipaciones y gastos que hagan, y de los perjuicios que sufran en el desempeño de su cargo, y a percibir la retribución que se le señale en la escritura ó por acuerdo de los que los nombran (4).

SECCION OCTAVA.

De la sociedad accidental ó de cuentas en participación.

237. Además de las tres clases de asociaciones que llevamos referidas, hay otra que se conoce con el nombre de accidental ó de cuentas en participación.

Puede definirse, el contrato en que dos ó más comerciantes convienen en llevar parte en algún negocio que haga uno de

(1) Arts. 541 y 542.
(2) Art. 345.
(3) Art. 352.
(4) Recurso de injusticia notoria de 27 de enero de 1859.

Según esta decisión, este encargo se considera gratuito cuando no se le señala retribución en los estatutos ni cuando son nombrados.
 ellos en su nombre y bajo su crédito particular, participando de sus resultas en la proporción que establezcan (1).

Esta sociedad no se parece á ninguna de las anteriores, de las que la separan diferencias muy notables, y entre otras la de que se limita á operaciones fijas y determinadas, y no se publica ni resulta de ella una persona moral distinta de los comerciante que está compuesta.

En realidad es un negocio particular conocido solo de los que lo celebran, y algo parecido á la comision ó mandato mercantil.

No tiene ni necesita en su formacion cláusulas especiales, ni razón social ó nombre con que distinguirse, ni más formalidades que las de cualquiera otro contrato; y por consiguiente, ni aun de escritura privada, no pasando de 1,000 rs. el interés puesto en ella (2).

238. Como el convenio se reduce á tomar parte en un negocio que hace otro, el que lo hace es el único que podrá administrar, el que adquirirá derechos y condrerà obligaciones con los que traten con él, el que deberá rendir cuentas y hacer la liquidación.

(1) Art. 354.
(2) Arts. 355, 356 y 358.

* El art. 355 del Código dice, que estas sociedades pueden contraerse privadamente por escrito ó de palabra, quedando sujeto el socio que intente alguna reclamacion á justificar el convenio por cualquier género de prueba de las establecidas en el derecho para acreditar los contratos; pero de esto no debe deducirse que se puedan contraer de palabra pasando la cuantía de 1,000 rs., porque la intencion bien marcada del legislador fue solo dispensarlas de las solemnidades á que están sujeta la formacion de las demás asociaciones, pero no de las prescritas por regla general para celebrar contratos mercantiles.

Estos convenios pueden celebrarse, no solo entre particulares, sino entre estos y una compañía mercantil ó entre compañías ya constituidas; y claro es, que en este caso cada una tratará bajo su razón social, así para la formacion de la accidental, como en las gestiones que tenga que practicar á consecuencia de ella; pero esta razón es la suya primitiva y no nace de este convenio, que como decíamos en el texto, no la tiene ni la necesita.
El que lleve parte en el negocio solo estará obligado a entregar el capital prometido y a sufrir las pérdidas, si las hay, y no tendrá otro derecho que el de reclamar la rendición de cuentas cuando se haya concluido (1).

Las dudas ó controversias que entre ellos se susciten, no deberán tampoco someterse al juicio de árbitros por necesidad, sino decidirse como los demás asuntos comunes, según las reglas de interpretación; porque ninguna de las disposiciones del Código relativas á la formación, derechos, obligaciones, término y liquidación de las compañías mercantiles, son aplicables á estas sociedades (2).

(1) Art. 537.
(2) Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1865.
CAPITULO II.
DE LOS PRÉSTAMOS MERCANTILES.

259. Otro de los contratos de que se ocupa la ley mercantil por las operaciones que prepara es el de préstamo, que por lo que hace a nuestro objeto podemos definir, un acto en virtud del que un comerciante recibe una cantidad de dinero o mercancías para destinarla a las operaciones de su tráfico, obligándose á devolver otro tanto de la misma especie.

Generalmente considerado, se llama préstamo todo acto por el que uno da á otro alguna cosa para que la utilice por algún tiempo, y se la devuelva en sí misma ó en su especie, y se divide en mútuo y comodato, según que la cosa entregada es ó no de las que pueden usarse sin consumirse. Esta definición y división son propias del derecho civil, y no contribuyen á nuestro propósito, porque en el comercio rara vez puede ocurrir un préstamo de cosa no fungible, y aun cuando ocurra, no es de aquellos que por su naturaleza deben gobernarse por reglas diferentes de las del derecho común. Por esta causa la ley mercantil prescinde absolutamente del comodato, y se ocupa solo del mútuo, y no de todos tampoco, porque no todos se celebran con el fin de emprender negociaciones comerciales, sino de los que las preparan realmente, que son los únicos que pueden necesitar la protección de una ley especial y merecen el nombre de mercantiles (*).

(*) El mútuo es un contrato gratuito por su naturaleza, que deja de serlo y pasa á ser otra cosa cuando interviene algún rédito ó interés. Su verdadero nombre en este caso es el de logro, y de logreros el de los que lo celebran, distinguiéndose así el mútuo gratuito del préstamo con interés; pero nosotros prescindimos de todas estas distinciones, y adoptamos la palabra préstamo, que es más general y los comprende todos. También usaremos solo de las palabras acreedor y deudor para designar los contratantes, porque la de prestamista que emplea alguna vez el Código de comercio para designar al deudor, es equivoca y se suele aplicar asimismo al acreedor, no solo en el lenguaje común, sino en el jurídico, como puede verse en el art. 466 del Código penal.
En los préstamos debemos considerar su calificación, su celebración, su cumplimiento y los réditos que devengan.

240. Para que puedan calificarse de mercantiles y regirse por la ley del comercio, es indispensable que concurran en ellos dos requisitos, a saber:

1.° Que sea comerciante el que lo recibe.

2.° Que lo contraiga expresamente para destinar a operaciones de comercio las cantidades que se le entregan (1).

Faltando alguno de los dos, no hay préstamo mercantil, sino civil; y de ellos además se infiere, en primer lugar, que no hay necesidad de que el que presta sea comerciante, y por consiguiente que todo el que no tenga una incapacidad absoluta para comerciar, puede celebrar un préstamo mercantil, como hemos dicho tratando de los que no pueden dedicarse al comercio (núm. 13); y en segundo, que es indispensable que lo prestado se entregue para operaciones de comercio, porque si se dá para otros fines, aunque sea comerciante el que lo recibe, pierde esta cualidad, y queda reducido a un préstamo común.

241. En su celebración intervienen las solemnidades que en todos los contratos en general, y pueden por lo mismo ser contraídos en escritura pública, oficial o privada, y aun de palabra si la cuantía no pasa de 1,000 rs., y no se estipulan réditos; pero es necesario además que intervenga siempre la entrega del dinero ó de los efectos, porque si no hay entrega, no hay préstamo, sino un pacto ó una promesa de prestar, que obligará, si se quiere, al que la hace á que cumpla lo que promete, mas no á aquel á quien se hace, que nada tendrá que devolver cuando nada haya recibido (*).

(1) Art. 387, y Recurso de casación de 29 de enero de 1859.

(*) En el comercio suele ser frecuente la promesa de adelantar fondos á un corresponsal, lo que se llama tener crédito abierto. El que la hace está obligado a cumplirla, y debe aceptar las letras y demás créditos mercantiles que aquel á quien la hizo gire á su cargo hasta la suma convenida, constituyéndose este en la obligación de abonarle las cantidades que pague, los derechos de comisión y los intereses ó réditos que
242. Esta entrega debe ser real y efectiva, mas no siempre será preciso que intervenga en el acto, porque hay casos en que el préstamo se contrae á consecuencia de otra operación en que ha precedido y es inútil repetirla. Así, pues, si á la conclusion de un negocio ó de una liquidacion de cuentas, resulta un saldo ó sea alcance contra uno de los interesados, y los dos se convienen en que no se pague de presente, sino en el plazo que estipulen, habrá en este convenio un verdadero préstamo de la cantidad en que consista, y el alcanzado tendrá que satisfacerla como si la recibiera entonces, porque no hay necesidad, ni aun posibilidad, de entregar lo que ya tiene recibido (*).

243. Los préstamos mercantiles suelen consignarse en dos diferentes clases de escritos, según el objeto con que se extienden. Cuando los otorgantes se proponen sólo que conste legalmente su celebración para que se pueda reclamar su cumplimiento en la época que corresponda, se otorga escritura pública, oficial, ó una contrata ó poliza privada como en las demás negociaciones; mas cuando el acreedor quiere poner en circulación el derecho que ha adquirido, se expide á su orden un vale ó pagaré para que pueda endosarlo.

le correspondan, si los hubiesen pactado por escrito, aun cuando no llegue á realizarse el contrato, porque una vez hecha la promesa se ve ya en la necesidad de tener los fondos preparados para cumplirla. A consecuencia de estas promesas ó de los valores adelantados que unos comerciantes remiten á otros para negociarlos despues, se abre la cuenta corriente que por debe y ha de haber tienen que llevar en el libro mayor con cada uno de sus correspondentes, de la que se envía un extracto en las épocas convenidas, siendo exigible desde luego la diferencia ó saldo que resulte con los derechos de comision, porque proviene de una mezcla de préstamo y depósito.—A. B. parte 3.ª, tit. III, cap. 2.º, sec. 4.ª y 2.ª

(*) En el caso de que un comerciante expidiera el recibó ó pagaré antes de la entrega, ¿tendrá lugar la excepción de dinero no entregado dentro de los dos años siguientes? Parece que sí, porque los asuntos mercantiles deben siempre decidirse, la verdad sabida y buena fe guardada, y en cualquier tiempo que aparezca que no fue cierto el préstamo, debe ser absuelto el deudor.
La diferencia entre unos y otros consiste en la diversa forma en que pueden enajenarse, como veremos después hablando de las ventas y de los documentos endosables.

244. También puede suceder que para la seguridad del pago se estipule á mas otra garantía, que podrá consistir en una hipoteca especial que se constituya, en alguna prenda que se entregue ó en una fianza que otro otorgue; pero esta circunstancia solo podrá influir para decidir la preferencia que deba gozar este crédito, cuando ocurran otros acreedores, como diremos en el tratado de quiebras y en el de las fianzas.

245. El cumplimiento en este contrato consiste en la devolución de la cantidad recibida, la que habiendo plazo prefijado debe verificarse en el mismo día que venza como en todos los demás, y no habiéndolo á los treinta días después de habersele intimado la restitución, porque se supone que se halla invertida en las negociaciones para que fué entregada, y es necesario dar al deudor un plazo más largo para que pueda realizarla sin graves perjuicios, y prepararse para el pago (*).

Cuando lo prestado fuesen géneros, debe devolverse otro tanto de la misma especie y calidad; mas cuando consista en dinero, habrá que distinguir si ha sido contratado en monedas fijas ó en cantidad determinada. En el primer caso deberá devolver otras de la misma especie que las recibidas, cualquiera que sea el valor que tengan en el acto de la devolución; y en el segundo cumplirá con devolver la misma cantidad numérica, con arreglo al valor nominal que tenga la moneda, aun cuando en el entretanto haya sufrido alteración (1).*

(*) El saldo de cuentas corrientes es una excepción de esta regla, según se ha dicho en la nota anterior.

(1) Art. 592.

* A consecuencia de la alteración introducida en el valor de la moneda por la ley 18, tit. 17, lib. 9 de la Nov. Recop., se mandó por auto acordado del Consejo que en los contratos celebrados con calidad de que las cantidades que contuviesen se habían de satisfacer en oro ó plata por ser la especie en que se recibieron, debían pagarse en la moneda re-
246. Los réditos que á veces intervienen en los préstamos, son una cantidad que el deudor tiene que pagar al acreedor, además del capital, por el uso que hace de lo prestado, y se dividen en convencionales y legales.

Se llama convencional el que estipulan las partes; y legal el que la ley ha establecido contra los deudores morosos para indemnizar los perjuicios que puedan causar á los acreedores con su morosidad.

Los primeros tienen que pactarse necesariamente por escrito, considerando para este efecto como réditos toda prestación estipulada á favor del acreedor, incluso el aumento en la misma especie en los préstamos de cosas fungibles. La cantidad en que hayan de consistir se fijará libremente por los contratantes (1).

No se deben cuando no se han prometido, pero si el deudor los paga voluntariamente, se consideran como una remuneración hecha en prueba de su reconocimiento y gratitud, y no podrá reclamar después lo entregado á pretexto de que es un pago indebido (2).

247. Los legales no tienen lugar sino á falta de los convencionales, y solo en el caso de que el deudor no pague después de haber sido requerido de una manera eficazante. Así pues, no basta que deje de pagar al tiempo convenido para que se le puedan exigir, sino que es necesario además que se le requiera, y no es suficiente tampoco cualquiera requerimiento amistoso, sino el que se le haga judicialmente, ó al menos por ante escribano (5).

Cuando el préstamo consista en mercancías, se graduará el valor equivalente que tenían al tiempo de los desembolsos y suplementos, y no en el que se le había aumentado. Nota 16 del título y libro citados.

(1) Arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley de 14 de marzo de 1856. Esta ley se ha hecho extensiva á las provincias de Ultramar por Real decreto de 21 de julio de 1864.
(2) Art. 395.
(3) Art. 388.
su valor para el pago de los réditos por el precio mercurial que tengan el día que debieran devolverse en el punto en que habían de ser entregadas (1).

Su tasa la debe fijar el Gobierno al principio de cada año, oyendo previamente al Consejo Real ó á la corporación que ejerza sus funciones. Mientras no se fije se considerará como legítimo el 6 por 100 al año (2). Mas como no tienen lugar sino cuando las partes no los han estipulado, habiendo convenido estas en otra menor ó mayor, la estipulada será la que se continúe adeudando por el tiempo de la tardanza (3).

248. Para concluir haremos tres advertencias: 1.ª que no se deben réditos de réditos ni en los préstamos ni en otra deuda comercial, y por consiguiente que solo pueden pedirse los que haya devengado el capital recibido, y no los que pudieran corresponder á la cantidad que importaran los devengados y no satisfechos, á no ser que precediendo una liquidación de las obligaciones vencidas y exigibles, se capitalizaran después como saldo de cuentas por declaración judicial ó por renovación voluntaria del contrato; en cuyo caso se deberían, porque en la renovación se suponen pagados y entregados otra vez, y no serian ya réditos de los réditos de un contrato, sino del capital que había servido de base al celebrado de nuevo: 2.ª que después de intentada una demanda judicial contra el deudor por el capital y réditos vencidos, no puede hacerse acumulación de los que se vayan devengando para formar un aumento del capital que produzca réditos, porque serían réditos de réditos y se infringiría la prohibición anterior (4): y 3.ª que se presumen perdonados, y no hay lugar á pedirlos, cuando el acreedor devuelve al deudor el documento en que constaba la deuda, ó le da un recibo por la totalidad del capital, sin reserva expresamente el derecho á reclamarlos (5).

(1) Art. 399.
(2) Art. 8 de la ley citada.
(3) Arts. 396 y 397.
(4) Art. 401.
(5) Art. 403.
CAPITULO III.

DE LA COMISION MERCANTIL.

249. El mandato á que damos el nombre de comision (*), y del que tratamos aquí, porque también prepara otros negocios, es un contrato por el que un comerciante da el encargo de hacer algunas operaciones de comercio á otro que lo admiite, y se constituye en la obligacion de cumplirlo mediante una retribucion.

Al que lo da se llama comitente, al que lo acepta comisionista, y al encargo ó mandato comision; y con este nombre se designa también la retribucion que recibe.

En él tenemos que examinar: el modo de celebrarse, los derechos y obligaciones que produce, y el modo de extinguirse. Los modos de perfeccionarse y de concluirse son comunes á todas las comisiones; pero las obligaciones, responsabilidades y derechos varian en algunas por razón del objeto sobre que recaen, y por la naturaleza de los encargos, que exigen que los que los desempeñan observen reglas diferentes, por cuya causa nos ocuparemos primero de las comisiones generales, y después de las especiales.

SECCION PRIMERA.

De las comisiones en general.

250. El contrato de comision puede celebrarse por cualquiera de los cuatro medios por los que pueden contratar y

(*) Entre el verdadero mandato y la comision hay la diferencia de que el mandatario obra en nombre del mandante á quien obliga, y el comisionista obra generalmente en nombre propio, obligándose á sí mismo. El primero se dá al factor y al mancebo en los términos que ya hemos explicado; la segunda la recibe un comerciante de otro comerciante del modo que ahora veremos.
obligarse los comerciantes; pero concurre en él además la circunstancia de celebrarse de palabra cualquiera que sea la cuantía que intervenga, siempre que se ratifique por escrito antes que el negocio haya llegado á su conclusion (1).

(1) Art. 117.

El art. 117, atendiendo á lo que regularmente sucede, solo exige que se confiera el encargo por escrito privado ó de palabra, con tal que después se ratifique por escrito antes que finalice; pero no excluye tampoco los demás medios, y como indudablemente sería válido también si se hiciera en escritura pública, ó con intervencion de corredor, no hemos dudado en asegurar que puede celebrarse por cualquiera de los cuatro medios comunes á todas las convenciones.

La conclusion del negocio, antes de la que debe ratificarse la comision verbal, puede referirse á dos actos tan diversos, como son, el de la perfeccion del contrato y el de su consumacion. Si se refiere al primero, es preciso que se ratifique antes que la comision sea aceptada, y si al segundo, bastará que se verifique antes que se haya de evacuar. Algunos autores muy respetables hemos visto que opinan debe referirse al primero, fundados en que el comisionista participa del carácter de factor por nuestras leyes mercantiles, porque puede obrar, sí quiere, en nombre de su comitente y obligarle, para lo que debe suponersele competentemente autorizado antes. Confesamos que los términos en que está redactado el artículo 117 no dan lugar á dudas muy fundadas, pero no nos parece convincente la razón que se alega; porque no siendo necesario un poder formal registrado y publicado para hacer negocios por cuenta de otro como comisionista, el contrato que este celebre con un tercero en nombre de su comitente, lo mismo puede descansar en una carta ó otro escrito privado en que conste la comision, que en el dicho del comisionista que asegure bajo su palabra que la ha recibido, cuando en último resultado, si falta á la verdad, él sera el responsable del dolo con que haya procedido: además, que si el encargo verbal ha de producir algún efecto, como indudablemente ha querido la ley que lo produzca, ha de ser no exigiendo la ratificacion escrita hasta que haya principiado su ejecucion, sobre todo en los negocios en que es de necesidad practicar diferentes actos antes de concluirlos; pues si se ratifica por escrito antes de principiarla, ya no hay encargo de palabra, y bajo este supuesto la opinion contraria es la que parece mas conforme á su espíritu y á su tenor literal.

A nuestro modo de ver, la inteligencia mas justa y mas fundada que puede darse á esta disposicion, es la de que el comisionista puede en virtud de ella practicar las diligencias convenientes para preparar el negocio, como adquirir noticias, proponer la compra ó la venta, pedir ó recibir
Según se infiere de su definición, ha de intervenir en él necesariamente encargo y aceptación, y hasta que esta última se haya prestado no hay contrato.

251. Cuando el encargo se hace entre ausentes, podrá el comisionista aceptar o no aceptar según mejor le convenga, pero no callar y desentenderse no haciendo nada, porque la ley fundada en lo que exige el interés general del comercio, y en el principio de equidad natural que nos manda hacer lo que aprovecha á otros y á nosotros no nos perjudica, le obliga en el caso que no quiera admitirlo: 1.° á que conteste en el correo inmediato al en que recibió el encargo, que no lo acepta; 2.° á que practique las diligencias necesarias para la conservación y seguridad de los efectos que se le remitan; y 5.° á conservarlos en su poder hasta que el comitente provea de nuevo encargado; y si este no lo hace luego que pase un término razonable para buscarlo, á acudir al tribunal pidiendo el depósito judicial y la venta de los que sean precisos para cubrir los gastos que haya hecho. Dejando de practicar alguna de estas diligencias, será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan por efecto directo de su omisión (1).

252. La aceptación puede ser expresa o tácita.

Expresa, cuando manifiesta su consentimiento de una manera explícita por palabras terminantes. Y tácita, por actos que la dan á conocer, como cuando sin contestar afirmativa ni negativamente principia á ejecutar el encargo (2).

253. De cualquiera de los modos que lo acepte, queda el contrato perfecto; el comisionista facultado para obrar en nombre de su comitente, ó en el suyo propio, sin manifestar la per-

precios, muestras ó otras semejantes, siendo responsable el comitente de los gastos que ocasionen estos actos, aun cuando hayan sido ejecutados solo á consecuencia de su encargo verbal; pero de ningún modo cerrarlo ó concluirlo definitivamente sin haber recibido antes órden escrita para hacerlo, á no ser que el interés del asunto no pase de los 4,000 ó de los 3,000 rs., que entonces ni aun sería necesaria esta ratificación.

(1) Arts. 420 y 421.
(2) Art. 423.

TOMO I.
sona por cuya cuenta contrata; y los dos obligados, el uno á sufrir las consecuencias de la negociación, ejecutada con arreglo á sus instrucciones, á pagar el premio que corresponda con los gastos y desembolsos hechos para ejecutarla, y á cumplir los demás pactos ó condiciones que estipulen, y el otro á desempeñar su comisión. Pero como el servicio que el comisionista tiene que prestar es el objeto principal del contrato, y como en el mero hecho de celebrarlo se constituye en la necesidad de dirigir y administrar con celo y exactitud los negocios y los fondos que se le confían, sus efectos alcanzan más á este último, que por estas causas tiene deberes que llenar mientras dura y después de haberlo concluido. Los primeros son relativos al interés y cuidado con que debe proceder, atendiendo la naturaleza de su encargo, y á los actos que le están prohibidos, para asegurar mejor su cumplimiento; y los segundos, á las obligaciones y prohibiciones que tienen por objeto la responsabilidad en que incurre por sus faltas y á la rendición de cuentas.

254. Son sus obligaciones:

1.ª Desempeñar la comisión por sí mismo, luego que pueda ser evacuada, con igual celo que si fuera negocio propio ó con las ventajas posibles (1).

2.ª Atenerse en su desempeño á las instrucciones que reciba del comitente.

3.ª Comunicarle con puntualidad las noticias que le puedan interesar, para que adopte de nuevo con acierto las disposiciones que le convengan, ratifique ó modifique las que ya tenga adoptadas (2).

4.ª Consultarle los casos no previstos, si tiene tiempo para poderlo hacer.

5.ª Obrar como dicte la prudencia, ó como sea más conforme al uso general del comercio, cuando no tenga tiempo

(1) Arts. 126, 136 y 153.
(2) Art. 134.
para consultar, y cuando se le autorice para proceder á su arbitrio (4).

6.° Suspender el cumplimiento de las instrucciones que reciba, cuando por alguna causa que el comitente no haya podido prever, crea que de seguirlas le causaría un daño grave y evidente, participándoselo así al momento (2).

7.° Avisar la conclusión de cada negocio por el correo inmediato al día en que cierre el convenio en que quede finalizado (3).

8.° Observar las leyes y reglamentos del Gobierno, que conciernan á los asuntos puestos á su cuidado (4).

9.° Hacer las cobranzas con puntualidad, demandando en juicio á los deudores morosos (5).

10. Anotar en sus libros y en los recibos que expida al deudor por cuenta de quién hace la cobranza, cuando tenga que exigir de uno mismo créditos que correspondan á personas diversas; bajo el supuesto de que si no lo hace, se prorrateará lo cobrado y se aplicará á todos proporcionalmente, aun cuando sea el mismo comisionista uno de los acreedores (6).

11. Responden de los daños y extravios que sobrevengan á los fondos en metálico pertenecientes al comitente, mientras los tenga en su poder, aun cuando provengan de caso fortuito ó de fuerza mayor inevitable (7).

(1) Art. 128.
(2) Art. 129.
(3) Art. 134.
(4) Art. 133.
(5) Art. 159.
(6) Arts. 166 y 167.
(7) Art. 151.

* El art. 131 del Código que citamos en comprobación de esta doctrina, no está tan claro que no dé motivos para dudar si el comisionista ó el comitente es el que debe responder de los resgros que sobrevengan á los fondos en metálico por caso fortuito ó por efecto de violencia, y mas en algunas ediciones en que, después de la palabra comitente, se añade un este, que seguramente daría á entender que el, y no el comisionista...
255. Sus prohibiciones son:

1.ª Delegar la comisión en otra persona sin la anuencia del comitente, porque se busca su inteligencia y su probidad.

Esta prohibición no comprende sino la delegación del encargo, pero no la ejecución de aquellos actos ó diligencias subalternas, que según la costumbre del comercio, se confían á los mancebos ó dependientes (1).

2.ª Dejarla de cumplir, una vez aceptada de cualquiera de los dos modos que hemos dicho, teniendo fondos para hacerlo ó habiendo prometido adelantarlos, á menos que sobrevenga un descrédito notorio en el giro y tráfico del comitente que pueda probarse por actos positivos, que en este caso quedará relevado de la promesa de anticiparlos (2).

3.ª Obrar en ningún caso contra las instrucciones recibidas, pudiendo únicamente suspender su ejecución y consultar, como queda manifestado (3).

4.ª Hacer negocios á precios y condiciones mas onerosas que las que rigen en la plaza al tiempo que los concierre, á menos que haya obtenido antes una autorización expresa del

nista, era el responsable, si no contrariaran en cierto modo esta inteligencia las que las siguen. Las disposiciones relativas al depósito, con las que debe equipararse la comisión, según el art. 407, no son por cierto mas explícitas ni aclaran la dificultad; porque aunque hablan del que consiste en dinero, mas bien puede acaso inferirse de su contexto que los riesgos corresponden al deponente que al depositario. Nosotros, sin embargo, hemos creído que el comisionista aquí está considerado como un depositario irregular, esto es, que adquiere la propiedad de los fondos en cuanto entran en su poder, con la obligación de responder siempre de la cantidad recibida, porque así lo dá a entender el párrafo VI del art. 1144, tratando de los acreedores de dominio en las quiebras, y es el sentido en que lo toman los demás autores.—Véase lo que decimos del depósito de dinero en el cap. 2, tit. IV y siguiente.

(1) Art. 136.
(2) Arts. 124, 125 y 126.
(3) Art. 129.
comitente, sin que pueda eludir la responsabilidad que contrae por esta causa, aunque alegue que hizo otros en los mismos términos por su cuenta (1).

5.° Hacer préstamos ni anticipaciones, distraer ni invertir en negocios propios ó ajenos los fondos que se le hayan entregado, ni exponer á ningún riesgo manifiesto los intereses del comitente (2).

256. Por la infracción de estas prohibiciones, lo mismo que por la falta de cumplimiento de las obligaciones que quedan referidas, incurre en la de abonar daños y perjuicios; quedando válidas y subsistentes las negociaciones que haya celebrado con arreglo á derecho (3).*

257. Los deberes del comisionista después de concluida la comisión, están reducidos á dar aviso al comitente, á rendir sus cuentas, y á remesar los fondos sobrantes (4).

El aviso debe darse en el correo inmediato necesariamente (5); las cuentas deben ser rendidas, desde luego, con la mayor exactitud y fidelidad, sin alterar los precios, los pactos ni los gastos de las negociaciones, y conforme á los asientos de sus libros; y los sobrantes deberán remitirse con arreglo á las instrucciones que se le hayan dado (6).

La omisión del primero y último de estos requisitos le constituirán responsable de los daños y perjuicios que se originen, y del interés legal del dinero detenido; pero la del se-

---

(1) Art. 132.
(2) Arts. 141, 145 y 155.
(3) Art. 135.
(4) Arts. 134 y 139.
(5) Art. 134.
(6) Arts. 139 y 142.
gundo, si consiste en no rendir las cuentas con fidelidad y como resulten de sus libros, hará que se le considere reo de hurto, y que se le castigue con arreglo á las leyes penales.

258. En recompensa de su trabajo, y en cambio de todas estas obligaciones, también tiene el comisionista sus derechos.

Tales son:

1.° El de cobrar la retribución convenida, ó la que le corresponda, según el uso recibido en la plaza en que evacúe su comisión (1).

2.° El de ser reintegrado de todos los gastos y desembolsos que haya hecho con el rédito legal que corresponda á la cantidad que importen, si no se le pagan puntualmente (2).

259. Los modos de extinguirse la comisión son tres:

1.° La conclusión del negocio.

2.° La muerte ó inhabilitación del comisionista, pero no la del comitente (3).

Y 3.° La revocación hecha por este último, la que puede verificar en cualquier estado del negocio, quedando responsable de las gestiones practicadas por el comisionista, antes que

(1) Art. 137.

(2) Art. 138.

Para ejercitar este derecho no necesita esperar á que se concluya el negocio, sino que puede reclamar desde luego los gastos y desembolsos hechos, presentando la cuenta con los documentos que la comprueben; le corresponde, tanto por las cantidades suplidas por orden del comitente, como sin ella, mientras este no oponga algún reparo fundado á la cuenta presentada, y aun en el caso de que se suspenda el cumplimiento de la comisión por falta de fondos, ó de que se le retire sin haberla evacuado, teniendo hechos ya algunos gastos ó anticipaciones, no puede ser desposeído de los efectos que reciba ó estén á su disposición, mientras no se le pague el importe de estos desembolsos y el premio de su comisión, con la preferencia que diremos en su lugar oportuno. Véase nuestro tratado de quiebras, núm. 8.

(3) Arts. 144 y 145.
llegue á su noticia, y al pago proporcional de la retribución que le corresponda (1)."

En el caso de muerte ó inhabilitación del comisionista, deben sus herederos dar aviso inmediatamente al interesado, para que determine lo que mejor le convenga (2).

260. Para concluir esta sección debemos hacer presente en primer lugar, que cuando el comisionista obra en nombre propio, no tiene el comitente acción contra las personas con quienes aquel contrató los negocios que puso á su cargo, ni estas contra él, sin que preceda una cesión hecha á su favor por el comisionista (3); en segundo, que no tratamos en particular de los derechos y obligaciones del comitente, porque las hemos indicado ya al tratar de los efectos de la aceptación (número 255); y si alguna mas tiene, proviene respectivamente de las obligaciones y derechos del comisionista, de los que son correlativos, y de los que se infieren del modo mas claro y terminante; y en tercero, que en cuanto no esté determinado expresamente en el Código, se rigen las comisiones por lo establecido para el mandato en el derecho civil (4).

SECCION SEGUNDA.

De las comisiones especiales.

261. Los principios y disposiciones de que dejamos hecho mérito, son aplicables á todas las comisiones en general; pero las de comprar, vender, recibir, conservar y transportar

(1) Art. 143.

* Si se dejase de llevar á efecto la comision no por revocación, sino por otra causa independiente de la voluntad del comitente y del comisionista, ¿tendrá también derecho este para cobrar su retribución? Parece que sí, si principia á ejecutarla; pero reduciéndola á lo que corresponda á las gestiones que haya practicado.

(2) Art. 144.

(3) Art. 119.

(4) Art. 172.
efectos, y las relativas á las letras de cambio y demás documentos endosables, se gobernan por otras especiales, que son en parte excepciones, y en parte modificaciones y aplicaciones de las que quedan expuestas.

COMISION DE COMPRAR.

262. La de comprar no debe el comisionista ejecutarla pagando los efectos á mayores precios que los que tengan en la plaza los de la misma especie y calidad, aun cuando en las instrucciones se le hayan señalado otros más caros; y si lo hace responderá del exceso, porque se presume que el señalado es el máximo á que puede subir, y no la cantidad fija y precisa que ha de dar por ellos.

Mas en ningún caso le será permitido exceder de este máximo sin autorización expresa; y si se excede, quedará al arbitrio del comitente aceptar el contrato, si le acomoda, ó dejarlo por cuenta del comisionista si no le conviene, á menos que este se allane á darle los efectos comprados por el precio designado en sus instrucciones, perdiendo la diferencia, que entonces no podrá dejar de admitirlos siendo de la misma calidad.

COMISIONES PARA VENDER.

265. En la de vender deberá procurar, por el contrario, el mejor precio y condiciones, considerando como minimum la cantidad que se fije; y responderá de la diferencia si lo hace á otros mas bajos (1).

No puede comprar para si ni para otro lo que está mandado vender: ni vender por si ni por medio de otros, lo que se le mande comprar sin el consentimiento de los propietarios, de los que no podrá cobrar, en tal caso, la comisión ordinaria ó por entero, sino que se arreglará por un pacto expreso la

(1) Art. 153
cantidad en que haya de consistir; y si no se ha pactado será la mitad de la ordinaria, porque no emplea más que la mitad de trabajo, y cobraría dos por un mismo negocio si la exigiera íntegra de ambos (1). Tampoco deberá devolver las mercancías porque no pueda venderlas al precio y condiciones que se les señalen, sino únicamente dar cuenta y esperar la contestación.

264. No podrá vender al fiado ni a otros plazos que los que el uso general del comercio tenga admitidos en aquella plaza, sin licencia del comitente, y aunque la tenga, no deberá venderlos á personas de conocida insolvencia, ni a plazos muy largos, dando parte siempre de las que haga de este modo, con expresión del nombre de los compradores, porque si no se entenderán hechas al contado (2).

Obrando así, correrán por cuenta del comitente los riesgos de la cobranza, á no ser que sobre la comisión ordinaria perciba tambien la llamada de garantía, que en este caso tendrá que dar hecho el cobro bajo su responsabilidad como si fuera el comprador (3).

(1) Arts. 161, 162 y 163.
(2) Arts. 154, 55, 56 y 57 del Código.
(3) Art. 158.

** Cuando un comitente no tiene confianza en las personas que quieren tomar sus mercancías al fiado, ó no quiere exponerse á las consecuencias de la cobranza de su importe, exige del comisionista que la tome por su cuenta, abonándole una cantidad por la responsabilidad en que se constituye, además de la que le paga por la comisión de vender, y esta es la que se llama de garantía. El comisionista que acepta esta condición, tiene que satisfacer directamente el importe de la venta á los plazos estipulados con el comprador, como si lo hubiera sido él mismo, ó en los que haya ofrecido el comitente en el convenio que media entre
Cuando en la venta al fiado hecha sin autorización se hayan estipulado precios más altos que los corrientes o prefijados en las instrucciones, podrá el comitente desaprobar la negociación, y exigir del comisionista que le pague desde luego el corriente o designado, dejando la venta por su cuenta, o aprobarla y admitirla con las eventualidades de la cobranza; pero de ningún modo reclamar el mayor a que fué hecha, sin correr el riesgo de cobrar, porque la diferencia es precisamente el precio de este riesgo, y debe percibirla el que lo sufra (1).

**COMISION DE TRANSPORTES.**

265. En la de transportes podrá consistir el encargo, en que tenga que buscar porteadores y ajustar con ellos la conducción de los efectos, ó en que se le comisione para buscar efectos que transportar y ajustar el transporte con los cargadores; en el primer caso, deberá celebrar sus contratas á precios corrientes, y con personas conocidas y que puedan cumplir las obligaciones que contraen; deberá asegurar las conduciones, teniendo órden y fondos para pagar la prima, ó dar cuenta de que no puede hacerlo, si no encuentra asegurador por el precio y condiciones que se le designen; y tendrá que renovar el seguro, aunque no se le encargue, si el primer asegurador se constituye en quiebra, y el mismo ó los administradores de ésta no afianzan el cumplimiento de su contrato dentro de tres días después de haber sido requeridos (2).

ellos, y adquiere, por decirlo así, dos conceptos: el de comisionista hasta que vende, y después el de comprador. Esta garantía interviene, por lo regular, solo en la comisión de vender, y de esta es únicamente de la que trata el Código; pero no hallamos inconveniente en que se pacte también en la de transportes, y en cualquiera otra en que la permita la naturaleza de la negociación.

(1) Art. 154.
(2) Arts. 168 y 886.
En el segundo, tendrá para con los cargadores las mismas obligaciones que si fuera el que hiciera el transporte por su cuenta; para con los verdaderos porteadores la de cumplir con exactitud su cometido, y además de éstas la de llevar el libro de que hemos hecho mérito al tratar del comisionista de conducciones como agente auxiliar (núm. 98) (*).

**COMISIONES PARA RECIBIR Y CONSERVAR EFECTOS.**

266. En cualquiera de las tres comisiones anteriores es indispensable que el comisionista reciba los géneros que compre ó se le envien, y que los conserve en su poder como buen depositario en los mismos términos que los reciba, pues si sufrén averías ó desperfectos por su culpa tiene que abonar el perjuicio, graduando su valor por el precio que tengan cuando sobrevenga el daño (1). Mas si al recibirlos notase que están averiados, ó después de tenerlos en su poder se perdiessen ó deteriorasen por el transcurso del tiempo, por vicio propio de los mismos, ó por caso fortuito, deberá hacerlo constar en legal forma, y dar aviso al propietario inmediatamente para evitar su responsabilidad. Si la urgencia fuese tanta que no pudiese esperar su respuesta para salvar su valor en lo posible, pedirá al tribunal que le autorice para

(*) En algunas ocasiones no es posible llevar directamente las mercancías á un punto determinado, y hay que remitirlas á otros diferentes y procurar desde allí enviarlas á su destino. En estos casos el comisionista que se encarga de hacer la conducción por su cuenta tiene que valerse de otros que las reciban y contraten nuevos transportes en los puntos intermedios, y que responder de ellos lo mismo que de los porteadores; pero estas responsabilidades no pueden pesar mas que sobre el comisionista que ajusta el transporte para otros, y no sobre aquel á quien se le encargue que busque porteadores y contrate por cuenta del propietario, al que evacuando el encargo, con arreglo á las instrucciones que se le den, ó contratando á precios corrientes y con personas conocidas y de responsabilidad, no hay motivo para exigirsela por las faltas de los porteadores, ni por su insolvencia (núm. 97).

(1) Arts 146 y 150.
venderlos con las solemnidades y precauciones que estime conveniente (1).

Cuando los reciba de diferentes dueños con una misma marca, deberá ponerles una contramarcara para distinguirlos, quedando intacta la primera que demuestra la procedencia y el crédito de la fábrica, y no le es permitido alterarla bajo ningún pretexto (2).

267. El comisionista á quien se consignen ó remitan efectos de otra plaza, tiene derecho á ser pagado con su importe con preferencia á todos los demás acreedores del comitente: 1.º por las anticipaciones que haya hecho sobre su valor; 2.º por los gastos de transporte, recepción, conservación y demás que haya expendido legítimamente; y 3.º por el premio de su comisión. Mas para que pueda ejercitarlro, es necesario que los tenga en su poder, ó que se hallen á su disposición en algún depósito ó almacén público, ó al menos que hayan salido ya del punto de donde se le remiten y estén en el camino, y que haya recibido el duplicado del conocimiento ó carta de porte que debe dar y firmar el porteador; en cuyos casos no podrá ser desposeído sin que se le abone prviamente cuanto le corresponda por los tres conceptos expresados (3).

Cuando la consignación esté hecha por persona que resida en el mismo domicilio del comisionista, tampoco tiene este derecho de prelación sobre todos los demás acreedores por las anticipaciones que haga sobre los genceros, sino únicamente el de prenda en virtud del que será colocado en el lugar que corresponda á esta clase de créditos (4).

---

(1) Arts. 147, 148, 149 y 151.
(2) Arts. 152 y 164.
(3) Arts. 169 y 170.
(4) Art. 171.

¿Tendrá el comisionista este derecho de preferencia sobre todos los acreedores, lo mismo por las sumas que adelante con orden del comitente, que sin ella, siempre que redunden en su beneficio? Para resolver esta duda, promovida antes por otros, nos parece indispensable distinguir
268. Para conocer mejor las obligaciones que contrae el que acepta una comisión de giro, convenia tener antes noticia del contrato de cambio y de los documentos que se expiden a consecuencia de él; mas sin perjuicio de volver a repetir algunas ideas cuando tratemos de ellos, deberemos aquí decir, que puede comprender el giro ó expedición de letras y libranzas, la adquisición de toda clase de documentos endosables, y la enajenación y cobranza de los mismos.

En la expedición de letras y libranzas, hay siempre una comisión ordinaria dada por el que la libra al que la ha de pagar, porque precisamente consiste la negociación en mandar á otro que pague la cantidad que expresa el documento; pero puede suceder también que á uno le convenga dar, no el encargo de pagar sino el de girar á cargo del mismo comitente, ó al de un tercero, y si el comisionista lo acepta, tendrá que cumplirlo, y que expedir la letra ó la libranza, expresando en ella, si quiere, que la gira por cuenta del comitente, aunque esta manifestación no le libra de tener que afianzar si no se acepta, y de devolver la cantidad que perciba del tomador, con los gastos del protéjase, del recambio y de la resaca si no se paga. Estos gastos y el premio de la comisión deberán siempre ser abonados por el comitente, á quien tendrá que dar cuenta el comisionista de la cantidad percibida cuando la letra sea aceptada y pagada, y de este modo quedará las anticipaciones hechas sobre el valor de los efectos, de lo adelantado para gastos de transporte, recibo, conservación y demás; las primeras no pueden hacerse sin su noticia, ó sin que medie un pacto ó convenio; las segundas no es menester que se hagan con su consentimiento expreso, porque se supone desde luego que lo ha de prestar, habiendo de ser legítimos, esto es, justos y necesarios; y por esta razón, sin duda, no se exige ni se hace esta distinción, ni en estos artículos, ni en el 228, en que se concede este mismo derecho al porteador.
cumplida la comisión y extinguidas todas las responsabili-
dades (*) .

269. Encargándosele la de adquirir algún documento en-
dosable, podrá evacuarla sin contraer ninguna obligación mas
que la que contraería si comprara al librador ó endosante
cualquiera otra mercancía, siempre que tenga la precaución
de exigir que se expida ó endose á la orden del comitente;
pues si se hace á la suya, tendrá que endosárselo después y
responder de su pago á los que luego lo tomen, si aquel la
vuelve á enajenar, y no es pagado á su vencimiento (1).

Mas si se le envía endosado á su favor para que lo enajene
ó negocie y acepta el encargo, no podrá desentenderse de en-
dosarlo al que lo tome, y de responder de su cobranza, como
todos los demás endosantes; pues en esta clase de comisiones
se entiende siempre que el comisionista se constituye garante
de los que adquiere, y negocia por cuenta ajena, como ponga

(*) El que admite la comisión de librar á cargo de un tercero, desig-
nado por el comitente, ¿podrá cerciorarse despues de admitida, si este
aceptará ó no la letra, y dejarla de cumplir si no tiene esta seguridad?
El Sr. A. B. es de parecer que la responsabilidad en que se constituye
despues de expedirla le dá este derecho, y aun puede añadirse que el
interés del comercio lo exige así, al parecer; porque mejor es que deje de
cumplirse la comisión, que no da lugar á tantas reclamaciones como su-
cesivamente pueden entablarse por la falta de pago de una letra; pero
sin embargo, no parece muy justo que se desentienda bajo este pretexto
de cumplir una obligacion, contraída sin limitacion y sin reserva, cuando
pudo y debió haberse cerciorado antes de aceptar, y cuando en ultimo
resultado, el comitente es el que tiene que abonar los perjuicios que se
ocasionen.

También opina el mismo autor, que en el caso de que sea pagada por
el tercero, no adquiere este derecho para reclamar contra el que la libró
por comisión, expresando que hacía el giro por cuenta del comitente,
aun cuando la acepte y pague, manifestando que lo hace por cuenta del
comisionista, porque la aceptación condicional es nula, y el pagador ha
debido protestar y no pagar, si no le inspiraba confianza el comitente,
por cuya cuenta estaba hecho el giro.

(1) Art. 472.
en ellos su endoso; y no puede desentenderse de ponerlo como las acepte sin ninguna precaución (1).

270. Por último, en la comisión que tenga por objeto la aceptación o la cobranza, deberá el comisionista presentarlo con oportunidad al pagador, y sacar el protctoso en tiempo hábil, si no consigue que sea aceptado y pagado; pues de no hacerlo, quedará perjudicado el documento, y será responsable por este falta.

(1) Art. 160.
TITULO TERCERO.

De los contratos constitutivos del comercio.

CAPITULO PRIMERO.

DE LA COMpra—VENTA.

271. Entre los contratos constitutivos del comercio enumeramos, en primer lugar, la compra-venta, porque es sin disputa el principal, el de uso más frecuente, y el único que con la permuta pertenece á la clase de principales; los demás todos son accesorios de otras operaciones, como veremos después. Generalmente considerado, puede definirse un convenio por el que dos ó mas se obligan el uno á entregar alguna cosa, mediante cierto precio, y el otro á pagarla y recibirla.

Para que sea tenida por mercantil es indispensable que verse sobre uno de los objetos de comercio, explicados ya en su definicion; pero no basta solo esta cualidad, porque no todas las compra-ventas de las cosas muebles ó semovientes, ni de los derechos procedentes de estas, se hacen siempre con ánimo de comerciar, ni están sujetos á las disposiciones de la ley mercantil.

En realidad, no hay tampoco gran diferencia entre esta y el derecho civil, porque muchas de las decisiones del Código de comercio, mas bien son aclaraciones del derecho común, que reglas especiales nuevamente establecidas; pero ya que existen algunas, y que la naturaleza misma de estos negocios ha hecho que el uso y la jurisprudencia introduzcan otras para alguno de estos contratos, que se diferencian algo de los co-
munes ú ordinarios, y pueden llamarse excepcionales, nos haremos cargo de unos y otros, y examinaremos, en primer lugar, qué compras-ventas pueden calificarse de mercantiles, cómo se perfeccionan y dividen, qué requisitos intervienen en ellas, y qué derechos, obligaciones y responsabilidad producen; y en segundo, qué circunstancias especiales concurren en las que llamamos excepcionales.

SECCION PRIMERA.

De la calificación, división y requisitos de las compras-ventas mercantiles y de los derechos, obligaciones y responsabilidad que producen.

272. Son mercantiles, las compras de cosas muebles hechas con ánimo de sacar algún lucro de lo comprado, volviéndolo á vender en la misma forma ó en otra diversa, y la reventa de estas cosas mismas (1).

(1) El art. 59, y Decisiones de competencia de 16 de marzo y 5 de agosto de 1857, y de 20 de setiembre de 1862.

* El art. 632 del Código francés, considera también mercantiles las compras de cosas muebles para alquilarlas, y no parece infundada esta determinación, porque si no se vuelve á vender la cosa misma, se vende de su uso. No están conformes todos los autores con la decisión de nuestro Código, que á imitación de lo establecido en el francés, excluye de la contratación mercantil los bienes inmuebles, sino que por el contrario, son muchos y muy respetables los que creen, que estas legislaciones se separan de los verdaderos principios, por no encontrar razón fundada para que no sean tenidos por comerciantes los que se ocupan en contratar sobre inmuebles, como sucede con los particulares y las sociedades que se dedican á comprar edificios y terrenos para volverlos á vender, como los adquieren ó después de haberlos transformado, reparado ó modificado: nosotros convenimos desde luego en que los que se dedican á estos negocios hacen una operación de tráfico que puede equipararse á la del comerciante, que facilita productos al consumidor; y creemos que así la legislación administrativa como la concerniente á la Hacienda pública, deben tener en cuenta esta especulación, ya para fomentarla cuando convenga, concediéndole exenciones, ya para gravarla con los im-

TOMO I.
Para que puedan merecer esta calificacion, es pues indispensable que la cosa sea mueble; y además de esto, en la compra, que se haga con ánimo de volver a vender la cosa comprada; y en la venta, que haya sido adquirida por compra hecha con esta intención; y por lo tanto, no pueden tener este concepto, en primer lugar, las compras de bienes raíces, con sus efectos accesorios, aunque sean muebles, ni la de los efectos que el comprador destina para su consumo ó para el de aquel que le encargó la adquisición; y en segundo, las ventas hechas por los labradores y ganaderos de los frutos de sus cosechas y ganados; las que hagan los propietarios y otras personas de los frutos y efectos que perciben por renta, salario, donación, emolumento ó otro título gratuito ó remuneratorio (*), y la reventa del sobrante de los acopiós hechos para su propio consumo, ejecutado por los que no se dediquen habitualmente al comercio cuando no vuelven á vender una porción mayor que la que consuman; pues si es mayor el sobrante que la gastados que corresponda; más en cuanto á las formalidades y requisitos que deban intervenir en la celebración de estos contratos, nos parece mas conforme á la naturaleza de la cosa sobre que recaen, y á los derechos que producen las prescripciones del derecho común, que no las de la ley del comercio, y no consideramos suficiente para establecer una excepción en esta materia, la circunstancia de que por uno solo los contratantes se hayan celebrado por vía de especulación, como sucederá casi siempre.—Véase el núm. 3 de este tomo, y la nota del núm. 2 de nuestro tratado de quiebras.

(*) El Código dice en términos generales que no es mercantil la venta hecha por cualquiera clase de personas de los efectos que perciban por cualquier título lucrativo ó remuneratorio; pero á nosotros nos parece que esta regla necesita alguna aclaración, porque el comerciante que por herencia ó legado adquiere generos y efectos de otro comerciante, hace una operación mercantil, sin disputa, cuando los vende, y lo mismo sucede con los dependientes á quienes se remuneren sus servicios con mercancías que no pueden consumir por sí mismos, y tienen que volver á enajenar. Todos estos adquieren con ánimo de vender, aun cuando el título es remuneratorio ó gratuito, y sus ventas por lo mismo debieran considerarse como mercantiles.
da, se presume que obraron con ánimo de comerciar, y la compra y la venta se reputan mercantiles (1).

273. Estos contratos se celebran por los mismos medios y con las mismas formalidades que todos los otros, sin más diferencia que la de que es necesaria la intervención de corredor o agente de Bolsa, para que sean válidas las ventas de los efectos públicos, y de las cédulas o títulos de crédito de las sociedades, cuyo capital está dividido en acciones, y también en las de los bienes correspondientes a las quiebras cuando se vendan en pueblos donde los haya (2); debiendo además tener presente, para evitar dudas, que las cantidades que en ellos se suelen entregar con el nombre de señal, ó de arras, no se consideran nunca como una condicion suspensiva, sino como parte de pago, en prueba de estar ya perfecto y acabado; y que cuando los contrayentes quieran que se dejen de cumplir perdiéndolas, tienen que pactarlo expresamente por condición especial del contrato (3).

274. Se dividen, como las obligaciones, en puras y condicionales, y son las condiciones expresas ó tácitas, según que provengan de la voluntad de los interesados ó de la ley, que

(1) Art. 560. Recurso de casacion de 7 de octubre de 1858, 20 de junio y 30 de setiembre de 1859.

De la calificacion que hace el Código de las compras-ventas mercantiles, puede resultar, y sucederá acaso con frecuencia, que la compra sea mercantil y no la venta, y al contrario, y por consiguiente que ocurran dudas acerca de la ley que deba aplicarse en la decisión de las cuestiones que se puedan suscitar sobre el cumplimiento de estos contratos. Algunos opinan que debe seguirse la ley y fuero del demandado; pero nosotros no podemos conformarnos con esta opinión, sobre todo en cuanto á la ley por la que hayan de ser decididas, y considerando que el fuero del comercio no es de personas, sino de cosas, que no es posible que para uno de los contratantes rija una, y para el otro otra diversa, y que el derecho mercantil, como excepción del civil, no puede comprender, según lo dispuesto en el art. 2.° del Código, mas que á los que sean comerciantes ó hagan alguna operación de comercio, somos de parecer que estos casos deben resolverse con arreglo al derecho común.

(2) Art. 1085.
(3) Art. 379.
las supone en algunos casos, como sucede en las compras que se hacen con el pacto de ensayar el género contratado, que es una condición expresa, y en las de efectos que no se tienen a la vista, ni pueden clasificarse por una calidad determinada y conocida en el comercio, en las que se supone en el comprador la reserva de examinarlos, y no llevar adelante el contrato si no le conviene (1).

También pueden dividirse en conmutativas y aleatorias, aunque estas últimas corresponden a las excepcionales; y en todas interviene consentimiento, cosa, y precio, como requisitos necesarios; mas estos requisitos ya exigen algunas explicaciones.

275. El consentimiento puede expresarse entre presentes y entre ausentes, siendo bastante frecuente en el comercio celebrar las compras-ventas por este último medio.

Si se celebran entre presentes, la póliza ó escritura que se redacte, ó las palabras que se empleen, darán a conocer la voluntad de los contratantes, la naturaleza del contrato, y los derechos y obligaciones que emanan de él; y lo mismo sucederá con el celebrado entre ausentes, cuando se haya realizado la negociación individualmente; en cuyo caso, la correspondencia producirá los mismos efectos que la póliza, y acreditará si ha habido una verdadera venta, ó solo una promesa de vender. Mas es necesario advertir que entre comerciantes se suelen enviar á los corresponsaless cartas circulares con notas de géneros y de sus precios, por sí les acomoda tomarlos, ofreciendo remitirles los que pidan, y que estas comunicaciones, cuando los términos en que están concebidas no dan á entender otra cosa, no se consideran como una verdadera proposición de venta, que aceptada inmediatamente por el corresponsaless, constituya al que la hace en la obligación de cumplir su oferta, sino como un aviso ó promesa de vender, en la que va envuelta la condición de enviarlos, si se mantienen al mismo precio, ó antes no se han vendido; condi-

(1) Art. 364.
ción muy natural, y aun necesaria, porque haciéndose á la vez la propuesta á muchos, se supone que se han de dar al que primero la acepte; y si hubo otro que la aceptó antes, faltó la condición para con los demás, y no hubo consentimiento.

276. Las cosas pueden ser determinadas e indeterminadas, y según que pertenezcan á una de estas dos clases; producirá el contrato efectos diferentes, como veremos al tratar de las obligaciones que nacen de él.

Por cosas determinadas se entiende en el comercio las específicas y ciertas, esto es: las que por su naturaleza ó por las marcas ó señales que se le ponen, se identifican de modo que con ninguna otra pueden confundirse; y por indeterminadas aquellas que pueden ser confundidas, y por consiguiente sustituidas con otras de la misma especie (1).

277. A unas y otras pueden acompañar otros efectos acosorios, que deberán ó no considerarse vendidos con la cosa principal, según su naturaleza y el uso á que estén destinados. Los que forman en parte su esencia ó la modifican en términos que sin ellos dejarían de ser lo que eran, ó disminuirían su valor, y los que aun cuando estén separados no pueden existir por sí solos, se consideran comprendidos en la enajenación; y por lo mismo, en la venta de un establecimiento fabril que no se limita á lo material del edificio, se entienden vendidos con el los útiles de su servicio y los medios por que opera, con cuanto ha contribuido á darle reputación; y por consiguiente, el nombre, las marcas y señales con que se identifican sus productos, y en algún caso particular podría comprender hasta la prohibición de plantear otro de la misma especie que pudiera perjudicar la superioridad de su industria; lo mismo sucede en la venta de créditos con respecto á las garantías, y en la de efectos asegurados con respecto á los derechos que produce el seguro; pues aunque está contraído á favor de otra persona, se entiende siempre enajenado con los efectos á que hace refe-

(1) Art. 367, párrafo 1.°
rencia, porque nunca puede contraerse, ni subsistir sino á favor del dueño ó del que tenga algun derecho en los efectos asegurados (1).

En los que no concurren estas circunstancias se consideran excluidos (*).

278. El precio debe ser verdadero y cierto, pero no es necesario que corresponda exactamente al valor de la cosa vendida, ateniéndolo al que le da el parecer común de las gentes, ó en otros términos, que sea justo en el sentido en que se toma el derecho civil esta palabra, sino que podrá ser mayor ó menor, según lo mas ó menos acertado de los cálculos, y las circunstancias en que puedan encontrarse comprador y vendedor.

Ha de existir en realidad, porque sin precio no hay venta; mas tampoco es preciso que se señale expresamente, sino que

(1) Art. 421.

(*) Los efectos en que se encuentran empaquetados ó envasiados los géneros que se venden, deberán ó no ser considerados como accesorios comprendidos en la venta, según su naturaleza, las condiciones y el objeto del contrato. Los fardos, cajones ó cubiertas que los contengan, indudablemente entrarán en la enajenación, y también las pipas ó toneles pequeños en que se hallen los líquidos, cuando se vendan haciendo mérito de ellos ó sea la costumbre venderlos envasiados; pero no podrá decirse lo mismo de las cubas y tinajas destinadas para conservarlos en los almacenes, ni tampoco cuando se haya hecho la venta por cántaros ó arrobas sin consideración á las vasijas, pues entonces se supone que el comprador se ha de presentar á recibirlos, llevando consigo los cueros ó botas en que los ha de trasladar.

Cuando entren en la enajenación, puede dudarse si la compra que hizo de ellos el vendedor con ánimo de volverlos á vender de este modo, es ó no mercantil. El Sr. V. y Caravantes distingue entre el cosechero que los compra para vender en ellos sus frutos, del que compró los frutos y los efectos en que se enajenados en la misma forma ó en otra distinta, calificando de mercantil esta ultima compra y no la primera, porque considera que lo accesorio debe sujetarse á la misma regla que lo principal, y nos parece muy fundada esta opinion. Pero no podemos decir lo mismo con respecto á la de los que se consumen para darles nueva forma, como la del carbon y otros artículos semejantes.
bastará que se fije la manera de determinarlo; y por esta causa en el derecho civil y en el mercantil son válidas las ventas hechas por el precio que señale una persona que se designe, distinta del vendedor y del comprador, por lo que otro ofrezca, y al precio que vendan otros los mismos géneros, ó al que tengan un día fijo, en lugar determinado, teniendo en consideracion:

4.° Que aunque la venta celebrada por el precio que señale un tercero, se invalida y queda sin efecto según el derecho civil, cuando no lo señala, porque no quiere, no puede ó se muere antes (1), sería imposible invalidarla, y que déjará de surtir efectos en el comercio, en el caso en que el comprador hubiese ya dispuesto de las mercancías, y habría que suplirlo entonces con el que tuvieren en la misma plaza otras de la misma especie en el día en que se celebró el contrato.

Y 2.° Que la celebrada por lo que otro dé, se entiende siempre condicional, esto es, si le acomoda el precio que el otro ofrezca, con lo que ningún perjuicio se irroga al vendedor, á quien le importa lo mismo recibirlo de una mano que de otra, y se evitan los fraudes á que se podría dar lugar si se obligara al comprador á pagar un precio muy subido, ofrecido acaso por un comprador simulado, que buscase al intento el vendedor.

279. Los celebrados válidamente producen desde luego los derechos y obligaciones propias de esta convencion, aunque con las modificaciones que hagan indispensables los términos en que se haya expresado la voluntad de los contratantes; y por lo tanto el comprador tendrá derecho:

1.° A exigir la entrega de la cosa vendida.
2.° A examinarla á su satisfaccion al tiempo de recibirla (2).
3.° A gustarla y probarla cuando no la tuvo á la vista al tiempo del ajuste, ni se contrató bajo calidad determinada y

(1) Ley 9.ª, tit. V, Partida 5.ª
(2) Art. 370,
conocida en el comercio, y á ensayarla, si la compró con esta condición (1).

4.° A no recibir la si no le conviene, cuando se le entregue alterada ó defectuosa, no concurra en ella la calidad prefiijada en el contrato, no sea igual á las muestras que se tuvieron presentes al tiempo de celebrarlo, ó no se le entregue íntegra. La calificación de sí los géneros son ó no de recibo por estas causas, deberá hacerse por peritos habiendo duda (2).

(1) Art. 361.

El comprador no tiene señalado por la ley el plazo dentro del que deba usar de su derecho en las ventas en que le competa el de gustar, probar y ensayar la cosa vendida, y como no es posible tampoco dejarlo á su voluntad, porque podría dilatarlo demasiado en perjuicio del vendedor, será difícilísimo señalar el que se le deba conceder. Nosotros juzgamos que el de examinarlas y gustarlas, que son operaciones que pueden hacerse con muchísima facilidad, debe ejercitarse en la época señalada para la entrega, si se hubiese prefiijado, y si no, dentro de los diez días que el art. 572 le concede para pagar el precio, estando en el mismo lugar. Mas cuando tenga que ensayarlas ó se hallen fuera, ya no es posible limitarlo tanto, ni tampoco establecer una regla fija, porque las pruebas y ensayos que haya que hacer podrán exigir más ó menos tiempo, según de la clase que sean, el objeto sobre que recaigan, y la distancia á que se hallen. En estos casos, no hay otro remedio mas que dejar el señalamiento a la prudencia de los tribunales, que son los únicos que tomando en consideración las circunstancias particulares de cada uno, pueden hacerlo con acierto.

(2) Arts. 362 y 364.

** Este derecho puede ser renunciado, y por consiguiente, si el comprador no quiere examinarlos ó se conforma expresa ó tácitamente recibiendo á su contento, después de haberlos reconocido, los que estén alterados, no correspondan á las muestras, no reunan la calidad prefiijada ó solo una parte en vez del todo, bajo la promesa de entregarle después lo restante, quedará el contrato consumado con respecto á lo recibido, y solo tendrá derecho á pedir la entrega de lo que falte.

El todo ó la cosa íntegra para este efecto comprende cuanto haya sido objeto del contrato, aunque consista en una cantidad determinada de géneros; pues habiendo sido contratada en conjunto, deberá entregarse por completo, a no ser que se haya hecho distinción de partes ó lotes, señalando épocas distintas para la entrega, que entonces cada parte deberá ser recibida en el tiempo señalado. Así lo dispone el art. 364;
5 ° A reclamar la indemnización que le corresponda por las faltas, vicios y defectos de que adolezcan, si se conforma con recibirlos en parte, ó defectuosos, con tal que ejercite este derecho en el acto mismo de la entrega, cuando los examine á su contenido, y los reciba por número, peso ó medida; y á los ocho días, si se le entregan en fardos ó bajo cubiertas que impidan reconocerlos entonces, justificando en este caso, si reclama faltas, que los cabos están intactos; y si vicios ó defectos, que estos son de tal especie y naturaleza, que no han podido ocurrir en su almacén, ni por su culpa, ni por casualidad (1).

6 ° A devolver los que haya recibido, rescindiendo el contrato, ó á pedir igual indemnización por las resultas de los vicios internos de que adolezcan, si tienen algunos que no se pudieran percibir en el acto de la entrega, siempre que lo ejercite en el término de seis meses, contados desde esta, y no desde que lo descubra (2).

pero todavía puede suscitarse la cuestión de si será preciso que concurran á la vez las dos circunstancias de estar hecha la división en partes y señaladas épocas distintas para entregarlos, ó bastará que intervenga cualquiera de ellas. La designación de épocas diversas para entregar, indudablemente dá a conocer que la intención de los contratantes fué la de cumplir el contrato por partes, y dividiendo entonces el todo en tantas fracciones iguales cuantas sean las épocas señaladas; quedará suplida la falta ó omisión que padecieron. Mas no puede decirse lo mismo cuando hecha la designación de partes, falta la de las épocas, porque esta ya no puede ser suplida con tanta facilidad; y opinamos con el Sr. M. Eixalá, que aun cuando el contrato comprenda géneros distintos con precios diversos, si se celebró en un solo acto, no puede ser compelido el comprador á recibir los unos sin los otros, no habiéndose puesto esta condición.

(1) Art. 370.
(2) Art. 371.

Los vicios internos de que pueda adolecer la cosa vendida, dan lugar en el derecho civil á dos acciones tomadas del derecho romano, y llamadas Redhibitoria y quanti minoris. Por la primera, puede el comprador rescindir el contrato durante seis meses, contados desde su celebración, devolviendo la cosa y recobrando el precio; la segunda, solo tiene lugar cuando no hace uso de la primera; pudiendo, en virtud de...
7.° A exigir que se le defienda en juicio si se le mueve pleito; y que se le sanee el contrato, si por sentencia se le priva de la posesión y propiedad de la cosa vendida (1).

280. Al vendedor a la vez corresponden:

1.° Exigir el precio convenido.
2.° Solicitar el depósito judicial de los efectos, cuando el comprador resista ó retarde su recibo sin causa fundada (2).
3.° Exigir que se abran y examinen, pesen, midan y cuenten en el acto, cuando estén enfardados, ó bajo cubierta que impida examinarlos, si no quiere quedar responsable a las reclamaciones que el vendedor puede introducir en los ocho días siguientes (3).

Y 4.° El de cobrar, como acreedor de dominio sobre los géneros vendidos, su importe y los intereses por la demora, con preferencia a otros acreedores. Con la diferencia, de que si la venta se ha hecho al fiado, solo le compete, mientras los conserve en su poder sin entregarlos, aunque sea por via de depósito; y siendo al contado, puede ejercitarlo antes y después de la entrega, mientras se conserven en el mismo estado en que esta se verificó, ó embalados y separados en términos, que con ningunos otros puedan confundirse (4).

281. Las obligaciones correspondientes a estos derechos, se reducen:

Con respecto al vendedor:

1.° A tener a disposición del comprador la cosa vendida al

ella reclamar lo que valga menos la cosa vendida, en atención al vicio que tenga durante otros seis meses ó sea hasta el año. Este plazo tan largo ha parecido innecesario, y aun perjudicial a los intereses del comercio, y la ley mercantil las ha reducido a uno, sujetando al vendedor a responder de las resultas de estos vicios, solo por el espacio de seis meses, contados desde la entrega, tiempo muy suficiente para que una persona cuidadosa pueda descubrirlos.

(1) Art. 380.
(2) Art. 365, párrafos 2.° y 3.°
(3) Art. 370, párrafo 2.°
(4) Arts. 376 y 444.
vencimiento del plazo convenido, ó á las 24 horas después de celebrado el contrato, si no se ha fijado (1).

2.ª A entregar íntegra y sin alteración la que sea determinada; y siendo indeterminada, aquella ó otra de la misma especie, calidad y cantidad que pueda sustituirla (2).

3.ª A pagar los gastos que ocasione la entrega, hasta poner los efectos pesados, contados y medidos á disposicion del comprador, y los impuestos que deba satisfacer según las leyes y reglamentos de la Hacienda pública (3).

4.ª A conservar en su poder los géneros vendidos en calidad de depósito, desde que los pone á disposición del comprador y este se dá por satisfecho de su calidad, hasta que se verifique la entrega (4).

5.ª A remitirlos con la anticipacion necesaria, para que lleguen oportunamente al punto á que se dirijan cuando haya contratado enviarlos á otra parte.

6.ª A entregar facturas de los que venda, con el recibo de su importe ó de la parte que haya cobrado, cuando el comprador se la pida (5).

7.ª A responder de las faltas, defectos y vicios que se re-

---

(1) Art. 372.

Si el que vende al fiado observa que no son suficientes las garantías que ha exigido para resguardo de su derecho, ¿podrá suspender la entrega de los géneros vendidos, hasta que se le den otras más eficaces? Esta es una cuestión que puede suscitarse, porque mas de una vez ocurrirán, sin duda, casos de esta especie, y ofrecerán dificultades en su resolución; pues el vendedor al fiado pierde el concepto de acreedor de dominio desde que entrega los géneros vendidos, según el art. 1114, que ya hemos citado, y si teme que el comprador por su parte no ha de cumplir el contrato, no parece fuera de razón que se resista á cumplirlo por la suya. En nuestro juicio, no debe autorizarse la resistencia por una sospecha vaga; pero si ocurriese un descrédito notable en el giro del comprador o del fiador, podría sin duda excusarse, como sucede con el comisionista.—Art. 125 (núm. 255.)

(2) Arts. 364 y 369.
(3) Art. 373.
(4) Art. 377.
(5) Art. 377.
clamen respectivamente en el acto de la entrega, á los ocho días ó á los seis meses, aunque haya procedido de buena fe, y á eviccionar y sanear la venta, como dejamos manifestado en los derechos del comprador (1).

282. Incumbe también á este último:

1.° Recibir los efectos en el plazo convenido, ó en los diez días siguientes al del contrato, no teniendo causa justa para excusarse (2).

2.° Ir á buscarlos al punto en que se hallen al tiempo de la venta, si no interviene pacto en contrario.

3.° Reclamar del porteador responsable, en los términos que diremos al tratar del consignatario cuando hablemos de las conducciones, las faltas, vicios ó defectos que tengan las mercancías que le envíe el vendedor ausente. Justificar en debida forma los que sean, cuando no aquél, sino este, debe responder de ellos: y pedir su depósito, cuando no le convenga recibirlos faltos ó defectuosos, ó no haya conformidad entre él y el porteador, acerca del estado en que se hallen los efectos porteados, si se avengan con el juicio de los peritos que se nombran (3).

4.° A justificar del mismo modo que no han ocurrido en su almacén las faltas, vicios ó defectos que reclame en los géneros que recibió bajo cubierta, cuando ejercite este derecho dentro de los ocho días que dejamos indicados (número 279) (4).

5.° Pagar el precio íntegro al plazo señalado, y si no se designó, á los diez días de celebrado el contrato; á no ser que reclame antes la entrega de las mercancías, en cuyo caso deberá pagar cuando las reciba (5).

6.° Pagar además los gastos que ocasione el recibo de los

(1) Arts. 370, 371 y 380.
(2) Art. 463, párrafo 2.°
(3) Arts. 248 y 249.
(4) Art. 370.
(5) Art. 372.
géneros, los de su custodia después de entregados, y los de su extracción y traslación (1).

7.° Pagar igualmente los que ocasione el depósito judicial y su custodia, cuando se tome esta medida por su morosidad en recibirllos (2).

8.° Citar de evicción al vendedor, luego que sea demandado (3).

283. La falta de cumplimiento de estas obligaciones lleva consigo su debida responsabilidad, que consiste unas veces en la rescisión del contrato, otras en el abono de daños y perjuicios, y otras en la pérdida de los derechos a que hacen relación.

284. La rescisión solo tiene lugar por la falta de entrega de la cosa vendida, por la de su recibo, y por los vicios de que adolezca; pues aunque las ventas civiles se rescinden también por la lesión enorme y enormísima, no es aplicable esta disposición a los mercantiles, como ya hemos insinuado, porque se opone al objeto con que se celebran, y la haría imposible, las más veces, la rapidez con que se multiplican, y la celeridad con que se ceden, transportan y aun consumen las cosas vendidas; por lo que únicamente se dá derecho para reclamar daños y perjuicios contra el que proceda con dolo en la celebración o en el cumplimiento del contrato (4) * (número 136).

La rescisión es necesaria y voluntaria. Necesaria, cuando lo vendido no puede ser entregado, por haber perecido o haberse deteriorado sin culpa del vendedor, en cuyo caso la ley le declara libre de responsabilidad, y el contrato rescindido

---

(1) Art. 373.
(2) Art. 365, párrafo último.
(3) Art. 381.
(4) Art. 378.

* El dolo que dá causa al contrato, lo anula y deja sin efecto; mas el que es accidental en él y no vicia el consentimiento, solo dá lugar a la indemnización de daños y perjuicios.
de derecho; mas si hubiese recibido el precio, indudablemente tendría que devolverlo (1).

También será necesaria cuando se hayan perdido por su culpa, ó por haber vendido y entregado después a otro la cosa específica ó determinada; pues aunque la responsabilidad sea distinta, es imposible la entrega es inevitable la rescisión.

La voluntaria procede de la elección de los interesados que podrán respectivamente solicitarla; el comprador, cuando el vendedor no entregue la cosa al tiempo debido, íntegra y sin defectos que disminuyan su uso, aun cuando se le haya entregado, si adolece de vicios internos que no pudieran percibirse en el acto de la entrega; y cuando la que se le quiera entregar no sea igual a las muestras que se tuvieron presentes, ó no contenga la cualidad fija bajo la que fué contratada: y el vendedor, cuando el comprador sin justa causa se resista á recibirla (2).

(1) Arts. 365 y 368.
(2) Arts. desde el 362 al 365, y el 371.

* El Código no autoriza expresamente al comprador para pedir la rescisión, mas que, cuando no tiene lugar la entrega en el plazo convenido, y cuando los efectos no sean iguales á las muestras, ó no tengan la calidad fija bajo la que fueron contratados, pero nosotros no hemos dudado en añadir el caso en que no se le entrega íntegra, y en el que esté defectuosa, porque los encontramos muy conformes, y aun virtualmente comprendidos en las disposiciones de los arts. 564, 570 y 571; y porque no parece duro e injusto opuesto al interés del comercio, que se obligue al comprador á recibir unos géneros, que tal vez no le pueden servir para el uso á que los destinaba, por no ser suficientes ni á propósito por su calidad ó por su cantidad, y tenemos por más acertado que el comprador elija, si le acomoda, la rescisión, que no la indemnización de unos perjuicios tal vez difíciles de calcular. Tampoco permite al vendedor solicitarla cuando el comprador es moroso y no paga el precio con la debida puntualidad, autorizándole solo para que reclame el rédito legal por el tiempo de la tardanza. Bien percibimos que en las ventas al fiado y en todas las ocasiones en que la entrega precediera al pago, y los géneros hubiesen pasado á otras manos, sería muy difícil y á veces imposible rescindir el contrato; pero en las celebradas á pagar al contado no milita este inconveniente. En estas, la misma falta comete el que no entregue la cosa, que el que no paga el precio; y si la del vendedor se cas-
285. Esta facultad es alternativa en el comprador con la de pedir los daños y perjuicios, cuando el vendedor procedió con culpa: de modo que podrá (*) elegir uno de los dos medios, el que le parezca mejor, pero no ambos juntos; y la misma alternativa compete en cierto modo al vendedor, que tiga con la pena de la rescisión, no sabemos por qué no se ha de castigar lo mismo la del comprador, ó por qué el primero ha de ser de peor condición.

Para mayor claridad en esta materia, tenemos todavía que advertir, que no debe confundirse la falta que puede cometer el vendedor que no pone á disposición del comprador la cosa vendida al tiempo en que deba hacerlo, con la de no entregarlá cuando se le reclame, que son dos cosas muy distintas y producen diferentes efectos. La primera, autorizará al comprador para reclamar la entrega ó pedir la rescisión, si no se verifica; pero esta no podrá acordarse hasta que haya intervenido la segunda, esto es, hasta que haya sido requerido para la entrega, y sin embargo, no la haya realizado.

(*) La doctrina que sentamos en el texto, está en contradicción con el art. 565, que expresamente declara, que si el vendedor no hace la entrega al plazo convenido, el comprador tiene derecho á pedir la rescisión del contrato ó la reparación de los perjuicios que se sigan por la tardanza, aun cuando esta proceda de accidentes imprevistos. Pero este artículo lo está con el 365, que en su primera parte dispone de la manera más explícita, que cuando la falta de entrega proceda de que los efectos vendidos hubiesen perecido ó se hubiesen deteriorado por accidentes imprevistos, sin culpa del vendedor, cesa toda responsabilidad de parte de éste, y el contrato queda rescindido de derecho; y entre estas dos disposiciones tan contradictorias, hemos elegido la que tenemos por más justa y más conforme á los principios del derecho, que no consienten que á ninguno se oblige á indemnizar perjuicios que ni directa ni indirectamente ha ocasionado. No desconocemos que el art. 363 habla del caso en que solo se retrasa la entrega, y el 365 del en que absolutamente pueda realizarse; pero esta diferencia en nada contribuye á la resolución de la dificultad, sino que la aumenta, pues el que tal vez, con harto sentimiento suyo, se vé imposibilitado de entregar la cosa vendida al tiempo convenido, por un accidente que no pudo prever, porque el conductor, por ejemplo, enfermó en el camino, ó un aguacero impidió el paso de un río, no ha hecho más que el que no puede entregarla porque se le ha perdido ó se la han robado: los dos se hallan en igual caso, á los dos asiste una razón idéntica; y donde hay razón igual, la disposición de la ley debe ser la misma.
puede elegir tambien entre solicitar la rescision ó el cumplimiento del contrato, poniendo los efectos á disposicion de la autoridad, y exigiendo el precio con el redito legal que corresponda al tiempo que tarde en recibirlo; porque este redito es en lo que están calculados los perjuicios que se le sigan por no recibir el dinero con puntualidad, y por esta razon incurre tambien el comprador en la obligacion de abonarlo desde el momento mismo en que deja de pagar el precio cuando deba verificarlo (1).

286. Pero ademas de estos casos, tiene el vendedor que abonar daños y perjuicios:

1.° Cuando no cumple los deberes que tiene que llenar, como depositario de los efectos puestos á disposicion del comprador.

2.° Cuando no los remite oportunamente, y con las debidas precauciones, teniendo esta obligacion.

3.° Cuando no se presenten á defender al comprador en el pleito que se le nueva, habiendo sido citado de evicion.

Y 4.° Cuando comparezca y pierda el pleito porque se le pruebe que procedió con mala fe en la venta; pues sino media esta circunstancia, solo tendrá que devolver el precio y los gastos que haya hecho el comprador (2).

(1) Arts. 365, párrafo 3.°, y 575.

(2) Así lo dice el art. 375 del Código, declarando que se constituye en esta obligacion desde el momento en que debió pagar, según los terminos del contrato; pero si en este articulo no es una excepcion del 261, está en abierta contradiccion con el principio general que se sien- ta en él; pues si los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones no principian sino desde que aclara el acreedor integralmente al deudor, ó le intima ante escribano la protesta de daños y perjuicios, como dice este ultimo, no puede ser que el vendedor se constituya en la obligacion de satisfacer reditos, en el mero hecho de no pagar, ó sea antes de habersele requerido é interpelado. Nosotros nos inclinamos á creer que es una excepcion con la que en cierto modo se quiere compensar el perjuicio que puede sentir el vendedor, por no tener derecho á pedir la rescision, como hemos indicado.

(2) Art. 380.
287. La pérdida de los derechos á que hacen relación las obligaciones no cumplidas, tiene lugar en el comprador:

1.° Cuando no reclame en el acto, ó a los ocho días, ó a los seis meses respectivamente, las faltas, defectos ó vicios de las cosas entregadas, y cuando no justifique que se hallan en el mismo estado, ó que no han podido sobrevenir después de recibirlas (1).

2.° Cuando no cite de eviccion al vendedor en tiempo oportuno (2).

(1) Arts. 570 y 371.
(2) Art. 381.

El comprador que no haga citar de eviccion al vendedor en el caso de moverle pleito sobre las cosas que le vendió, pierde todos los efectos de aquella garantía, dice el art. 381; pero nosotros hemos añadido con cuidado las palabras en tiempo oportuno, porque no nos parece suficiente una citación hecha en cualquiera época ó estado del juicio, para que el comprador delía conservar ilesos sus derechos, sino la que se haga con la anticipación necesaria, para que el vendedor pueda presentarse en juicio, y defenderse con toda la latitud y libertad que sus intereses puedan exigir. Con arreglo al derecho civil, debe hacerlo luego que se mueva el pleito, ó lo más tarde antes de la publicación de probanzas, como ha declarado el Tribunal Supremo de Justicia por sentencia de 12 de noviembre de 1863; y esta disposición parece también aplicable á los asuntos de comercio, aunque a nuestro entender debiera establecerse que se hiciera precisamente luego que fuera citado y emplazado para comparecer en juicio, como regularmente se acostumbra, porque desde esta diligencia hasta la publicación de probanzas, median otras infinitas, no poco importantes, en las que el vendedor puede sufrir perjuicios; y sobre todo, pudiera suceder que se hubieran excusado si hubiera comparecido en el pleito desde entonces, y hubiera alegado tales excepciones, que desde luego pareciera al demandante que era temeraria su reclamación. En el derecho civil también se halla prevenido que pierde el comprador este derecho, entre otros casos, si no excepciona la prescripción; pudiendo alegarla, si abandona la cosa comprada, y pierde la posesión por su culpa, y si somete la cuestión á juicio de árbitros, cuyas decisiones tenemos por muy fundadas y aplicables al derecho mercantil.

Pero aun prescindiendo de estos casos especiales y dando por supuesto que se haga oportunamente la citación, puede suscitarse la duda de si en el de no comparecer el vendedor en el juicio debe seguirlo el comprador y ser vencido para conservar el derecho de exigir el saneamiento.
288. En este contrato, como en todos los que se perfeccionan por la manifestación del consentimiento hecha con las formalidades prevenidas, hay que distinguir el acto de su perfección del de su consumación, ó sea el de la obligación y el de la entrega de la cosa vendida, y examinar á quién corresponderá la pérdida total, ó el detrimento y deterioro que sufra en el tiempo intermedio.

En el derecho común está reconocido el principio, de que la cosa vendida y no entregada perece para el comprador, porque se considera al vendedor como un deudor de especie, á quien no se impone ninguna responsabilidad cuando la cosa debida perece sin culpa; y solo en el caso de que no sea deudor de especie, y en algunos otros semejantes en que cesa la razón de la ley, pesa sobre él la obligación de soportar las pérdidas. Mas en el mercantil puede acaso decirse, por el contrario, que la cosa vendida y no entregada perece para el vendedor, y que el comprador sufrirá la pérdida solo cuando haya sido moroso en recibirla; porque en el comercio son poco frecuentes las ventas de cosas específicas y determinadas, ó que no estén comprendidas en las excepciones del derecho civil; y aun en las que no lo están, se necesita además que concurra la circunstancia de que el vendedor haya puesto la cosa vendida á disposición del comprador, cuyo acto equivale á la entrega por su parte, porque con esto cumple y queda extinguida su obligación; pero todavía se hará más perceptible esta doctrina examinando las disposiciones de la ley, y los casos en que respectivamente gravita la responsabilidad sobre cada uno de los dos.

289. Según ella, corresponden al vendedor los daños de la cosa vendida y no entregada:

El art. 384 del Código de comercio no le impone esta obligación, como el 580 le impone al vendedor la de comparecer y defender á su costa la legitimidad de la venta, y en caso de sucumbir la de devolverle el precio y abonarle los gastos que haya expendido. Sin embargo, en el derecho civil parece de necesidad que los siga, y sea vencido, según sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 10 de junio de 1865.
1.° Cuando sobrevengan por su culpa.

2.° Aunque provengan de caso fortuito, si no ha puesto la cosa vendida á disposicion del comprador en el lugar y tiempo en que deba hacerse la entrega, por las condiciones del contrato ó con arreglo á derecho (1).

3.° Aunque la haya puesto, si la cosa no es un objeto cierto y determinado, con marcas y señales distintivas de su identidad.

4.° Aun cuando lo sea, si por pacto expreso del contrato, ó por el uso del comercio, según la naturaleza de la cosa vendida, ó por disposicion de la ley, compete al comprador el derecho de visitarla y examinarla, y darse por contento de ella, antes que se tenga la venta por concluida.

5.° Cuando lo vendido fuesen efectos que se hubiesen de entregar por número, peso ó medida (*)

(1) Art. 366.

(*) Para no exponerse á equivocaciones en esta materia, es necesario fijarse en la decision del párrafo 5.° del art. 367, que es muy fundado, y se halla redactado con toda precision; para no comprender mas efectos que los que se han de entregar de la manera que expresa el texto; porque las ventas de los que en el comercio, y aun fuera de él, se suelen comprar y vender por número, peso y medida, pueden contratarse de diferente modo, y ser distinta la responsabilidad de los riesgos que corran, según los términos en que se hayan celebrado. La de todo el vino de un almacén, por ejemplo, puede verificarse, ó de todo el conjunto por una cantidad alzada, como si dijeramos 50,000 rs., ó de todo el que haya, á 40 rs. la arroba, ó de las 100 botas en que se halla contenido, si este es el número de vasijas que hay en él. En todos tres casos se vende todo lo que hay en el almacén por un mismo precio ó cantidad, si suponemos que son 2,000 arrobás las que deben resultar de la medida; y sin embargo, la responsabilidad, con respecto á los riesgos, es muy diversa en cada uno de ellos; porque en el primero, es una cosa cierta y determinada, cuya entrega puede verificarse en el acto, por la tradicion simbólica de las llaves, cesando desde aquel momento la responsabilidad del vendedor; pues aun cuando la cosa es de las que se pesan, miden y numeren, aquí no es el número, peso y medida lo que se ha considerado, sino el todo, ó mas claro, no habia que entregarlo por peso, número ó medida como dice el artículo. En el segundo, la cuestion varia enteramente de aspecto. La venta fué hecha con relacion á la medida; la medi-
Y 6.° Si la venta se hubiese celebrado con el pacto de no hacer la entrega hasta un plazo determinado, ó hasta que la cosa estuviese en estado de entregarse, con arreglo á las condiciones estipuladas, y lo mismo deberá decirse de cualquiera otra cláusula que suspenda la perfección ó la consumación del contrato (1).

290. Son de cuenta del comprador solamente los que ocurran en las cosas específicas ó determinadas, después que el comprador las puso á su disposición en el lugar y tiempo en que deba recibirlas (2).

Tenemos, pues, que sobre el comprador no gravitan más da es la que debe fijar el precio y la obligación del comprador; por consiguiente, hasta que esta intervenga, no puede haber para él mas responsabilidad ni mas obligación que la de asistir á recibirlo cuando haya de verificarse. En el tercero, también lo vendido es cosa cierta y determinada, y deben correr los riesgos por cuenta del comprador, como en el primero, desde que el vendedor los tenga á su disposición; pues aun cuando pudiera alegarse que lo vendido eran 100 botas, y por consiguiente que se había hecho la venta con relación al número, y que aunque no se midiese el líquido que contenían, ciento eran, sin embargo, de las que debía responder el vendedor, esta objeción no tendría ninguna fuerza en el caso presente, ni en ningún otro de la misma especie, en que el número se fijara desde luego; porqué si se contaron en el acto de la venta, y el comprador las numeró y se enteró de su cabida, como era indispensável, antes de ofrecer un solo precio por todas ellas, ya fueron contadas y numeradas, que es lo que exige la ley, y desde entonces quedó la cosa fija y determinada, y cesó la responsabilidad del vendedor.

(1) Art. 367, párrafo último.
(2) Art. 366.

Cuando el contrato se haya celebrado entre ausentes por medio de la correspondencia, y á consecuencia de él se envíen las mercancías de un punto á otro, ¿quiéen corresponderán los daños y pérdidas que ocurran en el camino por caso fortuito ó por otra causa, de la que no deba responder el porteador? Los términos en que se haya celebrado el contrato parece que son los únicos que pueden servir de base para la resolución de esta cuestión, porque ellos serán los que dén á conocer si las mercancías han sido pedidas u ofrecidas; si el vendedor cumplió con enviar las que se le habían pedido, ó si es de su cuenta la remesa; con las demás circunstancias que deben tenerse presentes para apreciar la responsabilidad que puede pesar sobre cada uno de los contratantes.
que en el caso de que sea moroso en recibir las determinadas, y en realidad en ninguno, bajo el concepto de tal comprador, pues desde que la cosa vendida ha sido puesta á su disposición se le tiene como dueño, y al vendedor como depositario para los efectos del derecho; y si son en este caso de su cuenta, puede decirse que es porque le pertenece su propiedad, y por consiguiente que en el derecho mercantil siempre gravitan sobre el vendedor (*)

(*) Los términos en que está nredactados los arts. 365, en su 1.ª parte, y el 366, pueden también dar ocasión á que se dude á quien corresponde la pérdida ó deterioro de la cosa vendida y no entregada, porque hay entre ellos en cierto modo otra contradicción, como la que hemos notado entre el 363 y el 365, tratando del abono de perjuicios. Según el 365, la pérdida ó deterioro sin culpa del vendedor rescinde el contrato de derecho, como hemos manifestado; y si lo rescinde, claro está que el vendedor se quedará con la pérdida ó con la cosa deteriorada, y el comprador con el precio; porque en esto consiste la rescisión, en no obligar á ninguno de los dos á llevarlo á efecto. Por el 366, los daños y menoscabos que sobrevienen á las cosas vendidas y no entregadas después que se perfecciona el contrato, y el vendedor los pone á disposición del comprador, hasta que se verifica la entrega en el lugar y tiempo en que debe hacerse, con arreglo á derecho, ó por las condiciones del contrato, son de cuenta de este último; y si son de cuenta del comprador, y éste debe sufrirlos, ó lo que es lo mismo, si tiene obligación de recibir la cosa dañada ó deteriorada, y se ha de quedar sin ella si ha perecido, pagando el precio íntegro, es incontestable que el contrato subsiste y no se rescinde ni de hecho ni de derecho. Nosotros, sin embargo, creemos que no hay contradicción en el espíritu, al menos de estas decisiones, y que pueden conciliarse muy bien entre sí mismas y con los demás que las siguen, porque tratan de casos diversos, en los que no son aplicables los mismos principios. Un vendedor puede serlo de cosa específica, ó de cosa indeterminada; aunque lo sea de cosa específica, podrá haber pacto de hacer la entrega en un plazo que se fije, en el lugar del contrato ó en otro que se señale, ó no haber pactado nada; y aunque nada haya pactado, haber acaecido la pérdida ó deterioro antes de ponerlo á disposición del comprador, ó después de tenerla á su orden, y haberla puesto antes de las 24 horas en que debe hacerlo, ó después de transcurridas. He aquí varios casos que pueden ocurrir, y en los que no puede ser la misma la responsabilidad. Cuando la cosa es incierta ó genérica, la ley supone que el género nunca parece, y responde de la pérdida el vende-
Los aumentos, creces ó mejoras, en el caso de que los tengan, están sujetos á las mismas bases por el principio general del derecho, de que el que sufre el daño ó la pérdida, debe también percibir las utilidades ó beneficios.

SECCION SEGUNDA.

De las compras-ventas excepcionales.

294. Llamamos excepcionales las compras-ventas que por su naturaleza, por la de los objetos sobre que recaen, y por las circunstancias que en ellas intervienen, se gobiernan por reglas distintas que las comunes y ordinarias de que hemos tratado.

dorado: cuando la vende con el pacto de entregarlá á cierto tiempo ó en lugar distinto, la venta es condicional, y si la condición no se cumple no hay venta. Lo mismo sucede con las cosas que se entregan por número, peso y medida, que llevan consigo la de que se ha de practicar esta operación, que es la que las fija y determina; por eso cuando intervienen estas circunstancias, los arts. 567 y 368, que son excepcionales y aclaratoria del anterior, dicen, en conformidad con el 365 en su 1.

a parte, que corresponden los daños al vendedor, que debe quedarse con la pérdida y devolver el precio recibido. Cuando la cosa es determinada y específica, hemos dicho que el vendedor tiene obligación de ponerla á disposición del comprador, desde luego, ó lo más tarde á las 24 horas si no hay pacto especial, y si lo hubo, al tiempo y en el lugar prefiijado; pues bien, ó el vendedor cumple ó no con esta obligación: si cumple, cesa con respecto a él toda responsabilidad, y la cosa perecerá para el comprador, que es el moroso y culpable en no venir á recibirla, y esta es la decisión fundada y justa del art. 556; si no cumple, la pérdida será siempre de cuenta suya, pero la responsabilidad no será la misma, si ocurrió antes de las 24 horas ó del cumplimiento del plazo, que si ocurrió después; porque en el primer caso, que no hubo culpa por su parte, el contrato se rescindirá de derecho, y no estará obligado á mas que á devolver el precio recibido, según los arts. 365 y 368; y en el segundo, tendrá que abonar los daños y perjuicios, si con arreglo al 363 elige este medio el comprador, como hemos dicho en la nota precedente. Esta es la inteligencia que nosotros damos á estos artículos, y de ella de los principios del derecho deducimos la doctrina que sentamos en el texto.
Las excepciones pueden recaer, ó sobre el modo de celebrarlas, ó sobre los efectos que producen.

Por el modo de perfeccionarlas son excepcionales las subastas y las ventas forzosas, por la diferencia en sus efectos las aleatorias, y á unas y otras pueden en cierto modo añadirse las de efectos públicos por ambos conceptos.

292. La subasta es un contrato en que el vendedor trata públicamente y á la vez con cuantos compradores quieran tomar lo que vende, concluyéndolo definitivamente con el que le hace la proposicion mas ventajosa.

Se divide en judicial y voluntaria:

La primera es la que se celebra por la autoridad, y solo tiene lugar en asuntos de comercio cuando hay que pagar gastos suplidos, retribuciones ó derechos devengados en los depósitos judiciales, en las comisiones y en los transportes, y algunas veces en las quiebras. La privada se verifica en los martillos, que son unos establecimientos ó depósitos abiertos con licencia del Gobierno, previio el examen y la aprobacion de los reglamentos por que deban regirse, á los que todo el que quiere puede llevar sus efectos á vender, ó ir á comprar los que le acomoden (*).

Estas ventas no se celebran por el mismo propietario, ni hay necesidad siquiera de publicar su nombre: se hacen por el dueño ó director, ó mas bien por los dependientes del establecimiento que responde de la legítima procedencia de los efectos, pero no de sus cualidades, y se verifican de dos modos que son, al que mas dé, ó á precios reservados.

Cuando se anuncia al que mas dé, queda adjudicado lo que se venda al mejor postor al tiempo del remate. Mas si es á precio reservado, se puede retirar sin adjudicar, si no ofrecen la cantidad en que se queria vender.

(*) Se les dá este nombre, porque se celebran las ventas dando un golpe con un martillo sobre la mesa ó sobre una campana, en señal de quedar concluido el contrato y aceptada la ultima proposicion que se haya hecho.
El director debe cuidar bajo su responsabilidad que en estas ventas se guarden y cumplan las disposiciones del reglamento, y cobra por su comisión ó derechos el tanto por ciento que en el mismo se halle señalado (*).

294. Ventas forzosas. Después que los adelantos en las ciencias económicas han desterrado las preocupaciones en que estaba fundada nuestra antigua legislación, y se ha declarado libre en todo el reino el tráfico de los objetos de comer, beber y arder, pocos serán los casos en los que puedan verificarse ventas forzosas, ó á precios prefiijados; pero sin embargo, aun pueden ocurrir algunos, y como la ley declara expresamente comerciantes, sujetos á todos los cargos, obligaciones y beneficios propios de esta profesion, á los que se dedican á este tráfico, daremos aunque suentamente una idea de ellas (1).

Ninguno, por regla general, puede ser obligado á que venda cuando no quiera, y menos un comerciante, que compró para vender con ventajas, y tiene por lo mismo calculada de antemano la época en que le conviene hacerlo.

Mas si ocurriese una escasez extrema y fuesen precisos para surtir la población artículos de primera necesidad, todos los que los tengan pueden ser compelidos á que vendan los que sean indispensables para remediarla.

295. También puede suceder que sin que haya escasez se vendan estos artículos á un precio muy subido y desproporcionado, ya porque sea uno solo el que los tenga, ya por-

(*) El Código penal en su art. 460, califica de delito y castiga con la multa del 10 al 50 por 100 del valor de la cosa subastada, el acto de solicitar dádiva ó promesa para no tomar parte en las subastas públicas, y el de alejar de ellas á los postores con amenazas, dádivas, promesas ó cualquier otro artificio con el fin de alterar el precio del remate. No serán acaso muy frecuentes en las ventas mercantiles estos amanños; pero si intvinieran, creemos que tendría aplicación la pena, no sólo en las subastas hechas con asistencia de la autoridad, sino también en las celebradas en los martillos, que para este efecto deben considerarse como públicas, porque se hacen por persona autorizada competentemente y con sujecion á los reglamentos aprobados por el Gobierno.

(1) Real decreto de 20 de enero de 1834.
que se coliguen entre si los expendedores; pero este caso no puede equipararse de ninguna manera con el anterior para obligarlos a vender á un precio dado, porque mas caras ó mas baratas hay subsistencias; y lo que debe hacer la autoridad local es remediar el mal procurando adquirir los artículos encarecidos con fondos comunes; ó con otros arbitrios si los puede proporcionar, para venderlos al precio que justamente deban tener, pues así conseguirá el mismo objeto, dejando ilesos el derecho de propiedad. Mas aunque no se les puede obligar á que vendan á precios dados, se puede proceder criminalmente contra los delincuentes, si la carestía proviene de que se hubiesen esparcido rumores falsos, ó de que se hubiese usado de algún otro artificio para alterar los precios naturales que resultarian de la libre concurrencia en las mercancías, en cuyo caso serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 100 á 1,000 duros, cayendo en comiso los géneros que fuesen objeto del fraude, aun cuando solo se haya principiado á ejecutar la coalición. Estas mismas penas, excepto el comiso, tienen tambien cuando no recaiga esta sobre mantenimientos, sino sobre cualesquiera cosas, acciones ó derechos privados y públicos que fuesen objeto de contratación (1).

296. Ventas aleatorias. Se conocen con el nombre de aleatorias las compras-ventas que recaen sobre objetos cuya existencia en todo ó en parte pendé de la eventualidad.

No son lo mismo que las condicionales, ni deben confun-

(1) Arts. 451 y 452 del Código penal.

* El Real decreto de 20 de enero de 1834 abolió la tasa de los artículos de comer, beber y arder, excepto el pan; y el de 8 de setiembre de 1836 restableció el de las Cortes de 8 de junio de 1813, por el que se declara libre el tráfico de todos los productos de la tierra y los de la pesca y la caza, el de los ganados y sus esquilmos, y el de las obras del trabajo y de la industria, sin sujeción á tasas ni posturas, sin embargo de cualesquiera leyes generales. Mas quedó vigente todavía la del pan en algunas poblaciones, como ley ó costumbre municipal, y se observó en Madrid hasta que el Ayuntamiento acordó su abluición en 9 de febrero de 1838, y se aprobó su determinación por Real orden de 3 de
dirse con estas, pues aunque en unas y otras interviene un suceso incierto, que tiene la mayor influencia en el contrato, hay entre ellas, sin embargo, la notable diferencia de que en las condicionales influye en su validación, y existen ó no, según que se verifica ó no se verifica, porque el suceso es la misma condición, y en las aleatorias no influye en su esencia, sino en sus resultados. El contrato existe, es válido y eficaz, y produce acciones desde el momento en que se celebra; el suceso solo decide y declara á quien corresponde la ganancia ó beneficios que debe producir; de modo que puede suceder, y sucede de hecho, en algún contrato que es al mismo tiempo aleatorio y condicional.

Las compras-ventas pueden ser aleatorias, ó por su naturaleza, ó por las cláusulas con que se hayan celebrado.

Por su naturaleza lo son las de esperanzas y las de crédito no endosables.

Por las cláusulas del contrato pueden serlo muchas, porque esto pende de la voluntad de los que las celebran. Las mas comunes son las empresas de abastos, y las celebradas á provecho comun.

297. Esperanzas. Las compras-ventas de esperanzas son aquellas en que lo vendido y comprado es un objeto que no existe de presente, y cuya existencia futura podrá ser mas ó menos probable.

Se dividen en ventas de esperanzas, propiamente dichas, y de productos futuros determinados.

En las de esperanzas, los efectos del evento en que se fundan pertenecen exclusivamente al comprador, que tendrá que pagar el precio convenido, así cuando la esperanza le salga fallida y nada perciba absolutamente, como cuando el re-

abril del mismo año, después de haber oído á la Sociedad económicá y á la Diputacion provincial que opinaron por la abolición.

La fabricación y libre venta del pan y la exención del impuesto de correduría y de toda otra gabela, está declarada por Reales órdenes de 19 de abril de 1853, expedidas á instancia de los panaderos de Albacete y Alcanar.
sultado sea tan satisfactorio, que exceda con mucho los cálculos que pudiera haber formado.

298. En las de productos futuros no sucede lo mismo, porque estas las considera la ley celebradas bajo el concepto de que haya productos, cuando expresamente no se haya pactado lo contrario, y si no los hay no pueden tener validación.

Estos contratos son á la vez condicionales y aleatorios, y el resultado del evento podrá ser igualmente favorable y adverso para los dos.

Así, pues, vendidos los frutos que produzca un campo ó una viña que se designe, sufrirá las consecuencias del suceso el vendedor; si no produce absolutamente ninguno, porque falta la condición, no hay contrato, y por consiguiente no puede reclamar el precio. Mas si produce algunos, la condición existe, el contrato es válido, y las consecuencias del evento serán para el comprador, que abonará el precio ofrecido, y se llevará los frutos sean muchos ó pocos.

La eventualidad y el riesgo para este consiste en la cantidad que produzca, y en el precio que puedan tener cuando los perciba; por lo que, aun en el caso de que lo vendido fuera una porción de frutos determinada, todavía sería el contrato aleatorio con respecto al valor que tuvieran al tiempo de ser entregados.

299. En estas ventas es circunstancia esencialísimas que el suceso no se haya verificado cuando se celebren, y si ha sobrevenido, que no haya términos hábiles para que los contratantes puedan saberlo y procedan ignorando absolutamente sus resultas; pues si el uno ó los dos lo saben, obran sobre seguro, proceden de mala fe, y el contrato se anularia, ó tendrá el que procedió con ella que abonar daños y perjuicios al que lo ignoraba (1).

500. Las ventas á plazo de efectos públicos, que no se tienen á la vista, también son en cierto modo ventas de esperanzas; pero están prohibidas actualmente si no se entrega nota

(1) Leyes 12 y 14, tit. V, Partida 5.a
firmada del número de los títulos que se vendan al agente que intervenga en la negociación, como se verá en su lugar respectivo. Nada decimos de las rifas, loterías, ni de las apuestas, porque no son operaciones mercantiles.

301. Créditos no endosables. Las compras-ventas de créditos no endosables son también aleatorias. La eventualidad en ellas consiste en que el deudor podrá o no encontrarse en estado de pagar cuando deba verificarse, o lo que es lo mismo, en que el comprador corre el riesgo de perder en todo o en parte el importe de lo comprado, si el deudor se constituye en quiebra, o no puede pagar por otras causas a la época del vencimiento.

Se llaman no endosables los créditos consignados en escrituras públicas, oficiales y particulares, o sujetos a otro medio de prueba, con tal que no sean en letras de cambio, libranzas, vales o pagarés a la orden, cuya propiedad se trasmita endosándolas.

302. En su compra-venta el acreedor cede el derecho a recibir el capital que representan con los créditos, si los devenga, por la cantidad que estipula, y el comprador adquiere el de cobrarlo; mas para que tenga efecto con respecto al deudor, es necesario que se le notifique en forma la cesión, o que la consienta de un modo amigable, renovando el crédito a favor del comprador, pues de no hacerlo así, solo producirá efecto entre el cedente y el cesionario, podrá ser embargado por los acreedores del primero, y se reputará legítimo el pago hecho al vendedor ó sus representantes, aun después de celebrada la venta (1).

La cantidad en que esta se verifique podrá ser la total del crédito ó cualquiera otra en que convengan, según las garantías ó hipotecas que asistan el pago (las que como accesorias, se suponen siempre cedidas con el principal), y la confianza que el deudor inspire al comprador; en una palabra, según la eventualidad que tenga que correr, porque el vended
dor no responde de la seguridad de la cobranza, si no lo pro-
mete por pacto expreso, en cuyo caso dejará el contrato de
ser aleatorio. Pero como no es lo mismo la solvavilidad del
deudor, que la legitimidad y certeza del crédito, responderá
de esta, y en su virtud estará obligado á la eviccion y sanea-
miento si se suscite pleito sobre su personalidad ó su de-
recho para vender, y si el deudor negase la existencia de la
deuda (1).

Debiendo tener presente, que si el crédito se hace litigioso
á consecuencia de la venta, podrá el deudor tantearlo por el
precio y condiciones que se hubiesen convenido, siempre que
use de este derecho dentro de un mes contado desde que se le
notifique la cesion, y que esta no haya recaído en algun cohe-
redero, comunero ó acreedor á quien se hubiese adjudicado
en pago (2). Disposicion adoptada con el fin de evitar litigios,
favoreciendo al mismo tiempo la suerte de los deudores.

Los créditos consignados en los efectos al portador, que
expiden las corporaciones provinciales y municipales y las
compañías ó empresas autorizadas para emitirlos, tampoco son
endosables, y su enajenacion se halla comprendida en estas
disposiciones; pero es necesario advertir con respecto á ella,
que habiéndose hecho en la Bolsa con las formalidades pre-
venidas, no tiene lugar la reivindicacion, sino solo cuando se
pruebe mala fe de parte del comprador, en cuyo caso se en-
cuentran tambien los billetes de los Bancos, como ya quedó
indicado. (Núm. 499) (3).

503. Las empresas sobre abastos se verifican comprome-
tiéndose uno á surtir de ciertos articulos á una poblacion, co-
munidad ó establecimiento, por el tiempo que se estipula.

Esta convencion, mas parece á primera vista promesa de
vender, que una verdadeña venta, pero es una venta formal,
porque desde que se celebra queda perfecta y concluida la ne-

(1) Art. 584.
(2) Art. 385.
(3) Ley de 30 de marzo de 1861.
gociación, y ya no falta más que el que se consume con la entrega de los artículos contratados todos los días o en las épocas prefijadas, y el pago del precio convenido que respectivamente tienen que hacer vendedor y comprador, suban ó bajen los valores, séales beneficioso ó perjudicial el contrato, pues esta es precisamente la circunstancia por la que se considera como aleatorio, porque pueden sufrir alteraciones los precios de los artículos, y su resultado pende de la casualidad. El precio puede ser alzado, esto es, fijo e inalterable en una sola cantidad por todo lo que se entregue, ó á un tanto por racion ó libra, que es lo más frecuente.

En el primer caso, el asentista deberá entregar cuanto pueda necesitar la población ó establecimiento, sin exigir más que la cantidad convenida. En el segundo, también tiene obligación de entregar cuanto se le pida, pero el precio será el que corresponda al número de libras ó raciones suministradas.

504. Estos contratos deben ejecutarse con la misma buena fe que los demás, evitando las tergiversaciones e interpretaciones con que a consecuencia de la alteraciones que sufra el valor de los efectos, se puede tratar de eludir su cumplimiento (4).

Las condiciones con que hayan sido celebrados, el uso y las circunstancias, son las que han de servir de base para decidir las cuestiones que se susciten, sobre el aumento de consumidores en caso de carestía, su disminución en el de baratuta, la calidad de los suministros, la imposibilidad de cumplir el contrato sin culpa del proveedor, y cualesquiera otras de esta especie que fácilmente puedan ocurrir. Teniendo presente que en estos contratos, como en los demás mercantiles, no tiene lugar la rescisión por lesión enorme ni enormísima, porque se opone á su misma índole y naturaleza (2).

505. Las ventas á provecho común, por las que entende-

(4) Art. 247.
(2) Decision del Consejo Real de 4 de marzo de 1857.
mos, las que se celebran con el pacto de que los beneficios que resulten en la reventa de los efectos vendidos, se han de dividir entre vendedor y comprador en la proporción en que hayan convenido, son unos contratos algo parecidos à la comisión de vender con la promesa de retribuir al comisionista con parte de las ganancias; pero tampoco pueden confundirse con ella, porque el comprador tiene siempre que pagar el precio, sea el que quiera el valor que tengan en la reventa los efectos que ha comprado. Es dueño de ellos, y si se pierden ó deterioran será de su cuenta el riesgo, y el comisionista nada tiene que desembolsar, ni puede sufrir otro detrimento que el de no cobrar su comisión.

La eventualidad en ellos, y por consiguiente la cualidad de aleatorios, consiste en el mayor ó menor precio que pueden tener los géneros comprados cuando se vuelvan á vender. Por lo demás, nada tenemos que añadir, sino que si al pacto de partir los beneficios se agrega, como puede suceder, el de rescindir el contrato devolviendo los géneros comprados, si en cierto tiempo no se pueden revender con ventaja, es válido y deberá cumplirse lo mismo que cualquiera otra condición con la que se haya celebrado. Este pacto no debe confundirse con el de retroventa, que aunque poco frecuente, también puede algunas veces tener lugar en el comercio.

Semejantes á las ventas de créditos no endosables, son también, por lo que respecta á la responsabilidad del vendedor, las de los efectos públicos, esto es, de los que representan créditos contra el Estado, y á los de esta clase deben referirse cuando no se celebren en la Bolsa, en cuyo caso se puede contratar sobre ellos como sobre los demás valores comunes del comercio, con sujeción á las prescripciones generales del derecho mercantil (1). Pero los contratos sobre estos efectos son de suma importancia y trascendencia en el orden público y en el privado, por lo que, aun cuando no está prohibida su contratación particular, para conocer y fijar su ver-

(1) Recurso de casación de 21 de marzo de 1862.
dero valor tienen que celebrarse en la Bolsa, que hoy no existe más que en Madrid, con formalidades determinadas, interviniendo no solo en su celebración, sino también en su cumplimiento, agentes especiales creados precisamente con este fin, y no es posible tratar de ellos sin dar a conocer a la vez las Bolsas de Comercio, el objeto de su creación, su organización y régimen, y los agentes que intervienen en las operaciones que se celebran en ellas; por cuya razon, y porque las de estos efectos constituyen una especialidad entre los del derecho mercantil, nos limitamos por ahora a hacer aquí estas indicaciones, para ocuparnos de ellos al tratar de los contratos especiales del comercio, después de las letras de cambio, cuya negociación, así como todas las demás que recaigan sobre cualesquiera otra clase de valores y de mercancías, son asimismo objeto de las reuniones que se celebran en estos establecimientos.
CAPÍTULO II.

DE LAS PERMUTAS.

306. La permuta es un contrato por medio del que uno adquiere el dominio de una cosa, dando otra en recompensa.

Se diferencia de la compra-venta en que en esta interviene precio en dinero, y también, en que los dos permutantes tienen a la vez el doble concepto de vendedores de lo que dan, y compradores de lo que reciben.

Se divide en simple y estimatoria. Se llama simple, la que se celebra entregando las cosas como están, esto es, sin apreciar cualquiera que sea el valor que puedan tener; y estimatoria, si convienen en que se tasen y aprecien antes para que conste lo que valen.

La permuta es indudablemente el primero de todos los contratos, pero en la actualidad es ya poco frecuente, y menos aun en las negociaciones mercantiles, en las que ocasionaria entorpecimientos y embrazos que evita la compra-venta, como hemos dicho al fijar la idea del comercio y del derecho mercantil, que por esta razón se limitó a reconocer la posibilidad de que por tal medio se hagan operaciones de comercio, estableciendo, que así con respecto a su calificación como a su celebración y efectos, se rijan y gobiernen por las mismas reglas que las compras-ventas en cuanto sean aplicables a esta clase de contratos, y cuando no lo sean, por las que para ellos mismos tiene establecidas el derecho civil (1).

(1) Art. 386.
307. El afianzamiento y demás garantías tienen por objeto asegurar el cumplimiento de los contratos ó de las obligaciones que nacen de ellos.

Son accesorios por su naturaleza, porque no puede concebirse su existencia, sin que preceda otro negocio de donde provenga la obligación que garantizan.

El objeto con que se contraen, puede conseguirse por dos medios diversos; ó sujetando, especialmente al pago algunos bienes determinados, cuyo valor asegure la cobranza, ó agregando á la obligación del deudor la de otra tercera persona que se comprometa á pagar si aquel no lo verifica.

En el primer caso, se celebra un contrato de prenda ó de hipoteca, según que la cosa sea mueble ó inmueble; y en el segundo, una fianza.

308. El de prenda é hipoteca no han sido tratados ni reglamentados como otros por la ley de comercio, pero los admite expresamente dando preferencia á los créditos en que intervienen cuando concurren con los que no tienen privile-
gio (1), reconoce la hipoteca legal y la convencional, establece también una prenda tácita o legal a favor del que hace anticipaciones sobre géneros consignados por personas residentes en el mismo pueblo que el comisionista (2); y a su imitación, se considera igualmente constituida en los efectos comprendidos en cuenta corriente, con respecto al saldo que resulte de la misma (*).

309. Estas son las únicas disposiciones de que puede hacerse mérito, referentes a estos contratos que en todo lo demás deberán gobernarse por el derecho común, pero teniendo presente que en la ley penal se halla establecido: 1.° que ninguno pueda dedicarse habitualmente a hacer préstamos sobre prendas ú otras garantías sin licencia de la autoridad, bajo la multa de 20 á 200 duros; 2.° que el que se dedique a hacer-los con liceucía ó sin ella, debe llevar un libro en que asiente con toda formalidad sin claros ni entre renglones las cantidades prestadas, los plazos é intereses, los nombres y domicilios de los que los reciben, la naturaleza, calidad y valor de los objetos dados en prenda, y las demás circunstancias que exijan los reglamentos; y si no lo lleva, incurre en otra de 100 á 1.000 duros: y que el prestamista que no dé el res-guardo de la prenda ó seguridad recibida, sea castigado con la del duplo de su valor, cayendo en comiso la cantidad pres-tada (3).

(1) Arts. 1115 y 1118.
(2) Art. 191.
(*) No hacemos mérito del derecho de preferencia que compite a los comisionistas, depositarios y porteadores para ser pagados de sus antici-paciones, retribucion y transporte, con el valor de los géneros consignados, depositados ó conducidos, y al vendedor por los géneros vendidos y no pagados en los términos que hemos dicho tratando de sus derechos, porque la ley les da otro privilegio mayor todavía, colocándolos, no en la clase de acreedores con garantía, sino en la de los que lo son de do-minio, como diremos cuando tratemos de las quiebras citando el ar-tículo 1114.
(3) Arts. 464, 465 y 466 del Código penal.
310. Al de fianza también son aplicables por regla general las disposiciones del derecho civil (1), y ni en las mercantiles ni en las comunes podrán ser fiadores los clérigos de orden sacro, los regulares, los soldados y las mujeres, sino en los casos y con las limitaciones que en el mismo se establecen; ni el que lo sea podrá tampoco obligarse a más que el deudor principal, aunque si en menos, y limitar su fianza a caso, cantidad o persona determinada, y aun contraerla bajo de condición. En unas y otras le competirán los beneficios de orden, división y cesión de acciones en sus casos respectivos; y en todas quedará extinguida su obligación luego que se extinga la del deudor; pero con respecto á este contrato ya encontramos establecidas algunas excepciones que son relativas á su calificación, al modo de celebrarlo y á los pactos ó condiciones con que, atendida su naturaleza y las tendencias de los negocios del comercio, puede ser celebrado.

311. Para que la fianza se repute mercantil, deben concurrir en ella dos requisitos: 1.º que deudor y acreedor sean comerciantes; 2.º que recaiga sobre otro contrato que merezca la misma calificación; de lo que se infiere, que la cualidad del fiador en nada influye para calificarlo, y por consiguiente, que podrá la fianza estar sujeta á la ley del comercio aun cuando el fiador no sea comerciante, y podrá no estarlo aunque lo sea, si no lo son á la vez los contratantes principales y el contrato sobre que recaiga (2).

312. La que tenga esta cualidad, debe contraerse siempre por escrito, y de otro modo no será válida. Pero no es necesario que se otorgue escritura pública, sino que será suficiente que se haga constar por una oficial, ó privada, ó por la correspondencia epistolar (3), y en el contrato de cambio bas-

(1) Art. 416.
(2) Art. 412, y Recursos de casación de 28 de junio y 30 de setiembre de 1859.
(3) Art. 413.
tará que el fiador firme por *aval* en la misma letra (4).

513. Mas como en el comercio todas las negociaciones se hacen generalmente con el fin de sacar algún lucro, puede el fiador exigir una retribución por la responsabilidad que contrae y el servicio que presta al deudor, y si este se conforma con pagarla (2)** deberá cumplirse el pacto.

Cuando se estipula, queda por medio de ella compensado el riesgo; los dos reportan utilidad, y pierde el fiador el derecho que le asistía para exigir que se le releve de la fianza sin plazo determinado, aunque se prolongue por mucho tiempo: porque en este caso cesa la razón que tuvo la ley civil para conceder este beneficio (3).

(4) Art. 476.
* A la fianza en la letra de cambio se le da el nombre de *aval*.

(2) Art. 414.
** En nuestro concepto esta es la única circunstancia que debería exigirse para calificar de mercantil la fianza, el depósito y cualquiera otro contrato de la misma especie: porque donde no entra la idea del lucro no hay operación de comercio, habrá un servicio gratuito que, aunque prestado entre comerciantes, no por esto cambia de naturaleza.

(3) Art. 445.
CAPÍTULO II.

DEL DEPÓSITO.

314. El depósito es un contrato, por medio del que una persona entrega alguna cosa á otra, que se obliga á custodiarla y devolverla cuando se le reclame.

Para que pueda merecer la calificacion de mercantil, es necesario que concurren en él estos tres requisitos:
1.° Que sean comerciantes los que lo celebren.
2.° Que las cosas depositadas sean objetos del comercio.
Y 3.° Que se celebre á consecuencia de alguna operacion que tenga el mismo concepto (1).

Esta última circunstancia dá bastante á conocer que el depósito en el comercio no puede tener lugar, sino cuando han mediado otras negociaciones, y por consiguiente que es un contrato accessorio de los que le deben preceder.

315. Se divide en voluntario y necesario; y se subdivide el primero en regular e irregular.

Es voluntario, cuando el deponente lo celebra con plena deliberación, eligiendo á su placer la persona del depositario. Se le llama regular cuando consiste en cosas específicas y determinadas, que tienen que devolverse lo mismo que se entregan; e irregular, si se depositan cantidades ó cosas consumibles con la facultad de usarlas.

Necesario, es el que se constituye cuando la ley ó las circunstancias le obligan á depositar sus efectos en local ó persona determinada, ó en la primera que se presenta.

316. El voluntario regular, se diferencia de la comision, en que en esta tiene el comisionista que prestar otros servicios mas que la simple custodia, como comprar, vender, remitir ó asegurar los efectos; pero convienen en todo lo demás, y principalmente en tres puntos capitales, que son:

(1) Art. 404.
1.° En que se celebran de un mismo modo, esto es, ó por escrito desde luego, ó ratificándose el contrato por este medio, en el caso de haberse celebrado al principio solo de palabra (4).

2.° En que el depositario tiene asimismo derecho á exigir, no solo el importe de los gastos que ocasione el depósito, sino también la retribución en que hayan convenido, y sino se pactó, la que le corresponda por los aranceles ó por el uso de la plaza (2).

Y 3.° En que el deponente y el depositario de efectos de comercio, están sujetos á las mismas obligaciones y responsabilidades que el comitente y el comisionista, y por consiguiente, en que son aplicables á unos y otros las que hemos enumerado al tratar de estos últimos (3)"; añadiendo, que para equipararlos en todo, se halla establecido que el depositario de documentos de crédito que devenguen réditos, ó estén sujetos á renovacion, no cumple con custodiarlos y devolverlos como se le entreguen, sino que le incumbe además el deber de cobrar los intereses, de renovarlos y de practicar las diligencias necesarias para que conserven su valor y efectos legales, como si expresamente se le hubiese dado este encargo (4).

517. Como en el depósito no se transfiere el dominio, los incrementos ó pérdidas de la cosa depositada corresponden al


* El depósito que contraído al principio de palabra, no se reduzca después á escritura, no puede á nuestro juicio tener el concepto de mercantil, aun cuando concurran en él los tres requisitos que hemos dicho son necesarios para que merezcan esta calificación, porque la ley exige además este en el modo de celebrarse y si no interviene habrá un depósito civil, pero no tendrá el depositario derecho á exigir la retribución designada por los aranceles ó el uso de la plaza cuando no la haya pactado.

(2) Art. 405.

(3) Art. 407.

" Véase el tit. II, cap. 3.°, núm. 254 donde quedan expuestas.

(4) Art. 410.
deponente, á no ser que consista en dinero en cuyo caso solo cuando se haya constituido, con expresión de las monedas que se entregan, para que se devuelvan las mismas, correrán por su cuenta los aumentos ó bajas que sufra el valor nominal de las que se hayan entregado (1).

Por esta misma causa no puede el depositario hacer uso del depósito; y si lo hace queda responsable á los daños y perjuicios que se originen al deponente, y tiene que entregarle las utilidades que perciba, ó que abonarle el rédito legal de su importe, si consiste en dinero, debiendo declararse fraudulentamente quiebra, si llegase á constituirse en este estado sin haberlo devuelto.

318. Pero puede muy bien concedérselle la facultad de usar al tiempo de constituirse, y si se le concede, ya se convierte en irregular, y está sujeto á reglas distintas.

Esta facultad le puede ser concedida de una manera expresa ó tácita. Expresa, manifestándolo así por medio de un pacto ó de una condicicion; y tácita, depositando dinero ó objetos consumibles que puedan confundirse con otros de la misma especie que tenga el depositario, sin hacer mas designación que de la cantidad que ha de devolver (*)

(1) Art. 409.

(*) Para los que consistan en dinero existe hoy entre nosotros la caja general de Depósitos con sus sucursales ó dependencias que lo son las tesorerías y depositarías de la Hacienda pública en las provincias, establecimiento de que nos parece conveniente hacer mérito, porque se ha creado principalmente para dar un empleo útil y proporcionar un rédito ó interés proporcionado a los capitales de los depósitos legales y necesarios; también se admiten en ella los que voluntariamente le confían las corporaciones provinciales y municipales, los cuerpos del ejército, toda clase de establecimientos y los particulares, y por consiguiente pueden los comerciantes poner allí sus fondos cuando les convenga.

Estos depósitos se constituyen bajo la garantía del Estado, se entregan y devuelven con las condiciones y formalidades que prescriben los reglamentos, y los capitales en que consisten devengan réditos por el tiempo de su duración, pero estos réditos varían según la naturaleza del depósito, las condiciones con que se haya celebrado, y la conve-
319. En el de cosas determinadas con facultad de usarlas la irregularidad consiste en que no se entrega la simple custodia, que es el objeto principal del contrato, y sobre todo, en que se constituye más bien en utilidad del depositario que

niencia de atraer caudales á la caja, por cuya razón han sufrido y sufrirán en adelante frecuentes alteraciones.

Por Real orden de 21 de febrero de 1865 devengan en la caja general

1 por 100... Las cantidades que se entregan en cuenta corriente.
2 por 100... Las que deben ser devueltas al contado.
3 por 100... Las que hayan de ser devueltas mediante aviso con 15 días de anticipación.
4 por 100... Las que se impongan á plazo fijo de 4 á 6 meses.
5 por 100... Las depósitos necesarios.
6 por 100... Las que se impongan á plazo fijo de más de 9 meses.

En las tesorerías de provincia como sucursales de dicha caja no pueden admitirse cantidades por cuenta corriente, ni á devolver al contado ni con aviso de 15 días ni á plazo fijo de 4 meses, reduciéndose las imposiciones á las clases y con el interés siguiente:

3 por 100... Los depósitos necesarios.
4 por 100... Los de plazo fijo de 4 á 6 meses.
5 por 100... Los de aviso de 60 días.
6 por 100... Los pertenecientes á propios.
5 por 100... Los de plazo fijo de 6 á 9 meses.
6 por 100... Los de aviso de 90 días.

Mas con posterioridad han sufrido de nuevo alteraciones esta designación devengando actualmente por Real orden de 14 de agosto de 1866.

6 por 100... Los depósitos con aviso de 90 días ó á plazo fijo desde 4 hasta 9 meses.
7 por 100... Los de plazo fijo de 9 meses en adelante sin llegar á un año.
8 por 100... Los de plazo fijo de un año.

Las cuentas corrientes y demás depósitos continúan devengando el interés señalado en la de 21 de febrero de 1865.
en la del deponente, equiparándose al comodato, cesa la razón, porque la ley mercantil autoriza al primero para cobrar una retribución por su trabajo, y debe regirse estrictamente por los pactos ó condiciones con que se haya constituido.

320. En el de cosas indeterminadas, la irregularidad ocasiona otras alteraciones más notables; porque como estas no pueden distinguirse de las demás de la misma especie, cualquiera otras pueden sustituir, y el depositario cumplirá con devolver la cantidad recibida, habiendo por lo mismo de correr por su cuenta los daños y detrimentos que le sobrevenzan (1).

(1) Arts. 131 y 407.

La doctrina que sentamos en este párrafo, con respecto al depósito irregular, parece á primera vista que contradice y destruye la que hemos expuesto en la anterior, tratando de la prohibición de usar que tiene el depositario, aun cuando sea dinero lo depositado, y la decisión del art. 408 que citamos en su comprobacion, pero no es así en realidad, porque el depósito de dinero y demás cosas fungibles, puede ser regular ó irregular, según el modo con que se constituya, y la obligación que contraiga el depositario. Será regular, cuando éste cumpliendo con los deberes que los arts. 164 y 165 imponen al comisionista, las reciba con distintas marcas, ó las ponga contramarques que las distingan, y cuando se le entreguen separadas de manera que no puedan confundirse con otras de la misma especie, á no ser por el uso que se haga de ellas, como por ejemplo, si se le entrega el dinero metido en un cofre ó bolsillo particular para que lo conserve y devuelva en el mismo estado; en cuyo caso, aunque se cuente y exprese la cantidad, para que se sepa en todo evento la que debe ser reclamada, el depositario no puede usarla; y si dispone de ella y la usa, será responsable de los riesgos y abonará el rédito legal de su importe, según hemos dicho y previene el art. 408. Mas cuando se le entregue el dinero, sin mas expresión que la de la cantidad entregada, y sin mas obligación que la de devolver esta misma cantidad, el depósito no puede ser regular, sino irregular; porque desde el momento en que lo recibe y lo mete en su caja, queda confundido con las demás monedas de la misma especie que hay en ella o entrena después, es imposible impedir su uso; y nada importa tampoco al deponente el destino que se le dé á las que entregó, con tal que se le devuelva aquella cantidad en las que sean usuales y corrientes y puedan prestarse el mismo servicio, porque este es el objeto que se propuso, y lo único que puede pedir. En este caso, el dominio de lo entregá-
La entrega de cosas fungibles hecha de este modo, más bien parece que debe constituir un préstamo que un depósito, y solo el nombre con que se la designe, será el que pueda distinguirlos. Sin embargo, es preciso tener en cuenta este nombre, porque no hay otro medio de conocer la voluntad de los contratantes, y no producen los mismos efectos; pues si fué depósito lo que quisieron constituir, el deponente tendrá derecho a pedir la devolución cuando le acomode, sin necesidad de requerir antes al depositario, como tendría que hacer si fuera préstamo sin plazo fijo el que hubieran celebrado.

La devolución del depósito voluntario debe hacerse, pues, cuando la reclame el deponente, en el lugar que hayan convenido, ó en el del contrato, si no se señaló ninguno otro. El depositario no puede retenerlo en su poder por vía de compensación, ni por otra causa; y si se niega a restituirllo, se lo apropiará o distráe, puede ser procesado criminalmente y castigado con las penas de arresto mayor, prisión correccional, y prisión menor, según la cantidad á que ascienda el valor de lo depositado (1).

521. El depósito necesario se divide en legal, judicial y miserable.

Llamamos legal, al que se hace en los locales destinados á este objeto, en las aduanas y puertos ú otros establecimientos,

do pasa al depositario, que es responsable de los riesgos que le sobrevengan hasta por caso fortuito, como previene expresamente el art. 131, tratando de los comisionistas. Esta doctrina está conforme con lo dispuesto en el art. 1144, con respecto á los acreedores de dominio, entre los que no se enumera al deponente por el dinero depositado, sino únicamente por los efectos dados en depósito.

(1) Arts. 449 y 452 del Código penal.

Las penas de estos artículos no son solo aplicables á los depositarios, sino también á los que en perjuicio de otros se apropien ó distraigan dinero, efectos ó cualquiera otra cosa mueble que hubiesen recibido en comisión ó administración, y varían según la cantidad á que ascienda su valor, consistiendo en arresto mayor si lo defraudado no excede de 20 duros; en prisión correccional si excede de 20 y no pasa de 500, y en prisión menor excediendo de 500.
de los géneros ó efectos que van de tránsito ó están sujetos al pago de algún impuesto, mientras esto no se haya realizado, y el que se tiene que hacer en los Bancos creados con esta autorización.

Judicial, el de las cosas litigiosas acordado por los tribunales de oficio ó á instancia de parte, y el de las recibidas en comisión, transportadas ó vendidas, cuando el comisionista, porteador ó vendedor lo haya solicitado.

Miserable, es el que se constituye cuando los efectos depósitos se hallan en tal riesgo, que no se piensa más que en salvarlos, como sucede en un naufragio ó en un incendio, en cuyo caso no hay tiempo ni para elegir las personas, ni para celebrar el contrato con las solemnidades prevenidas (*)..

522. Del legal hay varias clases, y en su constitución deben observarse el derecho internacional, las leyes fiscales de la Hacienda pública, relativas á los efectos en que consista y á las circunstancias en que se verifique, y los reglamentos aprobados para el régimen particular del establecimiento en que se hagan.

Pueden dividirse, en primer lugar, en depósito de dinero y otros valores, y en el de mercancías; y subdividirse este último en el de asilo, generales, ordinarios de puertos y aduanas, domésticos, ó ficticios y especiales.

523. El primero comprende las cantidades en metálico,

(*) Algunos autores consideran como una especie de depósito necesario la entrega que se hace á los corredores y agentes de cambio de los efectos públicos, en cuya venta exige la ley su intervención, y la que se hace á los porteadores, posaderos y fondistas de los géneros conducidos; pero nosotros no tenemos por exacta esta calificación, porque en estas entregas tiene más parte la voluntad que la necesidad; hay elección de personas entre las que reúnen las mismas cualidades, y pueden hacerse con cuantas precauciones se consideren oportunas. Además, que á los agentes, corredores y porteadores, mas bien corresponde el concepto de comisionistas, que el de depositarios. De todos ellos tratamos en otros lugares, y allí pueden verse los deberes que tienen que cumplir en el desempeño de sus funciones.
las barras y alhajas de oro y plata que se depositan en los Bancos ó cajas autorizadas para recibirlas, guardando sus estatutos (1).

Los fondos en metálico, los efectos de la Deuda pública y del Tesoro y los demás valores que se depositen por decisiones de la administración, por disposición de la Ley ó de los tribunales de Justicia, para asfianzar contratos que se refieren a servicios generales, provinciales ó municipales, para asegurar el ejercicio de cargos ó funciones públicas, ó para cumplir obligaciones legales de interés público ó privado, si no hay persona interesada que pida con derecho que se consignen en otro lugar, deben ponerse en la Caja general de Depósitos ó en sus sucursales ó dependencias (2).

524. El de asilo, consiste en un acto benéfico autorizado en todas las naciones cultivadas, que consienten se constituya en cualquier punto de la costa en que ocurra un naufragio. Tiene por objeto almacenar y custodiar los efectos salvados, y dura hasta que se transportan á otra parte, ó se entregan á quien correspondan.

525. Los generales existen solo en los puertos de Cádiz y Mahon; se admiten en ellos toda clase de mercancías, sean lícitas ó de contrabando, cualquiera que sea su procedencia y la persona que lo solicite, pagando por derecho de almacenaje una cantidad alzada por cada bulto, ó un tanto por ciento sobre el valor de los géneros, con tal que no pase de 1 por 100 al año, y pueden durar cuatro, prorrogables solo por dos meses para los de comercio lícito, y por otro año más, para los de contrabando, satisfaciendo en este último caso un 2 por 100

(1) Art. 411.
(2) Art. 2.° Real decreto de 29 de setiembre de 1852.

Según el art. 18 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Bolsa de 11 de marzo de 1854 (apéndice núm. 1 del tomo 2.°) cuando en los préstamos con garantía de efectos públicos se hayan de poner estos en depósito por voluntad de los interesados, también deberá ponerse en esta Caja general.
de su valor y cayendo en comiso, si pasa este último plazo sin haberlos exportado (1).

Mientras los efectos están depositados, pueden los dueños hacer los cambios de embase ó enfardamiento que tengan por conveniente, tomando nota de ellos en el registro, y también las ventas ó traspasos que no alteren la esencia de los depósitos, participándolo á las oficinas para que se hagan los asientos oportunos, y se entreguen los efectos á los dueños legítimos. Concluido el plazo y en cualquiera tiempo antes pueden sacarlos para el consumo, para otro depósito, para adeudar en otros puertos, ó para el extranjero, guardando en cada uno de estos casos las formalidades prevenidas en las instrucciones y reglamentos (2).

526. Los ordinarios de puerto se hallan establecidos en casi todos los habilitados para el comercio; se reciben en ellos solo los géneros de comercio lícito, y los tabacos elaborados procedentes de las posesiones españolas y conducidos en bandera nacional, pagando un 1 por 100 de almacénaje á su entrada: duran dos años prorrogables por el Gobierno, previa

(1) Art. 4.º del Real decreto de 5 de octubre de 1849, y Reglamento de 22 de marzo de 1850.

(2) Arts. 21, 22, 32, 33 y 34 del Reglamento de 22 de marzo de 1852.

Las disposiciones de nuestro derecho, relativas á los depósitos legales de mercancías, han sufrido muchas y muy notables alteraciones. Antes solo se verificaban en los puertos habilitados para este efecto, que lo eran Alicante, Cádiz, la Coruña y Santander: después se suprimieron los de Alicante y la Coruña, y se agregaron los de Barcelona, Habana, Puerto-Rico, Málaga y Santa Cruz de Tenerife. Mas habiéndose autorizado al Gobierno para reformar los aranceles de importación, con arreglo á las bases que acompañaban á la ley de 17 de julio de 1849, y disponiéndose en la 4.ª y 5.ª que se establecieran puntos de depósito donde pareciera conveniente, con la circunstancia de que hubiera algunos generales, donde se admitiesen toda clase de productos, géneros y efectos, se acordó por los arts. 3.º y 4.º del Real decreto de 5 de octubre del mismo año, que continuasen los depósitos de aduanas y los de géneros de lícito comercio en los puntos en que existían entonces, exceptuando los que por su poca importancia no produjeran lo necesario para cubrir los gastos, y que se establecieran los generales en los puertos de la Coruña,
instrucción de expediente, y el pago de 1 por 400 más para atender á los gastos del establecimiento (1).

327. Los de aduanas existen en los almacenes de estas mismas, en los que se permite á los comerciantes tener, sin ningún gravámen, las mercancías que hayan declarado por espacio de cuatro meses, en las capitales del interior, y en las plazas que no los hay de puerto, pues existiendo estos, solo pueden tenerlas en el de la aduana cuarenta días (2).

328. Los domésticos ó ficticios, sólo se diferencian de los anteriores en que se hacen en las casas ó almacenes de los mismos propietarios, consignatarios ó compradores; duran también cuatro meses para los frutos y géneros extranjeros y coloniales, y para toda clase de efectos del Reino, procedentes de manufacturas, y un año para los frutos y productos de la agricultura (3).

Cadiz y Mahon, suprimiéndose después el primero, y publicándose en 22 de marzo un Reglamento para el gobierno de los otros dos.

En este se crea una comisión directiva para su administracion, compuesta de comerciantes elegidos entre ellos mismos, y se la faculta para formar y presentar á la aprobacion del Gobierno las tarifas de los derechos de almacenaje que han de satisfacer los géneros, que no puede pasar de 1 por 400: se establecen las reglas que han de observarse para pedir el depósito, y sacar de él los efectos, y la plantilla, intervención y atribuciones de los empleados de la Hacienda pública, con otras disposiciones relativas al buen régimen de estos establecimientos.

(1) Real órden de 15 de julio de 1844.

(2) Artículo 122 de la Instrucción de aduanas, aprobada en 5 de marzo de 1882.

Por Real órden de 21 de julio de 1863 se ha concedido á la compañía de los Docks de Madrid la facultad de establecer por cinco años, á lo menos, en los almacenes que posee en las inmediaciones de la aduana central un depósito general para géneros de permitida entrada en el Reino, en el que paguen por almacenaje el derecho que se detalla en las tarifas aprobadas con este objeto; teniendo por parte la Hacienda pública los empleados que se consignan en la plantilla que se acompaña para que ejerzan la intervención que prescribe el capítulo 8.° de las ordenanzas de aduanas.

(3) Arts. 3 y 7 de la Instrucción de 16 de enero de 1835.
329. Los especiales son los que se crean en algunos puntos que se designan al establecerlos, para efectos determinados, como sucede con el carbon de piedra extranjero, con destino, ó para el consumo, á bordo de los buques de vapor.

Este combustible está declarado libre de derechos, y su depósito es algo parecido á los domésticos, porque se hace en los edificios proporcionados por los dueños ó consignatarios de los vapores, teniendo los empleados de la aduana una sobrellave (*).

350. En cuanto al judicial, añadiremos que aunque pende de las determinaciones de los tribunales, y está sujeto á las leyes del procedimiento en cuanto á su constitución, en todo lo demás, y especialmente en cuanto á las obligaciones que produce, se gobierna por las mismas reglas que el depósito voluntario.

351. Por lo que hace al miserable, solo tenemos que decir que no se ocupa de él el Código de Comercio, mas que cuando trata del naufragio, que dispone, que el capitán que recoja los efectos que procedan de él, continúe su rumbo conduciéndolos al puerto á que vaya destinada su nave, y los deposite con autoridad judicial por cuenta de los interesados legítimos, á no ser que siguiendo su mismo viaje, pueda dejarlos en aquel á que iban consignados, que entonces bien puede entrar y dejarlos en este, si no hay riesgo que lo impida y lo consienten los cargadores, sobrecargos y demás oficiales. Por consiguien-

(*) Por Real órden de 20 de julio de 1865 se ha prohibido para lo sucesivo la creación de estos depósitos particulares de carbon, asi en tierra como ambulantes, aunque lo soliciten los dueños ó consignatarios contratistas para el surtido de los buques del Estado, en puertos en que haya depósitos á cargo de las juntas de comercio, mandando que los de carbon existentes entonces se reduzcan á uno solo que esté á cargo de dichas juntas en los puertos en que haya depósitos generales ó especiales y que en los que no exista depósito para las juntas de comercio y si únicamente de los particulares se refundan todos en uno á cargo de la junta respectiva, con arreglo á las prescripciones de las ordenanzas, ó bien por subrogación de aquella á cargo de cualquiera que lo solicite, bajo reglas análogas que se someterán á la aprobación del Gobierno.
te, en todo lo demás se halla sujeto a las disposiciones del derecho civil (1).

Estas son las diferentes clases de depósitos conocidos antes entre nosotros, pero ahora tenemos además que hacer mérito de otros establecidos por compañías con la denominación de Dosck que aun cuando ni en su constitución, ni en los derechos ni obligaciones que producen se diferencian de los particulares voluntarios, han sido sin embargo, objeto de una ley especial que atendiendo el importante servicio que prestan al comercio, principalmente en las poblaciones en que se ejerce en mayor escala, ha querido fomentar facilitando la trasmisión de la propiedad de los efectos que se custodian en estos establecimientos con cuyo fin atribuye a los resguardos nominativos que expidau a la orden de la persona a quien se refieran los mismos efectos que a los conocimientos expedidos con esta cláusula para resguardo de los cargadores en el comercio marítimo, estableciendo:

1.° Que sean negociables y por consiguiente que puedan cederse por endoso puesto a continuación de los mismos, en virtud del que, estendiéndolo con las formalidades que se exige para los que ponen en las letras de cambio y demás documentos de esta clase se transfieren en el que los adquiere todos los derechos y acciones del endosante sobre los géneros depositados.

2.° Que los poseedores de estos resguardos nominativos tienen pleno dominio y propiedad sobre los efectos que aquel representa y especialmente determine, sin que le alcance responsabilidad alguna por las reclamaciones de créditos ó derechos que se entablen contra el deponente ó los endosantes anteriores, como no se interpongán dentro de los diez días siguientes á la constitución del depósito, único plazo que se concede á los acreedores para poderlas entablar conciliando asi su derecho con el de los terceros poseedores.

3.° Que fuera de este caso, esto es, del en que se hiciese

(1) Art. 968.
la reclamación dentro de los diez días no puede decretarse
embargo ó retención de estos resguardos ni de los efectos que
representan, sino en los de pérdida ó robo de estos documen-
tos en los que puede pedirse por el poseedor legítimo como
en las letras, libranzas y pagarés para impedir que otro sin
derecho se apodere y disponga de los efectos que represente.

Y 4.° Que cuando alguno de estos resguardos se encuen-
tre sin endosar en poder de un acreedor á quien se haya en-
tregado en garantía de un crédito que no se le satisfaga á su
vencimiento, pueda disponer que se enajene la parte de los
efectos que represente y sea necesario para cubrirlo, y que se
le pague con su importe con preferencia á todo otro acreedor,
deduciendo antes los gastos de transporte, almacenaje, con-
servación y demás que hubiesen devengados; celebrándose estas
ventas dentro del mismo depósito, en subasta pública y con
la intervención, no judicial, sino de un corredor autorizado
prévio el anuncio correspondiente (1).

(1) Ley de 9 de junio de 1862.
CAPITULO III.

DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES.

332. El contrato á que damos este nombre, tiene la particularidad de que prepara y proviene á la vez de otras operaciones que le han precedido. En su esencia es un verdadero arrendamiento de obras, en virtud del que uno se obliga á trasladar de un punto á otro por tierra, canales, lagos ó ríos navegables las personas ó las mercancías ajenas, por cierto precio, y á entregar estas últimas á la persona á quien vayan dirigidas.

Mas aunque son obras las que se alquilan, no es preciso, sin embargo, que las ejecute el que las contrata, porque como el trabajo que hay que emplear no es de aquellos que exigen conocimientos especiales, no hay inconveniente en que ceda á otros sus derechos y obligaciones; ó les encargue la conducción bajo la responsabilidad, cuando no haya pactado expresamente hacerla por sí mismo; ni en que se repita sucesivamente la cesión, quedando siempre obligado para con el cargador, el asentista ó comisionista que primero las contrate; y por consiguiente, subrogado en lugar del que las ejecute, así en cuanto á los deberes que tenga de cumplir, como en cuanto á los derechos que le convenga ejercitar (1).

333. El convenio puede ser celebrado, ó con una persona particular, ó con una empresa que tenga un establecimiento destinado á este objeto. En el primer caso, se hace el ajuste por la cantidad que estipulan y con los pactos que establecen. En el segundo, se suele efectuar por el precio fijo, y con las condiciones que de antemano se hallan designadas.

De este contrato ya hemos hecho mérito al tratar de los agentes auxiliares y de la comision, y hemos dicho, que al que hace la conduccion, se le llama porteador; al que la man-

(1) Arts. 228 y 232.
da hacer, cargador; y al que ha de recibir los efectos transportados, consignatario; falta ahora que examinemos el modo de celebrarlo, y las obligaciones y derechos que produce, hablando primero de las contratas particulares y después de las empresas públicas.

534. Se puede perfeccionar por cualquiera de los medios que hemos indicado al tratar de las obligaciones; pero lo más común y ordinario es que después de convenidos, se extienda un documento privado en el que se expresen todos sus pactos y condiciones.

Este documento se llama *carta de porte*: la expide y firma el cargador, y la recoge el portador que debe darle; si la pide, una copia o duplicado suscrita por el mismo, conservando la original para entregarla al consignatario, verificada la conducción (1).

535. Esta carta, si se expide, es el título legal del contrato, y ha de servir de base en la decisión de las cuestiones que puedan suscitar sobre su cumplimiento, y por lo mismo hay de contener los requisitos esenciales y accidentales con que haya sido celebrado.

Así, pues, deberán constar en ella precisamente como esenciales:

1.° Los nombres, apellidos y domicilios del portador, del cargador y del consignatario.
2.° La designación de las mercancías, expresando su calidad genérica, su peso y las marcas o signos exteriores de los bultos que las contengan.
3.° El lugar en que se ha de hacer la entrega.
4.° El precio del transporte.

Y 5.° El lugar, día, mes y año en que se expide.

Podrá contener como accidentales:

1.° La fecha en que se ha de principiar el viaje.
2.° El plazo en que se ha de verificarse la entrega.
3.° La indemnización que en caso de retardo ha de abo-

(1) Art. 207.
nar el porteador, si sobre este punto hacen algun convenio, y cualesquiera otros pactos ó condiciones que se estipulen (1).

356. La conviccion que segun la ley ofrece esta carta ó escritura es tan fuerte que contra su contenido no se pueden admitir ninguno de los demas medios de prueba que reconoce el derecho, y tienen lugar cuando no se ha expedido, ni mas excepciones que la de falsedad ó error involuntario en su redaccion (2).

357. En la celebracion de este convenio no intervienen mas que dos personas, y solo estas son las que se obligan

(1) Art. 204.
(2) Arts. 205 y 206.

La omision no se encuentra entre las excepciones que pueden ser admitidas; por consiguiente, que sea por olvido, que sea casual, quedara sin cumplimiento la cláusula ó condicion que no se inserte en la carta de porte, aunque se consigne en otra escritura del contrato, y por eso nosotros hemos añadido al tercer requisito accidental las palabras, «y cualesquiera otros pactos ó condiciones que se estipulen» porque pueden convenir en otras mas que los que enumera el art. 204, y sera preciso que consten en ella si han de ser cumplidas. Pero debemos al mismo tiempo confesar, que no alcanzamos el fundamento de esta determinacion. En primer lugar, porque la carta de porte no debe extenderse ni darse al porteador en el acto mismo de la celebracion del contrato, sino despues de estar perfecto este cuando se le haga la entrega de los efectos que han de ser conducidos; y en segundo, porque no es absolutamente necesaria para su validacion, como sucede con la escritura publica en el de sociedad; y aunque en la una y en la otra se exija la insercion de todas las condiciones con que se celebren, para que puedan ser conocidas de las terceras personas a quienes se trasmiten las obligaciones y derechos, ó a quienes puedan interesar, no nos parece esta razon bastante para que dejen de producir efecto, con respecto a aquellas de quienes sean conocidas, ó al menos para con las que las hayan estipulado, cuando se consignen en la contrata primitiva, ó en otro documento de los que la ley tiene por suficientes en defecto de carta de porte, y se justifique que no se insertaron en esta por omision; ni la exclusion de esta prueba (que en manera alguna puede suplirse con la excepcion de error involuntario en la redaccion), esta tampoco muy acorde con el principio de que los asuntos mercantiles deben decidirse la verdad sabida, y buena fe guardada. La entrega de los efectos, no habiendo carta de porte, podria justificarse hasta por medio de testigos.
desde el principio. No hay necesidad tampoco de ninguna otra para que se cumpla cuando el cargador sea a la vez el consignatario. Pero como el que manda hacer la conducción no es regularmente el que ha de recibir los efectos, y aunque lo sea, son diversas las obligaciones que tiene que cumplir, bajo cada uno de estos conceptos siempre viene a resultar que, si no son tres las personas que tienen deberes que cumplir, son al menos distintas las obligaciones del cargador, del porteador y del consignatario.

338. El cargador, atendida la naturaleza del contrato, ordinariamente no puede tener más que una, que es la de entregar los efectos que hayan de ser conducidos en el tiempo y en la forma convenida, ó con la anticipación necesaria para que pueda hacerse el viaje con oportunidad; y en su defecto la de indemnizar al porteador si deja de verificarlo sin causa fundada ('). Pero accidentalmente podrá tener alguna otra por

(*) El Código no enumera ninguna causa en virtud de la que el cargador pueda dejar de entregar oportunamente los efectos que han de ser conducidos, ni tampoco para que el porteador pueda dejar de hacer el transporte contratado; pero no cabe duda que las hay, y que, cuando intervienen, tiene lugar la rescisión del contrato sin ninguna indemnización, ó sufriendo cada uno respectivamente los gastos y perjuicios que ocasionen. Estas causas pueden ser, la pérdida de los efectos que se habían de transportar, la prohibición legal de comerciar con ellos, una declaración de guerra, la interceptación del camino por tropas enemigas, ú otras semejantes. Cuando intervienen, no solo impiden que se emprenda el viaje, sino que autorizan la suspensión después de principiado; debiendo el cargador seguir las instrucciones que se le hayan dado, obrar á falta de ellas, como le parezca más conveniente para conservar y utilizar el cargamento; por cuya razón tiene también derecho a cobrar una indemnización proporcionada, cuando con este motivo emprenda un viaje más largo; la mitad del porte, cuando los vuelva a traer al punto de su procedencia, ó los deje en algún otro que esté antes de la mitad del camino; y el todo, cuando los hubiese llevado más allá de la mitad. Así, al menos, lo establecen los arts. 769, 771, 772, 773 y 774, con respecto á los transportes marítimos, como veremos cuando tratemos de ellos, y pudiendo ocurrir también en los terrestres, opinamos que deben sujetarse igualmente á estas disposiciones, en cuanto les sean aplicables. Para el caso en que el fletador abandone voluntariamente el
razón de las circunstancias ó de las condiciones con que se celebre, como son:

1.° La de sufrir las pérdidas y averías que sobrevengan á los géneros por caso fortuito, fuerza mayor inevitable ó vicio propio de los mismos, cuando reúna los conceptos de cargador y propietario (1).

2.° La de sufrirlas también sea cualquiera la causa de que provengan, y aun cuando no tenga el concepto de propietario, sino solo el de cargador, si procedió con engaño al extender la carta de porte, atribuyéndoles otra calidad gnerica que la que tenían, ó metiendo entre ellos dinero ú otros efectos, en cuyos casos castiga la ley su mala f., privándole de acción para pedir lo que no conste en dicha carta, y declarando al conductor exento de toda responsabilidad por las averías ó pérdidas que hayan padecido (2).

3.° La de pagar el porte y los gastos de la conducción anticipados, cuando lo haya prometido.

4.° La de abonar el déficit que resulte, si por casualidad el valor de los efectos transportados no es suficiente para cubrir el porte y los gastos de la conducción, y la persona á quien van consignados se niega á recibir aquellos, y á abonar estos, como diremos mas adelante.

339. Al consignatorio, sea el mismo cargador ó otra persona diferente, incumbe:

1.° Pagar el porte y los gastos ocasionados en la conducción de los efectos dentro de las veinte y cuatro horas siguientes á su entrega (3).

fletamento y deje de cumplir el contrato, porque no le convenga, tam-
bién previene el art. 764, que pague la mitad del flete, quedando libre y quito el fletante de todas sus obligaciones; pero esta regulación de perjuicios, hecha para este caso especial, ya no podrá acaso aplicarse como regla general para todos los de igual clase en los transportes ter-
estres, como las demás disposiciones que llevamos citadas.

(1) Art. 208.
(2) arts. 210 y 214.
(3) Art. 230.
2.º Recoger del porteador la carta de porte original, devolviéndole el duplicado ó un recibo de los efectos entregados, cuando por estravío ó otra causa no pueda ser el mismo (1).

3.º Reclamar las faltas y averías, si las han sufrido, en el acto de recibirlos, cuando se noten las señales en la parte exterior de los bultos; y dentro de las veinte y cuatro horas siguientes á su entrega, ó antes de pagar el porte, cuando se adviertan al tiempo de abrirlos (2).

340. Las cuestiones que puedan suscitarse entre el consignatario y el porteador sobre el estado de las mercancías se decidirán por peritos que nombren ellos mismos ó la autori-

(1) Art. 207.
(2) Art. 219.

(*) Los términos en que está redactado el art. 219, nos parecen muy ambiguos, y dan lugar á dudar con fundamento, si cuando se conocen en la parte exterior de los bultos las señales del daño ó avería, puede haber derecho á la reclamación después de la entrega ó en el acto de recibirlos. Las dos opiniones pueden sostenerse, y algún autor hemos visto que establece como doctrina corriente la primera; pero nosotros nos inclinamos más á que no puede hacerse la reclamación pasadas las veinte y cuatro horas, por dos razones: 1.º porque la ley concede este plazo para las averías que no tienen señales exteriores, y no pueden conocerse hasta que estén abiertos los bultos, en cuya operación es preciso invertir algún tiempo, y no puede hacerse en el acto como cuando son manifiestas; y 2.º, porque nos parece más conforme al tenor literal de la segunda parte de este mismo artículo, en la que terminantemente se establece que pasadas las veinte y cuatro horas, ó pagados los portes, es inadmisible toda reclamación sobre el estado en que se haya hecho la entrega de los efectos conducidos. Pero debemos añadir, que estos plazos solo hacen referencia á las acciones mercantiles y no á las criminales, y por consiguiente, que aun después de transcurridos, podrán el cargador y el consignatario ejercitar las que les competan cuando los daños y averías provengan de algún fraude ó delito. ¿Y podrá exigir el porteador que el consignatario abra los bultos y los reconozca en el acto, cuando no quiera quedar responsable por las veinte y cuatro horas siguientes, como puede hacerlo el vendedor? Nos parece que si, y mas cuando el art. 219 no obliga á este último á justificar que los vicios, faltas y defectos son de tal naturaleza, que no han podido sobrevenir después de entregados, como el 370 obliga al comprador.
dad judicial; y sino se conforman con su parecer, se harán constar por escrito, se depositarán los géreros y usarán de su derecho en el juicio que corresponda (1). Si los recibe á con- tento por si ó por sus dependientes, pasan las veinte y cuatro horas, ó paga sin reclamar, pierde el derecho de repetir con- tra el porteador, y tendrá en su caso que abonar al propietari- rio el importe de los daños que hayan sufrido (2).

541. El cambio de la carta de porte por el duplicado de la misma, también supone cumplido el contrato por ambas par- tes, y ninguna reclamación es admisible después de haberse verificado (3).

542. La responsabilidad del porteador comienza desde el momento en que recibe las mercancías, y concluye cuando las entrega al consignatario. Sus obligaciones recaen sobre dos objetos distintos, que son: la conducción, y la entrega de los efectos conducidos (4).

La conducción debe hacerse en los términos que haya pactado, y con la diligencia y cuidado que exija la conservación de los géneros que conduce.

Son relativas á ella:

1.° Verificala, no mediando alguna justa causa que lo impida, en la fecha ó plazo convenido, y á falta de este, en el primer viaje que haga al punto donde hayan de entregarse los efectos (5).

(1) Art. 218.
(2) Art. 219.
(3) Art. 207, segunda parte.
(4) Art. 217.
(5) Art. 227.

(*) Así dice el artículo, partiendo sin duda del supuesto de que se pacte con un ordinario que haga viajes continuos, como oportunamen- te han advertido otros autores, opinando como nosotros, que cuando no concurra en el porteador esta circunstancia, debe entenderse que la intención de los contrayentes fue de que se verificara al instante, esto es sin más demora que la precisa para arreglar el viaje en el tiempo nece- sario para hacerlo.—Véase la nota anterior sobre las causas que au- torizan la suspensión del viaje (núm. 338).
2.° Hacerla por el camino que haya pactado, si hay más que uno; y si no se designó, por el que más le acomode, siempre que ofrezca seguridad y se dirija via recta o en igualdad de tiempo al donde deba entregarlos (1).

3.° Cumplir con lo que prescriban las leyes fiscales de la Hacienda, ó de salubridad y de seguridad pública en todo el curso del viaje, y á su entrada en el punto donde vayan destinados (2).

Si el porteador no cumple esta obligación, se hace responsable de sus resultados, a no ser que haya procedido con orden expresa del cargador ó del consignatario, en cuyo caso cesa su responsabilidad para con ellos; pero como esta omisión está considerada y castigada por la ley como un delito, la orden para cometerlo no le exime de la que contrae como autor o reo principal, y los dos tendrán que sufrir respectivamente las penas que les correspondan, el uno por haberla dado, y el otro por haberla obedecido (3).

345. La entrega deberá realizarse del modo que mejor llene el objeto del contrato, y por lo mismo las obligaciones del porteador, con respecto á ella, serán:

1.° Hacerla en el punto convenido luego que haya llegado, y á la persona á quien vayan consignados los efectos, ó á quien tenga orden suya para recibirlos, sin meterse á investigar el título por qué los recibe, ni entorpecerla por ningún concepto (4).

2.° Entregarlos en el mismo estado que los recibió; y si no se expresó este, sin faltas, daños ni menoscabos; porque en el mero hecho de no haber procurado que se hicieran constar entonces, se presume que no los tenían (5).

5.° Solicitar de la autoridad competente el depósito judi-

(1) Art. 225.
(2) Art. 220.
(3) Art. 220, segunda parte.
(4) Art. 221.
(5) Arts. 212 y 213.
cial y la venta de los que sean necesarios para el pago del porte y de los gastos suplidos, cuando no se encuentre el consignatario en el lugar de la entrega, ó si hallándose en él, se niega á recibirlos (1).

4.° Responder de las faltas y averías que hayan sufrido cuando no pruebe en forma legal que proceden de las tres causas que dejamos marcadas, hablando del cargador propietario; y aunque provengan de ellas, cuando el caso fortuito ó el vicio ocurran por su culpa ó negligencia, esto es, por haber dejado de tomar las precauciones oportunas ó por otras omisiones semejantes (2).

344. En virtud de esta responsabilidad, podrá tener que abonar ó el importe total de los géneros, ó su menor valor solamente.

Abonará el importe total del precio, que según la designación hecha en la carta de porte, debiera tener en el lugar en que habían de ser recibidos:

1.° Cuando no los entregue (3).

2.° Cuando por haber quedado inútiles para su venta y consumo en los objetos propios de su uso á consecuencia de la avería, no quiera el consignatario recibirlos, y los abandone ó deje por su cuenta; debiendo advertir, que cuando no la hayan sufrido todos, no puede rehusar el recibo de los objetos ó piezas integras que se hallen en buen estado, pero si

---

(1) Arts. 121, 122 y 250.

(2) Arts. 208 y 213. Recurso de casación de 20 de febrero de 1860. El art. 208 no fija el tiempo ni el lugar en que se ha de hacer la información necesaria para justificar el daño ocurrido por caso fortuito, por violencia ó vicio propio, como lo previene el 427, tratando de los aseguradores en los riesgos exceptuados del seguro; con respecto á los que establece, se ha de practicar en el pueblo mas inmediato al lugar ó sitio en que se verifique, dentro de las veinte y cuatro horas siguientes á la ocurrencia; pero nosotros juzgamos que esta disposición debe aplicarse con mas razón todavía á los porteadores que á los cargadores, como veremos en el título siguiente.

(3) Arts. 209 y 210.
el de las que por haberse deteriorado en parte, se le quieran entregar divididas (4).

Abonará su menor valor solamente cuando queden deteriorados, pero no inútiles para su venta (2).

La falta de cumplimiento de estas obligaciones le constituirá como a los demás en el deber de indemnizar los daños y perjuicios que originen.

Esta indemnización no tiene lugar cuando se estipula alguna otra por la tardanza en hacer el transporte en el plazo que se fijó; porque la estipulada se considera como una regulación de los perjuicios que se pueden ocasionar y no debe pedir aquella y estos, si expresamente no se pactó así cuando la detención no excede un duplo del plazo prefijado. Mas si excede, puede reclamar la una y los otros, porque ni es de suponer tanto retraso, ni pueden calcularse los perjuicios de una tardanza indefinida. Las faltas, daños y averías jamás se presumen comprendidas en esta indemnización (5).

345. Examinadas las obligaciones que nacen de este contrato, fácil es conocer los derechos que produce, porque en todos son por regla general correlativos a las primeras, y en este por consiguiente, las obligaciones del porteador se convierten respectivamente en derechos del cargador o del consignatario, y las de estos últimos en derechos del porteador.

Pero a cada uno de ellos corresponde además otro especial, de que no hemos hablado hasta ahora, á saber:

Al cargador, el de variar la consignación siempre que le acomode; mientras que los efectos no lleguen á su destino, con tal que devuelva el duplicado de la carta de porte si lo exigió, y que no sea necesario cambiar de ruta ni hacer un viaje más largo; pues si no la devuelve, ó la nueva consignación altera el viaje, no está el porteador obligado á seguirla, sin que medie entre ambos otro nuevo convenio sobre el por-

(1) Art. 215.
(2) Art. 246.
(3) Art. 226.
te, y cumplirá con entregarios en el punto designado en la primera, ó antes de llegar á él si el cargador lo exige así, y se lo abona por completo (1).

Al mismo cargador, ó al consignatario respectivamente, el de cobrar con preferencia á los demás acreedores el importe de las faltas y averías de que deba responder el porteador del valor de las bestias, carruajes, barcos, aparejos y demás instrumentos principales y accesorios del transporte, que se consideran como hipoteca de los efectos transportados, y están especialmente obligados al pago de esta deuda (2).

Y al porteador igual derecho de preferencia para cobrar el porte y los gastos suplidos del valor de los géneros transportados; sin que sirva de obstáculo la quiebra del cargador, ni la del consignatario, siempre que lo ejerçite precisamente en el término de tres días, contados desde la entrega, si los efectos pasan á otro poseedor, y en el de un mes cuando se conserven en poder del consignatario; pues trascerridos estos plazos, pierde la preferencia, y queda reducido á la clase de acreedor por acción personal (3).

546. Las empresas públicas están sujetas á las mismas reglas que los porteadores particulares, con las diferencias que hace indispensables el objeto y la dirección de estos establecimientos.

Las excepciones se refieren al modo de celebrar sus convenios, y á las obligaciones que contraen.

547. Sus ajustes ordinariamente se celebran por el precio fijo y con las condiciones publicadas de antemano, como ya hemos indicado, pudiendo ser objeto de un nuevo convenio solo algún accidente no previsto ó alguna nueva condición que se le quiere agregar.

Pero además hay que tener presente:

1.° Que no se consigna regularmente como los de los par-

(1) Arts. 223 y 224.
(2) Arts. 211 y 212.
(3) Arts. 228 y 229.
tículares en la carta de porte que expide y firma el cargador, 
sino por el contrario, en un recibo ó billete que dá la perso-
na encargada por la empresa para expenderlos, el que con tas 
las condiciones que deben ser guardadas respectivamente.

2.º Que los conductores de los carruajes, caballerías y bar-
cas, están considerados como factores de estos establecimien-
tos; por cuya razón se hallan autorizados para recibir durante 
el viaje los objetos que se les confien, y obligan directamente 
á la empresa, contra la que puede en su caso dirigir desde 
 luego sus reclamaciones el cargador ó consignatario.

548. Las obligaciones especiales que tienen que cumplir 
se reducen:

1.º A emprender sus viajes en los días y horas anunciad-
as, aunque no tengan el número de personas ó los efectos nece-
sarios para completar la carga.

2.º A llevar un libro ó registro con los requisitos y for mal-
lidades necesarias, en que anoten los nombres de las perso-
nas ó los efectos transportados.

3.º A responder de los efectos perdidos ó deteriorados en 
los términos prefijados en los billetes, ó en los que hayan con-
venido con los cargadores, si medió algún otro pacto expreso,
y en defec to de uno y otro, con arreglo á las bases generales 
que dejamos sentadas (1).

549. Con respecto al cargador y consignatario, solo hay 
que añadir, que en los transportes de efectos sin consignacion 
determinada, se considera autorizado para recibirlos conclui-
do el viaje, ó antes si le acomoda al portador del billete, 
mientras no se acredite lo contrario, y tiene á la vez derecho 
para reclamar las faltas y averías en los términos y plazos 
que dejamos expresados.

En los de personas, no pueden ser cedidos los billetes que 
tienen la cláusula de personales, sin la anuencia de la empre-
sa, y con las demás condiciones que en el mismo se hallen es-
tablecidas.

(1) Recurso de casación citado de 20 de febrero de 1860.
TÍTULO QUINTO.

De los contratos y documentos especiales de comercio.

350. Llamamos especiales del comercio los contratos de que vamos á tratar en este título; no porque con arreglo al derecho civil no pudieran ser válidos, sino porque como poco frecuentes en los negocios comunes, no los reconoce con los nombres que tienen en el comercio, ni establece regla alguna particular para ellos, como lo hace el derecho mercantil; estos contratos son: el de seguros y el de cambio (*).

CAPÍTULO PRIMERO.

DEL CONTRATO DE SEGUROS.

354. Asi como el deseo de no aventurar el resultado de una negociación bien calculada introdujo los afianzamientos, asi también el de no exponerse á sufrir pérdidas por accidents imprevistos ha introducido los seguros; institución utilísima á la que debe en gran parte el comercio su animación y su prosperidad.

Generalmente considerado, es un contrato aleatorio que tiene por objeto atenuar las consecuencias funestas de algun

(*) En el proyecto del Código civil ya se hace mérito de los seguros entre los contratos aleatorios.
riesgo. Abraza todas las cosas susceptibles de sufrirlos, y puede ser de varias clases según el fin con que se celebran y las cosas y riesgos sobre que recaen (*).

Por razón del fin pueden dividirse en mútuos ó recíprocos, y singulares ó particulares.

Los mútuos son unos convenios que se celebran entre personas que están expuestas á los mismos riesgos, en los que se comprometen á sufrir y distribuir entre todos, proporcionalmente, las pérdidas que cualquiera de ellos sufra por esta causa.

El singular es un contrato en que uno toma sobre sí el riesgo que puedan correr ciertos objetos de otro, obligándose á pagar el daño estimable que sufran mediante una retribución.

Los primeros son unas sociedades en las que ninguno de los socios se propone ganar, sino únicamente perder menos, en el caso de que se realicen los daños que se temen, exponiéndose todos á ser recíprocamente, según las circunstancias, aseguradores y asegurados; se celebran con pactos y condiciones especiales, que se consignan en la escritura ó en los reglamentos que se forman para su régimen, y con arreglo á ellos, y á los principios del derecho y de la equidad, se deciden las cuestiones que se suscitan sobre su cumplimiento; y necesitan para formarse una autorización del Gobierno igual á la de las sociedades anónimas comunes, previa la instrucción del expediente con las mismas formalidades que hemos dicho se ha de instruir el de estas (1) ** (núm 177 nota).

(*) Los seguros, según las cosas y los riesgos, pueden ser de tantas clases como los objetos y accidentes asegurados. Los hay contra incendios, contra el granizo, y contra los riesgos de las conducciones; y puede haberlos contra las lluvias, y contra todas las eventualidades que puedan causar algun daño.

(1) Art. 2.º de la Real orden de 25 de agosto de 1853 y 8 de setiembre de 1856.

** La falta de una ley especial para esta clase de sociedades ha hecho que su formación haya sufrido también, como la de las mercantiles anónimas diferentes alteraciones. No estando sujetas en un principio á ninguna formalidad, se acordó por Real orden de 28 de febrero de 1839 que
El segundo, ya esté contratado por una compañía ó por un particular envuelve en sí mismo una especulación, en la que el uno de los contratantes se propone siempre lucrar, si no sobreviene el accidente que asegura: podrá ser civil ó mercá

no se crearán sin la autorización de los Gobernadores civiles de las provincias en que se habían de establecer, pero habiendo hecho presente al Gobierno la Sociedad Económica Matritense que la ignorancia y la mala fé pudieran ocasionar abusos que desvirtuaren los beneficios que se debían esperar de esta clase de asociaciones tan necesarias para el desarrollo y la prosperidad de los pueblos, por la facilidad y la frecuencia que se formaban sin la autorización é inspección del Gobierno, se mandó por Real orden de 25 de agosto de 1853, que se formaran en lo sucesivo con arreglo á la Ley de 28 de enero y al Reglamento de 17 de febrero de 1848, que aunque publicados para las mercantiles anónimas, eran las más analógicas, y á las únicas á que se podía recurrir á falta de otra legislación especial. No obstante esta determinación, continuaron funcionando las que ya estaban creadas, y se crearon también de nuevo otras sin los requisitos necesarios, por lo que, puestos de manifiesto la immoralidad, mala fé y los escandalosos abusos cometidos por algunas de las creadas para facilitar el servicio militar en las quintas, de los que tuvieron que conocer los tribunales, se vió el Gobierno en la necesidad de acordar por Real orden de 23 de diciembre de 1857, que cesaran y liquidaran todas las de esta clase luego que concluyeran las operaciones y compromisos que tuviesen relativos al sorteo que se había verificado el 15 de noviembre anterior, se acordó nombrar delegados que inspeccionaran las ya creadas y las que se crearan en lo sucesivo, siempre que se estimase conveniente, á los que se les impuso el deber de asistir á todas las juntas y á los arqueros firmando sus actas, y el de dar cuenta al Gobierno mensualmente del estado de la sociedad aun cuando nada ofrezca de notable, comprobar los balances ordinarios y extraordinarios firmando los y remitiendo copia de ellos con una memoria en que se expone el estado de la compañía al remitir los generales de fin de año, indicando los medios que convenga adoptar cuando no sea satisfactorio; hacer las protestas oportunas siempre que adviertan alguna contravención de los estatutos y reglamentos, y dar cuenta al Gobierno inmediatamente, quedando sujetos á responder de estas infracciones sino cumplen con puntualidad esta obligación, con otras prevenciones del orden administrativo que pueden verse en la Real orden de 28 de diciembre de 1857. Apéndice núm. 7.

Con respecto á los libros de estas sociedades (véase el núm. 44 y su nota.

TOMO I.
cantil según que las cosas aseguradas sean ó no objetos del comercio, porque en nuestro derecho no tienen esta calificación todos los negocios que se hacen con ánimo de ganar, sino los que recaen sobre las mercancías, como ya hemos manifestado (núm. 5 y la nota del 24); y ni aun de todos los que pueden merecerla en esta materia, de seguros, se ocupa tampoco el Código, sino solo de los que tienen por objeto las conducciones, dividiéndolos, como estas en terrestres y marítimos.

En unos y otros se llama asegurador al que toma el riesgo sobre sí; al que queda libre de él, asegurado; a la retribución ó precio del seguro, prima; y en todos deben concurrir ciertos requisitos sin los que no producen efectos en el derecho; por lo que para proceder con orden trataremos primero de las cosas comunes á todos en general, y después de los terrestres, dejando los marítimos para cuando nos ocupemos de los contratos peculiares á esta clase de comercio.

SECCION PRIMERA.

De las cosas comunes á todos los seguros mercantiles.

352. De los requisitos comunes á los seguros mercantiles, unos corresponden á su esencia y otros al modo de celebrarlos.

A su esencia pertenecen, la cosa asegurada, el riesgo de que se la asegura, y la retribución ó premio que se dá por asegurarla; porque sin ellos no puede haber contrato de seguro, según se infiere de su definición. Pero tampoco lo habrá, ó no tendrá validación, aunque intervengan todos tres si á la vez no concurre el de que se contraiga á favor del propietario, ó del que tenga algún derecho sobre la cosa asegurada; porque la ley, con el fin de impedir que esta institución bienhechora se convierta en un juego de azar, que perjudique al comercio en vez de fomentarlo, no permite que se celebre á favor de otras personas más que de aquellas que tengan
verdadero interés en evitar el riesgo, y por lo mismo no son solo tres los requisitos comunes relativos á la esencia de los seguros, que debemos examinar, sino cuatro, á saber: cosa, riesgo, interés en evitarlo, y prima (1).

355. En cuanto á las cosas, todas las que tienen un valor estimable y pueden ser objeto de especulación lícita, lo son también del seguro, sin diferencia entre las corporales y las incorporales; pero como ha sido introducido mas bien con el fin de prevenir pérdidas, que con el de fomentar ganancias, se requiere además, para evitar abusos, que concurren en ellas las circunstancias de que existan real ó legalmente, y que estén expuestas al riesgo de que se aseguran (2).**

De esto se infiere:

1.° Que pueden ser aseguradas, no solo las cosas materiales, sino también los derechos.

2.° Que no pueden ser objeto del seguro los géneros de ilícito comercio, ni los que correspondan á súbditos de naciones enemigas (3).

3.° Que tampoco puede comprender las cosas eventuales e inciertas, y por consiguiente que no se pueden asegurar...

(1) Art. 421.

* No nos ocupamos de las personas que pueden se aseguradores; porque envolviendo el seguro en sí mismo una operación de comercio, debe tenerse presente cuanto hemos dicho al tratar de los que pueden ejercer esta profesión.—Véase la sección primera, cap. II, libro I, y la nota del núm. 24.

(2) Art. 848.

** La vida de las personas tiene un valor moral que no puede estimarse ni puede ser objeto del seguro. Pero tiene otro material para la familia que experimenta su pérdida, y este puede ser calculado, al menos en parte, ó pródigamente, y por consiguiente asegurado. En otras naciones está autorizado el seguro de la vida; pero entre nosotros, por razones acaso no muy fundadas, lo prohíbe la ley expresamente en los marítimos; y aunque guarda silencio con respecto á los terrestres, concurrendo en unos y otros los mismos motivos, no dudamos decir, que no puede ser asegurada en ninguno.

(3) Art. 338.
las ganancias que se calculen, ni los beneficios que se esperen (1).

Y 4.° Que para que pueda tener lugar, es preciso además que las existentes se hallen en peligro de perderse ó deteriorarse por el riesgo que corran; por cuya razón no pueden ser aseguradas las que no son susceptibles de correrlo, las que lo hayan ya corrido y se hayan salvado, y las que hayan pericido en él. A no ser que asegurador y asegurado estuvieran en la creencia de que lo iban á correr ó lo estaban corriendo en el acto de celebrarse el contrato; que entonces sería válido, porque llenaba el objeto de la ley la buena fé con que procedían. Si falta esta creencia, no pueden tener validacion; y por esta causa, presumiendo que no la hay, están declarados nulos, sin perjuicio de otras pruebas, todos los que celebren con fecha posterior al arribo, ó á la pérdida de las cosas aseguradas, cuando desde que llegan ó se pierden hasta la fecha del contrato han mediado tantas horas, como leguas españolas haya desde el sitio del suceso al lugar en que se celebró el seguro; á menos que este se haya contraído sobre buenas ó malas noticias, ó sea renunciando esta presuncion, y tomando sobre sí el perjudicado la obligacion de probar que el otro contratante las había recibido (2).

(1) Art. 885.

(2) Art. 893.

Mientras los contratantes ignoran si han sobrevenido ó no los riesgos que son objeto de sus convenciones, existen para ellos las causas que han motivado la introducción de los seguros; y por esta razón el Código los considera válidos, cuando no hay presunción fundada de que lo sabían al tiempo de celebrarlas, declarando por tal, sin perjuicio de otras pruebas, el transcurso de tantas horas como leguas españolas haya por el camino más corto, desde el punto de la ocurrencia ó de la llegada, hasta en el que se haya celebrado el contrato. Añadiendo, que esta presunción legal cesa cuando en la póliza se añade la cláusula de contratarse sobre buenas ó malas noticias, en cuyo caso no será suficiente para invalidarlo el transcurso de tantas horas como leguas, y será preciso probar por otro medio que procedieron de mala fé asegurador ó asegurado. Algunos autores muy respetables opinan que esta disposicion solo es aplicable á los
354. Por riesgo entendemos todos los accidentes que pueden ocurrir, como incendios, robos, tempestades, nieves, lluvias, naufragios, terremotos y otros semejantes. Son objeto de este contrato todos absolutamente, hasta los más extraordinarios e inopinados, con tal que no provengan de alguna infracción legal, como de la importación, exportación ó tráfico de géneros prohibidos, que estos nunca pueden asegurarse (\(^\text{*}\)).

Los que cada uno debe comprender, y el tiempo que debe durar, es lo que tenemos que advertir.

Por regla general se suponen siempre comprendidos todos, y de todos debe responder el asegurador cuando no ha pactado lo contrario, incluso los gastos hechos para evitarlos ó disminuir sus efectos, porque se han empleado en beneficio suyo. Pero bien puede celebrarse el seguro para alguno determinado, con exclusión de los demás, ó para todos en general, menos los que se exceptúen, en cuyos casos solo tendría que responder de los que hubiese estipulado (1).

Las causas de que procedan no excluyen su responsabilidad; porque lo asegurado es el riesgo, y siempre que este sobrevenga, tiene el deber de repararlo. Así, pues, aun cuando provenga de mala fe ó descuido de otros, de orden dictada por autoridad competente, ó de vicio propio de las mismas cosas, seguros marítimos, que es para los que la ha establecido la ley, atendiendo á la naturaleza particular de las operaciones de esta clase de comercio, y no á los terrestres, que serán nulos cuando recaigan sobre objetos que no corran riesgo al tiempo de celebrarse; pero hoy que el telégrafo comunica las noticias con tanta celeridad, no pueden tener aplicación estas disposiciones en ninguna clase de seguros, y será preciso dejar á la prudencia de los tribunales la apreciación de la buena ó mala fe en cada caso particular atendidas las circunstancias.

\(^{(*)}\) Esto debe entenderse de la importación, exportación y tráfico prohibido por nuestras leyes, y no del contrabando ejercido con otras naciones, importando ó exportando los géneros, frutos y efectos prohibidos por las suyas; porque esta prohibición no es obligatoria para nosotros, ó no nos pueden exigir nuestros tribunales la responsabilidad por haberlas infringido.

(1) Arts. 423 y 864.
tendrá que satisfacer el importe del daño ocasionado, quedándole á salvo su derecho para reclamar la indemnización contra el que por malicia ó por negligencia culposa dió madero al riesgo. Mas si este fuese el mismo asegurado, ó algun otro de quien deba responder, cesaría desde luego la responsabilidad del asegurador, porque sería injusto que se intentara contra él una reclamación, á que había dado lugar el reclamante mismo ó sus dependientes (1).

355. Esta responsabilidad dura tanto como los riesgos. Comienza con el viaje desde la carga ó desde la perfección del contrato, según la naturaleza de aquellos y los términos en que este se haya celebrado; pero también en cuanto á este extremo pueden estipularse algunas limitaciones que recaigan sobre el tiempo ó sobre el lugar.

Sobre el tiempo, marcando un espacio fijo y determinado, como por ejemplo, hasta el día que se designe, ó solo por cierto número de días ó meses.—Y sobre el lugar, pactando el seguro, no por todo el viaje, sino solo hasta que lleguen á cierto punto los efectos asegurados.

356. El interés en evitar los riesgos demuestra las personas, á cuyo favor puede estipularse el pago de las pérdidas ó daños que ocasionan. Ya hemos dicho que la ley exige esta circunstancia con el fin de evitar abusos; ahora falta que veamos en qué personas concurre. Estas son:

1.° El dueño ó propietario.

(1) Art. 861.
* En los seguros marítimos no se consideran comprendidos los riesgos ó daños, que consisten en pérdidas y deterioros procedentes de vicio propio de los efectos asegurados, si no se estipulan expresamente; pero en los terrestres la ley no hace esta excepción que contiene el marítimo, porque allí solo se trata de los que son propios ó especiales de la navegación; y por eso nosotros no dudamos en incluirlos, siempre que por vicio propio se entienda los deterioros ó pérdidas á que se halla sujeta una cosa por su propia naturaleza, aun cuando sea de la mejor calidad en su especie, porque es un riesgo apreciable como cualquiera otro, y no poco frecuente; y en el seguro contraído con cláusulas generales, todos deben considerarse comprendidos.—A. B., cap. 1.°, tit. VIII, parte 3.*
2.° El acreedor de este, cuando tema que quede insolvente y su crédito sin cobrar, con la pérdida de los efectos; advirtiendo que en este caso no podrá exceder el seguro del importe de la deuda, porque en lo que exceda ya no tiene interés en que se salven (1).

5.° El primer asegurador, que es el verdadero interesado en cuanto toma el riesgo sobre sí, y a quien no se le puede impedir, por lo mismo, que decline en otro su responsabilidad, cuando le pueda convenir, y lo mismo el segundo y los demás que la vayan contrayendo sucesivamente (2); entendiéndose que por estos nuevos seguros en nada se alteran las obligaciones del primero ó primeros, sino que cada uno producirá las suyas, y será cumplido con arreglo a sus condiciones.

4.° El que tenga comisión de alguno de estos tres para asegurar.

557. El seguro, contratado por otras personas en nombre propio, será nulo; pero como á cualquiera le es permitido

(1) Art. 421.

* La limitación de que este seguro se puede celebrar solo cuando el acreedor tema que el deudor quede insolvente con la pérdida de los efectos asegurados, excluye la posibilidad de celebrarlo cuando esté garantido su crédito con una prenda ó una hipoteca; pero ¿se podrá celebrar cuando la garantía consista en una fianza? y el fiador ¿podrá asegurar los efectos del deudor principal como puede hacerlo el acreedor cuando tema que su pérdida le acarree una insolvencia? Ni uno ni otro se hallan comprendidos en el texto del art. 421 que solo permite ser asegurador al dueño y al que tenga algún derecho en los efectos asegurados, pero lo están seguramente en su espíritu y en la razón en que se funda. El primero, porque la fianza no ofrece la misma seguridad que una prenda ó una hipoteca, puede resultar también insolvente el fiador cuando dirija contra él la reclamación después de declarada la insolvencia del deudor principal, y esponerse á perder la deuda, y no puede ponerse en duda el interés que tiene en evitar esta pérdida; y el segundo, porque habiendo de pagar á falta del primero, se halla tan interesado ó más que el mismo acreedor en precaver é impedir la insolvencia del deudor principal, por quien tiene que responder.

(2) Art. 852.
tuidar y promover los intereses ajenos en beneficio de su dueño, tendrán validacion todos los celebrados en nombre de este, aunque hayan sido contratados por extraños, siempre que el primero apruebe sus gestiones y ejercite por sí mismo las acciones que le competan; en cuyo caso el extraño que lo celebró tendrá contra él las que hemos dicho que competen al gestor de negocios, tratando de los cuasi-contratos (núm. 141).

558. El asegurado no puede volver a asegurar sus efectos, porque no pesa ya sobre él el riesgo que puedan sufrir; pero esta razón cesa cuando el asegurador se constituye en quiebra durante el riesgo, y cuando el seguro ha sido contratado por tiempo fijo ó hasta un lugar determinado, ó solo para algunos accidentes, y no hay inconveniente, por lo mismo, en que en estos casos los vuelva a asegurar por el que le queda que correr, si el quebrado ó los administradores de su quiebra no dan fianza. Tampoco la hay en que asegure tambien el pago de los daños cuando desconfie de la solvencia del asegurador, si los efectos se llegan á perder (1).

(1) Art. 886.

* Con respecto á la facultad de volver á asegurar los mismos efectos en caso de quiebra, no encontramos en el Código ninguna disposicion general, pero sí dos para casos especiales, que están en abierta contradiccion. La una en el art. 168, que la considera como una obligacion del comisionista, y le manda que la cumpla bajo su responsabilidad cuando no se le haya prevenido lo contrario: y la otra, el art. 886 que no la concede en los seguros maritimos, sino en su caso que el asegurador ó los administradores de la quiebra no den fianzas. Entre las dos nos parece mas conforme á los principios que rigen en esta materia, la segunda y su doctrina es la que insertamos en el texto: porque si con la fianza desaparece el temor de no cobrar el importe de los daños, al asegurador no le queda riesgo que correr, y no creemos que el comisionista incurra en responsabilidad, porque no los vuelve á asegurar mediando esta fianza; antes al contrario, desempeñará mejor su comision por medio de ella, que contratando un nuevo seguro y pagando una segunda prima, sino puede recobrar en el acto la primera. La quiebra constituye al quebrado en la imposibilidad de cumplir su compromiso, y por lo tanto autoriza la celebracion de un segundo seguro, porque el primero queda rescindido sin la fianza.
359. El precio ó prima es absolutamente necesaria, porque sin ella no habría una negociación mercantil. Es indiferente que se pacte en dinero, en géneros, en servicios, ó en cualquiera otra cosa que preste utilidad, y tampoco influye para la validación del contrato que se estipule á favor del asegurador ó de otro tercero. Regularmente consiste en un tanto por ciento del valor asegurado; puede pactarse también en una cantidad que se fije desde luego, ó en una indeterminada; y es susceptible de aumento por su naturaleza y por cláusula del contrato. Lo será por su naturaleza, cuando consista por ejemplo en un tanto por ciento al día ó al mes, en cuyo caso será mayor ó menor, según el número de días ó de meses transcurridos; y por cláusula del contrato, cuando convengan en que se aumente en caso de guerra ó otro semejante.

La devenga el asegurador, desde que principia á correr el riesgo, y desde entonces tiene obligación de pagarla por completo el que la promete, sobrevengan ó no los daños asegurados; porque estos pueden ocurrir en un instante y no tiene lugar el prorrateo ni la distinción de haber andado mas ó menos de la mitad del camino de que hemos hecho mérito en los transportes (4). Mas suele alguna vez no pagarse en el acto y expedirse un vale ó billete de prima; en vista del que se hace el pago en el plazo convenido, y entonces puede también el asegurador contratar el seguro de la prima como el de cualquiera otro derecho y enajenarlo cuando le convenga (').

360. Los requisitos comunes al modo de celebrarse los seguros se reducen á que se consignen en poliza ó en escritura pública, oficial ó privada, porque los contraídos solo de palabra son nulos, cualquiera que sea la cantidad sobre que versen. Esta póliza puede estar extinguida á la orden y endosarse: mas cuando sea privada entre los contratantes, deben

(4) Arts. 863 y 874.
(') Lo regular es que se pague, esto es, cuando se celebra el contrato, y de aquí le viene el nombre de prima, que equivale á primero, antes de todo.
extenderse y firmarse necesariamente dos ejemplares, uno para cada interesado; pues como este contrato es aleatorio, pudiera suceder si se extendiera uno solo, que lo ocultara el asegurador si había riesgos y lo tenia en su poder, ó el asegurado si no los había, y no se pudiera probar la existencia del seguro (1).*

SECCION SEGUNDA.

De los seguros de conducciones terrestres.

561. Estos seguros, como las conducciones sobre que recaen tienen lugar cuando se hacen por tierra a lomo ó en ruedas, y también cuando se verifican en barcos, por canales, lagos, ó ríos navegables. Son objeto suyo todos los riesgos á que estén expuestos los efectos del lícito comercio, transportados por estos medios y los instrumentos del transporte; pero no la vida de las personas, que es de un valor inestimable. Puede ser asegurador el mismo conductor ó cualquiera otro que quiera tomarlos sobre sí. Deben intervenir en ellos los cuatro requisitos relativos á su exencia, de que hemos hecho mérito. Le son aplicables todas las doctrinas que dejamos expuestas, y se han de extender por necesidad en su póliza respectiva. Ahora falta que examinemos las circunstancias que esta ha de contener, los derechos y obligaciones que producen, y las causas que los anulan y rescinden (2).

(1) Arts. 418, 812, 840 y 847.
(2) Arts. 417 y 885.
362. La póliza se exige para validación y para prueba del contrato; por consiguiente es preciso que contenga, no solo las circunstancias indispensables para que pueda ser válido, sino también cualesquiera otras que afecten, aclaren ó limiten las obligaciones y derechos que naturalmente deben producir si se han estipulado.

En este supuesto deberá contener como necesarias:

1.° Los nombres y apellidos de los que lo celebran.

2.° La designación de los efectos que se aseguren, expresando sucintamente sus calidades específicas, para que sepa el asegurador los riesgos á que están expuestos, el número de bultos y sus marcas si las tienen.

3.° La expresión de que se contrae á favor del dueño ó del que tenga algun derecho en ellos.

4.° El viaje por el que se aseguran.

5.° El precio ó prima del seguro.

6.° La fecha del contrato con expresión de la hora cuando el viaje esté ya principiado.

La falta de cualquiera de estos requisitos producirá nulidad.

Deberán constar en ella como aclaraciones ó modificaciones de las obligaciones y derechos de los que lo contraen:

1.° El valor en que se estimen los efectos, el que no podrá exceder del que tengan según los precios corrientes en el lugar donde se carguen (1).

(1) Art. 422.

Según el art. 422, para considerar y fijar el mayor valor de los efectos asegurados, no se ha de atender al que tengan en el lugar donde se carguen, sino en aquel á que fueren destinados; pero este artículo está en contradicción con lo que establece el 383, con respecto á los seguros marítimos, y á los principios adoptados por nuestra legislación en esta materia, en virtud de los que hemos dicho, tratando de las cosas que han de ser reales y ciertas, y no eventuales ni calculadas, como las ganancias ó beneficios que se esperen; porque estos no existen entonces, ni están expuestos á otros riesgos que el del mayor ó menor acierto en el cálculo. Además de esto, tenemos por imposible la aplicación del artículo citado en los términos en que se halla concebido, porque al tiempo de celebrarse
2.° La porción de este valor que se asegure cuando no se haya contratado por el todo.

5.° La expresión de los riesgos que deba comprender cuando no estén todos asegurados.

4.° El plazo durante el que han de correr por cuenta del asegurador cuando no comprenda todo el viaje.

5.° El nombre del conductor y el camino que deba seguir cuando se haya designado.

6.° El tiempo, lugar y forma en que se haya de pagar el importe de los daños, y también la prima, si media algún pacto sobre estos extremos.

7.° Las demás condiciones en que hayan convenido (1).

Todas estas circunstancias tienen que insertarse para que sean cumplidas, y debe por lo mismo cuidar de que se hagan constar aquel á cuyo favor se estipulen. Pero su omisión no invalidaría el contrato; al contrario, no haciéndose mérito de ninguna, se presumiría contraído por todo el valor que tuvieron, graduándolo por las facturas de consignación ó á juicio de peritos, y añadiendo los gastos de la carga; para todos los riesgos, y por todo el viaje, cualquiera que fuera el conductor y el camino que emprendiera; y se podría reclamar su importe en caso de pérdida, desde el momento en que se acreditara esta en legal forma (2).

el contrato no se puede saber el precio corriente de las mercancías de la misma especie en aquel momento, en el punto á donde van á ser conducidas, y mucho menos el que podrán tener cuando lleguen las aseguradas. Creemos que se ha podido padecer alguna equivocación al tiempo de redactarlo, y se ha puesto el punto del destino en vez del de la carga.

(1) Art. 420.
(2) Arts. 425 y 839.

* El Código de Comercio nada dispone para el caso en que se hubiere pagado el precio del seguro, por haber sido robados ó perdidos los efectos asegurados, y se enconstrasen ó recobrasen después. En el derecho civil se halla previsto, tratando del que tiene la cosa emprestada, y se dispone que si es el dueño el que la encuentra, tenga derecho á elegir entre devolver la cosa ó el precio recibido; y si es algun otro, solo el que la perdió y pagó su importe se la puede reclamar. Mas en los seguros,
563. Las obligaciones y derechos de las personas que lo celebran son pocos en número y fáciles de conocer, atendido el fin del contrato y los principios que dejamos sentados. Con arreglo a ellos, el asegurador bajo este concepto no tiene ninguna obligación que cumplir sino sobrevienen daños. Si sobrevienen, tendrá la de pagar el importe de los que ocasionen los riesgos no exceptuados y las diligencias practicadas para evitarlos ó disminuirlos, con la diferencia que hemos hecho al tratar de la responsabilidad de los conductores, á saber: que deben pagar íntegro el valor que se les haya considerado en el seguro, cuando se pierdan y cuando se inutilicen absolutamente, y el propietario los abandone; y solo lo que valgan menos cuando nada mas se deterioren (1).

564. Si reúne á la vez el concepto del conductor y asegurador, será también de su cuenta justificar la ocurrencia de los riesgos exceptuados, ante la autoridad competente del pueblo más inmediato, dentro de las 24 horas siguientes; pero esta obligación no pesa sobre él como asegurador, sino como conductor, como hemos dicho hablando de los transportes (2).

parece que una vez cobrado el precio, deben tenerse por abandonadas, y quedan por cuenta del asegurador. Ley 8.ª, tit. II, Partida 5.ª

(1) Art. 215.
* El Código no habla del abandono en los seguros terresre, sino en los marítimos, y para casos determinados; pero nosotros no hemos dudado en decir que tiene lugar en unos y otros, no solo por la analogía que hay entre ellos, sino porque también lo encontramos autorizado en las conducciones terrestres; y si el consignatario, en algunas ocasiones, puede dejar al conductor responsable de los daños sufridos, los géneros deteriorados, y reclamar su total importe, como un medio de cortar disputas, y fijar de una manera mas exacta el importe del daño, con mas razón parece que podrá hacerlo el asegurado con respecto al asegurador, cuando se halle en iguales circunstancias.

(2) Arts. 424 y 208.
** La obligación de justificar los daños que sobrevengan á las cosas conducidas incumbe principalmente al conductor, según hemos dicho en el título antecedente; si la cumple y los acredita, justificados estarán para el asegurador y asegurado en lo que respectivamente les pueda interesar; y si no la cumple, él será el que deba responder de su importe al asegu-
365. Al asegurado deben competir:
1.° Pagar la prima.
2.° Justificar el riesgo y el daño ocasionado cuando reclame su importe.
3.° Comunicar al asegurador las noticias que reciba sobre los daños o pérdidas que ocurran en las cosas aseguradas, tomar y seguir sus instrucciones, practicando en el entretanto cuantas diligencias sean conducentes para disminuirlas (1).
4.° Facilitar los medios que necesite para reclamar los perjuicios sufridos contra las personas culpables caso de haberlas.

366. Los derechos del asegurador, además de los que se deducen de las obligaciones del asegurado, son:
1.° El de enajenar el que le asiste para cobrar la prima mientras no se haya pagado.
2.° El de subrogarse en lugar suyo para reclamar contra los conductores y demás personas responsables la indemnización que corresponda a los daños que hayan sufrido los efectos asegurados (2).

367. Al asegurado no compete ninguno que no sea correlativo a las obligaciones del asegurador y se deduzca de ellas mismas; pues como no puede subsistir el seguro sin el objeto sobre que recae, ni aun le es permitido ceder ni conservar el derecho de reclamar los daños con separación de los efectos asegurados, ni endosar la póliza extendida a su orden, mas que a favor del que los adquiera, porque es un accesorio que se supone siempre enajenado con el principal, como hemos dicho tratando de las ventas (núm. 277).

(1) Art. 377.
(2) Art. 425.
568. Las causas de nulidad y de rescisión se deducen inmediatamente de las doctrinas que dejamos sentadas.
Será nulo el seguro que recaiga sobre cosas que esté prohibido asegurar; el que se contraiga á favor de quien no sea dueño ó tenga algun derecho en la cosa asegurada; el que no se haya consignado en escritura pública, oficial ó privada, con los requisitos necesarios, y el que haya sido celebrado con dolo (1).
569. Tampoco podrá llevarse á efecto aunque sea válido, y tendrá que rescindirse, cuando alguno de los contratantes se constituya en quiebra, y no se afaicne el cumplimiento de la obligación en los términos que dejamos manifestado; cuando no se haga el viaje; cuando tarde mas de un año en emprenderse; y cuando no se carguen los mismos efectos ó se haga el transporte por el mismo conductor y por el camino que se hubiese estipulado.
En estos casos se rescinde el contrato por completo, y sólo en parte ó en cuanto el exceso, cuando se haya dado á los efectos por equivocación mas valor que el que realmente tenían: y cuando no se transportan todos los contratados. También se rescindirá en parte el segundo seguro cuando se haya celebrado por mas valor ó por otros riesgos mas, que los que quedaron por asegurar en el primero (2).
570. La rescision lleva consigo la obligacion de abonar un medio por 100 del valor asegurado excepto el caso de quiebra; y la nulidad cuando ha habido mala fe, por parte de alguno, la de abonar daños y perjuicios; pero hay causas que producen otros efectos diversos, como veremos en los seguros maritimos, donde la ley hace mérito de ellos, y como más frecuentes los trata con mas extension, dictando varias disposiciones que son tambien aplicables á los terrestres, además de las que dejamos ya expresadas.

(1) Arts. 885, 887, 888 y 889.
(2) Arts. 886, 889, 890, 857, 869 y 891.
CAPITULO II.

DEL CONTRATO DE CAMBIO Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE EXPIDEN EN SU VIRTUD.

SECCION PRIMERA.

Del contrato de cambio.

571. El contrato de cambio, generalmente considerado, equivale a una permuta de monedas o de cantidades; y se divide en diminuto, manual o real, y en local, mercantil o trayectico.

El primero consiste en la entrega de una mano a otra, de monedas por monedas, pero de distinta especie.

El segundo en la de dos cantidades, de las que la una se ha de recibir en lugar distinto de aquel en que ha sido entregada la otra. Suele suceder á veces que hay alguna diferencia entre la cantidad que se dá y la que se recibe, en razón del beneficio que reporta alguno de los contratantes, y también á esta diferencia se la llama cambio, y aun es la significación específica de esta palabra en el comercio.

El cambio, en el primer sentido, es una simple permuta sujeta al derecho común. En el segundo, envuelve en sí una negociación por la que alguno de los contratantes, ó tal vez ambos, evitan el tener que trasladar el dinero del punto en que lo dan, á aquel en que lo reciben: en el tercero representa el precio de esta conducción, ó sean los gastos que ocasionaría si se hiciera, y el mayor ó menor interés que pueden tener en trasladarlo, y por lo mismo es preciso considerarlo como una circunstancia que puede intervenir en la operación en que consiste el segundo (*).

(*) Con el dinero, como con cualquiera mercancía, ocurre con frecuencia que se encuentra con más facilidad en unos puntos que en otros; y cuando sucede esto, es natural que haya necesidad de pagar un inte-
572. A esta operación se la llama giro, por el modo de
ejecutarla, y también contrato de cambio; y de este contrato
y de su cumplimiento es de lo que nos vamos a ocupar definiendo:
un convenio por el que uno se obliga a hacer pagar una
cierta cantidad, que se le da a prometer en el acto, en lugar
distinto de aquel en que la recibe, a la misma persona que la
entrega ó promete, ó a cualquiera otra que haya adquirido el
derecho de cobrarla.

Nos haremos cargo de su división y requisitos; de las obligaciones que produce, y principalmente del modo de darle
cumplimiento.

573. Se divide en nacional y extranjero. Se llama nacio-
nal, cuando la población sobre que se gira, esto es, en la que
se ha de hacer efectivo el pago, está dentro del Reino; y ex-
tranjero cuando se halla fuera de él (*)

rás en la plaza que tiene el curso del cambio favorable. Nos valdremos
de un ejemplo, y así acaso nos explicaremos con más facilidad. Cuando
sean muchos los comerciantes de Cádiz que tengan necesidad de trasa-
dar dinero a Madrid, y pocos los de Madrid que tengan que remitirlo a
Cádiz, es claro que los primeros pagarán mayor interés por la traslación
de caudales, si quieren aprovecharse del giro de letras. Cuando los cré-
ditos activos y pasivos estén equilibrados, es decir, cuando en igual pro-
porción tienen los comerciantes de Cádiz y de Madrid interés en la
traslación, el cambio está a la par, lo que indica que ni en una ni en
otra plaza hay diferencia en la necesidad de trasladarlos.

(*) También se divide el cambio en directo ó indirecto ó circulatorio.
Se llama directo el que se hace comúnmente de un punto á otro; y cir-
culatorio cuando un comerciante se ve en la necesidad de hacer sucesi-
vamente dos ó más contratos, para poner su dinero en el punto donde
lo necesita, como por ejemplo, si no encontrando quien lo libre direc-
tamente sobre Cádiz, lo libra primero sobre Barcelona, y después de
Barcelona á Cádiz; pero esta división explicará, si se quiere, la dirección
de los negocios de un comerciante; mas no influye para nada en el de-
recho. La de nacional y extranjero es muy diferente, porque el último es
muy complicado y difícil en atención á que las monedas son diferentes
en todos los países, y no se puede hacer el pago en la especie que se en-
trega, que en el extranjero se recibe sólo como pasta; y sobre la diferen-
cia que puede haber en el precio del cambio entre las dos plazas, debe
Ha de contener por necesidad dos requisitos, que son:

1.° Que se efectúe el pago en distinto lugar de aquel en que se recibe (†).

2.° Que se haga precisamente en dinero, aunque sean efectos los que se hayan entregado ó prometido.

 Produce á favor del estipulante el derecho de cobrar la cantidad convenida en el lugar designado, con la obligación de entregar el valor que ofrezca, si no lo verifica en el acto: y contra el promitente la de pagarla por sí, ó por medio de algún mandatario.

574. Se puede cumplir de dos modos: ó presentándose ambos en el punto convenido por sí mismos ó por medio de las personas que designen, el uno á entregar, y el otro á recibir la cantidad estipulada; ó expidiendo para su ejecución un documento en que se dé á otro la comisión de hacer el pago en su virtud, á aquel á cuyo favor se expide, ó á quien éste haya trasmitido su derecho.

tener en cuenta el comerciante la diferencia de las monedas, y saberla apreciar para no ser perjudicado; á cuyo fin se ha fijado por tipo el peso fuerte de 20 rs. sobre la cantidad variable de tantos francos y céntimos sobre Francia y Bélgica, tantos bayoces sobre los Estados Pontificios, tantas libras nuevas sobre los Estados Sardos, tantos schelines-banco sobre Amburgo, tantos florines y céntimos sobre Holanda, tantos granos sobre Nápoles, y tantos reis sobre Portugal, tantos copeches sobre Rusia, y tantos peniques sobre Inglaterra.—Véanse los Reales decretos de 18 de febrero y 10 de junio de 1847.

(†) Este requisito esencial del contrato de cambio puede eludirse por medio de un giro simulado, esto es, conviniendo en que se expida la letra para ser pagada en otro lugar distinto; pero á cargo de una persona que se sabe que no la ha de aceptar; en cuyo caso, con protesto ó sin él, tendrá que ser pagada por el que la libró en el mismo lugar en que fue expedida; pero este convenio no envuelve en sí un contrato de cambio, sino un préstamo desfigurado bajo este nombre, porque no se ha hecho más que anticipar una cantidad para cobrarla pasado algún tiempo en el mismo lugar del contrato y de la misma persona que la recibió. Se llama cambio seco, y lo prohíbe como usurario la ley 4, título 3, t.b. 3 de la Nov. Recop., declarando que lo es, cuando el que toma dinero á cambio, no tiene dinero ó crédito, ó corresponsal suyo propio en las plazas ó lugares fuera de estos reinos para donde lo libra.
En el primer caso, quedará el contrato consumado y extinguidas todas las obligaciones tan luego como los dos hayan cobrado respectivamente sus cantidades; y si alguno falta por su parte, incurrirá en la responsabilidad de indemnizar daños y perjuicios, con arreglo á las leyes civiles, porque de este modo de cumplirlo no se ocupa el derecho mercantil. Si se adopta el segundo, el que lo promete no puede después dejar de expedir el documento ofrecido, á no ser que sobrevenga descrédito en el giro del estipulante sin haberle entregado la cantidad que represente; pero su expedicion no cumple el contrato, sino que llena solo una condicion, pues la obligacion principal no se extingue hasta tanto que realice el pago la persona comisionada.

575. Este es el modo comun y ordinario de cumplir este contrato, el que ofrece mas ventajas, y al que debe el comercio en gran parte su fomento; porque una vez expedido este documento de credito con las formalidades necesarias, equivale á un capital ambulante que pasa de mano en mano con la mayor rapidez, facilita y multiplica extraordinariamente las negociaciones. Mas para que surtan tan ventajosos efectos, es preciso que haya confianza en que ha de ser pagado, porque sin esto nadie lo querría recibir; y como no es facil tenerla cuando no es conocida la persona que lo expide, ni la que lo debe pagar, y muchas veces sucederia que los segundos y terceros á quienes se fuera transmitiendo por cesion, no las conocieran, se ha establecido que todos los que lo cedan, vayan quedando sucesivamente obligados á responder de su pago; circunstancia muy conforme y aun necesaria, atendida la naturaleza de la negociacion; porque cada uno que lo cede, celebra un nuevo contrato de cambio con el que lo recibe, prometiéndole que será pagado, y justo es que quede responsable al cumplimiento de su promesa.

576. Estas escrituras son las famosas letras de cambio, de que tanto uso hace el comercio, y de las que saca tanta utilidad, porque son á la vez documentos de credito, por medio de los que cada comerciante especula con el suyo. A esta
clase pertenecen también las libranzas y los vales y pagarés a la órden, que producen los mismos efectos. Cuando se expiden, son la póliza del contrato, y regularmente no se extiende otra; pero no hay tampoco inconveniente en que se consigne en escrito separado, y aun debe hacerse así, cuando se estipulen pactos ó condiciones obligatorias solo para los contratantes, y que por lo mismo no se inserten en el que se pone en circulación.

Si lo paga á su vencimiento la persona designada, todas las responsabilidades desaparecen; pero si no, todas pueden hacerse efectivas con la misma rapidez con que han sido contraídas por medios análogos á la naturaleza de las convenciones.

377. Documentos de tanta trascendencia fácil es de conocer que habrán de estar extendidos con más formalidades que los ordinarios, y que deberán contener requisitos esenciales para su validación. La ley los prescribe, en efecto, distinguiendo la letra de cambio perfecta de las libranzas, y del vale ó pagaré, y reconociendo además las cartas-órdenes de crédito como documentos de cambios condicionales (*).

(*) La expedición, negociación y aceptación de estos documentos, por sí sola no está, sin embargo, considerada por el Código como un acto mercantil, porque son muy útiles y frecuentes en los negocios comunes de la vida, y es preciso atender, para calificarlos, á la operación de que proceden, y á la cualidad de las personas que la ejecutan. Si provienen de alguna operación de comercio, serán considerados como mercantiles, y estarán sujetos para todos sus efectos á la ley y al fuero del comercio, sea ó no comerciante el que los haya librado ó aceptado; y si la expedición ó la aceptación no traen este origen, no se considera acto mercantil para el que no lo sea. Mas las letras de cambio pierden entonces esta consideración, y se convierten en simples pagarés, quedando, como estos, sujetos, en cuanto á sus resultados, á las leyes comunes, y al fuero ordinario para los no comerciantes, y al Código y Tribunales de Comercio para los que lo sean. El endoso, sin embargo, produce ó sirve siempre de garantía y fianza del valor de la letra endosada, salva la reserva de su fuero respectivo a los que no sean comerciantes.—Art. 454. Vease lo que queda dicho tratando de las compras-ventas en la nota del núm. 272, la Decisión de competencia de 16 de marzo de 1857 y los Recursos de casación de 29 de enero de 1859 y 22 de mayo de 1865.
En los capítulos siguientes nos ocuparemos de todos ellos, sentando aquí antes como principio que aunque se expiden en virtud del contrato de cambio, son cosas distintas, y no deben confundirse con el contrato mismo.

SECCION SEGUNDA.

De las letras de cambio.

378. La letra de cambio es un documento por cuyo medio el que ha celebrado un contrato de este nombre encarga a otro que pague una cantidad determinada en lugar distinto de aquel en que se le ha entregado.

Al que la expide ó suscribe se le llama librador; al que se dá el encargo de pagarla, pagador ó librado; y al que la recibe, tomador, tenedor ó portador; si cede á otro su derecho, endosante, y endoso á esta cesión. Estos son los nombres más comunes, y los que emplearemos en lo sucesivo para designarlos.

379. Se dividen en perfectas e imperfectas: perfectas son aquellas que reúnen todos los requisitos que la ley exige, para que produzcan los efectos que se les atribuyen: imperfectas, las que no los reúnen todos, pero sí algunos capaces de producir obligación.

Las primeras pueden enajenarse por endoso, y producen obligaciones que deben ser cumplidas por medios especiales; si no se cumplen, dan lugar á reclamaciones del mismo género. Las segundas dejan de ser letras de cambio, y están sujetas á otras disposiciones: por lo tanto, examinaremos en este capítulo las formalidades y requisitos con que deben expedirse las perfectas, el derecho de cederlas y negociarlas, las obligaciones que producen, y el modo de extinguirlas, dejando para el siguiente las reclamaciones á que da lugar la falta de su cumplimiento y los medios de ejercitarlas; y para otro distinto las letras imperfectas y los demás documentos que se expiden en virtud del contrato de cambio.
SECCION TERCERA.

De la forma y requisitos de las letras de cambio.

380. La letra de cambio es una escritura privada que autoriza solo la firma del que la expide. La intervencioén del escribano público y la del corredor, aun cuando asistieran al acto de redactarla, no la harían variar de carácter, ni surtirían otro efecto que el de una mera legalización, ó lo que es lo mismo; el de dar fe ó certificar de la autenticidad de la firma del librador (1).

381. Ha de contener los requisitos que la ley exige y las condiciones ó pactos voluntarios que quieran agregar los que en ella intervienen y llevar el sello correspondiente á la cantidad que se gire (**).

(1) Art. 427.

El art. 427 habla solo del notario público; pero nosotros hemos añadido al corredor, porque es mas natural que intervenga, que no el notario ó escribano; y no hallamos inconveniente en que asegure en la misma letra la autenticidad de la firma, cuando precisamente es el que tiene que responder de ella, según hemos dicho, tratando de sus obligaciones (núm. 90).

(**) Los documentos de giro, bajo cuya denominacion se comprenden para este efecto, no solo las letras de cambio, sino también las libranzas á la órden, los pagarés endosables, las cartas órdenes de crédito por cantidad fija, y las obligaciones que emitan las sociedades de crédito, comercio, industria, minas y demás análogas todos deben llevar un sello proporcionado á la cantidad girada. Art. 43 del Real decreto de 12 de setiembre de 1861.

Estos sellos se venden sueltos, se fijan en la faz ó cara de la letra en que se halla la firma del librador que debe inutilizar el que ponga repitiendo en él la fecha con su rubrica ó con su timbre particular si lo usa, y lo necesitan tanto la letra primitiva como las segundas y demás que se expidan y aun las copias de la misma, de que se hablará más adelante, si bien el librador podrá exigir de quien se las reclame el precio del que ponga en las que expida después de la primera. Artículos 1.º y 52 del Real decreto citado y 60 y 61 de la instrucción de 28 de octubre del mismo año.
Los requisitos que la ley previene son:
1.° El lugar, día, mes y año en que se libra.
2.° La cantidad que se ha de pagar.
3.° El nombre, apellido y domicilio del pagador, y tam-

De esta obligación sin embargo, están exceptuados los giros que se hacen a nombre y para el servicio del Estado, y los que en beneficio del público verifiquen las dependencias del Tesoro, y también los documentos de esta clase que se expidan en pueblos en que no exista el impuesto del papel sellado; pero estos últimos, lo mismo que los expedidos en el extranjero, necesitan el sello si se endosan ó han de ser aceptados ó pagados en el Reino en poblaciones en que esté existente, en cuyo caso deberá fijarlo ó inutilizarlo el primer endosante, el aceptante ó el pagador respectivamente. Arts. 50 y 53 del Real decreto.

Por la falta del sello correspondiente incurre el librador ó la persona que lo suscriba en la pena del reintegro del precio del sello y del décuplo, y los que después lo endosen, acepten ó paguen sin suplyrlo antes poniéndolo é inutilizándolo con la fecha en que lo ejecuten en la del reintegro y el cuádruplo. Por la de no inutilizarlo se incurre en la del reintegro y el duplo solamente. Arts. 52, 82 y 85 del Real decreto.

El librador por lo tanto puede negarse a pagar el que contesten esta falta mientras no se haya subsanado, siendo en este caso de cuenta del librador los perjuicios que ocasione la suspensión del pago; pero el tenedor puede evitarlos y también la pena en que habría de incurrir sinó lo hace fijándolo é inutilizándolo con la fecha y rúbrica. Si lo fija y se inutiliza le quedará su derecho a salvo lo mismo que á los endosantes que lo suplan para reclamar el importe del sello y de los perjuicios si alguno se le han seguido contra quien se lo haya endosado, siendo de advertir que ni este de quien lo recibió, ni los endosantes anteriores, ni el librador quedarán por estos exentos de las penas en que hayan incurrido por no haberlo fijado é inutilizado al tiempo de firmarlo. Artículos 52 y 83 del Real decreto.

Por conclusión añadiremos que los sellos expresan el precio de cada uno y la cantidad que se puede girar con ellos por el órdén siguiente:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cantidad que se puede girar</th>
<th>Precio del sello</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hasta 2000 reales</td>
<td>1 real</td>
</tr>
<tr>
<td>De 2001 á 5000</td>
<td>1 50 céntimos</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 5001</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 10001</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 20001</td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
bien el lugar donde se ha de hacer el pago, si es otro distinto de aquel en que esté domiciliado (*).

4.° El nombre y apellido del tomador ó portador.

5.° La expresion de que se libra á su orden.

6.° La manifestacion de si el librador ha recibido en dinero ó mercancias, ó se le ha prometido entregar la cantidad que manda pagar, á lo que se le dá el nombre de valor de la letra, y también la expresion de la persona de quien lo recibe y á cuya cuenta se carga.

7.° La época en que se ha de hacer el pago.

Y 8.° La firma del librador (1).

Expondremos las razones por qué se exigen, y haremos algunas aclaraciones muy útiles y aun necesarias con respecto á algunos de ellos.

382. El primero se prescribe para evitar fraudes; porque sin la expresion del lugar podría faltar al contrato el requisito esencial de que las cantidades se reciban y paguen en lugares diferentes, infringiendo la prohibicion de girar letras

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>30000</th>
<th>40000</th>
<th>20 reales.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>e</td>
<td>40000</td>
<td>50000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td>50000</td>
<td>60000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td>60000</td>
<td>70000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td>70000</td>
<td>80000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td>80000</td>
<td>90000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td>90000</td>
<td>100000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td>100000</td>
<td>120000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td>120000</td>
<td>140000</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td>140000</td>
<td>160000</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td>160000</td>
<td>180000</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td>180000</td>
<td>200000</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td>200000</td>
<td>250000</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td>250000</td>
<td>300000</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td>300000</td>
<td>350000</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td>350000</td>
<td>en adelante.</td>
<td>200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Arts. 49 y 51 del Real decreto y 6 de la instruccion citados.

(*) Las libradas de este modo se llaman a domicilio.

(1) Art. 426.
para ser pagadas dentro de la misma población (*); y sin la fecha podrían expedirse en perjuicio de los acreedores en caso de quiebra, se eludiría la prohibición de antidatarlas, no se podría saber el día en que principiaba a correr el plazo para el pago cuando debiera contarse desde que fuesen expedidas y tampoco sería posible conocer cuándo había transcurrido el tiempo necesario para la prescripción (1).

383. La expresión de la cantidad, la firma del librador, el nombre y apellido del tomador, y el nombre, apellido y domicilio del pagador, basta solo indicarlos para conocer que son de tanta importancia, que sin ellos no habría letra de cambio ó no podría ser cumplido el encargo de pagar consignado en ella; pero es necesario hacer algunas advertencias con respecto á cada uno de estos particulares, y tener presente por lo que hace á la cantidad, que debe designarse en moneda real y efectiva ó en las nominales que el comercio tiene adoptadas para el giro; pero que es indiferente se exprese en letra ó en guarismo ó de ambos modos, como para mayor precaución se usa en el comercio.

Tocante al librador, que es siempre responsable del pago de la letra que autoriza con su firma, aun cuando exprese en ella que la gira por cuenta de otro, porque á los tomadores

(*) ¿Y qué distancia debe mediar entre los dos pueblos, para que no se entienda infringida la prohibición? La ley no lo dice, pero debe bastar cualquiera, por pequeña que sea; pues si las circunstancias dieran á conocer que se había querido eludir la ley, deberían los tribunales anular el giro. ¿Se entenderá eludida, si la letra se librara de un lugar á otro, con la condición de pagarse en el domicilio que designe el pagador, si este designase el mismo en que había sido librada? Muy fuerte es la presunción que induce esta circunstancia: no obstante, como en su origen se llenó el requisito legal de librar á cargo de una persona residente en otra parte opinan algunos autores que la aceptación no debe viciarla, salvo si hubiese fraude, que en este caso debe suponerse fácilmente. A nosotros nos parece que solo cuando se diera á conocer por otros medios que no lo hubo, sería cuando se debiera considerar legítima esta operación. — V. y Caravantes. —Art. 429.

(1) Arts. 429, 449 y 470.
de estos documentos no les consta si es o no cierta la comisión, ni pueden contar con otras responsabilidades que las que demuestran las firmas estampadas en ellos. Solo el que tenga poder especial anotado en el registro público del Comercio será únicamente el que pueda firmar por otro, expresándolo en la ante-firma, y exhibiéndole si lo piden (1).

En cuanto al pagador, que no puede serlo el mismo librador, ni su mujer é hijos constituidos en la patria potestad, porque se reputan una misma persona para los efectos del derecho, y que se supone siempre, por regla general, que ha de hacer el pago en su mismo domicilio, por lo que es necesario que cuando haya de pagar en otra parte se exprese terminantemente (2).

Y con respecto al tomador, que debe expresarse su nombre y apellido necesariamente al mandar hacer el pago, pues si se omite entonces, queda imperfecta y no se puede subsanar este defecto, aunque se ponga después para decir que entregó el valor; porque puede ser expedida a favor de otra persona distinta de la que la paga y exige su giro. También es indispensable que sea diferente del pagador, pero no del li-

(1) Arts. 432, 435 y 160.
(2) Art. 451.

* Esta doctrina no está tan generalmente recibida, que no haya autores que crean que el librador puede sin inconveniente designarse á sí mismo para hacer el pago, siempre que este se realice en otro punto diferente, y haya remisión de fondos; pero nosotros no podemos conformarnos con su opinión, porque es indudable que en este caso habría solo una obligación directa, y se destruiría una de las diferencias esenciales entre el pagaré y la letra de cambio. Mas ya que no pueda librarse una letra á su cargo, podrá hacerlo al de un factor ó dependiente suyo, teniendo casas de comercio en distintos puntos. Hemos visto varios autores que sostienen la afirmativa, pero nos inclinamos á creer con el señor Martí Eixalá que no; porque la letra de cambio es á la par documento de crédito, y le faltaría en este caso la garantía del aceptante ó pagador, puesto que el factor no obra en nombre propio, ni se obliga á sí mismo. El giro entre personas que dependen unas de otras, se hace más bien por medio de libranzas, y este sería el concepto que mereciera mejor que el de letra de cambio perfecta.
brador, porque le está permitido librar á su propia órden expresando retener en sí mismo el valor de la letra, y por consiguiente pueden estar reunidos en una misma persona estos dos conceptos (1).*

384. La cláusula de que esté librada á la órden es absolutamente necesaria; porque esta cualidad es la que la hace endosable, y sin ella no sería letra de cambio, ni tendría siquiera el concepto de póliza de un contrato mercantil, sino únicamente el de una simple promesa de pago, sujeta á las leyes comunes (2).

Mas no es indispensable que se use precisamente esta palabra; cualquiera otra que exprese la idea de poderla ceder á su arbitrio, es equivalente, excepto la de al portador; porque en los documentos expedidos de este modo falta la garantía que añaden los endosos, y no producen obligación ni acción (3).*

385. El valor de la letra se exige para evitar que bajo el nombre de cambio se celebren otros contratos diferen-

(1) Art. 430.
Así lo dice el art. 430 del Código, copiando las Ordenanzas de Bilbao y el Código francés; pero nosotros no tenemos por letra de cambio la librada de este modo; porque no ha precedido el contrato que la motiva, ni ninguna otra negociación, de la que pueda considerarse como escritura, ni produce derechos ni obligaciones contra nadie, mientras no se haya hecho mas que expedirla de este modo. Para que los produzca es necesario que se endose: y si se endosa, ya el tenedor es otra persona distinta del librador, y no están reunidos los dos conceptos. El endoso es, pues, en este caso el que debe considerarse como negociación de giro, y el que le dá el concepto de letra, y no el acto de expedirla. Sin embargo, la ley autoriza este modo de girarlas; porque en algunas ocasiones puede ser ventajoso, en atención á que el pagador puede aceptarlas desde luego, y una vez aceptadas, ya será mas fácil encontrar quien las tome con esta doble garantía, que no si se expidieran de nuevo y llevaran solo la firma del librador.

(2) Art. 570.
(3) Art. 571.
* Solo los títulos de la Deuda del Estado, los billetes de los Bancos y las obligaciones de las sociedades ó empresas á quienes la Ley ha-
tes. Puede consistir en dinero ó en géneros, y puede también ser entregado ó prometido, ó sea entendido ó en cuenta, que es como se dice comunmente. De cualquier modo que sea, debe hacerse mérito de él; pero los efectos serán diferentes según la expresión que se haya empleado. La de valor recibido en dinero ó en géneros supone al librador satisfecho, y no le dá derecho para repetir después su importe contra el tomador: y la de valor entendido ó en cuenta supone á este último responsable, y al librador con derecho á exigir su importe con arreglo á los pactos que hayan mediado entre los dos (1).

La indicación de la persona de quien se recibe y á cuya cuenta se carga, es una consecuencia de los dos diversos modos con que puede expresarse dicho valor para que se sepa á quién competen los derechos, ó contra quién puede dirigirse las reclamaciones, según que sea recibido ó entendido.

586. Por último, la época del pago es una circunstancia peculiar de las obligaciones que producen estos documentos. En todas hemos visto, por regla general, que la ley la suple cuando los contratantes no la han señalado; pero aquí no era posible hacer lo mismo, porque estas tienen siempre que cumplirse en otros lugares, á veces muy distantes de aquellos en que han sido contraídas, y por otras personas distintas de las que intervienen en el contrato. Sin embargo, no han dejado tampoco su designación al arbitrio de los interesados de una manera tan absoluta que puedan hacerla de cualquier modo, sino que tienen que atemperarse á los que se hallen prefiijados.

La letra, por lo mismo, solo puede librarse á la vista ó sea para pagarse en el momento en que se presente, ó á plazo: pero este puede fijarse, señalando el día, con el mes y año á

ya concedido expresamente este derecho, como hemos visto en la sección 6.ª del cap. 4.º, tit. 2.º de este libro, son las que pueden expedirse al portador. Los expedidos entre particulares se llaman vales ciegos; y no son válidos, según la ley mercantil.

(1) Art. 428.
que corresponda, ó por la circunstancia que concurrirá, ó la feria que se ha de celebrar en él, ó por un determinado número de días ó de meses que se principie á contar desde su expedicion ó desde su presentacion, ó según las prácticas del comercio; de lo que resulta que son seis los modos de expresar la época del pago ó de girar las letras, á saber:

1.° A la vista ó presentacion.
2.° A día fijo y determinado.
3.° A una feria.
4.° A uno ó muchos días ó meses vista.
5.° A uno ó muchos días y meses fecha.
6.° A uno ó muchos usos (4).

Cada una de estas fórmulas expresa una época distinta, que es necesario especificar.

La girada á la vista debe ser pagada en el momento en que se presenta al pagador (2).

La que tenga día fijo ó determinado, en el que se fije, ó en el que concurrirá la circunstancia que lo determine (3).

La designada con una feria que dure mas de un día, el último de ella (4).

La que tenga término, aquel en el que este concluya, principiando la cuenta, si es desde la fecha, en el siguiente á su expedicion; y si es desde la vista, en el inmediato después de su aceptacion, ó del protexido sacado por esta falta (5).

El uso, que es un plazo llamado así porque debe su origen á una costumbre, varía según la clase de giro y la plaza en que esté hecho en el extranjero. En el interior, esto es, en el que se hace de plaza á plaza dentro del reino, es de dos meses; por consiguiente, dos usos serán cuatro, y medio será un mes.

(1) Art. 439.
(2) Art. 440.
(3) Art. 445.
(4) Art. 446.
(5) Arts. 441 y 442.

* Cuando el día en que principie la cuenta no tenga correspondiente
En las letras giradas en el extranjero sobre plaza de España, es diferente según el punto de que procedan.

En las de Francia es solo de 50 días.

En las de Inglaterra, Holanda y Alemania, dos meses.

En las de Italia y demás puertos extranjeros del Mediterráneo y Adriático, tres meses.

En los demás puntos no señalados, según se cuente en la plaza en que estén libradas (1).

387. Los requisitos accidentales pueden variar como la voluntad de los que los stipulan. Pero los más comunes son: la expresión de la moneda en que se ha de hacer el pago, las indicaciones y la fianza.

Si se omite el primero, podrá ser pagada en cualquiera clase de las corrientes en el país o según la costumbre; pero lo regular es que se exprese siempre en oro ó plata (*).

388. Las indicaciones son la designación de un segundo ó tercer pagador para el caso en que el primero ó primers designados no quieran aceptar la comisión.

Esta designación puede hacerse en la letra misma, ó en otro papel por separado; que es lo que se acostumbra cuando no se quiere dar á conocer que se desconfía del pagador principal ó directo; mas de cualquiera de los dos modos que se haga, surte siempre los mismos efectos (2).

389. La fianza que interviene comúnmente en las letras de cambio, no es la mercantil ordinaria de que hemos hablado, sino otra irregular y especial para esta clase de convenciones, que tiene el nombre particular de aval (**).

en el mes en que haya de concluir como sucedería por ejemplo, si principiara el 50 de enero y se hubiera de pagar al mes, se entendería vencido el último de febrero. Véase la nota del número 126.

(1) Art. 443.

(*) Para cuando no se designe, tégase presente el núm. 128 y su nota.

(2) Arts. 516, 519 y 521.

(**) El aval puede darse por cualquiera de los medios escritos, por los que se obliga válidamente á los comerciantes, incluso el de la correspondencia. Recursos de casación de 30 de setiembre de 1859, y 14 de noviembre de 1862.
Puede ser general ó limitado. El general comprende todas las obligaciones que pesan sobre el librador, y constituye al que lo da en la necesidad de responder del pago de la letra en los mismos términos que la persona por quien ha sido librada.

El limitado puede recaer solo sobre tiempo, caso, cantidad ó persona determinada, y obligará al que lo preste á que cumplá lo que haya prometido (*).

La obligación que proviene de cualquiera de los dos es solidaria, y por lo tanto el fiador, caso de protestarse la letra, puede ser reconvenido directamente como deudor principal, sin necesidad de entablar primero reclamación alguna contra el librador y endosantes. Debe darse por escrito; pero no es necesario que se exprese en la letra misma, sino que puede darse y se da en papel separado, cuando no se quiere manifestar desconfianza, como hemos dicho de las indicaciones: mas es poco frecuente darlo de este modo, porque añade á la letra una garantía, y por lo común se firma al respaldo de la misma, poniendo antes la expresión por aval. También se suele dar omitiéndola y poniendo solo la firma en la cara de la letra en seguida de la del librador (1).**

590. La falta de estos requisitos accidentales no altera la esencia de la letra; pero no sucede lo mismo con los que la ley exige como esenciales, pues en estos la omisión de cualquiera de ellos la dejaría imperfecta, y no produciría los efect-

(*) El Sr. Durán y Bas citando á Rogrón, promueve la duda de si puede prestarse el aval anticipado para efectos de comercio que se otorguen en lo sucesivo, opinando que sí, siempre que se consigne claramente la especie ó clase de efectos, las sumas garantidas y el término de la obligación. Concurriendo todas estas circunstancias, no vemos inconvéniente en que se considere este documento como una garantía de los efectos á que haga referencia, aunque esté expedido antes.

(1) Art. 473 y siguientes, y Recurso de casación de 50 de setiembre de 1859.

** Cuando se dé por el librador solo, no debe ponerse á la espalda con la firma sola, porque pudiera ponerse antes algún endoso si había claro bastante, y confundirse con este.
tos de verdadera letra de cambio, como veremos más adelante (*).

Una vez libradas y entregadas, ni los esenciales ni los accidentales pueden alterarse sin el consentimiento de todos los interesados (1).

SECCION CUARTA.

De la cesión y negociación de las letras de cambio.

391. El derecho de cobrar la cantidad que representa la letra de cambio, se puede ceder como cualquiera otro; pero hay una diferencia muy notable entre el modo de enajenar estos créditos y los ordinarios, porque la circunstancia de estar expedidos, no precisamente a favor de una persona determinada, sino a su orden, supone en el tomador la facultad de trasmitirlo sin necesidad de notificar la cesión al pagador, y en este la obligación de pagarla a aquel a quien corresponda en la época de su vencimiento.

Este modo de enajenarlos es lo que se llama endoso; y negociación, esta cesión y las cesiones sucesivas que se hagan de ellos.

Su división, sus requisitos, los efectos que produce, y el tiempo en que debe hacerse son las circunstancias de que nos vamos a ocupar.

392. El endoso propiamente dicho es el acto por el que se

(*)

LETRA DE CAMBIO.

4.

MADRID, ETC. DE 1859. Por Rs. vn. 5.000.

A tantos días (vista ó fecha) servirá V. pagar por esta primera de cambio, á la orden de Don F. de T., de tal punto, la cantidad de CINCO MIL Rs. Vn. en oro ó plata, valor recibido del mismo, que anotará V. en cuenta (con aviso ó sin él) de su afectísimo.

A Don F. de T.

En tal punto.

Firma del librador.

(1) Art. 433.
trasmite la propiedad de la letra de cambio y demás documentos expedidos á la orden (1).

Se divide como aquellas en perfecto ó imperfecto, ó como dicen los autores, en regular ó irregular: pende su perfeccion del mayor ó menor número de requisitos que reuna; y se llama regular al que los contiene todos, é irregular á aquel en que faltan algunos.

595. El regular ó perfecto ha de contener:

1.º El nombre y apellido de la persona á quien se trasmite la letra.

2.º La manifestacion de si el valor de la misma se recibe en efectivo, ó en géneros, y si es entendido ó en cuenta (*)

3.º El nombre y apellido de la persona de quien se recibe, y á cuya cuenta se carga si no es la misma á quien se traspasa la letra.

4.º La fecha en que se haga.

Y 5.º La firma del endosante ó de quien tenga su poder, expresándolo en la ante-firma (2).

594. En el irregular tambien tiene que constar el nombre y apellido de la persona á quien se cede y la firma del cedente; y si falta alguno de estos es nulo; pero se pueden omitir el valor y la fecha.

La omision de la persona de quien se recibe y á cuya cuenta se carga, inducira la presencion de que es la misma á quien se transfiere; pero no influira en su validéz ni en la irregularidad del endoso (3).

(1) Art. 466.
(*) En el art. 467 no se hace mérito de la expresion de valor entendido, sino solo en cuenta; pero no dudamos adadirlo, porque es indifferente se emplee la una ó la otra, en atencion á que ambas clausulas surten el efecto de hacer responsable del valor de la letra al tomador.
(2) Art. 467.
(3) Arts. 468 y 469.

La expresion de la persona de quien se recibe el valor, y á cuya cuenta se carga, solo se exige en el endoso cuando sea distinta de aquella á quien se trasmite la letra; por consiguiente, cuando no se expresé que

TOMO 1.
En unos y otros está prohibido firmarlos en blanco, pero no son nulos los que se firman de este modo; sino que llenándolos antes del vencimiento, producen todos sus efectos, y el firmante pierde el derecho que le pudiera competir para reclamar el valor de la letra contra el cesionario, en el caso de no haberlo recibido (1).

Tampoco los anula la anti-data; pero hace á sus autores responsables de los daños y perjuicios que se ocasionen, y pueden además incurrir en pena por el delito de falsedad, si hubo fraude (2).**

395. Los efectos son diversos, según las clases á que correspondan. En el regular se hace dueño aquel á quien se traspasa; pero como tiene que entregar en el acto ó quedar obligado á pagar después su valor, viene á resultar que entre cedente y cesionario media otro contrato de cambio, que solo se diferencia del primero en que puede ser celebrado en la misma población en que se ha de pagar. Por medio de él, el endosante se obliga de nuevo á que será efectivo el pago de la se recibió de otro, sino solo valor recibido, debe suponerse que se recibió del mismo á quien resulta endosada. Este es, pues, el efecto único que debe producir esta omisión, y no el de quedar imperfecto el endosó; y así se infiere también de los arts. 468 y 469, que no enumeran este requisito entre aquellos por cuya falta se anula, ni entre los que lo quedan imperfecto ó irregular.

(1) Art. 471.

Esta prohibición recae solo sobre el que los firma, á quien se priva de reclamar su valor, porque se supone recibido en el mero hecho de haberlos firmado; pero no por esto parece que dejará de incurrir también en responsabilidad el que lo toma de este modo, si falta como mandatario á las instrucciones que le hayan dado, ó comete un abuso de confianza penado por la ley. En otras legislaciones no existe esta prohibición, y muchos autores la impugnan considerándola como una traba puesta á la facilidad de trasmitir estos documentos cuya circulación tiene el comercio interés en proteger.

(2) Art. 470.

** En la firma en blanco cabe que el cesionario antidate el endosó al tiempo de llenarlo; y si lo hace, como autor de la falsedad, quedará también sujeto á la responsabilidad y penas del art. 470.
letra á su vencimiento, y el adquirente á cumplir los deberes que pesan sobre el tenedor ó tomador; de modo que los efectos del endoso regular son dos:
1.° Trasmitir la propiedad de la letra.
2.° Constituir al endosante en la misma obligacion y responsabilidad que contrae el librador para el caso de no ser aceptada ó pagada. Con la circunstancia de que esta obligación ó responsabilidad es solidaria; la contraen del mismo modo todos los que después la vayan tomando y cediendo, y todos pueden ser reconvenidos directamente (1).

396. El irregular contiene solo una comision de cobranza. El cesionario en virtud de él puede presentarse á cobrar á su vencimiento con la obligacion de rendir cuentas, y tiene también la facultad de enajenarla por endoso; porque estos títulos son negociables de suyo, y el derecho de cobrar lleva consigo el de enajenar, mientras no conste lo contrario; pero si lo enajena, será responsable al tomador y tomadores sucesivos; porque en las comisiones de documentos endosables se entiende siempre que el comisionista se constituye garante de los que negociá por cuenta ajena, como ponga en ellos su firma. Solo en la comision que tenga por objeto una adquisicion, es en la que se puede evitar esta responsabilidad, haciendo que se endose á favor del comitente valor recibido del comisionado (núm. 269) (2).

397. El tiempo en que pueden hacerse estas cesiones, es el que media desde que se gira la letra hasta que vence, porque después ya no es endosable. La letra vencida, ó está pagada, ó protestada, ó perjudicada. Si se ha pagado, no hay crédito que enajenar; si se ha protestado, ya sabe el tenedor que no se paga, y no puede prometer de buena fe que será efectiva; y si está perjudicada, cesó la garantía de los endosos, como diremos en otra ocasión, y el que se ponga en ella no puede producir otro efecto que el de una cesión ordinaria,

(1) Art. 473 y Decision de competencia de 22 de mayo de 1865.
(2) Arts. 160 y 472.
salvas las convenciones que los interesados establezcan con respecto á sus intereses y sin perjuicio de tercero (1).

398. En los endosos pueden ponerse cuantos pactos y condiciones convengan á los interesados, y si se ponen serán obligatorias para ellos y para los que después adquieran la letra, pero no para el pagador, librador ni endosantes anteriores.

Pueden hacerse indicaciones para el caso de que el pagador no acepte ó no pague, y puede también intervenir aval. Deben ponerse al respaldo de la letra unos en pos de otros, y pueden borrarse después de puestos, por el mismo que los haya estendido, si no se lleva á efecto la negociación que lo motivó (2).

---

(1) Art. 474.
El art. 474 dice en términos generales que el endoso de la letra perjudicada no tiene más valor ni produce otro efecto que el de una cesión ordinaria; pero á nosotros nos parece que esta disposición no es aplicable al perjuicio que sufre la letra, por no ser aceptada ó protestada por esta falta; porque aun puede ser pagada sin dificultad á su vencimiento, y no hay una razón para que no se endosé y trasmite hasta que llegue esta época. La expresión de letra vencida que empleamos en el texto, nos parece más propia, y evita este inconveniente.

(2) Art. 457.
El endoso debe ponerse al respaldo de la letra, porque el que se contrata y pone por separado en escritura pública, oficial ó privada, surtiría solo el efecto de una cesión común, sujeta á las leyes civiles, y no tendrá la consideración y privilegios que el endoso mercantil. Cuando son tantos, que se llená todo el espacio del dorso de la letra misma, y no pueden ponerse mas, se le agrega otro papel para continuarlos, cuidando de principiar en la letra misma el que haya de acabar en el papel agregado, y así sucesivamente, si es preciso añadir mas, para que se vea que son todos continuación unos de otros.

Como puede acontecer que se ponga alguna vez, y que después de convenidos se arrepientan los contratantes, y no se lleve á efecto el negocio, está admitido borrarlos y poner otros de nuevo; pues aunque pudiera evitarse esto, haciendo que aquel á quien se había cedido la endosara otra vez á favor del cedente, como todos los endosantes contraen la obligación de pagar si se protesta, no querrá hacerlo por no contraerla, y no queda otro remedio que borrarlo ó anotar á continuación que queda sin efecto para poderla endosar á favor de otro.
399. La letra endosada debe pasar inmediatamente a poder del portador, que es su dueño y el que debe tenerla para volverla á enajenar si le conviene, á no ser que por convenio de ambos, y á falta de otros ejemplares, se quede con ella el endosante, para mandarla á su aceptación ó con algun otro objeto; en cuyo caso puede entregar al tomador una copia literal con todos los endosos que contenga, expresando que se expide á falta de segunda, y esta copia surtirá los mismos efectos para su negociación (1).

SECCION QUINTA.

De las obligaciones que contraen los que intervienen en la expedicion de la letra de cambio.

400. La letra de cambio impone obligaciones á todos los que toman parte en ella. Las contrae el librador en el momento que la expide; las tiene el tomador luego que la recibe, si quiere conservar integros sus derechos, y las trasmitie á los demás tomadores por el endoso. El pagador, como que no interviene ni promete nada en el acto, no se obliga por entonces; pero es sobre quien debe pesar después la principal, ó sea la de pagarla á su vencimiento, una vez aceptado el encargo. En la seccion siguiente veremos cuáles son las suyas; en esta trataremos antes de las que librador y tenedor tienen que cumplir.

401. El primero debe hacer que se pague la letra que es

En el giro hecho por el Gobierno prohibe que se borren la Real orden de 28 de marzo de 1840, que manda: Que desde aquella fecha cese la practica de tacharse los endosos en las letras y libranzas de las dependencias del Estado, debiendo constar la cesion de ellas, aun en el caso de retroceso por nuevos endosos. Dispone ademas que no se admitan las que tengan tachaduras y enmiendas, y que no se pongan decretos para cobrar á buena cuenta, con el fin de impedir el pago por completo, de las que ya estuvieran satisfechas en parte.

(1) Art. 437.
lo que ha prometido; y por consiguiente es de su deber adoptar las medidas necesarias para que la persona á cuyo cargo está librada acepte y cumpla su comisión, y la que tiene el derecho de cobrarla pueda ejercitarlo y quede pagada y satisfecha. Bajo este supuesto, serán sus obligaciones para con el pagador:

1.ª Darle aviso, esto es, prevenirle que acepte, y que pague la letra á su vencimiento.

2.ª Proveerle de los intereses necesarios para que la pueda pagar, es lo que se llama hacer provision de fondos (1).

Para con el tomador:

1.ª Expedir segundos y terceros ejemplares cuando se lo pidan (2).

2.ª Responder de las resultas de la letra al primer tomador, y á todos los que sucesivamente la vayan adquiriendo (3).

La primera de las obligaciones para con el pagador no la expresa la ley; pero se infiere de la naturaleza misma de la negociacion, y está adoptada por el uso del comercio; puede cumplirla en la misma letra, expresando que se pague sin necesidad de otro aviso, ó escribiendo por separado, que es lo mas comun, aunque á veces suele darse al mismo tomador una segunda carta por si acaso se extravia ó se retrasa la que va por el correo.

402. La provision puede ser real ó presunta: será real cuando se remitan los fondos, y presunta cuando no haya necesidad de remitirlos, porque los tenga en su poder el mismo pagador, lo que solo tiene lugar en dos casos:

1.º Cuando éste ha autorizado al librador para que gire á su cargo.

2.º Cuando al vencimiento de la letra el pagador adeuda al librador, ó aquel por cuya cuenta se haya hecho el giro,

---

(1) Art. 448.
(2) Art. 436.
(3) Art. 452.
una cantidad igual o mayor que el importe de la letra misma (1). La aceptación no la supone hecha, porque puede muy bien ponerse en la confianza de que se hará antes de que venza. En la girada por cuenta de un tercero incumbe á este el deber de hacerla y al librador el de cuidar de que la haga, ó él de hacerla en su defecto, porque es siempre responsable para con el tenedor (2).

De los efectos de la provisión una vez hecha, de los de su falta y de la reponsabilidad del librador, hablaremos al tratar de las acciones que competen al tenedor de la letra que no ha sido aceptada ni pagada (*)

La obligación de expedir segundas, terceras y demás ejemplares, se la impone la ley; porque en nada le perjudican si las expide con la precaución que previene ella misma, y pueden á veces ser necesarias, ó cuando menos muy útiles al tenedor. Serán de necesidad cuando se haya extraviado la primera y cuando estén giradas sobre plazas de Ultramar, que hay que remitir siempre la segunda cuando menos en otro buque distinto por si aquella se llega á perder; y convendrá á los intereses del tenedor que se la expidan, cuando quiera negociar un ejemplar mientras remite el otro á la aceptación. La precaución que la ley exige es que se exprese en cada una el número que le corresponda, esto es, si es la primera ó la segunda, añadiendo á esta y á las demás que después expida, que no se consideran válidas sino en defecto de las anteriores (3). La reclamación del ejemplar que sustituya la pérdida, debe hacerse por el último tenedor á su cedente, y así sucesivamente de endosante en endosante hasta llegar al librador, sin que ninguno pueda excusarse de prestar su nom-

(1) Art. 450.
(2) Art. 449.
(*) Cuando la letra ha sido girada por saldo de cuenta corriente no pierde este su fuerza y vigor porque se proteste por falta de pago después de haber sido aceptada. Recurso de injusticia notoria de 28 de abril de 1865.
(3) Arts. 461 y 464.
bre y sus oficios; pagando el último tenedor los gastos que se ocasionen hasta conseguirlo (1).

403. Del tomador en virtud de la letra, solo se puede exigir que abone su importe cuando esté expedida con la cláusula de valor entendido o valor en cuenta, y nada absolutamente cuando contenga la de valor recibido; porque todas las demás son relativas al derecho que le compete para repetir contra el librador y endosantes si no se cumple su promesa, esto es, cuando no se pague; y si quiere renunciar este derecho y contentarse con reclamar solo del pagador, nadie puede compelére a que practique ninguna otra diligencia. Mas si desea conservarlo y utilizarlo tiene qué cumplir otras tres, que son:

1.ª Presentar á su aceptación dentro del término prevenido la que deba ser aceptada.

2.ª Presentarla para la cobranza el día de su vencimiento.

3.ª Acreditar en forma legal que cumplió con estos deberes, cuando no sea aceptada o pagada (2).

404. La necesidad de la aceptación proviene de la forma en que esté designada la época para el pago (3).

Es indispensable en las que están giradas á plazo á contar desde la vista, porque de otro modo no se podría contar como ya hemos indicado. Y también en las que lo tienen á contar desde la fecha si excede de 50 días (4).

En las giradas á pagar en día fijo ó en alguna feria, podrán presentarse para su aceptación por conveniencia, antes que llegue la feria ó el día, y ponerlas en circulación con esta garantía mas; pero no creemos necesaria su presentación si el día ó la feria no ha de tardar en llegar mas de los 50 contados desde el siguiente al en que fueren expedidas (*).

(1) Art. 509.
(2) Art. 479.
(3) Art. 479.
(4) Arts. 480 y 481.
(*) ¿Tendrá obligación el pagador de aceptar ó protestar la letra girada á plazo desde la fecha, menor de 50 días, á día fijo, ó una feria que no tarde tampoco 30 en llegar, si el tenedor la presenta voluntariamen-
En las libradas á la vista es inútil la aceptacion, puesto que han de ser pagadas en el acto (*).

La obligacion de presentarlas para su cobranza no se extingue porque no hayan sido aceptadas, ni se cumple con acudir solo al pagador principal, sino que es necesario recorrer las indicaciones que contengan cuando este no las pague ó no las acepte (1). El porteador no es libre en presentarla cuando se acomode, porque su tardanza podríapero perjudicar al librador y endosantes, y por eso la ley señala el término en que lo ha de hacer. Pero este varía según las plazas sobre qué están giradas, la forma del giro y el objeto con que hayan de ser presentadas.

405. Las plazas para este fin se dividen en nacionales y extranjeras, y las nacionales se diferencian entre sí según que se hallen en la Península é islas Baleares, en las Canarias, en las Antillas y demás puntos de Ultramar, mas acá en los Cabos de Hornos y Buena Esperanza, ó en otros puntos mas distantes.

La forma del giro influye respectivamente en unas y otras, porque no es el mismo término para las que han de contar el plazo desde la vista, que desde la fecha, y también hay diferencias entre las que se presentan para su aceptación y las que lo son para el pago: trataremos por lo mismo de cada una de estas clases de plazas con separación, teniendo en cuenta la forma del giro y el objeto, y así nos haremos entender con mas facilidad.

Las libradas entre plazas de la Península é islas Baleares, tienen para presentarse para su aceptacion:

(*) De las giradas á uso no se hace mérito; pero como el uso no es mas que un plazo, deberán estar sujetas á las mismas reglas.

(1) Arts. 452 y 516.
Treinta días si están giradas á plazo, desde la fecha que pase de este término; si no pasa, no hay necesidad de presentarlas para que se acepten (1).

Cuarenta si se ha de principiar á contar desde su presentación. Para su pago:

Cuarenta días si deben pagarse á la vista (2).

En el que venzan, si están libradas á plazo de cualquier modo que se cuente.

En las libradas entre las mismas plazas y las de Canarias se duplican estos términos, y por consiguiente, serán 60 para la aceptación de las giradas á plazo desde la fecha que la necesiten; y 80 para las que lo tengan á contar desde la vista, y para cobrar las que deben pagarse á su presentación (3).

En las giradas entre estas mismas plazas y las Antillas y demás puntos de Ultramar mas acá de los Cabos referidos, tienen seis meses, cualquiera que sea el objeto de su presentación y la forma del plazo designado en su giro (4).

Entre las más distantes, un año. Debido tener presente que si los buques que conducen las primeras y segundas, sufren algun accidente de mar que estorbe su viaje, no entra en el cómputo el tiempo que transcurra hasta que se sepa el accidente en el punto en que resida el que las remitió: ni tampoco cuando ocurra la pérdida presunta del buque, la que se supone cuando ha transcurrido un año sin tener noticias de él,

(1) Art. 484.
(2) Art. 480.
(3) Art. 482.
(4) Art. 483.

* Parece extraño que en las letras libradas á la vista ó á plazo desde la vista, tenga el tenedor un término mas largo para presentarlas, que no cuando se cuenta desde la fecha. No alcanzamos mas razón para justificar esta diferencia que en las libradas á la vista se deja enteramente al arbitrio del tenedor el tardar mas ó menos en cobrarlas, y en las de plazo se halla mas coartada esta libertad. En los artículos que citamos no se hace mérito de nuestras posesiones de Africa en el Mediterráneo, pero atendida la distancia parece que deben considerarse comprendidas en el plazo que se designa para las islas Baleares.
en los viajes ordinarios, y dos en los largos. Se reputan ordinarios, para este objeto, los que se hacen para los puertos de Europa, para los de Asia y Africa en el Mediterráneo, y para los de América que están situados más acá de los ríos de la Plata y San Lorenzo, con sus islas intermedias; y por largos, los no comprendidos en esta demarcación (1).

En las extranjeras hay que distinguir si están giradas fuera del reino sobre plaza española, ó dentro de él sobre plaza de otra nación. En el primer caso, deben presentarse á su pago ó aceptación en los plazos que en ellas mismas se fijen, si se cuentan desde la fecha, y dentro de los 40 días siguientes á su introducción en el reino, si están libradas á la vista. Y en el segundo, es preciso atenerse á lo que prescriban con respecto á este particular las leyes de la nación en que deban ser pagadas (2).

406. Estas disposiciones parten del supuesto de que el portador tenga algun ejemplar de la letra para presentarlo, pero como pudiera suceder que se le hubiera perdido en ocasión que no pudiera ya sacar otro antes de su vencimiento, deberá en este caso requerir al pagador para que deposite su importe, y así conservará íntegros sus derechos, y aun podrá solicitar su embargo, si se presenta otro á cobrarla, como diremos en su lugar oportuno (3).

La obligación de acreditar que llenó estos deberes con la debida puntualidad, y que la letra no fué aceptada ó pagada, la cumple con la diligencia de protesto, de la que nos ocuparemos en el capítulo siguiente.

(1) Arts. 484, 908, 909.
(2) Arts. 485 y 486.
(3) Arts. 507 y 499.
SECCION SEXTA.

De la aceptacion y pago de letras.

407. La persona designada para el pago de una letra de cambio, es libre en admitir el encargo que se le hace. La letra no le impone ninguna obligación; el interés general del comercio, según hemos dicho, tratando de los cuasi-contratos, es el que exige únicamente que manifieste si quiere o no quiere aceptarla.

Si no la admite, podrá suceder que obre mal, y que tenga que responder al librador de los daños y perjuicios que ocasione su negativa; si por ejemplo, le había autorizado para que librara á su cargo; pero esta responsabilidad no procede del contrato de cambio ni de la letra, sino de los pactos y contestaciones que hayan mediado entre los dos (\(^1\)).

Si no la rehusa, tiene que admitirla: pero no es necesario que responda en el acto, porque la ley le concede todo el día de la presentación para que pueda ver si debe o no aceptar, previo el reconocimiento de sus libros y de su correspondencia (1).

No contestando dentro de él, se supone que no admite y se saca el protesto en el siguiente. Mas si por casualidad el portador le deja la letra en su poder para que pueda delibe-

\(^1\) Cuando el pagador no quiera aceptar la letra, no debe escribir nada en ella, sino manifestar la razón que tenga para no hacerlo en la misma diligencia del protesto, á no ser que no se saque este por estar librada con esta condición; en cuyo caso debe ponerse un visto en la letra misma y firmarlo, para que conste que ha sido presentada.

(1) Art. 460.

* Este día debe ser de 24 horas, como hemos dicho que se cuentan para computar los plazos, con arreglo al art. 256? El 460 no dice por el término de un día, sino en el mismo día, y el 464 en el día de la presentación: cuyas palabras dan claramente á entender que el día ha de ser natural: antes eran 24 horas por las Ordenanzas de Bilbao.
rar con más acierto, tiene que devolvérsela precisamente en el mismo día, y de lo contrario queda obligado á su pago aun cuando no la acepte (1).

Admitiéndola, deberá aceptar ó pagar según la forma en que se haya librado. Estas son las dos obligaciones que con- traen el pagador de la letra que admite la comisión que en ella se le confiere: hablaremos primero de la aceptación y sus efectos, y después nos ocuparemos del pago (*)

408. La aceptación es la manifestación que hace aquel á cuyo cargo está girada una letra de cambio, declarando que admite el encargo de pagarla. Debe ponerla por escrito en la letra misma, con la palabra acepto ó aceptamos, y firmarla, pues si la dá de otro modo será ineficaz, y no producirá otro efecto que el de una promesa de pago sujeta á las leyes co-
munes (2).**

(1) Arts. 542 y 461.
(*) El pagador que no acepta la comisión, ¿tendrá obligación de avisar por el correo inmediato, como todo comisionista? Creemos que no; la ley no le impone este deber, y no media tampoco la razón que en las demás comisiones, porque puede dar el aviso el portador de la letra, y lo dará desde luego, solicitando el afianzamiento ó depósito que tiene derecho á exigir por esta falta.
(2) Art. 456 y ley 1, tit. 1, lib. 40 de la Nov. Recop.
** No están conformes los comentaristas sobre la validez y efectos de la aceptación, puesta en otro documento que en la letra misma. Unos fundados en que no debe declararse una nulidad que la ley no establece de una manera explícita, y principalmente en que no debe quedar sin cumplimiento un convenio deliberado, opinan debe ser válida. Otros, por el contrario, teniendo presente que prescribe como necesaria la fórmula acepto ó aceptamos, que no puede recaer sino sobre la letra misma; que también previene que se pague sobre el ejemplar de su aceptación cuando se haya expedido mas de uno; y cuando trata del AVAL, dice expresamente que se puede poner en la letra ó en documen-
to separado lo que hubiera dicho también al tratar de la aceptación, si hubiera sido este su animo, sostienen la nulidad, y no le atribuyen nin-
gun efecto. Nosotros encontramos esta opinión mas conforme al espíritu de la ley; la vemos corroborada con la decisión de las arts. 37 y 39 del Real decreto de 8 de agosto de 1851, que aunque con diferente objeto, prohíben que se agregue papel timbrado para poner la aceptación, los
Se tiene que poner la fecha cuando está girada a plazo, a contar desde la vista, para que se sepa cuando principia a correr; y si se omite por casualidad o por malicia, se supone aceptada en el día en que el tenedor la pudo presentar sin retraso, según lo que tarde el correo desde el punto en que esté expedida, y desde aquel principio la cuenta (1).

También se deberá expresar el domicilio en que ha de ser pagada, siempre que deba designarlo el pagador. Cuando se han expedido muchos ejemplares, se debe aceptar el primero que se presente, cualquiera que sea el número que tenga, pero no los demás que se presenten después, aun cuando sea el primero.

409. No puede hacerse condicionalmente sin consentimiento del tenedor, pero sí en parte, expresando, en este caso la cantidad por qué se acepta, porque es protestable, por la condición, lo mismo que por el resto no consentida. En los demás es conveniente expresar también la cantidad, pero no necesario, porque se entiende aceptada por el todo en el mero hecho de no poner limitación (2).

endosos y recibo, excepto en las libradas en el extranjero, para pagarse en España, porque de otro modo no producirán obligación ni otro efecto alguno; y tenemos la convicción de que el derecho mercantil niega su apoyo a la aceptación que no se estampe en la letra misma. Pero no lo creemos tampoco derogatorio del principio general de derecho, que dispone: que de cualquiera manera que aparezca que uno quiso obligarse, quede obligado; y por lo mismo opinamos, que la puesta en otro documento, no es aceptación propriamente dicha; que la letra que no se proteste, queda perjudicada, á pesar de ella, y que nadie en su virtud adquiere derechos, mas que el que la admitió, que podrá exigir del aceptante el cumplimiento de su promesa, con arreglo á las leyes civiles. Esta es la doctrina que sentamos en el texto. El Código portugués y otros previenen que se ponga la aceptación en la letra misma.

(1) Art. 457.
(2) Art. 459.

¿Podrá aceptarse por convenio para pagarla en el mismo punto en que fué librada, en vez de verificarlo en el que está designado en la letra? Parece que sí, porque ya hubo cambio y se llenó el objeto de la ley, en el supuesto de que el librador tuvo que hacer provision de fon-
Consintiéndolo el portador, pueden ponerse todas las condiciones y pactos que quieran, y los que se pongan, serán obligatorios para los dos, y para los que la adquieran después de aceptada, pero no para el librador y endosantes anteriores. En lo que no puede convenir, es en que se borre después de puesta, porque alcanzaría también á estos el perjuicio que resultaba de haberse borrado.

410. La aceptación hecha en legal forma, constituye al que la pone en la necesidad de pagar en la época designada, aun cuando no tenga provision de fondos, ni carta de aviso, y lo que es mas, aun cuando haya quebrado el librador. La falsedad de la letra y la condición no cumplida, serán solo las que le eximan de esta obligación. El embargo de la misma, y la quiebra del tenedor, las que le autoricen para suspender su cumplimiento (1).

dos, y el aceptante tendría que trasladar de nuevo el dinero al punto en que se compromete á pagar; pero esta alteración no es obligatoria para el librador y endosantes anteriores. Esta cuestión ya es muy distinta de la que hemos examinado en la nota del núm. 362.

Si el pagador pusiese la condición de aceptar para pagarse á sí mismo, porque el tenedor fuese deudor suyo, ó si negase aceptar por esta causa, alegando la compensación, ¿debería sacarse protesto por esta falta? Parece excusable, porque toda vez que se encuentre dispuesto á admitir y cumplir la comisión, la aplicación que deba después darse al importe de la letra, no es cuestión que interese al librador ni á los endosantes que por su parte han cumplido lo que prometieron. El portador, que es á quien únicamente afecta la condición ó excepción alegada, como que dimana de una causa peculiar suya, será el que en este caso deba defenderse, si tiene razón para hacerlo.—A. B. Part. 3, tit. 2, capítulo 4, sec. 4.

(1) Arts. 462 y 463.

Bien puede suceder que haya puesto la aceptación por error sustancial ó por engaño, y ocurrir la dificultad de si es ó no válida en estos casos. En la puesta por error, cabe alguna dificultad, porque el art. 463 excluye absolutamente todo recurso, y al fin puede decirse que hubiera sido más diligente, y hubiera reparado bien en lo que hacía; pero en la sacada con engaño, nos parece muy duro que no se atienda esta circunstancia, sino en el procedimiento ejecutivo que ocasiona la letra, por no hallarse comprendida en los arts. 465 y 545, en un juicio ordinario. Fuera
441. El pago en general está sujeto á las reglas que hemos sentado al tratar de los modos de extinguirse las obligaciones: pero el número y la naturaleza de las que provienen de la letra de cambio, hacen indispensables algunas excepciones; y es preciso, por lo mismo, hacernos cargo de nuevo de la persona á quien se debe hacer, del tiempo y modo de realizarlo, y de los efectos que produce.

442. La persona á quien se ha de hacer, es el portador de la letra; y pagándola á este cuando esté vencida, siempre se presume válido. Los términos en que la pueda haber adquirido en nada influyen, siendo legítimos, pues si la tiene por endoso regular cobrará como dueño, si por irregular como comisionado, y como mandatario ó comisionado cobrará tambien cuando hubiera recibido el encargo por otro medio. El que no la tenga por alguno de estos conceptos, no será portador legítimo sino detentador; pero como pudiera suceder que aunque sin derecho se presentara á cobrarla, la ley para estorbarlo ha establecido dos remedios ó derechos, que pueden ejercitar respectivamente el pagador y el portador legítimo, á saber:

El primero, exigiendo del que se presente á cobrarla, no siendo conocido, que acredite la identidad de su persona, documentalmente ó por medio de testigos, suspendiendo el pago si no lo verifica y aunque lo acredite, cuando le conste que no es portador legítimo (1).

El segundo, solicitando la retención y el embargo de su importe, que tiene lugar cuando se ha perdido ó ha sido robada, y cuando se constituye en quiebra el tenedor; únicos ca-

de este caso, no parece que puede escusarse de pagar aunque borrarse la que hubiese puesto antes de devolver la letra al portador, siempre que se conociese su firma, ó que se probase por otro medio que la huba aceptado. El Sr. V. y Caravantes, art. 546, se hace cargo tambien de esta cuestion, citando otros autores extranjeros que son de distinta opinion.

(1) Art. 499.
sos en que puede pretender el cobro quien no tenga derecho á reclamarlo (1).

La retencion se consigue requiriendo al pagador que suspenda el pago por lo restante del día de la presentacion, á lo que tiene obligacion de acceder, bajo su responsabilidad; y el embargo, acudiendo á la autoridad para que lo decrete y se le notifique en el mismo dia; pues de lo contrario, tiene que hacer el pago en el siguiente, antes de dar lugar á que se saque el protesto por esta falta (2).

413. El tiempo oportuno para hacer el pago es el día mismo de su presentacion, si está girada á la vista; si está á plazo, el de su vencimiento; y si es feriado, en el anterior. Contra la voluntad del tenedor no puede pagarse antes, aunque quiera anticiparlo el pagador solo cuando convienen ambos, se pueden pagar aunque no haya vencido, con descuento ó sin él. Pero en este caso no es valido el pago si no se hizo á persona legitima, porque se dara lugar á fraudes, y el pagador tendrá que abonar de nuevo su importe al que se presente con derecho para reclamarlo; ni tampoco si el pagador se constituye en quiebra dentro de los quince dias siguientes, porque media la misma razon, y el que cobró tiene que devolver el dinero percibido y recoger su letra para que use de su derecho como mejor le convenga (3).

(1) Art. 507.

Aunque la facultad de exigir que el portador desconocido acredite la identidad de su persona, es mas bien un derecho que no una obligacion, deben hacerlo siempre los comerciantes, pues conviene á los intereses del comercio en general, y es un medio de evitar fraudes y la responsabilidad en que pudieran incurrir si pagaran la letra á una persona desconocida que la hubiese robado ó encontrado, ó con un endoso á su favor que estuviese falsificado.

Cuando el pagador se niegue á pagar porque no conozca al portador de la letra ó dude de la identidad de su persona, también debe tener lugar el embargo y deposito del valor de la misma previa la diligencia de protesto. Así lo dispone el art. 666 del Código de Wurtemberg.

(2) Art. 507.

(3) Arts. 487, 495, 500, 502 y 1038.
414. En cuanto al modo, es deber suyo:
1.º Pagar su valor integro.
2.º Pagarlo en la especie de moneda que designe la letra, ó en las efectivas del país que sean equivalentes, si las contiene ideales (1).
3.º Pagar sobre la misma letra, esto es, prévia su presentacion, recogiéndola con el recibo y la firma del que la haya cobrado (2).

La primera de estas obligaciones puede ser modificada por convenio y hacerse el pago solo en parte con consentimiento del portador, que en este caso no entregará la letra, sino que se quedará con ella para protestarla por el resto anotando en la misma la cantidad recibida, y dando recibo por separado al pagador (3).

La tercera también tiene un caso de excepcion, y es el de haberse perdido la letra girada fuera del reino ó en Ultramar, en el que puede hacerse el pago bajo fianzas al que acredite su pertenencia por sus libros, por la correspondencia de la persona de quien la adquirió, ó por certificacion del corredor que intervino en la negociacion. En las que no están libradas en estos puntos, es necesaria su presentacion porque pueden más fácilmente sacarse otros ejemplares, y no debe hacerse el pago aunque conste la pérdida, sino el depósito de que hemos hablado en las obligaciones del tenedor (4).

415. Cuando sean muchos los ejemplares expedidos deberá pagar precisamente sobre el que haya aceptado, ó exigir del tenedor que asiente á su satisfaccion el valor de la letra, porque si paga sobre otro sin esta precaucion, tiene que volver á pagar al portador de la aceptada. Cuando no haya aceptado ninguno, podrá pagar sobre el primero que se le presente á su vencimiento ó despues; pero no antes (5).

(1) Art. 494.
(2) Arts. 503, 504 y 505.
(3) Art. 502.
(4) Arts. 503, 504, 505 y 506.
(5) Arts. 503, 504 y 505.
Las copias que á falta de letras hemos visto pueden expedir los tenedores, no son suficientes para cobrarlas. Solo cuando las acompañe algún ejemplar de la letra misma, se podrá pagar sobre ellos válidamente (1).

416. El pago total hecho en tiempo y del modo referido, consuma el contrato de cambio primitivo y los demás que le han seguido en los endosos; y por consiguiente sus efectos son la extinción de todas las obligaciones que pesaban sobre el pagador, librador, endosantes y fiadores si los había.

El parcial solo las disminuye en parte; y por el resto lo mismo que por el todo, cuando nada se ha pagado, tienen lugar las diligencias y reclamaciones de que vamos á tratar en el capítulo que sigue.

(1) Arts. 437 y 506.
CAPITULO III.

DE LAS DILIGENCIAS Y RECLAMACIONES Á QUE DÁ LUGAR LA FALTA DE ACEPTACION Y PAGO DE LAS LETRAS DE CAMBIO.

417. Cuando no ha sido aceptada ni pagada una letra de cambio, no se ha conseguido el objeto del contrato de que procede, ni se han cumplido las obligaciones que contrajeron el librador y los endosantes; y por lo mismo el portador está en el caso de hacer efectiva la responsabilidad que pesa sobre ellos. Mas para que la pueda exigir, es preciso, en primer lugar, que acredite esta falta en legal forma, y también que por su parte no hubo morosidad; y en segundo, que no haya tampoco ninguna otra persona que quiera pagar, aunque no esté designada ni indicada, pues acaso suceda que la haya porque tenga encargo del librador ó de alguno de los endosantes, ó por honor á la firma de alguno de estos, ó porque tal vez convenga á sus intereses pagar allí para recibir aquel dinero en otra parte; y si la hay y le entrega su importe sea la que quiera la causa que le mueva á dar este paso, debe el portador recibirlo, pues ningún perjuicio se le sigue en tomarlo de una mano ó de otra, y puede ser que por este medio se eviten reclamaciones (1).

Es, pues, por esta causa indispensable que antes de tratar de las gestiones á que dá lugar la falta de aceptación, y la de pago, y de los medios de dirigirlas, examinemos la forma en que se ha de acreditar por medio de la diligencia llamada protesto, y cuándo, y de qué modo se puede admitir para suplir las la oferta de un tercero, que es lo que se llama intervención.

(1) Arts. 487 y 526.
SECCION PRIMERA.

Del protesto.

418. El protesto es un requerimiento formal y solemne, hecho á la persona á cuyo cargo está girada una letra de cambio, para que la acepte y pague, ó manifieste la razón que tiene para no hacerlo; con la intimación, de que serán de su cuenta los daños y perjuicios que se ocasionen si no lo verifica. Esta diligencia supone que ya antes se le ha presentado y se negó á pagarla, porque si paga amistosamente, es inútil un requerimiento formal.

Tiene lugar por falta de aceptación y por la de pago y debe practicarse con las formalidades prevenidas para que sea válido y eficaz (1).

En él hay que considerar, quién puede solicitarlo, el tiempo y lugar en que se ha de hacer, la persona con quién debe entenderse, y los efectos que produce.

419. Lo solicita el portador, ora lo sea por endoso regul-
lar, ó por irregular, porque en virtud de uno y otro se halla autorizado para cobrar: el que tuviere encargo para hacerlo, dado de otro modo, no podrá sacarlo en su nombre, pero sí en el del que se lo hubiese conferido.

420. Debe hacerse precisamente antes de las tres de la tarde del día después de haber sido presentada, si se saca por falta de aceptación; y del de su vencimiento, si lo motiva la falta de pago, á no ser que fuera feriado, esto es, festivo de precepto que no se pueda trabajar que entonces habría que suspenderlo hasta el siguiente (1).

(1) Art. 512, y Real órden de 7 de febrero de 1846.

(*) El protesto por falta de pago debe sacarse aunque haya pasado la hora ó el día en que se debió practicar esta diligencia, pues aunque no produzca los efectos que la ley atribuye al que se saca en tiempo habido, servirá para acreditar que no fue pagada la letra y entablar las reclama-
maciones que competen en este caso al portador y exponemos en el nú-
mero 442.

En nuestro Código no se expresa terminantemente cuándo se ha de sacar este protesto, porque el art. 512 habla solo del que se saca por falta de aceptación, y no todos los autores convienen en que deba ex-
tenderse su disposición al que se saque por falta de pago. Nosotros no hemos dudado, sin embargo, en decirlo así, porque nos parece esta opi-
nión la más fundada; puesto que el 487 previene, que tanto el uno como el otro se saquen dentro de los términos y en la forma que se prescri-
be en la sección del protesto, y que en esta sección no hay más término se-
ñalado que el del día siguiente cuando se protesta la falta de aceptación;
porque alguno ha de haber necesariamente para protestar la falta de pa-
go, y nada más natural que fijar el mismo, en atención a que, por regla
general, toda obligación debe cumplirse en el mismo día que vence, y en el inmediato ya se puede reclamar judicialmente. Esta es también la
costumbre del comercio, la doctrina admitida en los tribunales, y lo re-
suelto, segun parece, por una Real órden que aunque no se encuentra en los tomos de decretos, ni se publicó en la Gaceta, ni se ha circulado á los Tribunales, se insertó en el periódico de Madrid titulado el Correo
de su núm. 633 de 12 de setiembre de 1832, cuyo tenor es como sigue:

«Habiendo dado cuenta al Rey N. S. de la consulta hecha por el
Tribunal de Comercio sobre si los protestos por falta de pago de las le-
tras de cambio deben sacarse, según las disposiciones del Código de Co-
mercio. el día mismo de su vencimiento ó en el siguiente, se ha servido
Ni el fallecimiento, ni la quiebra del pagador lo excusan; al contrario, interviniendo esta última, debe sacarse inmediatamente, aun cuando no esté cumplido el plazo; porque desde que se constituye en este estado, se tienen por vencidas todas sus deudas, bajo el descuento del rédito legal y tiene el portador expedito su derecho contra los demás responsables á las resultas de la letra (1).

Tampoco lo excusa el haberla protestado antes por falta de aceptación; porque puede recibir fondos ó cambiar de resolución después, y es necesario presentarla y protestarla de nuevo, á no la paga (2).

424. El lugar ha de ser el del domicilio que se exprese en la letra ó en su aceptación. Si no lo hay designado, en el que el pagador tenga de presente, y si se ignora cuál es, en mandar que con arreglo al espíritu de varias disposiciones del Código citado, sino también al contexto literal del art. 489 del mismo, los protestos por falta de pago de las letras de cambio, libranzas y pagarés de Comercio, se deben formalizar en el día siguiente al del vencimiento ó en que fuese exigible su pago, observándose en el caso de ser feriado la disposición del párrafo 2 del art. 512, sobre lo cual no ha debido ocurrir justo motivo de duda estando tan terminante el expresado artículo 489.

(1) Arts. 525 y 1043.
(2) Art. 524.

Cuando la letra ha sido aceptada por alguno de los indicados en ella, ó por intervención, puede haber la duda de si será ó no necesario volverla á protestar de nuevo por falta de pago, porque en este caso hay aceptación aunque no sea la del primero que debió aceptar. Pero, no obstante, también hay protesto por falta de la de este cuyo pago prefiere la ley al de todos los demás, si se presta á hacerlo aunque no haya aceptado, según lo dispone el art. 530, porque está en el interés de todos que pague y extinga todas las obligaciones, y para saber si se presta á realizarlo, parece indispensable requerirle de nuevo antes de cobrar de otros. Esta es al menos nuestra opinión, y así está también establecido en otros Códigos extranjeros, añadiendo algunos, que si se omite esta diligencia no tiene obligación de pagar la letra el que la aceptó por intervención, y si paga, sin que se haya practicado, pierde el derecho á reclamar contra aquellos á quienes interesara que se protestara contra del librado por falta de pago.
el último que se le haya conocido. La circunstancia de encontrarse en otro lugar distinto en aquel día, no es suficiente para buscarlo y protestar en él, porque puede haber dejado en su casa dinero y orden para hacer el pago (*). Cuando el domicilio deba designarse por el pagador en la aceptación, y no haya aceptado, ó hubiese omitido designarlo, deberá sacarse el protesto en el que este tenga, y si designa otra casa distinta de la suya, en el de la que haya designado (1).

422. La persona con quien debe entenderse, es siempre la del pagador. Si no puede ser habido, con los dependientes de su tráfico, si los tiene; y si no, con su mujer, hijos ó criados; y á falta de todos, con la autoridad municipal (2).

423. Tiene que practicarse ante escribano y dos testigos, que no sean comensales suyos; esto es, del mismo escribano, y extenderse en un acta ó diligencia que contenga:

(*) El art. 515 dice: que no constando el domicilio de alguna de las tres maneras expresadas en el texto, se indague el que tenga de la autoridad municipal; pero nosotros hemos omitido esta indagacion, porque no la consideramos como un deber del tenedor, sino como una advertencia que le puede ser útil, por sí le conviene dirigirse contra él. La letra, según la circunstancia 7.ª del art. 426, ha de expresar con precisión el domicilio de la persona á cuyo cargo se gira, y en este hemos visto que debe ser pagada cuando no se designe otro; por consiguiente, siempre consta en ella de una manera mas ó menos explicita el domicilio, al que tiene que acudir. Además la indagacion que exige, no puede ser practicable mas que en alguno de los tres puntos expresados, y vendremos siempre á parar en que es excusada, si se hace en el pueblo en que esté avezindado; porque ya se sabe que tiene allí su domicilio, aunque accidentalmente se halle fuera de él; y que es inútil, si se practica en el designado ó en el último que se le haya conocido; porque aun en el supuesto de que se llegue á saber su paradero, que es todo lo que se puede apetecer, indudablemente ha de resultar que reside en otro punto distinto, al que será imposible ir al día siguiente á buscarle y sacar el protesto como era de necesidad, si había de producir algún efecto. Esta indagacion seria útil solo cuando hubiera mudado de casa, ó viviera en una poblacion grande, pues entonces seria cuando pudiera buscársele por este medio.

(1) Art. 515 y Decision de competencia de 3 de abril de 1857.
(2) Arts. 514 y 515.
4.° La copia literal de la letra, con su aceptación, endosos, aval e indicaciones, si las hay, incluso los tachados, raspaduras, enmiendas y demás defectos que pueda tener.
2.° (*) El requerimiento y la contestación que dé el requerido.
3.° La protesta y conminación de gastos y perjuicios.
4.° La expresión del lugar, día, mes y año, y de la hora en que se evacúa.
Y 5.° La firma del escribano y de la persona con quien se entiende, y si no sabe o no puede, la de los testigos (1).
424. Concluida la diligencia con el pagador directo, hay que acudir a los indirectos, ó sea a las indicaciones, si las contiene por el orden con que estén hechas; hacerle igual requerimiento, extender y firmar su respuesta a continuación de la misma acta, y dejar tanto a estos como al principal una copia de su diligencia respectiva (2).
Si son tantos que no pueden evacuarse en un solo día, deberá continuarse en el inmediato, y cuando haya que recorrer diferentes domicilios, ó intervenga alguna circunstancia que haga imposible practicarla, se continuará luego que se pueda.
La letra original debe conservarla el escribano en su poder todo el día en que se proteste hasta que se ponga el sol, para entregarla al pagador y cancelar el protesto, si se presenta a aceptarla, ó a pagar su importe y los gastos. Si no se presenta, la devuelve al tenedor con un testimonio de las diligencias practicadas, para que pueda ejercitar sus derechos (3).**

(*) Los protestos deben estenderse en papel del sello de 8 rs., art. 41 del Real decretó citado.
(1) Art. 517.
(2) Arts. 516 y 514.
(3) Art. 521.
** El art. 524 tampoco habla más que del protesto por falta de pago; pero no debe caber duda en que suceda lo mismo por falta de aceptación, pues si el pagador se presenta, acepta y paga los gastos, debe ser admitido también; y en nuestra opinión, no solo dentro del día, sino
425. El protesto no puede suplirse con ninguna otra prueba, documento ni diligencia. Solo en el caso de haberse perdido la letra y de negarse el pagador á depositar su importe, podrá hacerse constar su resistencia por medio de un acta de protestación, que deberá extenderse del mismo modo y con iguales formalidades, para que surta los mismos efectos (1).

426. Será nulo e ineficaz si carece de alguna de las formalidades que dejamos expresadas; por consiguiente, si no se saca en el lugar; día y hora referido, ó no se entiende con la persona que corresponda, ó le falta alguno de los requisitos que ha de contener, ó no se deja la copia, no surtirá los efectos de que vamos á hablar (2).

Por lo tanto, el que tome por su cuenta una letra que no sea ya posible presentar y protestar en tiempo hábil, tiene que exigir del cedente una obligación especial de responder de su pago aunque se proteste fuera de tiempo, si quiere conservar sus derechos contra él. Y el que la remite de una parte á otra sin el necesario para practicar las mismas diligencias á su vencimiento, queda responsable de esta falta, y sufre el perjuicio que provenga de ella, reputándose su endoso, aunque sea regular, como una simple comisión de cobranza (3).

después, mientras que el tenedor no haya practicado otras gestiones; porque no siente ningún perjuicio si se le devuelve la letra aceptada, y se le abonan los gastos, y se evitan las reclamaciones y las diligencias á que daría lugar esta falta.

(1) Arts. 522 y 507.
(2) Art. 518.
(3) Arts. 492 y 493.

Puede suceder que remitida la letra en tiempo hábil para que la reciba la persona á quien va dirigida no llegue á sus manos hasta después de haber pasado el día en que se deba presentar y protestar, por haberse retrasado el correo ó por otra causa semejante, y aun ocurrir el caso de que tenga á ella en su poder no pueda presentarla y sacarla por fuerza mayor y dudarse por consiguiente si quedará perjudicada protestándola después, ó quién deberá sufrir las consecuencias de esta falta. No habiendo culpa, ni morosidad por ninguno de los dos, no parece justo que
427. Los efectos son diversos, según la falta por qué se han sacado. Si es por la no aceptación, autoriza al tenedor para exigir del librador y endosantes que afíancen á su satisfacción el valor de la letra, y á nada mas si lo consigue y le abonan los gastos; porque con esto quedan asegurados sus derechos, y si á su vencimiento es pagada, nada tiene que reclamar. Si no afíanzan, puede pedir que lo depositen ó se lo reembolsen con los gastos de protesto y recambio, bajo descuento del rédito legal por el término que falte que transcurirá hasta el día del vencimiento. Mas si la letra contiene indicaciones y la acepta alguno de los indicados, ya no le deben competir estos derechos, porque hay aceptación de persona que debe inspirarle confianza, puesto que la admitió con su indicación; y habiendo alguno de los designados que se comprometa á pagar, no hay motivo para que desconfie y solicite afíanzamiento. Pero tampoco es justo que pierda los gastos del protesto sacado por la no aceptación del pagador principal, y le deberán ser abonados.

Si se saca por falta de pago, le autoriza también para reclamar contra los mismos y contra el aceptante, si lo ha habido, el reembolso con el recambio y los gastos, pero no con descuento, porque no falta ya tiempo alguno que correr, sino por el contrario, con el interés legal de su importe desde el día en que se protestó (1).

los perjudique un suceso independiente de su voluntad, y por lo mismo si se presenta y protesta luego que se reciba ó cese la fuerza, deberá este protesto producir los mismos efectos que si se hubiera sacado dentro del término legal, y así está establecido en el art. 421 del Código portugués, que dispone, que si no llega á tiempo por accidente de fuerza mayor ó por haberse interceptado el correo ó el medio que se hubiera adoptado para remitirla, siendo seguro, conserva el portador todos sus derechos si la presenta y protesta el día que la recibe ó en el siguiente. El 696 del Código de Wurtemberg, también contiene otra decisión semejante.

Algunas veces por circunstancias particulares se han declarado en suspenso estos términos por las autoridades administrativas.

(1) Arts. 534 y 548.
Por la falta de protesto válido y eficaz queda la letra perjudicada. El perjuicio consiste en que cesa la responsabilidad de los endosantes y del librador que tenga hecha provision de fondos, y queda reducido el derecho del tenedor a repetir, mientras no esté prescrita contra el librador que no pruebe que la hizo y contra el pagador que haya aceptado (1).

SECCION SEGUNDA.

De la intervención en las letras de cambio.

428. La intervención es un acto por el que una persona acepta o paga voluntariamente una letra de cambio, por no haberlo querido hacer la que estaba designada. Ya hemos hablado de ella en los cuasi-contratos: ahora falta que veamos el tiempo y modo de darla, las personas que pueden y por las que se puede intervenir, las que deben preferirse siendo muchas, y cuáles son sus efectos (núm. 140).

El tiempo oportuno para intervenir es después de sacado el protesto; porque si el designado acepta o paga, es inútil, y por lo mismo es necesario esperar a que conste su negativa de una manera fechaciente. La dada autes sería una fianza; y si se omitía sacarlo a causa de ella, quedaría la letra perjudicada. Es necesario también que se haga constar por escrito a continuación del protesto, bajo la firma del escribano y del interveniente, y esta es otra razón más para no admitirla hasta que se haya extendido (2).

Después no hay inconveniente en que se admita en cualquiera tiempo, ni en que se haga solo en parte si es para aceptar, ni tampoco en que en este caso, además de hacerlo constar a continuación del protesto, se exprese en la letra misma que está aceptada por intervención, bajo la firma del que la haya dado, pues siempre es una garantía. Pero de cualquiera

(1) Arts. 453, 454 y 490.
(2) Arts. 526 y 527.
manera que se dé, no obsta para que el tenedor exija del librador y endosantes el afianzamiento de sus resultas (1).

429. Pueden intervenir solo los extraños á la negociación, esto es, los que no tengan contraída alguna obligación á consecuencia de ella. Por tanto, ni el librador, ni los endosantes, ni los fiadores pueden aceptar ó pagar interviniendo, sino cubriendo su propia responsabilidad; y por eso se les da derecho para exigir del tenedor, luego que llegue á su noticia el protesto, que les entregue la letra y perciba su impor- te y los gastos; debiendo ser preferido, si concurren muchos, el librador á los endosantes, y estos por el órden de sus endosos (2).

No debe decirse lo mismo del pagador que no haya aceptado; porque mientras no acepta no es responsable, y puede intervenir, después de haber protestado, para gozar de los derechos que le competen bajo este concepto.

Con respecto á los indicados, como que no son pagadores directos, no puede haber dificultad en que acepten ó paguen por intervencion.

430. Se puede intervenir á favor del librador y endosantes, porque todos tienen interés en que se acepte y se pague; y debe el interveniente expresar por quién lo hace, pues si omite esta manifestación, se entenderá que interviene por todos menos por el pagador, con respecto al que no puede hacer intervencion propiamente dicha, ó no producirá los efectos que las demás; pues pagando en su nombre se extinguirán todas las obligaciones y no adquirirá derecho ni contra los endosantes ni contra el librador.

431. Cuando se presenten muchos, debe admitirse con preferencia al que extinga mas responsabilidades. Así pues, el que intervenga por el librador deberá anteponerse á los que lo hagan por los endosantes; y entre estos, al que intervenga por el de fecha mas antigua: concurriendo dos á intervenir por

(1) Art. 529.
(2) Art. 542.
uno mismo, se preferirá al que tenga comisión, si lo hay; pues si alguno de los obligados tuvo la prevision de dársela, su mandato equivale á una indicacion, que debe seguirse antes que admitir la intervencion de otro tercero, porque no cabe un gestor de negocios donde hay un verdadero mandatario (1).

452. Los efectos de la intervencion se diferencian, como los del protesto, segun la causa que la haya motivado.

Si se dá en la aceptacion, el interveniente queda obligado á pagar la letra á su vencimiento como si estuviera girada á su cargo, y debe además dar aviso por el correo inmediato á aquel por quien intervino, para que le sirva de gobierno, y adopte las disposiciones que estime necesarias (2).

Si no la paga despues, deberá protestarse por esta falta, y queda responsable á los perjuicios que se originen; pero no adquiere derecho, sin embargo, para pagar con preferencia á aquel á cuyo cargo estaba librada, si se presta á hacerlo; porque la intervencion es un remedio subsidiario que solo puede tener lugar en defecto del principal, y por lo tanto, cuando el pagador, que es el que tiene este concepto, se presta á cumplir su obligacion, y subsana su falta abonando los gastos, no puede dejar de ser atendido (3).

El librador y endosantes anteriores á aquel por el que se dió la intervencion, tampoco pueden excusarse de afianzar ó depositar, si este se lo exige.

453. Si se intervino en el pago, quedan extinguidas todas las responsabilidades posteriores, y con respecto á las anteriores el interveniente se subroga en los derechos y obligaciones del tenedor. En el caso, pues, de haber pagado por el librador, solo contra este y contra el pagador que hubiese aceptado podría repetir; mas si pagó por algun endosante, podrá dirigir sus reclamaciones contra aquel por quien inter-

(1) Art. 533.
(2) Art. 528.
(3) Art. 530.
vino, contra los demás que le precedan en el orden de los endosos y contra el librador y pagador aceptante (1).

El que interviene en el pago no necesita dar aviso, como el que lo hace en la aceptación, porque esta intervención equivale en cierto modo a un endoso hecho por el tenedor a favor del interveniente (2).

Por la intervención en el pago de las letras perjudicadas, en las que el tenedor no tiene otro derecho que el de repetir contra el aceptante si lo hubo, y contra el librador que no hubiese hecho provision de fondos, estos solos serán los que adquiera el que intervenga (2).

SECCION TERCERA.

De las reclamaciones que se pueden entablar por la falta de pago de la letra de cambio.

434. El portador de una letra de cambio no pagada, ó el que se haya subrogado en su lugar por haberla pagado por

(1) Art. 531.

(*) La circunstancia de equipararse en sus efectos la intervención en el pago al endoso regular puede dar margen á la duda de si el tenedor está ó no obligado á admitirla: porque puede suceder que le convenga mejor ejercitar por sí mismo los derechos que va á trasmitir, que no recibir el dinero de un extraño que se presenta á pagar, movido del beneficio que va á sacar en un recambio, y siendo él el principal interesado no parece justo privarle de esta utilidad para dársela á otro. En igualdad de circunstancias nos parece de mejor contacto, porque la intervención está autorizada para evitar perjuicios y reclamaciones; y si no se evitan ó no ofrece más ventajas que las que promete el tenedor mismo, se convertirá en un rodeo inútil. Así pues, si este allana las condiciones del interveniente, es decir, si se conforma con no reclamar, por ejemplo, mas que contra el librador, si es por éste por quien intervenía, deberá hacerse constar así á continuación del protesto, y no admitir la intervención, á no ser que el que la ofreciese fuera un comisionado del mismo, que entonces no podría ser desechado, porque obraba en utilidad ó por interés de un deudor, cuya condicion es siempre mas atendible que la del acreedor, que es el concepto que al tenedor debe competir.

(2) Art. 532.
intervencion, tiene derecho á dirigir sus reclamaciones contra todos los que resulten obligados en ella; porque todos han prometido que se pagará á su vencimiento por la persona designada, ninguno ha cumplido su promesa, y todos son igualmente responsables.

La reclamacion que motiva esta falta consiste, como en la de las demás obligaciones, en la rescision del contrato ó en la indemnizacion de daños y perjuicios, y esta es la que corresponde aquí en sustancia; pero como intervienen muchas convenciones que se han sucedido unas á otras, y no siempre la falta de cumplimiento de todas ellas producirá efectos igualmente transcendentales; como sería en ciertos casos un proceder larguirúsimo, innecesario y perjudicial, el volver á deshacerlas todas por el órden con que fueron celebradas; y como por otra parte la rapidez con que se multiplican y el interés de todos exige que se den medios prontos y eficaces para conseguir la reparacion de la falta, porque así no serán tantos los perjuicios, las leyes no han podido menos de establecer reglas especiales para estas reclamaciones, y es indispensable por lo mismo que examinemos las personas que pueden y contra las que se pueden intentar, lo que deben comprender y el modo de ejecutarlas, haciendo la debida distincion entre la letra protestada en tiempo y forma, y la que se halle perjudicada.

435. La puede intentar el que resulte portador de la letra, bien sea por endoso, por haber pagado por intervencion, ó porque siendo endosante la haya reclamado y pagado tan luego como supo que había sido protestada. Tampoco importa que la tenga por endoso regular ó irregular, ó por una comision ordinaria para su cobro, porque el resultado es siempre que tiene con derecho una letra no pagada, y no se le puede negar el de repetir contra los que prometieron que se pagaría.

436. Puede dirigirla contra el librador, endosantes, fiadores y pagador aceptante sin observar órden ni grados, sino eligiendo el que mejor le parezca, porque todos se encuentran
obligados solidariamente. Pero es necesario tener presente estas circunstancias (1):

1.° Que dirigida una vez contra uno, no puede dirigirla contra los demás, como no resulte insolvente en todo ó en parte; en cuyo caso le es permitido reclamar de los otros lo que le falte, recorriéndolos todos sucesivamente, si es necesario, por la porción no satisfecha. Solo en el caso de que alguno ó algunos se constituyan en quiebra, podrá repetir contra los que quedan, sin esperar el resultado de esta, porque sería injusta esta dilación, pero sin perder por esto su derecho para percibir de cada una el dividendo ó dividendos que correspondan á su crédito hasta quedar cubierto en su totalidad (2).

2.° Que si se dirige primero contra el pagador aceptante, tiene que hacer notificar precisamente el protesto al librador, endosantes y fiadores por medio de escribano público y dentro de los mismos términos que están marcados para la presentación de las letras, para su aceptacion y pago, según la distancia á que se hallen, y que si omite esta diligencia, pierde el derecho que tenía contra ellos, como si estuviera perjudicada (número 405) (3).

5.° Que cuando la dirija contra alguno de los endosantes, este, después de haber pagado, se vuelve á convertir en tenedor, y puede dirigir igual reclamacion contra los anteriores; y lo mismo estos hasta llegar al librador, que solo podrá reclamar contra el pagador en los casos y términos á que haya lugar, según los pactos y contestaciones que hayan mediado entre los dos (4).

---

(1) Art. 534, y Decision de competencia de 22 de mayo de 1865.
(2) Arts. 535, 557 y 538.
(3) Art. 536.
(4) Art. 539.

TOMO 1.
4.° Que si á consecuencia de alguna de estas reclamaciones se hiciese quita ó remisión á alguno de los deudores contra quien se dirija, se entiende hecha tambien, y aprovecha á los demas responsables á las resultados de su cobranza (1).

Y 5.° Que el que la tiene por haber intervenido en el pago por el librador ó por algun endosante, no puede repetir mas que contra aquel por quien intervino, y contra los que le precedan, y que esta disposicion es tambien aplicable á los fiadores por aval (2).

437. La peticion puede tener por objeto, segun antes hemos visto, la rescision del contrato ó la indemnizacion de daños y perjuicios.

Lo primero es poco comun y no muy acomodable á esta clase de faltas; pero no obstante, si alguna vez se propone, no podra desestimarse, y el contrato se rescindira por los mismos medios que las demas convenciones, quedando el asunto como si no se hubiese principiado.

438. La indemnizacion puede comprender:
1.° La cantidad que exprese la letra.
2.° El redito legal que le corresponda desde el dia del protesto.
3.° Los gastos de esta diligencia.
4.° El recambio, esto es, la diferencia que haya en el cambio entre el punto en que se debio cobrar y en el que se entabla la reclamacion.
5.° Lo que cueste proporcionarle, como el corretaje, la comision de giro y el papel timbrado de la letra que diremos despues y los gastos de la correspondencia. Pero no todas estas partidas podran entrar en todas las reclamaciones, sino las que correspondan segun el medio que se presferia y el punto donde se entable (5).

439. Los medios que concede la ley son dos, á saber: pro-

(1) Art. 547.
(2) Art. 531.
(3) Arts. 548 y 551.
ceder ejecutivamente previo el reconocimiento de su firma por el lirdador ó endosante contra quien se dirija, ó librar otra letra que se llama de resaca (1).

Si prefiere el primero, debe documentar su petición con la letra protestada, el testimonio del protesto, y una certificación que acredite el recambio dada por un corredor ó agente de Bolsa si lo hay; y si no por dos comerciantes, cuando la entable en otro punto, pues si es en el mismo en que reside, no puede comprender esta partida ni la de los gastos que ocasionó proporcionarlo (2).

440. El segundo no puede adoptarse cuando medie esta circunstancia, porque está prohibido girar letras dentro de la misma población; y por consiguiente, solo se podrá emplear cuando resida fuera la persona á cuyo cargo sea girada; y entonces tendrá que librarse con todas las formalidades y requisitos que las demás, y que ir también acompañada de la letra primitiva con el testimonio del protesto y la cuenta de resaca. Debiendo tener presente en cuanto á los requisitos, que el valor debe ser el saldo de la cuenta que la acompaña: y en cuanto á la cuenta, que se ha de hacer mención en ella necesariamente de la persona contra quien se gira, para que se sepa que corresponde á la letra de que va acompañada (3).

441. Esta letra puede también ser endosada, afianzada por aval y contener indicaciones. El que la libre y los que la endosen, quedan obligados como en las demás, y el tenedor tie-

---

(1) Arts. 543 y 549.
(2) Arts. 544 y 553.

* Una circunstancia puede embarazar, sin embargo, el cumplimiento de esta obligación; y es la de que no haya giro entre el punto en que debió ser pagada la letra, y el en que se entable la reclamación en cuyo caso será imposible fijar el curso del cambio, y por consiguiente la cantidad que deba corresponder al recambio. Algunos autores opinan que en este caso debe graduarse por el de la plaza más inmediata en que haya giro, y nos parece acceptable esta solución.

(3) Arts. 550, y 551 y 552.
ne también que llenar las obligaciones que le competen, si quiere conservar integros sus derechos.

Si es pagada, concluyen todas las acciones que procedían de ella; y el pagador, si es endosante de la primitiva, podrá librar otra por el importe de la cuenta, variando la partida del recambio, porque no se permite acumularlos, y podrá no ser siempre uno mismo, en atención á que hay que regularlo, con respecto al librador, por el cambio que corra en la plaza en que se debió pagar la letra sobre aquella en que fué girada, y con respecto á los endosantes, por el que rija en la que pusieron el endoso sobre aquella en que se haga el reembolso, porque esta es la utilidad que se supone reportaron de su negociación (1).

La letra de resaca no pagada, no devenga réditos desde el protesto, sino desde el día en que se emplaiza en juicio á la persona que deba reembolsarla (2).

442. En la letra perjudicada quedan muy limitados los derechos del portador, como ya hemos indicado. El pagador que haya aceptado, aunque no tenga fondos, y el librador que

(1) Arts. 554 y 555.

El art. 554 dice: que no pueden hacerse muchas cuentas de resaca, sino que una misma se ha de ir satisfaciendo de unos en otros hasta extinguirse con el reembolso del librador; pero esto no es posible, porque una de sus partidas es el recambio, que segun el artículo siguiente hay que graduarlo para cada una en particular, según las plazas en que estén puestos los endosos, y en las que se hagan los reembolsos, y no puede ser uno mismo para todos. Bajo este supuesto, hemos sentado que es variable esta partida.

(2) Art. 556.

Así lo dispone el art. 556, en oposición al prevenido en el 548, para las letras en general. El Sr. M. Eixalá pretende distinguir entre los gastos que comprende la cuenta de resaca, que pueden ser impugnados, y el capital de la letra primitiva que ya los devengaba, para conciliar estas disposiciones entre sí y con los principios del derecho. El Sr. V. y Caravantes, citando á otro autor, añade: que la diferencia se funda en que en las letras que no son de resaca, el librador y los endosantes se obligan á pagarlas en el término prefijado, y se consideran tácitamente obligados también á indemnizar al portador el perjuicio que le causa la falta
no haya hecho la provision, son solo los que deben responder del pago, y por consiguiente, los únicos contra los que tendrá que dirigir su reclamacion. Pero como el importe de la letra precisamente se ha de hallar en poder de alguno, y como pudiera suceder que el pagador no hubiera querido aceptarla, aun cuando estuviera hecha la provision, en cuyo caso contra nadie podrá reclamar, la regla que hemos sentado no puede menos de tener dos excepciones, fundadas en el principio de que ninguno debe lucrarse en perjuicio de otro, y son:

1.* La del pagador que tiene fondos, aunque no haya aceptado, el que, como todo comisionista que no cumple la comision que ha admitido, tiene que devolver los fondos que recibió para cumplirla, y que abonar los gastos y perjuicios que haya ocasionado su omision.

2.* La del librador y endosantes que se hallen cubiertos del valor de la letra en sus cuentas, ó con valores ó efectos del deudor, en los plazos en que se perjudica por falta de presentacion, protesto, ó notificacion, que tambien pueden ser obligados á pagarla con los fondos y valores de este, como si no estuviera perjudicada (1).

Estas son las únicas personas contra las que podrá repetir el tenedor de esta letra; pero no por los medios que hemos manifestado, sino en juicio ordinario, porque la resaca no está permitida mas que cuando ha sido protestada en tiempo y forma; y la caducidad es una de las excepciones admisibles contra la accion ejecutiva de las letras de cambio, por lo que solo de pago; y en las que lo son, no tiene lugar esta obligacion tácita con respecto á los intereses de los gastos de resaca, porque el pagador tiene derecho á impagnarlos, y no puede hacerlo hasta que se entable la demanda; pero á nosotros no nos parecen convincentes estas razones, porque la resaca es una letra como cualquiera otra, el portador tiene que haber desembolsado ó prometido su valor, como en las demas, y sacando su protesto en tiempo y forma, no hay una razón para que se le prive de los réditos que se les conceden á los portadores de otras letras.

(1) Arts. 490 y 541.
podría entablarse úlitmente contra el pagador aceptante, que reconozca su firma para quien nunca queda perjudicada (1).

Todas las obligaciones que provienen de las letras de cambio, deben ser cumplidas con puntualidad, porque está prohibido á los jueces conceder plazo alguno á los deudores, sin consentimiento del acreedor (2).

No habiéndose deducido en juicio también caducan á los cuatro años de su vencimiento todas las acciones que provienen de ellas si no tienen otro plazo mas corto, háyanse, ó no protestado (3).**

(1) Art. 549.

* * * Ni la facultad de reclamar contra el librador que no hizo provision de fondos, ni la de repetir contra este y los endosantes que se hallen cubiertos del valor de la letra, pueden á nuestro juicio utilizarse por medio de una ejecución, porque una y otra están fundadas en pruebas que no se podrán practicar muchas veces en el corto término de los diez días que se conceden con este fin en el juicio ejecutivo; y una vez alegada la caducidad de la letra, no habrá mas remedio que suspender este procedimiento. Solo en el caso de que el librador ó los endosantes confesaran desde luego que se hallaban cubiertos del valor de la letra, ó que no estaba hecha la provision, y se negaran, sin embargo, á pagarla, sería en el que se pudiera muy bien proceder ejecutivamente contra ellos, no en virtud de la letra, sino de su confesión.

Otra duda puede suscitarse todavía con respecto á los mismos, en vista de las disposiciones de los artículos citados, y es la de si se los podrá compelir á que afiancen ó depositen su valor, cuando el perjuicio consista en que no esté aceptada ni protestada. Opinamos por la afirmativa: pero creemos que pocas veces llegará á conseguirse este objeto, si ellos no se prestan voluntariamente; porque antes de ser condenados á afianzar, es probable que venza la letra y que se pueda pedir su pago.

(2) Art. 556.

(3) Art. 557, y Recurso de injusticia notoria de 28 de abril de 1865.

Esta prescripción especial parece que solo debe tener lugar cuando estén giradas, aceptadas ó endosadas por comerciantes, ó procedan de operaciones de comercio, pues en los demás casos no tienen el concepto de operaciones mercantiles y están sujetas al derecho civil según el artículo 434.
CAPITULO IV.

DE LAS LETRAS IMPERFECTAS Y FALSIFICADAS, Y DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE EXPIDEN EN VIRTUD DEL CONTRATO DE CAMBIO.

443. Para que las letras produzcan los efectos que hemos dicho, es preciso que se expidan con todos los requisitos enumerados en su respectivo capítulo, y que estos sean reales y efectivos; porque si se omite alguno, quedará imperfecta, y si no son los mismos que debe contener sino otros distintos, que no sean exactos ó verídicos, estará falsificada. Pero sucede á veces que el interés de los contratantes exige que no los contenga todos, y por no expedir una letra imperfecta, dan á otro la comision de pagar por medio de una libranza, que es otro documento diferente, ó se encarga el librador mismo de hacer el pago, expidiendo á la orden del tomador un vale ó pagaré; y acontece también que celebran el contrato dejando al arbitrio de este que lo lleve á efecto en todo ó en parte, en cuyo caso se le dá una carta orden de crédito para que haga de ella el uso que le convenga.

Todos estos documentos pueden proceder del contrato de cambio á mas de las letras perfectas e imperfectas, y todos producen efectos diferentes de estas y aun entre si mismos. Resta pues; ahora, que veamos los que produce cada uno, para concluir esta materia.

SECCION PRIMERA.

De las letras imperfectas y falsificadas.

444. La imperfeccion de la letra procede siempre de la falta de alguno de sus requisitos; pero no todos tienen igual importancia, porque unos afectan la validez de la negociacion civil y mercantilmente considerada, y otros solo esta califica-
ción, y por consiguiente no todas las faltas deben producir las mismas consecuencias.

La cantidad que se ha de pagar, la persona á quien ha de ser pagada, y la firma del librador son circunstancias tan interesantes, que faltando alguna no se podría exigir el pago; no habría letra perfecta ni imperfecta, ó lo que es lo mismo, no produciría obligacion ni accion por ningún derecho (1).

Los demás ya no son de tanta transcendencia, porque no afectan la esencia de la obligacion, sino su origen ó el modo de cumplirla; y aunque se omitan, puede, sin embargo, la letra producir efectos, porque al fin es la escritura de un contrato que debe cumplirse de la manera que sea mas conforme á la voluntad de los que lo han celebrado.

La regla general en esta materia es: que debe considerarse como un pagaré á cargo del librador y en favor del tomador, y que sus efectos son los mismos que los que producen estos documentos, considerándose la aceptacion que se ponga en ellos como un afianzamiento ordinario (2).

Pero tambien esta regla tiene sus excepciones; porque el pagaré, para producir los que el derecho mercantil le atribuye, necesita contener, como las letras, la fecha, el origen y especie de valor, y sobre todo la circunstancia de estar expedido á la orden; y cuando falte alguno de estos, tampoco habrá un pagaré que represente un contrato de comercio, sino un documento en que se consigne una promesa de pago, cuyo cumplimiento solo podrá exigirse con arreglo á las leyes comunes sobre préstamos. Así, pues, sólo en el caso de que no se exprese la persona á cuyo cargo se girá, el lugar ó la época en que debe ser pagada, ó en el de que se expida para ser pagada en la misma población, será cuando merezca el concepto de pagaré mercantil, y producirá los efectos que diremos al ocuparnos de ellos (3).

(1) Art. 571.
(2) Arts. 429 y 458.
(3) Arts. 563 y 570.
445. La letra falsificada también es letra defectuosa; pero este defecto no puede equipararse ni confundirse con el de la imperfección, porque proviene de distintas causas, y produce diversas consecuencias.

La falsedad no consiste en omitir requisitos, sino en suponer los que no son ó no existen realmente; y puede cometerse de cuatro modos:

1.° Poniendo un lugar por otro.

2.° Expresando un valor recibido por uno en cuenta ó prometido, ó afirmando que se recibió en dinero siendo en género, ó vice-versa.

3.° Poniendo una fecha que no le corresponda.

4.° Suplantando el nombre ó la firma del librador, del pagador ó del tenedor, ó aumentando la cantidad.

Las tres primeras son poco transcendentalles, porque no afectan la validez de los endosos, ni impiden que la persona á cuyo cargo esté expedida acepte, pague, y extinga todas las obligaciones; y por lo mismo, no pueden producir otro efecto que el de hacer responsables á sus autores de los daños que ocasionen si perjudican algún tercero.

En los de la cuarta se sigue la regla de que el que las comete responde siempre de sus resultas, y en su defecto el primero á quien la transmite. Pero como estas recaen sobre las obligaciones y los derechos, y después de cometidas son objeto de otras muchas negociaciones celebradas de buena fé, que no podrán cumplirse, y que aun quando se cumplan, darán margen á otras reclamaciones luego que se descubra el engaño; es indispensable examinar separadamente los medios por los que pueden cometerse cada una de estas suplantaciones, sus efectos, las personas que pueden reclamar, y el órden con que han de proceder hasta encontrar el verdadero responsable.

446. La del librador se comete poniendo un nombre imaginario, ó figurando la firma de una persona existente. De cualquiera de los dos modos falta la persona responsable; porque aun cuando exista la que se supone, como que no ha in-
tervenido en el negocio, no puede resultar contra ella ninguna obligación. La letra es nula, porque está expedida con dolo; el pagador, aunque la haya aceptado, se librará de pagar la probando la falsedad; y el primer tomador tendrá que repetir su importe y los perjuicios contra el que se la dió, si lo conoce, y si no, sufrirá las consecuencias de su imprudencia, descuido o negligencia, que no es poca la que comete el que recibe y el que paga un documento de esta clase á una persona desconocida (1).

No sucederá lo mismo con los que de buena fe la adquieran por endoso, porque sus contratos son ciertos, sus endosos verdaderos, y pueden reclamar el reembolso como si no existiese semejante falsificación, cuando se haya sacado el protesto en forma. Mas si no está sacado en tiempo, solo podrán repetir por los medios ordinarios de unos en otros hasta llegar al autor de la falsedad, porque la caducidad no puede servir de obstáculo, una vez descubierto el fraude, para que sufra sus consecuencias el que lo haya cometido, ó el primer engañado: y lo mismo parece que debe decirse con respecto al pagador, que no lo advirtiese hasta después de haberla satisfecho (*).

(1) Art. 463.

(*) La doctrina que exponemos en esta sección con respecto á falsedades, no está tomada de nuestro derecho mercantil que no contiene acerca de esta materia mas disposiciones que la que dejamos citada del pagador aceptante, que puede, á pesar de su aceptación, alegar la falsedad; pero está fundada en los principios del derecho y de la equidad, y con arreglo á ellos decimos, que, aun en el caso de haber pagado, puede el que hizo el pago repetir contra el que lo recibió, y volver á recobrar lo que satisfizo; y que este deberá después repetir contra su cedente, y así los demás hasta llegar al autor del fraude ó al primer tomador que, á falta de este, siempre responde de sus resultas, aun cuando no haya sido cómplice; porque es el que, si no por malicia, por falta de precaucion, sino por menos, ha dado márgen á que circule el documento falsificado, y solo puede culpárse á sí mismo por haberlo tomado de una persona desconocida ó insolvente, no debiendo ignorar que aun en el supuesto de ser legítimo tendría que venir á repetir contra él si era protestado. Pero to-
La de este se puede también cometer, girando la letra á cargo de una persona que no exista, ó suplantando una aceptación con firma figurada. De ambas maneras hay falsedad, y carece la letra de una garantía; pero produce, no obstante, obligaciones legítimas, y sus efectos se diferencian mucho de la anterior, poque su valor tiene que existir por necesidad en poder de quel que expide ó de aquel á cuyo cargo esté girada; y aunque haya habido endosos, ejercitando las acciones que hemos visto competen al tenedor de la letra protestada por falta de pago, se vendrá á parar al librador verdadero responsable, y contra quien se podría reclamar del mismo modo no siendo aceptada ó pagada, aun cuando fuese legítima ó no hubiera intervenido la falsificación; quedándole siempre su derecho á salvo para repetir contra el pagador, si tenía hecha la provision.

davía puede ofrecer dificultad el fijar la clase de responsabilidad que debe pesar sobre los endosantes de buena fé y sobre el portador ó cobrador, porque al fin, este cobró una cantidad que realmente se le debía, y habiendo sido pagada parece que debieran quedar extinguidas las obligaciones de los otros, puesto que se cumplió lo que prometieron, y sufrir las consecuencias de este hecho el pagador que debió no pagar sin cerciorarse, no teniendo carta de aviso, ó debiendo ser también falsa aunque la tuviera, y que indudablemente los ha perjudicado, privándolos de repetir de unos en otros por medio de la resaca que no pueden librar por no haber sacado el protesto como se hubiera hecho si no la hubiese pagado. Fundados en estas razones, hemos visto autores que aseguran no se les puede obligar más que á que prueben la veracidad de la firma de su cedente; pero nosotros no podemos conformarnos con esta opinión; porque si de buena fé han endosado y cobrado, de buena fé se ha pagado también, y aunque de buena fé, han sido al fin endosantes de un documento nulo é ilegítimo; sus contratos han estribado en un supuesto falso, y descubierta la falsedad, todos quedan invalidados, y el órden, la equidad, la buena fé y el interés mismo del comercio exigen que cada uno se entienda con el que ha contratado, y por consiguiente que el pagador recobre lo que pagó del que lo cobró, ejercitando la acción que produce el cuasi-contrato del pago de lo indebido, porque aun cuando se adeuda aquella cantidad, no era el quien debía satisfacerla, sino el cedente contra quien podrá luego repetir el portador; y así los demás hasta que recaiga el perjuicio en el verdadero responsable.
Pero como pudiera suceder que la suplantación de la firma de este último, cuando consista la falsedad en suponer la aceptación, haya sido cometida por algún tenedor, y que se ocasionen perjuicios al librador por esta causa, indudablemente tendrá derecho para reclamar contra el falsificante la competente indemnización, repitiendo de unos en otros hasta encontrarlo.

El portador que dejase perjudicar una letra de esta clase por no sacar el protesto, no podría entablar las acciones que le competirían si no estuviera perjudicada; pero no perdería tampoco por esta falta el derecho de repetir contra el que se la cedió, a fin de que este lo haga contra los que le precedan, hasta llegar al verdadero responsable, una vez probada la falsedad (*).

448. La de la persona del tenedor ó portador se comete figurando su firma en un endoso, ó presentándose á cobrar la letra como portador legítimo el que la haya robado, hurtado ó encontrado.

Pero esta, de cualquier modo que se cometa, puede y debe descubrirse antes del pago, si el verdadero dueño, cumpliendo con su deber, y ejercitando el derecho que hemos visto le asiste, pide la retención y el embargo en el día de su vencimiento; en cuyo caso, probada la falsedad, cobrará su importe como dueño, y el tenedor, si lo es de buena fé, tendrá que repetir contra el que se la endosó, y así los demás hasta llegar al endoso fraudulentamente. Mas si por no acudir a tiempo no se embarga y es pagada, habrá habido morosidad y culpa por

(*) Esta doctrina está fundada en las mismas razones que hemos expuesto en la nota anterior con respecto á la responsabilidad de los endosantes cuando no se sacó protesto; debiendo tenerse presente que se trata del protesto por falta de pago, porque si consistiera la falsedad en haberse suplantado la aceptación, y se descubriera antes del vencimiento, los que la hubiesen endosado después de cometida no podrían alegar la caducidad para desentenderse de afianzar ó depositar su importe, porque no habiéndola trasmitido con la obligación de presentarla para este objeto, no podían alegar que el tenedor faltó á las condiciones con que le fué cedida.
su parte; y no siendo justo que las consecuencias de sus faltas recaigan sobre los que no las han cometido, no tendrá derecho a exigir del pagador de buena fe ni del cobrador y endosantes que le hayan precedido, sino que designen la persona á quién pagaron ó de quien recibieron la letra y prueben su identidad, procediendo de unos en otros hasta el falsificador ó el que la recibió de él, contra el que podrá repetir su importe; y lo mismo debe decírselo del pagador que con descuento ó sin él la hubiese satisfecho antes de su vencimiento (1).

449. En la que consiste en alterar la cantidad, hay siempre la obligación legítima de pagar ó reembolsar la primitiva y verdadera, sin que el librador ni los endosantes puedan desentenderse y dejar de cumplirla. En cuanto al aumento ó suplantación, habrá que seguir la regla que en todas las demás; esto es, repetir de unos en otros luego que sea descubierta, hasta llegar al que la aumentó (*).

450. Estos son los efectos que pueden producir estas suplantaciones y los que á nosotros nos interesa examinar; añadiendo que cuando la falsificación se cometa en documentos correspondientes á la Denda del Estado, se retiene el documento en las oficinas, se practican las diligencias y comprobaciones oportunas para asegurarse de su falsedad á presencia

(1) Art. 495.

(*) En esta falsedad como en la primera, es claro que el aceptante no puede ser obligado á pagar el aumento, aun cuando no haya tenido la prevision de expresar la cantidad por qué aceptaba; pues si se exime probando la falsedad por el todo, también deberá quedar exento cuando consista solo en parte. Pero puede ocurrir una duda respecto al derecho que le debe asistir contra el librador, en el caso de haberla pagado sin advertirla, porque puede suceder que esté librada pagadera, sin más aviso, y entonces no era fácil descubrir la falsedad antes de pagarla. Si así sucede, no dudamos asegurar que el librador debe abonarle íntegramente lo que haya pagado, salvo su derecho para repetir contra el que cobró; pero si tenía carta de aviso en que se le fijaba cantidad, no podrá reclamar contra él mas que la que le designase, y por el exceso tendría que repetir contra el cobrador. Esta doctrina no se opone á lo resuelto en el párrafo VI, ley 26 del Digesto Mandati vel contra citada por otros autores.
del tenedor; y se inutiliza proveyéndole de un certificado, si lo pide, para que pueda repetir contra quien le convenga sin perjuicio de seguir el procedimiento criminal y de imponer al falsificador las penas correspondientes (1).

SECCIÓN SEGUINDA.

De las libranzas.

451. La libranza propiamente dicha, es un documento por el que un principal manda a un subalterno ó dependiente que pague cierta cantidad á la órden de un tercero. Pero también se expiden de comerciante á comerciante, á consecuencia del contrato de cambio y muchas veces en virtud de otras operaciones de comercio, y en estos casos tienen el concepto de actos mercantiles (2).

(1) Real órden de 18 de marzo de 1852.

Las penas con que se castigan las falsedades cometidas por particulares en las letras de cambio y demás documentos mercantiles, son la de presidio mayor y multa de 100 á 1.000 duros. Las de las inscripciones ó títulos de la Deuda pública, libranzas del Tesoro ó cualesquiera otros documentos de crédito, ó valores del Estado, cadena temporal y multa de 500 á 5.000 duros. Pero es preciso tener presente que cuando fuese estimable el lucro que los falsificadores hubiesen reportado ó se hubiesen propuesto reportar de la falsificación, la multa en ambos casos será la del tanto al triplo del lucro, á no ser que el máximo de esta fuese menor que el mínimo de la señalada respectivamente para cada uno que entonces será esta la que se les aplique. Los que habiendo adquirido de buena fe los títulos ó efectos de la Deuda pública ó los documentos de crédito ó valores del Estado falsificados, los expendieren después con conocimiento de la falsedad, también incurrirán en la pena del tanto al triplo del valor del documento. Artículos 224, 225, 227 y 258 del Código penal. De las penas en que incurrirán los falsificadores de títulos al portador y billetes de los Bancos, ya hemos hecho mérito en la nota 3* del número 199.

(2) Art. 558.

** Las libranzas están tomadas de las Ordenanzas de Bilbao. El Código francés no reconoce mas que los vales ó pagarés que también conocían las primeras: y el nuestro trata de unas y otros á la vez, sin em-
Por medio de ellas se encarga á otro que haga un pago al tenedor, como en las letras, con las que están equiparadas, porque se expiden como estas en las mismas clases de papel timbrado, y con la mayor parte de sus requisitos, y producen los mismos efectos; pero también hay entre unas y otras diferencias muy esenciales: diremos primero los requisitos que han de contener para que merezcan este concepto y produzcan los efectos que las leyes le atribuyen, y los que son accidentales, y después veremos en lo que convienen y en lo que se diferencian.

452. Ha de contener por necesidad:

1.° La cantidad que se manda pagar.

2.° El nombre y apellido de la persona á cuya órden se manda hacer el pago.

3.° El nombre, apellido y domicilio de la que haya de pagar.

bargo de haber entre aquellas y estos notables diferencias. En su origen no fueron lo que son hoy, sino un medio de hacer pagamentos, como dicen las mismas Ordenanzas. Se expedían como dinero contado, y debían los tenedores presentarse al instante á cobrarlas cuando no tuvieran plaza, y devolverlas á sus dueños si no eran pagadas dentro de tres días naturales, contados desde su fecha, pena de perder el recurso contra ellos. De lo que se infiere que ni se pagaban fuera de la población, ni se protestaban. Nuestro Código es el que las ha elevado á la clase de documentos endosables, y les ha atribuido los efectos de las letras.—Ordenanzas de Bilbao, cap. IV, núm. 7.

Las libranzas á la órden de comerciante á comerciante, pero que no procedan de una operación de comercio, y las que procedan y no estén giradas entre comerciantes se reputarán actos mercantiles? El art. 538 del Código, no exige mas que el que estén giradas de comerciante á comerciante, para que produzcan las mismas obligaciones que las letras de cambio, y por consiguiente, para que se tengan por actos mercantiles; y esto mismo, es lo que dispone el 434 con respecto á las letras, porque la exigencia de que procedan de operaciones de comercio, no recae sobre la libranza, sino sobre los pagarés. En la primera edición de esta obra hemos manifestado ya, que en esta materia debe atenderse á la naturaleza de los actos mas bien que á las cualidades personales de los que los ejecutan, porque la ley del comercio y su jurisdicción no se establecen
4.° El origen y especie del valor que representen.
5.° La expresión de que es libranza.
6.° La fecha.
7.° La firma del librancista.

Pueden expresar, como accidentales:
1.° La época del pago cuando convengan en fijar alguna.
2.° El lugar donde deba efectuarse cuando no lo sea el del domicilio del pagador (1).

Sin la concurrencia de todos los primeros no habrá libranza, pero tampoco ocasionará la nulidad la falta de cualquiera de ellos; pues aunque se omitan el nombre del pagador, el lugar del pago y la expresión de ser libranza, podrá valor como pagaré. Si no contiene la cláusula de estar expedida á la orden, el origen y especie de valor y la fecha, será una promesa de pago sujeta á las leyes comunes, y solo cuando no contenga la cantidad, la firma del librancista, y el nom-

para las personas sino para la profesión ó para los actos mercantiles; a lo que tenemos ahora que añadir, que estando declarado por regla general en el art. 2 de nuestro Código que los actos mercantiles se sujeten á la ley y al fuero del comercio aunque no sean comerciantes los que los hayan ejecutado, y repitiéndose esta misma disposición así en la segunda parte del 434 con respecto al giro y aceptación de las letras que procedan de operaciones de comercio como en el 558 para los pagarés que traigan la misma procedencia, no habría consecuencia en estas disposiciones, si no se aplicaran igualmente á las libranzas, y que lo que debe inferirse de las palabras de estar expedidas de comerciante á comerciante, que se añaden en la primera parte del 434 para las letras, y en el 558 para las libranzas, es que la expedición y giro de estos documentos entre comerciantes, se considera siempre mercantil sin necesidad de probar que provienen de operaciones de comercio que es lo que se exige para los pagarés y para las mismas letras cuando no sean comerciantes los que las hayan librado ó aceptado. En nuestra humilde opinión todo documento expedido á la orden debería estar sujeto á la legislación y jurisdicción del comercio, porque esta misma cláusula indica que su expedición no es un negocio común, ó lo que es lo mismo, que se expide para que se pueda ceder y trasmitir por endoso, y por consiguiente para negociar utilizando el crédito.

(1) Art. 563.
bre y apellido de la persona á quien se haya de pagar, será cuando se anule, como hemos dicho hablando de las letras (1).

453. Conviene con estas:

1.° En que se ceden y negocien con las mismas obligaciones y responsabilidades, trasmitiendo su propiedad por el endoso.

2.° En las obligaciones del librador, con respecto al aviso, la provision de fondos y el reembolso (*)

5.° En las del tenedor, con respecto á la presentacion, para el pago y el protesto por su falta.

4.° En que se perjudican si no se saca este protesto.

5.° En que admiten fianza ó aval.

Y 6.° En que producen los mismos efectos (2).

454. Se diferencian:

1.° En la expresion de que es libranza.

2.° En que se puede omitir en ellas la época del pago, porque se suponen pagaderas á su presentacion (5).

5.° En que el portador no tiene derecho á exigir la aceptacion aunque tengan plazo, y por consiguiente, ni el pagador tiene necesidad de llenar este requisito, aunque lo exija el portador, ni este de presentarla con este objeto, ni de protestarla por esta falta (4).

4.° En que no deben expedirse á plazo á contar desde la vista, porque no puede saberse cuándo se ha de principiar á contar no presentándose á su aceptacion (*)

(1) Art. 570.

(*) Según las Ordenanzas, en el capítulo y número citado, la provision de fondos estaba hecha, porque se consideraba y suponia siempre que se hacian como dinero contado; pero ahora puede suceder que no lo esté, y será preciso que el librancista llene este deber, y si no lo cumple se podrá repetir contra él en el caso de no haber sido pagada ni protestada en tiempo hábil, o lo que es lo mismo aunque esté perjudicada.

(2) Arts. 558 y 562.

(3) Art. 559.

(4) Art. 560.

(*) Aunque no se puede exigir del pagador que acepte una libranza, no hay tampoco inconveniente en que lo haga si le acomoda, y bajo este
5.° En que solo se protestan por falta de pago (1).

6.° En que el tenedor no puede dirigir sus reclamaciones contra el pagador por esta falta, porque no la ha aceptado; y por consiguiente, en que no tiene necesidad de notificar el protesto al librador y endosantes para conservar integros sus derechos contra ellos.

7.° En que no tiene más que dos meses contados desde el protesto, si es pagadera en territorio español, y si en el extranjero, desde que sin pérdida de correo pudo llegar el testimonio de este al domicilio del demandado contra quien repite, para reclamar de ellos el reembolso, y si los deja pasar, queda perjudicada (2).

455. Estas son las diferencias, ó mejor dicho, las excepciones de las libranzas, con respecto á las letras de cambio. En lo demás, unas y otras se gobiernan por los mismos principios, y están sujetas á las mismas disposiciones en cuanto á las formalidades del aval, endosos, protestos y demás derechos, obligaciones y efectos, y por lo mismo les son enteramente aplicables las reglas y doctrinas que en las letras dejamos sentadas (3).

SECCION TERCERA.

De los vales ó pagarés.

456. El vale ó pagaré, generalmente considerado, es un documento por el que uno se obliga á satisfacer cierta cantidad.

supuesto también podrán librarse á plazo, á la vista, que se contará en este caso desde la aceptación como en las letras. Mas si se niega á ponerla, no se le puede obligar, y todo lo que se deberá exigir de él en este caso es que ponga un visto ó á pagar en tal día para que conste que se le ha presentado; por eso no decimos, que no pueden, sino que no deben expedirse de este modo para evitar estos inconvenientes.

(1) Art. 560.
(2) Art. 567, y Recurso de injusticia notoria de 16 octubre de 1861.
(3) Arts. 562 y 564.
Puede expedirse á favor de una persona fija ó á su órden, y para ser pagado en el mismo punto en que se expidió ó en otro diferente; de lo que se deduce que no siempre provendrá de un contrato de cambio.

Comunmente proceden de préstamos y también de liquidaciones de cuentas; pero sea esta ó otra la causa que lo motive, con tal que tenga el concepto de negocio mercantil, y esté expedido á la órden, se equipará á las letras y libranzas, y surtirá los mismos efectos (*); mas para esto es necesario que contenga también otros requisitos y solemnidades, y aun así hay todavía entre estos y aquellas diferencias muy esenciales, que indicaremos después de haber manifestado los requisitos de que han de estar revestidos, y las disposiciones que son comunes á todos estos documentos (1).

457. El pagaré, como la letra y la libranza, ha de llevar el sello que corresponda, y ha de contener:

1.° La cantidad que se ha de pagar.

2.° El nombre y apellido de la persona á cuya órden se ha de hacer el pago.

3.° El origen y especie de su valor.

4.° La fecha.

(* ) Con el vale ó pagaré pueden suscitarse las mismas dudas que sobre la libranza, cuando se trate de su calificación y de la ley y fuero por el que deban decidirse las cuestiones que se promuevan sobre su cumplimiento; esto es, si además de provenir de operaciones de comercio, ha de ser necesario que estén expedidos por comerciantes para que se tengan por actos mercantiles. El art. 558 no exige al parecer más que el que procedan de operaciones de comercio en conformidad á lo dispuesto en el art. 2; pero según el 434 parece que es indispensable también que sean comerciantes las personas entre quienes esté expedido. Nosotros, que no vemos ni en las libranzas ni el pagaré más que la escritura de un contrato, ya hemos dicho al tratar de las primeras, que en nuestra opinión no debe atenderse mas que á la naturaleza de éste, y que la calidad de las personas no debe ofrecer mas que una presunción en caso de duda. (Véase la nota núm. 451, la Decision de competencia de 5 de agosto de 1857, los Recursos de casación de 29 de enero y 28 de junio de 1859, y el de Injusticia notoria de 28 de marzo de 1860.)

(1) Arts. 558 y 570.
Y 5.° La firma del que lo ha de pagar.

Todos estos requisitos son indispensables. La omisión de la cantidad, la de la firma del pagador y la del nombre del que lo ha de cobrar, lo anularían, aunque se mandara pagar al portador para suplir la del último (1).

La de la cláusula de estar á la órden, la del origen y especie del valor y la de la fecha, le harán perder el concepto y la cualidad de mercantil (2).

La época del pago, si se ha fijado; el punto en que se ha de hacer; si es distinto de aquel en que se expide; y la especie de moneda en que se ha de pagar, son circunstancias accidentales que penderán de las condiciones con que se haya celebrado el negocio de que proceda (3).

458. Conviene con las letras: en que se endosa, protesta, y reembolsa como ellas, por falta de pago; y con las libranzas en que no se acepta, ni protesta por esta falta, ni puede

(1) Art. 574.
(2) Arts. 558, y 570.
* La cláusula relativa al origen y especie de valor es de importancia para calificar el acto. Las de valor recibido, valor entendido ó en cuenta, solo deben inducir la presunción de ser ó no mercantil según que esté expedido entre comerciantes ó entre los que no lo sean.
(3) Art. 553.
* El artículo que citamos exige, lo mismo para los pagarés que para las libranzas, la época del pago y la expresión del lugar en que se ha de hacer; nosotros no podemos considerarlos como necesarios, sino como accidentales, porque sin ellos puede subsistir, y mas cuando otros artículos establecen lo que se ha de hacer si se hubiesen omitido.

No negaremos que contra esta opinión puede hoy alegarse la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 14 de noviembre de 1862, de que parece deducirse, que los que no reúnan todos los requisitos que exige el artículo que citamos, no son mercantiles, sino simples ó comunes; pero creemos que esta decision no debe entenderse de los que la misma ley mercantil dispensa, digámoslo así, estableciendo el modo de suplirlos cuando se han omitido, sino de los que afectan la calificación del acto de que proceden, como sucedía en el caso que motivó dicha sentencia, en el que faltaba la cláusula del origen y especie de valor, sin la que no pueden tener el concepto de mercantiles, como decimos en el texto.
librarse á plazo á contar desde la vista, ni ejercitarse accion alguna contra los endosantes después de dos meses contados desde el protesto ó desde su introduccion en el reino, según que fuese pagadero en territorio español ó fuera de él (1).

459. Pero concurren en este además otras circunstancias especiales, que son las que lo caracterizan y en las que consiste su diferencia.

Estas son:

1.ª Que no se expide á cargo de un tercero, sino que una misma persona es la que lo libra y la que lo paga.

2.ª En que no hay necesidad de dar aviso, ni de hacer provision de fondos, ni le son aplicables, por lo mismo, las obligaciones relativas á este deber del librador.

3.ª En que se expide para ser pagado dentro de la misma poblacion.

4.ª En que vence su plazo, y es cobrable á los diez días á contar desde su fecha, cuando no tengan otra época determinada (2).

5.ª En que el tenedor no puede desentenderse de recibir solo una parte de su importe, si no se le paga por completo; debiendo en este caso anotar al dorso la cantidad que recibe, y protestarlo por la que reste (5).

460. Salvas estas excepciones, todo cuanto hemos dicho de las letras y de las libranzas es aplicable á los pagarés, fal-

(1) Arts. 558, 562, 564 y 568, y Recurso de injusticia notoria de 16 de octubre de 1861.

* Con respecto al pagaré pocas veces podrá tener lugar el reembolso por medio de la letra de resaca, porque es pagadero dentro de la misma poblacion; pero no obstante puede suceder que se haya endosado en otro punto diferente de aquel en que se haya expedido, y cuando concurre esta circunstancia no encontramos inconveniente en que se emplee este medio en vez de la ejecucion.

(2) Art. 564.

(3) Art. 565.

** No alcanzamos el fundamento de esta excepción. El pago en parte puede ocasionar perjuicios al acreedor en el cumplimiento de todas las obligaciones mercantiles, y nosotros en ningún caso le obligaríamos por
tándonos solamente que advertir con respecto á estos y á las libranzas, que las acciones que producen, prescriben á los cuatro años de su vencimiento como las de las letras, y no es admisible en juicio después ninguna acción que proceda de ellos (1).

SECCION CUARTA.

De las cartas-órdenes de crédito.

461. Se llaman cartas-órdenes de crédito aquellas por medio de las que se encarga á un corresponsal ó á un amigo, residente en otra población, que entregue al que la conduce una cantidad determinada, ó la que pueda necesitar.

Son de uso muy frecuente en el comercio, y ofrecen grandes ventajas: porque cuando uno duda si podrá realizar los negocios que se propone en el punto á donde se dirige, y por consiguiente, si necesitará allí algunos fondos, en vez de una letra que tendría que negociar tal vez con detrimento, si no los necesitaba, toma una carta-órden de crédito, de la que hace uso si le conviene, y si no, la devuelve á la persona que se la ha entregado.

Estas cartas representan un contrato de cambio condicional: porque cuando no se ha pactado otra cosa, se entienden siempre dadas para que aquel á cuyo favor se expiden, haga el uso que convenga á sus intereses, cobrándolo en todo ó en parte la cantidad que designan, ó devolviéndolas sin presentar lo mismo á que lo recibiera de este modo. Consideramos justa la decisión de las Ordenanzas de Bilbao en su número 5.º, capítulo XIV, que dejaba al tenedor la libertad de recibirlo ó no en parte, según mejor conviniera á sus intereses.

(1) Arts. 557 y 569.

Los artículos citados solo hablan de las acciones de las letras, libranzas y pagarés; por consiguiente, las que provengan del contrato de cambio, cuando los interesados hayan convenido en que se cumpla por otro medio, prescribirán por el término ordinario lo mismo que cuando las libranzas y pagarés no tengan el concepto de operaciones mercantiles, como hemos dicho en la segunda nota del número 442.
tar, y también bajo el supuesto de que el que la dá no responde de que la pagará aquel á quien va dirigida. Por manera, que el que llegue ó no á tener efecto el contrato, pende: en primer lugar, de que el que la recibe la quiera presentar, y en segundo, de que quiera pagarla la persona á quien se dá este encargo.

Por esta razón no pueden expedirse con los mismos requisitos y formalidades que los demás documentos que se libran en virtud de este contrato, ni producen los mismos efectos. Pero sí deben contener algunos para que produzcan los derechos y obligaciones consignantes á la negociación que las motiva, y para quedar sujetas á las leyes especiales del comercio, porque no todas son tenidas como escrituras de contratos mercantiles. Diremos primero cuáles son estos, y luego nos haremos cargo de los efectos que pueden producir, según que se hayan ó no cumplido las condiciones con que se expiden.

462. Los requisitos que han de concurrir en ellas son:

1.° Que estén dadas de comerciante á comerciante para atender á operaciones de comercio (1).

2.° Que contengan una cantidad fija, como máximum de la que se haya de entregar (2).

3.° Que estén dadas á favor de una persona determinada y no á su órden (3).

Si no reúnen estos tres requisitos, no se considerarán como cartas-órdenes de crédito, sino como una simple recomendación, sin ninguna especie de garantía (4).

(1) Art. 572.
(2) Art. 574.
(3) Art. 573.

* La cualidad de estar expedida á la órden no parece que debe viciar la carta mientras no se endose, y sea la misma persona á cuyo favor se ha expedido la que se presente á cobrarla, porque no puede dudarse que á aquella fué á la que quiso que se pagara el que la expidió. Mas si llegara á endosarse, ya no produciría efecto alguno, porque el portador no era la persona designada expresamente en la misma.

(4) Art. 574.

** Hoy necesitan además que se extiendan en papel timbrado del sello
Pero pueden, y aun deben contener además como accidental el plazo, dentro del que se ha de hacer uso de ellas, porque si no, es preciso acudir luego á la autoridad judicial para que lo fije si se tarda en presentar; y si se quiere, tampoco hay inconveniente en que exprese si ha sido ó no abonado su importe, porque también es esta una circunstancia que puede influir mucho en sus consecuencias.

Las obligaciones penden del éxito de las condiciones, y según que se hayan ó no cumplido, y que se haya pagado ó no anticipadamente su importe, será mayor ó menor el número de las que produzcan.

463. El que la da, siempre queda obligado á no revocar-la, mientras no concluya el plazo señalado en ella, ó el que señale el juez; á no ser que sobrevenga algún accidente que atenúe el crédito del que la ha recibido, sin haber satisfecho su importe; y si la revoca sin que intervenga esta causa, tendrá que responder de los daños y perjuicios que se originen (1).

Pero además de esta, que pesa sobre él del mismo modo cuando el contrato se cumple que cuando no, puede tener otra en cada uno de estos casos respectivamente, que deberá consistir, en devolver la cantidad recibida, si cobró su importe, al tiempo de expedir la carta, cuando el tomador no haga uso de ella, ó la persona á quien fué dirigida no quiera pagarla; ó en abonarle á esta lo que haya pagado cumpliendo su comisión, si tiene efecto el contrato (2).

464. Aquel á cuyo favor está expedida, tiene que devolverla si no la quiere presentar: pero como pudiera suceder que se le extraviara, ó que dilatara maliciosamente su presentación ó devolución, el que la da está autorizado para pedir que el juez le señale un plazo para usar de ella, cuando no lo

que corresponda, si se expiden por cantidad fija. Art. 33 del Real decreto de 9 de agosto de 1851.

(1) Arts. 576 y 577.
(2) Arts. 575 y 578.
tenga prefijado; y si pasado el que se le haya concedido, de cualquiera de estos dos modos no la devuelve, tendrá que afianzar su importe hasta tanto que conste su revocación á la persona á quien iba dirigida (1).

Si la presenta y la cobra, quedará el negocio concluido, si la había pagado de antemano; y si no, tendrá que pagar inmediatamente al que se la dió la cantidad que en virtud de ella haya cobrado. Debiendo advertir, que en este caso, es también un deber suyo acreditar la identidad de su persona, si el que la ha de pagar no la conoce; exigencia que tiene por objeto evitar una suplantación (2).

465. Las cartas-órdenes de crédito no se aceptan ni se endosan, ni se protestan, porque no lo permiten las condiciones con que se expiden. Pero como por medio de ellas se realiza, sin embargo, el contrato de cambio cuando son pagadas, compete también á los que las expiden, el derecho de reclamar ejecutivamente contra los que las cobran acreditando su recibo, la cantidad que hayan cobrado, con el cambio graduado por el que corra en la plaza en que se pagan, sobre aquella en que se haga la reclamacion; y por el interés legal de la deuda desde el día en que se entablén (3).

466. Los que las pagan, también pueden repetir la cantidad que hayan satisfecho contra el que les mandó pagar, como todo comisionista que ha desempeñado el encargo que se le confía por los mismos medios que lo pueden hacer estos, con tal que no se haya excedido; pagando mayor cantidad que el máximo designado, porque en este caso solo podrán repetir contra el comitente, según el tenor de la carta; y reclamar el exceso del que lo cobró con arreglo á lo que hayan pactado al tiempo de pagarle (4).

---

(1) Art. 579.
(2) Arts. 573 y 578.
(3) Arts. 576 y 578.
(4) Art. 575.
CAPITULO V.

DE LAS BOLSAS DE COMERCIO, DE LAS OPERACIONES QUE SE CELEBRAN EN EllAS Y DE LOS AGENTES QUE LAS INTERVIENEN.

SECCION PRIMERA.

De las bolsas de comercio.

467. Una de las instituciones más importantes para el comercio en los tiempos modernos, es la que con el nombre de Bolsa ha hecho indispensable la contratación rápida y extraordinaria que han establecido los pueblos. Siempre fue de necesidad la reunión de los comerciantes en lugares determinados, sobre todo, desde que el uso de las letras de cambio los obligó á entenderse mutuamente, para nivelar los giros respectivos de las diferentes plazas de la nación; pero el comercio exterior las hizo después más necesarias, y por eso vemos que en muchos pueblos mercantiles existían desde muy antiguo lugares destinados á este objeto, conocidas, principalmente en nuestra España, con el nombre de Lonjas ó casas de Contratación. Cuando los Gobiernos aumentaron las deudas públicas y estas tomaron el nombre de consolidadas, que quiere decir, deuda que no se amortiza en un tiempo dado, y cuyos capitales precisamente han de ser negociables: y más aun, cuando el precio de estos en el mercado era el determinante de negociaciones sucesivas de empréstitos, creció extremadamente la importancia de estos establecimientos; los mismos Gobiernos tuvieron que intervenir en ellos, por lo que tan de cerca les convenía para sus propias negociaciones; se crearon y reglamentaron las Bolsas, y se admitió en ellas á contratación los papeles que con el nombre de acciones han puesto en circulación los Bancos, las compañías de comercio,
y las empresas particulares, con lo que se han aumentado mucho las negociaciones.

Así por el fin con que se han establecido como por los objetos sobre que recaen los contratos que se celebran en estas reuniones, parece que las Bolsas de comercio debían ser los lugares en que más brillara la buena fe, que es el alma del comercio en todos los países adelantados; pero por desgracia no ha reinado en ellas como debía este principio tutelar; y muchas veces, quizá infinitas en el siglo presente, se han convertido por algunos, a quienes pudiéramos llamar tahures más bien que comerciantes, en casas de juego, en las que han alterado los valores públicos y privados á su placer, bien hacia la alza, bien hacia la baja; y jugando algunos más atrevidos ó más bien relacionados con mejores datos, y formulando todos sus contratos, en documentos aéreos sin garantía efectiva, han comprometido la buena fe y la desgraciada credulidad de las personas honradas que contrataban con ellos. Hasta los mismos Gobiernos han escogido el campo de las Bolsas para hacerse la guerra entre sí, de un modo moral en verdad, pero mas fuerte aun que la misma invasión á mano armada en el país extraño, prohibiendo la circulación de sus efectos públicos; porque esta prohibición equivale á declarar, que no se reconoce á la nación á que pertenecen en posibilidad de cumplir sus obligaciones; y si este ejemplo es secundado por otras, puede decirse que aquel país anatematizado, con solo este acto ya no figura en el mapa de las naciones.

Esta ligera reseña da bastante á conocer, cuán delicada y escabrosa es esta parte de la legislación mercantil; que las Bolsas de comercio, aunque muy útiles e interesantes, son una institución de que se puede abusar como de otras, y que no es de extrañar por lo mismo, que se haya legislado con tanta variedad sobre esta materia entre nosotros, que después de un crecido número de disposiciones dictadas con el objeto de completar esta parte de nuestra legislación comercial, nos encontramos todavía regidos por una ley interina y sujeta á reformas, lo que nos obliga á limitar este trabajo al examen
de los principios generales, sentando doctrinas que al parecer pueden ser admitidas cualquiera que sea últimamente la ley que se promulgue, sin dejar por esto de citar las disposiciones de la provisional que nos rige cuando se encuentren consignadas en ella; bajo cuyo supuesto, nos haremos cargo, en primer lugar de la Bolsa, de las personas que deben concurrir a sus reuniones, y de su régimen y gobierno. En segundo, de los contratos y operaciones que se hagan en ella, y del modo de celebrarlas; y en tercero, de los agentes auxiliares que intervienen en estas negociaciones del colegio de los mismos, y de la junta sindical (*).

(*) Aunque en nuestra España existían casas de contratación con sus ordenanzas particulares, desde tan antiguo, que puede decirse que fue la cuna de estos establecimientos, pero no había una Lonja que satisfaciera las necesidades del comercio en la actualidad; y una vez reformado este ramo de la legislación, adoptando por base principios de justicia universal, los usos recibidos por las naciones civilizadas; y la conveniencia del comercio mismo, se creyó de necesidad completarla con una institución que lo fomentara, facilitando las operaciones y asegurando en ellas la buena fe, que es el fundamento del crédito; y se completó en efecto, publicando después del Código, la ley de 30 de setiembre de 1854 que creó y reglamentó la Bolsa de Madrid, que hasta ahora es la única que tenemos.

Esta ley orgánica, con una aclaramiento que se hizo ya en el mismo año, acerca de las operaciones a plazo, y que se derogó después en setiembre de 1841, fue nuestra legislación de Bolsa hasta el año de 1845, en que los abusos a que se prestaban las negociaciones de efectos públicos en los términos en que estaban autorizadas, y los escándalos a que dieron lugar, llamaron la atención del Gobierno de tal modo, que creyó de necesidad formar y presentar a las Cortes un nuevo proyecto de ley, que los evitará para lo sucesivo, poniendo á cubierto los intereses públicos y los particulares: lo formó y presentó en efecto, y lo que es más, lo mandó observar como ley provisional en 27 de junio de aquel año, por no haber sido posible que se discutiera y aprobara en aquella legislatura.

Aunque la urjencia fuese grande, los defectos de la nueva ley no debieron ser pequeños, puesto que á los diez días de su publicación, esto es, el 2 de julio siguiente, se necesitó ya hacer en ella reformas sustanciales, y todavía a pesar de estas enmiendas, no pudo durar siquiera un año; y se reemplazó en 5 de abril de 1846 con otra nueva ley, que
SECCION SEGUNDA.

De la Bolsa, de las personas que concurren á ella y de su régimen y gobierno.

468. La Bolsa en su sentido material, es el lugar des-

aunque interina y provisional tambien, era sin embargo mas estensa que ninguna de las anteriores.

Las operaciones á plazo fueron como siempre el objeto principal de su formacion, segun se lee en su preámbulo. La experiencia, dice, habia acreditado que estas operaciones, lejos de contribuir al fomento de las relaciones comerciales, y á promover la circulacion de los valores del Estado, se habian convertido en un agiotaje inmoral y contrario á las le-

yes y tan perjudicial al comercio, como al credito de aquellos mismos valores; que no eran bastantes para reprimirlo las disposiciones tomadas antes; y por consiguiente, que se necesitaba adoptar medidas severas, para que se observaran en la Bolsa las condiciones esenciales que se re-

buieren en todo genero de contratos licitos, y partiendo de este supues-

to, se expidió esta nueva ley, oyendo antes al Consejo Real, y al de Mi-

nistros.

A pesar de esta precaucion, y no obstante haber oido á tan respetables corporaciones, la ley no salió por eso mas perfecta que las anteriores. El deseo de evitar abusos llevó á sus autores al estreho de prohibir absolutamente las operaciones á plazo, mandando en su art. 20, que to-

das las negociaciones de efectos publicos, se hicieran precisamente al contado, y con intervencion de los agentes de cambio; y prohibiendo á estos que se encargasen de la venta de los que no le hubiesen sido entregados antes por el vendedor. De este modo se cortó de raiz el mal que se trataba de evitar, pero se ocasionaron otros no menos graves y tras-

cendentales. Se impedio utilizar el credito, como dice un autor moder-

no (1), y se cegó esta fuente de la riqueza publica: clamores opuestos llegaron al Gobierno, y convencido este de que ni la prohibicion de es-

tas operaciones era suficiente para extirpar los abusos, ni se podía tam-
poco dejarlas en absoluta libertad, trató de establecer reglas que con-

liaran estos dos extremos, y por medio de otro Real decreto, expedido en 30 de setiembre de 1847, se volvieron á autorizar las operaciones á plazo con la condicion precisa de que no tuvieran validacion sino cuando los efectos se depositaran, y el plazo no pasara de treinta dias, quedando los agentes responsables, mediante el deposito.

(1) Avecilla, Diccionario de la legislacion mercantil art. Bolsa.
Este fue el medio que se creyó por entonces más a propósito y que parecía, en efecto, no que suficiente para evitar abusos, pero por desgracia el Gobierno mismo cambió pronto de modo de pensar; y olvidando, ó prescindiendo de los males que le habían obligado a autorizarla con aquellas condiciones, expidió otro Real decreto antes de medio año, esto es, en 21 de mayo de 1848, por el que revocó el anterior, y restableció otra vez la prohibición absoluta contenida en el art. 20 de la ley provisional de 1846.

Con esta nueva prohibición de dichas operaciones, y con las formalidades con que estaban recargadas las que se hacían al contado, se disminuyeron las negociaciones de manera, que se hizo imposible el cumplimiento de aquella disposición. La Bolsa apenas daba señales de vida, y la contratación quedó fuera de sus condiciones naturales, por lo que el Gobierno se vio otra vez obligado a formular otro proyecto de ley que presentó a las Cortes, y que por no haberse podido discutir, mandó después observar como ley provisional en 8 de febrero de 1854.

Según se dice en su introducción, se ha procurado en el despejar a las negociaciones de la Bolsa de las formalidades inútiles que las entorpecían, restablecer en las que se hagan al contado la sencillez que tenían por la primitiva ley de 30 de setiembre de 1834; distinguir de una manera tal, que nunca puedan confundirse las operaciones á plazo y los juegos de alza y baja, para dar á las primeras fuerza civil de obligar, y quitar-sela á los segundos; establecer reglas claras y precisas para los préstamos sobre efectos públicos; y formar por último un cuerpo de agentes, con intereses colectivos, y con las garantías apetecibles de inteligencia y moralidad; y en todas estas materias se hacen en efecto innovaciones esenciales, pero esto, no obstante, no pareció después tan perfecta que no necesitase reforma; y considerando que es de absoluta necesidad fijar esta parte de nuestra legislación por medio de una ley hecha en Cortes, se expidió un Real decreto en 9 de setiembre en el que se dejó sin efecto el art. 43 que facultaba á los agentes y á sus herederos, para presentar los que le habían de suceder en sus oficios. Se fijó la denominación de efectos públicos, ó sea la de los que han de tener esta consideración para los efectos del Real decreto, en las negociaciones sucesivas, por no estar hecho de una manera satisfactoria en ninguna de las leyes anteriores; y se creó en fin, una comisión que forme el proyecto de la que se ha de presentar á las Cortes.

Estas son las vicisitudes que ha corrido, y el estado en que se encuentra en la actualidad la legislación de la Bolsa. En el espacio de nueve años se expidieron tres leyes provisionales, otros tantos Reales decretos, y algunas aclaraciones que las reforman y modifican, todas ellas inútiles
merciantes, y de los agentes que intervienen en sus contratos (1).

Establecidas con el objeto de que puedan evacuar sus negocios con más facilidad, con el de obtener el verdadero valor de los efectos sujetos á contratación, y con el de evitar contratos fraudulentos, conviene que se celebren con frecuencia y que no se les permita reunir en otra parte para tratar negocios del comercio; debe estar autorizada la concurrencia de todas las personas á quienes convenga por razón de sus intereses, y es necesario que reine en ellas el orden y que haya la vigilancia indispensable para mantenerlo.

Con respecto á las reuniones debe establecerse que se tengan todos los días no feriados, ó sea en los que puedan evacuarse los negocios que motivan la reunión, y que sean á horas fijas y determinadas, procurando elegir las más á propósito para facilitar la concurrencia; prohibir absolutamente que se celebren fuera del local designado, declarando nulos los contratos que se hiciessen en estas reuniones ilícitas, bajo una pena proporcional, como por ejemplo, una multa de 5,000 rs. para el comerciante, la de 10,000 para el dueño del local, y la pérdida del oficio para el agente que las intervenga, que es la establecida hoy entre nosotros; haciendo la salvedad justa y necesaria, de que no por esto se entienda prohibida la facultad que naturalmente tienen en todas partes los comerciantes, de avistarse y tratar entre sí directamente ó por

(...)
medio de corredores, sino únicamente la contratación en re-
uniones tenidas en otros lugares públicos ó secretos; y decla-
rar en fin, que ni en los efectos públicos, ni en los valores de
comercio, empresas, ó personas particulares, se reconocerá
otro curso legal en juicio, que el que resulte de las negocia-
ciones hechas en la Bolsa conforme á su cotización diaria (1).

469. Por lo que hace á las personas, todas por regla ge-
neral deben tener abierta la puerta de estos establecimientos.
Los españoles y los extranjeros, los comerciantes y los que no
lo sean, todos sin distinción deben ser admitidos, porque to-
dos pueden tener que hacer alguna operación ó que tratar al-
gun asunto mercantil, y al público y á los particulares intere-
sa que concurran á estos lugares establecidos de intento para
facilitarlos. Sin embargo, como puede haber algunos que co-
nocidamente vayan sin objeto de contratar, ó de los que de-
nos sospecharse que concurren con el de infringir alguna prohibi-
ción, y aun con el de perturbar el órden, la ley no puede me-
nos de limitar la aplicación del principio general, establecien-
do al lado de él las oportunas excepciones, y excluyendo á
todos aquellos en quienes concurra alguna de estas circuns-
tancias; y por esta causa se ha prohibido la entrada entre nos-
otros, por razón de su estado:

4.º A las mujeres que no tengan algun establecimiento
mercantil.

2.º A los eclesiásticos.

Por razón de su edad, á los menores que no hayan obte-
nido autorización para administrar sus bienes.

Por inhabilitación ó tacha legal:

1.º A los que por sentencia judicial se hallen privados ó
suspendidos del ejercicio de los derechos civiles.

2.º A los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación.

3.º A los agentes y corredores que se hallen privados ó
suspendidos del ejercicio de sus oficios.

(1) Arts. 4, 5, 6 y 7 de id.
4.° A los que hayan sido legalmente declarados los intrusos en los oficios de agentes ó corredores.

Y 5.° A los que hayan dejado de cumplir alguna operación concertada en la Bolsa (1).

470. En cuanto al orden y régimen, necesario es que estas reuniones, como todas, estén á cargo de una autoridad que pueda mantenerlo y restablecerlo si se perturba. El Gobierno á quien incumbe por regla general conservarlo en todas, es el que lo establece también en las de la Bolsa, formando un reglamento, y el que lo conserva por medio de sus representantes, que lo son el Gobernador de la provincia y un delegado de este, conocido con el nombre de inspector. Pero sus facultades tienen que limitarse pura y exclusivamente al orden que se ha de guardar, ó sea á la policía interior, sin mezclarse de de ningún modo, ni bajo ningún pretexto en las operaciones que se celebren, cuya inspección y vigilancia debe estar encomendada á los agentes y á su junta sindical.

Las obligaciones de este inspector deben ser:

1.° La de concurrir diariamente á las horas designadas.

2.° La de hacer la señal de la hora en que principian y acaban las reuniones.

3.° Cuidar de que todos guarden compostura y comodimiento, haciendo con moderación y decoro las amonestaciones oportunas á los que de algún modo perturben aquellos actos, y acordando las disposiciones necesarias para mantener la observancia de la ley, y del reglamento, en lo relativo al orden y policía de las reuniones.

4.° No consentir que entre nadie con armas.

5.° Adoptar las disposiciones necesarias para mantener el orden, arrestando á los delincuentes caso de que se cometa algun delito durante las reuniones, y remitiéndolo á la autoridad competente.

6.° Reclamar el auxilio de la civil, ó de la militar cuando lo necesite para este objeto.

(1) Arts. 40 y 44 de id.

TOMO I. 26
2.° Los emitidos con garantía prestada por el Gobierno, y con la obligación subsidiaria del Estado.

Los emitidos por Gobiernos extranjeros también son públicos para los efectos legales, y como públicos deben considerarse estando autorizada su negociación expresamente (1).

472. Para las negociaciones de los efectos del comercio en particular de cualquiera clase que sean, no hay necesidad de establecer reglas especiales; las tiene ya adoptadas de antemano la legislación mercantil, y á ellas deben sujetarse, aunque se hagan en la Bolsa, porque esta circunstancia no las hace variar de naturaleza; y si no se celebran con los requisitos y solemnidades prevenidas, para las que se celebran fuera, no tendrán validación. Mas no sucede lo mismo con la de los efectos públicos; estos no se negocian, ó al menos interesa al crédito de la nación que no se negocien sino en la Bolsa, y con la intervención de sus agentes, para que no decayeran de su verdadero valor, ó seca para evitar simulaciones y fraudes; y á la ley de la Bolsa es á la que corresponde por lo mismo establecer la forma en que han de ser negociados.

(1) Art. 2.° del Real decreto de 9 de setiembre de 1854.

* El art. 3.° de la ley provisional de 8 de febrero de 1854, que comprendía entre los efectos públicos los créditos de los establecimientos públicos ó empresas particulares á quienes se hubiese concedido privilegio para su creación y circulación, ha sido derogado por el segundo del Real decreto de 9 de setiembre del mismo año, que solo atribuye esta calificación á las tres clases que expresamos en el texto. Mas sin embargo, para solo el efecto de la contratación en la Bolsa se concede también la consideración de fondos públicos á las acciones al portador de las sociedades de crédito, en el art. 6 de la ley de 23 de enero de 1856, y á las de igual clase, esto es al portador, de las de ferro-carreles y otras obras públicas y á las obligaciones al portador que emitan estas empresas, en el 8.° de la de 11 de julio del mismo año; y la tienen asimismo para este solo efecto las obligaciones que emitan las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, cuando se la concede la ley ó el Real decreto que las autoriza para contratar algún empréstito con arreglo á lo prevenido en los artículos 27, de las leyes de 25 de setiembre de 1853, y 28 de la de 20 del mismo mes de 1865 para las diputaciones, y en el 105 de la de 8 de enero de 1845, para los ayuntamientos.
Las operaciones que pueden recaer sobre ellos en realidad, no son mas que dos, á saber; su cesión en propiedad y su entrega en prenda, para asegurar el pago de alguna cantidad. Pero su cesión ó enajenación, si no se quiere establecer entre ellos y los demás objetos susceptibles de negociación, una diferencia perjudicial és injustificable, ha de poder ser hecha al contado y al fiado, ó sea á plazo como comunmente se dice, y de aquí resulta que es necesario tener en cuenta tres clases de operaciones con respecto á efectos públicos, que son las ventas al contado, las negociaciones á plazo, y los préstamos contraídos bajo la garantía de estos efectos.

473. En las ventas al contado, como que una vez convenidos en el precio, el negocio queda reducido á la entrega de los efectos por parte del vendedor, y de la cantidad convenida por la del comprador, apenas parece que habia necesidad de ninguna mas formalidades; y en efecto no debe haberlas cuando el negocio quede consumado en el acto, pero como las mas veces no podrá cumplirse así, porque ninguno de los contratantes llevará precisamente en el bolsillo los créditos, ni la cantidad, es indispensable en estos casos que se haga constar la existencia del contrato, y se fije el plazo en que ha de quedar cumplido, previniendo:

1.° Que el agente, que tiene siempre que sentar en sus libros todos los que intervenga, entregue á los contratantes una nota firmada en que se expresen los términos y las condiciones de la negociación (*).

2.° Que se consume precisamente en el tiempo que medie hasta la celebración de la Bolsa siguiente.

3.° Que si no se ha cumplido en este término, el que se crea perjudicado por la falta, tenga derecho para elegir entre la rescisión del contrato ó su consumación, denunciando lo

(*) El libro registro debe estar con las mismas formalidades que el de los corredores, incluso el tener el sello especial de comercio. Art. 56 del Real decreto de 12 de setiembre de 1861.
uno ó lo otro á la Junta sindical durante aquella misma reunion (*)

4.° Que en el caso de que elija el cumplimiento, disponga la Junta que se consume el contrato, comprando ó vendiendo respectivamente los efectos para entregar estos ó su importe al reclamante; quedando la diferencia que resulte á cargo del que no cumplió (1).

Esta disposicion concilia los intereses de ambos, porque el que fué puntual en cumplir, queda desde luego satisfecho, y el moroso queda menos perjudicado que si se diera lugar á que pasara mas tiempo, y fuera mayor la diferencia que tuviera que satisfacer.

Además de estas formalidades, debe exigirse siempre que se publiquen todas las operaciones, de cualquier modo que sean hechas, en la forma que prescriban los reglamentos (2).

474. En las operaciones á plazo, es necesario proceder con mucha precaucion y revestirla de mas trabas y solemnidades, si no se quiere dar lugar á que se conviertan en un juego de azar, mas á propósito para arruinar fortunas, que para fomentar el credito del Estado y los intereses del comercio. No se pueden prohibir, ni tampoco pueden dejarse en absoluta libertad; y la dificultad consiste en poder diferenciar bien las verdaderas enajenaciones de efectos, de los juegos de alza y baja que tanto han llamado la atencion del publico, y que han sido objeto de tantas disposiciones, sin que hasta ahora se haya logrado proscribirlos. En nuestra primitiva legislacion estaban autorizadas, sin mas limitacion que la de que constara que se habian celebrado de buena fe; la que se presumia de derecho, siempre que las partes contratantes se hallaban al

(*) La Junta no debe oir ni admitir reclamacion alguna sobre operaciones de Bolsa, si no se presenta la póliza con el sello que le corresponda; de lo contrario, cada uno de los individuos que haya asistido al acto, incurrirá en la multa del cuádruplo, sin perjuicio del reintegro. Art. 87 del Real decreto citado.

(1) Arts. 17, 18 y 19 de la ley provisional citada.

(2) Art. 51 de la ley provisional citada.
tiempo de celebrarlas en actitud y con medios bastantes para
dar cumplimiento á sus respectivas obligaciones, en la época
de su vencimiento, aunque el vendedor no tuviese en su po-
der los valores cuando se hizo la negociacion; y con solo este
requisito, y el de que el plazo no pasara de sesenta dias, se
contrataban validamente, en firme, ó bajo condicion resoluto-
ria, esto es, dejando al comprador la facultad de arrepentirse
y rescindir el contrato, con tal que pagara al vendedor la pri-
ma que estipulasen; y tambien á plazo fijo, ó á voluntad, ó
sea estipulando que el comprador tuviera derecho á exigir la
entrega de los titulos en cualquiera tiempo que le conviniera,
antes de vencer el plazo (1). Después para evitar abusos y
diferenciarlas, se ha exigido, unas veces, que se depositen los
efectos enajenados, otras, la responsabilidad de los agentes
que intervengan estas operaciones, otras, solo que conste la
existencia de aquellos en poder del vendedor por medio de una
nota de su numeracion que debe dar el agente con su firma;
declaramiento inficaz el contrato si despues no se entregan pre-
cisamente los mismos numeros, que es lo que previene la le-
gislation actual; y siempre que el plazo sea muy breve.

Ni la libertad tan amplia de la primera ley, ni todas las
exigencias de las ultimas nos parecen convenientes, y dese-
riamos que las Cortes restablecieran aquella, eligiendo entre
estas restricciones la que mejor evite los abusos y embarace
menos las operaciones.

Mas, cualesquiera que sean los requisitos intrinsecos que
en ellas se exijan, nunca debera prescindirse de sus formulas
externas, que no son menos importantes, acordando que no
sean validas, si no se celebran con intervencion de un agente,
y se consignan en una póliza en que consten los nombres de
los contrayentes, la designacion de los efectos, el precio, el
plazo y las demas condiciones que se estipulen, con las firmas
de los contratantes y de la gente intermediaria. En el dia deben

(1) Arts. 42, 43, 44, 45 y 48 de la ley de 30 de setiembre de 1831.
contener además la numeración y la serie á que correspondan los títulos vendidos (1).

475. Los préstamos con garantía de efectos públicos, en su esencia, en nada se diferencian de los que están asegurados con una prenda ó una hipoteca. En unos y en otros debe esperarse el cumplimiento del plazo para exigir el pago, y en todos quedan libres los efectos que los garantizan, si el deudor paga y extingue su obligación; pero como puede suceder que no pague y sea necesario proceder á la enajenación de los efectos que sirven de prenda, ó que el acreedor, abusando de su posición, haya dispuesto de ellos y no los pueda devolver, conviene tener en cuenta, que cuando estos son públicos, su enajenación ó su adquisición respectivamente debe sujetarse a las formalidades prescritas para el caso que alguno de los contratantes no cumpla, y el otro exija la consumación, acudiendo á la Junta sindical para que acuerde la venta ó la compra á cargo del moroso. Pero hoy se halla además establecido: 1.° Que estos préstamos se celebren con intervención de los agentes y con las mismas formalidades que las ventas á plazo. 2.° Que el prestador pierda el derecho de garantía que tiene sobre los efectos, si no los conserva en su poder. Y 3.° Que no tenga necesidad de hacer ningún requerimiento al deudor, vencido el plazo, para pedir á la Junta sindical que los enajene (2).

476. Estas disposiciones son aplicables en general á toda clase de efectos públicos; pero hay algunas que por sus cir-

(1) Arts. 29 y 34 de la ley y 17 del Reglamento citado.

Para las pólizas de operaciones de Bolsa, se han creado sellos sueltos de 10, 18 y 20 rs. que los agentes que los autoricen, tienen obligación de poner en todas las que prescriban inutilizándolo con su rúbrica y la fecha de la operación, sin perjuicio de exigir su importe á las partes interesadas. Las de 50,000 rs. nominales, deben llevar el de 10; pasando esta suma sin llegar á 100,000, el de 15; y de 100,000 en adelante, el de 20. Arts. 1.°, 54 y 55 del Real decreto de 12 de setiembre de 1861. Por la omisión de éstos requisitos, incurren en la pena del reintegro y del cuádruplo del importe del sello último. Art. 34 del mismo.

(2) Arts. 32, 33 y 37 de la ley provisional de 8 de febrero de 1854.
cunstancias particulares pueden exigir otras, como el endosó en los que estén á la órden, y sobre todo en las inscripciones de la Deuda del Estado, que por precision necesitan otras especiales. La propiedad de estos créditos consta en el gran libro que llevan las oficinas de la Hacienda pública, y para que esté se transfiera al comprador, no basta que el vendedor le entregue el título que acredita su derecho; sino que es preciso también que se anote en el original esta transferencia; y por lo mismo, además de las formalidades ordinarias, debe practicarse esta diligencia en un término dado, que es el de cinco días, pasados los que, podrá rescindirse ó exigirse el cumplimiento de la negociación en los términos que hemos manifestado (1).

477. Réstamos advertir por conclusión que en las negociaciones de efectos al portador expedidos por el Estado, por las corporaciones administrativas ó por compañías autorizadas para emitirlos, hechas en la Bolsa con las solemnidades previas, no tiene lugar el derecho de reivindicación, sino en el caso de que se pruebe mala fé de parte del comprador. Ley de 30 de marzo de 1861.—Véase el núm. 302, tomo 4.*

SECCION CUARTA.

De los agentes auxiliares de la Bolsa.

478. En las operaciones que se celebran en la Bolsa, no solo es conveniente y útil, sino también necesaria á veces la mediación y intervención de otras personas; la que debe ejercerse por las destinadas por la ley para este efecto, que son los corredores y los agentes de cambio ó de Bolsa.

Los primeros solo deberán intervenir, á voluntad de los

(1) Arts. del 20 al 24 de la ley provisional de 8 de febrero de 1854.

* En el mismo caso se hallan las acciones de los Bancos ó de otros establecimientos competentemente autorizados, para emitir efectos que tengan la calificacion legal de públicos. Art. 25 de id.
interesados, en los negocios de comercio que no recaigan sobre efectos públicos, como intervienen en los que se celebran fuera de aquel local, quedando sujetos á las mismas obligaciones, prohibiciones y responsabilidad, y gozando de los mismos derechos que le concede el Código de Comercio.

Los agentes se crean de intento por la ley de Bolsa para que intervengan las operaciones de efectos públicos. Se diferencian de los primeros solo en esto, es decir, en el objeto especial con que han sido creados; sirven un oficio público y civil también, y es necesario que como ellos tengan la actitud legal indispensable para desempeñarlo bien, atribuciones exclusivas suyas, obligaciones, prohibiciones y responsabilidad, y derechos que compensen y remuneren su trabajo.

479. La actitud legal en unos y otros comprende las cualidades que debe reunir la persona que lo ha de desempeñar, su nombramiento y exámen, la fianza, y el juramento que tienen que prestar antes de entrar á servirlo. Las cualidades son:

1.° Ser español.

2.° Que tenga lo menos 25 años cumplidos, para que pueda obligarse y conocer la responsabilidad en que puede incurrir.

3.° Que haya adquirido conocimiento de los negocios en que ha de tomar parte, ó estudiado en las escuelas de comercio y obtenido el título de profesor ó perito mercantil, ó por medio de la práctica ó pasantía tenida al lado de otro agente ó de un comerciante matriculado por espacio de algunos años, debiendo ser preferidos los primeros (1).

4.° Que no concurra en él alguna circunstancia que se oponga al buen desempeño de su oficio ya por razón de su estado, ya por alguna falta en que haya incurrido; por cuyas causas se declaran incapaces para ejercerlo.

4.° Los extranjeros que no hayan obtenido carta de naturaleza.

(1) Art. 41 de la ley citada y 6 del Real decreto de 8 de setiembre de 1850.
2.° Los eclesiásticos, los militares en activo servicio, y los funcionarios públicos de Real nombramiento.

3.° Los comerciantes quebrados que no hayan obtenido rehabilitación.

4.° Los agentes y corredores que hubieren quebrado, hayan sido ó no rehabilitados; y los que hubiesen sido privados de su oficio.

5.° Los que hayan sido echados de la Bolsa, ó perseguidos judicialmente por agentes ó corredores intrusos (1).

480. El número, caso de fijarlo, debe ser proporcionado á los negocios. Entre 18 y 24 ha variado hasta ahora, pero la ley, prescindiendo de esto, deberá señalar el que considere suficiente, atendiéndolo á la extensión que puedan tener las operaciones, y que siempre será un mal menos grave que haya muchos, que no el que se limite demasiado. En cuanto al nombramiento y examen á su juramento y fianza, podrá seguirse lo establecido por los corredores; el Gobernador civil propondrá á los que reúnan las cualidades necesarias, y hayan dado pruebas de su suficiencia, bien con los títulos académicos que hayan obtenido, bien por medio de un examen practicado ante la junta sindical. El Gobierno de S. M. hará la elección, y el mismo Gobernador exigirá al nombrado el juramento de desempeñar bien y fielmente su encargo, y lo autorizará para servirlo luego que haya afianzado competentemente.

481. Esta fianza ha de consistir en dinero ó en efectos de la Deuda pública que importen la misma cantidad, según su cotización, y se ha de depositar en el lugar destinado á este efecto, para poder usar de ella cuando haya necesidad; pero la cantidad á que ha de ascender tiene que ser mas crecida que la de los corredores, y proporcionada á la responsabilidad que se le imponga en las operaciones á plazo; 100,000 exigia la ley de 30 de setiembre de 1831, y después se ha designado siempre la de 500.000.

(1) Art. 42 de la ley citada
482. Sus atribuciones peculiares se reducen a intervenir en las operaciones de toda clase de efectos públicos, que es el fin con que se crean, y por lo tanto a ellos exclusivamente corresponde tomar parte:

En las negociaciones de dichos efectos incluyas las transferencias de las inscripciones.

Y en los préstamos con garantía de los mismos.

Pero además de estas suele concedérseles otra no peculiar y exclusiva, sino en concurrencia con los corredores, que es, la de intervenir también en las negociaciones de cambio y giro de los valores comerciales, y en la venta de metales preciosos que se hagan dentro de la Bolsa.

483. Las obligaciones que tienen que llenar son en sustancia las mismas que los corredores, porque el fin de la institución es igual, y entre los deberes de todos no pueden caber grandes diferencias.

Las contenidas en el Código de Comercio para los unos, deben ser aplicables para los otros, y estas son las que se han copiado en la ley de 1851 y en todas las posteriores.

Lo mismo sucede con las prohibiciones. Las que el Código establece para aquellos son las que se han copiado é impuesto á los agentes; pero es preciso convenir en que la naturaleza de las operaciones en que intervienen estos últimos puede exigir algunas más de las que también se ha hecho mérito, estableciendo mayor ó menor número, según las disposiciones que se han adoptado para las operaciones á plazo, tales son:

1.ª La de no poder dejar de intervenir en las operaciones que le encarguen, siempre que se le den suficientes garantías.

2.ª La de responder como comisionista de las operaciones que ejecute por encargo de otro.

3.ª La de responder civilmente de la legitimidad de los efectos públicos que se negocien por su mediación, cuando tengan numeración sucesiva, u otros signos que indiquen su identidad.

4.ª La de responder asimismo de la autenticidad del título, cuando se trate de transferir inscripciones, firmando al
efecto la nota de transferencia, y aun del cumplimiento de la misma negociación (1).

Cuando se ha asegurado el cumplimiento de las operaciones á plazo con su responsabilidad, también han tenido la subsidiaria de cumplir las que se hayan hecho con su intervención.

484. Entre las prohibiciones se numeran como especiales suyas:
1.ª La de intervenir negociaciones de efectos que correspondan á vinculaciones, capellanías ó manos muertas, ó á personas inhábiles para enajenar sus bienes, sin que preceda la competente autorización.

2.ª La de ser cajeros, tenedores de libros, mancembros ó dependientes, bajo cualquiera denominación que sea, de los banqueros ó comerciantes. (*)

3.ª La de ser aseguradores, fiadores, ó adquirir otra clase de compromisos que los que tengan por razón de su oficio, para los que tienen exclusivamente depositada su fianza (2).

4.ª La de hacerse sustituir por sus dependientes aunque tengan autorización de la junta sindical, debiendo encargar á otro agente los negocios que no puedan despachar por sí mismos.

5.ª La de negociar valores con endosos en blanco, expedir polizas sin fijar é inutilizar el sello que corresponda á la cantidad (3).”

(1) Arts. 22 y 65 de la ley citada.
(*) En esta prohibición ni en la de comerciar que tienen también como corredores, no se considera comprendida la sociedad en comandita, que los agentes de Bolsa pueden contraer sobre su oficio haciendo participes a los comanditarios de los beneficios ó pérdidas que tengan en el ejercicio de sus funciones. Art. 55 del Real decreto citado.
(2) Art. 50, núms. 3 y 4.
(3) Art. 53 de la ley y 54 del Real decreto citado.
* Tambien les comprende la de intervenir en la negociacion ó descuento de efectos de comercio que no lleven el sello correspondiente, incurriendo en la misma multa que los corredores, Art. 46 de la instrucción de 1.º de octubre de 1851.
6.ª La de hacer publicar operaciones simuladas.
485. En cuanto á su responsabilidad, la indemnización de daños y perjuicios; las multas y la privación de oficio que pueden sufrir los corredores, se imponen también á los agentes en sus casos respectivos por la falta de cumplimiento de las obligaciones y por la infracción de las prohibiciones que le son comunes; y estas mismas, es decir, la indemnización de daños y perjuicios, si interviniese en negocios de efectos de manos muertas; la multa de la mitad de la cantidad, si negocia valores con endosos en blanco; y la privación de oficio, si es dependiente de alguna casa ó compañía de comercio ó hace publicar operaciones simuladas son igualmente las que deben sufrir si no respetan sus prohibiciones particulares.
486. Las multas, en todo caso, deben cobrarse de las fianzas, porque para esto se han exigido; pero las de los agentes tienen que servir además para asegurar el cumplimiento de las obligaciones directas ó indirectas que contraigan, y el pago de las indemnizaciones que les correspondan. Con cuyo objeto ha declarado que están especial y exclusivamente afectas á las resultas de las operaciones de su oficio, se da acción hipotecaria contra ellas á todos los que tengan que ejercitar derechos procedentes de estas negociaciones; se le obliga á reposerlas y completarlas en el acto siempre que se disminuyan, quedando suspensos de oficio hasta que lo verifique, y no se les permite retirarlas ni á él ni á sus herederos cuando mueran ó cese en su oficio, sino después de haberse anunciado pública y anticipadamente su devolución (1).

Cuando la fianza no fuese suficiente, claro es que responderán los demás bienes que les pertenezcan y que la quiebra se reputa siempre fraudulenta; pero las acciones que pueden

(1) Arts. 45, 68, 69, 71 y 72 de id. y 15 del Reglamento para su ejecución.
* Este anuncio tiene lugar fijando un cartel en el sitio más visible de la Bolsa con 60 días de anticipación, á fin de que llegue á noticia de todos y se puedan hacer las reclamaciones convenientes.
dirigirse contra el agente por estos conceptos, prescriben pronto: dos años duran en la actualidad y tres establecía la ley de 1851 (1).

Los derechos que los agentes pueden cobrar por intervenir las negociaciones, consisten en una cantidad al millar que varía según las clases de los efectos negociados:

La ley la fija, y está mandado que se perciban:

Medio al millar sobre el valor nominal de la deuda consolidada y diferida.

Un cuartillo al millar sobre el valor nominal de toda clase de deuda amortizable.

Dos al millar en giro de letras de cambio, libranzas y demás valores de comercio, acciones de banco y demás emprezas mercantiles.

Estos derechos son alimenticios y privilegiados, y se pagan por mitad entre el comprador y el vendedor (2).

SECCION QUINTA.

De la junta sindical.

487. Los agentes forman también un colegio gobernado por una junta que se llama sindical, y compuesta de un presidente y cuatro vocales lo más con dos suplentes para cuándo no existan los propietarios, elegidos todos por ellos mismos á pluralidad de votos y aprobados por el Gobierno. El cargo es obligatorio, pero no debe durar más que un año, á lo sumo dos. La renovación por mitad es la que está ahora establecida.

A esta junta ha de corresponder el órden y vigilancia relativa á las operaciones que se hagan en la Bolsa y á las obligaciones de los agentes. Debe concurrir diariamente á la hora de la reunión, y son sus atribuciones; además de la de inter-

(1) Art. 67, 71 y 73 de la ley citada.
(2) Arts. 77 y 88 de id.
venir en el cumplimiento y consumación de los contratos en los términos que quedan indicados:

1.ª Conservar el orden entre los agentes.
2.ª Inspeccionar sus operaciones y vigilar el cumplimiento de la ley.
3.ª Cudir que permanezca integra su fianza.
4.ª Cuidar que no se ejerzan las funciones de estos por intrusos.

Y 5.ª Formar el Boletín de cotización.

Este Boletín se redacta con el objeto de fijar el precio ó curso corriente de los efectos públicos, especies metálicas, y los cambios de los valores de comercio; es de la mayor importancia, y por consiguiente es preciso que se forme con los datos, formalidades y responsabilidad necesaria para que haya en todo la mayor exactitud.

Se debe formar todos los días después que concluyan las operaciones de la Bolsa, ante la junta sindical, asistiendo todos los agentes que hayan concurrido á ella, y con presencia de los precios de las operaciones que se hayan hecho; extendiendo su correspondiente acta en el libro ó registro destinado á este objeto, y firmándola los individuos de la junta sindical. Ha de contener los precios mas altos y mas bajos de los valores de comercio, y especies metálicas, y el movimiento progresivo de los efectos públicos en alza, ó baja, desde el principio al fin de las negociaciones, con expresión de su número, y del valor de cada una; y deben ser responsables de su exactitud los que la hayan firmado.

El Boletín de la cotización de la Bolsa es oficial, y nadie mas que la junta sindical puede formar lo y publicarlo. Si á pesar de lo que resulte de él, conviene á algun interesado que se le dé certificación de lo que conste en el acta, se le dará por la persona á cuyo cargo esté el libro donde se halle extendiда (*)

(*) Con el núm. 11 insertamos los Reales decretos vigentes y el reglamento para su ejecución.
APÉNDICE NÚM. 4.

Juntas de comercio.

7 de octubre de 1847.

REAL DECRETO.

Atendiendo a las razones que me ha hecho presente mi Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Además de las 20 Juntas de Comercio que existen en la actualidad, se establecerán desde luego en los siguientes puertos habilitados: Cartagena, Ferrol, Gijon y Mahon.

Art. 2.º También se crearán en cualesquiera otros puntos cuya importancia mercantil lo reclame. Su instalación en estos puntos, se verificará por disposición del Gobierno a instancia de los principales comerciantes, apoyada por el Jefe político, y siempre que llegue a 50 el número de los que aparezcan matriculados.

Art. 3.º Las Juntas en lo sucesivo, se compondrán de once individuos en las plazas donde haya Tribunal de Comercio de primera clase; de nueve en las que le tengan de segunda, y de siete en las restantes.

Art. 4.º El nombramiento de los individuos de las Juntas, se verificará por elección del modo siguiente: para los de primera clase serán convocados 80 comerciantes matriculados, que sean los primeros contribuyentes por el subsidio de comercio; para las de segunda, 40 que sean del mismo modo primeros contribuyentes, y para las de tercera, 30 de iguales condiciones. También serán convocados los comerciantes que contribuyan con una cuota igual a la más baja que se deba pagar para ser elector con arreglo a la anterior escala.

Art. 5.º Para que haya elección en la primera reunión que se celebre, deberán tomar parte en ella por lo menos 41 electores en las plazas de primera clase, 21 en las de segunda, y 16 en las de tercera. Caso de que no se completase el número designado, se convocará para segunda reunión, en la cual se verificará definitivamente la elección, cualquiera que sea el número de electores que concurra.

TOMO I.

27
Art. 6.° En las plazas donde no se paga dicha contribución del subsidio, serán electores los comerciantes más pudientes en el número que expresa la anterior escala, a juicio del Jefe político, oyendo al Tribunal de Comercio.

Art. 7.° Serán electores para las Juntas de Comercio, los directores gerentes de las sociedades mercantiles, con tal que estas por la contribución que satisfagan se encuentren entre el número de mayores contribuyentes que deben concurrir á la elección de las Juntas.

Art. 8.° Los individuos de las Juntas serán nombrados precisamente de entre los mismos electores.

Art. 9.° A los dos años de ejercicio se renovará la mayoría absoluta de la Junta; al fin de los dos que siguen la minoría, y así sucesivamente. Los individuos salientes pueden ser reelegidos.

Art. 10. Los Jefes políticos, ó en su defecto los alcaldes en los pueblos no capitales de provincia, serán presidentes natos de las Juntas de Comercio.

Art. 11. Las Juntas elegirán un vicepresidente y un secretario de entre sus mismos individuos.

Art. 12. Las funciones de vicepresidente, secretario y demás vocales de las Juntas, serán honoríficas y gratuitas.

Art. 13. Las atribuciones de las Juntas de Comercio consistirán en evacuar los informes que les pida el Gobierno ó el Jefe político, y en proponer las medidas que juzguen oportunas á favor del comercio.

Serán especialmente consultadas:

1.° Sobre las alteraciones ó reformas que se proyecten en la legislación mercantil.

2.° Sobre la creación de nuevas Juntas y tribunales de comercio.

3.° Sobre establecimiento de Bolsas, agentes de cambio y corredores.

4.° Sobre los aranceles ó tarifas de corretaje y de cualquier otro servicio mercantil sujeto, ó que conviniere sujetar á tarifa.

5.° Sobre creación de Bancos locales.

6.° Sobre los proyectos de obras públicas locales que tengan relación con el comercio.

Art. 14. Las Juntas establecidas en puertos habilitados tendrán la atribución peculiar de aconsejar cuanto crean conveniente respecto á la compra y conservación de utensilios para socorro de los buques, limpieza y reparación de los puertos y gastos de vigías y fa-
ros. Las autoridades y demás funcionarios á quienes corresponda proporcionarán á aquellas todos los datos que necesiten, y permitirán a sus comisionados se enteren del estado de los almacenes, progresión de las obras y demás que tenga relación con el servicio marítimo, á fin de que acerca de él puedan dar en beneficio del comercio los informes, que el Gobierno les pida, ó presentar á este las observaciones que consideren oportunas.

Art. 15. Las Juntas celebrarán sus sesiones en el salon del Tribunal de Comercio, en el de la Diputación provincial ó en las Casas Consistoriales.

Art. 16. Las Juntas nombrarán para su servicio un oficial, cuyo sueldo no ha de exceder de 8,000 rs. anuales en las de primera clase, de 6,000 en las de segunda y de 5,000 en las de tercera.

Art. 17. Se abonarán además para gastos de toda especie 4,000 reales anuales á las de primera clase, 3000 á las de segunda y 2,000 á las de tercera.

Art. 18. El sueldo y gastos designados en los dos artículos anteriores se incluirán en el presupuesto provincial.

Art. 19. Los Jefes políticos dispondrán lo conveniente para que el día 1º de enero próximo se instalen las nuevas Juntas de Comercio, tanto en las 20 plazas donde las hay actualmente, como en los otros puertos habilitados en que van á establecerse. En el mismo día cesarán en sus funciones las actuales Juntas de dichas plazas.

Art. 20. Continuarán por ahora las escuelas de comercio tal como se encuentran, y aun se extenderán á los demás puntos marítimos donde se creyere conveniente. Para la debida uniformidad dependerán de la Dirección general de Instrucción pública; tendrán por director inmediato al vicepresidente de la Junta, y por consejo de disciplina á la Junta misma.

Art. 21. No se comprenderán en el presupuesto provincial los gastos de estas escuelas ni las cargas de justicia de los consulados, sino que se satisfarán por el Estado como en equivalencia de los antiguos arbitrios refundidos hoy en el 6 por 100 sobre los derechos de importacion que con tal objeto se cobran en todas las aduanas del reino.

Dado en Palacio á 7 de octubre de 1847.—Está rubricado de la Real mano.—Refrendado.—El Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, Antonio Ros de Olano.
Sociedades mercantiles por acciones.

28 de enero de 1848.

MINISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCION Y OBRAS PÚBLICAS.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas, á todos los que las presentes vieren y entiendieren, sabed: que las Cortes han decretado y nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º No se podrá constituir ninguna compañía mercantil, cuyo capital, en todo ó en parte, se divida en acciones, sino en virtud de una ley ó de un Real decreto (*).

Art. 2.º Será necesaria una ley para la formación de toda compañía que tenga por objeto:

1.º El establecimiento de Bancos de emisión y cajas subalternas de estos, ó la construcción de carreteras generales, canales de navegación y caminos de hierro.

2.º Cualquiera empresa que, siendo de interés público, pida algún privilegio exclusivo. En este párrafo no se comprenden las compañías que se propongan beneficiar algunos de los privilegios industriales de invención ó introducción, que el Gobierno puede conceder con arreglo á las disposiciones vigentes en esta materia.

Art. 3.º La ley determinará en cada caso las condiciones, en virtud de las cuales haya de concederse la autorización de que habla el artículo precedente.

Art. 4.º Para la formación de toda compañía, que no se halle comprendida en el art. 2.º de esta ley, será necesaria la autorización del Gobierno, expedida en forma de Real decreto.

Esta autorización solo se concederá á las compañías, cuyo objeto sea de utilidad pública.

(*) En esta ley no están comprendidas las sociedades mineras que no tienen capital fijo, aunque se forman por acciones. Real órden de 8 de mayo de 1848.
El Gobierno denegará la autorización á las compañías que se dirijan á monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad.

Art. 5.° Toda compañía por acciones se constituirá precisamente para objetos determinados, y con un capital proporcionado al fin de su establecimiento.

Art. 6.° A la solicitud en que se pida la Real autorización, ha de acompañarse la lista de los suscriptores, que se propusieren formar la compañía, las cartas de pedido de acciones, la escritura social y todos los estatutos y reglamentos que hayan de regir para la administración de la compañía. Los estatutos y reglamentos se aprobarán previamente en Junta general de suscriptores.

Art. 7.° No se dará curso á la solicitud cuando de los pedidos de acciones no conste la suscripción de una mitad por lo menos, del capital de la compañía.

Las cartas de pedidos de acciones constituirán por sí una obligación legal.

Art. 8.° El Gobierno, oyendo al Consejo Real, que elevará consulta con presencia de todo el expediente, examinará si la autorización se halla ó no en el círculo de sus atribuciones.

Cuando se trate de una compañía para cuyo establecimiento se requiera la autorización legislativa, el Gobierno se reservará el expediente, si la empresa mereciera su apoyo, para presentarlo á las Cártex con el correspondiente proyecto de ley.

En caso contrario, devolverá el expediente á los interesados, para que estos hagan de su derecho el uso que estimen oportuno.

Art. 9.° Cuando se trate de una compañía para cuyo establecimiento hase la autorización Real, y el Gobierno juzgare la empresa de utilidad pública, lo declarará así á los recurrentes, aprobando desde luego la escritura social y los estatutos y reglamentos, y determinando la parte del capital que la compañía haya de hacer efectiva antes de obtener el Real decreto de autorización.

El Gobierno no podrá por razón de esta parte exigir en ningún caso mas que un 25 por 100.

En el caso de que el Ministro, por cuyo conducto haya de resolverse la solicitud, disienta en todo ó en parte de lo consultado por el Consejo Real, se expedirá la resolución oyendo al Consejo de Ministros.

Art. 10. Luego que se hallen cumplidas las formalidades prese-
critas en el artículo anterior, el Gobierno otorgará la Real autorización, fijando en ella el plazo dentro del cual haya de dar la compañía principio á sus operaciones. Transcurrido este plazo sin haberlo verificado, se tendrá la autorización por caducada.

Art. 11. Toda alteración ó reforma en los estatutos y reglamentos, que no obtenga la aprobación del Gobierno, será ilegal, y anulará por sí la autorización en virtud de la cual exista la compañía.

Art. 12. Hasta que se haya declarado constituida la compañía, no se podrá emitir ningún título de acción. Las acciones, en que se divida el capital de la compañía, estarán numeradas, y se inscribirán en el libro de registro, que habrá de llevarse necesariamente á nombre de la persona ó corporación á quien correspondan.

Art. 13. Los gerentes ó Directores de cada compañía deberán tener en depósito, mientras ejerzan sus cargos, un número fijo de acciones, cuyos títulos han de extenderse en papel y forma especiales.

Art. 14. Las acciones de las compañías establecidas con arreglo á esta ley, se cotizarán como valores comunes de comercio, y conforme á las disposiciones prescritas en la ley de Bolsa.

Art. 15. Ninguna compañía podrá emitir, á no hallarse autorizada por la ley, billetes, pagarés, abonarés, ni documento alguno al portador: los infractores quedarán sujetos al pago de una multa que no podrá exceder de 50,000 rs.

Art. 16. Los que contraten á nombre de compañías, que no se hallen establecidas legalmente, serán solidariamente responsables de todos los perjuicios que por la nulidad de los contratos se irroguen á los interesados, e incurrirán además en una multa que no excederá de 100,000 rs.

En igual responsabilidad incurrirán los que á nombre de una compañía, aunque legalmente constituida, se extiendan á otras negociaciones que las de su objeto ó empresa, según esté determinado en sus estatutos y reglamentos.

Art. 17. El Gobierno, sin gravar los fondos ni entorpecer las operaciones de las compañías, ejercerá la inspección que conceptúe necesaria para asistir la observancia estricta y constante de la presente ley.

Art. 18. Las compañías por acciones existentes en la actualidad sin autorización Real, la solicitarán dentro de dos meses, contados desde la publicación de esta ley, presentando al efecto sus escritu-
ras, estatutos y reglamentos. Dentro del término de 50 días siguientes á esta publicación los gerentes ó Directores convocarán á Junta general de accionistas, para que resuelvan si se ha de pedir ó no la Real autorización, la cual se impetrará solamente en el caso de que la mayoría de los mismos accionistas, que se computará con arreglo á sus estatutos y reglamentos, acuerde la continuación de la compañía.

Art. 19. La autorización Real se otorgará á todas las compañías que hubieren cumplido las condiciones con que fueron aprobadas por los tribunales de comercio, y á las comanditarias por acciones, que hubieren sido establecidas con arreglo á las disposiciones del Código de Comercio. No se concederá, sin embargo, esta autorización á las compañías por acciones, sea cual fuere su naturaleza, si se hallasen comprendidas en el último párrafo del artículo 4.

Art. 20. Las compañías por acciones que dentro del plazo ya señalado, no solicitaren la Real autorización, se tendrán por disueltas, poniéndose en liquidación en la forma que prescriban sus estatutos y reglamentos.

Art. 21. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias á la presente ley.

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, Gobernadores y demás autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á 28 de enero de 1848.—Yo la Reina.—El Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, Juan Bravo Murillo.

REAL DECRETO.

Para la ejecución de la ley de 28 de enero de este año sobre compañías mercantiles por acciones, oído el Consejo Real, he venido en decretar el adjunto reglamento, que me ha presentado mi Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas.

Dado en Palacio á 17 de febrero de 1848.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, Juan Bravo Murillo.
REGLAMENTO
PARA LA EJECUCION DE LA LEY DE 28 DE ENERO DE 1848 SOBRE LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES.

17 de febrero de idem.

Artículo 1.° Las escrituras de fundación de las compañías mercantiles por acciones han de contener necesariamente:
1.° Los nombres, apellidos y vecindad de los otorgantes.
2.° El domicilio de la compañía.
3.° El objeto ó ramo de industria ó de comercio, á que exclusivamente ha de dedicarse la compañía.
4.° La denominación ó razón comercial, que ha de guardar conformidad con el objeto de su fundación.
5.° El plazo fijo de la duración de la compañía.
7.° El número de acciones nominativas en que ha de dividirse el capital, y cuota de cada una.
8.° La forma y plazos en que han de hacer efectivo los sócios el importe de sus acciones.
10. Las atribuciones de sus administradores, y de los que tengan á su cargo inspeccionar las operaciones de la administracion.
11. Las facultades que se reserven á la Junta general de accionistas, y época de su convocatoria, no pudiendo menos de verificarse una vez cada año.
12. La formación del fondo de reserva con la parte que anualmente ha de separarse de los beneficios de la compañía para constituirlo, hasta que componga un 10 por 100 á lo menos del capital social.
13. La porción de capital cuya pérdida ha de inducir la disolución necesaria de la sociedad.
14. Las épocas en que hayan de formarse y presentarse los inventarios y balances de la compañía, no pudiendo dejar de verificarse en cada año, como lo previenen los arts. 36 y 37 del Código de Comercio, y las formalidades con que hayan de revisarse y aprobarse por la Junta de accionistas.
15. La forma y tiempo en que haya de acordarse la distribución de dividendos por la junta general de accionistas, con sujeción a lo que sobre ello se previene en este reglamento.

16. La designación de las personas que hayan de tener la representación de la compañía provisionalmente, y solo para las gestiones necesarias hasta que, hallándose constituida, se proceda al nombramiento de su administración por la Junta general de accionistas, ó se encarguen de ella los sócios gerentes, si la compañía es en comandita.

En las de esta última clase se observarán las disposiciones de los artículos 271 y 272 del Código de Comercio, y ni los que se nombran como inspectores de la administración social, ni la Junta general de accionistas, podrán tener otras atribuciones y facultades, que las que por derecho están declaradas a los sócios comanditarios.

Art. 2.° Será condición esencial y común en todas las sociedades mercantiles por acciones, que los sócios tendrán iguales derechos y participación en los beneficios de la empresa, distribuyéndose estos proporcionalmente al número de acciones que posea cada sócio.

No podrá reservarse ninguno sócio, á título de fundador, ni por otro alguno, el derecho de propiedad sobre la empresa en todo ni en parte, ni el de otras ventajas personales y privativas, fuera de la remuneración y participación de que hablan los artículos 5.° y 6.°, ni el de la administración ó gerencia irrevocablemente en las compañías anónimas.

Art. 3.° Los objetos muebles é inmuebles, que algún sócio aporte á la compañía, para que se refundan en su capital, se apreciarán convencionalmente entre el interesado y la administración definitiva de la misma compañía, ó por peritos, si así se pactare, convirtiéndose su importe en acciones á favor del que hubiere hecho la cesión.

Art. 4.° En igual forma se procederá con respecto á los sócios, que transmitieren á la sociedad algún privilegio de invención, ó el secreto de algún procedimiento, siendo relativos el uno ó el otro al objeto para que aquella estuviese establecida; así como también á los que se contratarén para prestar á la empresa sus servicios científicos y artísticos en el concepto de sócios industriales. En cualquiera de estos casos se graduara también convencionalmente la suma, que en metálico haya de abonarse por retribución de la cesión ó
servicio que se hiciere á la sociedad, cubriéndose en acciones la
cantidad convenida.

Art. 5.° La remuneracion que hayan de disfrutar los adminis-
tradores de las compañías anónimas, podrá establecerse por medio
de un sueldo fijo, ó por el de una participacion en los beneficios
repartibles de la empresa, ó por ambos medios; pero en todos casos
habrá de reservarse esta asignacion á la Junta general de accionistas
constituida que sea la sociedad.

Art. 6.° En las sociedades en comandita por acciones tendrán
los sócios gerentes, como responsables solidariamente de los resul-
tados de las operaciones sociales, la participacion que se prefiere
por la escritura de fundacion, en las ganancias y pérdidas de la
empresa.

Art. 7.° Los reglamentos de las sociedades por acciones com-
prenderán las disposiciones relativas al orden administrativo de la
empresa y al directivo de sus operaciones, guardando conformidad
con las bases establecidas en la escritura de fundacion.

Art. 8.° Con arreglo á lo prescrito en el art. 287 del Código de
Comercio, se tendrá por nulo todo pacto que establecieren los fun-
dadores de las compañias, ó acordaren los accionistas, sin que cons-
te en la escritura de fundacion, ó en los reglamentos que han de
someterse á la aprobacion del Gobierno.

Art. 9.° Para impetrar la aprobacion Real de la escritura de fun-
dacion de toda sociedad mercantil por acciones ha de hallarse cu-
bierta la mitad de las que compongan su capital social, sea por
haberse distribuido este número entre los otorgantes de la misma
escritura, ó sea por las cartas de pedidos de acciones, que con pos-
terioridad á su otorgamiento, se hayan dirigido á la comision en-
cargada de gestionar para la aprobacion de la compania.

Art. 10. Las cartas de pedidos de acciones producen en los sus-
critores la obligacion de hacer efectivo el importe de las mismas ac-
ciones en la forma que por la escritura de fundacion se haya esta-
blicido, si la empresa obtuviera la Real aprobacion. Los fundadores
de la sociedad responderán de la autenticidad de las suscripciones,
para el efecto de haberse tenido por cubierto el número de acciones
que se requieren, á fin de que la sociedad pueda constituirse.

Art. 11. Cubierta que sea la mitad de las acciones que constitu-
yan en capital social, se reuniran los suscritores en Junta general,
para que los que no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura
de fundación, presten su conformidad con los estatutos y reglamentos de la compañía, y según lo que se acordare, quedarán estos definitivamente arreglados.

Art. 12. La escritura de fundación de la compañía con sus reglamentos, las cartas de suscripción de acciones que completen la mitad del capital social, y el acta de su aprobación definitiva, se presentarán al Jefe político de la provincia donde esté domiciliada la sociedad, á fin de que esta autoridad proceda á formar el expediente instructivo sobre su aprobación. Si los establecimientos que la empresa se proponga beneficiar estuvieren en distinta provincia de la de su domicilio, se dirigirá tambien al Jefe político de aquella, copia autorizada de dichos documentos, para que concurra á la formación del expediente en la parte que le concierna.

Con la escritura de fundación y reglamentos que se han de presentar al Jefe político de la provincia del domicilio, se acompañarán copias simples de una y otros, que remitirá dicho Jefe con el expediente, y se conservarán en el archivo del Ministerio.

Art. 13. Corresponde al Jefe político examinar:

1.º Si los estatutos de la sociedad están conformes á lo prescrito en el Código de Comercio con respecto á las sociedades comanditarias y anónimas, á las disposiciones de la ley de 28 de enero de 1848, y á las de este reglamento.

2.º Si el objeto de la sociedad es lícito y de utilidad pública, conforme al art. 4.º de la precitada ley, sin trascendencia á monopolizar subsistencias ú otros artículos de primera necesidad.

3.º Si el capital prefijado en los estatutos sociales puede graduarse suficiente para el objeto de la empresa: si está convenientemente asegurado su recaudación, y si las épocas establecidas para los dividendos pasivos de las acciones están combinadas de manera, que la caja social se halle suficientemente provista para cubrir sus obligaciones.

4.º Si el régimen administrativo y directivo de la compañía ofrece las garantías morales, que son indispensables para el crédito de la empresa, y la seguridad de los intereses de los accionistas y del público.

Art. 14. Para calificar si el objeto de la compañía es de utilidad pública, el Jefe político pedirá informe á la Diputacion y Consejo provincial, al Tribunal de Comercio, en cuyo distrito estuviere domiciliada la compañía, á la sociedad económica de Amigos del país si
la hubiere, y al Ayuntamiento. Estos informes podrán tambien ex-
tenderse á cualquiera de los demas extremos designados en el artícu-
lo anterior, sobre que el Jefe político estimare conveniente pedirlos.

Art. 15. Cuando los establecimientos comerciales ó industriales
de la compañia se hubieren de fijar en distinta provincia de la de su
domicilio, el Jefe político de esta ultima pedirá tambien al de aque-
lla, los informes oportunos para completar la instruccion del ex-
pediente en cuanto á los hechos, de que por la localidad de los mis-
mos establecimientos, deberá tener un conocimiento especial el Jefe
de la provincia.

Art. 16. Instruido suficientemente el expediente de calificacion
de la empresa, se remitirá por el Jefe político al Gobierno, de cuya
órden pasará al Consejo Real, para que eleve consulta sobre la apro-
bacion de la compañia y de sus estatutos y reglamentos.

Art. 17. Si el Consejo Real hallare incompleta la instruccion del
expediente, acordará su ampliacion exigiendo nuevos informes, ó la
presentacion de los documentos que sean conducentes.

Art. 18. Teniendo el expediente estado de resolucion, el Consejo
Real elevará su consulta, segun corresponda á los méritos del mismo
expediente, proponiendo, en el caso de que no haya inconveniente
para la aprobacion de la sociedad, la parte del capital que haya de
hacerse efectiva antes de ponerse en ejecucion el Real decreto de
autorizacion.

Art. 19. Cuando la compañia fuere de las que no pueden estable-
cerse sino por una ley, segun lo dispuesto en el art. 2.º de la de 28
enero, el Consejo consultará al Gobierno lo conveniente sobre su apro-
bacion; y caso de que esta procediere, acompañará tambien á la con-
sulta el proyecto de ley que en su juicio deba presentarse á las Córtes.

Art. 20. Cuando las sociedades por acciones, cuya autorizacion
sea de la competencia del Gobierno, reunan en su objeto las cualida-
des prescritas por la ley, pero no estén conformes á sus disposiciones
los estatutos acordados por los fundadores, propondrá el Consejo las
modificaciones que en ellos deban hacerse. Conformándose el Go-
bierno con esta consulta, se comunicaran aquelhas á los interesados,
para que en su vista, si insistieren en la formacion de la compañia,
otorguen nueva escritura, reformando los estatutos segun se les haya
prevenido.

Art. 21. El Gobierno, con presencia de todo el expediente, y de
la consulta del Consejo Real, acordará lo que corresponda; y si pro-
cediére la aprobacion de la sociedad con los estatutos y los reglamentos presentados, se expedirá el Real decreto de autorizacion, en el cual se fijará la parte de capital con que haya de constituirse desde luego, con arreglo al art. 9.° de la ley de 28 de enero, determinándose el plazo para hacerla efectiva en la caja social, y el que se estime suficiente para que se complete la suscripción de las acciones.

Art. 22. Comunicado al Jefe político á quien corresponda, el Real decreto de autorizacion, se imprimirán y publicarán los estatutos y reglamentos de la sociedad, abriéndose por la administracion provisional la suscripción de acciones vacantes, dentro del plazo prefiijado; á cuyo vencimiento, se remitirá al mismo Jefe político en forma auténtica la lista de los nuevos accionistas, con que se acredite haberse cubierto la suscripción del capital social. Si no se presentaren accionistas para completarlo, se tendrá por caducada la Real autorizacion.

Art. 23. Realizada que sea en la caja social la parte de capital que el Gobierno hubiere prefijado, y comprobada su existencia por el Jefe político, dará este cuenta al Gobierno, á fin de que declare constituida la compañía, determinando el plazo dentro del cual ha de dar principio á sus operaciones.

Art. 24. Cuando parte del capital social se hubiere de constituir con bienes inmuebles aportados por alguno de los socios, se acredita al Jefe político su justiprecio, pudiendo esta autoridad comprobar la exactitud de la operacion por los medios que tenga por conveniente, para evitar que se dé á dichos bienes mas valor del que realmente tuvieren.

Art. 25. El jefe político á consecuencia de la orden en que se declare la compañía constituida, convocará la Junta general de accionistas, que se reunirá bajo su presidencia, ó la del empleado público en quien al efecto delegare, y dándose lectura del Real decreto de autorizacion, y de aquella misma orden, se procederá al nombramiento de las personas que hayan de tener á su cargo la administracion de la compañía, y la inspeccion ó vigilancia de esta misma administracion, si es anónima, y al de las que hayan de tener á su cargo la inspeccion ó vigilancia de la administracion, si es comanditaria, con arreglo en unas y otras á sus estatutos y reglamentos, declarándose á los elegidos, lo mismo que á los socios gerentes, si la sociedad es en comandita en ejercicio de sus funciones; y acordándose proceder á la emision de los títulos de las acciones.
en inscripciones nominativas. Estos títulos no podrán representar sino la cantidad efectiva, que del importe nominal de cada acción, se hubiere entregado por el accionista en la caja social.

Art. 26. De los estatutos y reglamentos de la compañía después de haberse constituido, y del Real decreto de autorización se remitirán copias al Tribunal de Comercio en cuyo territorio estuviese domiciliada, para que se hagan los correspondientes asientos en sus registros, fijándose edictos en los extrados del Tribunal, con inserción literal de aquellos documentos.

Art. 27. Según está declarado en el art. 265 del Código de Comercio, los administradores de las sociedades, por acciones, siendo anónimas, son amovibles á la voluntad de los socios mediando justas causas de separación con arreglo á derecho, ó á lo que sobre la materia estuviese establecido en los estatutos de la sociedad.

Art. 28. En las compañías comanditarias por acciones no podrán ser removidos los socios gerentes de la administración social que les compete, como responsables directamente y con sus bienes propios, de todas las operaciones á la compañía. En caso de muerte ó inhabilitación de los socios gerentes se tendrá por disuelta la compañía, y se procederá á su liquidación.

Art. 29. Dentro de los 15 días siguientes al en que se hubiere declarado constituida la compañía, acreditarán los administradores ante el Jefe político haber hecho el depósito efectivo de las acciones, con que deben garantizar su gerencia en la cantidad determinada en los estatutos, y conforme á lo prescrito en el art. 13 de la ley de 28 de enero.

Art. 30. Las sociedades mercantiles por acciones estarán constantemente bajo la inspección del Gobierno y del Jefe político de la provincia de su domicilio, en cuanto á su régimen administrativo y á la exacta observancia de sus estatutos y reglamentos, conforme está declarado en el art. 17 de la ley de 28 de enero. El Gobierno con el debido conocimiento de causa, y oído el Consejo Real, suspenderá ó anulará, según estimare procedente, la autorización de las compañías que en sus operaciones, ó en el orden de su administración, faltaren al cumplimiento de las disposiciones legales ó de sus estatutos.

Art. 31. Los fondos de las compañías mercantiles por acciones no podrán distraerse de la caja social para negociaciones extrañas al objeto de su creación.
Se permitirá únicamente aplicar los fondos sobrantes, que existan en caja, para descuentos ó préstamos, cuyo plazo no podrá exceder de 90 días, dándose precisamente en garantía papel de la Deuda consolidada.

Los administradores son directamente responsables de cualquier cantidad de que dispusieren, contraviniendo á estas disposiciones.

Art. 32. Ningun accionista podrá excusarse de satisfacer puntualmente los dividendos pasivos, que acordare la administracion de la compañía en las épocas marcadas en los estatutos. En defecto de hacerlo podrá optar la misma administracion, conforme á lo dispuesto en el art 300 del Código de Comercio, entre proceder ejecutivamente contra los bienes del sócio omiso, para hacer efectiva la cantidad de que fuere deudor, ó proceder à la venta de sus acciones al curso corriente en la plaza, per medio de la Junta sindical de los agentes de cambio, ó la de corredores, donde no hubiere colegio de agentes.

Art. 33. Las transferencias de las acciones han de consignarse en un registro especial para estas operaciones, que llevará cada compañía interviniendo en ellas un agente ó corredor de cambios para la autenticidad del acta, quedando aquel responsable de la identidad de las personas entre quienes se hiciere la negociacion.

Cuando no estuviere cubierto el valor íntegro de la accion, se hará expresion formal en el acta de transferencia de quedar el cesanté subsidiariamente responsable del pago que deberá hacer el cesionario de las cantidades que falten para cubrir el importe de la accion, según se prescribe en el art. 283 del Código de Comercio.

Art. 34. Anualmente formalizarán las compañías mercantiles por acciones un balance general de su situacion, en que se comprenderán todas las operaciones practicadas en el año, sus resultados y el estado de su activo y pasivo. Estos balances, autorizados por los administradores de la compañía, bajo su responsabilidad directa y personal, y despues de reconocidos y aprobados en Junta general de accionistas, se remitirán al Jefe político de la provincia, quien dispondrá su comprobacion; y hallándose exactos y conformes con los libros de la compañía, se imprimirán y publicarán en el Boletin oficial de la provincia, comunicándose asimismo al Tribunal de Comercio del territorio.

Art. 35. Los dividendos de beneficios repartibles se acordarán necesariamente en Junta general de accionistas con presencia del
balance general de la situación de la compañía, y no podrán verificarse sino de los beneficios líquidos y recaudados del mismo balance, previa la deducción de la parte que haya de aplicarse al fondo de reserva.

Art. 36. Cuando del balance resultare haberse disminuido el fondo de reserva, se aplicará para completarlo toda la parte de beneficios que fuere necesaria, reduciéndose el dividendo para los accionistas a la que hubiere sobrante.

Art. 37. Los Jefes políticos darán cuenta al Gobierno del estado de cada compañía por acciones que hubiere en su territorio, según el resultado del balance anual, exponiendo las observaciones que estimaren conducentes, en las materias que sean de interés de la administración.

Además de estas comunicaciones anuales, pondrán en conocimiento del Gobierno, para la resolución correspondiente, toda novedad que ocurra en el régimen directivo y administrativo de las compañías, que pueda perturbarlo, o que produzca alguna alteración en la observancia de sus estatutos.

Art. 38. Siempre que de resultados de la inspección, que la administración ha de ejercer sobre las sociedades por acciones, ó por los documentos que estas deben someter á su comprobación, ó por cualquiera otro medio legal, constare haberse perpetrado algun delito en el manejo directivo y administrativo de la sociedad, procederá el Jefe político conforme está prescrito en el párrafo 5.º del artículo 5.º de la ley de 2 de abril de 1845.

Art. 39. Los gerentes ó directores de las compañías por acciones existentes en la actualidad, que en virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la ley de 28 de enero, deben necesariamente convocar á Junta general de accionistas dentro de los 50 días siguientes al de su publicación, darán conocimiento al Jefe político de la provincia del día de la reunión, á fin de que aquella autoridad pueda por sí ó por sus delegados presidir dicha Junta. Celebrada esta, remitirán los directores copia certificada del acuerdo, sea para declarar la compañía en liquidación, ó bien para impetrar la Real autorización que la habilite para continuar en sus operaciones.

Art. 40. En defecto de presentarse por los directores de alguna compañía el debido cumplimiento á la disposicion de la ley, procederá el Jefe político, transcurrido que sea el término que en ella se prefija, á convocar la Junta general de accionistas bajo su presi-
dencia, ó la de otro empleado público en quien delegare al efecto.

Art. 41. Las compañías que acordaren cesar en sus operaciones, quedaran inhabilitadas, desde la misma fecha del acuerdo, para hacer nuevos negocios; y en caso de contravencion, incurrian los que lo hicieren en la responsabilidad y pena pecuniaria que se prescribe en el art. 16 de la ley de 28 de enero.

Art. 42. Los administradores de las compañías, que acordaren solicitar la Real autorizacion, lo verificaran dentro del plazo legal, dirigiendo al Gobierno la correspondiente exposicion, á que acompañaran certificacion de aquel acuerdo y sus estatutos y reglamentos. Estos documentos se entregaran al jefe politico de la provincia, de cuya orden se formara, dentro del término improrrogable de quince dias, el balance general que demuestre la situacion de la compania, y la calificacion de su activo; y comprobada que sea la exactitud de aquel documento, se remitira el expediente al Gobierno para la resolucion conveniente, que recaera, previa la correspondiente consulta del Consejo Real, y con arreglo á lo dispuesto en el art. 19 de la ley de 28 de enero.

Art. 43. Trascurrido el plazo de dos meses después de la publicacion de la misma ley, se declararan disueltas todas las companias por acciones, que no hubiesen impetrado la Real autorizacion; á cuyo fin los Jefes politicos daran cuenta al Gobierno de las que dentro del territorio de la provincia de su mando, se hallaren en este caso. La disolucion de estas companias, se publicara en la Gaceta del Gobierno y en el Boletin oficial de la provincia respectiva, dándose conocimiento de ella al Tribunal de Comercio á quien corresponda.

Art. 44. En la liquidacion de las companias que quedaren disueltas, sea por acuerdo de los accionistas, ó bien por no haber impetrado y obtenido la Real autorizacion, se procedera con arreglo á las disposiciones del Código de Comercio; siendo obligacion de los encargados de la liquidacion dar cuenta mensualmente al Jefe politico de la provincia del estado en que se hallare, y acreditarle asi mismo á su conclusion haber quedado canceladas todas las resultas de la misma liquidacion. La inspeccion, que sobre ella se encarga á los Jefes politicos, no obstanta para que los interesados ejerçiten judicialmente los derechos que les competan sobre los haberes de la compania, y para que su liquidacion se haga legalmente.

Madrid 17 de febrero de 1848.—Juan Bravo Murillo.
APÉNDICE NÚM. 3.

REGLAMENTO

de las funciones de los Gobernadores y delegados inspectores de las sociedades mercantiles por acciones.

12 de diciembre de 1857.

REAL ÓRDEN.

Ilmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.), se ha servido aprobar el adjunto reglamento de las funciones que deben ejercer los Gobernadores de provincia y delegados especiales del Gobierno cerca de las compañías mercantiles por acciones al inspeccionar estas empresas; habiendo dispuesto S. M. que se publique y circule dicho reglamento, á fin de que llegue á conocimiento de las expresadas sociedades y demás efectos consiguientes.


REGLAMENTO

DE LAS FUNCIONES QUE DEBEN EJERCER LOS GOBERNADORES DE PROVINCIA Y DELEGADOS ESPECIALES DEL GOBIERNO CERCA DE LAS COMPANÍAS MER- CANTILES POR ACCIONES AL INSPECCIONAR ESTAS SOCIEDADES.

Artículo 1.° La inspección de las sociedades mercantiles por acciones que las leyes encomiendan al Gobierno, corresponde ejercerla inmediatamente á los Gobernadores de las provincias ó á delegados especiales nombrados al efecto.

Art. 2.° Los delegados residirán constantemente en el punto donde la sociedad inspeccionada tenga su domicilio, y dependerán del Gobernador de la provincia respectiva, aun cuando se comunicarán directamente con el Gobierno ó con la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio.

Art. 3.° El Gobernador de la provincia donde tenga su domici-
lia la compañía, dará posesión al delegado, convocando al efecto a la administración de la sociedad, y hará que conste dicha posesión en acta de la reunión que al efecto se celebre.

Art. 4.º Los Gobernadores ó los delegados que se nombren, al autorizar la constitución de una compañía, cuidarán:

1.º De comprobar si continúa existente en caja el importe del primer dividendo pasivo.

2.º De que la sociedad se reúna en Junta general para dar cuenta de la ley ó del Real decreto de autorización, procediendo inmediatamente á la elección de las personas que hayan de tener á su cargo la administración de la compañía, y la inspección ó vigilancia de esta misma administración si es sociedad anónima.

3.º De que la Junta general asigne á los mandatarios, la remuneración que hayan de disfrutar.

4.º De que los mismos mandatarios depositen en el término de 15 días el número de acciones que se haya fijado por los estatutos para garantía de la gerencia.

5.º De que en el propio término se aprecien los objetos, valores, concesiones ó cualesquiera efectos que algun socio ó compañía aporte á la nueva sociedad, graduándose su importe por los medios legales ó convencionales que se estipulen entre la administración definitiva de la compañía, y el dueño de los objetos aportados, cuyo justiprecio se acreditará al Gobernador ó delegado, á fin de que comprueben necesariamente la exactitud de la operación por los medios más conducentes.

6.º De que en el mismo plazo de 15 días se remitan al Tribunal de Comercio, en cuyo territorio tenga su domicilio la sociedad, copias de sus estatutos y reglamentos y de la ley y del Real decreto de autorización de la compañía.

Y 7.º De que la sociedad dé principio á sus operaciones dentro del plazo fijado al efecto.

Espirando el plazo, los delegados darán cuenta al Gobierno de haberse ó no cumplido todos los requisitos expresados, remitiendo copia literal del acta de la primera Junta general, e informando circumstanciadamente acerca de lo que resulte y se haya ejecutado en observancia de lo dispuesto por el párrafo 6.º de este artículo.

Art. 5.º Cuidarán especialmente de que las compañías lleven la contabilidad en la forma dispuesta por la sección 2.ª, libro 1.º, t. 2.º del Código de Comercio.
APÉNDICE NÚM. 3.

REGLAMENTO

de las funciones de los Gobernadores y delegados inspectores de las sociedades mercantiles por acciones.

12 de diciembre de 1857.

REAL ÓRDEN.

Ilmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G), se ha servido aprobar el adjunto reglamento de las funciones que deben ejercer los Gobernadores de provincia y delegados especiales del Gobierno cerca de las compañías mercantiles por acciones al inspeccionar estas empresas; habiendo dispuesto S. M. que se publique y circule dicho reglamento, á fin de que llegue á conocimiento de las expresadas sociedades y demás efectos consiguientes.


REGLAMENTO

DE LAS FUNCIONES QUE DEBEN EJERCER LOS GOBERNADORES DE PROVINCIA Y DELEGADOS ESPECIALES DEL GOBIERNO CERCA DE LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES POR ACCIONES AL INSPECIONAR ESTAS SOCIEDADES.

Artículo 1.º La inspección de las sociedades mercantiles por acciones que las leyes encomiendan al Gobierno, corresponde ejercerla inmediatamente á los Gobernadores de las provincias ó á delegados especiales nombrados al efecto.

Art. 2.º Los delegados residirán constantemente en el punto donde la sociedad inspeccionada tenga su domicilio, y dependerán del Gobernador de la provincia respectiva, aun cuando se comunicarán directamente con el Gobierno ó con la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio.

Art. 3.º El Gobernador de la provincia donde tenga su domici-
la compañía, dará posesión al delegado, convocando al efecto a la administración de la sociedad, y hará que conste dicha posesión en acta de la reunión que al efecto se celebre.

Art. 4.º Los Gobernadores ó los delegados que se nombran, al autorizar la constitución de una compañía, cuidarán:

1.º De comprobar si continúa existente en caja el importe del primer dividiendo pasivo.

2.º De que la sociedad se reúna en Junta general para dar cuenta de la ley ó del Real decreto de autorización, procediendo inmediatamente á la elección de las personas que hayan de tener á su cargo la administración de la compañía, y la inspección ó vigilancia de esta misma administración si es sociedad anónima.

3.º De que la Junta general asigne á los mandatarios, la remuneración que hayan de disfrutar.

4.º De que los mismos mandatarios depositen en el término de 15 días el número de acciones que se haya fijado por los estatutos para garantía de la gerencia.

5.º De que en el propio término se aprecien los objetos, valores, concesiones ó cualesquiera efectos que algún socio ó compañía aporte á la nueva sociedad, graduándose su importe por los medios legales ó convencionales que se estipulen entre la administración definitiva de la compañía, y el dueño de los objetos aportados, cuyo justiprecio se acreditará al Gobernador ó delegado, á fin de que comprueben necesariamente la exactitud de la operación por los medios más conducentes.

6.º De que en el mismo plazo de 15 días se remiten al Tribunal de Comercio, en cuyo territorio tenga su domicilio la sociedad, copias de sus estatutos y reglamentos y de la ley y del Real decreto de autorización de la compañía.

Y 7.º De que la sociedad dé principio á sus operaciones dentro del plazo fijado al efecto.

Espirando el plazo, los delegados darán cuenta al Gobierno de haberse ó no cumplido todos los requisitos expresados, remitiendo copia literal del acta de la primera Junta general, e informando circunstanciadamente acerca de lo que resulte y se haya ejecutado en observancia de lo dispuesto por el párrafo 6.º de este artículo.

Art. 5.º Cuidarán especialmente de que las compañías lleven su contabilidad en la forma dispuesta por la sección 2.º, libro 1.º, tit 2.º del Código de Comercio.
Art. 6.º Además de los libros Diario, Mayor y de Inventarios, llevarán las empresas el de Transferencia de acciones, el de Actas de sus Juntas generales y de gobierno y cualesquiera otros que convengan á su mejor contabilidad y órden, debiendo los Gobernadores y delegados rubricar y anotar dichos libros, con expresión de estar sellados los que deban tener este requisito, en cumplimiento de lo dispuesto por Real decreto de 8 de agosto de 1851 é instrucción de 1.º de octubre del mismo año.

Art. 7.º Los delegados del Gobierno cerca de las sociedades mercantiles por acciones, asistirán á sus Juntas generales y á las de dirección, vigilancia ó gobierno de cada compañía, correspondiendo la presidencia honorífica sin voz ni voto.

Si los estatutos de las compañías confieren al presidente alguna decisión ó facultad que no sea la de dirigir la discusión, la ejercerá el que lo sea de la sociedad ó de sus Juntas, aun cuando en ellas ocupe el delegado el sitio de preeminencia, si no asistiese el Gobernador de la provincia, pues de concurrir esta autoridad le corresponderá la presidencia de honor.

Art. 8.º Las compañías mercantiles por acciones formarán cada tres meses estados de situación, entregando al Gobernador ó delegado una copia de los mismos, á fin de que los comprueben con los libros y caja de la sociedad.

Si de dicha comprobación resultase que la sociedad tenga fondos ó valores por depósitos y cuentas corrientes en Bancos ó otros establecimientos públicos legalmente autorizados, deberá el Gobernador ó delegado verificar la efectividad de estas existencias.

Y si resultan en caja talones de otras compañías ó particulares que tengan también cuentas corrientes en alguno de dichos establecimientos, se practicará igual verificación.

Art. 9.º Los estados de situación que rindan las compañías concesionarias de ferro-carriles ó otras obras públicas contendrán todas las noticias y detalles relativos á los gastos e ingresos de la empresa, según lo dispuesto en el art. 41 de la ley de 11 de julio de 1856.

Art. 10. Las compañías que por sus estatutos ó reglamentos verifiquen periódicamente arqueos de caja, darán conocimiento de los días en que se efectúe esta operación al Gobernador de la provincia para que pueda asistir al acto por sí ó por persona que le represente, y al delegado para que precisamente concurra á los arqueos.
Cuando de ellos resulte en caja la existencia de resguardos, talones ó valores de los expresados en el art. 8.º, procederá la autoridad á el delegado á practicar en el mismo día del arqueo, ó al siguiente, la verificación prevenida en el mismo artículo.

Art. 11. Al comprobar los Gobernadores ó delegados los estados de cada trimestre, y al concurrir á los arqueos que se celebren, verificarán igualmente la existencia de los depósitos de acciones que deban tener hechos los Directores y mandatarios de la compañía en garantía de su gerencia.

Art. 12. Comprobado y verificado esto, se remitirá al Gobierno la copia de los estados de cada trimestre, con informe relativo á la situación mercantil, existencia legal y estado de la compañía.

Art. 13. En los informes de cada trimestre se expresará precisamente si los actos de los mandatarios de la compañía inspeccionada se hallan arreglados exactamente á las prescripciones legales, á los estatutos sociales y á los acuerdos de las Juntas generales, cuan-do el objeto no sea de ley ó de estatutos. Sin perjuicio de estas comunicaciones, los Gobernadores y delegados darán parte de toda infracción cometida por dichos mandatarios contra las leyes, estatutos ó acuerdos de la sociedad inmediatamente que tengan noticia y conocimiento de cualquiera de estas faltas.

Art. 14. Anualmente ó cuantas veces formen las compañías balances generales, exigirá el Gobernador ó delegado una copia de ellos, y comprobándolos con los libros de la sociedad, y calificando su activo y pasivo, remitirán al Gobierno dichos balances con informe circunstanciado acerca de los mismos. En este informe se manifestará precisamente si la compañía ha repartido ó imputado dividendos activos ó alguna parte de ellos por cuenta de beneficios calculados y no realizados.

Si al formarse dichos balances se redactan y publican memorias acerca del estado de la sociedad, remitirán también una copia ó ejemplar impreso de dichas memorias.

Art. 15. Los Gobernadores ó delegados de las compañías concesionarias de obras públicas que tengan concedida subvención ó auxilio del Estado, cuidarán:

1.º De que el importe de dichas subvenciones figure siempre en los balances de la sociedad con la debida expresión y con separación del activo social, á fin de que resulte claramente el verdadero aumento ó pérdida que haya sufrido el capital propio, con el que
se fundara la sociedad por suscripción y desembolso de sus accionistas.

2.° De que los dividendos activos procedan solamente de beneficios efectivos realizados.

Y 3.° De que las empresas imputen sus gastos con separación al capital de establecimiento ó al de explotación, según corresponda por la naturaleza de los mismos gastos.

Art. 16. Siempre que las compañías celebren Juntas generales ó extraordinarias, los Gobernadores ó delegados exigirán copia literal de las actas, y la remitirán al Gobierno, informando cuando se les ofrezca y parezca.

Art. 17. Los Gobernadores ó delegados acusarán siempre á correo seguido el recibo de las Reales órdenes, y de las dadas ó comunicadas por la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, sin perjuicio de lo que corresponda oficiar cuanto dichas órdenes hayan tenido cumplimiento.

Art. 18. Los delegados llevarán un copiador de dichas órdenes y otro de las comunicaciones que ellos dirijan al Gobierno, á la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, á las autoridades y los gerentes de la sociedad que inspeccionan.

Art. 19. Estos libros copiadores y sus originales y minutas con todos los demás papeles ó documentos relativos á la inspección, formarán el archivo ó antecedentes de la misma, y se hallarán siempre inventariados ó constando en un índice que entregarán los delegados que cesen en sus cargos á los que les suceden.

Art. 20. Los delegados que hayan de cesar por disposición del Gobierno, continuarán, sin embargo, en el desempeño de su cargo hasta que se presente el sucesor, y en los casos de enfermedad, ausencia autorizada ó dimisión de los mismos delegados, deberán estos poner en conocimiento del Gobernador de la provincia el motivo y día en que comience su cesación ó suspensión de funciones, y del mismo modo oficinarán á la autoridad cuando vuelvan al desempeño de las mismas.

Art. 21. Los delegados cerca de las compañías cuyas obras ó operaciones se hallen dirigidas, inspeccionadas ó intervenidas en lo facultativo ó en lo económico por funcionarios especiales, procederán de acuerdo con los mismos en todo aquello que conduzca al mejor servicio y acertado desempeño de sus respectivos cargos.

Madrid 12 de diciembre de 1857.—Salaverría.
APÉNDICE NÚM. 4.

Bancos.

28 de enero de 1856.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución, Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entiendieren, sabed, que las Cortes Constituyentes han decretado y Nos sancionando lo siguiente:

Artículo 1.° El Banco español de San Fernando tomará en lo sucesivo el nombre de Banco de España.

Su duración será la de 25 años, á contar desde la fecha de la presente ley.

Art. 2.° Los Bancos de Barcelona y Cádiz continuaran funcionando hasta el término de su concesión.

Art. 3.° El Banco de España establecerá en el término de un año sucursales en Alicante, Bilbao, Coruña, Málaga, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, sin perjuicio de que sin necesidad de esperar á la terminación del año, puedan establecerse Bancos particulares en los puntos que acaban de indicarse y demás, con los mismos privilegios que la presente ley concede al de España.

Art 4.° En cada localidad solo podrá crearse un establecimiento de emisión, bien sea Banco particular, bien sucursal del de España.

Transcurridos tres meses desde la publicación de esta ley sin que se haya solicitado autorización para crear Banco particular en alguna ó algunas de las capitales mencionadas en el art. 3.°, el Banco de España obtará por establecer ó no sucursal.

Art. 5.° Toda concesión de Banco caducará á los tres meses de su fecha, si no se hubiese realizado su establecimiento.

Art. 6.° El Gobierno, conciliando los intereses respectivos de
los Bancos de Barcelona y Cádiz, dispondrá el aumento del capital efectivo de los mismos cuando lo juzgue oportuno, y considere conveniente por efecto de las necesidades públicas, sin pasar nunca de la suma del capital nominal de dichos establecimientos.

Art. 7.° Las acciones del Banco de España y las que se emitan para la creación de otros en virtud de la presente ley, serán de 2,000 reales cada una.

El capital de las acciones de los Bancos será efectivo en todos los casos, y queda por consiguiente prohibida la creación de acciones de valor nominal, exceptuándose de esta disposición los Bancos de Barcelona y Cádiz, cuyas acciones conservarán sus actuales condiciones, hasta que puedan ser convertidas en acciones definitivas (').

Art. 8.° Las concesiones para la creación de Bancos se harán por Reales decretos, acordados en Consejo de Ministros, previa la oportuna información y después de oído el Tribunal contencioso administrativo ó el que hiciere sus veces, publicando los estatutos y reglamentos, después de aprobados en la Gaceta del Gobierno.

Art. 9.° El Banco de España, los de Cádiz y Barcelona, y los que se constituyan en la Península e Islas adyacentes, en virtud de la presente ley, quedan facultados para emitir una suma de billetes al portador igual al triple de su capital efectivo, teniendo la obligación de conservar en metálico en sus cajas la tercera parte, cuando menos, del importe de los billetes emitidos.

Art. 10. No podrán emitirse billetes menores de 100 rs. ni mayores de 4,000.

Art. 11. Los accionistas de los Bancos solo responderán del importe de sus acciones respectivas.

Art. 12. Los extranjeros podrán ser accionistas de los Bancos, pero no obtendrán cargo de su administración si no se hallan domiciliados en el reino, y tienen además carta de naturalización, con arreglo á las leyes.

Art. 13. Los fondos pertenecientes á extranjeros que existan en

(*) Las acciones del Banco de España se enajenan y transmiten, por declaración que el dueño ó un tercero con poder suyo especial ó general para enajenar, deberá hacer ante la administración del Banco firmando la en el registro que este tiene destinado á este objeto, con la intervención de un agente de cambio ó corredor de número. Artículo 4.° de sus Estatutos aprobados por Real orden de 6 de mayo de 1856.
los Bancos, no estarán sujetos a represalias en caso de guerra con sus respectivas naciones.

Art. 14. Los Bancos se ocuparán en descontar, girar, prestar, llevar cuentas corrientes, ejecutar cobranzas, recibir depósitos, contratar con el Gobierno y sus dependencias competentemente autorizadas, sin que queden nunca en descubierto (*).

Art. 15. No podrán los Bancos hacer préstamos bajo la garantía de sus propias acciones. Tampoco podrán negociar en efectos públicos.

Art. 16. El premio, condiciones y garantías de las operaciones expresadas en el art. 14 de esta ley, se fijarán en conformidad con lo que prevengan los estatutos y reglamentos de los Bancos.

Art. 17. El Banco de España, los de Cádiz y Barcelona, y los que se creen en la Península ó Islas adyacentes, no podrán anticipar al Tesoro, sin garantías sólidas y de fácil realización, una suma mayor que la de su capital efectivo.

Art. 18. El Gobierno de S. M. nombrará un Gobernador para el Banco de España, y los comisarios regíos de los de Cádiz, Barcelona y demás que se creen en puntos en que no existan sucursales del Banco de España.

Art. 19. Las Juntas generales de accionistas de los Bancos, nombrarán los Consejos de gobierno ó de administración de los mismos. Estos, por medio de comisiones de su seno, tendrán todas las atribuciones necesarias para garantir eficazmente los intereses de los accionistas, de tal modo que ninguna operación se haga sin su consentimiento.

Art. 20. Será cargo especial del Gobernador del Banco de España, comisarios regíos de los demás establecidos, ó que se establezcan, y de los Consejos de gobierno y de administración de los mismos, cuidar de que constantemente existan en caja y cartera, metálico y valores realizables, cuyo plazo no exceda de 90 días, bastantes á cubrir sus débitos por billetes, cuentas corrientes y depósitos.

Art. 21. Todos los Bancos de emisión estarán obligados á publicar mensualmente, y bajo su responsabilidad, en la Gaceta del

(*) Además de estas operaciones puede el de España hacer el comercio de oro y plata según el art. 5.º de sus Estatutos aprobados por Real orden de 6 de mayo de 1856, estándose prohibida toda otra operación comercial ó industrial.
Gobierno el estado de su situacion, en la forma prescrita por el Ministerio de Hacienda.

Art. 22. Si antes de cumplirse el termino de la concesion de un Banco, quedase reducido su capital a la mitad, el Gobierno pondra la Corts las nuevas condiciones con que deba continuar, o bien la solucion o liquidacion del mismo.

Art. 23. Mereceran en todo caso el concepto de acreedores de los Bancos por depositos voluntarios los tenedores de sus billetes, y los que lo fuesen por saldo de cuenta corriente con los mismos establecimientos.

Art. 24. Los Bancos tendran un fondo de reserva equivalente al 10 por 100 de su capital efectivo, formado de los beneficios liquidos que produzcan sus operaciones, con deduccion del interes anual del capital, que en ningun caso excedera de 6 por 100. Los beneficios que resulten despues de satisfechos los gastos y intereses, se aplicaran por mitad a los accionistas y al fondo de reserva hasta que este se complete, en cuyo caso se repartiran aquellos integros a los mismos.

Art. 25. Quedan vigentes las leyes de 4 de mayo de 1849 y 15 de diciembre de 1851, relativas al Banco de San Fernando, y los Reales decretos de 1.° de mayo de 1844, 25 de julio de 1847 y modificaciones concernientes a los Bancos de Barcelona y Cadiz, en cuanto se opongan a la presente ley.

Por tanto, mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes Gobernadores y demas autoridades, asi civiles como militares y eclesiasticas, de cualquierra clase o dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Palacio a veinte y ocho de enero de mil ochocientos cincuenta y seis.—Yo la Reina.—El Ministro de Hacienda, Juan Bruil.
APÉNDICE NÚM. 5.

Sociedades de crédito.

28 de enero de 1856.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y por la Constitución, Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entendiieren, sabed que las Córtes Constituyentes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.° Las sociedades anónimas de crédito podrán establecerse en España con sujeción á lo dispuesto en esta ley y á las que rijan sobre sociedades anónimas, en lo que no fueren modificadas por la presente.

Art. 2.° Su duración no podrá exceder de 99 años.

Art. 3.° Deberá fijarse el domicilio de la sociedad en un pueblo de la Península ó Islas adyacentes; pero tendrán todas la facultad de establecer agencias ó sucursales en cualquier punto de las posesiones españolas, y prévia la autorización del Gobierno para el extranjero.

Art. 4.° Las operaciones de las sociedades de crédito podrán extenderse á los objetos siguientes:

1.° Suscribir ó contratar empréstitos con el Gobierno, corporaciones provinciales ó municipales, y adquirir fondos públicos y acciones ó obligaciones de toda clase de empresas industriales ó de crédito.

Para suscribir ó contratar empréstitos con naciones extranjeras se necesitará autorización del Gobierno.

No podrá tampoco dedicarse á la adquisición de fondos públicos al contado ni á plazo, mas que la mitad del capital efectivo de las acciones de la sociedad.

2.° Crear toda clase de empresas de caminos de hierro, canales, fábricas, minas, dársenas (docks), alumbrado, desmontes y rotura-
ciones, riesgos, desagües y cualesquiera otras empresas industriales ó de utilidad pública.

3.° Practicar la fusión y transformación de toda clase de sociedades mercantiles, y encargarse de la emisión de acciones ó obligaciones de las mismas.

4.° Administrar, recaudar ó arrendar toda clase de contribuciones y empresas de obras públicas, y ceder ó ejecutar los contratos suscritos al efecto con la aprobación del Gobierno.

5.° Emitir obligaciones de la sociedad por una cantidad igual a la que se haya empleado y exista representada por valores en cartera por efecto de las operaciones de que tratan los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de este artículo (*).

6.° Vender ó dar en garantía todos los valores, acciones ó obligaciones adquiridos por la sociedad, y cambiarlos cuando lo juzgue conveniente.

7.° Prestar sobre efectos públicos, acciones ó obligaciones, géneros, frutos, cosechas, fincas, fábricas, buques y sus cargamentos y otros valores, y abrir créditos en cuenta corriente recibiendo en garantía efectos de igual clase.

Los préstamos que la sociedad haga sobre sus propias acciones no podrán exceder del 10 por 100 del capital efectivo de la sociedad, del 60 por 100 del valor que estén tengan en la plaza y del término de dos meses.

8.° Efectuar por cuenta de otras sociedades ó personas toda clase de cobros y pagos, y ejecutar cualquiera otra operación por cuenta ajena.

9.° Recibir en depósito toda clase de valores en papel y metálico y llevar cuentas corrientes con cualesquiera corporaciones, sociedades ó personas.

Art. 5.° El capital de las sociedades será determinado en cada caso, así como el número de acciones y series con que se verifique su emisión, según las disposiciones adoptadas en los estatutos y reglamentos respectivos.

(*) Según el Diario de las sesiones de Cortes, en la del 16 de enero de 1856, se aprobó este artículo con dos adiciones, una de la palabra Fábricas al número 2.° y otra que decía y séptimo al núm. 5.° después de los arts. 1.°, 2.°, 3.° y 4.° La primera se halla comprendida en las redacciones oficiales de esta ley, pero la segunda no se encuentra en ninguna de ellas como hemos manifestado ya en la nota del núm. 202.
Art. 6.° Las acciones serán al portador; pero cualquiera accionista tendrá derecho a depositarlas en la sociedad para recibir de la misma un resguardo nominativo.

Su emisión, para poder constituirse la sociedad, será desde un tercio a una mitad de las que constituyan el capital social. El primer dividendo se efectuará en la caja social dentro de los treinta días de la aprobación oficial de la sociedad, y su importe deberá ser de un 25 por 100 si la emisión es por mitad, y de un 30 por 100 si las acciones remitidas representan la tercera parte del capital.

Las acciones de las sociedades constituidas según la presente ley tendrán la consideración de los fondos públicos para los efectos de la contratación, y serán publicadas y cotizadas en la Bolsa.

No tendrá efecto contra los cedentes de estas acciones lo dispuesto en el art. 283 del Código de Comercio.

Art. 7.° Las obligaciones que emitan las sociedades con arreglo al párrafo 3.° del art. 4.°, serán al portador y a plazo fijo, que no baje en ningún caso de treinta días con la amortización e intereses que se determine. Interin no se haya hecho efectivo todo el capital, las sociedades solo podrán emitir el quintuplo de la parte realizada en obligaciones a vencimientos a más de un año, y hasta diez veces su importe cuando el capital se haya realizado por completo.

La suma de obligaciones a plazos menores de un año, unida a la de las cantidades recibidas en cuenta corriente, no podrán, en ningún caso exceder del doble del capital efectivo de la sociedad.

Art. 8.° Las sociedades de crédito estarán obligadas a presentar todos los meses al Gobierno de S. M., y a publicar en la Gaceta un estado de su situación, y además, siempre que el Gobierno lo pida, remitirán estados de cajas, cartera y resúmenes de operaciones.

El Gobierno podrá también hacer examinar, siempre y cuando lo estime conveniente, las operaciones y contabilidad de las sociedades, y comprobar el estado de sus cajas. Al efecto serán presentados todos los libros, documentos y valores de cualquiera especie que existan en ellas.

Art. 9.° Los estatutos y reglamentos para la administración de las sociedades anónimas de crédito, serán presentados al Gobierno publicados en la Gaceta y aprobados, oyendo siempre previamente al Consejo de Estado. Interin este no funcione, se oirá al Tribunal contencioso-administrativo.
Art. 10. El Gobierno podrá hacer concesiones por medio de Reales decretos para la organización de sociedades anónimas de crédito, conformándose a lo dispuesto en la presente ley, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan acudir a las Cortes solicitando la constitución de una sociedad por ley especial.

Art. 11. Las solicitudes para el establecimiento de sociedades de crédito, deberán ir acompañadas del documento que acredite haber hecho efectivo en la Caja general de Depósitos el 10 por 100 del importe del primer dividiendo de las acciones emitidas, conforme a lo dispuesto en el art. 6.º

Esta suma será admitida en metálico ó su equivalente en títulos de la Deuda del Estado ó otros valores del mismo al precio de la cotización del día anterior en que se verifique el depósito, el que se devolverá a la sociedad luego que justifique haber hecho efectivo en su caja el 25 por 100 ó el 30 por 100, según los casos, de las acciones emitidas, en cuya suma se podrá incluir la cantidad depositada.

Trascurrido el plazo fijado en el referido art. 6.º de esta ley sin que acredite la sociedad haber hecho efectivas en caja las indicadas cantidades, perderá el depósito, que quedará a beneficio del Tesoro público.

Se concede el plazo de treinta días desde la publicación de esta ley para aprontar dicho depósito las sociedades que han solicitado la autorización de las Cortes, cuyos estatutos no podrá aprobar el Gobierno hasta que se haya hecho el depósito.

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Palacio á 28 de enero de 1856.—Yo la Reina.—El Ministro de Hacienda, Juan Bruil.
APÉNDICE NÚM. 6.

REGlAMENTO

para la inspección de las sociedades anónimas de crédito (*).

TITULO PRIMERO.

DEL NOMBRE MIENTO DE LOS INSPECTORES DEL GOBIERNO ACERCA DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DE CRÉDITO.

Artículo 1.° La inspección de las sociedades anónimas de crédito que las leyes encomiendan al Gobierno de S. M., se ejercerá por los Gobernadores de las provincias, por inspectores nombrados con arreglo a lo prescrito en el art. 13 de la ley de 15 de julio último, y por delegados especiales a quienes se dé este encargo en casos determinados.

Art. 2.° Los inspectores serán considerados como empleados públicos, y en su consecuencia se sujetarán en el ingreso y ascenso a las condiciones de tales.

El Gobierno procurará siempre que sea posible que el nombramiento recaiga, en los que á esas condiciones reúnan las de ser licenciados ó doctores en Administración ó en Jurisprudencia.

Art. 3.° Los inspectores que nombre S. M., formarán una sección especial en el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de uno que tomará la denominación de inspector general, y será elegido de entre los más caracterizados.

(*) Por la ley de presupuestos de 29 de junio de este año, se autoriza al Gobierno para imponer á las sociedades anónimas un gravámen mensual con arreglo á la escala que establece, á fin de que pueda contar con los recursos necesarios para llevar á efecto esta inspección, como había autorizado antes la de 1855 en virtud de la que se formó este reglamento.
Dichos funcionarios con arreglo á lo dispuesto en el art. 13 de la ley de 15 de julio último, no estarán adscritos á ninguna sociedad determinada.

Art. 4.° El Gobierno de S. M. fijará los sueldos y dietas que han de disfrutar los inspectores, cuidando de que su importe no exceda de la cuota que han de satisfacer las sociedades de crédito, con arreglo á la tarifa comprendida en el art. 13 de la referida ley.

Dichos sueldos y dietas serán satisfechos por el Tesoro público, en el que ingresarán las cantidades que las compañías tienen que satisfacer por gastos de inspección.

Art. 5.° Los inspectores tomarán posesión de su cargo el día en que se presenten al Gobernador de la provincia en donde hayan de ejercer sus funciones, ó á su jefe inmediato el inspector general.

A este le dará la posesión el Subsecretario del Ministerio de Hacienda.

TITULO II.

DE LAS FUNCIONES Y DEBERES DE LOS INSPECTORES.

Art. 6.° Cuando el Gobierno en uso de las facultades que le otorga la ley de 28 de enero de 1856, autorice la constitución de una compañía anónima de crédito, dispondrá que el Gobernador de la provincia donde aquella tenga su domicilio social ó un inspector designado al efecto, cuide:

1.° De comprobar la existencia en Caja del importe del primer dividendo pasivo, levantando el acta correspondiente.

Si autorizada la creación de una sociedad anónima de crédito, no realizaren los suscritores de las acciones el primer dividendo pasivo en el término de treinta días contados desde la fecha de su aprobación oficial, el Gobernador ó inspector dará inmediatamente conocimiento al Gobierno.

2.° De que la sociedad se reúna en Junta general para dar cuenta de la ley ó Real decreto que autorice su formación, y de la Real orden en que se la declare definitivamente constituida, autorizando-la para que de principio á las operaciones de su instituto y de que se proceda sin demora á la elección de las personas que hayan de tener á su cargo la administración de la compañía y la inspección ó vigilancia de esta misma administración, con sujeción á las reglas establecidas en los estatutos.
3.° De que la Junta general asigne a los mandatarios la remuneración que hayan de disfrutar.

4.° De que los mismos mandatarios depositen antes de tomar posesión de sus cargos, el número de acciones que como garantía exijan los estatutos.

5.° De que se aprecien los objetos, valores, concesiones y cualesquiera otros efectos ó derechos que se aporten á la sociedad, graduándose su importe por los medios legales ó convencionales que se estipulen entre la administración de la compañía, definitivamente autorizada, y el dueño de los objetos aportados, cuyo justiprecio se acreditará al Gobernador ó inspector, á fin de que comprueben necesariamente la exactitud de la operación por los medios que estimen más conducentes.

6.° De que en el término de quince días, contados desde la fecha de la constitución definitiva de la compañía, se remitan al Tribunal de Comercio, en cuyo territorio tenga su domicilio, copias fechadas de sus estatutos y reglamento, y de la ley ó Real decreto que autorizó su formación, y de la Real orden en que se la declara definitivamente constituida.

7.° De que se establezca la contabilidad en los términos que prescribe la sección 2.°, tít. 2.° del libro 1.° del Código de Comercio, á cuyo efecto hará que los libros necesarios lleven el sello que manda el art. 56 del Real decreto de 12 de setiembre de 1861, y los rubricará en todas sus hojas, poniendo en la primera nota especificativa del número de ellas, según dispone el art. 47 del Real decreto citado.

Lo mismo hará con los libros que se destinen á conservar las actas de las Juntas generales y de gobierno ó administración.

8.° De que los títulos de las acciones tengan el timbre exigido por la ley, y de que al verificarse el canje de títulos ó recibos provisionales por las definitivas de las mismas, lleven también unos y otros el timbre correspondiente.

Y 9.° De que la sociedad dé principio á sus operaciones con arreglo a sus estatutos, y remita al Gobierno, por conducto del inspector general, copia íntegra del acta de la primera Junta de accionistas, y un informe circunstanciado acerca de lo que resulte y se haya ejecutado con relación á cada uno de los puntos expresados en este artículo.

Art. 7.° Los inspectores, respecto de las compañías constituidas...
das, cuidarán de examinar los estados que las mismas están obligadas a presentar mensualmente para demostrar su situación, con arreglo a lo que prescribe el art. 8.° de la ley de 28 de enero de 1856, así como los de caja, cartera y resúmenes de operaciones que deberán remitir también mensualmente, arreglados a los modelos que designe el Ministerio de Hacienda.

Una vez examinados los datos referidos, y hallándolos conformes, se remitirán por el inspector general a dicho Ministerio para su publicación en la Gaceta.

Igualmente se formará y remitirá por dicho funcionario, un resumen general por trimestres que demuestre la situación de dichas compañías, y el uso que hayan hecho del crédito, para su publicación también en la Gaceta.

Art. 8.° El inspector general podrá reclamar de las administraciones de las compañías las explicaciones o aclaraciones que estime convenientes para la mejor inteligencia de los estados que reciba y ha de pasar al Ministerio de Hacienda.

Art. 9.° Cada tres meses girará el Gobierno por medio de los inspectores que al efecto designe, una visita a todas las compañías establecidas, á fin de comprobar la exactitud de los estados que mensualmente hayan formado y remitido bajo la exclusiva responsabilidad de sus administradores, entendiéndose esta prescripción, sin perjuicio de las visitas extraordinarias que el Gobierno de S. M. acuerde en casos determinados y urgentes, y de la inspección constante que pueda ejercerse sobre las sociedades domiciliadas en determinadas localidades.

Art. 10. Los inspectores al verificar las visitas ordinarias, deberán:

1.° Asistir a las reuniones, que presidirán, del Consejo de Administración, especialmente cuando haya de tratarse en ellas de la emisión de obligaciones.

2.° Cuidar de que en la convocatoria para las Juntas generales, se observen las disposiciones prescritas en los estatutos y reglamentos en cuanto al plazo y forma, y en lo relativo al depósito de acciones que se requiera para la celebración legal de las sesiones.

3.° Verificar el arquero con toda esmerudulidad, y examinar la cartera, cerciorándose de que todos los valores y documentos existentes en ella, tienen las garantías que exigen los estatutos y las firmas y sellos correspondientes.
4.° Comprobar la exactitud de los balances que se remiten al Gobierno después de aprobados en Junta general de accionistas, y de los estados mensuales que tienen la obligación de formar.

5.° Concurrir á las Juntas generales tanto ordinarias como extraordinarias, cuando el Gobierno lo estime conveniente, presidiéndolas, a no ser que asista el Gobernador de la provincia, cuidando de no permitir que en ellas se tomen acuerdos contrarios á las leyes y á los estatutos de cada sociedad.

6.° Cerciorarse de que existen siempre en caja y en metálico, con arreglo á la obligación que mas adelante se impone á las sociedades la cantidad que importen las obligaciones que han debido amortizarse y que no se han amortizado por falta de presentación.

7.° Vigilar que la compañía al verificar la emisión de obligaciones, cuide de que guarden estas siempre la debida proporción con el capital realizado, conforme al art. 7.° de la ley de 28 de enero de 1856, y muy especialmente, si la emisión de obligaciones está dentro de su verdadero límite, señalado en el párrafo 5.° del artículo 4.° de dicha ley, ó sea el importe de la suma representada por valores en cartera, procedentes solo de las operaciones de que tratan los párrafos 1.°, 2.°, 3.° y 4.° del mismo artículo, teniendo siempre presente, que no dan derecho á emisión los valores en cartera procedentes de las operaciones marcadas en los párrafos 6.°, 7.°, 8.° y 9.° del propio artículo, ni el hecho de haberse realizado el capital social, sino únicamente, como queda expresado; los valores en cartera representativos de cantidades invertidas en las operaciones que autorizan los cuatro primeros párrafos del referido artículo 4.° de la ley.

8.° Examinar las operaciones que haya verificado ó verifique la sociedad, especialmente los préstamos sobre sus acciones, y la adquisición de fondos públicos á que se refieren los párrafos 1.° y 7.° del art. 4.° de dicha ley, y verificar el estado de la caja y cartera para conocer si los valores guardan relación con los de cuentas corrientes, depósitos y obligaciones de inmediato vencimiento.

9.° Se cerciorarán además de si las compañías han repartido ó imputado dividendos activos ó alguna parte de ellos, por cuenta de beneficios calculados y no realizados: de si los mandatarios de las mismas, tienen depositadas las acciones que con arreglo á los estatutos han de servir de garantía de su gestión.

Y 10. Darán cuenta en el plazo más breve posible del resulta-
do que ofrezca su visita, sin perjuicio de que si de la misma apare-
ciese haberse perpetrado algun delito en la gestion directiva ó admi-
istrativa de la sociedad, lo ponga inmediatamente en conocimiento
del Gobernador de la provincia, para que proceda á lo que dispone
la última parte de la prescripcion 5.ª del art. 11 de la ley de 25 se-
tiembre de 1863, para el gobierno y administracion de las provincias.

Art. 11. Siempre que el Gobierno disponga girar una visita ex-
traordinaria, el inspector á quien corresponda ó el delegado que se
nombre, procederá por sí á formar el balance ó estado de situación,
y á redactar los informes y memorias necesarias al efecto, con arre-
glo á lo que arrojen los libros de la misma. El resultado de estas
visitas, podrá publicarse en la Gaceta á juicio del Gobierno en todo
ó en parte, segun aconsejen los intereses publicos y los de los ac-
cionistas.

Art. 12. Los inspectores podrán impetrar de los Gobernadores
de provincia, el auxilio que necesiten para el expedito ejercicio de
sus funciones, sin perjuicio de dar cuenta al Ministerio de Hacienda
por el conducto correspondiente de los obstáculos que encuentren.

TITULO III.

Obligaciones de las sociedades anónimas de crédito.

Art. 13. Las sociedades de crédito, además de las obligaciones
que les imponen las leyes de 28 de enero de 1848, de igual fecha
de 1856, y sus estatutos y reglamento, tendrán las siguientes:

1.ª Formar y remitir mensualmente al Ministro de Hacienda
por conducto del inspector general, estados que demuestren su
situación y la de la caja, cartera y resumen de sus operaciones ar-
reglados á los modelos que dicho Ministerio redacte.

2.ª Formar y remitir igualmente por el mismo conducto, cada
tres meses, otro estado en la forma que prescribe la Real órden de
17 de febrero de 1862, para las compañías anónimas concesionarias
de obras públicas.

3.ª Conformarse en la emision de sus obligaciones á las pres-
cripcciones del art. 7.º de la ley de 28 de enero de 1856, sin que en
caso alguno puedan exceder la totalidad de las obligaciones que
emitan del límite que determina el párrafo 5.º del art. 4.º de la mis-
ma ley, según las operaciones realizadas por la compañía. Dichas
obligaciones para que sean uniformes y contengan todos los requi-
sitios que la ley y su índole especial exigen, se arreglarán al modelo que forme el Ministerio de Hacienda.

Las obligaciones no podrán emitirse ni circular, sin llevar el timbre correspondiente, con arreglo al art. 48 del Real decreto de 12 setiembre de 1861, bajo las penas establecidas en el art. 8.° del mismo.

4.° Dar cuenta al Ministerio de Hacienda por conducto del inspector general, de toda emisión de obligaciones que acuerden efectuar, dentro de los ocho días siguientes á aquel en que hubiesen adoptado el acuerdo las Juntas generales ó los Consejos de Administración, si para ello estuviesen facultados.

5.° Dar conocimiento por el mismo conducto al expresado Ministerio, de todo acuerdo referente á la convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, así como de todo reparto que acuerde la Junta general de accionistas ó el Consejo de Administración.

6.° Remitir en la forma y por el conducto correspondiente, copia literal de las actas de las Juntas generales ordinarias ó extraordinarias de accionistas que celebren, así como de los balances generales que formen con las notas y explicaciones necesarias para su más fácil inteligencia.

De las memorias y documentos de que se dé cuenta en las Juntas generales se remitirá siempre un ejemplar ó copia autorizada para conocimiento del Gobierno.

7.° Facilitar á los inspectores cuantos datos y noticias les exijan para el mejor desempeño de su cometido y para que la intervención de estos sea tan eficaz cual lo requiere el interés público, á cuyo efecto deberán exhibir todos sus libros y documentos sin reserva alguna, debiendo en este caso acompañar al inspector uno ó más individuos del Consejo de Administración.


1.° Que no pueden realizar el descuento de sus propias obligaciones ni recogerlas, antes de la época señalada para su amortización. Para esta última operación, deberán en todo caso impetrar la autorización del Gobierno, con expresión de las causas que justifiquen tal medida.

2.° Que las obligaciones no devengan interés alguno después de su vencimiento.

Y 3.° Que las sociedades están obligadas a conservar en caja y
en metálico el importe de las obligaciones no amortizadas por falta de presentación a fin de que puedan realizarse sin demora en el momento que se presenten.

TITULO IV.

Disposiciones generales.

Art. 15. Siendo exclusivamente de vigilancia las facultades que por el presente reglamento se conceden a los inspectores, se abstendrán de todo acto administrativo que pueda embarazar la marcha de la compañía, limitándose siempre a hacer constar las faltas que encuentran y a ponerlas en conocimiento del Ministerio de Hacienda por el conducto debido ó del Gobernador de la provincia según los casos.

Art. 16. Los inspectores de las sociedades de crédito redactarán anualmente una memoria, acompañada de datos justificativos sobre la situación, operaciones y marcha de cada una de las compañías que hayan inspeccionado, informando sobre los hechos que puedan influir en el crédito y proponiendo las reformas que consideren necesarias en su organización.

Art. 17. Bajo la dirección del inspector en jefe, se custodiarán en el Ministerio de Hacienda todas las Reales órdenes, comunicaciones, memorias, copiadores, minutas y cuantos antecedentes se refieran a la inspección, formando los oportunos índices ó inventarios.

Art. 18. Se publicará en la Gaceta la separación motivada del inspector que en el cumplimiento de su cargo ó en las visitas extraordinarias acordadas por el Gobierno, no haya cumplido las prescripciones de este reglamento ó no haya dado cuenta al Ministerio de Hacienda de las infracciones de ley ó de los estatutos cometidas por la sociedad, cuya inspección le hubiere sido encomendada, lo cual se hará sin perjuicio de exigirle la responsabilidad en que hubieren incurrido.

Art. 19. Todas las facultades que este reglamento atribuye a los inspectores, corresponderán precisamente a los Gobernadores de aquellas provincias en que hubiera domiciliadas sociedades de crédito sin tener designado inspector.

Art. 20. El Ministerio de Hacienda resolverá las dudas que pueda ofrecer el presente reglamento, y adoptará las disposiciones especiales que fueren convenientes para su exacta observancia.

—San Ildefonso 30 de julio de 1865.—Manuel Alonso Martínez.
APÉNDICE NÚM. 7.

Ferro-carriles servidos por fuerza animal.

5 de junio de 1859.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas: á todos los que la presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º Son objeto de la presente ley los ferro-carriles servidos con fuerza animal, y los demás en que no se empleen locomotoras.

Art. 2.º Aquellos en que puedan circular carruajes á propósito para recorrer las vías públicas ordinarias, se considerarán como caminos perfeccionados, y como tales, sujetos á la legislacion vigente de carreteras, siempre que sean costeados con fondos públicos por el Estado, por las provincias ó por los pueblos.

La aplicación de los ferro-carriles á que se refiere este artículo, hecha á las carreteras construidas, ó en construcción, se considerará como una mejora en las mismas carreteras.

Art. 3.º Los ferro-carriles designados en el art. 1.º podrán construirse por administracion, por contrata y por concesión á empresas ó particulares.

Art. 4.º Para construir por administración ó por contrata un ferro-carril, en cuya explotación haya de emplearse un material especial que no pueda circular por los caminos ordinarios, deberá estar el Gobierno autorizado por una ley.

Art. 5.º Los particulares ó empresas no podrán construir ningún ferro-carril de los que son objeto de esta ley, sin haber obtenido la correspondiente concesión.

Art. 6.º Esta concesión se otorgará por un Real decreto, acordado en Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Esta-
do, cuando no se auxilie á la empresa con subvencion del Erario, pero en caso contrario, habrá de ser autorizada por una ley especial.

Art. 7.º La duración de las concesiones no podrá exceder de 60 años.

Art. 8.º Al expirar el término de la concesión, el Gobierno quedará de hecho subrogado en los derechos de la empresa, sobre el ferro-carril y sus dependencias, entrando inmediatamente en el goce de sus rendimientos.

Art. 9.º El Gobierno podrá revocar en cualquier período de su duración la concesión de un ferro-carril, indemnizando previamente á la empresa concesionaria.

Art. 10. Para solicitar la concesión deberá la empresa depositar 1 por 100 del presupuesto total del ferro-carril en garantía de las proposiciones que haga ó admita en el curso del expediente, cuyo depósito aumentará hasta 3 por 100 á los quince días de otorgada aquella para responder de las obligaciones del contrato.

Art. 11. La concesión habrá de recaer sobre un proyecto aprobado por el Gobierno, formado con arreglo á los formularios y disposiciones vigentes, y previa la correspondiente información de utilidad pública.

Art. 12. Todo ferro-carril cuyo proyecto hubiese sido aprobado en la forma prescrita en el artículo precedente, se considerará por este mismo hecho declarado de utilidad pública para los efectos de la ley de enajenación forzosa de 17 de julio de 1836.

Art. 13. Admitido el proyecto y aceptadas recíprocamente las condiciones y tarifa de la concesión, se pasará todo á informe del Consejo de Estado antes de otorgarla.

Art. 14. La concesión se otorgará en pública subasta, que se anunciará por término de cuarenta días, adjudicándose al mejor postor, con la obligación de abonar este, á quien corresponda, el importe de los estudios del proyecto con el aumento de 50 por 100 por vía de indemnización de los demás gastos, cuando los planos no hayan sido costeados por la Administración. Dicho importe se fijará en la forma que determinen los reglamentos antes de hacerse la subasta.

Art. 15. La licitación versará únicamente sobre la reducción del precio del peaje consignado en la tarifa.

Art. 16. Para poder tomar parte en la subasta será preciso acre-
ditar haber depositado en garantía de las proposiciones que se presenten el 1 por 100 del valor total del ferro-carril, según el presupuesto aprobado.

Art. 17. Cuando el proyecto haya sido presentado por una empresa o un particular, no se admitirá ninguna proposición que no mejore la del primer proponente. El tanto de esta mejora se fijará en los reglamentos habida consideración al importe del presupuesto de la línea, y podrá variar entre el 2 y el 5 por 100.

Art. 18. Se conceden desde luego a los particulares o empresas de ferro-carriles.

1.º Los terrenos de dominio público que hayan de ocupar el camino y sus dependencias.

2.º El beneficio de vecindad para el aprovechamiento de leña, pastos y demás de que disfruten los vecinos de los pueblos cuyos términos cruzare la línea en favor de los dependientes y trabajadores de las empresas, y para la manutención de los ganados de transportes empleados en las obras.

3.º La facultad de abrir canteras, recojer piedra suelta, construir hornos de cal, yeso y ladrillo, depositar materiales y establecer talleres para elaborarlos en terrenos contiguos á la línea. Si estos terrenos fuesen públicos, las empresas usarán gratuitamente de aquella facultad, dando aviso previo á la autoridad local; mas si fuesen de propiedad particular, no podrán usar de ellos sino después de hacerlo saber á sus dueños ó sus representantes por medio del Alcalde del distrito municipal, y de haberse obligado formalmente á indemnizarles de los daños y perjuicios que se les irroguen.

4.º La facultad exclusiva de percibir mientras dure la concesión y con arreglo á las tarifas aprobadas los derechos de peaje y de transporte, sin perjuicio de los que puedan corresponder á otras empresas.

5.º El abono de los derechos marcados en el arancel de Aduanas y de los de puertos, faros, portazgos, pontazgos y barcajes que deban satisfacer las primeras materias, efectos elaborados, instrumentos, útiles, carruajes, maderas y todo lo que constituyan el material fijo y móvil que deba importarse del extranjero, y se aplique exclusivamente á la construcción y primer establecimiento de la vía. La equivalencia de tales derechos se fijará al otorgarse la concesión.

6.º La exención de los derechos de hipotecas por las traslaciones de dominio verificadas en virtud de la expropiación.
Art. 19. Las condiciones facultativas se fijarán en cada caso particular, oído el dictámen de la Junta consultiva de caminos, canales y puertos.

Art. 20. El Gobierno fijará la tarifa de precios máximos de peaje y transporte de cada concesión, en vista del cálculo de los productos del ferro-carril.

Art. 21. La empresa concesionaria cobrará estos precios cuando efectúe el transporte con sus medios y á sus expensas; pero no podrá impedir el establecimiento de otras empresas de conducción, pagándole estas el peaje señalado en la tarifa.

Art. 22. Las empresas podrán en cualquier tiempo reducir los precios de las tarifas como tengan por conveniente, poniéndolo en conocimiento del Gobierno. La reducción se hará proporcionalmente sobre el peaje y el transporte.

Art. 23. Toda empresa concesionaria estará obligada á mantener constantemente el servicio de transporte, ó á procurárselo por medio de contratos particulares.

Art. 24. Cuando por culpa de la empresa se interrumpa total ó parcialmente este servicio, el Gobierno adoptará las disposiciones necesarias para asegurárselo provisionalmente á costa de aquella, con arreglo á lo que se determina en los pliegos de condiciones particulares.

Art. 25. La explotación de los ferro-carriles construidos por cuenta del Estado se efectuará por la Administración ó por arrendatarios que contraten este servicio en pública subasta.

Art. 26. Si una empresa no concluyese las obras del ferro-carril en los plazos fijados ó faltase al cumplimiento de las obligaciones de la concesión, caducará esta de hecho, salvos los casos fortuitos ó de fuerza mayor, y podrá adjudicarse de nuevo la concesión en subasta pública, sirviendo de tipo para la licitación el importe, según tasación de las obras ejecutadas y materiales acopiados. Verificada la adjudicación, el nuevo concesionario pagará al primitivo el valor que en la subasta hayan alcanzado dichas obras y materiales.

Art. 27. El Gobierno podrá autorizar el establecimiento de los ferro-carriles comprendidos en esta ley en las vías públicas, calles de las poblaciones y carreteras de todas clases con las precauciones necesarias á fin de que no se interrumpan en ellas el servicio público y tránsito de los carruajes ordinarios.
Art. 28. Se considerarán de servicio particular, y en tal concepto sujetos a lo que acerca de las carreteras de esta clase dispone la ley de 22 de julio de 1857, los ferro-carreles que son objeto de la presente, cuando se destinen a la explotación de minas, canteras y montes, para la comunicación de establecimientos industriales ó de otra clase cualquiera, ó para el servicio de edificios, haciendas ó propiedades particulares, y pasen por terrenos que no sean propiedad particular del que construya el camino.

Art. 29. El Gobierno formará y publicará los Reglamentos necesarios para la ejecución de esta ley.

Por tanto mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Aranjuez a 5 de junio de 1859.—Yo la Reina.—Refrendado.—El Ministro de Fomento, Rafael de Bustos y Castilla.
APÉNDICE NÚM. 8.

REAL DECRETO Y REGLAMENTO

para la inspección y vigilancia de los ferro-carriles (*).

En consideración á las razones que me ha expuesto el Ministro de Fomento, oído, en cumplimiento del art. 11 de la ley de 6 de julio de 1845 el parecer del Consejo de Estado en pleno, vengo en decretar lo siguiente.

Artículo 1.º Se aprueba el adjunto Reglamento para la inspección y vigilancia de los ferro-carriles.

Art. 2.º El Gobierno planteará sucesivamente el servicio de inspección y vigilancia conforme al Reglamento aprobado por el artículo anterior en los ferro-carriles en que lo juzgue conveniente, según su extensión, la importancia y el estado de sus obras, y demás circunstancias que justifiquen la utilidad de esta medida; debiendo en las líneas á que no se aplique por una disposición especial, seguir haciéndose como hasta aquí dicho servicio.

Dado en Palacio á nueve de enero de mil ochocientos sesenta y uno.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Fomento, Rafael de Bustos y Castilla.

(*) Por el Real decreto de 9 de enero de 1861 por el que se aprobó este Reglamento, se facultó al Gobierno para plantear sucesivamente el servicio de inspección y vigilancia en los ferro-carriles en que lo juzgase conveniente, según su extensión, su importancia, el estado de sus obras y demás circunstancias que justifiquen la utilidad de esta medida, previniendo que en los que no se aplique una disposición especial siga haciéndose dicho servicio como hasta entonces.
REGLAMENTO

PARA LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS FERRO-CARRILES.

Artículo 1.° La inspección de los ferro-carriles, según lo dispuesto en el art. 2.° del Reglamento de 8 de julio de 1859, se divide en inspección técnica ó facultativa ó inspección administrativa y mercantil. Ambas se ejercerán por funcionarios dependientes del Ministerio de Fomento.

Art. 2.° Los gastos de las dos inspecciones serán de cargo del Estado ó de las empresas concesionarias de ferro-carriles, según se halle estipulado en las cláusulas de concesión de cada línea.

En los casos en que los sufraguen las empresas, entregaran en las tesorerías de provincia que se les designen, como sucursales de la Caja general de Depósitos, las cantidades que correspondan; percibiendo de dichas oficinas los funcionarios de las inspecciones sus respectivos haberes.

CAPITULO PRIMERO.

De la inspección facultativa.

Art. 3.° La inspección facultativa estará á cargo de los ingenieros jefes de las divisiones de ferro-carriles ó de ingenieros nombrados especialmente para este objeto en las líneas no comprendidas en dichas divisiones, debiendo unos y otros entenderse para todos los asuntos del servicio con la Dirección general de Obras públicas.

Art. 4.° Cuando el servicio encomendado á un ingeniero jefe de división ó encargado especialmente de la inspección lo exija, se pondrán á sus inmediatas órdenes uno ó más ingenieros para auxiliarle en el desempeño de su cargo. En todo caso se le asignará siempre el número de ayudantes de Obras públicas que se concep-túe necesario.

Art. 5.° Los ingenieros jefes de division y los subalternos puestos á sus órdenes, residirán en los puntos que determine el Director general de Obras públicas, y los ayudantes en los que se les fijen por el jefe de la division, debiendo unos y otros recorrer con-
túnamente las líneas y visitar sus obras y dependencias de todas clases, así como el material fijo y móvil.

Art. 6.° Corresponde á la inspección facultativa:

1.° Confrontar sobre el terreno los proyectos de ferro-carriles y las variaciones que se propongan, e informar sobre la dirección de los trazados, las condiciones de buena ejecución de las obras de esplanación y fábrica, las del material fijo y móvil, y sobre todo lo demás que convenga para la construcción, establecimiento y servicio de estas vías.

2.° Desempeñar en la instrucción de los dependientes de expropiación las atribuciones que les confieran las leyes y Reglamentos.

3.° Cuidar bajo su responsabilidad de que las obras se ejecuten con sujeción á los proyectos aprobados.

4.° Vigilar la conservación de las obras de esplanación y de fábrica, de las barreras y cercas del camino, del material fijo y móvil y del de tracción. Examinar la calidad y empleo del combustible y agua, y la composición y movimiento de los trenes, cuidando de que se sujeten estrictamente en sus horas de salida y llegada á las disposiciones establecidas. Cuidan asimismo de que se haga puntualmente el servicio de apartaderos, agujas, cambios de vía, pasos á nivel, grúas, depósitos de agua, señales y telégrafo, alumbrado de las estaciones, de los túneles y de los pasos á nivel; y en general de todo lo concerniente á la explotación y á su seguridad bajo el aspecto facultativo.

5.° Cumplir y hacer que se cumplan fielmente las disposiciones del Reglamento de 8 de julio de 1859 en todo cuanto se refiere en el mismo á la inspección facultativa.

6.° Formar la estadística del material, movimiento de los trenes, accidentes que ocurran, y demás que deba tener conocimiento el Gobierno, ó que este le reclame.

7.° Informar sobre el establecimiento de nuevas estaciones y cargaderos, sus proyectos y las modificaciones que convenga introducir en los ya aprobados, sobre los cruzamientos de los caminos ordinarios, las modificaciones de tarifas, y finalmente, sobre cuantas cuestiones facultativas se susciten concernientes á la construcción, establecimiento, explotación y servicio de los ferro-carriles.

8.° Ejecutar los estudios y trabajos facultativos que se le encarguen.
9.° Dar parte pormenor de los hechos ó accidentes que ocurran en la línea á la Dirección general de obras públicas, y á las autoridades administrativas ó judiciales, según corresponda á unas ó á otras, el conocimiento de los asuntos, evacuando además todos los informes, y practicando las diligencias que dichas autoridades reclamen para el cumplimiento de sus respectivos deberes y el desempeño de sus atribuciones.

CAPITULO II.

De la inspeccion administrativa y mercantil.

Art. 7.° La inspeccion administrativa y mercantil se ejercerá por inspectores primeros, segundos y terceros.

Art. 8.° Los inspectores primeros se entenderán con la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, ó con la de Obras públicas, según corresponda, y los segundos y terceros con el primero de su respectiva línea, y en casos urgentes, con las mismas Direcciones.

Art. 9.° Los inspectores primeros residirán en los puntos en que tengan su dominio las compañías concesionarias, y los segundos y terceros, en las estaciones de las líneas que determine la Dirección general de Obras públicas.

Art. 10. No habrá en cada línea mas de un inspector de la clase de primeros. Un solo inspector tendrá á su cargo las líneas que pertenezcan á una misma compañía ó empresa, pudiendo inspeccionar las correspondientes á dos ó más de estas cuando el Gobierno lo juzgue conveniente.

Art. 11. Los inspectores primeros disfrutarán el sueldo anual de 24.000 rs., y tendrán además una asignación también anual de 8.000 rs. para gastos del material y movimiento.

Art. 12. Los segundos disfrutarán el sueldo anual de 16.000 reales, y los terceros el de 12.000, y la asignación, también anual, de 4.000 y 2.000 rs. respectivamente para gastos del material y movimiento.

Art. 13. Los inspectores gozarán de todos los derechos y preeminencias concedidos, ó que en adelante se concedan á los demás empleados en la Administración pública, y serán nombrados de Real órden, los primeros por conducto de la Dirección general de
Agricultura, Industria y Comercio, y los segundos y terceros por el de la de Obras públicas.

Art. 14. Corresponde á los inspectores primeros:

Vigilar las operaciones de las empresas de los caminos de hierro, é intervenir en las que tenga la forma de sociedades por acciones, cuidando de que se atengan á las leyes, reglamentos y disposiciones del Gobierno, y á las prescripciones de sus propios estatutos y reglamentos.

Para el ejercicio de estas atribuciones se dictará una instrucción especial, ateniéndose entre tanto los inspectores primeros á las disposiciones del art. 11 de la ley de 11 de julio de 1856, Reglamento de 12 de diciembre de 1857, y demás prescripciones dictadas para la inspeccion y vigilancia de las compañías de Obras públicas, con las aclaraciones y adiciones siguientes.

1.ª Usarán de la palabra en las Juntas generales para hacer las observaciones que estimen oportunas en todo lo que se refiere al cumplimiento de las leyes y disposiciones del Gobierno, y de los estatutos y reglamentos de las compañías.

2.ª Examinarán las actas de las Juntas de gobierno, y harán á las compañías las observaciones y prevenciones á que su contenido pueda dar lugar.

3.ª Presidirán las subastas públicas que celebren las compañías para la negociacion de obligaciones, y también los demás actos de esta especie en que juzguen conveniente su asistencia.

4.ª Cursarán con su informe las solicitudes, reclamaciones y consultas que las compañías ó empresas-elevén al Gobierno, relativamente á su régimen administrativo y económico, ó á las disposiciones que afecten á estos ramos.

5.ª Visitarán cuando lo crean necesario las oficinas, estaciones, almacenes, y demás dependencias de las compañías ó empresas.

6.ª Dirigirán á estas las advertencias á que puedan dar lugar las reclamaciones del público, dando cuenta al Gobierno de las que por su naturaleza exijan este paso.

Para el cumplimiento de las atribuciones que expresan los párrafos anteriores, los presidentes de las compañías y empresas, ó los representantes de las Administraciones, darán á conocer sus empleados al inspector, le citarán para los actos á que deba asistir, le remitirán copia de las actas de las Juntas de gobierno dentro del tercer día de su celebración, le presentarán cuantos libros de con-
tabilidad, documentos y explicaciones pida, y le suministrarán copia de los que solicite y que hagan referencia a su inspección, pasándole asimismo nota periódica de los datos que considere oportuno exigir en esta forma.

Los inspectores primeros redactarán una memoria acerca de la situación mercantil de las compañías, haciéndose cargo de su estado actual y porvenir probable, y en ella insertarán el resultado de todos los datos que reúnan relativos al movimiento y gastos de explotación y desarrollo de los ramos de riqueza del país que atraviesan las líneas respectivas, precios de las primeras materias, y tipos de los jornales.

Art. 15. Corresponde asimismo a los inspectores primeros.
1.º Inspeccionar la explotación mercantil en todos sus ramos y la ejecución de las disposiciones dictadas para que el servicio de transporte no se interrumpa en los extremos de las líneas que se hallan enlazadas con otras.
2.º Informar sobre las propuestas de modificación o aplicación de las tarifas de precios de peaje y transporte, y cuidar de que en la percepción de estos precios y en la de importe de los gastos accesorios para que estén autorizadas las empresas, se arreglen a lo prescrito en cada caso, dando inmediatamente conocimiento a la superioridad de las insfracciones que se cometan.
3.º Examinar los contratos que celebren las empresas concesionarias con otras o con particulares, para el transporte de mercancías por los ferro-carriles, dando parte, en los casos en que se falte a las disposiciones que rijan sobre el particular.
4.º Llevar la estadística de la circulación de viajeros y transporte de mercaderías y demás efectos en cada camino, de sus gastos de explotación y conservación y de sus rendimientos, para lo cual podrán reclamar de las empresas, y estas deberán presentarles los requisitos en que consten los gastos e ingresos de la línea y la expedición de los efectos y mercaderías.
5.º Ejercer las atribuciones que se les asignen por los reglamentos especiales respecto de aquellos caminos, que disfruten como subvención, la garantía de un mínimo de interés, o que hayan recibido préstamos del Estado, o que este deba participar de los productos de la explotación.
6.º Informar sobre la fijación de las horas de salida y llegada de los trenes, su organización y los reglamentos de servicio y explotación.

TOMO I.
ción que adopten las empresas, siempre que sus disposiciones se refieran a asuntos concernientes a la inspección administrativa y mercantil.

7.º Informar además cuando sean consultados, sobre todos los asuntos económicos y mercantiles de los caminos que estén a su cargo, o de otros que con ellos tengan relación.

8.º Cumplir y cuidar de que se cumplan fielmente las disposiciones del Reglamento de 8 de julio de 1859, en todo cuanto en el mismo se refiere a la inspección administrativa y mercantil.

Art. 16. Corresponde a los inspectores segundos y terceros desempeñar en su respectiva demarcación, bajo las órdenes de los primeros, las atribuciones que a estos confiere el artículo anterior.

Art. 17. Así los inspectores primeros, como los segundos y terceros, deberán recorrer con frecuencia las líneas de caminos de hierro, y siempre que ocurran sucesos para cuyo examen o comprobación sea necesaria su presencia, ó cuando se lo ordene la superioridad.

CAPITULO III.

De los auxiliares de las inspecciones.

Art. 18. Se ejercerán las funciones de auxiliares, así de la inspección técnica ó facultativa, como de la administrativa y mercantil por comisarios primeros, y segundos celadores y vigilantes.

Art. 19. El número de estos empleados auxiliares se determinará con vista de las circunstancias de las líneas, dividiéndolas si fuese necesario en secciones, en cada una de las cuales se ejercerá el servicio de inspección con independencia de las demás.

Art. 20. Los comisarios, celadores y vigilantes residirán en los puntos y secciones que se les designen, recorriendo estas para el desempeño del servicio que les está encomendado.

Art. 21. Disfrutarán de sueldo anual; los comisarios primeros 10,000 rs. los segundos 7,500, los celadores 6,000 y los vigilantes 42 rs. diarios.

Se les asignarán además anualmente para gastos de material y movimiento 1,500 rs. á los comisarios primeros 1,000 á los segundos y 500 á los celadores.

Art. 22. El nombramiento de los comisarios primeros y segun-
dos se hará de Real órden, el de los celadores, y vigilantes se expedirá por la Dirección general de Obras públicas.

No se procederá á su separación sin previo informe del ingeniero jefe de división y del inspector primero á cuyas órdenes sirvan.

Las plazas de vigilantes se proveerán necesariamente en sargentos del ejército y en sargentos ó cabos de la Guardia civil, licenciados y con buenas notas de servicio.

Art. 23. Los auxiliares de las inspecciones disfrutarán, según su clase respectiva de los goces, derechos y consideraciones que les correspondan como empleados de la Administración pública.

Art. 24. Los comisarios, celadores y vigilantes desempeñarán sus funciones bajo la dirección del ingeniero ó ingenieros de la línea en lo concerniente á la explotación facultativa, y de los inspectores primeros, segundos y terceros en lo que se refiere á las atribuciones de estos.

Art. 25. Los comisarios jefes de sección centralizarán cuantas noticias y comunicaciones les remitan los demás empleados de vigilancia administrativa poniéndolas en conocimiento de los ingenieros encargados de la inspección facultativa ó de los inspectores, según corresponda, sin perjuicio de dar cuenta á las autoridades á quienes competa saberlas, cuando lo requieran la naturaleza y circunstancias de los hechos.

Art. 26. Los comisarios jefes de sección recibirán instrucciones de los jefes de las inspecciones facultativa y mercantil, y por conducto de estos de las autoridades civiles y las comunicarán para su cumplimiento á sus subalternos. Sin embargo, cuando la urgencia del caso lo requiera, recibirán directamente las órdenes de las autoridades, y también, llegado el mismo caso de los jefes de las inspecciones, á quienes auxiliarán en el desempeño de sus funciones respectivas.

Art. 27. Corresponde á los empleados auxiliares de las inspecciones.

1.º Cuidar de la observancia y cumplimiento de la ley de policía de los ferro-carriles, del reglamento para su ejecución, y de las disposiciones y bandos de buen gobierno en la sección del camino á que se hallen afectos, y en sus zonas, estaciones y demás dependencias.

2.º Cuidar de que se ejecute puntualmente el servicio de las señales establecidas, el del manejo de las agujas, de la guarda y
alumbrado de los pasos á nivel y de las estaciones y sus alrededores, y de que se hallen en sus puestos y desempeñen sus respectivas funciones los empleados y dependientes de las empresas concesionarias encargados de estos servicios y de la vigilancia de la via.

3.° Inspeccionar la entrada, permanencia y circulación de los carrujes ordinarios en los patios y dependencias de las estaciones; la admisión del público en las salas de espera y andenes, y la subida de los viajeros á los coches del tren.

4.° Vigilar el cumplimiento de las medidas de órden y seguridad relativas á las locomotoras y carrujes del ferro-carril, al alumbrado de estos, á su clasificación e indicación del número de asientos.

5.° Vigilar la composición de los trenes, su partida, llegada, marcha, y detenciones, y los detalles de la explotación con arreglo á las instrucciones generales y á las que les dicten los jefes de las inspecciones facultativa y mercantil.

6.° Cuidar de que se hallen dispuestas en los sitios designados al efecto, las locomotoras de reserva, los carrujes de auxilio y las medicinas y demás medios de socorro para los accidentes que puedan ocurrir.

7.° Cuidar de que se hallen expuestas al público en los sitios designados, las tarifas de precios de peaje y transporte, y los estados que indiquen los tipos aprobados para los diversos puntos de las líneas, y de que las empresas lleven los registros y asientos de la expedición de las mercaderías y demás que se les prescriban.

8.° Oir las quejas del público respecto de la marcha de los trenes, del estado del camino y su material, de la percepción de los precios de tarifa y demás ramos del servicio, poniéndolas en conocimiento del superior inmediato.

9.° Dar parte á los jefes de las inspecciones facultativa y mercantil de las contravenciones á los Reglamentos de policía del camino y de servicio y explotación que se cometen por las empresas, sus empleados y otras personas, dirigiéndose á cada jefe respecto de las cometidas en el ramo que tenga á su cargo.

10. Dar prontamente conocimiento de los accidentes que ocurran en la línea á sus jefes inmediatos, á la autoridad judicial ó administrativa mas próximas, y á los jefes de la inspección mercantil y facultativa. Para estas ocasiones, y para todas aquellas en que importe la rápida transmisión de los partes y noticias, harán uso del telégrafo del camino.
11. Instruir sumaria informacion sobre los delitos ó faltas que se cometan en el camino y sus dependencias, y detener á los que aparezcan infraganti como sus autores ó cómplices, siempre que por la gravedad y naturaleza de los hechos se considere necesario, entregándolos precisamente dentro de las 24 horas siguientes, así como las diligencias practicadas al autoridad gubernativa ó judicial á quien compete el conocimiento del asunto.

Los celadores y vigilantes dependientes de un comisario jefe de seccion no hallándose presente éste, ó respectivamente cualquiera de sus superiores, entregarán por sí á las autoridades expresadas las diligencias y detenidos á que se refiere esta disposicion. Si dichas autoridades se presentasen en el lugar del suceso sobre que se instruyen las diligencias, según corresponda al orden administrativo ó judicial, la entrega se hará respectivamente en el acto de la presentacion, cesando los celadores y vigilantes de obrar por sí, y continuando aquellas en la instruccion sumaria de lo acaecido para proceder á lo que haya lugar.

Art. 28. Todos los empleados auxiliares de las inspecciones, tendrán para el desempeño de sus cargos el caracter de auxiliares de la policia judicial, y sus declaraciones el valor y eficacia que les concede la regla 4.ª del art. 27 de la ley de 14 de noviembre de 1855.

Art. 29. Acudirán sin pérdida de tiempo al punto de sus respectivas demarcaciones donde ocurra algun hecho ó accidente que reclame su presencia á no ser que en él se halle un superior suyo ó autoridad que no necesite de su intervencion en el asunto.

Art. 30. Podrán reclamar en caso necesario el auxilio de la fuerza pública, y los que le resistan incurrirán en las penas que correspondan al tenor de lo prescrito en el art. 22 de la citada ley de 14 de noviembre de 1855.

Art. 31. Auxiliarán á las autoridades judiciales y administrativas en cuanto se lo reclamen dentro de sus atribuciones, siempre que para ello no tengan que salir del ferro-carril y sus dependencias.

Art. 32. Los empleados de la inspeccion facultativa, así como los de la administrativa y mercantil, serán transportados gratuitamente en los trenes de los ferro-carriles, yendo en carruajes de primera clase los ingenieros e inspectores, y en los de segunda clase todos los demas funcionarios de ambas inspecciones.

Madrid 9 de enero de 1861.—Aprobado por S. M.—Corvera.
APÉNDICE NÚM. 9.

Ferro-carriles y demás obras públicas.

11 de julio de 1856.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y por la Constitución, Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Córtes Constituyentes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º Obtenida que sea, en virtud de una ley, la concesión de un camino de hierro, canal ú otras obras públicas, podrá el Gobierno autorizar, por medio de Reales decretos acordados en Consejo de Ministros, la formación y constitución definitiva de la compañía que las haya de llevar á efecto.

Art. 2.º El domicilio social de estas compañías se establecerá en un pueblo de la Península é islas adyacentes.

Art. 3.º Las compañías formadas con arreglo al art. 1.º, podrán reunir al objeto principal de su fundación el de la fusión de otras sociedades de idéntica naturaleza, si bien precediendo siempre para ello la aprobación del Gobierno y los demás requisitos que este estime necesarios.

Art. 4.º El capital de las compañías se determinará con entera sujeción á la regla primera del art. 46 de la ley general de ferro-carriles en sus respectivos estatutos, los cuales fijarán la forma en que haya de verificarse la emisión de sus acciones.

Art. 5.º Las acciones serán al portador luego que se hubiere verificado el desembolso de 30 por 100 de su total importe; y su primer dividendo pasivo, que en ningún caso podrá bajar del 15 por 100, se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes al de la aprobación por el Gobierno de los estatutos de las relacionadas sociedades. Cualquier accionista, sin embargo, tendrá derecho á depositar sus acciones en la caja de la Sociedad, recibiendo de la misma su resguardo nominativo.
Art. 6.° No tendrá efecto contra los cedentes de estas acciones al portador lo dispuesto en el art. 283 del Código de Comercio.

Art. 7.° Las sociedades de ferro-carriles, canales o otras obras públicas, podrán también emitir obligaciones al portador con interés fijo y amortización determinada dentro del período de la concesión con hipoteca de las obras y rendimientos del ferro-carril, canal o obra pública, a cuya construcción ó explotación se destinen. La suma del importe de todas las obligaciones emitidas, no podrá nunca exceder de la mitad del capital realizado de las acciones de la sociedad.

Art. 8.° Tanto las acciones al portador como las obligaciones que se emitan, tendrán, para el solo efecto de la forma de su contratación, la consideración de efectos públicos.

Art. 9.° Los administradores de dichas compañías serán nombrados por las respectivas Juntas generales de accionistas. Sin embargo, podrán designarse en los estatutos los que hayan de comprender el primer consejo de administración, quedando su nombramiento sujeto a la aprobación de la primera Junta general y del Gobierno. La Junta general de accionistas fijará los beneficios ó emolumentos a que tengan derecho los fundadores y administradores de la sociedad.

Art. 10. Los acuerdos respecto a las enajenaciones, transacciones, agregación o fusión de que trata el art. 3.°, deberán ser tomados en Junta general de accionistas en que se hallen representados los poseedores de los dos tercios del capital social, y de este modo serán obligatorios para todos los accionistas. Si en la primera Junta no se reuniese la indicada representación, se convocará una segunda, la cual, cualquiera que sea su número, podrá tomar los indicados acuerdos con la misma calidad de obligatorios para todos los accionistas.

Art. 11. Las compañías estarán obligadas a presentar al Gobierno de S. M., por conducto del Gobernador civil, un balance demostrativo y calificado de todo su haber activo y pasivo, que se publicará en la Gaceta, y siempre que el Gobierno lo pidiere, remitirán por el mismo conducto estados que den pleno conocimiento de sus operaciones, así como las demás noticias y detalles relativos á los gastos e ingresos de la empresa. El Gobierno podrá además hacer examinar, siempre que lo estime conveniente, la contabilidad y administración de las compañías, y comprobar sus existencias, nombran-
do á este efecto delegados, retribuidos por las mismas sociedades, á quienes sus respectivos directores, gerentes ó administradores tendrán obligación de presentar cuantos libros, datos, valores y documentos les fueren por estos pedidos, y existieren á debiesen existir en sus oficinas.

Art. 12. Quedan vigentes y se aplicarán á estas compañías, en cuanto no fueren contrarias á las prescripciones de esta ley, las de la general de ferro-carriles de 3 de junio de 1833, y las que rigiesen en lo sucesivo acerca de sociedades mercantiles por acciones.

Y las Córtes Constituyentes lo presentan á la sanción de V. M.

Palacio de las Córtes 30 de junio de 1836.—Señora.—Fadundo Infante, Presidente.—Pedro Calvo Asensio, Diputado Secretario.

—El Marqués de la Vega de Armijo, Diputado Secretario.—José González de la Vega, Diputado Secretario.—Pedro Bayarri, Diputado Secretario.

Madrid julio 9 de 1836.—Publíquese como ley.—Isabel.—El Ministro de Gracia y Justicia, José Arias Uriá.

Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Palacio á 11 de julio de 1837—Yo la Reina.—El Ministro de Fomento, Francisco de Luxán.

Ferro-carriles.

3 de julio de 1833.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Córtes han decretado y sancionado lo siguiente:

CAPITULO I.

De la clasificación de los ferro-carriles.

Artículo 1.° Los ferro-carriles se dividirán en líneas de servicio general y de servicio particular.
Art. 2.° Entre las líneas de servicio general se clasificarán como de primer orden las que, partiendo de Madrid, terminen en las costas ó fronteras del Reino.

Art. 3.° Todas las líneas de ferro-carriles destinadas al servicio general, son del dominio público, y serán consideradas como obras de utilidad general.

CAPITULO II.

De la concesión ó autorizacíon para construir los ferro-carriles.

Art. 4.° La construcción de las líneas de servicio general, podrá verificarse por el Gobierno, y en su defecto por particulares ó compañías.

Art. 5.° Para que el Gobierno pueda emprender la construcción de una línea con fondos del Estado, de las provincias ó de los pueblos, es necesario que esté autorizado por una ley.

Art. 6.° Los particulares ó compañías, no podrán construir línea alguna, bien sea de servicio general, bien sea de servicio particular, si no han obtenido previamente la concesión de ella.

Art. 7.° Esta concesión se otorgará siempre por una ley.

Art. 8.° Podrá auxiliarse con los fondos públicos la construcción de las líneas de servicio general:

1.° Ejecutándose con ellos determinadas obras.

2.° Entregando á las personas en períodos determinados una parte del capital invertido, reconociendo como límite mayor de este el presupuestado.

3.° Asegurándoles por los mismos capitales un mínimo de intereses ó intereses fijos, según se convenga y determine en la ley de cada concesión.

Art. 9.° Las provincias y los pueblos interesados inmediatamente en la construcción de la línea, contribuirán con el Estado á la subvención ó abono de intereses en la proporción y en la forma que determine la ley de concesión.

Art. 10. Fijados por la ley de concesión el máximo del subsidio ó el interés que haya de darse á la empresa constructora, se sellará bajo aquel tipo á pública subasta, por término de tres meses, la concesión otorgada, y se adjudicará al mejor postor, con la obligación de abonar este á quien corresponda el importe de los estu-
dios del proyecto que hubiese servido para la concesión, importe que deberá fijarse antes de hacerse la subasta en los casos y en la forma que determinen los reglamentos.

Art. 11. Para poder tomar parte en las subastas, es preciso acreditar que se ha depositado en garantía de las proposiciones que se presenten el 1 por 100 del valor total del ferro-carril, según el presupuesto aprobado.

Art. 12. No podrán en ningún caso expedirse los títulos de concesión de las líneas de servicio general, mientras el concesionario no acredite haber depositado en garantía de sus obligaciones el 5 por 100 del valor de las obras presupuestadas si la concesión fuese subvencionada, y el 3 por 100 si no lo fuese.

Si el concesionario dejase de trascorrir quince días sin verificar este depósito, se declarará sin efecto la adjudicación, con pérdida de la fianza prestada, y se volverá a subastar la concesión de la línea por término de cuarenta días, si fuese de las otorgadas por adjudicación.

Art. 13. Las empresas concesionarias podrán disponer de las sumas que hayan depositado en garantía de la construcción del ferro-carril, a medida que acrediten haber ejecutado los trabajos suficientes á cubrir su importe, quedando especialmente hipotecadas las obras del ferro-carril por la suma á que ascienzan las cantidades devueltas en reemplazo de aquella garantía.

Art. 14. Las concesiones de las líneas de servicio general, se otorgarán por término de noventa y nueve años cuando mas.

Art. 15. Al escribir el término de la concesión, adquirirá el Estado la línea concedida con todas sus dependencias, entrando en el goce completo del derecho de explotación.

CAPITULO III.

De las formalidades con que debe pedirse la autorización o concesión.

Art. 16. Cuando el Gobierno estime conveniente pactar con fondos públicos una línea de ferro-carril, presentará á las Cortes, con el proyecto de ley de autorización, los documentos siguientes:

1.° Una memoria descriptiva del proyecto.

2.° El plano general y el perfil longitudinal, y los transversales.

3.° El presupuesto de construcción, y el anual de su reparación y conservación de la línea.
4.º El presupuesto del material de explotación, y el anual de su reparación y conservación.

5.º La tarifa de los precios máximos que deban exigirse por peaje y por transporte.

6.º Una información en que se oiga a las diputaciones de las provincias interesadas en la construcción, y a las corporaciones y personas que a juicio del Gobierno puedan ilustrar la materia por la que se justifique la utilidad del proyecto.

Esta información de utilidad, no es necesaria respecto de las líneas clasificadas de primer orden en la presente ley.

Art. 17. Los particulares o compañías que pretendan una línea de ferro-carril, dirigirán su solicitud al Gobierno, debiendo presentar con ella los documentos que se expresan en el artículo anterior, excepto la información prevenida en el párrafo 6.º, que deberá practicarse por el Gobierno, y acreditar además haber depositado en garantía de las proposiciones que hagan ó admitan en el curso del expediente el 1 por 100 del importe total de las obras y material de explotación de la línea, según los presupuestos.

Art. 18. Una vez admitido el proyecto y aceptadas recíprocamente las condiciones de la concesión, el Gobierno presentará á las Cortes el oportuno proyecto de ley, con los documentos expresados en el art. 16, al tenor de lo dispuesto en el art. 7.º

CAPITULO IV.

De los privilegios y exenciones generales que se otorgan á las empresas concesionarias.

Art. 19. Los capitales extranjeros que se empleen en la construcción de ferro-carriles ó en empréstitos para este objeto, quedan bajo la salvaguardia del Estado, y están exentos de represalias, confiscaciones ó embargos por causa de guerra.

Art. 20. Se conceden desde luego á todas las empresas de ferrocarriles:

1.º Los terrenos de dominio público que hayan de ocupar el camino y sus dependencias.

2.º El beneficio de vecindad para el aprovechamiento de leña, pastos y demás de que disfruten los vecinos de los pueblos, cuyos términos abrazare la línea para los dependientes y trabajadores de
las empresas, y para la manutención de los ganados de transporte empleados en los trabajos.

3° La facultad de abrir canteras, recoger piedra suelta, construir hornos de cal, yeso y ladrillo, depositar materiales y establecer talleres para elaborarlos en los terrenos contiguos a la línea.

Si estos terrenos fuesen públicos, usarán de aquella facultad dando aviso previo á la autoridad local; mas si fuesen de propiedad particular, no podrán usar de ellos sino después de hacerlo saber al dueño ó su representante por medio del alcalde del territorio, y de haberse obligado formalmente á indemnizarle de los daños y perjuicios que se le irroguen.

4.° La facultad exclusiva de percibir mientras dure la concesión, y con arreglo a las tarifas aprobadas, los derechos de peaje y los de transporte, sin perjuicio de los que puedan corresponder á otras empresas.

5.° El abono, mientras la construcción y diez años después, del equivalente de los derechos marcados en el arancel de aduanas, y de los faros, portazgos, pontazgos y barcajes que deban satisfacer las primeras materias, efectos elaborados, instrumentos, útiles, máquinas, carruajes, maderas, coke y todo lo que constituya el material fijo y móvil que deba importarse del extranjero, y se aplique exclusivamente á la construcción y explotación del ferro-carril concedido (*).

La equivalencia de tales derechos se fijará, respecto de las empresas constructoras, en la ley de la concesión del camino. Y respecto de las de explotación la fijará anualmente el Gobierno, observando los trámites que se establezcan en el Reglamento.

6.° La exención de los derechos de hipotecas devengados hasta ahora, y que se devengan por las transacciones de dominio verificadas en virtud de la ley de expropiación (**).

CAPITULO V.

De la caducidad de las concesiones.

Art. 21. Siempre que se declare definitivamente caducada una

(*) Véase la nota del art. 19 de la instrucción para el cumplimiento de esta ley, que se inserta mas adelante.

(**) Por Real orden de 16 de agosto de 1886, se declaran también exentos
concesión, quedará á beneficio del Estado el importe de la garan-
tia que se haya exigido al concesionario.

Art. 22. Las concesiones de ferro-carriles caducarán, si no se
diese principio á las obras ó si no se concluyese el camino ó las
secciones en que se dividía dentro de los plazos señalados en ellas,
salvos los casos de fuerza mayor.

Cuando ocurra alguno de estos casos y se justifique debidamen-
te, podrá el Gobierno prorrogar los plazos concedidos por el tiempo
absolutamente necesario, pero al fin de la prórroga caducará la con-
cesion si dentro de aquella no se cumple lo estipulado.

Art. 23. También caducará la concesión si se interrumpiere
total ó parcialmente el servicio público de la línea por culpa de la
empresa en el caso previsto en el art. 39.

Art. 24. De la resolución del Gobierno declarando la caducida-
dad, podrá el concesionario reclamar por la vía contencioso-adminis-
trativa dentro del término de dos meses, contados desde el día
en que se le haya hecho saber.

Si no reclamase dentro de este plazo, se tendrá por consentida
la resolución del Gobierno, y no habrá contra ella recurso alguno.

Art. 25. Declarada definitivamente la caducidad, se sacará á
subasta la concesión anulada.

Art. 26. El tipo para esta subasta será el importe á que ascien-
dan, según la tasación que se practique, los terrenos comprados,
las obras ejecutadas y los materiales de construcción y de explota-
ción existentes, con deducción de los auxilios ó subvenciones otorga-
gados al concesionario, y entregados al mismo en terrenos, obras,
metálico y otra clase de valores.

Art. 27. Si abierta la subasta no se presentase postor dentro
del plazo señalado, se sacará á nueva licitación por término de dos
meses y bajo el tipo de las dos terceras partes de la tasación; y si
aun así no se rematase, se anunciará la tercera y última subasta
por término de un mes y por la mitad de dicha tasación.

Art. 28. Verificada la adjudicación de la línea en cualquiera de
das tres expresadas subastas, se deducirán del precio del remate el
importe de la garantía que el concesionario hubiese sacado del de-
del impuesto hipotecario, los actos de transcripción de dominio de los caminos
de hierro y los traspasos del derecho de explotación de estas vías, siempre
que, en un plazo dado, hayan de pasar al dominio del Estado.
pósito para invertirla en las obras, al tenor de lo dispuesto en el artículo 13, y el de los gastos de tasacion y subasta, entregándose el resto al concesionario en quiebra ó á sus legítimos representantes.

El nuevo concesionario por la subasta dará en garantía el 5 por 100 del valor de las obras que falten hasta completar el presupuesto total, y en todo lo demás le serán aplicables, los efectos de esta ley como si hubiera sido primer concesionario.

Art. 29. Si no se adjudicase la concesion en ninguna de las tres referidas subastas, y conviniese continuar las obras del ferrocarril por cuenta del Estado, el Gobierno presentará á las Cortes el oportuno proyecto de ley.

CAPITULO VI.

De las condiciones de arte á que deben ajustarse todas las construcciones de ferro-carriles.

Art. 30. Los ferro-carriles se construirán con arreglo á las condiciones siguientes:

1.ª El ensanche de la via ó distancia entre los bordes interiores de las barras carriles, será de 1 metro 67 centímetros (6 pies castellanos).

2.ª El ancho de la entrevia será de 1 metro 80 centímetros (6 pies y 6 pulgadas castellanas).

3.ª Las demás dimensiones, así como las condiciones de arte, se fijarán en cada caso particular por el Gobierno.

4.ª Los ferro-carriles podrán construirse con una ó dos vías, ó combinando estos sistemas.

CAPITULO VII.

De la explotación de los ferro-carriles.

Art. 31. Todo ferro-carril tendrá dos aprovechamientos distintos, el de peaje y el de transporte.

Art. 32. Los precios de uno y otro serán los que señalen las tarifas que rijan en cada línea.

Art. 33. En el pliego de condiciones de cada concesion se comprenderán los servicios gratuitos que deban prestar las empresas y
las tarifas especiales para los servicios públicos, figurando entre los primeros la conducción de los correos ordinarios á las horas que fije el Gobierno.

Art. 34. A nadie podrá impedirse el establecimiento de empresas de conducción pagando el peaje de tarifa.

Art. 35. Pasados los cinco primeros años de hallarse en explotación el ferro-carril, y después de cinco en cinco años, se procederá á la revisión de las tarifas.

Si el Gobierno creyese que sin perjuicio de los intereses de la empresa pueden bajarse los precios de ellas, y esta no conviniese en la reducción, podrá sin embargo llevarse á efecto por una ley, garantizando á la empresa los productos totales del último año, y además el aumento progresivo que hayan tenido por término medio en el último quinquenio.

Art. 36. Las empresas podrán en cualquier tiempo reducir los precios de las tarifas como tengan por conveniente, poniéndolo en conocimiento del Gobierno.

En este caso, lo mismo que en los comprendidos en el artículo anterior, se anunciarán al público con la debida anticipación las alteraciones que se hagan en las tarifas.

Art. 37. En todas las líneas se establecerá un telégrafo eléctrico con los hilos que se determine en la concesión de cada una. La construcción y conservación se hará por cuenta de las empresas: y el servicio de la correspondencia oficial y privada correrá á cargo del Gobierno, cuyos empleados estarán á la vez obligados á desempeñar el especial de las líneas si las empresas lo exigieren.

Art. 38. Toda empresa concesionaria está obligada á mantener el servicio de conducción ó á procurarle por contratos particulares.

Art. 39. Cuando por culpa de la empresa se interrumpa total ó parcialmente el servicio público del ferro-carril, el Gobierno tomará desde luego las disposiciones necesarias para asegurarlo provisionalmente á costa de aquella.

En el término de seis meses deberá justificar la empresa concesionaria que cuenta con los recursos suficientes para continuar la explotación, pudiendo ceder esta á otra empresa ó tercera persona, previa autorización especial del Gobierno.

Si aun por este medio no continuara el servicio, se tendrá por caducada la concesión, observándose en su consecuencia lo dispuesto en los artículos 23 y siguientes del capítulo V de esta ley.
Art. 40. La explotación de los ferro-carriles del Estado se hará por el Gobierno ó por empresas que contraten este servicio en pública subasta, según sea más conveniente á los intereses públicos.

Art. 41. En cada concesión se determinará la manera en que el Gobierno ha de ejercer la intervencion necesaria para mantener en buen estado el servicio de los ferro-carriles, y asegurarse de los gastos é ingresos de las empresas.

Art. 42. En las leyes y reglamentos especiales que se formen para la policía de los ferro-carriles, se determinará lo conveniente sobre la conservación y seguridad de cada camino y de sus obras, observándose en el entretanto las disposiciones vigentes sobre carreteras en cuanto sean aplicables á los ferro-carriles.

CAPITULO VIII.

De los estudios de las líneas de ferro-carriles.

Art. 43. El Gobierno dispondrá se hagan desde luego los estudios ó se completen los que haya comenzados sobre las líneas generales de primer órden, comprendidas en esta ley, por comisiones de ingenieros nacionales ó extranjeros, para que por ellos, y según los planos y presupuestos que formen y sean aprobados, se proceda á la construcción de dicha líneas.

Lo mismo deberá hacer siempre que se proyecte la construcción de un línea general de primer órden.

Art. 44. Para cubrir los gastos de estos trabajos se consignarán en el presupuesto ordinario las cantidades necesarias.

Art. 45. El Gobierno podrá autorizar á los particulares y compañías para que verifiquen estudios con el fin de reunir los datos y documentos que, según lo prescrito en los artículos 16 y 17, son necesarios para obtener la concesión de una línea, sin que por esta autorización se entienda conferido derecho alguno contra el Estado, ni limitada de ninguna manera la facultad que tiene el Gobierno para conceder iguales autorizaciones á los que pretendan el estudio de la misma línea.

CAPITULO IX.

De las compañías por acciones para la construcción y explotación de los ferro-carriles.

Art. 46. Podrá el Gobierno autorizar provisionalmente la cons-
titucion de compañías por acciones que tengan por objeto la construcciones y explotación de los ferro-carriles con arreglo á esta ley y á la de 28 de enero de 1848, en cuanto no se derogue ó modifique por las disposiciones siguientes:

1.° El capital social será cuando menos igual al importe total de las obras de construcción y del material de explotación de la línea que se proponga adquirir la compañía.

2.° Suscritas que sean las dos terceras partes del capital social, podrá autorizarse la constitución provisional de la compañía.

3.° Esta autorización provisional faculta únicamente á la compañía para nombrar sus administradores, pedir la concesión de la línea que se proponga construir y explotar, presentar sus propuestas en la subasta, si se hiciese la concesión con este requisito, y exigir de los accionistas hasta el 10 por 100 de sus acciones con destino exclusivo á cubrir los gastos de su establecimiento, los de estudio del proyecto y el depósito que se exija como garantía de la concesión.

4.° Hasta que la compañía no se halle constituida definitivamente y haya obtenido la concesión ó adjudicación de la línea, no podrá emitir títulos de acción ni otra clase de documentos transferibles ó negociables, siendo nulas y de ningún valor las transferencias que se hagan de las promesas de acciones ó de las acciones provisionales que se entreguen á los suscriptores.

5.° Los primeros suscriptores y sus cesionarios son responsables solidariamente al pago de los primeros dividendos, hasta que quede cubierta la mitad del valor nominal de sus acciones.

6.° Cuando los accionistas hayan satisfecho el valor total de sus acciones, podrán convertirse estas en títulos al portador.

Art. 47. Se considerará definitivamente constituida la compañía luego que se publique la ley relativa á su constitución.

Art. 48. Si suscritas las dos terceras partes del capital social, y realizadas é invertidas en las obras de la línea, no pudiese la compañía hacer efectiva la otra tercera parte del capital por medio de la emisión y negociación de las acciones no suscritas, podrá obtener autorización del Gobierno para adquirir dicha tercera parte del capital por medio de empréstitos contraídos con la hipoteca de los rendimientos del ferro-carril á cuya construcción ó explotación se destina.

En este caso la autorización podrá comprender además la facul-
tad de emitir cédulas ó obligaciones hipotecarias de interés fijo, y amortizables dentro del período de la concesión, en los años que en aquella se determine.

Art. 49. También podrá obtener la compañía autorización del Gobierno para aumentar el capital social si la inversión de este no hubiese bastado para poner toda la línea en estado de explotación, y si el aumento solicitado no afectase de modo alguno los fondos públicos.

Si los afectase, la autorización será objeto de una ley.

**ARTÍCULO ADICIONAL.**

Las provincias y los pueblos inmediatamente interesados en la construcción de las líneas ya concedidas, contribuirán con la tercera parte de la subvención á estas otorgada.

Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de cualquier clase y dignidad, que guarden, y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Aranjuez á tres de junio de mil ochocientos cincuenta y cinco.

—YO LA REINA.—El Ministro de Fomento, Francisco Luxán.

---

**Conservación de la vías públicas.**

14 de noviembre de 1855.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entiendieren, sabed, que las Corts Constituyentes han decretado, y Nos sancionado lo siguiente:

**TITULO I.**

**DE LAS DISPOSICIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS, APLICABLES Á LOS FERRO-CARRILES.**

Artículo 4.° Son aplicables á los ferro-carriles las leyes y las disposiciones de la administración, relativas á carreteras, que tienen por objeto:
1.° La conservación de cunetas, taludes, muros, obras de fábrica ó de cualquiera otra clase.

2.° Las servidumbres para la conservación de la via, impuestas á las heredades inmediatas.

3.° Las servidumbres impuestas á estas mismas heredades respecto á alineaciones, construcciones de todas clases, aperturas de zanjas, libre curso de las aguas, plantaciones, poda de árboles, explotación de minas, terrenos, escoriales, canteras y de cualquiera otra clase.

La zona á que se extienden estas servidumbres es la de 20 metros á cada lado del ferro carril.

4.° Las prohibiciones que tiendan á cortar toda clase de daños á la via.

5.° La prohibición de poner cosas colgantes ó salientes, que ofrezcan incomodidad ó peligro á las personas ó la via.

6.° La prohibición de establecer acopios de materiales, piedras, tierras, abonos, frutos ó cualquiera otra cosa que perjudique al libre tránsito.

**TITULO II.**

DE LAS DISPOSICIONES PARA LA CONSERVACION DE LA VIA, ESPECIALES Á LOS FERRO-CARRILES.

Art. 2.° En toda la extension del ferro-carril no se permite la entrada ni el apacencamiento de ganados.

Si por atravesar el ferro-carril alguna carretera ó camino tuviesen que pasar ganados, se hará esto evitando detenciones y en la forma que se disponga por regla general para aquel tránsito.

Art. 3.° En una zona de tres metros á uno y otro lado del ferro-carril, solo se podrán construir en adelante muros ó paredes de cerca; pero no fachadas que tengan aberturas y salidas sobre el camino.

Esta disposicion no es extensiva á las construcciones anteriores á la promulgacion de esta ley, ó al establecimiento de un camino de hierro, las cuales podrán ser reparadas y conservadas en el estado que tuvieren; pero sin que sean reedificadas. Si fuese necesario hacer alguna demolicion ó modificacion de fábrica en beneficio del ferro-carril, se procederá con arreglo á lo que previene el artículo 11 de esta ley.
Art. 4.º Dentro de la zona marcada en el párrafo 3.º del art. 1.º, no se podrán construir edificios cubiertos con cañizo u otras materias combustibles en los ferro-carriles explotados con locomotoras.

Art. 5.º La prohibición de establecer acopios de materiales, tierras, piedras o cualquiera otra cosa, de que queda hecho mencion en el párrafo 6.º del art. 1.º, es extensiva en los ferro-carriles a 5 metros á cada lado de la vía respecto á los objetos no inflamables, y á 20 metros respecto á los inflamables.

Art. 6.º No tendrá lugar la prohibición del artículo anterior:
1.º En los depósitos de materias incombustibles que no excedan de la altura del camino, en el caso de que este vaya en terraplén.
2.º En los depósitos temporales de materias destinadas al abono y cultivo de las tierras y de las cosechas durante la recolección; pero en caso de incendio por el paso de las locomotoras, los dueños no tendrán derecho á indemnización.

Art. 7.º El Gobernador de la provincia podrá autorizar, oyendo á los ingenieros del Gobierno y de las empresas, el acopio de materiales no inflamables; pero la autorización será revocable á su voluntad.

No podrá el Gobernador extender su autorización á los depósitos de materias inflamables.

Art. 8.º Los caminos de hierro estarán cerrados en toda su extensión por ambos lados.

El Gobierno, oyendo á la empresa, si la hubiere, determinará para cada línea el modo y plazo en que deba llevarse á cabo el cerramiento. Donde los ferro-carriles crucen otros caminos á nivel, se establecerán barreras que estarán cerradas, y solo se abrirán para el paso de los carruajes y ganados en su caso.

TITULO III.

DISPOSICIONES COMUNES Á LOS TÍTULOS ANTERIORES.

Art. 9.º Las distancias marcadas en el párrafo 3.º del art. 1.º, y en los arts. 3.º y 5.º de esta ley, se contarán desde la línea inferior de los taludes de los ferro-carriles, desde la superior de los desmontes, y desde el borde exterior de las cunetas. A falta de estas, se contarán desde una línea trazada á metro y medio del carril exterior de la vía.
Art. 10. El Gobierno, en casos especiales, podrá disminuir las distancias a que se refiere el artículo que antecede, previo el oportuno expediente en que resulte la necesidad ó conveniencia de hacerlo, y no seguirse perjuicio á la seguridad, conservación y libre tránsito de la vía.

Art. 11. Siempre que haya derechos particulares existentes con anterioridad al establecimiento de un ferro-carril, ó á la publicación de esta ley, que después de ella no puedan crearse y sean necesario suprimirlos por necesidad ó utilidad de los ferro-carriles, se observarán las reglas establecidas en la ley de 17 de julio de 1836 para la expropiación forzosa por causa de utilidad pública, y las disposiciones administrativas dadas ó que se dieren para su ejecución.

TITULO IV.

DE LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS CONCESIONARIOS O ARRENDATARIOS DE LOS FERRO-CARRILES.

Art. 12. El concesionario ó arrendatario de la explotación de un ferro-carril que falle á las cláusulas del pliego general de condiciones, ó á las particulares de su concesión, ó á las resoluciones para la ejecución de estas cláusulas en todo lo que se refiera al servicio de la explotación de la línea, ó del telégrafo, ó el relativo á la navegación, viabilidad de los caminos de todas clases, ó libre paso de las aguas, incurrirá en una multa de 50 á 500 duros.

Art. 13. Estará además obligado el concesionario ó arrendatario á reparar las faltas ó daños causados en el plazo que se señale. Si no lo hiciere, lo verificará por él la Administración, exigiéndole luego el importe de los gastos en la forma prevenida en el art. 24.

Art. 14. Los concesionarios ó arrendatarios de los ferro-carriles responderán al Estado y á los particulares de los daños y perjuicios causados por los administradores, directores y demás empleados en el servicio de explotación del camino y del telégrafo. Si el ferro-carril se explota por cuenta del Estado, estará este sujeto á la misma responsabilidad respecto de los particulares.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad individual, en que los directores, administradores, ingenieros ó empleados de cualquiera otra clase puedan haber incurrido.
TITULO V.

DE LOS DELITOS Y FALTAS ESPECIALES CONTRA LA SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE FERRO-CARRILES.

Art. 15. El que voluntariamente destruya ó descomponga la via de hierro, ponga obstáculos en ella que impida el libre tránsito ó puedan producir un descarrilamiento, será castigado con la pena de prisión correccional. En el caso de que se verifique descarrilamiento, la pena será de presidio mayor.

Art. 16. En los casos de causarse la destrucción ó descomposición en rebelión ó sedición, si no aparecieren los autores del delito, incurrirán en la pena impuesta en el artículo anterior los promotores y caudillos principales de la sedición ó rebelión.

Art. 17. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los delincuentes por los delitos de homicidio, heridas y daños de todas clases que puedan resultar, y por los de rebelión y sedición.

Art. 18. En la concurrencia de dos ó más penas, los Jueces y Tribunales impondrán la mayor en su grado máximo.

Art. 19. A los que amenacen con la perpetración de un delito de los comprendidos en los arts. 15 y 16, se les castigará con las penas prescritas en el art. 417 del Código penal, observando la escala en él establecida; pero imponiendo siempre las penas en el grado máximo, y cuando esté señalado el grado máximo, la inmediatamente superior en su grado mínimo.

Art. 20. El que por ignorancia, imprudencia, descuido ó falta de cumplimiento de las leyes y reglamentos de la Administración, causase en el ferro-carril ó en sus dependencias un mal que ocasione perjuicio á las personas ó á las cosas, será castigado con arreglo al art. 480 del Código penal, como reo de imprudencia temeraria.

Art. 21. Con las mismas penas serán castigados los maquinistas, conductores, guardafrenos, jefes de estación y encargados de telégrafos que abandonen el puesto durante su servicio respectivo.

Mas si resultare algun perjuicio á las personas ó á las cosas, serán castigados con la pena de prisión correccional ó prisión menor.

Art. 22. Los que resistan á los empleados de caminos de hierro
en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con las penas que el Código penal impone a los que resisten a los agentes de la autoridad.

Art. 23. Los contraventores a las disposiciones comprendidas en los títulos I y II de esta ley, a los reglamentos de la administración y resoluciones de los Gobernadores para la policía, seguridad y explotación de los ferro-carriles, serán castigados con una multa de 3 a 30 duros, según la gravedad y circunstancias de la transgresión y de su autor.

Si con arreglo al Código penal hubiere incurrido en pena mas grave, se le impondrá solamente esta.

En caso de reincidentia, la multa será de 6 a 60 duros.

Art. 24. Los que no paguen la multa que se les impusiere, sufrirán el apremio personal, con arreglo al art. 49 del Código penal.

Art. 25. Sin perjuicio de las penas señaladas en los artículos anteriores, deberán los que hubieren infringido las disposiciones de esta ley, destruir las excavaciones, construcciones y cubiertas, suprimir los depósitos de materias inflamables ó de otro género que hayan hecho, y reparar los daños ocasionados en los ferro-carriles.

Los alcaldes señalarán el plazo para hacerlos después de oír al que represente a la administración del ferro-carril, ó a la empresa en su caso.

Si en el plazo señalado no lo hiciessen, la Administración cuidará de ejecutarlo á cuenta del que no hubiese obedecido. En este caso la cobranza de los gastos se hará del mismo modo que la de las contribuciones.

**TITULO VI.**

**DEL PROCEDIMIENTO.**

Art. 26. Los que cometan delitos penados en esta ley, serán juzgados por la jurisdicción ordinaria, cualquiera que sea su fuero.

Art. 27. Exceptúanse de lo prevenido en el artículo anterior los que sólo hayan incurrido en multa.

Para la imposición de estas, se observarán las reglas siguientes:

1.º El derecho de denunciar es popular.

2.º Las denuncias deberán hacerse ante los alcaldes de los pueblos en cuyos términos se hubiese cometido la transgresión.
3.ª La sustanciacion e instancias de estos juicios serán las prescriptas para las de faltas comunes.
4.ª Las declaraciones de los encargados de la dirección del camino y de los guardias jurados, harán fé, salvo la prueba en contrario.
5.ª Las penas impuestas en estos juicios, se harán cumplir por los alcaldes.

Art. 28. Las multas á los concesionarios ó arrendatarios de los ferro-carriles, en los casos expresados en el art. 12, solo podrán imponerse por los Gobernadores después de oir á los interesados, al ingeniero de la provincia y á la corporación que ejerza la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, tanto civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase ó dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Palacio 14 de noviembre de 1855.—YÓ LA REINA.—El Ministro de Fomento, Manuel Alonso Martínez.

REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones que me ha expuesto mi Ministro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en aprobar la adjunta instruccion para el cumplimiento de la ley de 3 de junio de 1855, y el pliego de condiciones generales y modelo de tarifa para las empresas concesionarias de ferro-carriles de servicio general.

Dado en Palacio á 15 de febrero de 1856.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Fomento, Francisco Luxán.

INSTRUCCION

para el cumplimiento de la ley general de ferro-carriles.

Art. 1.º Los documentos que exige el art. 16 de la ley general de ferro-carriles se redactarán con arreglo á las siguientes prescripciones:

1.ª La memoria comprenderá la descripción del trazado y la de las obras de mayor importancia; número, clase y posición de las es-
taciones; un estado que exprese la longitud de las alineaciones rectas y curvas, con expresión de sus radios y pendientes.

2.º El plano general, perfil longitudinal y perfiles transversales, así como los presupuestos, se sujetarán a los formularios redactados por la Dirección general de Obras públicas para los proyectos de ferro-carriles.

3.º La tarifa se sujetará al modelo que acompaña el pliego de condiciones generales. Deberá ir precedida del examen de las circunstancias económicas del camino, fundando los tipos adoptados en el cote de establecimiento, tráfico anual y futuro probable, gastos de conservación y explotación, y subvención que se proponga dar.

Art. 2.º Formados por el Gobierno ó por una empresa autorizada, según el art. 45 de la ley general, los documentos citados en el artículo anterior, el Gobierno, después de oír á la Junta consultiva de caminos, canales y puertos, sobre el proyecto y posibilidad de la obra que se trata de llevar á cabo, remitirá á los Gobernadores de las provincias que recorra el camino una copia de la traza, de los presupuestos, tarifa y cálculo de los rendimientos para la información que exige el art. 16 de la ley general de ferro-carriles.

Art. 3.º Los Gobernadores pasará los documentos mencionados á las Diputaciones provinciales, que abrirán una información sobre la utilidad pública del camino y su dirección mas conveniente, con arreglo á la ley de 17 de julio de 1836, oyendo á los ayuntamientos de los pueblos interesados, y á los particulares y corporaciones que crea conveniente, admitiendo todas las reclamaciones que se presenten en pro ó en contra del proyecto durante dos meses contados desde la publicación de los documentos en el Boletín oficial de la provincia. Dentro del mes siguiente pasará el Gobernador con informe á manos del Gobierno el expediente original de información, con el dictamen de la Diputación provincial.

El Gobernador acompañará al expediente los datos estadísticos que puedan convenir para formar juicio sobre el porvenir industrial del camino, con arreglo á las instrucciones que para la reunión de estos datos acuerde el Gobierno.

Art. 4.º Este expediente, con el proyecto y demás documentos del art. 1.º, pasará á la Junta consultiva de caminos, que propondrá al Gobierno la aprobación ó modificación del proyecto, presupuestos y tarifa.
Art. 3.º El Gobierno acordará las condiciones, además de las generales adjuntas, con que puede otorgarse la concesión, con sujeción á la ley general de ferro-carriles, presentando á las Cártex el correspondiente proyecto de ley. Cuando se proponga en este la concesión á determinada empresa sin subvención del Estado, ó se haya admitido para la licitación, si la concesión ha de ser subvencionada, alguna proposición como tipo, las condiciones particulares deberán ser adoptadas por la empresa peticionaria.

Art. 6.º Serán objeto de las condiciones particulares los artículos indeterminados del pliego de condiciones generales, el arreglo de las cuotas de tarifa, y las condiciones especiales que crea el Gobierno conveniente establecer en cada caso.

Art. 7.º Cuando se trate de otorgar subvención, ya porque una empresa la haya solicitado, ya porque el Gobierno haya resuelto tomar la iniciativa para la realización de alguna línea de ferro-carril, además de la información á que se refiere el art. 3.º de esta instrucción, deberán informar las Diputaciones y la Junta consultiva sobre este punto, manifestando aquella la parte de la subvención con que puede contribuir, y proponiendo los arbitrios correspondientes.

Art. 8.º Adjudicada la concesión y constituido el depósito en el plazo que marca el art. 42 de la ley general de ferro-carriles, se expedirá á la empresa el título de concesión en el que se incluirán literalmente el pliego de condiciones generales, la ley especial de concesión, las condiciones particulares y la tarifa de derechos máximos.

Art. 9.º El depósito se irá devolviendo á la empresa á medida que se vayan ejecutando obras en vista de las certificaciones, acompañadas de relaciones valoradas expedidas por el inspector facultativo del Gobierno.

Art. 10. Cuando el Estado auxilie la concesión de un ferro-carril, ejecutando con los fondos públicos determinadas obras, estas se construirán por la Administración, haciendo entrega á la empresa después de terminadas, previo inventario y tasación de ellas, que se incluirá en el acta de recepción, que deberán autorizar los representantes del Gobierno y de la empresa.

Art. 11. Cuando los auxilios del Estado consistan, ya en una subvención de capital, ya en un interés fijo por los capitales empleados, se abonarán á las empresas las sumas correspondientes á virtud de certificaciones de los ingenieros inspectores del Gobierno.
Art. 12. Si el auxilio del Estado consiste en la garantía de un máximo de interés, se establecerá una intervención económica para la averiguación de los rendimientos y gastos de la explotación del camino. Los pagos se harán a virtud de las certificaciones y liquidaciones que expedirá y formará la intervención.

Art. 13. El pago de las subvenciones en su totalidad se hará a las empresas concesionarias directamente por el Gobierno, abonando las provincias al Estado en cada año la suma que en cada caso se estipule, hasta completar la parte que a las provincias corresponda, según la ley de concesión.

Art. 14. Cuando la empresa no disfrute subvención ni auxilio de los fondos generales y sí de las provincias, se entenderá para los abonos directamente con estas.

Art. 15. Las Diputaciones provinciales podrán examinar y vigilar el cumplimiento por parte de la empresa del contrato de concesión dentro del territorio de su provincia en los casos en que contribuyan estas con el Estado á la subvención otorgada, pero sin que puedan adoptar por sí medida alguna. Si observaren alguna falta ó irregularidad, tanto en la construcción como en la explotación, darán cuenta a los inspectores del Gobierno, reclamando á éste en el caso de que el inspector no adoptase medida alguna sobre las faltas observadas y puestas en su conocimiento, para la resolución á que hubiere lugar.

Art. 16. La parte de las subvenciones con que deban contribuir las provincias, se distribuirá entre estas en la proporción que determinen las leyes correspondientes.

Art. 17. Las gracias y privilegios concedidos á las líneas de ferro-carriles en los párrafos 2.° y 3.° del art. 2.° de la ley general, se sujetarán en su disfrute a lo que está prevenido para las demás obras públicas.

Art. 18. Para el abono de los derechos de aduanas, faros, portazgos, pontazgos y barcajes, deberán las empresas presentar, con los documentos del proyecto, una relación clasificada y detallada del material que necesiten importar del extranjero para el completo establecimiento del ferro-carril.

En estas relaciones se expresará el peso y valor de los objetos, y se indicará el puerto por donde ha de introducirse. Con estos datos, y aprobada la relación por el Gobierno, se calculará la suma á que asciendan los derechos de aduanas y demás citados para fijarla en la
ley de concesión, con arreglo al párrafo 5.º, art. 2.º de la ley general de ferro-carriles.

Art. 19. Las empresas abonarán los derechos por el material que vayan introduciendo. Los administradores de las aduanas darán a la persona que comisione la empresa una certificación en que consten las sumas que haya abonado, la clase y número de los objetos introducidos, y la nación a que pertenezcan los buques conductores, con referencia a la relación general aprobada, que por conducto del Ministerio de Hacienda se comunicará a los administradores de aduanas por donde haya de verificarse la introducción (*).

Los administradores de portazgos darán a los conductores un recibo de las sumas que hayan cobrado por el paso de estos objetos. En estos recibos se expresarán las circunstancias del vehículo donde se haga el transporte, y la clase de objetos que se conducen. La carga de los vehículos destinados al transporte de efectos de ferro-carriles deberá formarse exclusivamente de estos.

Art. 20. La empresa presentará los documentos citados, con la relación de los efectos introducidos, a los inspectores del Gobierno, que previo el reconocimiento del material y su recepción como útil y apropiado al camino, y conforme con la relación aprobada, certificará la suma a que tenga derecho la empresa por este concepto, pasando la certificación con todos los demás documentos al Gobierno. Los derechos de faros se calcularán por el número de toneladas

(*) Este artículo ha sido modificado por Reales órdenes de 6 de agosto y 4 de octubre de 1856, expedidas por el Ministerio de Hacienda de acuerdo con el de Fomento, por las que se ha relevado a estas empresas de la obligación de abonar los derechos por el material que introduzcan, facultándolas para otorgar en su lugar pagarés a plazo, como está concedido al comercio, los que pueden renovar a su vencimiento por iguales plazos, hasta que se canegen con los libramientos que se expidan por el Ministerio de Fomento a favor de las mismas empresas por cuenta de la subvención que les está concedida en el párrafo 5.º del art. 2.º de la ley de 3 de junio de 1855. Para dar cumplimiento a esta disposición se expidió por la Dirección general de aduanas en 8 de octubre del mismo año, una circular en que se fijan las reglas que se han de observar para el despacho de los efectos que se introduzcan con este objeto por la aduana designada, ó por otras si conviene a las empresas variar el punto de entrada, y se han expedido después por el Ministerio de Hacienda en 16 de octubre de 1862, 29 de enero y 10 de agosto de 1863, otras relativas a la renovación de estos pagarés y sello y timbre que deben llevar, y al pliego y forma en que deben estar estendidos, y a su cancelación.
de peso del material y objetos introducidos, con arreglo á la ban-
dera del buque en que se haya verificado el transporte.

El Gobierno mandará abonar las cantidades á que asciendan las
certificaciones, hasta completar la fijada en la ley de concesión.

Art. 21. Con dos meses de anticipación, por lo menos, presentará la empresa á la inspección facultativa, para que esta con su
informe lo remita al Gobierno, la relación de los efectos que nece-
site introducir para la explotación en el año siguiente.

Aprobada por el Gobierno esta relación y la suma á que ascien-
dan los derechos, se observarán para los abonos las mismas reglas
del artículo anterior.

Art. 22. El Gobierno determinará las bases, con arreglo á las
cuales deberá ejercerse la inspección en lo que se refiere á su orga-
nización y atribuciones, adoptando además en cada concesión las
disposiciones que crea convenientes, según las circunstancias.

Artículo transitorio. Las empresas actuales de ferro-carriles en
construcción ó en explotación remitirán al Gobierno, en el plazo de
tres meses, contados desde la publicación de este reglamento, las
relaciones de efectos que necesiten introducir, ya para concluir el
camino, ya para la explotación en el año 1856, observándose desde
luego las reglas establecidas en los artículos anteriores para la in-
troducción.

Madrid 15 de febrero de 1856.—Aprobado por S. M.—Luxán.

Pliego de condiciones generales, y modelo de tarifa para la concesión de los ferro-carriles del servicio general.

Artículo 1.º La empresa se obliga á ejecutar en el término de....

anos, contados desde la fecha de la concesión definitiva, de su coste
y riesgo, todos los trabajos necesarios para el establecimiento de un
camino de hierro desde X á N, de modo que pueda hacerse la ex-
plotación en todas sus partes al espirar el término fijado.

Art. 2.º Al aceptar la empresa este pliego de condiciones, se
entiende que ha verificado todos los cálculos y datos en que estriba:
que se confirma en la realidad de todo lo que en él se establece, y
que tiene la seguridad de poderlo ejecutar en todas sus partes sin
reclamar nuevas gracias ó concesiones por los errores, imperfeccio-
nes y omisiones que puedan encontrarse en la realización de la obra.
Art. 3.° El camino partirá de…….. pasará por…….. (aquí se fijarán los puntos principales por donde el camino deba pasar, la manera con que se vencerán los pasos mas notables, etc.)

Art. 4.° Se establecerán estaciones (aquí los puntos en donde se han de establecer). Cuando la empresa quiera establecer otras estaciones, no podrá verificarlo sin la autorización del Gobierno.

Art. 5.° (Aquí se expresará si el camino ha de ser de una ó de dos vías en todo ó en parte.)

Art. 6.° Cuando el camino se explote con una sola vía se establecerán recodos ó paraderos cuya longitud, no comprendida la union, será por lo menos de 300 metros, y la distancia de uno a otro no excederá de 12,000 metros.

Art. 7.° Con la anticipacion conveniente, antes de emprender la construcción de cada trozo del camino, deberá presentar la empresa al Gobierno los planos de la escala de…… del trazado definitivo del ferro-carril. En estos planos se marcarán la posición y trazado de las estaciones y apartaderos, los sitios de carga y descarga, y la especie, calidad y extension de los terrenos que se ocupen, con la designación de sus dueños ó poseedores. Acompañarán á este plano un perfil longitudinal por el eje del camino, los perfiles transversales, el estado de las pendientes y el de las curvas, su ruido y amplitud, la descripción, planos y presupuestos de las obras, y un dibujo del sistema de via que se trate de adoptar.

Art. 8.° Aprobados estos documentos por el Gobierno, sacará la empresa dos copias á su costa, que se autorizarán por la Dirección de Obras públicas. Una se entregará á la empresa y otra á la inspección facultativa.

Art. 9.° La empresa no podrá hacer modificación alguna al proyecto aprobado sin autorización de la inspección y del Gobierno.

Art. 10. Los pasos del ferro-carril al atravesar las carreteras generales, provinciales y vecinales podrán ser á nivel, excepto en los casos que el Gobierno determine. En los pasos á nivel las barras-carriles se establecerán 0, m-02 á 0, m-03 mas bajas que el firme de las carreteras, ó será obligación de la empresa poner barreras que se abran hacia la parte exterior del ferro-carril, y un guarda destinado á este servicio, con las demás prevenciones que se juzguen convenientes para la seguridad del tránsito.

Art. 11. Los perfiles de explanación y obras de fábrica tendrán las dimensiones siguientes, según los casos:
Terraplenes. — Distancia entre las aristas superiores.

Distancia entre las aristas de la parte inferior del balasto.

Desmontes. — Distancia entre las aristas de las cunetas.

El balasto tendrá las mismas dimensiones que en los terraplenes.

Túneles. — Anchura de la sección medida en el plano que pasa por las caras superiores de las barras-carriles.

Altura de la sección sobre el eje de cada una de las vías, medida sobre el mismo plano.

Obras de fábrica. — Anchura entre los perfiles de los puentes, viaductos, etc.

Art. 12. Cuando el ferro-carril deba pasar por encima de una carretera general, provincial ó vecinal, la luz de los puentes que se construyan con este objeto será igual al ancho del firme de la carretera. La altura del intrados de la clave de los puentes de fábrica, ó de la parte inferior de los cerchones en los de madera y hierro, será por lo menos de cinco metros.

Art. 13. Siempre que el ferro-carril deba pasar por debajo de una carretera, la anchura entre pretiles de los puentes que se construyan al efecto, será igual al ancho del firme de la carretera. La luz de estos puentes será la que corresponda á los perfiles del artículo 6.° según sea el ferro-carril de una ó de dos vías, y la altura mínima, desde el plano que pasa por la cara superior de los carriles hasta el intrados, sobre el centro de cada vía, será por lo menos de cinco metros cincuenta centímetros.

Art. 14. Cuando el camino de hierro deba inutilizar algún trozo de carretera construida, y sea necesario variar el trazado de esta, será de cuenta de la empresa la construcción de las nuevas porciones. La anchura de estas será lo correspondiente á la clase de carretera, y sus pendientes no podrán pasar de tres á cinco centímetros por metro si fuese general ó provincial, ni de cinco á siete centímetros por metro si fuese vecinal. El Gobierno, sin embargo podrá alterar la cláusula precedente en algunos casos especiales.
Art. 15. En los subterráneos, cuya sección se sujetará a las condiciones que se expresan en el art. 6.º, la empresa hará todas las obras que sean necesarias para prevenir ó contener los derrumbamientos y filtraciones.

Los pozos precisos para la ventilación y construcción de los subterráneos no podrán abrirse en los caminos públicos, y en los que con este objeto abra la empresa en otros parajes deberá establecer brocales de fábrica de dos metros de altura.

Art. 16. En los puntos de encuentro del ferro-carril con las comunicaciones públicas y particulares, ó en sus inmediaciones, la empresa construirá á su costa los puentes, trozos de carretera, ó las demás obras provisionales que sean necesarias para no interrumpir la circulación. Estas obras se establecerán antes de interceptar las comunicaciones, y su duración no podrá pasar de un término que fijará el Gobierno.

Art. 17. Es obligación de la empresa restablecer y asegurar á costa el curso de las aguas que se suspenda ó modifique por trabajos que de ella dependan.

Art. 18. Los trabajos de consolidación que haya que ejecutar en el interior de una mina en razón de la travesía de un ferro-carril, y todos los perjuicios que se irroguen á los mineros, serán de cuenta de la empresa del ferro-carril.

Art. 19. Establecerá la empresa un telégrafo eléctrico exclusivamente para el servicio de la explotación. Los postes de este telégrafo estarán dispuestos para recibir el número de hilos que el Gobierno necesite para su servicio y el del público, estando obligada la empresa á facilitar el local conveniente en sus estaciones para dicho servicio. La custodia, conservación y reparaciones de los hilos y de todo el material exterior á las estaciones que establezca el Gobierno, será de cuenta de la empresa.

Art. 20. No podrá ponerse en explotación el todo ó parte del ferro-carril sin que preceda autorización del Gobernador de la provincia, en vista del acta de reconocimiento de las obras y material del camino, redactada por los ingenieros inspectores del Gobierno, en que se declare que puede empezar la explotación.

Art. 21. Concluidos todos los trabajos, la empresa hará á sus expensas, con asistencia de los ingenieros del Gobierno, el amojonamiento y plan detallado de todas las partes del camino de hierro y sus dependencias. Formará también un estado descripti-
vo de los puentes y demás obras de fábrica que se hayan construido. La empresa formará á sus expensas y depositará en la Dirección general de Obras públicas, un ejemplar competentemente autorizado del acta de amojonamiento, del plano y del estado de las obras.

Art. 22. La empresa está obligada á conservar en buen estado el camino de hierro y sus dependencias, de modo que la circulación sea fácil y segura constantemente; siendo de su cuenta todos los gastos de reparación y conservación, así ordinarios como extraordinarios.

Art. 23. El camino de hierro y sus ramales serán considerados y guardados como los caminos del Estado: por consiguiente, los guardas y demás empleados que nombre la empresa, podrán usar las mismas armas y gozar las prerrogativas que disfrutan los del Gobierno, además de los distintivos que aquellas les señale.

Art. 24. Serán de la elección de los empresarios los medios de ejecución, y los agentes y demás empleados en la construcción, conservación y administración del ferro-carril.

Art. 25. La empresa explotará el ferro-carril durante los años determinados por la ley de concesión, con arreglo á la tarifa que en ella se fije.

Art. 26. La empresa formará los reglamentos necesarios para el buen servicio, administración y explotación del ferro-carril, sujetándolos á la aprobación del Gobierno.

Art. 27. La empresa no podrá hacer directa ni indirectamente contratos con otras empresas que transporten viajeros por tierra ó por agua, bajo cualquier forma ó denominación que sea, como no se extiendan á todas las empresas que verifiquen transportes en los mismos caminos. Los reglamentos que se hagan, en conformidad de lo que se establece en el artículo anterior, prescribirán todas las medidas necesarias para asegurar la más completa igualdad entre las diversas empresas de transportes en sus relaciones con el camino de hierro.

Art. 28. Las cartas y pliegos, así como sus conductores ó agentes necesarios al servicio del correo, serán transportados gratuitamente por los convoyes ordinarios de la empresa en toda la extensión de la línea.

Para este objeto la empresa reservará en cada convoy de viajeros ó mercaderías, una sección especial de carruaje. La forma y dimen-

TOMO 1.
siones de esta sección serán determinadas por la Dirección de Correos.

Art. 29. Además podrá haber todos los días, á la ida y á la vuelta de los convoyes ordinarios, uno ó mas convoyes especiales destinados al servicio general del correo, que podrán recorrer toda la línea, ó solamente una parte de ella, y cuyas horas de salida de día ó de noche, igualmente que su marcha y sus estaciones, se arreglarán por el Ministro de la Gobernación, oída la empresa. Esta podrá conducir en estos convoyes especiales, carruajes de todas clases para el transporte de viajeros y mercancías. Para cambiar las horas de salida, deberá el Gobierno avisar á la empresa con quince días de anticipación. La Dirección de Correos hará construir á sus expensas los carruajes propios al transporte de las cartas por convoyes especiales. La renovación y reparación de estos carruajes serán de cuenta de dicha dirección; pero deberán guardarse y conservarse por la empresa en sus cocheras, siendo de cargo de esta todas las maniobras y gastos que exijan por los viajes. Estos carruajes no conducirán mas que la corresponnedcia y los agentes necesarios para repartirla.

Art. 30. Fuera de las horas ordinarias de salida, el Gobierno podrá pedir también para el transporte excepcional de pliegos ó órdenes urgentes, y salva la observación de los reglamentos de policía del camino, convoyes especiales que la empresa deberá facilitar, sea de día, sea de noche, mediante una indemnización, que se fijará convencionalmente ó por peritos.

Art. 31. El Gobierno, por causa de utilidad pública debidamente justificada, podrá adquirir el ferro-carril.

Para determinar el precio de la compra, se tomará el término medio de los productos obtenidos durante los cinco años que precedan, y este término será el importe de la anualidad que se pagará á la empresa en cada uno de los años que falten para espirar la concesión.

Si este término fuese mayor de..... por 100, se fijará la anualidad como si fuere el..... por 100; si es menor y la empresa cree tener probabilidades de prosperar, podrá reclamar que la apreciación de la anualidad que se ha de pagar se haga á juicio de peritos; pero en ningún caso podrá bajar del término medio.

Art. 32. Cualquier ejecución ó autorización ulterior de caminos, canal, ferro-carril, trabajos de navegación ó otros en la co-
marca donde esté situado el camino de hierro que sea objeto de la concesión ó en cualquiera otra contigua ó distante, no podrá dar origen á indemnización alguna por parte de la empresa.

Art. 33. La empresa no podrá oponerse á que su ferro-carril sea cruzado por otros caminos, canales ó ferro-carriles que se abriesen con autorización del Gobierno, salva la indemnización á que haya lugar por interrupción del tránsito ó daño material causado al camino.

Art. 34. Las empresas á quienes el Gobierno concediese la facultad de que habla el artículo anterior, podrán hacer circular sus carruajes, wagones, máquinas, trenes, etc., sobre una parte ó el total del ferro-carril objeto de la presente concesión, pagando los premios anotados en la tarifa, y cumpliendo exactamente los reglamentos de policía que se hubiesen establecido para el buen servicio del camino. Esta facultad será recíproca, y por lo tanto los empresarios la podrán ejercer en los ferro-carriles que se abran como ramales ó prolongación del que han de ejecutar.

Además, las citadas empresas, y los empresarios, lo mismo que en sus respectivas líneas, podrán depositar géneros, tomar y dejar viajeros, etc., en todos los descansos, paradas, estaciones, almacenes, etc., que se establecieren, ya en el camino de hierro concedido, ya en sus ramales, ya en los ferro-carriles que fueren su prolongación; podrán además dichas empresas proveerse de agua y de carbon, mediante la correspondiente indemnización, en los mismos puntos que la empresa concesionaria, ó establecer pozos y depósitos donde les convenga.

Art. 35. En el caso de que las empresas de los ramales ó prolongaciones no quisieren usar del derecho que les concede el artículo anterior, tendrán la obligación de entenderse entre sí, de modo que jamás se vea interrumpido el servicio de transporte de los puntos extremos de varias líneas. Si tal sucediese, el Gobierno providenciaará lo conveniente para restablecer el servicio.

Art. 36. La empresa que por causas imprevistas se encuentre en la necesidad de servirse del material perteneciente á otras, pagará una indemnización correspondiente al uso y deterioro de este material. En el caso que las empresas no se pongan de acuerdo sobre la indemnización ó sobre los medios de asegurar la continuación del servicio en toda la línea, el Gobierno proveerá de oficio, y dictará todas las medidas convenientes.
Art. 37. Al espirar el término de la concesión, ó en los demás casos que se establecen en este pliego de condiciones, el Gobierno reemplazará á la empresa en todos los derechos de propiedad de terrenos y obras designadas en el estado y plano estadístico mencionado en el art. 22, y entrará inmediatamente en el goce del camino de hierro con todas sus dependencias y productos.

La empresa tendrá obligación de entregar en buen estado de conservación el camino de hierro, las obras que lo componen y sus dependencias, tales como estaciones, sitios de carga y de descarga, establecimiento de los puntos de partida y arribo, casas de guardias y vigilantes y oficinas de percepción: tendrá igualmente obligación de entregar todo el material de explotación en buen estado de servicio.

El material de explotación será por lo menos el que como mínimo se fije en las condiciones particulares de la concesión.

En los años que precedan al término de la concesión, el Gobierno tendrá derecho de retener los productos líquidos del camino, y de emplearlos en conservarle en buen estado con sus dependencias, si la empresa no tratase de llenar completamente esta obligación.

Art. 38. Ademáse de estas condiciones, se obliga la empresa á observar todas las marcadas en la ley general de ferro-carriles, ley de policía, reglamentos de policía de la explotación y demás disposiciones vigentes, y que en lo sucesivo se dictaren como regla general para esta clase de empresas.

Art. 39. Para el cumplimiento de las obligaciones de la empresa estará sujeta á la inspección que el Gobierno determine.

Art. 40. Para cubrir los gastos del servicio ordinario y extraordinario que corresponde hacer al Gobierno con motivo de las inspecciones, reconocimiento y cualquier otro servicio que tenga relación con la construcción y explotación del ferro-carril, la empresa depositará anualmente en –...– disposición del Gobierno una cantidad que no podrá exceder á la que se señale como máximo en el pliego particular de condiciones de cada línea.

Art. 41. La empresa nombrará uno de sus individuos para recibir las comunicaciones que le dirijan el Gobierno y sus delegados, el cual deberá residir en –...– Si se faltase por la empresa á cualquiera de estas disposiciones, ó su representante se hallase ausente de... será válida toda notificación hecha á la empresa concesionaria, con tal que se deposite en la secretaría del Gobierno político de –...–
Art. 42. Las contestaciones que puedan ocurrir entre la empresa y el Gobierno acerca de la ejecución o interpretación de las diferentes cláusulas de este pliego de condiciones y de las particulares estipuladas con la misma, se decidirán por los trámites y tribunales designados, o que en adelante conozcan en los asuntos contenciosos de las obras públicas a cargo del Estado.
## Tarifa para el camino de hierro de...

### Por cabeza y kilómetro.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Viajeros</th>
<th></th>
<th>De Pase</th>
<th>Precios de transporte</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Carruajes de primera clase</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Idem de segunda</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Idem de tercera</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bueyes, vacas, toros, caballos, mulas, animales de tiro</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ganados</td>
<td>Terneros y cerdos</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Corderos, ovejas, cabras</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Por tonelada y kilómetro.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pescado</th>
<th>Ostras y pescado fresco con la velocidad de los viajeros</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primera clase</td>
<td>Fundición amolada, hierro y plomo labrado, cobre y otros metales labrados ó en bruto, vinos, bebidas espirituosas, aceites, algodones, lanas, maderas de ebanistería, azúcares, café, especias, drogas, géneros coloniales y efectos manufacturados.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Segunda clase</td>
<td>Granos, semillas, harinas, sal, cal, yeso, minerales, cok, carbon de piedra, leña, tablas, maderas de carpintería, mármol en bruto, sillería, betunes, fundición en bruto, hierro en barras ó palastro, plomo en galápagos.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tercera clase</td>
<td>Piedra de cal y yeso, sillarejos, piedra molinar, grava, guijarros, arenas, tejas, ladrillos, pizarras, estiercol y otros abonos, piedra de empedrar, y materiales de toda especie para la construcción y conservación de los caminos.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Wagon, diligencia u otro carruaje destinado al transporte por el camino de hierro que pasa vacío, máquina locomotora que no arrastre convoy.

Todo wagon ó carruaje cuyo cargamento en viajeros ó en mercaderías no dé un peaje al menos igual al que producirían estos mismos carruajes vacíos, se considerará para el c. bro de este peaje como si estuviera vacío.

Las máquinas locomotoras pagarán como si no arrastrasen convoy cuando el convoy remolcado, ya sea de viajeros ó ya de mercaderías, no produzca un peaje igual al que produciría la máquina con su tender.

Por pieza ó kilómetro.

Carruaje de dos ó cuatro ruedas con dos testeras y dos banquetas en el interior. Si el transporte se verifica con la velocidad de los viajeros, la tarifa excederá...

En este caso dos personas podrán viajar sin suplemento de tarifa en los carruajes de una banqueta, y tres en los de dos: los que pasen de este número pagarán la tarifa de los asientos de segunda clase.
DISPOSICIONES QUE SE HAN DE OBSERVAR EN LA PERCEPCION DE LOS DERECHOS DE ESTA TARIFA.

1.ª La percepción será por kilómetros, sin tener en consideración las fracciones de distancia; de manera que un kilómetro empezado se pagará como si se hubiese recorrido por entero.

2.ª La tonelada es de 1,000 kilogramos, y las fracciones de tonelada se contarán de 10 en 10 kilogramos.

3.ª Las mercaderías que, á petición de los que las remesen, sean transportadas con la velocidad que los viajeros, pagarán el doble de los precios señalados de la tarifa. Lo mismo se entenderá respecto de los caballos y ganados.

4.ª La cobranza de los precios de tarifa deberá hacerse sin ninguna especie de favor. En el caso de que la empresa conceda rebaja en estos precios á uno ó á muchos de los que hacen remesas, se entenderá la reducción hecha para todos en general, quedando sujeta á las reglas establecidas para las demás rebajas. Las reducciones hechas en favor de indigentes no estarán sujetas á la disposición anterior. Las rebajas de tarifa se harán proporcionalmente sobre el peaje y el transporte, y deberán anunciarse al público por lo menos con 15 días de anticipación.

5.ª Todo viajero, cuyo equipaje no pese más de 30 kilogramos, solo pagará el precio de su asiento.

6.ª Las mercaderías, animales y otros objetos no señalados en la tarifa se considerarán para el cobro de derechos como de la clase con que tenga más analogía.

7.ª Los derechos de peaje y de transporte que se expresan en la tarifa no son aplicables: primero, á todo carruaje que con su cargamento pese más de 4,500 kilogramos; segundo, á toda masa indivisible que pese más de 3,000 kilogramos.

Sin embargo, la empresa no podrá rehusar la circulación ni el transporte de estos objetos; pero cobrará más por peaje y transporte. La empresa no tendrá obligación de transportar masas indivisibles que pesen más de 5,000 kilogramos, ni dejar circular carruajes que con su cargamento pesen más de 8,000. No se comprenden en esta disposición las locomotoras. Si la empresa consiente el paso de estas masas indivisibles ó carruajes, tendrá obligación de consentirlo también durante dos meses á todos los que lo pidan.
8.º Los precios de tarifa no se aplicarán:

Primero. A todos los objetos que no estando expresados en ella, no pesen bajo el volumen de un metro cúbico, 125 kilógramos.

Segundo. Al oro y plata, sea en barras, monedas ó labrados, al plaqué de oro ó de plata, al mercurio y á la platina, á las alhajas, piedras preciosas y objetos análogos.

Tercero. En general á todo paquete, bala ó excedente de equipaje que pese aisladamente menos de 50 kilógramos, cuando no formen parte de remesas que pesen juntas mas de 50 kilógramos en objetos de una misma naturaleza, remesados á la vez y por una misma persona aunque estén embalados separadamente. Los precios de los objetos mencionados en los tres párrafos que anteceden, se fijarán anualmente por el Gobierno á propuesta de la empresa. Pasando de 50 kilógramos, el precio de una bala será..... por kilógramo, sin que pueda bajar de..... cualquiera que sea la distancia recorrida.

9.º En virtud de la percepción de derechos y precios de esta tarifa, y salvas las excepciones anotadas mas adelante, la empresa se obliga á ejecutar con cuidado, exactitud y con la velocidad estipulada el transporte de viajeros. Los animales, géneros y mercaderías de cualquiera especie, serán transportados en el orden de su número de registro.

10. En el precio del transporte se considerarán incluidos los gastos accesorios. Por ningún concepto se permitirá el de carga y descarga y almacenaje de los efectos de comercio en los apostaderos y estaciones del camino de hierro.

11. Los que mandan ó reciben las remesas tendrán la libertad de hacer por sí mismos y á sus expensas la comisión de sus mercaderías, y el transporte de estas desde sus almacenes al camino de hierro y vice-versa, sin que por eso la empresa pueda dispansarse de cumplir con las obligaciones que le impone la disposición anterior.

12. En el caso de que la empresa hiciese algún convenio para la comisión y transporte de que se habla anteriormente con uno ó muchos de los que remesan, tendrá que hacer lo mismo con todos los que lo pidan.

13. Los militares y marinos que viajen aisladamente por causa del servicio ó para volver á sus hogares después de licenciados, no pagarán por sí y sus equipajes más que la mitad del precio de ta-
Artículo 1.° Los delegados del Gobierno cerca de las sociedades de seguros mútuos, cualquiera que sea su objeto, deberán ejercer sobre la parte administrativa de las mismas, y sin embara zar en manera alguna sus operaciones, la inspección necesaria para hacer que se cumplan con estricta puntualidad sus respectivos estatutos y reglamentos.

Art. 2.° Con este fin concurrirán á los Juntas generales y á las que bajo el título de consejos de vigilancia ú otros análogos, tienen por objeto fiscalizar, aprobar ó censurar los actos de sus direcciones.

Art. 3.° Las direcciones de las sociedades deberán pasar á los respectivos delegados del Gobierno, una copia auténtica de los estatutos y reglamentos por que se rijan las mismas, así como de todas las alteraciones que en ellos se hayan introducido y se introduzcan con la competente autorizacion del Gobierno.

Art. 4.° Los delegados del Gobierno asistirán á los arqueos de los valores ó efectos de cualquiera clase que se verifiquen, y firmarán sus actas.

Art. 5.° Concurrirán á la comprobacion ó verificacion de los balances ordinarios ó extraordinarios, firmando también estos, y remitiendo de ellos una copia exacta y autorizada al Gobierno de S. M. por conducto del Gobernador de la provincia en que la sociedad se halle domiciliada.

Art. 6.° A los balances generales de fin de año acompañarán los delegados una memoria que dé á conocer el estado de la sociedad durante el mismo periodo, exponiendo las observaciones que se les ofrezcan sobre la prosperidad ó decadencia, ó indicando en este último caso las medidas que en su juicio convenga adoptar para prever su ruina, restablecer su crédito, ó declararlas en liquidación.

Art. 7.° En los actos administrativos en que intervengan, deberán presentar las protestas oportunas siempre que se contraviniere á lo prevenido en los estatutos y reglamentos aprobados, haciendo que se consigne en una acta, y dando inmediatamente cuenta al Gobierno por conducto del respectivo Gobernador de la provincia.

Art. 8.° Estarán también obligados á participar mensualmente al Gobierno por el mismo conducto el estado de la sociedad, aun cuando nada ofrezca de notable.

Art. 9.° Siempre que se trate de la reforma de alguno de los artículos de los estatutos ó reglamentos, acordada en Junta general de
rifas. Los militares y marinos que viajen en cuerpo no pagarán más que la cuarta parte de la tarifa por sí y sus equipajes. Si el Gobierno necesitase dirigir tropas o material militar o naval por el camino de hierro, la empresa pondrá inmediatamente á su disposición por la mitad del precio de tarifa todos los medios de transporte establecidos para la explotación del camino. Los ingenieros y agentes del Gobierno destinados á la inspección y vigilancia del camino de hierro, serán transportados gratuitamente en los carruajes de la empresa, igualmente que los empleados del telégrafo en el caso de que el Gobierno tenga establecido un servicio especial.

Madrid 15 de febrero de 1856.—Aprobado por S. M.—Luxán.
APÉNDICE NÚM. 10.

Inspeccion de las sociedades de seguros mútuos.

28 de diciembre de 1857.

REAL ÓRDEN.

Correspondiendo al Gobierno la protección de los intereses generales e individuales en la forma establecida por las leyes, se han dictado diferentes disposiciones encaminadas á vigilar el exacto cumplimiento de los estatutos y reglamentos de las sociedades de seguros mútuos que, con diversos objetos y mediante la previa autorización de S. M., se han constituído en España, siendo la más eficaz la del nombramiento de delegados cerca de las mismas sociedades en los casos que lo han estimado oportuno. Pero aunque esta medida, consignada en la ley de 28 de enero de 1848 sobre la constitución de las sociedades mercantiles por acciones, y reclamada después por algunas de las de seguros mútuos al solicitar su autorización, ha ofrecido desde luego útiles resultados como garantía de los intereses comprometidos entre los asociados y en favor del crédito de las mismas sociedades cuando se ha ejercido inspección con actividad y celo, no ha producido, por desgracia, iguales efectos respecto de otras en que, á los defectos de sus bases constitutivas, se ha unido una tolerancia mal entendida por parte de los delegados del Gobierno, ó una ignorancia censurable de los deberes que su cargo les impone. En esta atencion, y sin perjuicio de lo que sobre este punto convenga consignar en su día en una ley especial para la formación de dichas clases de sociedades, la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien mandar, que tanto con relación á las de seguros mútuos ya autorizadas y establecidas, como á las que se autoricen y constituyan en adelante en todo el Reino, y cerca de las cuales existan ó tenga por conveniente S. M. nombrar delegados para su inspección y vigilancia, se observe el siguiente reglamento:
la sociedad, informarán al Gobierno acerca de la alteración que se pretendan.

Art. 10. Se les prohíbe tener interés ó participación en el objeto de la sociedad cerca de la cual sean delegados.

Art. 11. Estarán sujetos á responder ante el Gobierno de las infracciones de los estatutos ó reglamentos de las sociedades, siempre que oportunamente no hayan presentado la correspondiente protesta, y dado conocimiento de ella al Gobierno en los términos que quedan expresados.

Art. 12. Cuando los delegados hayan de cesar por disposición del Gobierno, continuarán sin embargo en el desempeño de su cargo, si no se previniere lo contrario, hasta que se presente el que haya de sucederles, á quien harán entrega de los estatutos y reglamento, y de los demás papeles y datos que, no siendo puramente personales, sean conducentes al mejor desempeño de su cometido; y en los casos de enfermedad duradera ó ausencia autorizada, lo pondrá en conocimiento del Gobernador de la provincia respectiva para los efectos convenientes.

Art. 13. Las reglas establecidas en este reglamento serán obligatorias, tanto para los delegados del Gobierno como para las sociedades cuya inspección les esté encomendada, en la parte que les concierne.

Art. 14. Así las direcciones de las sociedades de seguros mútuos, como los delegados del Gobierno cerca de las mismas, deberán entenderse siempre con el Ministerio de la Gobernación por conducto de los Gobernadores de las provincias en que aquellas se hallen domiciliadas.

De Real órden lo comunico á V. S. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de diciembre de 1857.—Bermúdez de Castro.—Sr. Gobernador de la provincia de....
APÉNDICE NÚM. 14.

REALES DECRETOS.

En vista de las consideraciones que me ha expuesto mi Ministro de Fomento, de conformidad con mi Consejo de Ministros, vengo en mandar que se observe el siguiente proyecto de ley orgánica provisional de la Bolsa de Madrid.

Disposiciones generales.

Artículo 1.° La Bolsa es la reunión periódica de los comerciantes y de los agentes públicos que intervienen en sus contratos en el local señalado por el Gobierno.

El Gobierno podrá crear esta clase de establecimiento donde lo estime conveniente.

Art. 2.° Serán objeto de la contratación de la Bolsa:
La negociación de los efectos públicos cuya cotización esté de antemano autorizada en los anuncios oficiales.
La de las letras de cambio, libranzas, pagarés, acciones de minas, de sociedades anónimas legalmente autorizadas, y cualquiera especie de valores de comercio procedente de personas particulares.
La venta de metales preciosos amonedados ó en pasta.
La de mercaderías de toda clase.
Los seguros de efectos comerciales contra todos los riesgos terrestres ó marítimos.
El fletamiento de buques para cualquier punto.
Los transportes en el interior por tierra ó por agua.
Art. 3.° Se comprenden en la denominación de efectos públicos (*):
1.° Los que representen créditos contra el Estado y se hallen reconocidos legalmente como negociables.

(*) Vease lo que comprende bajo esta denominación el art. 2.° del Real decreto de 9 de setiembre que se inserta á continuación.
2.° Los de establecimientos públicos ó empresas particulares á quienes se haya concedido privilegio para su creación y circulación.

3.° Los emitidos por los Gobiernos extranjeros, siempre que su negociación se halle autorizada.

Art. 4.° En las negociaciones, tanto de los efectos públicos negociables como de los valores de comercio, empresas ó personas particulares, no se reconocerá otro curso legal en juicio sino el que resulte de las operaciones hechas en la Bolsa, conforme á la cotización del día.

Art. 5.° Todos los días, excepto los de fiesta de precepto, el miércoles, jueves y viernes de la Semana Santa, los días de SS. MM. y el 2 de mayo, habrá reuniones de Bolsa que durarán dos horas.

Se prohíbe á los corredores ejercer sus atribuciones y circular en el local de la Bolsa durante el tiempo que se señale para la negociación de los efectos públicos. Si alguno faltase á estas disposiciones, podrá por notoriedad la Junta del colegio de agentes imponerle la entrada en lo sucesivo en el tiempo designado para la contratación de los efectos públicos.

Art. 6.° Se prohíbe toda reunión para operaciones mercantiles fuera de la Bolsa. Los contraventores incurrirán en una multa de 300 reales; si fueren agentes ó corredores será doble la pena pecuniaria, con la de privación de oficio.

Art. 7.° Si la reunión ilícita se tuviere en algun edificio particular, incurrirá el dueño en la multa de 10,000 rs., sin perjuicio de las demás penas que haya lugar á imponerle, conforme al Código penal.

Art. 8.° Los contratos y negociaciones que se hagan en estas reuniones ilícitas serán ineficaces en juicio.

Art. 9.° Por las disposiciones de los tres artículos precedentes no se entenderá vedada á los comerciantes la contratación á domicilio, ya sea directa entre sí, ó ya con intervención de los corredores ó agentes que les permite el art. 68 del Código de Comercio.

Art. 10. Todo español ó extranjero tiene derecho á entrar en la Bolsa, si no le obsta alguna incapacidad legal.

Art. 11. No podrán concurrir á las reuniones de Bolsa:

1.° Los que por sentencia judicial se hallen privados ó suspendidos del ejercicio de las derechos civiles.

2.° Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación.
3.° Los agentes ó corredores que se hallen privados ó suspensos del ejercicio de sus oficios.

4.° Los que con arreglo á esta ley hayan sido declarados intrusos en los oficios de corredores ó agentes.

5.° Los que hayan dejado de cumplir algunas operaciones concertadas en la Bolsa.

6.° Los clérigos y mujeres, y también los menores de edad que no estén legalmente autorizados para contratar y administrar sus bienes.

Art. 12. La Bolsa estará bajo la autoridad del Gobernador de la provincia de Madrid, en cuyo nombre y representación cuidará de su régimen inmediato, y del buen órden y policía de sus reuniones, un inspector de nombramiento Real.

Art. 13. Ninguna otra autoridad, a excepción del Gobernador de la provincia, podrá ejercer sus atribuciones en la Bolsa sino cuando lo reclame el inspector de la misma.

Art. 14. La designación de las horas en que hayan de celebrarse las reuniones de la Bolsa, el órden de las operaciones y todo lo demás que concierne á su régimen y policía, será objeto de un reglamento que dará el Gobierno.

**Operaciones de Bolsa.**

Art. 15. Las operaciones sobre efectos públicos se podrán hacer al contado ó á plazo, pero siempre con la intervención de los agentes.

Art. 16. Los agentes son responsables del cumplimiento de las operaciones al contado de efectos públicos, quedando á su arbitrio exigir de sus comitentes las garantías que á dichos agentes parezcan.

Art. 17. En el mismo día en que los agentes hayan concertado entre sí la operación, la sentarán en su libro manual, entregándose recíprocamente nota suscrita de la operación concertada.

Art. 18. Los agentes entregarán á sus comitentes una nota firmada, expresando los términos y condiciones de la negociación, y el nombre de los interesados, si en ello consienten ó lo exige la naturaleza de la operación, la cual deberá consumarse en el día que se celebre, ó á lo más tarde en el tiempo que medie hasta la hora designada para la apertura de la Bolsa del día inmediato, precediendo al efecto la entrega de dicha póliza, y volviendo esta á manos de
los agentes después de cambiados los efectos vendidos y el precio convenido.

Art. 19. Si las operaciones al contado no se cumplieren en el tiempo prefijado, el agente o la parte que se crea perjudicada tendrá derecho, durante la reunión de la Bolsa, en el día inmediato, a dejar sin efecto la operación, denunciando su rescisión al agente interesado y a la Junta sindical, ó a requerir su cumplimiento dirigiéndose a la misma Junta.

Procederá esta en el segundo caso, sin admitir excusa de ninguna especie, á la compra ó venta de los efectos por cuenta de la fianza del agente que aparezca moroso; y si no alcanza dicha fianza á cubrir el importe de la operación, se hará por la misma Junta la correspondiente liquidación, á fin de que los interesados usen de su derecho contra los demás bienes del agente omiso, sin perjuicio de la acción que á este competa contra su comitente ó contra el agente con quien hubiese concertado la operación.

Art. 20. Los agentes observarán en la negociación de las inscripciones de la Deuda del Estado las reglas establecidas en los artículos anteriores, y las que se expresarán en los siguientes:

Art. 21. El agente vendedor de una inscripción, deberá entregar nota de su número al comprador, y exigirá de este otra nota con el nombre del sujeto en cuyo favor haya de hacerse la transferencia.

Para que esta se verifique, se entregará la inscripción antes de 24 horas en la oficina que corresponda, expresando el nombre del cessionario y las demás circunstancias necesarias, á fin de que el agente comprador cuide de recoger el título con la nota de transferencia.

Art. 22. El agente vendedor de las inscripciones negociadas en la Bolsa, responde del cumplimiento de la negociación, de la identidad y capacidad legal de la persona, y de la autenticidad del título, firmando al efecto la nota de transferencia.

Art. 23. La responsabilidad impuesta por el artículo anterior, durará tres años.

Art. 24. El término en que habrá de consumarse la operación de inscripciones de la Deuda del Estado, será el de cinco días útiles, pasados los cuales sin haberse cumplido la operación, el agente ó la parte perjudicada podrán exigir su cumplimiento en los términos que previene el art. 19.
Art. 26. Las disposiciones de los arts. 20, 21, 22, 23 y 24 son aplicables a las transferencias de las acciones de los Bancos, ó cualquier otro establecimiento competentemente autorizado para emitir efectos que tengan la calificación legal de públicos.

Art. 27. Para que estas operaciones tengan fuerza civil de obligar, es condición indispensable que existan en poder del vendedor los títulos que se proponga vender, á cuyo efecto entregará al agente nota firmada de su numeración.

Art. 28. En estas operaciones el agente no será mas que simple intermediario, limitándose su oficio á proponer la operación en nombre de su comitente, quien será el único responsable de la negociación.

Art. 29. Las pólizas que se extiendan de las operaciones á plazo, contendrán la numeración de los títulos vendidos, firmándolos el vendedor y el comprador con el agente intermediario. Si las pólizas no contuviesen la numeración de los títulos, no tendrían fuerza alguna en juicio.

Art. 30. El vendedor no podrá reclamar el cumplimiento de la operación si no presentase los títulos cuya numeración exprese la póliza; pero no le servirá de excepción contra el comprador el no tener ó no haber tenido los mismos títulos para eximirse de entregarlos.

Art. 31. Las operaciones sobre efectos públicos se publicarán en la Bolsa por medio del anunciador, á cuyo efecto los agentes, en el acto de concluir cualquiera operación, pasarán al anunciador una nota firmada que exprese el precio de la negociación, y si es al contado ó á plazo, expresando el que este sea. El anunciador, después de hecha la publicación, pasará la nota á la Junta sindical.

Art. 32. Los préstamos con garantía de efectos públicos, se harán con intervención de los agentes.

Art. 33. El prestador tendrá sobre los efectos en garantía el derecho exclusivo de preferencia para cobrar su crédito sobre todos y cualquiera clase de acreedores.

Art. 34. Tendrá solamente esta preferencia sobre los mismos títulos en que se constituyó la garantía, á cuyo efecto, si consistiese en títulos al portador, para que su identidad resulte justificada, se expresará su numeración en la póliza del contrato. Si la garantía
consistiese en inscripciones ó efectos transferibles, se hará la transference a favor del prestador, expresándose en la póliza, además de las circunstancias necesarias para justificar la identidad de la garantía, que la transference no lleva consigo la traslación de la propiedad.

Art. 35. Si no conservase el prestador los mismos títulos en que se haya constituido la garantía, pierde todo derecho de preferencia, y estará en el mismo caso que el vendedor de efectos públicos que no entrega al comprador los expresados en la numeración de la póliza, y se le aplicarán las disposiciones del art. 30.

Art. 36. Las pólizas de préstamos contendrán todas las demás condiciones del contrato, y serán firmadas por los interesados y por el agente intermediario.

Art. 37. Vencido el plazo del préstamo, el acreedor está autorizado, salvo pacto en contrario, sin necesidad de requerir á su deudor, para proceder á la enajenación de las garantías, á cuyo fin las presentará con la póliza á la Junta sindical, la que hallando su numeracion igual á la contenida en la póliza, las enajenará en el mismo día. De este derecho solo podrá hacer uso el prestador durante la Bolsa siguiente al día del vencimiento del préstamo.

Art. 38. A voluntad de los interesados, la numeración de los títulos al portador podrá suplirse con el depósito de los mismos en el establecimiento público que el Gobierno designe en el reglamento.

Art. 39. En la negociación de los efectos de comercio y en las transferencias de acciones de las sociedades mercantiles, observarán los agentes las mismas reglas que determina para los corredores el Código de Comercio y el art. 33 del Reglamento de 17 de febrero de 1848.

De los agentes de Bolsa.

Art. 40. Para la intervencion de las negociaciones de Bolsa, habrá en la de Madrid 32 agentes, que serán de nombramiento Real.

El número de estos, y el que tiene en la actualidad el Colegio de Corredores, no podrá alterarse por nombramientos de supernúmerarios, ni de ninguna otra manera.

Art. 41. Este nombramiento no podrá recaer sino en los que reunan las circunstancias siguientes:

1.º Ser natural de los Reinos de España, ó estar domiciliado en ellos.
2.ª Ser mayor de 25 años.
3.ª Haber practicado el comercio por espacio de ocho años en el despacho de comerciante matriculado ó agente de Bolsa.
4.ª Haber sido declarado apto para desempeñar el oficio de agente, previo exámen, por la Junta sindical del colegio de agentes sobre la materia de su profesión.

Art. 42. No pueden ser agentes:

Los extranjeros que no hayan obtenido carta de naturaleza que los habilite para obtener cargos públicos.

Los eclesiásticos, militares en activo servicio, y los funcionarios públicos de Real nombramiento.

Los comerciantes quebrados que no hayan sido rehabilitados.

Los agentes ó corredores que hubieren quebrado, hayan sido ó no rehabilitados, ó que hubiesen sido privados de oficio.

Los que hubieren sido echados de la Bolsa, ó perseguidos judicialmente por agentes ó corredores intrusos.

Art. 43. Los agentes dimisionarios ó los herederos de los que mueran desempeñando su oficio, tendrán el derecho á presentar al nombramiento Real la persona que haya de ocupar la vacante.

En el caso de la supresión de este derecho, no queda el Estado obligado á indemnización de ninguna clase.

Por medio del oportuno reglamento determinará el Gobierno el modo y forma en que deberá hacerse esta presentación, y los medios con que habrá de instruirse el expediente para la provision de las demás vacantes que puedan ocurrir (§).

Art. 44. Antes de entrar el nombrado á desempeñar el oficio de agente, afianzará su buen desempeño con una fianza de 500,000 reales en metálico que depositará en la Caja general de Depósitos y consignaciones, ó en otro establecimiento que el Gobierno designe, quedando á su arbitrio constituir esta fianza en papel consolidado al curso que tenga en la Bolsa en el día en que se verifique el depósito.

Las fianzas que se constituyan en papel, se arreglarán cada seis meses por el precio que tenga en las reuniones de Bolsa de 30 de junio y 31 de diciembre.

Después de constituida la fianza, el agente prestará juramen-

(§) Véase el art. 4.º del Real decreto de 9 de setiembre que se inserta á continuación, por el que quedan en suspenso los efectos de este artículo.
to ante el Gobernador de la provincia de ejercer bien y fielmente su oficio.

Art. 45. Por cesación de un agente en el ejercicio de su oficio, se devolverá al mismo, ó á sus herederos si hubiese fallecido, la fianza ó la parte de ella que pueda corresponderle, deducida la responsabilidad á que legítimamente se halle afecta.

En uno y otro caso se anunciará la devolución con 60 días de anticipación por medio de un cartel que permanecerá fijado en el sitio más visible de la Bolsa durante este tiempo, á fin de que se puedan hacer las reclamaciones convenientes.

Art. 46. Corresponde exclusivamente á los agentes intervenir en las negociaciones de toda especie de efectos públicos comprendidos en las calificaciones del art. 3.°, y en las transferencias que se hagan de los efectos públicos inscriptos en los registros del Gobierno ó de los establecimientos autorizados para emitirlos, certificando la identidad de la persona del cedente y de su firma.

Art. 47. También les corresponde, pero en concurrencia con los corredores, intervenir en las operaciones de cambio y giro de valores comerciales, y en la venta de metales preciosos.

Art. 48. En las negociaciones de que trata el artículo anterior, los agentes están sujetos á las mismas reglas y responsabilidad que el Código de Comercio establece para los corredores.

Art. 49. Es obligación de los agentes:
1.° Asegurarse de la identidad de las personas con quienes traten los negocios en que intervinieren, y de su capacidad legal para celebrarlos.
2.° Proponer los negocios con exactitud, precision y claridad, absteniéndose de hacer supuestos falsos que puedan inducir en error á los contratantes.
3.° Guardar un riguroso secreto en todo lo que concierne á las negociaciones que hicieren, con inclusión de los nombres de las personas que se las encargaren, á menos que la ley ó la naturaleza de las operaciones exija el que se manifieste quiénes sean, ó que ellas consientan en que así se verifique.

Art. 50. Se prohíbe á los agentes:
1.° Que directa ni indirectamente, bajo su mismo nombre ó el ajeno, puedan hacer negociaciones algunas por cuenta propia, ni tomar interés en ellas, ni contraer sociedad de comercio general ni particular.
2.° Encargarse por cuenta de otro de hacer cobranzas ni pagos que no sean para la ejecución de las negociaciones en que hayan de intervenir por razón de su oficio.

3.° Constituirse en aseguradores de ninguna especie de riesgo de mercaderías ni efectos de comercio.

4.° Ser aseguradores, salir fiadores ó adquirir otra clase de compromisos que los que tengan por razón de su oficio, para los cuales tienen exclusivamente hipotecada su fianza.

5.° Intervenir en contratos ilícitos y reprobados por derecho, sea por la calidad de los contrayentes, ó por la naturaleza de las cosas sobre que verse el contrato, ó por la de los pactos con que se hagan.

6.° Proponer letras ú otra especie de valores procedentes de personas de extraño domicilio y desconocidas en la plaza, sin que presenten un comerciante que abone la identidad de la persona.

7.° Negociar valores por cuenta de individuos que hayan suspendido sus pagos, ó hayan sido declarados en quiebra.

8.° Adquirir para si y de su cuenta los objetos de cuya negociación estén encargados, á menos que esto se verifique por convenio entre el comitente y el mismo agente, para pago de los desembolsos hechos en una negociación celebrada por cuenta de aquel.

9.° Dar certificación que no recaiga sobre hechos que consten en los asientos de sus registros y con referencia á estos.

Los que contravinieren á estas disposiciones incurrirán en las penas que señala el Código de Comercio para cada caso respectivo.

Art. 51. Se prohíbe igualmente á los agentes que sean cajeros, tenedores de libros, mancebos ó dependientes, bajo cualquier denominación que sea, de los banqueros ó comerciantes: el que infringiere esta disposición será privado de oficio.

Art. 52. El agente que negociare valores con los endosos en blanco, contraviniendo al art. 471 del Código de Comercio, pagará una multa equivalente á la mitad del valor del efecto negociado, y será suspenso de oficio por seis meses; y si reincidiese, además de una doble multa, se le impondrá la privación de oficio.

Art. 53. El agente no podrá ser sustituido por sus dependientes, ni por apoderado alguno, aun cuando tenga la cualidad de estar aprobado por la Junta sindical: solo podrá operar en su nombre otro individuo del colegio á quien transmita las negociaciones que le estén encargadas.
Art. 54. En las negociaciones de efectos públicos afectos á vinculaciones, capellanías ó manos muertas, ó que pertenezcan á personas que no tuviesen la libre administración de sus bienes, no intervendrán los agentes, sin que en uno y otro caso se autorice la enajenación en la forma prescrita por las leyes: si contraviniesen á esta disposiccion, serán responsables de los daños y perjuicios que se irroguen á tercero.

Art. 55. En la prohibicion del párrafo primero del art. 50 de esta ley no se entiende comprendida la sociedad en comandita que los agentes podrán contraer sobre su oficio, haciendo participes á los comanditarios de los beneficios ó pérdidas que tengan en el ejercicio de sus funciones.

Arreglada esta sociedad al tenor del Código de Comercio, el sócio comanditario no podrá hacer gestion ninguna de las que son propias de los agentes, y su responsabilidad se contraerá á los fondos que haya puesto en la comandita; pero si infringiendo esta prohibicion se mezclare en las operaciones del agente, será responsable con todos los demás fondos de su propiedad particular á las reclamaciones que contra este puedan hacerse por razón de su oficio.

La sociedad quedará disuelta de derecho por la destitucion del agente, haciéndose la liquidacion luego que estén canceladas todas las obligaciones de que sea responsable bajo esta calidad.

Art. 56. Los agentes están obligados á sentar las operaciones, en la forma que previene el art. 94 del Código de Comercio, en un libro ó cuaderno manual foliado que llevarán al efecto.

Estos asientos se harán precisamente por el agente mismo, salvo que por imposibilidad fisica se le autorice para usar de amanuense.

Art. 57. Todos los asientos del manual se trasladarán al libro registro que deberá llevar además cada agente, antes de la apertura de la Bolsa del día inmediato al del asiento, copiándose íntegramente por orden correlativo de fechas, expresando los números con que resulten en el manual, sin enmiendas, abreviaturas ni interposiciones, y escribiendo en letra las cantidades que se representen por número.

Art. 58. Los libros-registros de los agentes estarán sujetos á todas las formalidades que se determinen en el art. 40 del Código de Comercio.
Art. 59. Los libros de los agentes hacen plena prueba en juicio, estando conformes sus asientos con las notas de negociación que hayan firmado por separado. A falta de estos medios auxiliares de prueba, la harán también dichos libros para acreditar las condiciones de un contrato, cuya celebración esté reconocida por las partes como cierta, salvo la que en contrario hagan los interesados por otro medio legal, cuya fuerza y eficacia comparativa graduarán los tribunales por las reglas comunes de derecho.

Art. 60. Los asientos de los libros de los agentes no aprovecharán como medio de prueba al agente a quien corresponda, excepto en los casos y clases de prueba que marca el artículo anterior.

Art. 61. Las notas ó pólizas de negociación que los agentes entreguen á sus comitentes, y las que se libren mutuamente, según los arts. 17 y 18, harán prueba contra el agente que la suscribe en todos los casos de reclamación a que puedan dar lugar.

Art. 62. Los registros de los agentes estarán á disposición de los Tribunales de Comercio y de los jueces árbitros en los casos en que se determine por providencia judicial el examen y confrontación de sus asientos.

Art. 63. El Tribunal de Comercio podrá examinar los manuales y registros de los agentes; pero este examen se reducirá unicamente á cerciorarse de que se llevan en regla, y á exigir la responsabilidad al agente en caso contrario.

Art. 64. Los libros del agente que por cualquiera causa cese en su oficio, se recogerán por la Junta sindical, y quedaran depositados en la secretaría del Tribunal de Comercio.

Art. 65. Los agentes son responsables civilmente de la legitimidad de los títulos ó efectos públicos al portador que por su mediação se negocien en la Bolsa, y para ello la Dirección de la Deuda pública les facilitará cuantas noticias necesiten para comprobarla. Esta responsabilidad solo tendrá lugar en los efectos públicos que tengan numeración progresiva ó otros signos distintos por donde pueda acreditarse su identidad, y mediante la prueba que corresponda dar al demandante de haber recibido del agente los efectos que aparecieron falsificados, y que no pudieron sustituirse á los legítimos.

Art. 66. Los agentes están sujetos además en todas sus operaciones y negociaciones á la responsabilidad común y general que tiene todo comisionista ó mandatario para con su comiten, econ-
me á las disposiciones de la sección segunda, título III, libro segundo del Código de Comercio, en la parte que son aplicables á la negociaciones en que intervienen dichos agentes.

Art. 67. La responsabilidad de los agentes por razón de las operaciones de su oficio subsiste por dos años, contados desde la fecha de cada negociación; pasado este plazo prescribirá toda acción.

Art. 68. Las fianzas de los agentes están especial y exclusivamente afectas á las resultas de las operaciones de su oficio.

Art. 69. La acción hipotecaria contra la fianza de los agentes subsistirá solo por seis meses, contados desde la fecha del recibo de los efectos públicos, valores de comercio ó fondos que hubiesen recibido para las negociaciones, ó desde la de alguna sentencia ejecutoriada que les condene al pago de cualquiera cantidad que sean responsables.

Art. 70. No gozarán del derecho de hipoteca especial, sobre las fianzas de los agentes, los créditos contra estos, que aunque tengan origen en las obligaciones contraídas en el ejercicio de su oficio, se hayan convertido por virtud de un nuevo contrato en deudas particulares.

Art. 71. El agente cuya fianza se desmembrase para cubrir su responsabilidad en los casos en que tenga lugar, quedará suspenso de oficio en el acto hasta que acredite á la Junta sindical haber re- puesto íntegramente su fianza.

Los nombres de los agentes suspendos constarán en un cartel que se fijará y conservará en el paraje más visible de la Bolsa hasta su rehabilitación.

Art. 72. Cuando no fuere suficiente el importe de la fianza del agente para hacer efectivas las cantidades de que sea responsable por razón de su oficio, deberá cubrirlas con el resto de sus bienes en el término de 30 días; y si no lo hiciere, será declarado en quiebra.

Art. 73. La quiebra de los agentes se calificará siempre en cuarta clase ó fraudulenta.

Art. 74. La fianza del agente quebrado no entrará en su masa de bienes, sino lo que reste después de cubrir á todos los acreedores que tengan sobre ella la acción hipotecaria que establece el artículo 68.

Art. 75. Cuando la fianza no alcanzase á cubrir por entero los acreedores de que habla el artículo anterior, se distribuirá entre
ellos á prorata de sus créditos; y por las porciones que reste en descubierto, usarán de su derecho en la masa común del quebrado en calidad de acreedores quirografarios.

Art. 76. Los agentes no podrán rehusarse á interponer su oficio respecto á cualquiera persona que lo reclame, siempre que esta pres- te las garantías que los agentes tienen derecho á exigir con arreglo á lo dispuesto en el artículo 16 de esta ley.

Art. 77. Los derechos que devengan los agentes en las opera- ciones de efectos públicos con fuerza civil de obligar, serán: medio al millar sobre el valor nominal de la deuda consolidada y diser- da: un cuartillo al millar sobre el valor nominal de toda clase de deuda amortizable: dos al millar en giro de letras de cambio, libran- zas y demás valores de comercio, acciones del Banco y empresas mercantiles. Estos derechos se pagarán por mitad entre el vendedor y el comprador; y si algún agente se excediere de las cuotas fijadas, será multado en el décuplo del exceso que haya exigido, y suspues- to de oficio por seis meses, y en caso de reincidencia, será privado de oficio.

Art. 78. Los derechos de los agentes son alimenticios, y en toda quiebra se pagarán de la masa común y como deuda privilegiada.

Art. 79. Los agentes formarán un colegio que será regido por una Junta de gobierno, compuesta de un síndico-presidente, de cuatro adjuntos y dos suplentes.

Art. 80. El nombramiento del síndico y adjuntos se hará á plu- ralidad absoluta de votos en Junta general del colegio, sometiendo su elección á la aprobación del Gobernador de la provincia para los efectos que previene el art. 114 del Código de Comercio.

Art. 81. El cargo de síndico y adjuntos es obligatorio, y durará dos años.

Art. 82. Corresponde á la Junta sindical:
1.º Conservar el orden interior del colegio de agentes.
2.º Inspeccionar sus operaciones, y vigilar el cumplimiento de esta ley, á cuyo efecto podrá exigirles la presentación de sus libros, y proponer en su vista al Gobierno las providencias que estimare convenientes, y denunciar al Tribunal de Comercio, por medio de su promotor fiscal, las faltas que adviertiere (*).

(*) En el día no existen estos promotores fiscales, por haberse suprimido este destino por Real decreto de 30 de agosto de 1854.
3.º Cuidar, bajo su responsabilidad, de que permanezca siempre íntegra en la Caja general de Depósitos y consignaciones la fianza de los agentes.

4.º Vigilar que no se ejerzan las funciones de agentes por quienes no sean individuos del colegio, y excluir de la Bolsa á los que por notoriedad se dediquen á aquel ejercicio fraudulento.

5.º Procurar igualmente que no se permita la entrada, y antes bien se excluya de la Bolsa, á las personas que no hayan cumplido con las obligaciones contraídas en ella, y á las demás que se expresan en el art. 11 de esta ley, dando aviso al inspector para que lleve á efecto la prohibición consignada en dicho artículo.

6.º Formar el Boletín diario de la cotización en la forma que se previene en esta ley.

Art. 83. Con respecto al gobierno interior, órden y disciplina del colegio de sus individuos, ejercerá la Junta sindical las mismas atribuciones que se declaran á la Junta de gobierno de los corredores, en los párrafos primero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 115 del Código del Comercio, á cuyo efecto hará la Junta el correspondiente reglamento, que someterá á la aprobación del Gobierno.

Art. 84. Durante la reunión de la Bolsa, asistirán constantemente el presidente y dos individuos á lo menos de la Junta sindical para acordar lo que corresponda en los casos que ocurran.

De la cotización de la Bolsa.

Art. 85. Todos los días de Bolsa, y al concluir su reunión, se fijará el precio ó curso corriente de los efectos públicos, especies metálicas y cambios de los valores de comercio con arreglo á las negociaciones que se hayan practicado en el día, redactando, según ellas, el Boletín de Cotización.

Art. 86. La Junta sindical formará el Boletín de Cotización con asistencia de todos los agentes que hayan concurrido á la Bolsa, y expresándose con distinción:

1.º El movimiento progresivo que hayan tenido los precios de los efectos públicos en alza ó baja desde el principio al fin de las negociaciones, con especificación de su número y el valor de cada una.

2.º Los precios más bajos y más altos de las especies metálicas y de todos los valores de comercio que se hayan negociado.
Art. 87. A la redacción del acta de cotización concurrirán al menos tres individuos de la Junta sindical, y todos serán responsables personalmente de la exactitud y legalidad con que aquella se haya practicado.

Art. 88. El acta de cotización se extenderá en un registro encuadernado, foliado, y con las hojas rubricadas por el Gobernador de la provincia, firmándose en el acto por los individuos de la Junta sindical que hayan asistido a esta operación.

Art. 89. El registro de las actas de cotización estará a cargo del inspector de la Bolsa, y á su presencia se extenderán y formarán estas, pero sin que pueda tomar parte en las operaciones de examen y cotización, que son privativas de la Junta sindical.

Art. 90. Formalizada el acta de cotización, se sacarán y firmarán por la Junta sindical los Boletines necesarios para remitir en el acto un ejemplar al Ministerio de Fomento, igual al de Hacienda, uno á la Dirección de la Deuda pública, otro al Gobierno político de la provincia, y cualesquiera otras oficinas que el Gobierno disponga, fijándose al propio tiempo uno de ellos en las puertas de la Bolsa, y entregándose al inspector el estado detallado de las operaciones sobre efectos públicos que se hubieren hecho en el día.

Art. 91. Ningun particular ó corporacion puede publicar ni imprimir un Boletín de Cotización distinto del de la Junta sindical.

Art. 92. Al fin de cada año se entregará el registro de cotización en el Gobierno político para que se custodie en su archivo.

Art. 93. Las certificaciones que puedan convenir á las personas particulares de lo que resulte en los registros de cotizaciones, se librarán por el inspector de la Bolsa, si se hubieren de extraer del registro corriente de cada año, y por el secretario, con el V.º B.º del Gobernador de la provincia, cuando se refieran á registros de años anteriores.

Art. 94. La presente ley comenzará á regir á los 30 días de su publicación, y desde el mismo se arreglará á sus disposiciones la contratación de la Bolsa.

Art. 95. Los agentes actuales se pondrán en las condiciones de esta ley dentro de los treinta días siguientes al en que principio á regir, entendiéndose que renuncia su plaza el que deje transcurrir dicho plazo sin hacerlo.

Art. 96. Ni los agentes actuales, ni los que nombre en lo sucesivo el Gobierno, podrán usar del derecho que les concede el ar-
título 43 si no llevaren dos años de ejercicio, á contar desde que
principie á regir esta ley ó el día de su nombramiento, salvo del ca-
so de muerte ó impedimento físico que los imposibilite para des-
empeñar su oficio (*).

Dado en Palacio á ocho de febrero de mil ochocientos cincuenta
y cuatro.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Fo-
mento, Agustín Esteban Collantes.

REAL DECRETO.

En vista de lo expuesto por mi Ministro de Fomento, vengo en
decretar lo siguiente.

Artículo 1.° Quedan en suspenso los efectos del art. 43 de mi
Real decreto de 8 de febrero último sobre organizacion de la Bol-
sa de comercio de Madrid; y mientras se publica una ley orgán-
ica de aquel establecimiento, se suspende igualmente el nom-
bramiento de agentes de Bolsa, á no ser que quedara reducido
á una tercera parte el número de los que han obtenido aquellos
oficios; y ocurrido este caso se proveerán las vacantes en interi-
nidad y con arreglo á disposiciones vigentes.

Art. 2.° Mientras se publica dicha ley orgánica se compren-
den en la denominacion de efectos públicos:

1.° Los que representen créditos contra el Estado, y se hallan
reconocidos legalmente como negociables.

2.° Los emitidos con garantía prestada por el Gobierno, y con
obligacion subsidiaria del Estado.

3.° Los emitidos por los Gobiernos extranjeros, si su negocia-
cion se halla autorizada especialmente.

Dado en Palacio á nueve de setiembre de mil ochocientos cin-
cuenta y cuatro.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro
de Fomento, Francisco de Lujan.

REGLAMENTO

PARA LA EJECUCION DEL REAL DECRETO ORGÁNICO DE LA BOLSA DE
MADRID.

Artículo 4.° Las reuniones de la Bolsa se verificaran en el lo-
cal destinado al efecto del edificio llamado Aduana Vieja.

(∗) Véase la nota del art. 43.
Art. 2.° El Gobernador de la provincia de Madrid es el jefe inmediato de la Bolsa; en su nombre y representación cuidará de su régimen y buen orden un inspector nombrado al efecto.

Art. 3.° Las atribuciones del inspector serán:

1.° Asistir personalmente y sin excusa a las reuniones diarias de la Bolsa desde su apertura hasta su conclusión. En caso de enfermedad lo avisará al Gobernador de la provincia con la posible anticipación para que pueda nombrar persona que le sustituya.

2.° Dar la orden para las señales de campana que anuncien respectivamente el acto de comenzarse la reunión, y de darse por terminada.

3.° Vigilar que se guarde orden, compostura y comedimiento en las expresadas reuniones, haciendo con moderación y decoro las amonestaciones oportunas á los que de cualquier modo causen escándalo ó perturben aquellos actos; sin permitir que los concurrentes, sea cualquiera su clase y categoría, con inclusión de los agentes, correderos y demás dependientes de la Bolsa, entren con armas, bastones ni paraguas.

4.° Adoptar, si ocurriese algún delito durante la reunión, las disposiciones necesarias para conservar el orden, asegurando la persona del delincuente y formando la sumaria informacion, que remitirá inmediatamente al tribunal que corresponda, poniendo al reo á su disposición.

En el caso que para contener el desorden ó para detener las personas de sus autores no fuesen suficientes las disposiciones que hubiere adoptado, reclamará el auxilio de la autoridad civil ó militar.

5.° Conocer instructivamente de las dudas que se promuevan sobre la exclusión de alguna persona que tenga incapacidad legal para concurrir á la Bolsa, y decidir en el acto lo que corresponda, llevándose á efecto sin embargo de cualquiera excusa ó reclamación, salvo el derecho de los interesados para usar del recurso que les competa.

6.° Acordar durante las reuniones de la Bolsa, en cuanto sea concerniente al orden y policía de la misma, las disposiciones necesarias para mantener la exacta observancia del decreto orgánico y de este reglamento, conforme á las instrucciones que se le comuniquen por el Gobernador de la provincia.

7.° Publicar, fijándolos en la puerta de la Bolsa en el acto que
los reciba, los partes telegráficos relativos á la cotización de las Bolsas extranjeras.

8.ª Remitir en el momento de redactado á los Ministerios de Fomento y de Hacienda, á las Direcciones de la Deuda pública y del Tesoro y al Gobierno de la provincia el Boletín de la Cotización de los efectos públicos y valores de comercio, y á fin de cada mes los estados generales de operaciones.

9.ª Dar parte diario al Gobernador de la provincia de todas las ocurrencias notables de la Bolsa, haciéndolo en el acto de las que por su gravedad exijan el conocimiento y la intervención de su autoridad superior.

10. Cuidar de que permanezca constantemente colocada en la puerta interior de la Bolsa una lista con los nombres y apellidos de todos los agentes y corredores, y las señas de las respectivas habitaciones.

11. Observar constantemente la conducta de las personas que la Junta sindical del colegio de agentes ó corredores le designaren como dedicadas al ejercicio fraudulentio de aquellos cargos, y llevar á efecto los acuerdos que dicha Junta tomare en uso de las facultades que le competen por el art. 82, párrafos cuarto y quinto del decreto orgánico.

Contra esta exclusion no se admitirá recurso de ninguna especie ante ninguna autoridad.

Art. 4.º Cuando el inspector advirtiere que se cometen abusos ó infracciones del decreto orgánico y de este reglamento que no alcancen á corregir las atribuciones que le confiere el artículo anterior, dará parte al Gobernador de la provincia.

Art. 5.º En el caso de reclamación de un individuo que hubiere sido excluido de la Bolsa por cualquiera otra causa que la expresada en el párrafo 11 del art. 3.º, conocerá de ella sumariamente el Gobernador de la provincia, oyendo instructivamente al inspector y Junta sindical, y sus decisiones causarán ejecutoria sin ulterior recurso.

Art. 6.º El inspector no podrá tomar conocimiento ni adoptar resolución ninguna respecto de las funciones de los agentes y corredores, operaciones de estos y de las negociaciones ó contratos que se celebren por los concurrentes á la Bolsa; pero si por efecto de las mismas operaciones ó contratos se suscitara algún altercado, procurará que no se altere el orden de la reunión; é informándose de la causa la
pondrá, si fuese grave, en noticia del Gobernador de la provincia para la determinación que crea oportuna.

Art. 7.° Las horas de reunión de la Bolsa serán de una a tres; la primera se destinará a las operaciones y negociaciones de valores comerciales, y la segunda se ocupará exclusivamente en la contratación de los efectos públicos.

Por ningún motivo ni pretexto se podrá prolongar por más tiempo la reunión.

Art. 8.° El Gobierno, á instancia del inspector y de la Junta sindical, y oyendo previamente al Tribunal y Junta de Comercio de Madrid, podrá alterar las horas de la Bolsa si lo considera beneficioso al comercio.

Art. 9.° La apertura de la Bolsa y el principio y conclusion de las operaciones designadas á cada hora se anunciará por tres toques de campana.

Dada la última señal, los concurrentes desocuparán en el acto el local de la Bolsa.

Art. 10. En las horas destinadas á las operaciones no se permitirá fumar dentro del salon ó salones de la Bolsa. Los porteros amonestarán con el correspondiente decoro á la persona que contraviniese á esta prohibición, y en caso de desobediencia, darán parte al inspector para que haga salir del local al contraventor.

Art. 11. La Junta sindical cuidará de que los agentes en el término mas pronto posible ocupen el estrado que se les destine durante la hora marcada para la contratación de efectos públicos. Cuando esto suceda, solo podrán salir los individuos de la Junta para ejercer sus atribuciones.

Art. 12. Los corredores de número tendrán otro local destinado á las operaciones de su oficio.

Art. 13. Para la publicación de las operaciones de efectos públicos que previene el art. 31 del decreto orgánico, habrá un anunciador nombrado por el Gobernador de la provincia á propuesta en terna del inspector de la Bolsa.

De la misma manera se hará el nombramiento de los demás dependientes.

Art. 14. Las notas que los agentes, en el acto de concluir cualquiera operación, deben pasar al anunciador, además de las circunstancias que exige el art. 31 del decreto orgánico, expresarán la clase de los efectos y su valor nominal.
Estas notas, concluida la reunión, las entregará la Junta sindical, numeradas correlativamente, al inspector, quien las conservará en su archivo para aclarar dudas que puedan suscitarse.

Art. 15. Cualquiera alteración maliciosa del anunciador en la publicación de las negociaciones se castigará con la privación de su empleo, sin perjuicio de perseguirle criminalmente con arreglo á las leyes si hubiere obrado por soborno ó cohecho. También quedará privado de oficio el agente á quien se justifique que ha hecho publicar alguna operación simulada. La Junta sindical y el inspector ejercerán la mas exquisita vigilancia sobre este particular.

Art. 16. Las operaciones de letras de cambio sobre las plazas del reino ó del extranjero y demás valores de comercio no están sujetas á publicacion.

Los agentes comunicarán á la conclusion de la Bolsa el precio de estas operaciones en que hayan mediado á la Junta sindical, para que, con arreglo á esta noticia, se fije el curso en la cotizacion oficial.

Art. 17. Las pólizas de las operaciones á plazo y de préstamos con garantía de los efectos públicos, contendrán, además de la numeración de los títulos que previenen los artículos 29 y 34 del decreto orgánico, la serie á que correspondan los efectos.

Art. 18. Cuando á voluntad de los interesados en un préstamo con garantía de efectos públicos se hubiesen de constituir estos en depósito, se hará este en la Caja general de Depósitos y consignaciones.

Art. 19. Los agentes de Bolsa que, en uso del derecho que les concede el art. 43 del decreto orgánico, quieran traspasar su oficio, lo expondrán así al Gobernador de la provincia, designando la persona á quien ceden su cargo (†).

Art. 20. El Gobernador no dará curso á ninguna instancia si no fuese acompañada de certificación librada por la Junta sindical, que bajo la responsabilidad de sus individuos, declare que previas las formalidades del art. 45 del decreto orgánico, la fianza del agente que se trata de sustituir ha sido devuelta sin reclamación de ninguna especie.

Art. 21. El Gobernador instruirá el correspondiente expediente sobre la idoneidad del cessionario del oficio, oyendo al Tribunal de Comercio.

El informe del Tribunal se extenderá, no solo á las circunstan-

(†) Véase la nota del art. 43 de la ley provisional.

TOMO I.
dias expresadas en los artículos 41 y 42 del decreto orgánico, sino
también á si existe alguna reclamación judicial contra el agente que
hace la cesion por consecuencia del ejercicio de su cargo, lo que
justificará por certificacion librada por el escribano del Tribunal,
con el V.º B.º del prior.

Cuando del informe del Tribunal resulte que el agente dimisiona-
nario tiene pendiente contra sí alguna reclamación, el Gobernador
dejará sin curso el expediente.

Art. 22. Terminada la instruccion del expediente le remitirá or-
iginal el Gobernador á la Junta sindical, la que convocará al colegio
con ocho dias de anticipacion, á fin de que acuerde por mayoría de
votos la admision y exámen del cesionario, remitiendo en seguida
el expediente con su informe al Ministerio de Fomento por conduc-
to del Gobernador de la provincia.

Art. 23. Cuando por quiebra ó privacion de oficio de algun
agente resultare vacante alguna plaza, el Gobernador de la provin-
cia lo anunciará al público por medio del Diario de avisos y de
edicto en la puerta de la Bolsa por espacio de 30 dias, durante los
cuales y no despues, recibirá todas las instancias de los que aspiren
d a obtener la plaza vacante.

Art. 24. Pasados los 30 dias procederá á instruir los oportunos
expedientes de idoneidad, y los remitirá con arreglo al art. 22 á la
Junta sindical.

Art. 25. Convocada la junta general del Colegio de agentes, se-
gun previene el art. 22, propondrá al Gobierno, previo el cor-
respondiente exámen, los tres aspirantes que por mayoría de votos
se consideren mas dignos.

Art. 26. La suma que se haya obligado á satisfacer el aspirante
que obtenga la vacante, se considerará como aumento á la fianza
del agente quebrado ó privado de oficio, y se aplicará al pago de sus
 acreedores en el orden y forma que previene el decreto orgánico.

En el caso de que no haya acreedores á quienes aplicar aquella
suma, el Gobierno determinará el destino que deba dárselle.

Art. 27. El agente que hallándose en el caso del art. 71 del de-
creto orgánico no complete su fianza en el término de 20 días,
quedará privado de oficio.

Art. 28. La Junta sindical es responsable de los perjuicios que
puedan resultar de la demora en anunciar al público la suspension
de oficio de un agente, cuya fianza no se halle completa.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Sección</th>
<th>Título</th>
<th>Página</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6.ª</td>
<td>De la disolución de las compañías mercantiles</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>7.ª</td>
<td>De la liquidación de las compañías</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>8.ª</td>
<td>De la sociedad accidental o de cuentas en participación</td>
<td>214</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>CAPÍTULO II.</strong> De los préstamos mercantiles</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>CAPÍTULO III.</strong> De la comisión mercantil</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.ª</td>
<td>De las comisiones en general</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.ª</td>
<td>De las comisiones especiales</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TÍTULO III.</strong> De los contratos constitutivos del comercio</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>CAPÍTULO I.</strong> De la compra-venta</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>CAPÍTULO II.</strong> De las compras-ventas excepcionales</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TÍTULO IV.</strong> De los contratos accesorios</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>CAPÍTULO I.</strong> Del agravamiento y demás garantías</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>CAPÍTULO II.</strong> Del depósito</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>CAPÍTULO III.</strong> De los transportes terrestres</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>TÍTULO V.</strong> De los contratos y documentos especiales del comercio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>CAPÍTULO I.</strong> Del contrato de seguros</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.ª</td>
<td>De las cosas comunes a todos los seguros mercantiles</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.ª</td>
<td>De los seguros de conducciones terrestres</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>CAPÍTULO II.</strong> Del contrato de cambio, y de los documentos que se expiden en su virtud</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.ª</td>
<td>Del contrato de cambio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.ª</td>
<td>De las letras de cambio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.ª</td>
<td>De la forma y requisitos de la letra de cambio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.ª</td>
<td>De la cesión y negociación de las letras de cambio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.ª</td>
<td>De las obligaciones que contraen los que intervienden en la expedición de la letra de cambio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.ª</td>
<td>De la aceptación y pago de las letras</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>CAPÍTULO III.</strong> De las diligencias y reclamaciones a que dí lugar la falta de aceptación y pago de las letras de cambio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.ª</td>
<td>Del protesto</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.ª</td>
<td>De la intervención en las letras de cambio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.ª</td>
<td>De las reclamaciones que se pueden entablar por la falta de pago de la letra de cambio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>CAPÍTULO IV.</strong> De las letras imperfectas y falsificadas, y de los demás documentos que se expiden en virtud del contrato de cambio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.ª</td>
<td>De las letras imperfectas y falsificadas</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.ª</td>
<td>De las libranzas</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Sección 3.ª—De los vales ó pagarés .................................................. 386
Sección 4.ª—De las cartas órdenes de crédito .................................. 390
CAPITULO V.—De las Bolsas de comercio, de las operaciones que se celebran en ellas, y de los agentes que la intervienen.................................................. 394
Sección 1.ª—De las bolsas de comercio.......................................... id.
Sección 2.ª—De las personas que concurren á la Bolsa y de su régimen y gobierno ................................................................. 397
Sección 3.ª—De las operaciones que se celebran en la Bolsa ........ 402
Sección 4.ª—De los agentes auxiliares de la Bolsa ......................... 409
Sección 5.ª—De la Junta sindical .................................................. 415
APÉNDICE NÚM. 1.—Juntas de comercio ....................................... 417
APÉNDICE NÚM. 2.—Sociedades mercantiles por acciones ............. 420
APÉNDICE NÚM. 3.—Reglamento de las funciones de los Gobernadores y delegados inspectores de las sociedades mercantiles por acciones .................................................. 434
APÉNDICE NÚM. 4.—Bancos .......................................................... 439
APÉNDICE NÚM. 5.—Ley de sociedades de crédito ........................... 443
APÉNDICE NÚM. 6.—Reglamento para la inspección de las sociedades anónimas de crédito .................................................. 447
APÉNDICE NÚM. 7.—Ferro-carriles servidos por fuerza animal ...... 455
APÉNDICE NÚM. 8.—Real decreto y reglamento para la inspección de los ferro-carriles .................................................. 460
APÉNDICE NÚM. 9.—Ferro-carriles y demás obras públicas .......... 470
APÉNDICE NÚM. 10.—Inspección de las sociedades de seguros mútuos .................................................................................. 508
APÉNDICE NÚM. 11.—Reales decretos y ley orgánica de la Bolsa de Madrid ................................................................. 510

FIN DEL TOMO PRIMERO.